

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Historia Moderna



**LAS REDES DE LA CENSURA: EL CONSEJO DE
CASTILLA Y LA CENSURA LIBRARIA EN EL SIGLO
XVIII**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR**

Víctor Pampliega Pedreira

Bajo la dirección de los doctores

**M^a Victoria López-Cordón Cortezo
Jean Pierre Dedieu**

MADRID, 2013

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA



LAS REDES DE LA CENSURA:

El Consejo de Castilla y la censura libraria en el siglo XVIII

TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR:
VÍCTOR PAMPLIEGA PEDREIRA

DIRIGIDA POR:
M^a VICTORIA LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO
JEAN PIERRE DEDIEU

Libro que corre sin apología, sin censura, sin que contra él se escriba, le tengo lástima;
porque o no tiene novedad en la invención, o es libro de que están llenos los libros.

Fray Sebastián Conde^{*}

^{*} BELTRÁN, Francisco, *El libro y la imprenta. Con máximas, aforismos, noticias y disertaciones de diversos autores antiguos y modernos y 143 viñetas*, Madrid, Francisco Beltrán, 1931, pág. 87.

Agradecimientos

El resultado que aquí se presenta es el fruto de un trabajo continuado que habría sido imposible sin la ayuda de muchas personas cuya mención considero necesaria, porque esta tesis es también suya.

En primer lugar a las personas que me han ayudado allí donde las he necesitado, especialmente al personal del Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca de la Universidad Complutense, así como al de todos los centros en los que he estado, ya que su asistencia ha sido clarificadora en los tortuosos caminos de la investigación.

Al Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense, donde he tenido la suerte de trabajar durante seis años, con tres becas distintas concedidas por la propia universidad y por el Ministerio de Educación. A mis compañeros becarios y a todos los profesores que, cada uno a su manera, han contribuido a mi formación y enriquecimiento profesional y personal, con quienes he compartido horas de despacho, pasillo y cafetería y con quienes he dado mis primeros pasos como docente. A Carlos, siempre en mi recuerdo. Y, cómo no, a la Dirección, a la actual y a la anterior, que siempre han intentado facilitar nuestro trabajo; y a Emilia Jiménez, Secretaria Administrativa el mismo tiempo que yo becario, porque ha sido un placer encontrar siempre una sonrisa amiga. Este tiempo junto a todos vosotros ha sido inolvidable.

A los profesores que, de manera particular, más han participado de esta tesis, con sus orientaciones y consejos, siempre útiles: Teresa Nava, Gloria Franco y Fernando Bouza, con los que siempre estaré en deuda. Y los que me han permitido disfrutar de enriquecedoras estancias en el extranjero: Bernard Vincent y Antonietta Visceglia.

A mis directores y maestros, M^a Victoria López-Cordón y Jean Pierre Dedieu. Por confiar en mi desde el primer momento, cuando era aún un inexperto estudiante de licenciatura, dándome la oportunidad de aprender cada día. Lo bueno que haya en esta tesis y en este investigador se debe a vuestros sabios consejos, acertadas

orientaciones e infinita paciencia. Mi admiración hacia vosotros no ha hecho más que aumentar y vuestro ejemplo estará presente en todos mis pasos.

A los amigos, porque han sufrido las horas de trabajo, no siempre bien comprendido. A los antiguos, que supieron aceptar que la Historia era mi pasión y que hoy entienden que decidiera dedicarme a ella. Y a los nuevos, porque aunque la vida del investigador es solitaria, yo he tenido la satisfacción de encontrar verdaderos amigos, de esos que, como los de la antigua "mili", son para toda la vida. No hace falta que diga sus nombres, porque ellos se reconocerán en estas letras.

A Alba, que de compañera de trabajo se convirtió en inseparable amiga. Por todas las risas y lágrimas juntos, las horas de archivo y biblioteca, las noches frente al ordenador, y los paseos a orillas del Sena, del Tiber o del Manzanares con mi café y tu té en la mano. Por dejar que te conociera, por entrar en mi vida y dejar que yo entrara en la tuya. Sin tu apoyo y tu confianza en mí nunca habría llegado hasta aquí. Todo lo que diga quedará corto para expresar lo que te siento y todo lo que te debo.

A Miguel, porque sabes lo importante que ha sido tenerte a mi lado, sufriendo mi dedicación a este trabajo. Tu apoyo incondicional en los buenos y en los malos momentos me ha animado a no desfallecer y a convencerme de que era capaz. Tu complicidad y compañía han sido mi refugio. Gracias por compartir tu tiempo conmigo.

Y a mi familia. Si soy como soy y he llegado hasta aquí es por ellos. Especialmente a mis tíos Inés y Susana y mi primo Santi, que me acogieron como uno más ese día que cogí las maletas para empezar mi carrera en Madrid. A mi hermano, Jorge, quien más ha sufrido los cambios de humor que acarrea la investigación, al que debo pedir perdón por los excesos y las ausencias. Y a mis padres, porque les debo ser quien soy. La educación y los valores que me han transmitido, y que todavía me transmiten, han guiado y guiarán siempre todo lo que haga, porque no hay mejor enseñanza que buen ejemplo.

A todos, gracias.

ÍNDICE

1. Introducción	8
1.1. Intelectuales y poder. La hipótesis de partida	9
1.2. Resumen	18
1.4. Teoría, método y fuentes	47
1.4.1. Los actores del libro	48
1.4.2. Bases teóricas: prosopografía y teoría de redes	54
1.4.3. Bases instrumentales: instrumentos de análisis y bases de datos.....	66
1.4.4. Fuentes: bibliografías, portadas y archivos.....	76
2. El aparato censor	80
2.1. El sistema heredado	89
2.2. Las reformas legislativas de los Borbones	109
2.2.1. Las primeras disposiciones	109
2.2.2. Juan Curiel, Juez de Imprentas.....	116
2.2.3. Las reformas de Carlos III.....	133
2.2.4. De Carlos IV a la libertad de imprenta	147
2.2.5. A modo de balance secular	154
2.3. El papel de la Iglesia	158
3. Las redes de la censura.....	184
3.1. Los Jueces de Imprenta.....	186
3.2. Las redes de autores y censores de principios de siglo (1720-1749)	223
3.3. La censura en época de Curiel: 1756-1763	258
3.4. Redes de autores y censores a finales de siglo (1770-1799)	288

3.5. Balance secular	313
4. Las lecturas de las censuras	318
4.1. La tramitación de los expedientes	319
4.2. El trabajo del censor	331
4.2.1. La actividad profesional.....	332
4.2.2. Los problemas de los censores: críticas y contradicciones.....	342
4.3. El objeto de las censuras.....	357
4.3.1. Regalías, Fe y costumbres. El concepto de utilidad.....	357
4.3.2. Autoría y géneros literarios	369
4.3.3. <i>Por respeto a su sexo</i> . La censura y las mujeres.....	381
4.4. El efecto de las censuras.....	395
5. Epílogo. Hacia un modelo europeo de censura	412
6. Conclusiones.....	430
7. Conclusions.....	444
8. Bibliografía	458
8.1. Documentación de archivo.....	458
8.2. Fuentes impresas de fondo antiguo	458
8.3. Bibliografía moderna.....	459
9. Apéndices	486
9.1. Jueces de Imprenta entre 1700 y 1808	486
9.2. Actores y redes	487
9.2.1. Censores nombrados por Curiel en 1756	487
9.2.2. Listado de censores del siglo XVIII	488
8.2.3. Redes de autores y censores.....	518

1. Introducción

Cuando el 10 de noviembre de 1810, tras dos años de vacilaciones, las Cortes de Cádiz aprueban el reglamento por el que instaura la libertad de prensa, los diputados, que habían mantenido intensos debates al respecto, estaban poniendo fin, aunque fuera temporalmente, a una larga tradición de control previo de las impresiones que se remontaba hasta el origen mismo de la imprenta y que en el Siglo de las Luces había alcanzado su máxima expresión. De hecho el siglo XVIII es, posiblemente, el momento en el que mayores esfuerzos se habían hecho desde los ámbitos gubernativos para lograr el dominio efectivo sobre la impresión y circulación de impresos¹. Tanto es así, que entre los diputados favorables a la libertad de opinión y supresión de la censura previa, circuló el argumento de que sólo la libertad de prensa podría evitar un despotismo como el que había ejercido Godoy², prueba de que una censura firme ejercida desde el poder permitía el control de la imprenta y, por tanto, de la opinión.

En España este control se realizó, principalmente, mediante el Consejo de Castilla, a través del cual se canalizó, salvo por un breve periodo de tiempo, la supervisión de los manuscritos. Y para llevar a cabo este trabajo el Consejo se apoyó, fundamentalmente, en dos figuras. La primera era un miembro de la propia institución, que al ser nombrado Juez de Imprentas, con las variaciones nominales que tuvo, era quien se encargaba de la dirección de la política de imprenta, pues en sus manos recaía la asignación de los censores para cada obra y el conocimiento de las causas derivadas del mal uso de licencias, privilegios o leyes de imprenta. La segunda figura fue la de los

¹ Así se manifiesta por los datos aportados por M^a Luisa López-Vidriero: de las setenta y dos leyes emitidas desde 1480 y que se recogen en la *Novísima Recopilación*, agrupadas en cinco títulos (del XV al XIX) del libro VIII, más del 80% corresponden a los reinados entre Felipe V y Carlos IV. A esto habría que sumar las cédulas, reales órdenes y ordenanzas no recogidas en la *Novísima*. LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, "La imprenta en el siglo XVIII", en ESCOLAR, Hipólito (dir.), *Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, págs. 201-269.

² MUÑOZ TORRERO, Diego, sesión de 17 de octubre de 1810, recogido en TIerno GALVÁN, Enrique (Ed.) *Actas de las Cortes de Cádiz, antología*, Madrid, 1966, págs. 21-22. Cit por HERR, Richard, "El principio de la virtud y la crítica política: los orígenes de la Monarquía constitucional en Francia y España", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, pág. 137.

revisores de los manuscritos que querían ser impresos, un grupo heterogéneo de individuos e instituciones cuya composición fue variando, en función de los vaivenes políticos y cuya labor, ensombrecida por las críticas de sus contemporáneos, ha sido ignorada en los estudios sobre la historia política de nuestro país.

1.1. Intelectuales y poder. La hipótesis de partida

El objetivo de este trabajo es analizar el mecanismo de censura libraria en el siglo XVIII. Para ello, hemos partido de una perspectiva prosopográfica a partir de la cual analizar quiénes eran los responsables del control sobre lo publicado y cómo se relacionaban con los responsables de las obras sobre las que actúan. Este enfoque permite la recreación de redes sociales que de otra manera quedan ocultas tras la documentación. El hecho irrefutable del que se parte es la existencia de redes de intelectuales relacionadas entre sí y con extensiones hacia el Poder, entendiendo éste como los aparatos administrativos de la Monarquía, lo que permitió al Rey y a sus ministros el control de la intelectualidad mediante la censura previa necesaria para la impresión y la capacidad de la Monarquía de recompensar la elaboración de obras de su interés con los beneficios eclesiásticos, sobre todo desde la firma del Concordato de 1753, que se unieron a los puestos de la propia administración gubernamental. Nuestro objetivo será analizar uno de estos círculos, el que forman los censores y autores.

El rey, a través del favor, articulaba el poder centralizándolo en su persona mediante una red informal de agentes que discurría al margen de las instituciones. Éstos, a su vez, redistribuían los dones recibidos forjando una red de lealtades que abarcaba al conjunto del territorio. Y una de esas redes informales fue la que se desplegó en el ámbito de la creación cultural, ya que el elemento común a todos ellos es que son considerados “intelectuales” en tanto que son todos escritores. A través de sus textos, y de las circunstancias que les rodean en el momento de escribirlos, es posible insertar a los autores dentro de las redes sociales en las que participan y por las cuales entran en contacto con el poder. No obstante, no queremos limitarnos a sus carreras

profesionales, sino abordar su influencia social y política. No olvidemos que el medio de actuación en la sociedad de estos personajes puede ser la política, pero también la enseñanza, la magistratura o la administración pública, siendo también frecuente su presencia en tertulias y otros espacios de sociabilidad ilustrada. De este modo nos ofrecen una multiplicidad de escenarios que abren el camino a diferentes formas de análisis.

Debemos tener en cuenta que la Ilustración es una cultura por la existencia de determinados elementos comunes, por encima de las evidentes diferencias entre los ilustrados sobre las reformas y su profundización³. También es cierto que dicha cultura debe adquirirse en los libros, pero como no todos son adecuados para ello, se irán estableciendo los criterios válidos para que un libro sirva a la *utilidad pública*. La legislación siempre concibió la imprenta como una herramienta al servicio de la sociedad, si bien el concepto de *utilidad* no es inmutable, sino que se fue adaptando a las necesidades de los gobernantes, que van aumentando su control sobre la censura para asegurar, así que sólo los “buenos libros” llegaran a las librerías. Aunque haremos referencia a los efectos de la censura, no nos interesa tanto la represión o intimidación en sí, como el interés de la elite gobernante por que el mecanismo de censura previa fuera lo más efectivo posible, permitiendo instrumentalizar la difusión de los mensajes.

La mayor parte de los estudios que hasta el momento se han hecho sobre la escritura, el libro o la lectura lo han hecho desde la historia social y cultural. Nuestra intención es abordarlo, en cambio, desde la historia política. Se inserta, por tanto, dentro del movimiento de revalorización de esta tendencia historiográfica, que lejos de caer en la historia positiva de tratados, bodas y batallas, intenta aportar una visión más analítica sobre los mecanismos por los que circula el poder. Además, huyendo de las visiones más estructuralistas, damos un mayor peso a lo coyuntural como elemento determinante en el desarrollo de los acontecimientos históricos, pues no todo son planes preestablecidos, sino adaptaciones a unas circunstancias concretas. Son los

³ LOPEZ, François, “El libro y su mundo”, en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, LÓPEZ, François y URZAINQUI, Inmaculada, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pág. 63.

individuos que analizamos los que, en cada momento, según las situaciones concretas a las que tienen que hacer frente, adoptan las decisiones que consideran oportunas, sin que necesariamente todo forme parte de un proyecto superior.

La elección de la historia política viene determinada, precisamente, por la coyuntura histórica. Según avanzan los siglos modernos, desde el poder se va tomando conciencia de la importancia que tiene lo escrito como configurador de una nascente opinión pública, constituida a partir de la circulación de impresos y, en menor medida, de manuscritos. Si desde el círculo del poder se controla lo que se imprime, se está controlando no sólo lo que va a llenar estantes de librerías y bibliotecas, sino también, y es lo más importante para la elite ilustrada, lo que ayuda a la configuración de una opinión pública convertida, cada vez más, en un factor más importante dentro de la sociedad. Sólo así se entiende el incremento de la atención prestada a la censura por parte de los gobernantes. De esta forma, el libro pasa a ocupar el espacio que antes ocupaba la universidad, ya que lo escrito, frente al carácter más oral de ésta, tiene la ventaja de la durabilidad y la circulación.

Esto no significa que el discurso oral deje de tener protagonismo en la vida pública de la época. Más bien al contrario. Gran cantidad de las publicaciones que ven la luz en la primera mitad del siglo XVIII son, en origen, discursos, sermones y disertaciones: las canonizaciones y grandes celebraciones litúrgicas o los grandes funerales eran el marco perfecto para los más destacados predicadores; las disertaciones y lecturas orales en las universidades; los discursos, más tarde, en academias y sociedades económicas. Todos están pensados con carácter oral, para ser dichos y escuchados, pero es frecuente que poco después se proceda a su traslado sobre el papel. Así pues, lo oral sigue teniendo un peso muy importante en el panorama intelectual, y así se refleja, incluso, en el formato de lo escrito⁴.

⁴ Este peso de la oralidad en los impresos, expresado implícita y explícitamente, ya fue resaltado por Chartier en: CHARTIER, Roger, "La pluma, el taller y la voz. Entre crítica textual e historia cultural", en RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, págs. 243-257.

En cualquier caso, se debe evitar el uso de viejas etiquetas restrictivas, que no hacen sino encorsetar la investigación y limitar los posibles enfoques con los que analizar la realidad. Hacemos historia política porque analizamos la actuación de los agentes políticos de la Monarquía; hacemos historia cultural porque si nuestro objeto principal son las personas, el secundario son los libros que escriben y leen; hacemos historia social porque recreamos la construcción de las redes de poder y analizamos su funcionamiento interno. Partiendo de la interdisciplinariedad que nos permite adoptar los principios teóricos de disciplinas afines como la sociología, el derecho, la filología o, en menor medida, la historia del arte, y gracias al empleo de nuevas técnicas, construimos una hipótesis transversal entre las tendencias historiográficas tradicionales que enriquecen la base teórica de nuestro trabajo.

Pero como todo estudio tiene sus limitaciones, debemos de ser conscientes de las nuestras. La primera es sencilla: sin entrar en el debate sobre la autoría, que requeriría más espacio del que disponemos, hemos considerado autor a todo el que escribe. La única condición es que fueran españoles, por nacimiento o naturalización, independientemente de que publicaran sus obras en España o en el extranjero. Aunque no siempre se escribe para dar a conocer lo escrito, la mayor parte de los impresos que se conservan circularon, se hicieron públicos. Con este sentido empleamos el término publicar; no siempre como sinónimo de imprimir, sino como de dar al público, "*dar a luz*".

Aunque hayamos considerado a los individuos que escribieron, no hemos podido incluir a todos en el análisis. De este estudio se han excluido, de manera consciente, las publicaciones periódicas que van apareciendo a lo largo de la centuria, así como los artículos que se incluyen dentro de otras obras. La prensa periódica, que se presentaba en pliegos sueltos y baratos, podía ser leída rápidamente, pasando de mano en mano, dando a pie a debates, discusiones y comentarios en las tertulias y salones. Todo ello lo hace especialmente apto para la difusión de las ideas, desligado de los cauces tradicionales de difusión. El peso que tiene como fenómeno propio dentro de la revolución cultural del siglo y el trato diferenciado que recibió parte de las autoridades de la época hace que su estudio desbordara la extensión de esta tesis. Sus

características, además, precisarían de un trato específico que no hemos podido abordar en este primer momento⁵. Del mismo modo, se han dejado de lado los manuscritos y las correspondencias de las que se tiene noticia. Ambos, aunque sobre todo los primeros, son una forma de publicación más, pero éstos circulaban sin necesidad de ninguna aprobación por parte de las autoridades, por lo que, aunque fundamentales para el estudio completo de la población de autores, de las relaciones entre ellos o de la circulación de ideas, en nuestro caso sólo contribuían a aumentar el número de páginas y de obras sin aportar datos a las redes de censores.

Una fuente infravalorada hasta el momento, y que proporciona una información valiosísima es la de los títulos de las obras. Tradicionalmente sólo se les prestaba atención como indicador de los temas que trataban para poder clasificar las obras en función de categorías contemporáneas. Pero detrás de ellos encontramos mucho más. De una portada se puede obtener el nombre del autor, el tema de la obra y el impresor, pero en ocasiones también la identidad de quien encargó la obra y/o de quien la financió; la librería donde podía encontrarse, la existencia de privilegios, la presencia de censuras⁶. Si a la portada añadimos los paratextos que hasta 1763 precedían el texto propiamente dicho, la posibilidad de reconstruir el proceso de materialización de la obra se multiplica exponencialmente, facilitando mucho la labor del investigador.

Esta nueva interpretación de la documentación nos abre un gran abanico de posibilidades. Además de ver los mecanismos de censura establecidos a principios de siglo y los actores encargados de llevarlo a cabo, que es lo que se pretende iniciar con este trabajo, se puede ver quiénes son los autores y los receptores de las dedicatorias; quiénes encargan las obras, qué autores y qué obras se traducen y por quién, cómo se burla el sistema de censura a través de las obras traducidas, o supuestamente

⁵ No obstante, existen buenos y numerosos trabajos sobre la prensa periódica del siglo XVIII, sobre los que se hace un breve comentario en el *Estado de la cuestión*, págs. 26-27.

⁶ LOPEZ, François, "Lo que puede hacerse con la bibliografía de autores españoles del siglo XVIII", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín y CHECA BELTRÁN, José (Coords.), *El siglo que llaman ilustrado: homenaje a Francisco Aguilar Piñal*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, pág. 575-582.

traducidas, cuáles son los principales centros impresores o el papel que tiene la iglesia dentro del mundo cultural en cualquiera de sus ámbitos: como autor, editor y censor.

Para poder abarcar en unas pocas páginas todo un siglo de producción impresa ha sido necesario establecer una estrategia que hiciera viable el estudio sin comprometer la validez científica del resultado. Por ello se han tomado tres puntos de referencia, uno a principios de siglo, uno en los años centrales y otro en las últimas décadas del siglo XVIII. Teniendo en cuenta las diferencias entre los distintos reinados y las coyunturas específicas de los personajes implicados, estas muestras nos sirven para poder detectar continuidades y rupturas dentro de un mecanismo que, aunque se modifique, permanece a lo largo de toda la centuria.

El criterio para la selección de los periodos ha sido fundamentalmente cronológico. Se crearon tres, aunque la importancia concedida a los años iniciales y finales del siglo es ligeramente superior, ya que de la comparación de ambos es de donde se pueden extraer las conclusiones más claras. El segundo viene determinado por una coyuntura específica y diferente que altera, en parte, el mecanismo de censura, pues, aunque el marco cronológico sea más breve y por tanto no se pueda extrapolar, nos interesa para comprobar el grado de cumplimiento de ese cambio legal y si la práctica real discurrió por los nuevos cauces habilitados o mantuvo el desarrollo que había tenido en los años anteriores y que se observa después.

Para la selección de los cortes cronológicos se eligieron dos fechas que no supusieran acontecimientos relevantes que condicionaran el panorama editorial español. Para la primera mitad era necesario que, además, hubiese concluido la confrontación bélica librada en clave sucesoria, ya que el uso de las armas siempre ha afectado a las plumas. Así pues, se establecieron dos años de referencia. Para la primera mitad del siglo, 1738, y para la segunda, 1780. Estos años fueron, de alguna manera, considerados como el centro del periodo de la generación de autores y censores a estudiar. Aunque la acotación por periodos suponía excluir a parte de la población de autores, era necesario delimitar un periodo en el que reconstruir las redes de autores y censores, pues, como se verá a continuación, el objeto de estudio es un conjunto de

sujetos en continuo movimiento y transformación, por lo que para analizarlos como elemento estático es necesario renunciar a parte de la información. El tercer periodo venía determinado por la duración de las novedades en cuanto a asignación de los censores impuesta por Curiel en 1756 y que se mantuvo vigente hasta su derogación en 1763 por Carlos III. La configuración y el desarrollo de estos periodos se analizarán, detenidamente en el tercer capítulo de la tesis.

Entre los objetivos que nos fijamos destaca determinar el papel que cada actor tiene en este juego cuyo resultado evidente es la materialización de obras impresas. Así veremos cómo afectan al control de la prensa los cambios políticos y sociales de nuestro país y la relación entre un incremento evidente y sostenido de la producción impresa a lo largo del siglo XVIII y la mayor preocupación de la elite ilustrada en el gobierno por controlar los mensajes que se transmiten, conscientes de la importancia de los impresos en la configuración de lo que se ha venido a llamar opinión pública. Y quienes nos van a responder a todos estos interrogantes son los libros, los pliegos sueltos, que abundaron como nunca durante el siglo XVIII y que guardan en sus hojas, en sus portadas, en los expedientes que permitieron su impresión, una cantidad ingente de información que todavía no ha sido suficientemente aprovechada.

Por cuestiones prácticas, el trabajo se ha dividido en tres grandes bloques, precedidos de las necesarias explicaciones conceptuales y metodológicas incluidas en esta introducción. Dentro de este primer capítulo se encuentra, también, el punto de partida necesario, un rápido repaso sobre la historiografía existente sobre la historia del libro y, de manera específica, sobre el tratamiento que se ha dado a la historia de la censura en España durante el siglo XVIII, en ambos casos desde las obras que abrieron este tipo de estudios hasta las más recientes publicaciones.

Por el volumen y las características de las fuentes documentales con las que trabajamos, el empleo de las técnicas tradicionales suponía un freno considerable a nuestro avance que hacía inabarcable el objeto de la tesis. Fruto de esa demandada interdisciplinariedad de los estudios y de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías, incorporamos el uso de novedosas técnicas informáticas que nos han

ayudado a vaciar la información contenida en las fuentes, tratar esos datos y recuperarlos para el análisis posterior. La primera herramienta es conjunto de bases de datos relacionales conocidas como FICHOZ, fruto de distintos grupos de investigación que nació del estudio del personal de la alta administración de la Monarquía borbónica realizada por un heterogéneo grupo de historiadores españoles y franceses agrupados en el antiguo PAPE y coordinados en la actualidad por los profesores M^a Victoria López-Cordón y Jean Pierre Dedieu, co-directores de la presente tesis doctoral. El segundo instrumento es un programa informático de uso libre que permite dibujar, a partir de la información volcada en la base, redes sociales complejas, permitiendo sacar a la luz características de las mismas que escapan al ojo humano a la vista de la documentación de manera convencional.

El primero de los grandes bloques comienza por un repaso al marco legal en el que se definen cómo era el procedimiento establecido y las variaciones legales más importantes relativas a la censura que se producen desde la llegada de la nueva dinastía hasta la convocatoria de Cortes Extraordinarias. Más que una enumeración de leyes, para lo que ya existen otros trabajos, analizamos cómo esas disposiciones afectaban a la configuración institucional de la censura libraria, caracterizada por la superposición de jurisdicciones, pero que giró en torno al Juzgado de Imprentas y al Consejo de Castilla. Aún siendo conscientes de que las leyes no siempre se cumplían, es necesario explicar cuáles eran, porque son ellas las que manifiestan la voluntad del poder, aunque no siempre se materializara. Se hace, además, especial mención al papel de la Iglesia dentro de este entramado, puesto que aunque se tratara de un control gubernativo, los eclesiásticos mantuvieron una cuota de participación en el mismo, incluso tras la libertad de prensa decretada en las Cortes de Cádiz.

El segundo apartado, eje fundamental de la tesis, pretende mostrar los resultados de los análisis que se han hecho a partir del muestreo aplicando los métodos y técnicas explicados previamente. En él se analizan los personajes, comenzando por los titulares del Juzgado de Imprentas, y las redes que se forman de su implicación en el aparato de control librario. Como hemos anticipado, se han distinguido tres periodos diferenciados para poder comparar los procesos, componentes y características de

cada momento histórico, lo que nos permite extraer conclusiones generales para todo el siglo. Vemos quiénes son los autores más relevantes, cómo se organizan sus redes y cómo se vinculan a los censores, todo ello a partir de los datos extraídos de la documentación. El desempeño de las actividades de censor y autor crean un conjunto de redes interrelacionadas unas con otras, que vinculan el ámbito cultural con el político, y que nos dibujan una foto fija del estado de las relaciones en el tiempo contemplado.

El tercer bloque profundiza en la actividad de la censura y, a partir de los propios expedientes, analiza cómo discurría el control a través de las redes previamente explicadas. Así se puede diferenciar cómo era la tramitación ordinaria de un expediente, cómo discurría la práctica de la censura, los problemas a los que debían hacer frente los censores y cuáles eran los aspectos más destacados de sus aprobaciones, entre los que sobresale la *utilidad* como vertebrador de la política censoria de todo el siglo. De manera especial analizamos, también, la relación entre la censura y las mujeres, para comprobar si la diferencia de sexo fue un factor determinante a la hora de conceder una licencia o si, por el contrario, primaron criterios más “objetivos”, como la integración de las interesadas en el proyecto ilustrado o el papel e influencia de las redes en las que se integraban.

Antes de concluir, un pequeño apartado donde reflexionar sobre el contexto europeo de las reformas que en materia de censura se dieron en España a lo largo del siglo XVIII. Determinar si en otros países de nuestro entorno se siguieron políticas similares y si existió una influencia entre los distintos modelos puede ayudar a considerar la existencia de un modelo europeo de censura. Se termina, finalmente, el trabajo con las conclusiones más importantes que se han ido esbozando a lo largo del análisis. Como corresponde, se adjunta una bibliografía, en la que se han incluido las principales fuentes de archivo, los libros de fondo antiguo y obras bibliográficas más importantes que se han consultado para este estudio. Cerrando, un conjunto de documentos que se han extraído del texto para evitar que su lectura resultara incómoda, pero que complementan la información proporcionada, como son el listado completo de censores tratados y la redes creadas entre ellos y los autores, que, aunque están

comentadas en los apartados correspondientes, se han reproducido con mayor tamaño para facilitar la visualización de sus detalles.

1.2. Résumé

Lorsque le 10 Novembre 1810, après deux années d'hésitation, les Cortes de Cadix approuvent le règlement établissant la liberté de la presse, les députés, qui avaient eu des entretiens approfondis sur la question, ont mis fin, au moins temporairement, à une longue tradition de contrôle préalable des gravures datant de l'origine même de l'imprimerie et qui, au le siècle des Lumières, avait atteint son apogée. De fait, c'est peut-être au XVIII^e siècle que les efforts les plus importants ont été fournis au sein du gouvernement royal pour obtenir un contrôle efficace sur l'impression et la diffusion de imprimé. À tel point que, parmi les députés favorables à la liberté d'opinion et l'abolition de la censure préalable, a circulé l'argument selon lequel seule la liberté de la presse pourrait empêcher le despotisme comme celui de Godoy; preuve en était qu'une censure ferme, exercée par le pouvoir, était seule capable de contrôler la presse et par là même, l'opinion publique.

En Espagne ce contrôle a été exercé principalement par le Conseil le plus important de la Monarchie, le Conseil de Castille, auquel incombait, sauf pendant une courte période de temps, le suivi des manuscrits. Pour mener à bien ce travail, le Conseil s'est appuyé principalement sur deux piliers. Le premier était un membre de l'institution elle-même. Nommé juge des imprimeries –le titre subit quelques variations– il était en charge de l'orientation à donner à la politique d'impression. En ses mains reposait donc l'attribution pour chacune des oeuvres de l'allocation aux censeurs et la connaissance des causes découlant de l'usage abusif des licences, des privilèges ou des lois d'impression. Le deuxième pilier était celui des réviseurs des manuscrits qui étaient présentés à la censure, un groupe diversifié d'individus et d'institutions dont la composition a été modifiée, en fonction des vents politiques et dont le travail, éclipsé par la critique de leurs contemporains a été ignorée dans les études sur l'histoire politique de notre pays.

Le but de cet thèse est d'analyser le mécanisme de la censure des livres au XVIII^e siècle. Pour cela, nous sommes partis d'une perspective prosopographique ce qui nous permet d'analyser les responsables du contrôle des oeuvres à publier et de voir comment ils entraient en relation avec les auteurs des oeuvres sur lesquelles ils travaillaient. Cette approche permet de recréer des réseaux sociaux qui, autrement, restent achés derrière les sources. Le fait irréfutable dont nous partons est celui-ci de l'existence de réseaux d'Hommes de lettres liés entre eux et aux sphères du pouvoir, en particulier l'appareil administratif de la Monarchie, ce qui a permis au Roi et à ses ministres le contrôle des intellectuels par la censure préalable nécessaire pour l'impression et la possibilité de la Monarchie de récompenser le développement d'œuvres d'intérêt pour les bénéfices ecclésiastiques, notamment depuis la signature du Concordat de 1753, qui a rejoint les positions de la propre administration gouvernemental. Notre but est d'analyser l'un de ces cercles formés par les censeurs et les auteurs.

Le roi, par la faveur, exerçait le pouvoir en la centrant sur sa personne au moyen d'un réseau informel qui passait par le marges des institutions. Ceux-ci, à son tour, redistribuaient des cadeaux reçus en forgeant un réseau de loyautés couvrant l'ensemble du territoire. L'un de ces réseaux informels s'est déployé dans le domaine de la création culturelle, car l'élément commun à tous ses acteur était d'être considérés comme «intellectuels» en ce sens qu'ils sont tous des écrivains. À travers leurs écrits et les circonstances de leur rédaction, il est possible d'insérer les auteurs dans les réseaux de sociabilités auxquels ils participent et à travers lesquels, ils entrent en contact avec le pouvoir. Cependant, nous ne voulons pas nous limiter à leur carrière, mais surtout aborder leur influence sociale et politique. N'oublions pas que dans la société ces personnes exerçaient une profession liée au monde de la politique, de l'éducation, de la magistrature ou de l'administration, et fréquentaient dans le même temps les salons et autres cercles de sociabilités des Lumières. étant également fréquente sa présence en des rassemblements sociaux et d'autres espaces sociaux

illustrés. De la sorte, ils nous offrent une multitude de perspectives qui ouvrent la voie à diverses formes d'analyse.

Nous devons considérer que le mouvement des Lumières, au-delà des différences évidentes entre ces représentants à propos des réformes et de leur approfondissement, est avant tout une culture commune à tous ces hommes. Il est également vrai que cette culture s'acquiert dans les livres, mais comme tous ne sont pas appropriés pour cela, on établira des critères valables pour qu'un livre serve aux *intérêts publics*. Bien que la législation a toujours conçu l'imprimerie comme un outil au service de la société, la notion d'utilité n'est pas immuable et elle est adaptée aux besoins des gouvernants qui augmentèrent leur contrôle sur la censure pour garantir que seuls les bons livres arrivèrent dans les librairies. Bien que nous ferons référence aux effets de la censure. Ce n'est pas la répression ou l'intimidation en soi qui nous intéresse mais plutôt l'intérêt de l'élite dirigeante à rendre le mécanisme de censure préalable le plus efficace possible afin d'instrumentaliser la diffusion des messages.

La plupart des études faites à ce jour sur l'écriture, le livre ou la lecture à l'époque moderne, ont été réalisés dans le cadre de l'histoire sociale et culturelle. Notre intention est d'aborder ce thème au travers de l'histoire politique. Nos travaux s'insèrent donc ce renouvellement historiographique qui loin de voir l'histoire politique comme une histoire positive des traités, des mariages et des batailles, essaie de fournir un point de vue analytique sur les mécanismes par lesquels s'exerce le pouvoir. En outre, fuyant aussi les approches visions structuralistes nous voulons donner un poids plus important au contexte comme facteur déterminant dans le développement des événements historiques. En effet, ceux-ci ne répondent pas tous à des plans préconçus mais sont plutôt le fruit d'adaptations à des circonstances concrètes. Ce sont les individus que nous étudions qui, à tout moment et en fonction des situations spécifiques auxquelles ils sont confrontés, prennent les décisions qu'ils jugent appropriés, sans que tout cela ne résulte d'un plan préétabli.

Le choix de l'histoire politique est déterminé précisément par le moment historique. Au fur et à mesure que les siècles avancent, les personnes au pouvoir prennent

conscience de l'importance de l'écriture comme configurateur de l'opinion publique naissante qui va se construire à partir de la diffusion de l'imprimé et, dans une moindre mesure, des manuscrits. Si depuis les cercles du pouvoir s'exerce un contrôle de l'imprimé, ce n'est pas tant pour surveiller le contenu des étagères des bibliothèques ou des libraires mais plutôt, de surcroît de la part de l'élite éclairée, pour contrôler ce qui modèle l'opinion publique dont le rôle ne cesse de grandir dans la société. Ce procédé explique une attention accrue à la censure exercée par les dirigeants. Le livre tend ainsi à occuper l'espace autrefois occupé par l'université, d'autant que tout ce qui est écrit face au caractère oral de celle-ci, l'avantage de la durabilité et de la circulation.

Cela ne signifie pas que le discours oral cesse d'avoir de l'importance dans la vie publique à l'époque. Bien au contraire. Une grande part des publications qui voient le jour au premier XVIII^e siècle, sont à l'origine des discours, des sermons ou des conférences: Les canonisations, les célébrations liturgiques ou les funérailles importantes sont le cadre idéal pour les prédicateurs les plus fameux de même que les dissertations et les lectures publiques dans les universités voire, plus tard, les discours tenus dans les académies et les *sociedades economicas*. La plupart des écrits sont conçus par le prisme de l'oralité, pour être proclamés et écoutés, mais il est fréquent que peu après on procède à leur transcription sur papier. Donc, ce qui appartient à l'oral reste très important dans la vie intellectuelle, et cela se reflète même dans la forme écrite.

Dans tous les cas, On doit éviter l'usage des vieilles étiquettes restrictives qui se bornent à corseter la recherche et privent l'historien d'une multitude d'approches pour analyser la réalité d'une époque. Nous faisons tout à la fois de l'histoire politique car nous étudions l'action des agents de la Monarchie, de l'histoire culturelle puisque, si notre objectif premier est l'étude des individus, nous n'excluons pas les livres qu'ils écrivent et lisent et enfin de l'histoire sociale, car nous mettons en lumière la construction des réseaux de pouvoir et nous détaillons leur fonctionnement interne.

Axée sur l'interdisciplinarité qui nous permet de prendre les principes théoriques de disciplines connexes comme la sociologie, la philologie et, dans une moindre mesure, l'histoire de l'art, et par l'utilisation de nouvelles techniques, nous construisons une hypothèse qui traverse les tendances traditionnelles de l'historiographie afin d'enrichir la base théorique de notre travail.

Mais comme toute étude a ses limites, nous devons prendre conscience des nôtres. La première teinte est simple: sans tomber dans le débat sur la paternité des oeuvres, ce qui exigerait plus d'espace que celui dont nous disposons, nous avons considéré comme auteur toute personne qui écrit. La seule condition retenue est celle de la nationalité espagnole, soit par naissance, soit par naturalisation, indépendamment du lieu de publication de leurs oeuvres en Espagne ou à l'étranger. Bien que l'acte d'écriture ne vise pas toujours à faire connaître l'écrit produit, la plupart des imprimés qui sont conservés ont été distribués, ils ont été publiés. En ce sens, nous utilisons le terme publier, non pas comme un synonyme de l'impression, mais au sens de donner au public, «donner naissance».

Même si nous avons tenu compte des personnes qui écrivaient, nous n'avons pas pu inclure tout le monde dans l'analyse. De cette étude on été exclues, consciemment, les publications périodiques qui apparaissent tout au long du siècle, ainsi que des articles qui sont inclus dans d'autres oeuvres. La presse périodique, paru en feuilles volantes et bon marché, pouvait être lue rapidement, et passer de main en main, donnant lieu à des débats, des discussions et des commentaires dans les réunions et les auditoires. Tout cela est donc particulièrement adapté à la diffusion des idées, détaché des canaux de diffusion traditionnels. Le poids de ce phénomène dans la révolution culturelle du siècle et le traitement différencié qu'il a reçu de la part des autorités de l'époque sont tels que son étude aurait débordé le cadre prévu pour notre thèse. Ses caractéristiques également exigeraient un traitement spécial que nous n'avons pu aborder à ce stade. De même, on a négligé les manuscrits et la correspondance dont on a connaissance à travers les sources. Les deux, mais surtout les premiers, sont une forme de publication, mais ils circulaient sans l'approbation des autorités, de sorte que, malgré leur intérêt pour une étude complète de la circulation des idées et de

l'ensemble des auteurs et des liens qu'ils entretenaient entre eux, leur prise en compte n'aurait, dans notre cas, que contribuer à augmenter le nombre de pages et les listes d'œuvres sans fournir de données pour la compréhension des réseaux des censeurs.

Une source sous-évaluée à ce jour et qui fournit des informations précieuses est le titre des œuvres. Traditionnellement, On leur prêtait attention seulement comme indicateurs des sujets traités afin de classer les oeuvres selon les catégories contemporaines. Mais derrière eux nous trouvons beaucoup plus.

Sur la page de titre, on peut trouver le nom de l'auteur, le thème de l'oeuvre et le nom de l'imprimeur mais, à plusieurs reprises aussi, l'identité du commanditaire de l'œuvre et/ou celle qui en a financé la publication. On pouvait également trouver le nom de la librairie qui le commercialisait, l'existence de privilèges ou la présence de censures. Si l'on ajoute à la page de titre les paratextes qui précédaient le texte lui-même jusqu'en 1763, la possibilité de reconstruire le processus d'exécution des travaux est multipliée de façon exponentielle, ce qui facilite grandement le travail du chercheur.

Cette nouvelle interprétation de la documentation ouvre un large éventail de possibilités. En plus de voir les mécanismes de la censure établis au début du siècle et les acteurs chargés de sa mise en oeuvre, ce qui est l'objectif de notre travail, on peut comprendre. On peut voir qui sont les auteurs et les destinataires des dédicaces, qui commandent les œuvres, les auteurs et les œuvres qui sont traduites et par qui, le système de censure se trouve raillé à travers les oeuvres traduites, ou soi-disant traduites, quels sont les principaux foyers d'impression, ou le rôle de l'Église dans le monde de la culture sous tous ses aspects: en tant qu'auteur, éditeur et censeur.

Afin de couvrir en quelques pages la production imprimée de tout un siècle, il s'est avéré nécessaire de mettre en place une stratégie visant à rendre l'étude réalisable sans compromettre la validité scientifique des résultats. Par conséquent, nous avons pris trois points de référence, l'un au début du siècle, l'un dans les années intermédiaires et l'autre dans les dernières décennies du XVIII^e siècle. Compte tenu des différences entre les différents règnes et les conjonctures spécifiques des personnages

impliqués, ces échantillons nous servent à détecter les continuités et les ruptures dans un mécanisme, qui bien que sujet à modification, se maintient tout au long du siècle.

Le critère de sélection des périodes a été principalement chronologique. Nous en avons sélectionné trois mais l'importance accordée aux échantillons extrêmes du début et de la fin du siècle s'explique par les conclusions plus nettes que l'on peut tirer de leur comparaison. Le second critère se trouve déterminé par une conjoncture spécifique et différente qui altère en partie le mécanisme de la censure. Bien que la fourchette chronologique soit plus courte et ne peut donc pas souffrir des extrapolations, il nous intéresse pour vérifier le degré de conformité du changement juridique et savoir si la pratique réelle empruntait ces nouveaux canaux habilités ou si elle conservait le développement qu'elle avait eu auparavant et qui réapparaîtrait par la suite.

Pour la sélection des intervalles temporels, deux dates ont été choisies qui n'encadraient pas des événements déterminants pour l'édition espagnole. Pour la première moitié du siècle, il était par ailleurs nécessaire d'exclure la période de confrontation militaire relative à la succession au trône d'Espagne, puisque l'usage des armes a toujours affecté les plumes.

Nous avons donc mis en place deux années de référence. Pour la première moitié du siècle, 1738, et pour la seconde, 1780. Ces années ont été, en quelque sorte, considérées comme délimitant le cœur de la génération d'auteurs et censeurs à étudier. Bien que l'échantillonnage supposait l'exclusion d'une partie des individus étudiés, il était nécessaire de définir une période au cours de laquelle reconstruire les réseaux des auteurs et des censeurs, car, comme on le verra ci-dessous, l'objet d'étude est un ensemble de sujets en mouvement et en changement continu. Afin de les analyser comme un élément statique, il est nécessaire d'abandonner une partie des informations. La troisième période a été déterminée par la période où les dispositions nouvelles concernant la rétribution des censeurs imposées par Curiel en 1756 sont restées en vigueur, à savoir jusqu'en 1763, date de leur abrogation par Charles III. La

configuration et le développement de ces périodes seront abordés en détail dans le troisième chapitre de la thèse.

Parmi les objectifs que nous allons définir, il faut souligner le rôle que chaque acteur a dans ce jeu dont l'issue est claire : la réalisation d'œuvres imprimées. Nous allons donc voir comment les changements politiques et sociaux de notre pays affectent le contrôle de l'imprimé et nous travaillerons sur la relation entre une augmentation évidente et soutenue de la production imprimée tout au long du XVIII^e siècle et la très grande préoccupation de l'élite éclairée au sein du gouvernement à contrôler les messages qu'elle transmettait, conscients qu'ils étaient du rôle majeur de l'imprimé dans l'élaboration de ce que l'on a appelé l'opinion publique. Ceux qui vont répondre à toutes ces questions sont les livres, les feuilles volantes, qui abondaient plus que jamais au cours du XVIII^e siècle et qui gardent entre leurs feuilles, sur leurs couvertures et dans les fichiers qui permettaient l'impression, une multitude d'informations qui n'a pas encore été pleinement exploitée.

Ainsi, en comparant les informations livrées par la diversité de nos sources et en les traitant selon les principes théoriques et techniques ici expliquées, nous avons donné corps à la recherche que nous présentons ici dans une tentative d'approfondir le mécanisme de censure des livres du XVIII^e siècle à partir de ses protagonistes: les censeurs.

1.3. Estado de la cuestión

Uno de lo campos historiográficos más prolíficos dentro de la historiografía moderna es el dedicado a la historia del libro, abordándolo desde distintas perspectivas: social, cultural, económica o política. Decía Enciso Recio, en uno de sus discursos en el Instituto de España, que no nos puede extrañar este creciente interés por la historia de

lo escrito, pues “el libro es una de las puertas privilegiadas por las que penetrar en ese ambiguo y complejo mundo de valores y conductas constantes de la sociedad”⁷.

En esta revisión historiográfica intentaremos hacer un rápido repaso a los principales hitos de la historia del libro, en la que se inserta en términos generales nuestro estudio, para centrarnos, después, en el más específico de la censura. El eje de este repaso será, obviamente, el tratamiento de la historiografía a nuestro país, pero serán obligadas referencias a trabajos que abordan el mismo sujeto de estudio en otros países de nuestro entorno.

El inicio de la historia del libro como disciplina específica podemos situarlo en la década de los setenta en Francia⁸, con el papel destacado de historiadores de la talla de Roger Chartier, Daniel Roche, François Furet y Raymond Birn, que iniciaron el cambio de la visión tradicional que se tenía del libro, gracias a las influencias recibidas de la escuela de los *Annales*, que permitió que lo contextualizaran con su entorno cultural, social y económico⁹. El mejor ejemplo es la obra de Albert Flocon, que hace un repaso a la historia de la escritura, incluyendo, por cierto, un capítulo completo a la censura, en el que repasa los principios jurídicos en los que se fundamenta el control de impresos no sólo para Francia, sino para toda Europa, incluyendo, claro está, España¹⁰. Las obras de este momento, que tratan el libro desde la historia socio-cultural, no sólo serán las primeras en esta línea, sino que marcarán la tendencia a seguir y se convertirán en la referencia de las siguientes publicaciones, que no serán

⁷ ENCISO RECIO, Luis Miguel, *Libro y cultura en la España Ilustrada*, Madrid, Instituto de España, 2002, pág. 3.

⁸ Aunque con anterioridad hubiera obras sobre la historia del libro, eran considerados dentro de la historia cultural, no como disciplina específica. El primer estudio, todavía a tener en cuenta es MELLOTTÉE, Paul, *Histoire Économique de l’Imprimerie. Tome I. L’imprimerie sous l’ancien Régime, 1439-1789*, Paris, Hachette, 1905.

⁹ El propio Chartier se reconoce dentro de esta corriente de la historiografía francesa al explicar su forma de acercamiento a la historia literaria, la crítica textual y la historia cultural, como apropiación de los textos por parte de los lectores u oyentes. CHARTIER, *op. cit.* (nota 4), pág. 243. Entre las obras más destacadas de estos autores, FURET, François (Dir.), *Livre et société dans la France du XVIII^e siècle*, Paris-La Haya, Mouton, 1970.

¹⁰ FLOCON, Albert, *L’univers des livres. Étude historique des origines à la fin du XVIII^e siècle*, Paris, Hermann, 1961. El capítulo “Les règlements”, es el número IX, págs. 399-422.

sólo por monografías o artículos, sino que contarán, incluso, con una revista específica, la *Revue française d'histoire du livre*¹¹.

La década de los ochenta continúa en la senda marcada los años anteriores, si bien se van incorporando otros historiadores que, con el tiempo, se convertirán en imprescindibles para conocer la historia del libro, como Henri-Jean Martin¹², Robert Darnton¹³ y Frédéric Barbier, incluyendo éste el estudio de las bibliotecas a sus trabajos sobre el libro¹⁴. Especial relevancia adquiere la obra que publica durante estos años el francés Roger Chartier, al que podemos considerar uno de los principales artífices de la renovación historiográfica del libro y la lectura, primero con sus investigaciones sobre la Francia prerrevolucionaria y más tarde, según amplíe el objeto de estudio, comparando la situación de su país con la de España¹⁵. Es además, en estos

¹¹ Impresa por Librairie Droz, comenzó sus ediciones en 1971 y ha llegado hasta nuestros días. En cuanto a los principales trabajos publicados en la década de los setenta: HERRMANN-MASCARD, Nicole, *La censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime: 1750-1789*, París, Presses Universitaires de France, 1968, aunque cronológicamente de la década anterior es una referencia para la censura francesa; FURET, François, *Livre et société dans la France du XVIII^e siècle*, París, 1965-1970; CHARTIER Roger y ROCHE, Daniel, "Le livre: un changement de perspective", en J. LE GOFF y P. NORA (ed.), *Faire l'histoire*, París, 1974, III, págs. 115-136; CHARTIER, Roger y ROCHE, Daniel, "L'histoire quantitative du livre", *Revue Française d'Histoire du livre*, Bordeaux, 1977 (16), págs. 477-501; BIRN, Raymond, "Livre et société after Ten years; Formation of a Discipline", en *Studies on Voltaire and de Eighteenth Century*, 1976, LI, págs. 287-312.

¹² MARTIN, Henri-Jean, *Le Livre français sous l'Ancien Régime*, Promodis, 1987; *Histoire et pouvoirs de l'écrit*, París, Librairie Académique Perrin, 1988; y, la más reciente *Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIII^e siècle. Préface de Roger Chartier*, 2 tomos, Ginebra, Droz, 1999, a la que había que sumar la coordinación junto a Chartier de la *Histoire de l'édition française*, París, Promodis, 1984.

¹³ Aunque estadounidense, está considerado uno de los mayores especialistas en la Francia del siglo XVIII, como lo atestiguan sus numerosas aportaciones: DARNTON, Robert, *The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800*, Cambridge, Harvard University Press, 1979; *The Literary Underground of the Old Regime*, Cambridge, Harvard University Press, 1982; "What is History of Books?", en *Daedalus* (verano 1982), págs. 65-83; *Édition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIII^e siècle*, París, Gallimard, 1991; *Gens de lettres, gens du livre*, París, Editions Odile Jacob, 1992; *The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France*, Nueva York, W.W. Norton, 1995; y, *The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769-1787*, Nueva York, W.W. Norton, 1995. Su producción continúa hasta fechas más recientes, destacando una de sus últimas aportaciones, sólo disponible en castellano: *El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. Sus obras han sido traducidas a numerosos idiomas, incluido el castellano.

¹⁴ BARBIER, Frédéric, *Les bibliothèques au XVIII^e siècle*, Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1989; *Livre et révolution: colloque organisé par l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (CNRS)*, París, Aux Amateurs de XX^e; y, *Historia del libro*, Madrid, Alianza, 2005.

¹⁵ Para esta década, los principales trabajos serán: CHARTIER, Roger, "L'Ancien Régime Typographique: réflexions sur quelques travaux récents", *Annales ESC*, 2 (marzo-abril, 1981), págs. 191-209; MARTIN, Henri-Jean, "Livres et lumières en France à propos de travaux récents", *Hamburg, Buch und Buchhandel im achtzehnten Jahrhundert*, 1981, págs. 12-52; MARTIN, Henri-Jean. y CHARTIER, Roger (Dirs.), *Histoire de l'édition française*, París, 1982 y 1984, vols. I y II; ROCHE, Daniel, *Les Républicains des lettres. Gens de*

años, cuando la renovación historiográfica calará en las investigaciones que se venían realizando sobre el tema en España, que hasta entonces había permanecido al margen de las nuevas tendencias que circulaban por Europa. El proceso, aunque más tardío, será imparable hasta nuestros días, habiendo alcanzado un nivel similar al que tienen otros países de nuestro entorno. Alguna de las aportaciones de Chartier, como el concepto de apropiación de los textos sí tuvo reflejo en nuestra historiografía¹⁶, mientras que otros, como el peso de lo oral y de la lectura siguen esperando un estudio en profundidad¹⁷.

En la década de los noventa continúa la producción francesa sobre el libro, fundamental para el desarrollo de la disciplina, y que ha perdurado hasta nuestros días. En estos años surgen algunas de las obras más importantes sobre la edición y la censura para la Francia del Antiguo Régimen de la mano de Minois, Netz y Negroni¹⁸,

culture et Lumières au XVIIIe siècle, París, Fayard, 1988; CHARTIER, Roger, "Le monde comme représentation", *Annales ESC*, 1989; BRAIDA, Ludovica, "La storia sociale del libro in Francia dopo Livre et société. Gli studi sul settecento", *Rivista Storica Italiana*, fasc. II, (1989), págs. 412-467; CHARTIER, Roger, *Les Origines culturelles de la Révolution française*, París, Éditions du Seuil, 1990. Para el caso alemán destaca la obra de RAABE, P., "La Ilustración y la letra impresa (El panorama editorial alemán a finales de la Ilustración)" en MATE, Reyes y NIEWÖHNER, Friedrich (Coords.), *La Ilustración en España y Alemania*, Barcelona, 1989, págs. 199-211.

¹⁶ La cabeza de esta corriente historiográfica en nuestro país corresponde a Fernando Bouza, cuyos trabajos sobre producción escrita y circulación de obras y discursos, aunque centrado en los siglos XVI y XVII, sigue siendo referencia obligada. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, *Del escribano a la biblioteca: la civilización escrita europea en la alta edad moderna (siglos XV-XVII)*, Madrid, Síntesis, 1992; *Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro*, Madrid, Marcial Pons, 2001, sobre la contribución de los manuscritos a la historia cultural, que todavía no ha encontrado reflejo para el siglo XVIII; *Papeles y opinión. Políticas de publicación en el Siglo de Oro*, Madrid, CSIC, 2008, sobre el papel de los impresos en la configuración de la opinión; y el más reciente *"Dásele licencia y privilegio". Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro*, Madrid, Akal, 2012, sólo por citar los más destacados.

¹⁷ Existen honrosas excepciones, casi siempre por parte de hispanistas, como FRENK, Margit, "Lectores y oidores. La difusión oral de la literatura en el Siglo de Oro", en *Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas*, celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto de 1980, editados en Roma, 1981 y reeditados en España en la obra *Entre la voz y el silencio*, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1997. Si tuvieron, en cambio, continuidad en su país: BOURDIEU, Pierre, "Lecture, lecteurs, lettres, littérature", *Choises dites*, París, Éditions de Minuit, 1987, págs. 132-143 o ZUMTHOR, Paul, *La Lettre et la voix. De la « littérature » médiévale*, París, Éditions du Seuil, 1987, traducción española: *La letra y la voz. De la literatura medieval*, Madrid, Cátedra, 1987.

¹⁸ MINOIS, Georges, *Censure et culture sous l'ancien régime*, París, Fayard, 1995, que explica la censura a través de los casos más significativos, introduce la problemática del clero y la censura y destaca el papel de la prensa periódica en los últimos años de la Ilustración, dedicando precisamente más de la mitad de la obra al siglo XVIII; NETZ, Robert, *Historire de la censure dans l'édition*, París, Fayard, 1995; NEGRONI, Barbara, *Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIIIe siècle. 1723-1774*, París, Albin Michel, 1995; el catálogo comentado de libros prohibidos de WEIL, Françoise, *Livres interdits, livres persécutés 1720-1770*, Oxford, Voltaire Foundation, 1999; y más recientemente, MORTIER, Roland, *Les Combats des Lumières. Recueil d'études sur le dix-huitième siècle. Preface de Robert Darnton*, París, Centre

que todavía hoy son referentes por las problemáticas planteadas y las perspectivas desde las que se afronta la relación entre la censura, la imprenta y la cultura a lo largo del Setecientos, haciendo especial hincapié en las últimas décadas del siglo.

Hasta los ochenta, en nuestro país, los principales estudios sobre historia del libro tenían una clara tendencia bibliográfica, que trataba de cubrir los aspectos técnicos y formales, con una visión más erudita que científica. Por esta razón, las primeras obras, sobre todo catálogos y repertorios bibliográficos fueron escritas por bibliófilos, eruditos e historiadores más positivistas. El *Ensayo de una Biblioteca española de los mejores Escritores del Reynado de Carlos III*, escrito por Juan Sempere y Guarinos, fija el modelo a seguir para este tipo de estudios en los siglos siguientes. Es en esta tradición en la que se entiende la labor, durante el siglo XIX, de Félix Torres Amat y Justo Pastor Fuster, que escriben sobre los escritores valencianos y catalanes y ya en el XX las de Francisco Martí Grajales, que retoma el caso de Valencia, y Pío Tejera, que se centra en Murcia¹⁹. Estas primeras aportaciones no dejan de tener utilidad, aunque en su elaboración se cometieran ciertos errores y se detecten ciertas imprecisiones, algo que no nos debe extrañar si tenemos en cuenta las lejanas fechas en las que vieron la luz, pues la mayoría se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX²⁰, cuando el paradigma científico todavía no había alcanzado los términos contemporáneos.

La renovación de los planteamientos historiográficos sobre el tema y en las innovaciones técnicas empleadas, buscando siempre una mejora de los catálogos anteriores, culmina, para el siglo XVIII, con la aparición del *Manual del librero*

Internacional d'Étude du XVIIe Siècle Fernay-Voltaire, 2000 ; MOUREAU, François, *La plume et le plomb. Espaces de l'imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières*, Preface de Robert Darnton, Paris, PUPS, 2006 ; y, BIRN, Raymond, *La Censure royal des livres dans la France des Lumières*, 2007.

¹⁹ SEMPERE GUARINOS, J., *Ensayo de una Biblioteca española de los mejores Escritores del Reynado de Carlos III*, Madrid, Imprenta Real, 1785-1789; TORRES AMAT, F., *Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes*, Barcelona, 1836; FUSTER, J.P., *Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días*, Valencia, 1827; MARTÍ GRAJALES, F., *Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el reino de Valencia hasta el año 1700*, Madrid, 1927; TEJERA, P., *Biblioteca del Murciano o Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de la literatura en Murcia*, Madrid, *Revista de Archivos*, Toledo, 1950 (3 vols.). La obra de Tejera tuvo una honrosa continuación en 1985 con el estudio publicado por EGEA MARCOS, M^a Dolores y RUIZ ABELLAN, M^a Concepción, *El libro en Murcia en el siglo XVIII*, Academia Alfonso X el Sabio, Cuadernos Bibliográficos, 9, Madrid, 1985.

²⁰ Un buen ejemplo son los catálogos de SAINZ RODRÍGUEZ, P., *Biblioteca Bibliográfica Hispánica*, Madrid, 1976; y SIMÓN DÍAZ, J., *Impresos del s. XVII*, Madrid, 1972.

hispanoamericano, de Palau y, sobre todo, la *Biblioteca de autores españoles del siglo XVIII*²¹, que, elaborada por Aguilar Piñal²², se publicó entre 1981 y 2001, siendo, todavía la obra de referencia para estudiar los impresos de autores ilustrados españoles.

Estas bibliografías, sin embargo, tampoco son perfectas y las carencias que puedan tener se cubren con otro tipo de obras, como son los catálogos de libreros. Para España, el más importante es el estudio presentado por Rodríguez Moñino, *Historia de los catálogos de librería españoles (1661-1840)*²³, que es, si no la única, sí una de las pocas aportaciones con la suficiente calidad desde esta perspectiva.

A partir de los sesenta y, sobre todo, de los setenta, la historiografía española, que había mantenido una postura tradicional, afrontaría una importante renovación que afecta, también, al estudio del libro, especialmente del siglo XVIII. Son varias las síntesis que sobre el libro antiguo español se publican en estos años. La que ha sido considerada como pionera vio la luz en 1962, obra de Pere Bohigas²⁴, que aunque mantenga en parte cierto lastre positivista, sirvió para reordenar los principales postulados que hasta el momento se habían mantenido dentro de los estudios sobre el libro.

En 1967 se inicia un cambio más evidente con *Valladolid, une ville au Siècle d'Or*, de Bartolomé Bennasar, donde se hace una novedosa revisión de la cultura del libro y se aportan datos estadísticos sobre los contenidos utilizando los inventarios *post-mortem* para establecer sociologías de los propietarios. Similar es el caso de Jaime Moll,

²¹ PALAU DULCET, A., *Manual del librero hispano-americano*, Madrid, 1947-1977, 36 vols. y AGUILAR PIÑAL, Francisco, *Bibliografía de autores españoles del s. XVIII*, Madrid, 1981-2002. A estas grandes obras habría que sumar los catálogos bibliográficos especializados que sobre temas específicos o regiones concretas, han inundado el mercado editorial hasta nuestros días.

²² Además de esta obra, Aguilar Piñal ha realizado importantes aportaciones sobre diversos aspectos de la producción escrita española, entre las que cabe destacar: AGUILAR PIÑAL, Francisco, *Impresos sevillanos del siglo XVIII*, Madrid, CSIC, 1974; *La prensa española en el siglo XVIII: diarios, revistas y pronósticos*, Madrid, CSIC, 1978; *La Biblioteca de Jovellanos: 1788*, Madrid, Instituto "Miguel de Cervantes", 1984; y, Francisco, *Historia literaria de España en el siglo XVIII*, Madrid, Trotta, 1996.

²³ RODRÍGUEZ MOÑINO, A., *Historia de los catálogos de librería españoles (1661-1840)*, Madrid, 1966.

²⁴ BOHIGAS, Pere, *El libro español. Ensayo histórico*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1962.

considerado uno de los mayores especialistas españoles en bibliografía material, aunque sus estudios se centren, principalmente, en la centuria anterior²⁵.

Cambiando de década, Enciso Recio publicó su análisis sobre la Imprenta Real, que sacó a la luz nuevas cuestiones jurídicas, sociales y económicas vinculadas a la imprenta que no habían sido tratadas hasta entonces. A esta obra le sigue la publicación de Jesús María Palomares de 1974 sobre *Imprenta e impresores de Valladolid en el siglo XVIII*, donde clasifica y cuantifica la producción de una ciudad, y el artículo de Mestre sobre el informe que emite Mayans tras el conocido Auto de Curiel de 1752, que sale de las prensas en 1975 para terminar de consolidar el cambio historiográfico²⁶.

El camino que iniciara Bohigas fue retomado, poco después, por nuevos autores, entre los que podemos destacar a Simón Díaz e Hipólito Escolar²⁷, que a pesar de las insuficiencias metodológicas a las que tenían que hacer frente, sentaron la base del análisis del libro antiguo y constituyen la prueba más evidente de que en los ochenta se abrieron las perspectivas de trabajo con nuevas metodologías y vías de análisis.

Por esos mismos años publica Juárez Medina sus trabajos sobre uno de los aspectos sobre los que todavía existe un importante vacío: las reediciones de libros que se imprimieron por primera vez en los siglos XVI y XVII y que se reimprimen en la Ilustración. La principal limitación de su obra es que se limita a las obras de erudición, que no son las más abundantes en nuestro siglo XVIII. No obstante, es un primer paso fundamental que sigue esperando su necesaria continuación²⁸.

²⁵ La mayoría de sus obras se centran en el siglo XVII aunque haga alguna incursión en el XVIII, destacando, por ejemplo, MOLL, Jaime, *De la imprenta al lector. Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII*, Madrid, Arco, 1994.

²⁶ MESTRE SANCHIS, Antonio, "Informe de Mayans sobre el Auto de Censura de Libros establecido por Juan Curiel en 1752", en *Homenaje al Dr. Don Juan Reglá Campistol*, Vol. 2, Valencia, Universidad de Valencia, 1975, pp. 53-64.

²⁷ ESCOLAR, Hipólito, *Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994.

²⁸ De hecho, este aspecto es uno de los que ha sido señalado como carencia de la *Bibliografía de autores* de Aguilar Piñal. JUAREZ MEDINA, Antonio, *Las reediciones de obras de erudición de los siglos XVI y XVII durante el siglo XVIII español*, Frackfurt, Nueva York, París y Berna, Peter Lang, 1988.

De mayor continuidad es la labor llevada a cabo, de manera individual y conjunta, por M^a Luisa López-Vidriero y Pedro Cátedra, organizadores de múltiples encuentros sobre el libro antiguo español, todos ellos convenientemente publicados, desde 1988 hasta fechas muy recientes y que han ido planteando a los investigadores nuevos problemas y enfoques desde los que afrontar la historia del libro, incidiendo en distintos aspectos de las publicaciones pero sin descuidar su estudio como elemento material²⁹. A partir de los ochenta es, precisamente, cuando el libro deja de ser un simple objeto material y adquiere la dimensión poliédrica que, en realidad, siempre tuvo. La bibliofilia se transforma y la historiografía contempla el libro como un reflejo de la sociedad que lo produce. Así se refleja a una obra colectiva firmada por Álvarez Barrientos, Lopez y Urzainqui que se imprime en 1995 bajo el título genérico de *La República de las Letras en la España del siglo XVIII* y donde realizan un nuevo estudio de la producción literaria española de la Ilustración incorporando las nuevas visiones historiográficas, lo que permite analizar el papel de los escritores y periodistas, su consideración social, el comercio librario, la implicación de censura gubernativa e inquisitorial, el papel de la prensa periódica o la importancia de los lectores, en lo que constituye un hito de la renovación historiográfica española³⁰.

El mejor ejemplo en este sentido son trabajos que, por ejemplo, desde el ámbito de la filología, examinan elementos que no son puramente bibliográficos, pero que profundizan en los contenidos y ayudan a comprender la trascendencia de lo impreso.

²⁹ LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa y CÁTEDRA, Pedro (Coord.), *El libro antiguo español: actas del primer coloquio internacional (Madrid, 18-20 de diciembre de 1986)*, Salamanca y Madrid, Universidad de Salamanca, Biblioteca Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro, 1988; *El libro antiguo español: actas del segundo coloquio internacional (Sevilla, octubre de 1989)*, Salamanca y Madrid, Universidad de Salamanca, Biblioteca Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro, 1992; *El libro antiguo español III, el libro en Palacio y otros estudios bibliográficos*, Salamanca y Madrid, Universidad de Salamanca, Patrimonio Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro, 1996; *El libro antiguo español IV, coleccionismo y bibliotecas, (Siglos XV-XVIII)*, Salamanca y Madrid, Universidad de Salamanca, Patrimonio Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro, 1998; *El libro antiguo español V, el escrito en el Siglo de Oro: prácticas y representaciones*, Salamanca y Madrid, Universidad de Salamanca, Patrimonio Nacional y Sociedad Española de Historia del Libro, 1998; y, *El libro antiguo español VI, de libros, librerías, imprentas y lectores*, Salamanca, Universidad de Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002.

³⁰ ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, LOPEZ, François y URZAINQUI, Inmaculada, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995.

El caso más representativo es el del ahora académico de la Lengua Pedro Álvarez Miranda y sus trabajos sobre el léxico en el siglo XVIII³¹.

En la renovación historiográfica española jugaron un papel imprescindible los especialistas extranjeros que se acercaron a la historia de la producción escrita en España. Además del ya citado Roger Chartier, la primera y más importante referencia, encontramos historiadores de la talla de François López, quien fuera director de la influyente revista francesa dedicada a historia de España, *Bulletin Hispanique*, que se sirvió de su excepcional análisis de la obra de Juan Pablo Forner para continuar estudiando la imprenta y el libro en nuestro país. Sus trabajos sobre el siglo XVIII³² han sido reveladores a la hora de encauzar nuestro panorama editorial, pues, por ejemplo, fue el primero en medir la producción tipográfica española sirviéndose de los anuncios que publicaban la *Gaceta* y la *Biblioteca periódica anual para utilidad de los libreros y literatos*. También le debemos a él el planteamiento de un nuevo tema, todavía sin agotar, como es la participación de los iletrados en la cultura, problema que planteó en un coloquio franco-español sobre el libro y la lectura organizado en 1980 por la Casa de Velázquez³³. No podemos dejar de lado la revista francesa *Dix-huitième siècle*, que ha recogido tendencias e ideas innovadoras sobre la producción escrita en Francia y España³⁴. La influencia de los hispanistas franceses es fundamental para comprender la

³¹ ALVAREZ MIRANDA, Pedro, *Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760)*, Madrid, Real Academia Española, 1992.

³² LOPEZ, François, *Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIII^e siècle*, Lille, Université de Lille, 1976, traducido al español: *Juan Pablo Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999. Algunos de sus trabajos más relevantes han sido "Gentes y oficios de la librería española a mediados del s. XVIII", *Nueva Revista de Filología Hispánica*, XXXIII, 1 (1984); "Los vehículos de la Ilustración", "Sobre la imprenta y la librería en Valencia en el siglo XVIII", en ALBERLOA, Armando y LA PARRA, Emilio (eds.), *La Ilustración española. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante 1-4 de octubre de 1985*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil Albert y Diputación Provincial de Alicante, 1986; "Un aperçu de la librairie espagnole au milieu du XVIII^e siècle", en *De l'alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, XVI^e-XIX^e siècles*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1987; "La edición española bajo el reinado de Carlos III", *Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración"*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, t. III, págs. 279-303, por citar sólo los de la década de los ochenta. En los noventa destacan LOPEZ, François, "El libro y su mundo", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, *op. cit.* (nota 30), pág. 63-124; "Antonio Sanz, imprimeur du roi et l'édition populaire sous l'Ancien Régime", *Bulletin Hispanique*, XCV (1993), págs. 349-378; y, "Lo que puede hacerse con la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*", en ALVAREZ BARRIENTOS, *op. cit.* (nota 6), págs. 575-582.

³³ Se trata del Coloquio franco-español *Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime*.

³⁴ Hoy en día sus artículos siguen situándose en la vanguardia. *Dix-huitième siècle: revue annuelle*, París, Sociedad francesa de estudios del siglo XVIII, 1969-.

historia del libro y de la censura en España, no sólo por su carácter pionero, sino también en fechas más recientes, donde se ha seguido manifestando su espíritu innovador³⁵.

Recapitulando, a lo largo del siglo XX conviven dos grandes tendencias historiográficas dentro de la denominada historia del libro. La historiografía analítica, que considera el libro en su vertiente material y que buscaba conocer la procedencia del libro, desvelar sus señas de identidad o esclarecer las falsificaciones. La segunda, partiendo de planteamientos financieros, estudia el libro como objeto de comercio, prestando atención a los cambios en la industria editorial, la producción, los precios, el comercio, la venta y otros aspectos similares.

Junto a éstas, y ya en los albores del siglo XXI, empieza a surgir una nueva corriente vinculada a los estudios socio-culturales, planteada por Chartier para Francia, y que atiende a los individuos que participan en el proceso de producción de un libro, incluyendo a los lectores, pues se empiezan considerar los auténticos motores del sector. A partir de este momento es necesario relacionar el complejo mundo de oficios que giran en torno a un texto para intentar reconstruir la historia de su producción. La obra más importante, que no la primera, en este sentido es el volumen dirigido por Víctor Infantes, François López y Jean-François Borrel, *Historia de la edición y de la lectura en España (1472-1914)*, que aunque se publicó en 2003, logra conjugar todos los elementos, transformando la "historia del libro" en una "historia de la edición". A pesar del tiempo transcurrido sigue siendo uno de los trabajos más importantes en este campo³⁶. En esta corriente se enmarcan, también, los trabajos de Joaquín Álvarez Barrientos, que si bien partiendo desde el mundo de la literatura, ha realizado grandes

³⁵ Sirva como ejemplo la reciente obra de DUFOUR, Gérard, *Lumières et "Ilustración" en Espagne sous les règnes de Charles III et de Charles IV (1759-1808)*, Paris, Ellipses, 2006 o la obra dirigida por Garrot, Guereña y Zapata sobre las figuras de la censura en España e Hispanoamérica, que amplía el marco temporal hasta los tiempos contemporáneos, con interesantes reflexiones sobre los porqués de la censura y la auto-censura. GARROY, Juan Carlos; GUEREÑA, Jean-Louis, y ZAPATA, Mónica, *Figures de la censure dans les mondes hispaniques et hispano-américain*, Paris, Indigo, 2009.

³⁶ INFANTES, Víctor, LOPEZ, François y BORREL, Jean-François (Dirs.), *Historia de la edición y de la lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003.

aportaciones a la historiografía sobre los autores del libro³⁷, y el *Diccionario biográfico* de Juan Arencibia sobre militares españoles³⁸.

Relacionados con lo anterior, pero desde un origen distinto, se encuentra el grupo hispano-francés dirigido por Jean-Pierre Dedieu y M^a Victoria López-Cordón, que tras estudiar prosopográficamente la composición de la alta administración española están demostrando ahora la existencia de relaciones entre los hombres del poder y los hombres de letras, siendo por ello uno de los grupos más activos en la actualidad³⁹.

A las nuevas aportaciones, habría que añadir la continuación de los estudios de M^a Luisa López-Vidriero y Pedro Cátedra⁴⁰, los trabajos de Enciso Recio⁴¹ y los de Mestre

³⁷ ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín (ed.), *Se hicieron literatos para ser políticos. Cultura y política en la España de Carlos IV y Fernando VII*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004; ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII: apóstoles y arribistas*, Castalia, Madrid, 2006; *Ilustración y Neoclasicismo en las letras españolas*, Madrid, Síntesis, 2005; y, anteriores, sobre aspectos más concretos "El periodista en la España del siglo XVIII y la profesionalización del escritor", *Estudios de Historia Social*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N° 52-53 (1990), págs. 29-39; y, *La novela del siglo XVIII*. Madrid, Júcar, 1991.

³⁸ ARENCIBIA DE TORRES, Juan, *Diccionario biográfico de literatos, científicos y artistas militares españoles*, Madrid, E y P Libros Antiguos, 2001.

³⁹ Un buen ejemplo sería la obra colectiva CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria (Eds.), *La pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, Madrid, Marcial Pons, 2000. Otros trabajos interesantes para asuntos relacionados son: LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M^a Victoria, FRANCO RUBIO, Gloria, NAVA RODRÍGUEZ, Teresa, "Perfiles socio-profesionales de la burocracia española en el siglo XVIII: las Secretarías de Estado y del Despacho", en ENCISO RECIO, Luis Miguel (coord.), *La burguesía española en la Edad Moderna, actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid y Soria*, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, Madrid, 1996, págs. 1009-1034; DEDIEU, Jean-Pierre, "Un instrumento para la historia social: la base de datos de Ozanam", *Cuadernos de Historia Moderna*, Universidad Complutense de Madrid, 24 (2000), págs. 186-187; LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria, "Burocracia y erudición en la España del siglo XVIII", en DEDIEU, Jean-Pierre y VINCENT, Bernard (Eds.), *L'Espagne, l'État, les Lumières. Mélanges en l'honneur de Didier Ozanam*, Madrid, Colección de la Casa de Velázquez (86), Madrid, 2004, págs. 155-171; FRANCO RUBIO, Gloria A., "El ejercicio de poder en la España del siglo XVIII: Entre las prácticas culturales y las prácticas políticas", en LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria y LUIS, Jean-Philippe (Coord.), *La naissance de la politique en Espagne. Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, n° 35-1 (2005), págs. 51-75; DEDIEU, Jean-Pierre, "Amistad, familia, patria... y rey. Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos XVII y XVIII", en LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria y LUIS, Jean-Philippe (Coord.), *La naissance de la politique en Espagne. Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, n° 35-1 (2005), págs. 27-50.

⁴⁰ LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, "La imprenta en el siglo XVIII", en ESCOLAR, Hipólito (dir.), *Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, págs. 201-270; "Censura civil e integración nacional: el censor ilustrado", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 855-867; y, CÁTEDRA, Pedro y LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, *La memoria de los libros*, Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004.

⁴¹ ENCISO RECIO, Luis Miguel, *Libro y cultura en la España ilustrada*, Madrid, Instituto de España, 2002.

Sanchís⁴². Además, la historiografía gallega ha hecho, importantes aportaciones de la mano de Ofelia Rey y Manuel-Reyes García Hurtado que van más allá de las historias locales o regionales y plantean problemas globales sobre la producción impresa y la difusión⁴³, en relación, por ejemplo, a la promoción eclesiástica y el papel de la Iglesia como productora y receptora de impresos⁴⁴ o la relación entre los militares y la cultura escrita⁴⁵.

No se puede entender la historia de la edición sin tener en cuenta, previamente, las leyes que estuvieron vigentes en el momento y que condicionaban el mecanismo de publicación del siglo XVIII. Para ello se puede recurrir a las sucesivas recopilaciones oficiales que por iniciativa real recogieron todas las pragmáticas, edictos y normas sobre censuras, aprobaciones, imprenta y libros que se habían promulgado, como son la *Nueva* y especialmente la *Novísima recopilación*⁴⁶, pero más útil y rápido es la lectura de estudios sobre el tema. La primera es la obra de José Eugenio de Eguizábal *Apuntes para una historia de la legislación española sobre imprenta desde el año de 1480 al presente*⁴⁷, de 1879, tradicional trabajo hecho por un hombre de leyes. Mucho más actual, y con un planteamiento más riguroso, disponemos del primer estudio de Amparo García Cuadrado⁴⁸ y, sobre todo, del libro de Fermín de los Reyes en el que se sintetiza la historia de la legislación sobre el libro en España y América, con un segundo

⁴² MESTRE SANCHIS, Antonio, *Humanistas, políticos e ilustrados*, Alicante, Universidad de Alicante, 2002; *Mayans: proyectos y frustraciones*, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 2003; *Apología y crítica de España en el siglo XVIII*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003; *Los ilustrados, el origen de la imprenta y el catálogo de incunables españoles*, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, 2007.

⁴³ REY, Ofelia, *Libros y lectura en Galicia*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003, y "A vueltas con la difusión de impresos en la Edad Moderna", en GARCIA HURTADO, Manuel-Reyes (coord.), *Modernitas: estudios en homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón*, La Coruña, Universidad de Coruña, 2008, págs. 31-52.

⁴⁴ REY CASTELAO, Ofelia, "Producción impresa y promoción eclesiástica en la Galicia de fines del Antiguo Régimen", *Semata. Ciencias Sociales y Humanidades*, nº 10 (1998), págs. 281-319.

⁴⁵ GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes, *El arma de la palabra: los militares españoles y la cultura escrita en el siglo XVIII (1700-1808)*, A Coruña, Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 2002, y la más reciente de PÉREZ HENARES, Antonio y MAZÓN, Diego, *Ilustres soldados... de armas y letras*, Madrid, Dédalo-Altamira, 2005.

⁴⁶ *Novísima recopilación de las leyes de España... mandadas formar por el Señor D. Carlos IV*. Ed. facsímil de la de 1805. Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1976, 6 vols.

⁴⁷ EGUIZABAL, José Eugenio, *Apuntes para una historia de la legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al presente*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1879.

⁴⁸ GARCÍA CUADRADO, Amparo, "Aproximación a los criterios legales en materia de imprenta durante la Edad Moderna en España", *Revista General de Información y Documentación*, 6, 2 (1996), págs. 125-187.

volumen en el que se incluyen, para facilitar su consulta, las leyes y la documentación analizadas⁴⁹.

Del mismo modo, el necesario acercamiento a las fuentes de archivo existentes, sobre todo, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, han sido tratados sucesivamente por José Antonio Martínez Bara, M^a Jesús Álvarez-Coca y la más reciente aportación de Vanesa Benito⁵⁰. Siguen echándose en falta, no obstante, estudios concretos sobre la materialización del libro que repasen el recorrido del texto desde el manuscrito escrito por el autor hasta su transformación en el libro que se conserva en las diferentes bibliotecas, del modo en que sí se ha hecho para nuestro Siglo de Oro⁵¹, con el último libro de Bouza sobre la aprobación de libros en el siglo del Quijote como ejemplo más reciente⁵², pues aunque a grandes rasgos fuera un proceso similar sería interesante ver los cambios producidos y las motivaciones.

Dentro de lo que hemos venido denominando “historia del libro”, la historiografía ha tratado de manera especial la cuestión de la lectura. Los primeros en plantear la cuestión fueron filólogos e historiadores de la literatura, dando a sus investigaciones un perfil sociológico, lo que les llevó a plantear quiénes fueron los lectores de las obras. Desde que en los sesenta se produjeran las primeras aportaciones referidas a la producción escrita del fructífero Siglo de Oro español⁵³, muchos han sido los que se han preocupado por los lectores, en algunos casos partiendo de una perspectiva local,

⁴⁹ REYES, Fermín, *El libro en España y América (siglos XV-XVIII)*, Madrid, Editorial Arco, 2000, 2 vols.

⁵⁰ MARTÍNEZ BARA, José Antonio, “Fuentes para el estudio de la Imprenta en el Archivo Histórico Nacional”, *Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica*, 9 (1988), págs. 207-226; ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M^a Jesús, “La Cámara de Castilla: secretarías de Gracia y Justicia. Problemas archivísticos e investigación histórica” en SCHOLZ, Johannes-Michael (Ed.), *El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt, Klostermann, 1992, págs. 1-32; y, BENITO ORTEGA, Vanesa, “El Consejo de Castilla y el control de las impresiones en el siglo XVIII. La documentación del Archivo Histórico Nacional”, *Cuadernos de Historia Moderna* 36 (2011), págs. 179-193.

⁵¹ AMEZÚA MAYO, Agustín, *Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro*, Madrid, Imprenta de Editorial Magisterio Español, 1946 y ANDRÉS ESCAPA, Pablo, DELGADO PASCUAL, Elena, DOMINGO MALVADI, Arantxa y RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, José Luis, “El original de imprenta” en RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, págs. 29-64.

⁵² BOUZA ALVAREZ, Fernando, *“Dásele licencia y privilegio”. Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro*, Madrid, Akal, 2012.

⁵³ El iniciador y principal impulsor de este tipo de estudios es el francés Roger Chartier, cuyas obras ya más destacadas han sido citadas en las notas 11 y 15, así como en la Bibliografía.

dentro de historias urbanas o regionales⁵⁴, lo que ha permitido descubrir nuevas realidades, como la existencia de un público femenino⁵⁵.

Precisamente, siguiendo una de las tendencias historiográficas más en boga, han aparecido historias sobre la escritura femenina en el siglo XVIII. A las primeras obras de Paloma Fernández Quintanilla, Emilio Palacios y Mónica Bolufer sobre lectura y escritura femenina⁵⁶, les han seguido estudios de caso sobre alguno de los personajes femeninos más destacados del momento, como el de López-Cordón sobre Josefa Amar y Borbón⁵⁷ o el de la propia Mónica Bolufer sobre Inés Joyes⁵⁸.

En resumen, las nuevas tendencias historiográficas sobre el libro se preocupan no sólo de su aspecto material, sino que intentan establecer una tipología de las ediciones atendiendo a sus características formales, pero también se adentran en las relaciones

⁵⁴ LOPEZ, François, *Les livres des Espagnols à l'Époque Moderne*, número monográfico de *Bulletin Hispanique*, XCIX (1997); o GELABERT GONZALEZ, Juan Eloy, "Lectura y escritura en una ciudad provinciana del siglo XVI: Santiago de Compostela", *Bulletin Hispanique*, LXXXIV, 3-4 (1982), págs. 264-290).

⁵⁵ Como se dijo anteriormente, López abrió el camino en el Coloquio de la Casa de Velázquez (nota 33). En cuanto a la mujer, FERNÁNDEZ QUINTANILLA, Paloma, *La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII*, Madrid, Dirección General de Juventud, 1981; IGLESIAS, Carmen (dir.), "La nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones literarios y poéticos" en *Nobleza y sociedad en la España Moderna*, Madrid, Nóbel, 1997, II págs. 179-230, y, más recientemente PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio, *La mujer y las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Laberinto, 2002 y BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, "Memoria de la lectura y escritura de las mujeres del Siglo de Oro", en MORANT, Isabel (Coord.), *Historia de las mujeres en España y América Latina*, Vol. 2, Madrid, Cátedra, 2005, págs. 169-192. Aunque los estudios más completos son los de BOLUFER PERUGA, Mónica, "Espectadoras y lectoras: representaciones e influencia del público femenino en la prensa del siglo XVIII", *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, nº 5 (1995), págs. 23-58; "Escritura femenina y publicación en el siglo XVIII: de la expresión personal a la "República de las Letras"", en SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina, ORTEGA LÓPEZ, Margarita y VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia (Eds.), *Género y ciudadanía: revisiones desde el ámbito privado: XII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid e Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 1999, págs. 197-224; "Pedagogía y moral en el Siglo de las Luces: las escritoras francesas y su recepción en España", *Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante*, nº 20 (2002), págs. 251-292; y, "Mujeres de Letras: Escritoras y lectoras del siglo XVIII", en BALLESTEROS GARCÍA, Rosa María y ESCUDERO GALLEGOS, Carlota (Coord.), *Feminismos en las dos orillas*, Málaga, Universidad de Málaga, 2007, págs. 113-142.

⁵⁶ Citadas en la nota anterior.

⁵⁷ LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria, *Condición femenina y razón ilustrada: Josefa Amar y Borbón*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2005 y LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria, "De escritura femenina y arbitrios políticos: la obra de doña María de Guevara", *Cuadernos de Historia Contemporánea*, N^o 1 extra (2007), dedicado a los profesores Guadalupe Gómez-Ferrer y Antonio Fernández, págs. 151-164, aunque publicó previamente un estudio más general, LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria, "La fortuna de escribir: escritoras en los siglos XVII y XVIII", en MORANT, Isabel, *Historia de las mujeres en España y América Latina*, Madrid, Cátedra, 2005, págs. 193-234.

⁵⁸ BOLUFER PERUGA, Mónica, *La vida y la escritura en el siglo XVIII. Inés Joyes*, Valencia, Universidad de Valencia, 2008.

que se establecen entre autor, editor e impresor. El centro de la investigación, por tanto, se ha trasladado más allá de la crítica textual para incorporar otros elementos que permitan un análisis más completo de la producción escrita. Es dentro de esta línea donde nuestro proyecto tiene sentido. De una historia bibliográfica y descriptiva, se ha dado paso a una historia más amplia que se ramifica hacia aspectos económicos, culturales y sociales.

Aunque quede fuera del estudio que presentamos, no podemos dejar de lado las aportaciones que distintos investigadores han realizado en el campo de la prensa periódica, uno de los subgéneros sobre los que más páginas se han impreso, y cuyos avances contribuyen, en cierta medida, al avance de los estudios culturales y políticos. Con carácter pionero aparece, de nuevo, el trabajo de Luis Miguel Enciso Recio sobre una de las figuras más emblemáticas de la prensa dieciochesca, Nipho, y sobre las dos publicaciones de carácter oficial, *La Gaceta de Madrid* y *El Mercurio*⁵⁹.

En torno a los años setenta continúan las investigaciones de este tipo, con los trabajos de García-Pandaveneses, Guinard y Aguilar Piñal, cuyas aportaciones en este campo han sido también fundamentales⁶⁰. En la década posterior continúa la aparición estudios de caso que completan el panorama general. Ocurre así con el *Semanario de Agricultura y Artes dirigido a párrocos*, sobre el que escribió Fernando Díez González y posteriormente Elisabel Larriba, o con el *El Censor*, analizado por José Miguel Caso González y Philip Deacon⁶¹.

⁵⁹ ENCISO RECIO, Luis Miguel, *Nipho y el periodismo español del siglo XVIII*, Valladolid, Universidad, 1956, y *La Gaceta de Madrid y El Mercurio histórico y político, 1756-1781*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957.

⁶⁰ GARCIA-PANDAVENES, Elsa, *El Censor (1781-1787)*, Barcelona, Labor, 1972, una edición crítica de uno los periódicos más controvertidos del siglo; GUINARD, Paul J., *La Presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d'un genre*, Paris, Centre Recherches Hispaniques/Institut d'Études Hispaniques, 1973; y AGUILAR PIÑAL, Francisco, *La prensa española en siglo XVII. Diarios, revistas y pronósticos*, Madrid, CSIC, 1978 y *Periodismo e Ilustración en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.

⁶¹ DIEZ GONZALEZ, Fernando, *Prensa agraria en la España de la Ilustración: El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980; CASO GONZALEZ, José Miguel, "El Censor, ¿periódico de Carlos III?", en *El Censor*, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 1989, edición facsimil; DEACON, Philip, "El Censor y la crisis de las Luces en España: el Diálogo crítico-político de Joaquín Medrano de Sandoval", *Estudios de Historia Social*, nº 52-53 (1990), págs. 131-149; y LARRIBA, Elisabel, "Contribution du clergé à la rédaction du Semanario de Agricultura y Artes a los Párrocos", *Cahiers du GRIAS*, nº extra 2 (1997), págs. 217-234 y "Un intento de reforma agraria por y

La historia del periodismo siempre ha tenido cabida en los trabajos generales sobre la literatura y la producción escrita. Desde el tercer tomo de la *Historia de la Literatura española* que Alborg comenzó a publicar en 1966 a la *Historia de España* de Menéndez Pidal, que incluye en su volumen 1 del tomo XXXI un apartado específico firmado por Enciso Recio, pasando por la más específica *Historia del periodismo en España* de M^a Dolores Saiz, cuyo primer tomo está dedicado, precisamente, al siglo XVIII⁶². Desde la década de los ochenta a la actualidad el desarrollo de la historia de la prensa periódica ha sido, si cabe, más fructífera que la dedicada a la historia de la prensa en general, destacando entre los numerosos especialistas del tema, por méritos propios, Inmaculada Urzainqui⁶³ y Elisabel Larriba, dos referencias fundamentales⁶⁴.

Todos ellos, junto a los anteriores, son la mejor prueba de que la historiografía española sobre el libro se encuentra en uno de sus mejores momentos, situándose al nivel de las principales corrientes europeas, y todavía con un prometedor futuro. Obviamente, este fenómeno no es particular del caso español, sino que en otros países se han desarrollado estudios similares, siendo Francia la que más ha influido en el devenir de la historiografía española. Siguen existiendo múltiples vías de análisis y el trabajo que queda por hacer sigue necesitando de tiempo y de investigadores capacitados, pero lo hecho hasta el momento es una buena base sobre la que continuar.

para las clases productoras: el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)", *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, n° 23 (1999), págs. 87-118.

⁶² ALBORG, J.L., *Historia de la Literatura española*, Madrid, Gredos, 1966-1980, tomo III; ENCISO, Luis Miguel, "La prensa y la opinión pública", en MENENDEZ PIDAL, Ramón (Dir.) *Historia de España*, Tomo XXXI, Vol. 1, *La época de la Ilustración. El Estado y la cultura (1759-1808)*, Madrid, Espasa Calpe, 1987, págs. 59-128; y, SAIZ, María Dolores, *Historia del periodismo en España. I. Los orígenes. El siglo XVIII*, Madrid, Alianza Editorial, 1983.

⁶³ Una buena síntesis de su obra aparece en el capítulo dedicado a la prensa en la obra colectiva publicada por el CSIC junto con Álvarez Barrientos y François López, URZAINQUI, Inmaculada, "Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, François López e Inmaculada Urzainqui, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 125-216.

⁶⁴ También es destacable la publicación de números especiales en revistas científicas, como el n° 52-53 de *Estudios de Historia Social*, que publicaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que editó un monográfico en 1990 bajo el título "Periodismo e Ilustración en España".

En su artículo sobre el estado de la historia del libro en España, aparecido en 1984, François López⁶⁵ afirmaba quedaba casi todo por hacer, refiriéndose al siglo XVIII. Hoy, tras más de 25 años, los estudios han aumentado y evolucionado, pero siguen quedando grandes lagunas que cubrir antes de que se pueda afirmar que la historia del libro ha sido abordada desde todos sus ángulos.

La censura en la España ilustrada

Si centramos más el foco y nos fijamos en la censura como problemática específica, el panorama no es tan alentador. Para empezar, habría que destacar que todavía hoy no existe ningún estudio global de todos los regímenes, modalidades y aplicaciones de la censura en Europa. Mucho menos para el conjunto de España. Ahora bien, si es cierto que no existen trabajos integrales sobre la censura, sí los hay de manera parcial sobre determinados aspectos o periodos.

Poco se ha escrito sobre lo que hemos venido a denominar censura gubernativa. Dejando a un lado el temprano artículo de Serrano Sanz, que sirvió para apuntar las vías por las que debía transcurrir la investigación⁶⁶, el primer estudio completo sobre la censura ejercida desde los aparatos gubernativos es la ya antigua tesis doctoral de Antonio Rumeu de Armas, *Historia de la censura literaria gubernativa en España*⁶⁷, publicada en 1940, que seguía la línea que González Palencia había abierto pocos años antes tratando exclusivamente del siglo XIX⁶⁸. En la obra de Rumeu se exponen los hechos esenciales de todo lo que toca a la organización de la censura en su vertiente civil, explicando el importante papel que jugaba el Consejo de Castilla, así como las licencias en materia de Estado y el procedimiento por el que se efectuaba la censura. Esta primera obra, desde su perspectiva conservadora, ensalza de manera consciente los siglos XVI y XVII, para rebajar la importancia del siglo.

⁶⁵ LOPEZ, François, "Estado actual de la historia del libro en España", *Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante*, 4 (1984), págs. 9-22.

⁶⁶ SERRANO SANZ, Manuel, "El Consejo de Castilla y la censura en el siglo XVIII", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV-XVI (1906), págs. 28-46, 242-259, 387-402; y, XVII-XVIII (1907), págs. 108-116 y 206-218.

⁶⁷ RUMEU DE ARMAS, Antonio, *Historia de la censura literaria gubernativa de España*, Madrid, Aguilar, 1940.

⁶⁸ GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, *Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España, 1800-1833*, Madrid, Tipografía de Archivos, 1934.

Desde un enfoque distinto, propio de la década de los ochenta, están los trabajos de Lucienne Domergue, fundamentalmente *Censure et Lumières dan l'Espagne de Charles III*⁶⁹, que de manera más detallada ha completado, en cierta medida, la obra de Rumeu y que tendrá su continuación, ampliando el espectro al reinado de Carlos IV, en *Le livre en Espagne au temps de la Révolution française*, de 1984, y *La censure des livres en Espagne à la fin de l'Ancien Régimen*, que sale de la imprenta en 1996⁷⁰.

Aunque no sea una obra sobre censura, si que constituye un instrumento fundamental para su estudio la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII* de Francisco Aguilar Piñal⁷¹, que ya hemos mencionado, porque si bien no describe el mecanismo de censura, sí que incluye, junto a las noticias biográficas y bibliográficas de la población de autores, numerosas referencias a las censuras, fueran favorables o desfavorables, lo que facilita su consulta.

En el monográfico coordinado por Manuel Abellán en 1987 en la revista *Diálogos Hispánicos* sobre *Censura y literaturas peninsulares* se reflexiona, precisamente, sobre el interés que los especialistas sobre la censura han manifestado siempre por la ingerencia inquisitorial en la represión literaria, reclamando nuevos estudios sobre el control ideológico que el poder ejerció sobre la literatura. Aunque el número está dedicado en su mayor parte a la censura en los años contemporáneos, la llamada de atención parece que fue atendida⁷².

Parece que la primera piedra en la renovación y ampliación historiográfica de la censura corresponde, con el cambio de siglo, a la ya mencionada recopilación legislativa llevada a cabo por Fermín de los Reyes, que con sus transcripciones de las

⁶⁹ DOMERGUE, Lucienne, *Censure et lumières dans l'Espagne de Charles III*, Paris, Editions du Centre National de la Recherche Scientifiques, 1982.

⁷⁰ DOMERGUE, Lucienne, *Le livre en Espagne au temps de la Révolution française*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984 ; y, *La censure des livres en Espagne à la fin de l'Ancien Régimen*, Madrid, Casa de Velázquez, 1996.

⁷¹ AGUILAR PIÑAL, Francisco, *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981-2001. 10 tomos.

⁷² ABELLAN, "Fenómeno censoria y represión literaria", en ABELLÁN, Manuel L., *Diálogos Hispánicos. N° 5. Censura y literaturas peninsulares*. Editorial Rodopi, Ámsterdam, 1987, p. 5-26.

disposiciones y de los documentos más destacados se ha convertido desde el año de su publicación hasta nuestros días en referente obligado⁷³. Siguiendo esta nueva tendencia encontramos la obra de Javier García Martín⁷⁴, que hace un repaso al Juzgado de Imprentas desde una perspectiva judicial, novedad importante, pues no se había concebido hasta entonces la vertiente judicial del proceso de aprobación de manuscritos, prestando, también, especial importancia al concepto de utilidad pública como común denominador de los siglos modernos. Un elemento común en las obras de Reyes y García Martín es que tratan de manera global la Edad Moderna, lo que permite visualizar continuidades y rupturas, pero con el inconveniente de que impide profundizar en los acontecimientos propios del siglo XVIII.

Precisamente para cubrir esas carencias, en los últimos años han ido apareciendo importantes trabajos centrados en el desarrollo de la censura durante la Ilustración en lo que es un claro impulso a la investigación sobre el tema. Posiblemente el más innovador en su planteamiento sea el de Conde Naranjo para la segunda mitad del siglo, que lleva a cabo un interesante y exhaustivo análisis de la relación entre política y mecanismos de censura⁷⁵. También en esta línea encaja la obra de Alvarado Planas publicada en 2007, aunque, de nuevo, con un marco cronológico más amplio⁷⁶. Sin duda, son los estudios generales los que más éxito han tenido, como lo es el dossier de *Cultura escrita & sociedad* dedicado a la censura en la Edad Moderna, bajo la coordinación de Manuel Peña Díaz, especialista en la censura de la Alta Edad Moderna, y con alguna aportación interesante para el siglo XVIII⁷⁷.

Más que grandes monografías, los estudios de la censura gubernativa dieciochesca, desde sus orígenes, han encontrado acomodo en forma de artículos de revistas científicas o dentro de obras colectivas, especialmente centrándose en algún personaje

⁷³ REYES, *op. cit.* (nota 49).

⁷⁴ GARCÍA MARTÍN, Javier, *El juzgado de imprentas y la utilidad pública. Cuerpo y alma de una Monarquía vicarial*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003.

⁷⁵ CONDE NARANJO, Esteban, *El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España ilustrada (1750-1834)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

⁷⁶ ALVARADO PLANAS, Javier, *Justicia, libertad y censura en la Edad Moderna*, Madrid, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, 2007.

⁷⁷ PEÑA DÍAZ, Manuel (Coord.), "La censura en la Edad Moderna", dossier de *Cultura escrita & sociedad*, 7 (2008).

destacado o un género concreto. En este sentido las aportaciones más interesantes son las ya antiguas de González Palencia sobre el Juez Juan Curiel, de los años cuarenta⁷⁸, las de Deacon, Aguilar Piñal, Álvarez Miranda y Domergue sobre la labor censora de Cadalso y Moratín⁷⁹, la de Ebersole sobre el censor de comedias Santos Díez González⁸⁰ o las más recientes de Eva Velasco sobre la Real Academia de la Historia⁸¹, M^a Jesús García Garrosa sobre las traducciones de novelas extranjeras⁸², Javier Iturbe para Navarra⁸³, Manuel Llanas para Cataluña⁸⁴ y Elena de Lorenzo sobre Jovellanos⁸⁵. Todos estos trabajos constituyen un loable esfuerzo por romper las líneas tradicionales de investigación y avanzar en nuevas direcciones.

Frente al relativo vacío existente en materia de censura gubernativa, la producción sobre el papel de la Iglesia en el mecanismo censor desborda todas las expectativas, sobre todo en cuanto al papel que desempeñó la Inquisición y a su relación con los

⁷⁸ GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, *El sevillano don Juan de Curiel, Juez de Imprentas*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1945.

⁷⁹ Sin duda, las dos figuras individuales que más estudios han tenido: DEACON, Philip, "Cadalso, censor del Consejo de Castilla", *Revista de Literatura*, 38:75/76 (julio-diciembre 1970), págs. 167-174; AGUILAR PIÑAL, Francisco, "Moratín y Cadalso", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 135-150; ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro, "Nicolás Fernández de Moratín en la Sociedad Económica Matritense", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 221-246; DOMERGUE, Lucienne, "Nicolás de Moratín censor", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 247-260; y *Tres calas en la censura dieciochesca: (Cadalso, Rousseau, prensa periódica)*, Toulouse, Institut d'Études Hispaniques et Hispano-Américaines, 1981.

⁸⁰ Más que un estudio biográfico o profesional es un estudio introductorio al catálogo de obras censuradas por él. EBERSOLE, Alva V., *Santos Díez González: censor*, Valencia, Albatros Hispanofilia, 1982.

⁸¹ En concreto su artículo VELASCO MORENO, Eva, "Fundamentos históricos y principios ideológicos del proyecto de reforma del sistema de censura previa en 1770", *Cuadernos dieciochistas*, 4 (2003), Universidad de Salamanca, págs. 123-134; aunque también trata la actividad censora de dicha Academia en su tesis doctoral, publicada en el año 2000: *La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una institución de sociabilidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, 2000.

⁸² GARCÍA GARROSA, María Jesús, "Estorbos a la Ilustración: la novela extranjera ante la censura", en ASTIGARRAGA, Jesús, LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria y URKÍA, José María, *Ilustración, ilustraciones. Vol. I*, San Sebastián, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Instituto Internacional Xavier María de Munibe de Estudios del Siglo XVIII, 2009, págs. 369-388.

⁸³ Navarra: ITURBIDE DÍAZ, Javier, *Escribir e imprimir: el libro en el Reino de Navarra en el siglo XVIII*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007.

⁸⁴ LLANAS I PONT, Manuel, *L'edició a Catalunya: segles XV a XVII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2002 y, sobre todo, *L'edició a Catalunya: el segle XVIII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2003

⁸⁵ De nuevo un estudio introductorio al tomo de sus Obras Completas editado por la Universidad de Oviedo a través de la Cátedra Feijoo, en el que se recogen la mayor parte de censuras firmadas por el ilustrado asturiano: JOVELLANOS, Gaspar Melchor, *Obras completas. Tomo XII. Escritos sobre literatura*, Edición crítica, prólogo y notas de Elena de Lorenzo Álvarez, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Ayuntamiento de Gijón y KRK Ediciones, 2009.

autores y las obras que debían controlar. Aunque parte de la historiografía hispana ha sabido ver el incremento de la censura previa gubernativa, exaltando los gobiernos ilustrados, especialmente el de Carlos III⁸⁶, la censura religiosa eclipsa, en general, a la censura civil. Y, dentro de la religiosa, el volumen de obras dedicadas a la Inquisición desborda las expectativas y ensombrece las restantes intervenciones que los hombres del clero tenían respecto a la censura. Para España no existe una obra similar a la de Rotondo para Italia que contemple de forma completa la censura religiosa.⁸⁷ Es por ello que resumir en unas pocas líneas la ingente cantidad de obras escritas sobre el tema es una tarea más ardua de lo que parece. Sin embargo, si reducimos la escala al siglo XVIII, el resultado de obras encontradas es notablemente inferior. Las primeras aportaciones en este campo son las de Sierra Corella en los cuarenta y Pinta Llorente⁸⁸ en la década posterior, pero sin duda la obra de referencia es el libro de Marcelin Defourneaux, *L'Inquisition espagnole et les livres français au XVIIIe siècle*, impresa en 1963, que, por ejemplo, reproduce por materias la lista de todas las obras francesas que figuran en los distintos *Índices inquisitoriales*⁸⁹.

De la década de los ochenta cabe destacar la obra de Antonio Márquez⁹⁰, que describe de manera somera la relación entre la literatura y la Inquisición, deteniéndose en los procesos más importantes, durante toda la Edad Moderna. Teniendo en cuenta la cronología, la aportación es substancial, aunque al tratar casos especiales por sus causas y características, sus conclusiones no deben ser extrapoladas al conjunto de la producción escrita. A este inconveniente, habría que añadir el escaso espacio dedicado al siglo XVIII a pesar de lo ambicioso del título de su obra. En los mismos años Pinto Crespo publica una serie de artículos sobre las bases teóricas, los sistemas de control y

⁸⁶ Sobre este punto se pueden consultar, por ejemplo las obras: GARCÍA MARTÍN, *op. cit.* (nota 74); y LÓPEZ-VIDRIERO, 1994, *op. cit.* (nota 40).

⁸⁷ ROTOND, Antonio, "La censura eclesiástica e la cultura", en *Storia d'Italia*, Torino, Einaudi, 1973, págs. 1397-1492.

⁸⁸ SIERRA CORELLA, Antonio, *La Censura de libros y papeles en España y los Índices y catálogos españoles de libros prohibidos*, Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1947; y PINTA LLORENTE, Miguel, *La Inquisición española y los problemas de la cultura y la intolerancia*, 2 vol., 1953 y 1958.

⁸⁹ DEFOURNEAUX, Marcelin, *L'Inquisition espagnole et les livres français au XVIIIe siècle*, París, Presses Universitaires de France, 1963. Existe una versión española de J. Ignacio Tellechea Idígoras: DEFOURNEAUX, Marcelin, *Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII*, Madrid, Taurus, 1973, donde se incluye también un análisis del mecanismo de censura inquisitorial en España.

⁹⁰ MÁRQUEZ, Antonio, *Literatura e Inquisición en España 1478/1834*, Madrid, Taurus, 1980.

mecanismos de acción de la censura inquisitorial⁹¹ y Vilches Díaz sobre los autores censurados⁹².

La década de los noventa, que para la historia del libro había supuesto un nuevo impulso, no lo es tanto para los estudios sobre censura inquisitorial, que siguen las pautas marcadas en los años anteriores. Si para Francia e Inglaterra aparecen obras como las de Myers y Harris o Netz⁹³, en España se mantendrá una producción sostenida con obras como las de Larriba sobre los inquisidores, Kamen sobre el impacto que la censura inquisitorial tenía en la producción impresa y Roldán Pérez sobre la relación de la censura con el teatro⁹⁴, que anticipan las aportaciones que pasados el 2000 harán Torquemada sobre los conflictos de los oficiales inquisitoriales con los reales en las aduanas⁹⁵; Alcalá Galve sobre literatura y ciencia⁹⁶; los estudios llevados a cabo por Guibovich Pérez para la censura en el Perú colonial⁹⁷ y por González Fernández para Galicia⁹⁸.

Hemos dejado, conscientemente, de lado los estudios que, aún tratando sobre Inquisición, no estaban directamente relacionados con su papel en la censura de

⁹¹ PINTO CRESPO, Virgilio, "Control ideológico: censura e índices de libros prohibidos" en PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín y Bartolomé Escandell (comps.), *Historia de la Inquisición en España y América*, t. 1, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, págs. 648-661; "Censura: refuerzo de criterios y del aparato de control", en PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín y Bartolomé Escandell (comps.), *Historia de la Inquisición en España y América*, Tomo 1, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984, págs. 763-767; "La censura: sistemas de control e instrumentos de acción", en ALCALÁ, Ángel (ed.), *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984, págs. 269-287; y, "El aparato de control censorio y las corrientes doctrinales", *Hispania Sacra*, XXXVI, Madrid, 1984, págs. 9-41.

⁹² VILCHES DÍAZ, Alfredo, *Autores y anónimos españoles en los índices inquisitoriales*, Madrid, Universidad Complutense, 1986.

⁹³ MYERS, Robin y HARRIES, Michael, *Censorship and control of print in England and France 1600-1900*, St. Paul's Bibliographies, Winchester, 1992; y, NETZ, Robert, *Histoire de la censure dans l'édition*, Presses Universitaires de France, París, 1997.

⁹⁴ LARRIBA, Elisabel, "Inquisidores lectores de prensa ilustrada", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 817-829; KAMEN, Henry, "Censura y libertad: El impacto de la Inquisición sobre la cultura española", *Revista de Inquisición*, nº 7 (1998), págs. 109-117; y ROLDAN PEREZ, Antonio, "Censura civil y censura inquisitorial en el teatro del siglo XVIII", *Revista de Inquisición*, nº 7 (1998), págs. 119-136.

⁹⁵ TORQUEMADA SÁNCHEZ, María Jesús, "Controles aduaneros en el siglo XVIII: conflictos entre la justicia regia y la inquisitorial", *Revista de Inquisición*, 10 (2001), págs. 57-63.

⁹⁶ ALCALÁ GALVE, Ángel, *Literatura y ciencia ante la Inquisición española*, Madrid, Laberinto, 2001.

⁹⁷ GUIBOVICH PEREZ, Pedro M., *Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754*, Sevilla, CSIC, Diputación de Sevilla y Universidad de Sevilla, 2003.

⁹⁸ GONZALEZ FERNANDEZ, Martín, *El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia (1700-1808)*, Vigo, Nigratrea, 2008.

impresos, pero no podemos obviar la existencia de estudios que desde una perspectiva más jurídica han estudiado el mecanismo de intervención inquisitorial. La obra de Tomás y Valiente de 1964⁹⁹ y el grupo de investigación dirigido por Gacto Fernández son los casos más destacados¹⁰⁰.

Como ha quedado reflejado, a pesar del impulso recibido en los últimos años, contagiado por el interés que el tema ha despertado no sólo en nuestro país, sino también en otros países de nuestro entorno¹⁰¹, quedan todavía muchas páginas en blanco que escribir sobre la censura en la España ilustrada que vengan a completar la visión parcial que se tiene sobre este aspecto de la historia cultural del país, que es, al mismo tiempo, parte de su historia política.

1.4. Teoría, método y fuentes

Una buena investigación histórica debe sustentarse en una sólida base teórica y un serio trabajo empírico con las fuentes. De ahí, que parte fundamental de nuestro trabajo haya consistido en establecer los presupuestos teóricos de los que partíamos, antes de abordar la información recogida en las fuentes. A este respecto cabe señalar que los resultados que se presentan son fruto del trabajo consensuado en el seno del proyecto de investigación, donde de manera conjunta se determinaron los principios teóricos y la forma de tratar la documentación, así como el aprendizaje y manejo de los diferentes e imprescindibles instrumentos de análisis empleados¹⁰².

⁹⁹ TOMÁS Y VALIENTE, Tomás, *Expedientes de censura de libros jurídicos por la Inquisición a finales del siglo XVIII y principios del XIX*, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964.

¹⁰⁰ Estos trabajos colectivos tienen como obra más destacada GACTO FERNÁNDEZ, Enrique (ed.), *Inquisición y censura: El acoso a la inteligencia en España*, Madrid, Dykinson, 2006.

¹⁰¹ Basta con mirar no sólo los trabajos de los historiadores franceses, sino la fecunda producción italiana sobre el tema o las importantes aportaciones de algunos historiadores portugueses. Ludovica Braida, Sandro Landi, Maria Consiglia Napoli, Patrizia Delpiano, Mario Infelise o Edoardo Tortarolo para Italia y Graça Almeida, Laureano Carreira para el teatro, María Teresa Martins, y más recientemente Luiz Carlos Villalta y Márcia Abreu para Portugal son buena prueba de la pujanza de esta corriente historiográfica en los últimos años. Sus obras pueden consultarse en la Bibliografía de la presente tesis.

¹⁰² El grupo de investigación, co-dirigido por los profesores M^a Victoria López-Cordón y Jean Pierre Dedieu, cuenta con profesionales españoles y franceses, aunque el papel más destacado en estos

1.4.1. Los actores del libro

Como anticipábamos, consideramos el libro como un objeto material, pero ante todo es el resultado de la conjunción de acciones realizadas por varias personas, en las que confluyen diferentes realidades, y la intervención de cada una de ellas es lo que da forma a esa materialidad. Para comprender la importancia de la censura y de quienes la ejercen en la gestación de un libro, debemos considerar que la acción de cada uno de los actores es imprescindible para su materialización. Y esa interrelación, que excede a la propia realidad del libro, es la que configura unos espacios de sociabilidad entre los diferentes actores, configurando, consciente o inconscientemente, un conjunto de redes sociales cuya dimensión excede el ámbito socio-cultural para jugar, y eso es lo que más nos interesa, un papel político.

Autores, editores y traductores

La primera persona necesaria, aunque parezca una obviedad, es el autor. El término en sí es uno de los conceptos más debatidos entre los historiadores y filólogos cercanos a la historia cultural. El debate, abierto por Foucault en 1969, y que recogieron en España Álvarez Barrientos y Álvarez de Miranda, no ha sido todavía concluido¹⁰³. Por ello, hemos optado por establecer subcategorías que nos permitan diferenciar a los actores que participan en la elaboración de un texto en función de las actividades que realizan, formando parte todos de una nueva categoría que hemos denominado "Responsables", ya que sean el autor, el traductor o el editor de la misma, son quienes solicitan la licencia de impresión del texto que se va a dar a las prensas. Todos ellos, incluyendo otros términos que aparecen en la documentación, como compilador,

aspectos ha correspondido al grupo de la Universidad Complutense que estudia la acción cultural de la elite ilustrada, destacando a mi compañera Alba de la Cruz y sus trabajos sobre la imprenta.

¹⁰³ FOUCAULT, Michel, "Qu'est-ce qu'un auteur?", *Bulletin de la Société française de Philosophie*, LXIV (1969), págs. 73-104, reeditado en DEFERT, Daniel y EWALD, François (Eds.), *Dits et écrits 1954-1988. Tome I, 1954-1969*, París, Gallimard, 1994, págs. 789-821. Y para España, ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, "El hombre de letras español en el siglo XVIII", en *Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración*, Tomo III, Educación y pensamiento, págs. 415-426; ÁLVAREZ DE MIRANDA, *op. cit.* (nota 31); y, ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII: apóstoles y arribistas*, Castalia, Madrid, 2006.

corrector, comentarista, etc., son los “actores principales” de la obra, pues modifican el texto.

En cualquier caso, ante la necesidad de uniformar la metodología, se decidió distinguir entre cada uno de los “responsables” de una obra en función de su actividad concreta realizada en cada edición. Así, consideramos “responsable-autor” a los que crean el texto, bien de una manera totalmente original o bien resumiendo, adaptando, corrigiendo y/o ampliando un texto ya existente. En otros casos, además del autor, encontramos otras figuras, como el “responsable-editor”, entendiendo como tales los que, en principio, sin modificar el texto, se hacen responsables de una edición, y que en muchas ocasiones pueden aparecer tras la fórmula “*da a luz...*” que figura en muchas de las portadas¹⁰⁴.

El tercer caso es el de las traducciones. Lo primero que debemos considerar es que pasar un texto de un idioma a otro siempre supone alterar, aunque sea mínimamente, el contenido. Expresiones que sólo se dan en un idioma, juegos de palabras, terminología técnica... son los escollos a los que se enfrenta un traductor. Si hoy en día sigue siendo difícil la traducción literal, qué decir del siglo XVIII, donde ya de por sí no existía esa necesidad de mantenerse totalmente fiel al texto original.

Toda obra tiene un “responsable”. Editor, traductor, y demás términos afines, se engloban dentro de una categoría superior, la de autor. Son autores porque, remitiéndonos al debate sobre el término, todos ellos publican¹⁰⁵. Su denominación concreta varía en función de las relaciones que establecen entre ellos y de la acción que realizan en cada momento sobre el texto.

Como ya apuntara Chartier, sólo a finales del siglo XVIII, y para el caso de Francia, se podrían contabilizar como máximo una centena de casos de escritores que hoy

¹⁰⁴ Debemos ser cautos en la interpretación de las expresiones “da a luz” o “saca a luz” pues en muchas ocasiones hace referencia meramente al financiero de la obra que no necesariamente tiene por qué actuar también como editor.

¹⁰⁵ Debe señalarse que no estamos considerando el formato ni la extensión de las obras para determinar si alguien es autor o no. Consideramos de igual manera a quien escribe un pronóstico de dos folios que una obra de quinientas páginas. Lo importante es la acción de escribir.

denominaríamos profesionales. El resto, a los que podríamos denominar “escribientes”, lo eran sobre las materias en las que ejercían como profesionales. Dicho de otra manera, no todos los hombres de letras del siglo XVIII eran literatos, ni escribían los textos con la misma voluntad. No podemos olvidar que la escritura, todavía en este momento, es considerada como algo práctico. Exceptuando la alta nobleza, en la que sí podía existir un interés no profesional por las letras, la alfabetización en la Edad Moderna se concibe como una herramienta más, necesaria en determinadas profesiones. Escriban para mayor gloria de las letras o para una aplicación práctica de su profesión, se dediquen al gran público o sólo a los colectivos afines a su trabajo, el hecho es que todos escriben, y por ello son autores.

Censores

Un paso previo, imprescindible según la legislación del momento, como veremos en el siguiente capítulo, es la emisión de aprobaciones sobre el texto presentado. El número y la identidad de quienes debían emitirla variaban según la persona que lo presentase. Todo ello estaba regulado por ley, pero creaba unas relaciones nuevas y no tan evidentes.

Para empezar, es una información que no se puede recoger de las portadas. En ellas lo que sí puede aparecer es una fórmula del tipo “*Con licencias*” o “*Con las licencias necesarias*”, que nos apuntan la existencia de unos nuevos actores, los censores y aprobantes, si bien para obtener estos datos habría que adentrarse en el libro y buscar, cuando los hay, los paratextos. El principal inconveniente es que, en el reinado de Carlos III, se prohibirá expresamente la impresión de las aprobaciones y censuras con el texto original, de manera que únicamente encontraremos estas referencias en la documentación de archivo que se conserva¹⁰⁶.

En nuestro trabajo, dada la complejidad que veremos que presenta este proceso administrativo, se han simplificado el tipo de actores que participan en dos categorías, determinadas por la opinión que vierten sobre la obra que examinan: censor positivo (al que también se puede denominar autor de aprobación) y censor negativo. Ellos,

¹⁰⁶ Para ver los principales fondos con censuras consultar la Bibliografía de la presente tesis.

junto a los responsables, a lo que llamaremos con frecuencia “autores”, son los elementos centrales de este estudio, cuyas redes sociales y actividad profesional intentaremos explicar.

Los otros actores del libro

Pero para conseguir la impresión de una obra era necesaria la confluencia de otro conjunto de actores, que si bien no serán protagonistas de nuestro trabajo, deben ser tenidos en cuenta en un estudio sobre la producción impresa. El más evidente es el papel del impresor, del que se tiene una visión quizás demasiado simplificada¹⁰⁷. Pero no se pueden dejar de lado otras menos evidentes en la documentación como el de los financieros de la obra, sin cuya conjunción muchas empresas editoriales no se habrían podido afrontar¹⁰⁸, y los “ordenantes”, como denominamos a quienes, sin correr con los gastos de impresión, piden a un autor la realización de una obra. Ésta es, quizás, la categoría más difícil de distinguir. Normalmente más que una persona a título personal, suele ser una institución, bien de carácter religioso, bien de carácter político-administrativo, como los claustros universitarios, los cabildos, determinados conventos, parroquias o cofradías, corporaciones municipales o gremios, por citar sólo los más frecuentes.

Aún más alejado de nuestro estudio estarían los actores más mecánicos del proceso (cajistas, componedores, correctores, oficiales de imprenta...), así como los grabadores y dibujantes, cuya labor es, en algunos casos, más valorada que la de los propios autores del texto que acompañan por la calidad de su trabajo o la fama que les acompaña.

Finalmente, estarían los *consumidores de letras*, el público lector. El libro existe porque hay alguien que lo quiere, lo tiene o lo lee. Son los *consumidores de letras*, importantes

¹⁰⁷ Su identidad suele revelarse en los pies de imprentas de las portadas. Las redes que forman autores e impresores están siendo estudiadas, siguiendo los principios y métodos aquí explicados, por mi compañera de proyecto, Alba de la Cruz, y que expondrá en su tesis doctoral.

¹⁰⁸ Suelen aparecer mencionados con figuras como “saca a luz” o “da a luz”, aunque la más evidente es la de “a expensas”, que utiliza con frecuencia, por ejemplo, la Compañía de Impresores y Libreros del Reino con las obras que patrocina.

actores también en el sentido de que, directa o indirectamente, impulsan el proceso de creación literaria y su posterior materialización.

Un libro es un producto que está en el mercado, y como tal se vende. Los libreros y los impresores, al fin y al cabo, son profesiones que viven de ello. Esto no quiere decir que haya que tratar al libro como un producto más, puesto que ha quedado evidenciado que es un mundo más complejo, con una entidad propia y característica que no poseen otras mercancías. Sin embargo, sí que debemos contemplarlo también en esta vertiente más económica e incluir, en los estudios sobre su producción, el peso que la demanda por parte de los consumidores tiene en la impresión de las obras, especialmente a través de las relaciones que establecen, en ocasiones, con impresores y libreros a los que solicitan determinados ejemplares agotados en el mercado.

Su definición resultaría excesivamente compleja, porque tampoco responden a una categoría existente. No son conscientes de pertenecer a un grupo, no lo constituyen. Hablamos de lectores, pero en un concepto amplio del término, como cualquier persona que, por su nivel de alfabetización y/o cultura, y esto es otro punto importante, son capaces de participar en un texto. En base a esto, podemos establecer, de manera orientativa, diferentes categorías de *consumidores de letras*, pues este factor será determinante, por ejemplo, para fijar el formato con que va a ponerse en circulación. Un folleto de pequeño tamaño no está pensando para ser conservado en una biblioteca, sino para circular de mano en mano, del mismo modo que un gran volumen no está pensado para ser vendido de manera ambulante. El público ya está funcionando como actor del libro al influir en este aspecto.

Por un lado, están los lectores desde el punto de vista más eruditos, que no sólo descifran los códigos escritos correctamente sino comprenden el significado de contenidos abstractos. Este grupo suele ser, además, el que mayor poder adquisitivo tiene y al que, mayoritariamente, van dirigidas las obras más voluminosas y costosas. En suma, mantienen una relación fluida y habitual con los libros. En el Coloquio franco-español sobre *Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Regime*, organizado en noviembre de 1980 por la Casa de Velázquez, el hispanista francés

François Lopez planteó un tema de indudable relieve para el siglo XVIII: el de la cultura de los iletrados. Lopez consideraba que no puede negarse la trascendencia del acceso de los iletrados a la cultura e introducía una distinción básica entre los lectores y los "*lisants*" (leyentes). Los *lisants* serían aquellos que siendo capaces de firmar, en el sentido más primario de la acción, pueden descifrar con una limitada capacidad el texto que se lee. Es decir, consumidores de literatura considerada "menor", en la que podemos incluir rezos, cartillas, pronósticos, pequeñas obras de carácter devoto y pliegos de cordel.

Otra categoría, aunque más atípica, es la de los "oyentes". La existencia de lecturas en voz alta está probada para los siglos modernos, y aunque es cierto que el XVIII la frecuencia disminuye respecto a los siglos anteriores, al igual que ocurre con la circulación de manuscritos, no llega a desaparecer. Destaca en estos años la lectura colectiva en las tertulias de sociedades y academias o, en el caso de lecturas de carácter religioso, en conventos y monasterios. Estas prácticas también promueven la producción de libros pues los autores también son conscientes de ellas. Ocurre algo similar con los espectadores de teatro.

Un grupo que estaría dentro de esta categoría, aunque con alguna pequeña matización es el del público que asiste a sermones, discursos y demás arengas de toda índole. Ellos son partícipes del texto antes de que sea escrito. Aunque la publicación es un hecho posterior, la interacción previa sin duda influye en la configuración final.

El poder es consciente de que si inunda el mercado con obras dirigidas, satisfaciendo la demanda, la influencia de elementos perniciosos se reduce considerablemente. Igualmente es consciente de que esta inundación debe hacerse en todos los niveles, para dar respuesta a todas las categorías de consumidores existentes, y en todos los formatos. Es por ello que la censura previa adquiere para ellos una importancia que no es explicable sin comprender el alcance que podían tener las palabras impresas.

1.4.2. Bases teóricas: prosopografía y teoría de redes

Si el objeto de estudio son las personas, queda justificado que el método prosopográfico sea el principio teórico fundamental de nuestra investigación. Describir el grupo de personas que forman la población de autores dentro de la selección realizada es uno de los principales objetivos. A partir de este estudio pretendemos analizar las relaciones internas que le dan forma. Estudiamos individualmente los componentes de un todo y con los datos acumulados extraemos las conclusiones generales.

Tradicionalmente, los estudios de historia social que usaban como método la prosopografía tendían a desglosar la información que se obtenía de cada individuo tras separarlos del conjunto, para poder gestionarla en una serie de categorías que se habían creado previamente para este fin. El problema de utilizar el método bajo estos criterios es que las conclusiones extraídas no permitían más que la construcción de un modelo que se consideraba representativo de la totalidad, sin tener en cuenta si se parecía o no a alguno de los miembros del colectivo real. Se construía a partir de medias porcentuales, con la distorsión que ello podía llegar a producir.

Las limitaciones de este método así aplicado son fácilmente perceptibles, especialmente en el caso del carácter cerrado de las cuestiones previas enunciadas a la documentación. Plantear, antes de iniciar la investigación, cuáles van a ser los factores determinantes de la misma equivale a formular las conclusiones antes de recoger la información y, por tanto, a limitar las posibles respuestas¹⁰⁹.

En oposición al antiguo método, la nueva prosopografía considera que el significado de un dato depende del sistema en que se incluye, considerando por sistema al conjunto de elementos interrelacionados en el que la modificación de uno de ellos afecta a los restantes. Por ello, lo importante no es el dato en sí, sino el sistema. El dato es el

¹⁰⁹ DEDIEU, Jean-Pierre, "Un instrumento para la historia social: la base de datos de Ozanam", *Cuadernos de Historia Moderna*, Universidad Complutense de Madrid, 24 (2000), págs. 186-187.

arranque del análisis y su acumulación no será lo que construya las conclusiones, como se hacía con el método tradicional, sino que ésa será la labor del historiador.

La ventaja de no etiquetar un dato de manera unívoca, es que la información no se diluye ni perdemos la multiplicidad de sus caras. De ahí que sea más útil descomponer el dato y registrar la información individualmente, aunque teniendo en cuenta el contexto que estemos analizando, según el cual podrá ser relevante uno u otro aspecto. Dado que no podemos conocer *a priori* cuáles son los elementos que hay que contemplar para analizar las cadenas de relaciones que unen las distintas dimensiones de los acontecimientos, pues desconocemos las reglas por las que se rigen, debemos trabajar con sistemas de información abiertos que admitan todo tipo de datos y que se adapten a la evolución de la hipótesis de trabajo según se avanza en la investigación. Esto no significa que la recogida de datos sea desordenada. No seguir una pauta podría hacernos perder tiempo tratando datos que resultarían irrelevantes para la investigación. Lo que nos indican estas cuestiones es que el sistema debe ser de carácter abierto y flexible, a fin de que pueda adaptarse a la tipología de los datos que encontramos en la documentación.

Desde otro ángulo, los estudios sociológicos más recientes están optando por unas investigaciones más pragmáticas que críticas, evitando, en la medida de lo posible, las valoraciones y limitándose, como hacen los historiadores sociales, a describir los procesos que desarrollaron los actores. El principal dilema con el que se encuentran es la existencia de distintas esferas en las que se integra cada individuo en función de unas características concretas. El análisis de cada esfera nos dibujará una situación diferente, aún cuando los protagonistas sean los mismos.

Cada persona pertenece, de manera simultánea, a varios mundos, y en todos ellos intentará alcanzar el nivel máximo. Todo lo que un individuo hace en una de esas esferas repercute en las otras, pues entre ellas existen unos nexos de comunicación que son aprovechados por el sujeto. El análisis de cada uno debe contemplar, por tanto, su actuación en todos los mundos en los que se inserta, porque la acción en uno

está condicionada por su situación en los restantes, lo que aumenta la complejidad del estudio.

Dado que las personas no viven aisladas, sino que pertenecen a una sociedad, no podemos considerar la reconstrucción biológica de los individuos tomando sólo sus experiencias particulares. Se necesita llevar a cabo una contextualización de todas las redes en las que se encuentra inserto, pues en ellas encuentra los recursos que precisa para su desarrollo a todos los niveles. Estas redes se pueden descomponer en series de binomios que unen a los individuos de dos en dos y que no son independientes, sino que forman parte de un sistema en el que cada elemento repercute en el otro. Así, las relaciones entre dos individuos de una red están condicionadas por las relaciones que cada uno de ellos tiene con otros individuos, y así sucesivamente.

Las relaciones binomiales que tienen características similares se pueden agrupar en subredes dentro de la red global, manteniendo la influencia de las relaciones que quedan fuera de ésta. Para manejar con eficacia las redes es necesario contemplar amplios conjuntos de relaciones binomiales que incluyan las relaciones de los individuos y las de los relacionados con ellos.

Los grupos sociales y las relaciones binomiales que la componen obedecen a unas normas que varían según el momento histórico en el que tengan lugar y las sociedades en las que se inserten. Los binomios son elementos cambiantes. Hay miembros que mueren, otros cambian de signo y alguno que se incorpora. Estas modificaciones van influyendo en la configuración de la red global y de los subgrupos que la componen. De ahí que para entender el sistema completo sea imprescindible determinar cuándo empieza una relación binomial, cuándo termina, cómo se transforma, en qué contexto nace y desaparece¹¹⁰.

Un estudio prosopográfico debe contemplar todo lo anterior, de lo que se deduce, además la existencia de redes sociales en cada una de esas esferas. La flexibilidad y la posibilidad de elegir las relaciones a tener en cuenta son fundamentales en trabajos de

¹¹⁰ DEDIEU, *op. cit.* (Nota 109), pág. 192.

este tipo, pues es así el historiador el que decide el nivel y la profundidad del análisis, y no los datos los que determinan la dirección que se debe seguir¹¹¹.

Teoría de redes

Considerar las relaciones binomiales entre sujetos como partes de una red compuesta por todas las uniones con sentido similar, requiere concretar qué entendemos por red social y cómo se puede analizar ésta, tomando, para ello, prestadas técnicas propias de otras disciplinas como la sociología o las matemáticas.

Las teorías sobre el análisis de redes sociales tienen una larga tradición dentro del ámbito anglosajón, habiéndose demostrado como útil para multitud de estudios, desde la sociología política a la del trabajo, pasando por el análisis de instituciones formales o la sociedad de consumo. Sin embargo, esta efectividad no ha sido suficiente para encontrar un traslado a la producción hispánica, salvo contadas excepciones¹¹². Y si desolador es el panorama general del análisis de redes en España, aún más lo es en su aplicación a las investigaciones del pasado.

El concepto de red social se ha empleado en multitud de estudios con un sentido metafórico para referirse a determinadas estructuras sociales. Sin embargo, en sentido estricto se constituye como un conjunto de actores sociales definidos cuyos vínculos tienen la capacidad de proporcionar interpretaciones de la conducta social de sus miembros¹¹³.

Una primera definición de red social (*social network*) nos la proporciona Mitchell:

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² En este sentido, habría que destacar dentro del ámbito de la teoría sociológica el caso del grupo de investigación encabezado por Narciso Pizarro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, cuyos resultados pueden consultarse a través del sitio web: <http://www.ucm.es/info/pecar/index.htm>.

¹¹³ Uno de los pocos artículos en castellano sobre el tema es el de REQUENA SANTOS, Félix, "El concepto de red social", en REIS, 48 (1989), pág. 137.

“A specific set of linkages among a defined set of persons, with the additional property that the characteristics of these linkages as a whole may be used to interpret the social behaviour of the persons involved”¹¹⁴.

En esta definición se alude a la capacidad de capturar propiedades estructurales de los contextos sociales en los que los individuos se encuentran, que son más que la suma de atributos individuales. Esto apunta a dos razones por las que los investigadores de las ciencias sociales han mostrado interés por esta metodología: la posibilidad de ir más allá de los análisis estadísticos, los cuales no reflejan más estructura social que la proporcionada por categorías sociales, y, por otro lado, el poder tender un puente entre el micro análisis y el macro análisis.

A Barnes debemos la primera definición del concepto de red social en sentido analítico, en un sentido similar al que empleamos nosotros al dibujar las redes sociales de la censura para la España del siglo XVIII:

“I find it convenient to talk of a social field of this kind as a network. The image I have is of a set of points some of which are joined by lines. The points of the image are people, or sometimes groups, and the lines indicate which people interact with each other. We can, of course, think of the whole of social life as generating a network of this kind.”¹¹⁵

Podemos, por tanto, afirmar que, desde un punto de vista analítico, entendemos una red social como un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades. A través de éstas, y aplicando un tratamiento matemático, se puede analizar e interpretar las conductas sociales de los individuos que forman el grupo.

¹¹⁴ SÁNCHEZ BALMASEDA, M^a Isabel, *Análisis de redes sociales e historia: una metodología para el estudio de redes clientelares*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, 1995, pág. 10. [Consultada en su versión digitalizada: <http://www.ucm.es/BUCM/tesis/19911996/H/2/AH2011901.pdf>. Mayo 2009].

¹¹⁵ *Ibidem*, pág. 15.

Desde la perspectiva de los estudios sociológicos, lo que se pretende encontrar con el análisis de redes son las estructuras sociales estables, sin tener en cuenta las motivaciones individuales o colectivas. La estructura buscada se manifiesta como pautas en las formas de vinculación que sólo son apreciables tras el análisis de los datos concretos. Este tipo de análisis, además, presupone que los comportamientos de los individuos que forman parte de la red están determinados por las características de la red de la que forman parte. Nosotros, en cambio, estableceremos algún matiz a este respecto, al considerar que comportamientos similares no siempre están motivados por las mismas causas, o que un individuo no se comporta siempre como el grupo al que pertenece, más si, como es nuestro caso, se aprecia una ausencia de pertenencia al colectivo sin definir.

A la hora de analizar una red social podemos centrarnos en dos enfoques principales: por un lado, encontrar los posibles núcleos comunes, es decir, identificar dentro de esa red pequeños grupos o "subgrupos" cuyos miembros mantienen entre sí lazos estrechos, para acto seguido, dilucidar la razón por la cuál lo son. Por otro lado, podemos aplicar el caso contrario, encontrar aquellos individuos que forman sus propios subgrupos en un plano alejado del centro y que, sin estar dentro de esa red, pueden llegar a mantener sobre ella un poder que a veces es más importante que el del núcleo principal.

Debemos partir de una premisa importante: toda red está compuesta de unas relaciones que la dotan de una cierta complejidad, en función de su número y de su grado. Cada red es un pequeño mundo que contiene a su vez multitud de elementos también complejos. Tener en cuenta su contexto y la realidad de cada uno de ellos será fundamental a la hora de abordar su análisis sin perder las conexiones menos visibles.

Por otra parte, cada tipo de relación forma una red diferente, aunque sea aplicada a un mismo conjunto de individuos. Y algo muy importante, no podemos tomar objeto de análisis únicamente las conexiones existentes, debemos fijarnos también en las no existentes, precisamente porque la conjunción de ambas es lo que construye la red.

En cuanto a cómo se estudia, el análisis de redes sociales se caracteriza por la aplicación de conceptos matemáticos formales al estudio del comportamiento del grupo, en particular aquéllos propios de la teoría de grafos. Así, representando mediante puntos a los miembros del grupo, y mediante líneas que conectan dichos puntos a las relaciones existentes entre ellos, se construye un grafo que refleja el entramado de relaciones interpersonales entre miembros del grupo, y que puede analizarse usando la teoría de grafos.

Expresándolo de una forma más práctica, el organigrama a seguir a la hora de plantearnos utilizar este método sería el siguiente:

- Seleccionado el objeto de análisis, en primer lugar se deciden cuáles pueden ser los parámetros de los vínculos, es decir, se establecen las cualidades de los mismos como punto de partida.
- Entonces se especifican los niveles de análisis, en función de la complejidad que queramos darle a nuestra red. Se puede partir de un análisis de conjunto, tomando la totalidad de la red obtenida, y a partir de ahí profundizar en alguno de sus niveles, pero siempre dentro del contexto que los delimitan.
- Con estas premisas, se puede proceder a la recolección de datos, pues ya hemos hilvanado con los pasos anteriores las estructuras donde poder encajarlos. No obstante, la recolección nos obliga a una posterior selección de los datos, que tendrá en cuenta la especificación de unos límites que se adapten a la realidad de nuestra investigación. Con esta selección obtenemos un muestreo con el que podemos empezar a trabajar. Será fundamental considerar la importancia de las fuentes de las que hemos obtenido esos datos, para manejarla en el grado que corresponda, según sus propias coordenadas.

A la hora de iniciar el análisis, el investigador se encuentra en la encrucijada de seleccionar la perspectiva, el punto de vista desde el que se va a tratar la información obtenida. Existen varias posibilidades. La perspectiva realista se basa en las percepciones subjetivas de los propios protagonistas, puesto que las redes son, de

hecho, construcciones sociales suyas. La perspectiva nominalista, en cambio, opta por que los límites los determine el propio investigador. En este punto no podemos ser categóricos, pero parece más acertado el segundo punto vista, aunque lo importante son las relaciones efectivas, no determinar cuáles son realistas y cuáles fruto de las conceptualizaciones del investigador.

Un aspecto que suele pasar desapercibido por los investigadores de las ciencias sociales es que cuando se realiza el análisis de las redes de un grupo social determinado, en realidad se está comprobando el estado de dichas relaciones en un momento estático, como si de una foto fija se tratase, cuando la realidad es que las características de los grupos van cambiando con el paso del tiempo. En las investigaciones históricas este hecho se convierte en un problema, pues, como es el caso de los grupos de intelectuales dieciochescos, el análisis se hace de un grupo en movimiento, que va cambiando. En este sentido, el análisis comparado entre los dos extremos de la centuria favorece la detección de elementos que de otra forma quedarían eclipsados. El estudio, pues, se realiza sobre cortes más o menos estáticos, pero sin olvidar el carácter dinámico de las redes sociales. No se trata de una foto, pero se acerca bastante.

Respecto a la morfología de las redes, Mitchell distingue cuatro elementos en las redes sociales: anclaje, accesibilidad, densidad y rango. Y respecto a las características del proceso de interacción, otros cinco: direccionalidad, contenido, duración, intensidad y frecuencia¹¹⁶.

1. Una red tiene que ser trazada desde un punto inicial, que se convierte en la referencia, en el anclaje. El punto de anclaje suele venir determinado por un actor cuyo comportamiento se quiere comprender, pero también puede tratarse de un colectivo, como es el ejemplo que nos ocupa.
2. La accesibilidad la podemos definir como la fuerza con la cual el comportamiento de un actor está influenciado por sus relaciones con otros

¹¹⁶ REQUENA, *op. cit.* (nota 113), pág. 141-145.

actores. Dos actores son accesibles cuando existe algún modo de llegar de uno a otro bien sea directamente o indirectamente. Esta noción tiene especial importancia puesto que permite medir cuantos pasos debe dar un actor para ponerse en contacto con otros de la misma red, lo que se puede traducir en transmisión de información, de influencia, de presión, etc.

3. La densidad es un concepto extraído directamente de la teoría de los grafos. Una red tiene densidad máxima cuando todos sus miembros están relacionados con todos los demás, algo que ocurre ocasionalmente. Así, en una red social pueden existir subredes con mayor densidad que otras, por el número de relaciones entre sus miembros.
4. El rango nos sirve, por su parte, para definir el número de personas que están vinculadas directamente y sin intermediario con el sujeto en cuestión. Este aspecto es especialmente significativo en las redes personales, al permitir un acceso directo a mayor número de actores de la red, lo que se traduce en una mayor interacción. Este elemento nos será útil para determinar qué personajes son los actores más influyentes de las redes que se tratan.

En cuanto a las cualidades de las relaciones cabe distinguir cinco:

1. Contenido. Toda relación entre dos individuos tiene un propósito, por parte de una o de ambas partes. Ese interés reconocible es el contenido de la relación.
2. Direccionalidad. Hay ocasiones en que las relaciones entre los actores son recíprocas (o simétricas), por lo que importa menos su dirección, pues en sí mismas son ya un indicador de algo. Esto es habitual en relaciones de parentesco o vecindad. Otras veces, se trata de relaciones donde, debido a una ausencia total o parcial de reciprocidad (asimétricas¹¹⁷), la dirección si es

¹¹⁷ La dirección de la relación es simétrica cuando existe una reciprocidad entre los dos actores, en cuyo caso se dibuja con dos puntos unidos por una línea (*edges*). Cuando la dirección es dirigida de un actor a otro se dibuja con una flecha (*arcs*) y se denomina asimétrica.

relevante, pues la influencia es considerablemente mayor en un sentido que en otro. Como ejemplo de estas últimas cabe citar relaciones de poder, patronazgo, sentimentales, de exportación e importación etc...

3. En lo relativo a la duración de las relaciones, éste es un tema difícil de abordar por parte del análisis de redes. En realidad, habría que hablar más bien del carácter dinámico de la redes sociales, pues los cambios que pueden tener lugar dentro de ellas, pueden deberse tanto a la persistencia mayor o menor de la relaciones, a la aparición o desaparición de sus miembros, a la influencia de los acontecimientos externos o, incluso, al cambio del sentido de las relaciones entre los miembros. En cualquier caso, una red continúa existiendo siempre que los derechos y obligaciones respecto a otros se mantengan y sea reconocida para propósitos concretos, independientemente de los cambios internos que se produzcan durante su existencia.
4. Intensidad. Es el grado de implicación de los actores vinculados entre sí, es decir, la mayor o menor incidencia que sobre el comportamiento de un actor tienen los demás actores con los que está vinculado en la red. Una intensidad elevada puede producirse por la existencia de un solo vínculo de carácter fuerte, aunque una relación general fuerte también se puede manifestar entre actores unidos por múltiples vínculos débiles.
5. Frecuencia. Es necesaria una mínima repetición de los contactos entre los actores para el mantenimiento de la relación que los une, sin embargo una mayor frecuencia no tiene necesariamente que significar una mayor intensidad, ya que existen relaciones muy frecuentes con escasa influencia con el actor. Por explicarlo gráficamente, una persona tiene una relación muy frecuente con sus compañeros de trabajo, pero es posible que la intensidad sea inferior a la que el actor tiene con sus familiares y/o amigos. En general, la duración tiende a exagerar las relaciones parentesco y la frecuencia distorsiona la fuerza de los vínculos, por lo que nuevamente la obtención de conclusiones no es fruto de una operación matemática, sino del razonamiento y el análisis del investigador.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de contemplar la formación de redes sociales es la existencia de vínculos potenciales, es decir, no todos los vínculos que una persona puede llegar a tener tienen por qué estar activados en todos los momentos, sino que existe la posibilidad de activar ese vínculo difuso cuando las circunstancias lo requieran¹¹⁸. Es lo que podríamos denominar una “red dormida”.

Del mismo modo, al observar las formas de comunicación posible entre los miembros de una red, habría que detenerse a contemplar cuáles son los canales por los que se transmite cada tipo de información, y donde decimos información podemos hablar de influencia, presión u otro tipo de relación. No menos importante es detectar la existencia de subgrupos y los elementos centrales, entendiendo por tales a los que tienen un mayor número de relaciones directas o porque puedan acceder a un número mayor de individuos de la red en una menor distancia.

Hemos hablado de grupos y subgrupos, pero al estudiar la realidad existe la posibilidad, elevada por otra parte, de encontrar elementos aislados del sistema, es decir, que sólo estén vinculados a un elemento de la red. Estos casos se denominan inconexos y su utilidad es escasa, siempre, claro está, que ésta no sea la tónica general del grupo.

Finalmente, no debemos olvidar que en una red puede darse el caso de que encontremos dos o más tipos de relaciones. Esto nos lleva al concepto de *multiplicidad*, el cual se aplica tanto a las relaciones como a las redes. Entre dos actores puede haber diferentes relaciones (simultáneamente o que cambien con el paso del tiempo), de la misma forma que un mismo actor puede ser integrante de varias redes distintas.

Obviamente, el resultado de estudiar una red completa difiere del que se obtiene del análisis de una red personal u otro subgrupo. Son distintos niveles de análisis dentro de una red, que lejos de ser contradictorios resultan complementarios. El caso que nos

¹¹⁸ REQUENA, *op. cit.* (nota 113), pág. 147.

ocupa se trata, obviamente, de un subgrupo delimitado cronológicamente, pero no olvida el contexto general, la red completa.

Una vez que los límites de la red están definidos, en la medida de lo posible, aparecen otros problemas relativos al recuento de los individuos implicados en la investigación. Las dificultades desaparecen cuando se trata de redes de pequeña escala, pues en este caso es posible hacer un censo de todos los actores. Pero cuando se trata de redes de gran escala, resulta obligado utilizar muestras, no sólo por lo costoso que podría ser la recogida de gran cantidad de datos, sino también por las dificultades que habría para manejarlos desde el punto de vista computacional. Éste ha sido nuestro caso en el trabajo.

El muestreo de datos relacionales entraña problemas porque al hacerlo se ignoran gran cantidad de ellos. No obstante, supone siempre un primer paso para una categorización mayor y sus resultados suelen ser representativos del grupo de muestra escogido, siendo válida su generalización. De ahí que se elija una cata como punto de partida de cada periodo para un desarrollo más exhaustivo del total.

Hay que destacar la utilidad que tiene la aplicación del estudio de redes a los análisis históricos a pesar de los muchos reparos existentes, fundamentados por parte de los historiadores en que los datos históricos son más complejos de lo que aceptan los conceptos matemáticos que hay detrás. Sin embargo, cuanto más complejos son los datos, más útiles se vuelven los análisis de redes, pues las aplicaciones informáticas que se emplean en ellos superan las limitaciones humanas en el tratamiento de la información. Una de sus principales aplicaciones es la posibilidad de determinar y estudiar la existencia de grupos de poder al margen de las instituciones formales, aunque nos enfrente con una nueva dificultad: reconstruir una red a partir de vínculos no formales, y que por tanto no dejan evidencia escrita oficial. Eso requiere una labor de búsqueda y de tratamiento de los datos más compleja, pero no impide su aplicación en las investigaciones históricas, como este mismo estudio pone de manifiesto.

A pesar de los problemas inherentes a los datos históricos (dificultades a la hora de determinar la naturaleza de las relaciones, problemas relativos a la definición de los límites de las comunidades, etc.), el análisis de redes sociales puede constituir una metodología complementaria a la investigación histórica, sin olvidar nunca que es el investigador el que, en última instancia, debe determinar qué información es relevante para la investigación, independientemente de las teorías sociológicas o matemáticas que haya detrás.

1.4.3. Bases instrumentales: instrumentos de análisis y bases de datos

Para tratar los datos de manera eficaz podemos recurrir al uso de programas informáticos especializados en el análisis de redes sociales que permiten, además, cuantificarlos y tratarlos de manera sistemática. En este apartado veremos la aplicación de distintos programas a la información extraída de la documentación. Para elaborar el material de apoyo que muestra, de forma gráfica y directa, los resultados de la investigación, se han empleado dos herramientas: las hojas de cálculo y el programa especializado *Pajek*.

Poco podemos decir de una aplicación tan conocida como es la primera. Suele formar parte del paquete básico de cualquier programa de ofimática, siendo el más extendido *Microsoft Excel*, que pertenece al paquete de *Microsoft Office*. La ventaja que tienen es que, sin necesitar grandes conocimientos de informática, ofrecen una gran cantidad de posibilidades a la hora de elaborar estadísticas y gráficos. Además, el hecho de que sea compatible con otros programas, como es el caso de *FileMaker*, nos permite realizar exportaciones de series seleccionadas desde nuestra base de datos, ganando en fiabilidad y rapidez.

Como podremos ver en los sucesivos apartados, con este programa hemos elaborado una serie de tablas, porcentajes y gráficos que han permitido demostrar visualmente los resultados de los análisis.

El segundo programa, *Pajek*, es más complejo, en tanto que su funcionamiento requiere unos conocimientos previos sobre su funcionamiento. Los posibles inconvenientes que ello pueda causar son compensados por las posibilidades que ofrece a la hora de dibujar las redes, incluso aquellas que por su complejidad, nos hubiera sido imposible manejar. En nuestro caso, contamos con la ayuda del profesor Jean Pierre Dedieu, del CNRS francés, que se ha encargado de mostrarnos su funcionamiento. Aunque no es un software que se encuentre inicialmente en los ordenadores, su descarga es gratuita y puede ser realizada desde diferentes páginas¹¹⁹.

El nombre del programa, que significa “araña” en esloveno, refleja perfectamente su principal función, analizar grandes redes que difícilmente podrían ser gestionadas de una manera eficiente empleando métodos de análisis tradicional. Por ello, entre los objetivos principales del programa está soportar la abstracción mediante factorialización (recursiva) de grandes redes en diversas redes de inferior tamaño, susceptibles de ser tratadas con métodos más sofisticados; proporcionar herramientas potentes para visualizar estas redes e implementar una selección de algoritmos eficientes para análisis de grandes redes.

Una de las funciones básicas del soporte es encontrar *clusters* (componentes, vecindades de vértices 'centrales', entornos...) en una red, extraer y mostrar vértices que pertenecen al mismo *cluster* aunque se encuentren físicamente separados. Lo que más nos interesa, *a priori*, es el núcleo principal dentro de la red, pues es ahí donde encontraremos los elementos de mayor peso. Pese a que este es un ejemplo muy simple, con relaciones de tipo similar, las posibilidades del programa son inmensas y, por ejemplo, nos permitiría mostrar relaciones negativas, positivas, unidireccionales, etc.

¹¹⁹ Puede descargarse directamente desde su propia página, donde además se encuentran enlaces, manuales y diversos datos que pueden resultar de gran utilidad para el usuario. <http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/>.

El uso de un programa de estas características requiere un trabajo previo consistente en la elaboración de listas en formato texto, el único tipo de archivo que Pajek es capaz de leer, para procesarlos como imagen. En ocasiones, el objeto de estudio permite la creación de estos archivos intermedios fácilmente mediante la conversión de archivos, en otros será necesario construirlos y transcribirlos manualmente. El fichero de texto está constituido por dos tipos de datos que el programa es capaz de diferenciar. Primero se listan los vértices de las redes, es decir, los actores, identificados del mismo modo que en la base de datos, con un número y su nombre. A cada vértice le corresponde un número correlativo. El segundo tipo de datos es el que relaciona los vértices para dibujar las líneas que los unen. Se crea una lista para las relaciones dirigidas y otra para las no dirigidas. En la primera, a la relación se le asigna un valor que determina la direccionalidad.

En nuestro caso, tenemos la posibilidad de exportar los datos almacenados en la base de datos para su lectura por Pajek con un pequeño paso intermedio, lo que nos permite trabajar de una manera más cómoda y, sobre todo, rápida, sin que sea necesario asignar una nueva codificación, además de reducir los posibles errores manuales.

Las bases de datos

Para el estudio de la historia social resulta de enorme utilidad, además de tener presentes los fundamentos teóricos como el análisis de redes y los principios prosopográficos, el empleo de bases de datos relacionales, ya que nos permite un tratamiento de la información más completo del que nos podría proporcionar otro instrumento.

La configuración de la base de datos tiene que estar directamente relacionada con los presupuestos metodológicos que se han expuesto hasta el momento. Los arriba expresados, así como lo que sigue, es la herencia directa de los estudios prosopográficos que sobre la alta administración española del siglo XVIII comenzaron un grupo de historiadores españoles y franceses, de diversas instituciones y procedencias, que realizaban investigaciones sobre distintos ámbitos de la Monarquía

pero que compartían una metodología y un objetivo. Este grupo, conocido como PAPE (Personal Administrativo y Político Español del siglo XVIII), elaboró hace unos veinte años un modelo de archivo informático cuyo principal objetivo era almacenar datos sobre las carreras administrativas individuales, que resultó ser mucho más eficaz que los archivos manuales.

Con el avance de las investigaciones surgieron nuevos problemas, que ampliaron el espectro tipológico de la información a incluir, y que, conforme evolucionaron los medios técnicos e informáticos, fueron transformando la estructura del archivo inicial. De esta forma, gracias a las cambiantes necesidades del equipo investigador, hoy se pueden almacenar, recuperar, manejar y analizar con facilidad y de manera virtual cualquier tipo de datos sobre un individuo¹²⁰. De hecho, en la actualidad está siendo utilizado para estudios muy diversos, que van desde el movimiento de barcos en los siglos XVIII y XIX al comportamiento del mundo editorial español de la Ilustración, que es nuestro caso.

El conjunto de bases de datos recibe el nombre genérico de FICHOZ¹²¹ (Fichero Ozanam), por el iniciador del proyecto, Didier Ozanam. El archivo inicial, debido al planteamiento de la hipótesis del momento, estaba pensado para recoger datos biográficos referidos a la carrera vital de un individuo en un modelo único de ficha. Cada una se componía de dos campos básicos: uno identifica a la persona y otro describe el acontecimiento.

Se considera acontecimiento a cualquier elemento biográfico, desde el nacimiento a la muerte, bien sean de carácter personal (matrimonio, nacimiento de hijos, etc.), profesional (acceso a un puesto, ascensos, etc.), privados o públicos (firmar un contrato, redactar testamento, hacer un viaje, expresar públicamente una opinión, etc.). Siempre que el historiador considere que el acontecimiento tiene entidad suficiente o es relevante para la investigación que está realizando, se crea una entrada

¹²⁰ DEDIEU, *op. cit.* (nota 109), pág. 194.

¹²¹ El programa empleado para el desarrollo y manejo de la base de datos es FileMaker, una aplicación de base de datos relacional que se puede adquirir en el mercado, y que tras la comparación con otros soportes similares ha sido elegida por su mayor capacidad y versatilidad.

nueva, describiendo el acontecimiento en lenguaje natural para que la información sufra la menor manipulación posible. Si el dato es secundario, se puede asociar a uno ya existente en un campo de notas, de manera que si con el avance de la investigación se le concede más importancia pueda ser elevada a la categoría de acontecimiento propio. Los datos son introducidos de la manera más fidedigna posible, con la única salvedad de incorporar unas sencillas convenciones que faciliten la búsqueda para su posterior recuperación. Por ejemplo, si se trata de la publicación de una obra, antes de introducir el título de la obra figura la palabra "Publicación".

El segundo campo corresponde a la persona. Para evitar las fáciles confusiones de identidad de los individuos debido las formas distintas en las que se presentan en la documentación, se prefirió optar por un identificador numérico que de manera unívoca se refiere a un solo actor. El identificador se presenta como un número de ocho dígitos, atribuido de forma arbitraria por el investigador, y que figurará relacionado con todos los registros que se hagan de la misma persona. Junto a este número, existe otro campo en el que se escribe el nombre del actor. Aquí se nos presenta un nuevo problema, pues en el siglo XVIII, como en épocas anteriores, el nombre empleado por cada individuo variaba según el contexto. Para contemplar todas estas variaciones, se optó por introducir el nombre más común de manera general (primero apellidos y después de una coma el nombre) y los títulos y posibles pseudónimos a continuación, especificando de lo que se tratara entre corchetes y omitiendo artículos y preposiciones. Así, por ejemplo, las entradas de José Mañer en las que escribe bajo el pseudónimo de José Lorenzo de Arenas, en el campo de "Nombre" figuraría: MAÑER, JOSE [ALIAS] ARENAS, JOSE LORENZO.

Algunas de las obras que tratamos, a pesar de lo establecido en la legislación, se publican con pseudónimos, lo que supone una dificultad añadida para la identificación de los actores. En general, se han respetado en las atribuciones de los pseudónimos las indicaciones dadas por Aguilar Piñal, aunque la existencia de otros indicios en la base de datos o en el resto de la documentación que apuntasen otra posibilidad se ha optado por la más fiable.

A estos dos campos fundamentales se le añadían otros que dan cuerpo al esqueleto, como el lugar, la fecha de inicio y final (si es relevante o posible conocer), la referencia de la fuente, el nombre (en idioma natural), un campo de codificación y un campo de notas en el que poder almacenar información secundaria sobre el acontecimiento¹²².

Este sistema para el tratamiento de la información tiene muchas ventajas frente a los que optan por una ficha para cada autor. En primer lugar, como señalábamos al hablar del método prosopográfico, al crear una ficha para acontecimiento no se establecen unas categorías antes de iniciar el vaciado. Por otro, la sencillez de mecanismo implica que la necesaria distorsión de los datos al proceder a su procesamiento sea sensiblemente menor.

Los acontecimientos que van teniendo lugar en la vida de un autor no siempre le afectan sólo a él, hubo que pensar una forma de registrar las relaciones binomiales que van componiendo el grupo. Para no perder las ventajas que se habían conseguido para los registros individuales, se copió el sistema. Así, la estructura de la ficha es la siguiente: en un primer campo figuran el identificador numérico y el nombre el primer individuo, en un segundo campo, el identificador y nombre del segundo, y entre ambos un tercer campo en el que se escribe el tipo de relación. A estos le acompañan los campos complementarios antes descritos: fechas de inicio y final (si consta), referencia documental, codificación y notas, a los que se añade un nuevo campo en el que se explica brevemente la relación. La documentación no siempre es lo suficientemente clara para explicitar la existencias de relaciones. En ocasiones sólo se nos plantean indicios que el historiador debe evaluar para considerar si se elevan a la categoría de hipótesis. Ese salto es responsabilidad del investigador.

Actualmente, el centro del sistema lo constituye esta base, denominada "Actions", en la que se han incluido los registros individuales, para evitar la duplicidad. En el caso de que las entradas hagan referencia a un acontecimiento individual, sólo se completan los campos del segundo sujeto, dejando vacíos el primero y el relacional. Así, se pueden realizar distintos tipos de búsqueda: llamar a todos los acontecimientos

¹²² DEDIEU, *op. cit.* (nota 109), pág. 196.

vinculados a una persona, llamar sólo los acontecimientos individuales o llamar sólo los acontecimientos binomiales.

Junto a esta base principal, existen otras relacionadas, siempre a través de los identificadores numéricos de los actores, para cubrir otro tipo de información. Las dos que tienen un desarrollo más largo son la genealógica y la institucional.

Parte de los acontecimientos que suceden en la vida de un sujeto están relacionados con su vida familiar. Como hemos visto, algunos de estos datos, como el matrimonio, se recogen como un acontecimiento binomial, pues necesariamente requiere de la participación de dos actores, se refleja en una entrada en "Actions". Sin embargo, las relaciones familiares tienen unos matices que las diferencian del resto de relaciones sociales. Para empezar, carecen del carácter hipotético, pues se confirman por sí solas. Por otra parte, su duración es casi permanente: una vez que se establecen se prolongan hasta la muerte, e incluso más allá. Y lo que es más importante, las relaciones familiares no se pueden desgajar en relaciones binomiales, porque cada lazo, sea de filiación o de alianza, implica y afecta al resto de miembros de la familia, de manera que las relaciones cruzadas se generan las unas a las otras.

El tercer gran pilar de este sistema de bases de datos es el archivo institucional. Conocido como *Diem* (acrónimo de *Diccionario de Instituciones de la España Moderna*), en el se definen las instituciones del Antiguo Régimen en España, entendiendo como tales no sólo las que están definidas jurídicamente por el ordenamiento legal, sino aplicando el concepto más amplio empleado por sociólogos para hacer referencia a modelos de comportamiento formales. Por cada institución se crea una ficha en la que se refleja la definición, creación, organigrama, función y uso, a las que se puede acceder en todo momento desde el archivo principal para aclarar el papel que jugaban los actores y ver el contexto en el que se desarrolla cada acción. Así, se incluyen todos los ámbitos en los que se desarrollan las carreras individuales de los actores estudiados, vinculados fácilmente mediante un identificador numérico.

Recientemente, las inquietudes investigadoras de los miembros actuales del grupo que trabaja con estas bases de datos han ampliado los horizontes y han fijado sus objetivos en profundizar en el ámbito cultural del siglo XVIII y sus relaciones con el mundo administrativo. La existencia de estos vínculos era sobradamente conocida, pero no había sido analizada de manera relacional. El punto de partida es considerar que el poder absolutista del XVIII se expresa por múltiples mecanismos, no sólo por la estructura propiamente administrativa, sino también en el ámbito cultural, que es de lo que se ocupa esta línea de investigación.

Como ocurrió en momentos anteriores, la aparición de nuevas inquietudes llevó a plantear la necesidad crear un nuevo espacio en el que recoger la información de las publicaciones y demás obras culturales de la Ilustración española. Surgió así la base de datos bibliográfica. Esta base se compone de tres tipos de ficha: uno para la documentación de archivo, otra para la bibliografía moderna y una tercera para la bibliografía antigua. Ésta es en la que nos centraremos para este trabajo.

Del mismo modo que por cada acontecimiento se creaba un nuevo registro, manteniendo el identificador numérico del actor responsable, en las fichas bibliográficas cada obra se registra con una entrada, que tendrá por una parte el nombre e identificador del autor, que el mismo que figura en la base "Actions", y por otra, el título completo y un identificador para la obra cultural. Junto a estos campos fundamentales, figuran otros complementarios en los que poder registrar los datos de la edición: editor, financiero (si es distinto), número de volúmenes, número de páginas, año de publicación, descriptivo (donde anotar los paratextos), notas, marcas e idioma. Cada edición de una misma obra tendrá su propia ficha, con sus datos asociados (año de publicación, número de páginas, etc.), pero en todas figurará el mismo identificador, para poder llamar a todas las ediciones de una misma obra o, mediante una pequeña aplicación, sólo a las obras de una edición.

Otros dos campos resultan fundamentales para el estudio que veremos más adelante. Uno de ellos es el que diferencia la tipología de la obra vaciada en la ficha. El sistema nos permite diferenciar entre documentación de archivo (A), publicaciones modernas

(B) y publicaciones antiguas (C), y dentro de ésta los manuscritos, impresos sueltos, folletos, artículos, publicaciones periódicas e impresos insertos en otras obras. La forma física de la ficha es similar para todas las obras, aunque, obviamente, no todos los campos tienen que estar completos con todas. Sin ir más lejos, los campos de "editor" no se podrán rellenar en el caso de los manuscritos. La diferenciación según la tipología nos permite seleccionar la información con la que trabajar incluyendo todas las obras escritas en un año, en un periodo, o por un escritor, por poner algún ejemplo, o sólo las que nos interesen para ese momento, pues para trabajar sólo con los manuscritos basta con seleccionar dicha opción el campo de búsqueda.

El otro campo es el que diferencia la tipología de la obra en función de su publicación. Para ser más explícitos: se diferencian las obras nuevas publicadas en España, las obras reimpresas en España, obras nuevas publicadas en el extranjero, obras reimpresas en el extranjero, traducciones nuevas publicadas en España, traducciones reimpresas en España, traducciones nuevas publicadas en el extranjero y traducciones reimpresas en el extranjero, por destacar las más importantes. Como se podrá ver, y como ocurría con el campo anterior, este dato permite concretar las búsquedas sobre el tipo de documentación con la que queremos trabajar.

A partir de los datos que se extraen de los pies de imprenta, los títulos y los paratextos, se crean en la ficha, en un campo relacionado con "Actions", todas las relaciones derivadas. Por ejemplo, se crea una relación entre el autor y la obra por su publicación, otra entre el autor, asociado a la obra en un campo anexo, con el editor, otra para cada aprobante y/o censor, otra para los temas literarios (si son personas físicas o jurídicas de la época) o para los destinatarios de las dedicatorias. De este modo se van creando relaciones binomiales que pueden ser analizadas desde la base de acontecimientos como parte de la carrera vital de un actor.

Un pequeño problema que se puede observar a primera vista es la posible confusión que genera la existencia de identificadores para individuos, para colectivos y para obras culturales. Sin embargo, la flexibilidad del sistema permite introducir variaciones para evitar esos problemas. Así, si a cada actor individual veíamos que se le asignaba

un identificador numérico de ocho dígitos, para los colectivos el identificador será alfanumérico: siete números y una C mayúscula que lo identifica como un conjunto concreto de personas. Para las obras culturales la letra será la L. En ambos casos, igual que en los actores, el número será único para cada grupo y para cada obra cultural. El hecho de que los campos de identificadores sean definidos por el programa como alfabéticos en vez numéricos para que su tratamiento y exportación a otros programas no genere problemas, evita que la presencia de una letra genere incompatibilidades. Y que todos los tipos de identificadores tengan ocho elementos (sean sólo números o letras y números) facilita las búsquedas complejas. La correcta colocación de los identificadores es fundamental, no sólo para evitar errores de identificación, sino porque las búsquedas se realizan a partir de ellos. Así, se podrán llamar a todas las obras de un autor, ir del archivo principal a la ficha bibliográfica vinculada al acontecimiento, etc.

En resumen, el sistema de bases de datos Fichoz tiene como centro el actor, sea éste un individuo, un colectivo o una obra cultural, ya que los tres reciben el mismo tratamiento. Es el actor un ente real, no estadístico, construido por la acumulación de acontecimientos, que gracias a la estructura de la propia base está siempre relacionado con el contexto, con el universo, en el que se desarrolla su carrera vital.

Para que la base no pierda parte de su utilidad, es preciso ser fiel a la letra de la documentación. La información que se recoge en la base no es bruta, puesto que como ocurre con un vaciado manual, se corta para registrarla. La ventaja de la base frente a otros métodos es que la transformación que sufre es mínima: sólo se divide en relaciones binomiales que se asocian a sus actores, vaciando el contenido de la forma más objetiva posible, sin introducir categorías ajenas al documento que se está manejando. Para que no se produzcan deformaciones involuntarias es preciso tener un profundo conocimiento del contexto, un amplio manejo del vocabulario de la época y unas nociones básicas sobre la realidad institucional del momento. El investigador es el que, a partir de los datos de la base, interpretará el dato, pero sin que esto afecte a la estructura de Fichoz.

1.4.4. Fuentes: bibliografías, portadas y archivos

La fuente inicial de información para nuestra investigación ha sido la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII* de Aguilar Piñal¹²³. En 1996 François Lopez escribía un artículo que llevaba por título “Lo que puede hacerse con la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*”¹²⁴. En él describía las ventajas de utilizar un material como el que recoge la citada obra. Hoy, más de diez años después de que Lopez lo publicara, las opciones de análisis que él apuntaba han sido completadas, pero las razones sobre la conveniencia de esta bibliografía siguen siendo las mismas.

Exhaustiva, minuciosa, con algún que otro error, pero solventado con una capacidad de síntesis y orden que pocas veces se encuentran en obras de tal magnitud: la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII* de Aguilar Piñal es una de las más completas, “la mejor del mundo” que decía el hispanista francés¹²⁵. La base de datos Fichoz posibilita agilizar el manejo de la información y, lo que es más interesante, no perder ni una sola de las conexiones que surgen entre ellas, como hemos visto en este mismo capítulo al explicar su funcionamiento.

Pero no sólo arroja luz el estudio de esta bibliografía. Plantea, como la mejor de las informaciones que un historiador puede desear, multitud de interrogantes, caminos que posibilitan el abordaje del estudio desde múltiples vías, sin olvidar los vínculos y conexiones existentes entre ellas, todas esas “redes” que la hacen tan fascinante.

Todo lo expuesto puede servir para contestar la pregunta que formulábamos. A la hora de tratar a los hombres que protagonizaron nuestro panorama literario y cultural durante el siglo XVIII la *Bibliografía de autores españoles* se presenta como una de las fuentes más fiables. Su combinación de datos bibliográficos con otros biográficos de los autores nos permite dibujar toda una sociedad de autores que supera con creces a cualquier otra, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

¹²³ AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71).

¹²⁴ LOPEZ, *op. cit.* (nota 3), págs. 575-582.

¹²⁵ *Ididem.*

No obstante, igual que sucede con cualquier fuente para el estudio de la historia, hay que acercarse a ella con cierta cautela. Pese a todas las comprobaciones que realizó Aguilar a la hora de elaborarla, existen ciertos errores y omisiones que en ocasiones resultan difíciles de completar. Los especialistas acusan la ausencia de algún tipo de datos, como pueden ser las reediciones de las obras impresas por primera vez en los siglos XV, XVI y XVII, las obras publicadas en latín y en el resto de las lenguas peninsulares (aunque en casos excepcionales y para completar a algún autor que escribió la mayoría de su obra en castellano se han mencionado también los impresos en otras lenguas), los escritos jurídicos y procesales y las obras anteriores al XVIII que se fueron reeditando en pliegos sueltos, como es el caso del romancero, la comedia, los textos teatrales y las novelas de inspiración caballeresca o hagiográfica. Sin duda, éstas, aunque carencias, no se deben situar en el lugar de los debes, sino que son ámbitos que excedían la investigación y que siguen dejando abierta la puerta a nuevas aportaciones que sean conscientes de las limitaciones materiales a las que se deberán enfrentar para abordarlas. Para ello se ha establecido un criterio propio, común a todo el grupo que trabaja con el programa de base de datos Fichoz, pudiendo así unificar en cierto modo la información.

Pero ningún estudio solvente puede sustentarse sólo sobre una única fuente, por buena que ésta sea. Es por ello que la información aportada por Aguilar ha sido completada con la extraída de otra documentación. Y si hay algo que nos puede mostrar quiénes son esos actores es el propio libro, especialmente a través de las portadas. En ellas encontramos, a lo largo del siglo XVIII, mucha más información de la que normalmente se recoge en una ficha bibliográfica. En las portadas suele figurar una información complementaria que puede resultar interesante para el estudio del mundo del libro, como es la dirección de las librerías y el título de otras obras que pueden encontrarse allí; o la expresión "*Con privilegio*" que, junto a otras similares como "*Con las licencias necesarias*" o "*Con licencia*", nos indican la existencia de aprobaciones y privilegios por parte de las autoridades competentes. Los propios impresos, y en especial su primera página, nos aportan una información que no es considerada en los estudios convencionales y que nos habla, precisamente, del "hacer"

conjunto de diversos actores, cada uno desde su ámbito, que permiten, en primer lugar, la materialización de la propia obra, y, por otra parte, la recreación de las redes que todos ellos forman al participar en dicho proceso.

Finalmente, la otra fuente fundamental para el estudio de la censura han sido los expedientes generados en las Escribanías del Consejo Real de Castilla y que se conservan en la sección *Consejos Suprimidos* del Archivo Histórico Nacional. Estos expedientes son una fuente imprescindible para los estudios del libro en nuestro país ya que nos permiten profundizar en los mecanismos administrativos de aprobación, así como dar un nuevo protagonismo a unos agentes que hasta el momento habían sido ignorados en los estudios sobre la producción escrita: los censores. Además, nos ofrece una valiosa información sobre el propio proceso de aprobación, mostrando el papel que jugaron los distintos actores en el proceso¹²⁶.

Parte del material conservado contiene el establecimiento por parte del Consejo de la tasa, el precio al que se podía vender la obra. En muchos casos este trámite es el único vestigio que se conserva de los escritos, ya que tanto los originales como el resto de documentación que necesariamente se producía han desaparecido. Estas fuentes no pueden ignorarse para el estudio de la producción escrita, pero no nos aporta información sobre su paso por la censura. Por los títulos, en cambio, si podemos suponer que se trataba de literatura efímera, en su mayor parte pronósticos, relaciones, coplas o cartas pastorales, de escasas páginas pero gran difusión, aunque su baja calidad, el escaso interés por su conservación y el propio carácter temporal de las obras han impedido, en la mayoría de los casos, que lleguen hasta nosotros.

El prescindir de la vertiente económica, reflejada en las tasas y ayudas de costa, ha supuesto una clara limitación, pero su estudio deriva más hacia los aspectos económicos de la imprenta ilustrada y no influyen, o al menos no hemos visto que así sea, en el sistema estrictamente censor.

¹²⁶ BENITO ORTEGA, Vanesa, "El Consejo de Castilla y el control de las impresiones en el siglo XVIII. La documentación del Archivo Histórico Nacional", *Cuadernos de Historia Moderna*, 36 (2011), págs. 179-193.

La tipología de las peticiones de licencia presentadas al Consejo ha sido ya perfectamente detallada¹²⁷, aunque a nosotros sólo nos interesa una parte de esta documentación:

- Licencias de impresión de obras nuevas, donde incluimos las traducciones, las solicitudes para imprimir una parte de una obra ya impresa o para imprimir varias obras como una sola
- Licencias de reimpresión de obras ya impresa, pues si el privilegio está en vigor sólo era necesario para introducir modificaciones, aunque es más frecuente solicitudes para impresos sin privilegios
- Solicitudes de revisión de manuscritos desestimados
- Solicitudes de devolución de los originales no aprobados

Estas solicitudes eran contestadas, a su vez de distinta manera. Las obras que eran aprobadas sin censura previa, por su tamaño o por tratase de reediciones de obras ya publicadas sin introducir modificaciones, no aportan datos para nuestras redes. En cambio si se han tenido en cuenta todas las licencias, se aprobara o se denegara el permiso, valorando si la censura, o las censuras, eran positivas y/o negativas. También han ocupado un papel destacado aquellas aprobaciones condicionadas, pues cabía que se concediera la licencia a condición de que se cumplieran las modificaciones establecidas por el censor. Es lo más común en este tipo de casos, ya que en la mayor parte de las resoluciones el Consejo respeta la decisión del censor encargado.

Así pues, contrastando la información recuperada de las diversas fuentes y tratándola según los principios teóricos y técnicos aquí explicados, se ha dado cuerpo a la investigación que presentamos, en un intento de profundizar en el mecanismo de censura libraria del siglo XVIII a partir de sus protagonistas: los censores.

¹²⁷ BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, *“Dásele licencia y privilegio”. Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro*, Madrid, Akal, 2012, págs. 36-37.

2. El aparato censor

El control sobre la imprenta es una institución consustancial al Estado Moderno. Desde el reinado de los Reyes Católicos, el libro era considerado un bien de *utilidad pública*, por lo que se le exime del pago de determinados impuestos. Pero no todo lo que se escribe es válido, así debe ser el Rey el que decida qué es de interés para el pueblo y qué no, y por tanto, qué se puede publicar en su reino y qué no. Ésta es la base jurídica fundamental del establecimiento de la censura¹²⁸, que tendrá una doble vertiente: controlar qué se publica dentro de los territorios de la Corona y vigilar qué entra por las fronteras ya impreso.

A pesar de que las condiciones geoestratégicas para la penetración y difusión de las Luces durante el siglo XVIII en nuestro país eran favorables, la circulación de ideas encontró muchos estorbos en su camino. En ello jugó un papel importante, sin duda, la actividad censoria. No es la única causa, pero sí determinante.

Aunque no es la única herramienta que tenían a su disposición, la voluntad de los gobernantes se visualiza en el desarrollo legislativo que llevan a cabo. Dos son los propósitos que suelen inspirar la legislación sobre la imprenta. El primero era controlar la difusión de libros y papeles, lo cual no se limita a la institución de una censura efectiva previa a la impresión, sino que se manifiesta en numerosas medidas administrativas cuyo fin es reforzar el poder real, entre las que también cabría destacar algunas disposiciones que escapan al objeto de la presente tesis, como serían la visita de librerías o el control fronterizo. El segundo, que se aleja más de nuestro tema, es la protección y el fomento que necesita la industria tipográfica. Control y fomento son, pues, los dos objetivos de las leyes que se proveen durante casi dos siglos por los Habsburgo para los reinos de Castilla, y que el cambio dinástico de 1700

¹²⁸ Un estudio sobre la continuidad de esta idea a lo largo de toda la Edad Moderna, y que resulta de gran interés es el de GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74).

no cambió de manera radical, aunque sí introdujera algunas innovaciones importantes al inicio del reinado de Felipe V y, sobre todo, en la segunda mitad del siglo.

No basta, sin embargo, estudiar las leyes que se promulgaron. Por una parte, no todas las disposiciones tuvieron la misma publicidad, ya que alguna de las medidas que más trascendencia tuvieron no se puede encontrar en las *Recopilaciones* legislativas. Por otra, es necesario profundizar y examinar los efectos prácticos que surtieron. La práctica cotidiana distaba mucho de lo dispuesto por los poderes sobre el papel, y no se puede ignorar que la observancia de la mayoría de las medidas fue, cuando menos, relajada, tanto para las medidas proteccionistas como para los requisitos de licencias previas, privilegios y censuras¹²⁹. Así pues, quien sólo tuviese presente la historia de la legislación en sus textos podría llegar a conclusiones equivocadas sobre el funcionamiento del mercado editorial en el siglo XVIII y sobre el comportamiento de sus protagonistas.

Como han señalado los estudios sobre el tema, la censura tuvo un importante perfil de presión y destrucción pero, como ya nos enseñara Hegel, también conlleva una dimensión de producción y de innovación. La propia dinámica que genera la censura presiona el discurso establecido y abre en él pequeñas fisuras que van remodelando sus códigos¹³⁰.

Uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien se acerca por primera vez a un tema tan complejo como el de la censura es que no existe una monografía que la aborde de manera completa. Como señala Lopez, esta carencia es más grave si se tiene en cuenta que, sin embargo, no hay obra de conjunto sobre el XVIII que no insista en la libertad de expresión que existía en Inglaterra, frente a la situación de otros reinos europeos, como Francia o España. Esto nos debe llevar a replantearnos la tesis tantas veces defendida de que el Poder, mediante la censura, es capaz de sofocar la libertad de expresión. Defiende Lopez, no sin razón, que los

¹²⁹ LOPEZ, François, "La legislación: control y fomento", en INFANTES, LOPEZ y BORREL, *op. cit.* (nota 36), pág. 275.

¹³⁰ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 34.

poderes, civiles o eclesiásticos, sólo logran amordazar la oposición cuando ésta es débil, pues no hay ningún ejemplo en el que la censura, por firme y rígida que fuera, haya sido capaz de sofocar una fuerte oposición¹³¹. De ahí que la ausencia de libertad no puede achacarse, al menos exclusivamente, a la existencia de un sistema censor, sino que habría que buscar otros factores, como las diferencias entre los opositores al poder establecido tanto en lo tocante a los objetivos de la crítica como en la propuesta de alternativas viables. En resumen, la inexistencia de una oposición única y organizada.

El sistema legal que se va creando desde los Reyes Católicos hasta la llegada de Napoleón es bastante complejo. Como en otros ámbitos de la vida, los legisladores suelen ir por detrás de los hechos e intentan regular hábitos que ya se dan en la sociedad, en este caso en el mundo de la imprenta. Los monarcas del XVIII promulgarán disposiciones que afectan no sólo a la forma y procedimientos por los que debe imprimirse un libro, sino también al comercio o al funcionamiento interno de las imprentas. La complejidad aumenta si tenemos en cuenta que a pesar de los crecientes intentos homogeneizadores, durante toda la centuria no existe una regulación legislativa única para todo el territorio peninsular, sino que se mantienen variaciones territoriales en los diferentes reinos incluso después de los Decretos de Nueva Planta.

El 26 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional Francesa promulga los *Derechos del Hombre*, en cuya cláusula 11 declara: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; cualquier ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente”. Esta norma, de hecho, suponía la libertad de imprenta en Francia, y por tanto la eliminación de toda censura previa a las obras que vieran la luz. No era el primer país en el que se suprimía la censura. Inglaterra lo había hecho en el siglo XVII, Suecia había eliminado la censura previa de carácter civil en 1766 y Dinamarca en 1770¹³². En España el caso es bien distinto. Desde que en 1554 Carlos V encargara al Consejo de Castilla, en tanto que Consejo

¹³¹ LOPEZ, op. Cit. (nota 3), págs. 68-69.

¹³² MARTINEZ DE SOUSA, José, *Pequeña historia del libro*, Gijón, Trea, 1999, págs. 150-151.

Real, la misión de aprobar la impresión de las obras “que no atenten contra la religión, buenas costumbres, regalías, leyes y pragmáticas de estos Reinos”¹³³, hasta el siglo XIX, el sistema no conocerá grandes cambios, y para la impresión de cualquier obra era necesaria, como mínimo, la aprobación real.

La *Leyenda negra* sobre la Inquisición española, que con tanto empeño está desmitificando García Cárcel¹³⁴, ha eclipsado, en parte, la otra vertiente de la censura en la España moderna, que es quizás la que resultó más efectiva, la ejercida desde la administración real. Del mismo modo, se ha escrito mucho sobre la evolución del sistema de censura en Castilla, pero no tanto en otros reinos peninsulares que integraban la Monarquía. No es nuestra intención profundizar en este asunto, pues con los Decretos de Nueva Planta se unificarán los mecanismos y a partir de entonces la tradición castellana tendrá vigencia, también, en la Corona de Aragón. Navarra seguirá, no obstante, manteniendo su carácter diferencial¹³⁵. Es por ello que debemos aclarar que el grueso de este trabajo se refiere al origen de la censura en Castilla y en su desarrollo a lo largo del siglo XVIII, aunque se harán menciones a las peculiaridades territoriales de los demás reinos peninsulares y de los territorios americanos para los aspectos más destacados.

La censura previa, ejercida desde los órganos gubernamentales, es la pieza angular de un sistema que entiende la imprenta como regalía. Definido negativamente podría afirmarse que el principio fundamental en el Antiguo Régimen es la prohibición general de publicar, imprimir, vender o importar libros sin la autorización del Monarca. De modo que las licencias emitidas por su Consejo son dispensas a esa prohibición. Como ocurría para el resto de aspectos del Gobierno, un rey no podía disponer arbitrariamente de su poder, ni de su regalía, sino que debía atender al criterio de *utilidad pública*, que sólo podía ser juzgado por el propio rey o por aquellos en los que él delegara. Y en la literatura de la época, aún cuando no tuviera equivalente jurídico, se le denominaba *juez de imprenta*.

¹³³ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 26.

¹³⁴ GARCIA CARCEL, Ricardo, *La leyenda negra. Historia y opinión*, Madrid, Alianza, 1992.

¹³⁵ En general, será el Consejo de Navarra el encargado de conceder las necesarias licencias de impresión para las obras impresas dentro del reino.

Para la concesión de las licencias de impresión el Monarca, como veremos, delegó en el Consejo de Castilla, y éste, a su vez en uno de sus miembros, el *juez de imprenta*. Aunque está presente en la legislación como tal desde el siglo XVII, hasta el XVIII no adquiere su máxima representación, cuando se le concede la facultad de subdelegar y el conocimiento judicial en materia de imprenta frente a la jurisdicción ordinaria¹³⁶. Su origen puede fijarse en la disposición que promulga Felipe IV en 1627, donde se nombra a una persona del Consejo de Castilla como Comisario para otorgar licencias, y que a partir de 1692 será denominado Ministro Superintendente de Imprentas¹³⁷.

La función del Juez de Imprenta que más nos interesa es la concesión de licencias de impresión de libros nuevos previamente censurados atendiendo a la demanda del rey de que fueran útiles y necesarios. Ejerce, por tanto, una función gubernativa: asegurar el control preventivo de los libros impresos e importados que fueran a circular en el territorio de la Monarquía mediante la concesión de la licencia correspondiente. Es, más allá de su eficacia, un filtro del monarca hispano para asegurar la publicación en sus reinos de libros adecuados.

Con todo, no sería ésta la única actividad desarrollada por las autoridades civiles en materia de censura de libros. Su actuación judicial resultó cada vez más importante. Así, además de la concesión de licencias, se encargó también de la tasación de precios, conocimiento y sentencia de causas referentes a privilegios de impresión o a la vulneración de leyes sobre la materia, y, otras funciones como el control y la visita de librerías o la vigilancia de puertos secos y marítimos, que eran propias de la Inquisición hasta mediados del XVIII y que desde entonces son compartidas. El Juez de Imprentas muestra, a lo largo del siglo, su capacidad para acumular distintas actividades relacionadas con la política de control textual, en esa búsqueda de una mayor eficacia desde la Corona, confundándose las labores que hoy podríamos denominar “administrativas”, como la concesión de licencias, con las “judiciales” como procesos, multas o embargos. Sin embargo, como veremos, el peso que este oficio tenga en el

¹³⁶ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 193.

¹³⁷ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 317.

aparato censor fue variando con los distintos monarcas determinado, no sólo por el cambio de rey, sino también por quién desempeña el cargo, el contexto en el que lo hace y las posibilidades legales que se le brindan, siendo su dependencia del Consejo de Castilla el elemento que determine el grado de autonomía del que goce.

De manera general, el mecanismo que se exigía para la solicitud de una licencia de impresión era, a grandes rasgos, el mismo que se tenía con los Austria. Los interesados, que podían ser el autor, el editor, el traductor o el impresor, representados por un procurador o ellos mismos, acudían a una Escribanía del Consejo¹³⁸ con el manuscrito y un memorial, encabezado por la fórmula MPS (*Muy Poderoso Señor*)¹³⁹. La solicitud era similar que la empleada para demandar cualquier otro privilegio real, y debía contener una declaración de autoría y una justificación de su utilidad, por lo que la aprobación de libros no fue un mecanismo creado *ex profeso*, sino que se tramitó como el resto de peticiones al monarca.

La práctica administrativa era también similar a la existente, heredada de la tradición secular. La hoja del memorial se doblaba por la mitad y en el vuelto se van anotando de manera sucesiva los pasos que sigue el expediente. Ahí es donde se registra su llegada a la Escribanía, la remisión al Juez y el envío al censor. Cuando el manuscrito vuelve a las oficinas con el parecer del revisor, se veía en la Sala Primera de Gobierno del Consejo, anotando los miembros que se encuentran presentes, que despachaba la licencia o su negación. Las dificultades para realizar una cronología precisa del tiempo de tramitación de un expediente de impresión estriban en la propia forma administrativa. La datación que suele aparecer en los documentos señala la recepción en la Escribanía, que se considera la fecha de presentación ante el Consejo (los memoriales de petición no van fechados), la remisión al censor y la vista por la Sala. Así, se puede establecer una relación del tiempo transcurrido desde el registro en la Escribanía hasta la expedición de la licencia, quedando en el aire el tiempo que podía

¹³⁸ Desde 1712 será sólo a través de la Escribanía de Gobierno de la Cámara, en un intento del monarca por evitar los abusos y llevar un control exhaustivo de las obras que se permitían imprimir.

¹³⁹ Así se ordenaba en la *Pragmática de los tratamientos y cortesías* de 1586, citado por BOUZA, *op. cit.* (nota 127), pág. 31.

transcurrir entre la presentación del memorial y el inicio del proceso, ya que la literalidad de los documentos no permiten mayor concreción.

Por tanto, recibido el memorial, el escribano lo remitía al Juez de Imprentas, quien nombraba al censor o censores encargados del examen del manuscrito, eligiendo para ello a personas de reconocida valía y, a poder ser, con nociones sobre el tema que trataba la obra. Las censuras se podían escribir en el mismo documento que recibían o en una nueva hoja, que se adjuntaba al expediente al archivar, sin que exista una pauta común al respecto, ya que cada censor, condicionado en ocasiones por la extensión de su dictamen, actuaba según su parecer. Aunque se tiene en cuenta el informe del censor, la decisión última es del Consejo, pues en él es en quien se delegó la facultad, en concreto de su Sala Primera de Gobierno. En caso de que el parecer fuera afirmativo, se mandaba el original a la Escribanía para que se firmasen todas las páginas y diesen certificación de la licencia al interesado; en caso negativo, se archivaba el original en el Consejo¹⁴⁰. Una vez impresa la obra se llevaba a la Escribanía de nuevo, donde el Corrector General daba la fe de erratas. Tras ella, se daba la tasa y se entregaban los originales preceptivos, cuyo número varió a lo largo del siglo. En ocasiones, aunque el informe fuera positivo, el dictamen final podía retrasarse meses o años, según la conveniencia del momento.

Para las reimpresiones el trámite podía ser más sencillo. Se entregaba el impreso que se quería editar y, si no tenía enmiendas, no necesitaba censura, aunque esto quedaba al criterio del Juez, que podía enviarlo a una nueva revisión si existían dudas sobre el contenido¹⁴¹. En cuanto a los impresos menores, la censura la hacía el mismo Juez, ayudado por el Portero; si eran de poca importancia las autorizaba el mismo Juez sin censura. Fuera de la Corte, los papeles menores obtenía la licencia de los Regentes de las Audiencias o de los Justicias, considerados subdelegados ordinarios de imprentas.

¹⁴⁰ Para más detalles sobre la producción de la documentación que actualmente se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, BENITO ORTEGA, *op. cit.* (nota 126), págs. 179-193.

¹⁴¹ A la vista de la documentación consultada no existe un patrón claro en el envío de las reimpresiones a censuras, quedando al arbitrio del Juez.

Los obispos, por su parte, estaban facultados para conceder licencias de reimpresión a libros religiosos y de latinidad¹⁴².

A pesar de que el encargado de remitir la obra a los censores fue, al menos durante el siglo XVIII, el Juez de Imprentas, toda la documentación encontrada, incluida las respuestas de los censores en sus aprobaciones, hace referencia al Consejo y no al Juez. Si bien es cierto que recogen el tratamiento que de manera individual se hacía a los Consejeros. Es significativo, pues ilustra como los propios protagonistas consideran que la fuente de autoridad en materia de imprenta es el Supremo de Castilla, y no la persona en quien está delegada la tramitación burocrática. No en vano, en los numerosos ejemplos de ediciones del XVIII que han llegado a nuestras manos, la licencia expedida se denomina *Licencia del Consejo*, y sólo en alguna ocasión es recogida como *Licencia del Juez*, siendo ésta más frecuente en obras de menor entidad, cuya competencia era, recordemos, del propio Juez y no del Consejo.

En este capítulo vamos a intentar analizar el papel que jugó el Consejo de Castilla en la censura a través de la legislación de imprenta del siglo XVIII. Para ello es necesario conocer primero cuál es el marco legal vigente a la llegada de Felipe V al trono, realizando un rápido repaso a los antecedentes legales emitidos durante los dos siglos de la Monarquía de los Habsburgo y, cuando sea posible, las justificaciones que emplean para ello. Esto nos permitirá contextualizar y comprender, al menos en parte, el desarrollo legal que se produce a lo largo del Setecientos, y que hemos dividido en cuatro fases cuyos ejes centrales serán las disposiciones adoptadas a mediados de siglo por el más famoso Juez de Imprentas, Juan Curiel (por las repercusiones y la respuestas a sus autos), las reformas hechas en tiempo de Carlos III y el periodo de transición que llevará a la libertad de imprenta.

Un rasgo fundamental del Antiguo Régimen es que se configura de raíz como un Estado-Iglesia. Todo súbdito de la Monarquía pertenece a dos esferas, y como miembro de las dos se comporta en todo momento. Los soberanos veían difícil gobernar a hombres que no aceptasen la misma creencia religiosa, por ello buscaban

¹⁴² REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 408-409.

el apoyo de la Iglesia y se convierten el brazo secular que aquélla precisaba para combatir a los heréticos, convencidos de que bajo ideas religiosas se ocultaban frecuentemente opiniones políticas subversivas. De esta forma nace la unión Iglesia-Estado¹⁴³, unión de la que ambos salían beneficiados.

Por ello, antes de terminar el capítulo se ha querido destacar de manera especial el papel jugado por los miembros del estamento eclesiástico dentro del mecanismo de control del libro. El objetivo es analizar si la reiterada referencia a su pérdida de influencia en el aparato censor se ajusta a la realidad o el clero supo sortear las barreras para mantener una cuota de poder, además de conocer cómo conviven ambos sistemas de censura y cómo se traduce en la práctica esa unión de Estado e Iglesia en el siglo XVIII, prestando especial atención al papel que juega la Inquisición dentro de todo este entramado.

Finalmente matizar que la legislación relativa a la imprenta durante el siglo XVIII es, como ya hemos señalado, numerosa y diversa¹⁴⁴. Es por ello que en el presente trabajo no podemos abordarla en su totalidad. De todas las normas aprobadas sólo destacaremos aquellas que de manera directa hagan referencia al sistema censor, dejando de lado aquellas que se promulgaron con otro fines, como podría ser el depósito legal, las disposiciones sobre el funcionamiento de las imprentas, la calidad del papel y las impresiones, la tasa, el comercio o los privilegios, que sólo mencionaremos cuando sea necesario para contextualizar las medidas relativas a la censura o porque afecten al funcionamiento de la misma. Además, por la peculiaridad de sus características, se ha dejado a un lado la legislación sobre prensa periódica, ya que de manera general recayó en el Consejo de Estado, y no en el de Castilla.

¹⁴³ MUÑOZ CALVO, Sagrario, *Inquisición y ciencia en la España Moderna*, Madrid, Editora Nacional, 1977, pág. 15.

¹⁴⁴ En este sentido, la obra de Fermín de los Reyes que ya hemos mencionado supone una honrosa excepción, con los inconvenientes de que se trata de una general de toda la Edad Moderna y no específicamente del siglo XVIII y de que no traza un discurso lineal, sino que va fijando el foco en distintos elementos específicos, siendo, no obstante de gran interés por su visión de conjunto y por el importante apéndice documental del segundo volumen de la obra, donde se reproducen muchas de las disposiciones que permanecían dispersas.

Pero si la práctica dista de la ley, ¿por qué estudiar el marco legal? Antes de analizar los casos concretos del mecanismo real de censura, de ver cómo se relacionan autores y censores y del papel que juegan en ello el Juez de Imprentas y el Consejo de Castilla debemos conocer qué establecía la ley que podía y debía hacer cada uno en cada momento, pues sólo así podremos entender sus comportamientos. Las leyes se incumplen, pero para saber cómo hay que conocer qué decían. Además, los historiadores suelen prestar atención a los elementos que suponen una ruptura del sistema, a las excepciones que diferencian un suceso y a sus protagonistas del resto de sus contemporáneos, perdiendo en ocasiones la perspectiva de cómo era realmente lo cotidiano, y sólo atendiendo a ambos aspectos nos podemos acercar al verdadero funcionamiento del régimen.

2.1. El sistema heredado

En la legislación sobre imprenta participan, desde su invención en Alemania, dos tipos de factores diferentes que determinan la intervención de los poderes secular y eclesiástico en la regulación del sector. La estructura y evolución del libro están condicionadas por todos los factores que convergen en ella. Los pensadores, y entre ellos destacan los propagandistas eclesiásticos, vieron en la imprenta un medio para difundir sus doctrinas e ideas. Por su parte, los impresores, que necesitaban grandes inversiones de capital, recurrieron a las autoridades para que éstas garantizaran su viabilidad frente a las posibles pérdidas que ocasionara el nuevo comercio y la competencia entre los mismos colegas, dando paso a la aparición de privilegios, monopolios e, incluso, exención de impuestos, como medidas proteccionistas enfocadas al fomento de una industria incipiente pero útil. Es así como surge la posibilidad de imprimir en exclusiva en una zona, editar una obra sin competencia y venderla sin impuestos excesivos, aunque con la contrapartida de que el precio no venía marcado por el mercado, sino por las autoridades que habían permitido su impresión.

El problema es que no sólo los autores ortodoxos descubren las posibilidades del nuevo invento, sino que sus enemigos, los heterodoxos y herejes, emplean ese mismo

medio para difundir sus ataques a las autoridades, a los dogmas de la Iglesia o a las antiguas costumbres. Surgirán, entonces, controles para intentar asegurar que sólo se difundan aquellas ideas que interesan a los poderes establecidos en cada territorio. La supervisión de la Corona y de la Iglesia se traduce en una regulación exhaustiva que determina incluso la estructura interna del libro, siendo necesarios una serie de trámites burocráticos que se ven reflejados en la obra (licencias, aprobaciones, fe de erratas, datos en las portadas, etc.).

La legislación en materia de imprenta en Europa es de carácter eclesiástico. Los primeros problemas surgen con motivo de la aparición de textos heterodoxos en la cuna de la imprenta, Alemania. El testimonio más antiguo de censura libraria del que se tiene constancia es en Colonia entorno a 1478, aunque la primera norma de carácter universal se dará por Inocencio VIII el 17 de noviembre de 1478. Se trata de la bula *Inter multiplices*, precedente de otra homónima dada por Alejandro VI en 1501, que es más conocida y cuyo contenido es semejante. El objetivo es mantener la imprenta al servicio de la fe y de la cultura, bajo el control de la autoridad eclesiástica y con ayuda del brazo secular¹⁴⁵.

Frente a la separación de poderes que se instauró de manera progresiva a partir de los acontecimientos revolucionarios de 1789, no debemos olvidar que en la Edad Moderna predomina la interrelación de poderes y la flexibilidad adaptativa, lo que permitió la acumulación o el desglose de funciones y su delegación en distintas instituciones y autoridades. Esto favorecía que dentro del aparato institucional se readaptaran las leyes e instituciones a las nuevas preocupaciones sin eliminar ninguna de las ya existentes¹⁴⁶.

De un análisis general del periodo se observa que desde las primeras disposiciones emitidas por los Reyes Católicos hasta la normativa final del siglo XVII, existe una clara evolución que discurre desde el entusiasmo inicial hasta las complejas medidas restrictivas que irán implantando los monarcas de la dinastía de los Habsburgo. El

¹⁴⁵ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 80-83.

¹⁴⁶ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 129.

motivo es la percepción de que la imprenta puede convertirse en un peligro, que fuera la válvula de escape al control que el poder pretende ejercer sobre las ideas que circulan por sus reinos. Además, habría que añadir que frente a la política de control se va desarrollando una política de fomento de una industria considerada clave para el desarrollo de una sociedad y que se podía instrumentalizar para convertirla en el principal vehículo de difusión de los mensajes que políticamente convenían.

La censura era considerada como una tarea fundamental de las monarquías europeas desde principios de la Edad Moderna. Más que eso, era una regalía del monarca. Los primeros en introducir en el ordenamiento jurídico castellano el concepto de censura previa son los Reyes Católicos, con la Pragmática de 8 de junio de 1502 (recogida con cortes y una modificación en la *Recopilación* y en la *Novísima Recopilación*), referente tanto a los libros extranjeros como a los propios, ya estuviesen escritos en latín o en romance. Se trata de la primera definición en España de la imprenta como regalía. En la disposición original, los Reyes encargaban la censura previa a determinadas autoridades en función de cuáles eran los principales centros de impresión en la Castilla del momento. Estas autoridades comisionadas eran: en Valladolid y Ciudad Real (que pronto se trasladará a Granada), los presidentes de sus Chancillerías; en Toledo, Sevilla y Granada, sus arzobispos; en Burgos, su obispo; en Salamanca y Zamora, el obispo de Salamanca. A ellos también les correspondía la facultad de conceder licencia para vender dentro de Castilla cualquier obra impresa fuera de sus fronteras¹⁴⁷. Como vemos, salvo los presidentes de las Chancillerías¹⁴⁸, todo dignidades episcopales. El conflicto surge con el traslado de la Chancillería de Ciudad Real a Granada. Al insertarse, entonces, en la *Recopilación*, se modifica la Pragmática y se concede la comisión a la autoridad civil en detrimento de la eclesiástica, esto es al Presidente de la Chancillería, frente al Arzobispo de la ciudad. Como regalía, los reyes podían delegar el ejercicio de la censura en cualquiera de sus súbditos, y así lo hacen,

¹⁴⁷ GACTO FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 100), pág. 22.

¹⁴⁸ Sobre este punto se hablará al final del capítulo, pues los Presidentes de las Chancillerías eran, a su vez, también eclesiásticos.

por ejemplo, con las dignidades eclesiásticas, pero la atribución de la comisión a otra persona o institución revocaba la concesión anterior¹⁴⁹.

La norma de los Reyes Católicos respondía a la pretensión de definir el carácter público, aunque sujeto a licencia, de la imprenta y, a la vez, a la toma de conciencia de su doble dimensión como actividad que debe ser calificada y censurada y como vehículo de publicidad y utilización jurídica.

La multiplicidad de personas y organismos encargados de la censura libraria suponía un inconveniente para la eficacia del mecanismo. Es por ello que en aras de un mayor control, y dentro de la tendencia general de primar los Consejos, se procedió a la unificación de competencias en el Consejo de Castilla, en tanto que Consejo Real, por parte de Carlos V, en las Ordenanzas del Consejo de 1554, atribuyéndole la capacidad legal para otorgar licencias para imprimir “de nuevo algunos libros, de cualquier condición que sean”, para que se pudiese controlar que no eran “*inútiles* y sin provecho alguno”. Esta atribución genérica no era sencilla, ya que una parte importante de la producción escrita, por tratar temas de religión, tenía un carácter mixto, conservando la Iglesia cierta jurisdicción. En cualquier caso, la legislación, amparada por los juicios de eminentes juristas, fue aumentando la incidencia del poder civil en este ámbito, amparándose en el carácter católico de la Monarquía y en la obligación del rey de proteger a sus súbditos por mandato divino. Y para ello se recurre a una figura suficientemente desarrollada por el derecho canónico, como es la de un *juez delegado*, que en nuestro caso será del Consejo de Castilla, y que era capaz de conocer más allá de cualquier fuero¹⁵⁰. En cualquier caso, las atribuciones del Consejo en materia de imprenta no eran nuevas. Había tenido, casi desde el principio, competencia sobre la tasa y la concesión de privilegios, así como de algunas licencias de impresión. Esta medida sólo supuso que la función se consolidase como una jurisdicción ordinaria¹⁵¹.

¹⁴⁹ Para más información se puede consultar la obra de GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 97-120, y REYES, *op. cit.* (nota 49).

¹⁵⁰ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 129-140.

¹⁵¹ *Ibidem*, págs. 152-153.

El siguiente cambio importante es el que introduce Felipe II con la Pragmática de 1558, por la que se impone la licencia previa obligatoria a todo tipo de impresos, hispanos o extranjeros, siendo obligatorio, igualmente, la inclusión del nombre del autor. Contravenirlo podía llevar a la pena de muerte, lo que implicaba que el delito eclesiástico pasaba a convertirse en crimen de Estado. Desde este momento los Consejos territoriales, esto es el de Castilla, Navarra y Aragón, y los Virreyes, para los territorios de Ultramar, son las autoridades responsables de la concesión de licencias, pero no de manera exclusiva, sino que compartirán esta actividad con otras autoridades y órganos civiles y eclesiásticos¹⁵².

Durante el siglo XVII se mantienen, a grandes rasgos, las mismas preocupaciones y los mismos problemas, y por tanto la misma legislación, que se había desarrollado durante la centuria anterior. Uno de los elementos en los que los tratadistas hacen más hincapié será en la proliferación de obras profanas en lengua romance. Durante la primera mitad del siglo se suceden distintas iniciativas que justifican su oposición por el daño que este tipo de libros producen en las buenas costumbres, con especial incidencia en los sectores considerados más débiles, como eran las mujeres y los jóvenes. Las críticas recibidas tendrán cierto éxito y entre 1625 y 1635 se prohíbe la publicación de comedias y novelas por considerarlas lascivas, deshonestas y peligrosas para las buenas costumbres¹⁵³.

La iniciativa más interesante de principios del siglo XVII es la creación de una Junta en noviembre de 1607 con el objetivo de estudiar el sistema de licencias de impresión. Estaba compuesta por el conde de Miranda, el Inquisidor General, el Comendador Mayor de León, el Confesor del Rey, dos miembros del Consejo de Castilla (Rodrigo de Ayala y Francisco de Contreras) y dos inquisidores (Vigil de Quiñones y Andrés de Álava). El Inquisidor propuso el nombramiento de censores profesionales que velasen por el cumplimiento de las disposiciones y que sólo se diese licencia a "libros de provecho", dando un salario a los censores, lo que en la práctica suponía hacer cumplir la legislación ya vigente. Efectivamente la legislación no se modificó, y sólo se reiteró la

¹⁵² GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 159 y 220-232.

¹⁵³ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 267-269 y 292-303.

necesidad de que el Consejo de Castilla evitara dar licencia a libros inútiles y que siempre ésta fuera precedida del examen de varios religiosos¹⁵⁴.

Las iniciativas de reforma se suceden. Por ejemplo, en septiembre de 1623 el Inquisidor General Andrés Pacheco envía una carta al rey para poner remedio, según él, a la abundancia de libros perniciosos que circulaban por Castilla. Propone, para ello, que se encarguen personas señaladas que estén incentivadas y remuneradas “a costa de los autores de los libros porque es mucho lo que se debe trabajar para aprobar o reprobar, y sin premio es dificultoso hallar quien trabaje, y tan de ordinario”. El monarca responde que siempre le pareció lastimoso el que no se hubiera hecho así y que se debían enviar los libros en secreto a los censores “para que sus autores no pudiesen agenciar la aprobación ni escandalizarse de no ser aprobados”¹⁵⁵. A pesar del interés del monarca, sigue sin conseguirse el pago a los censores ni el anonimato de las censuras, ya que éstas aparecían impresas junto a la obra en cuestión, logrando los censores satisfacer su vanidad de ver sus nombres junto a elogiosos textos que más que censuras llegan a parecer dedicatorias laudatorias al autor y su obra. Esta cuestión no quedará resuelta hasta el reinado de Carlos III.

En 1627 se promulgó por Felipe IV la Pragmática más importante del periodo en lo referente al libro. Según el propio texto legal, era necesario aumentar el control sobre los impresos para frenar la proliferación de libros “no necesarios o convenientes”, y evitar así el desprestigio de la letra impresa. De hecho, suponía confirmar que la práctica censoria dispuesta en la normativa en vigor no era efectiva, lo que parece corroborar la existencia de quejas sobre la laxitud de los censores, que en muchos casos estaban confabulados con los autores y que dejaban pasar pasajes que posteriormente eran denunciados por la Inquisición, prueba de que el sistema pensado para evitar la difusión de ideas nocivas no era lo suficientemente eficaz.

En dicha pragmática se siguen las indicaciones que Clemente VIII había introducido en 1618 en el *Índice* romano, por el cual se mandaba que todo impreso debía ir

¹⁵⁴ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 269-271.

¹⁵⁵ *Ibidem*, págs. 304-306.

acompañado del nombre del autor y del impresor, del lugar y el año de la impresión, además de establecer la necesidad de censura previa para todo tipo de textos y las penas por incumplirlo. En la parte dispositiva, y esto es lo más importante, se señala la prohibición de imprimir relaciones, cartas, apologías, panegíricos, gacetas, sermones, discursos, papeles de estado y gobierno, arbitrios, coplas, diálogos y otros papeles “aunque sean muy menudas y de pocos renglones”, sin que tuvieran la aprobación de un miembro del Consejo (denominado Comisario¹⁵⁶) para la Corte, de Oidores y Ministros más antiguos en las ciudades con Chancillerías o Audiencias o de las Justicias en los demás lugares. Para las conclusiones y disputas, recaía en las Chancillerías y Audiencias o en los Rectores en las ciudades con universidad, previa censura del catedrático de la materia que tratara¹⁵⁷.

El Consejo de Estado, responsable de la política exterior y de la censura previa de las obras tocantes a las materias de su incumbencia, desconfiaba de la eficacia del Consejo de Castilla a la hora de filtrar las noticias históricas, que afectaban a las materias de Estado. Así, tras la salida del Conde-Duque, en 1645 se estipula que los libros de historia deberían ser examinados por el Consejo de Estado¹⁵⁸. Este órgano será también el encargado de examinar las relaciones de sucesos militares desde 1681¹⁵⁹ y de las gacetas y publicaciones periódicas, aunque para esto tendrán que decaer las normas que prohibían este tipo de publicaciones en 1680 y 1684¹⁶⁰.

El primer rasgo que cabe destacar sobre el sistema de control del libro que se encuentran los Borbón a su llegada al trono de España es la existencia de una superposición de jurisdicciones, que en cierta manera se mantendrá durante el Setecientos. Los obispos mantenían la censura previa de los textos religiosos, las órdenes religiosas la de los escritos de sus miembros, y un tercer grupo, el resto, que

¹⁵⁶ Sobre las figuras jurídicas del Consejo de Castilla para el siglo XVII es imprescindible la consulta de la reciente obra de BOUZA ALVAREZ, *op. cit.* (nota 127). Entre ellas resulta de especial interés la del *encomendero*, persona que antes de la aparición del Juez de Imprentas recibía el encargo del Consejo de seguir el desarrollo de cada solicitud de licencia.

¹⁵⁷ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 311-320.

¹⁵⁸ *Ibidem*, págs. 336-338.

¹⁵⁹ *Auto para que no se de licencia de impresión de relaciones de sucesos militares sin pasar primero por la censura del Consejo de Estado o del de Guerra, 1681, 2 agosto. AHN, Consejos, Leg. 50627.*

¹⁶⁰ AHN Consejos, Leg. 50627, *Prohibición de impresión de Gacetas. 19 de junio de 1684.* Citado y comentado por REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 341-343.

eran competencia exclusiva de la Monarquía. Aquí también existía una doble vertiente: la censura gubernativa o regia, ejercida por Consejo de Castilla y la religiosa, de carácter inquisitorial, aunque de origen episcopal, que correspondía al Consejo de la Suprema y Santa Inquisición. Del primero se deriva lo que conocemos como "censura gubernativa", del segundo, la denominada "censura inquisitorial". La censura gubernativa revisaba, de manera general, todos los manuscritos antes de ser publicados en los territorios de la Monarquía, a los que se añadía, en los casos en que era necesario, la censura religiosa. A la Inquisición le correspondía la censura de las obras ya publicadas después siempre de una delación, así como la de las obras que entraban ya impresas desde fuera de las fronteras. Aparte quedaban los folletos y publicaciones menores, en cuanto al número de páginas, que podían circular sin licencia o con la licencia de determinadas autoridades locales. La distinción entre censura previa y *a posteriori* es fundamental para nuestro análisis, ya que aunque nos interesa especialmente la intervención anterior a la impresión, no se puede obviar el mecanismo de control posterior, pues su existencia condiciona la actuación precedente. Pero además de la variedad institucional, existía una importante diversificación geográfica que sólo la implantación de los Decretos de Nueva Planta logrará disminuir, que no eliminar.

Seguir de manera exhaustiva la proliferación de leyes sobre imprenta y la distribución de competencias sería demasiado complejo. Pero sí es necesario resaltar quienes, al llegar el siglo XVIII, mantienen, de alguna manera, competencias en la concesión de licencias, y por tanto capacidad para intervenir en lo que se podía leer.

Como ya hemos apuntado, el Santo Oficio tenía limitada su actuación al control posterior, pero conservó la censura previa sobre las publicaciones que trataran sobre el Tribunal. En los siglos XVI y XVII, en los territorios de la Corona de Aragón, el papel del Santo Oficio como aprobante fue más extendida que en el caso castellano, pero como costumbre más que como atribución legal. Esta práctica se toleró hasta 1558. En 1550 Carlos I había prohibido a los inquisidores otorgar licencias; en 1554 se había hecho atribución exclusiva al Consejo de Castilla y en el 1558 se hace efectiva la

restricción. La tendencia es, pues, de una clara exclusión del Tribunal y de sus oficiales en la censura previa¹⁶¹.

Recogiendo la tradición anterior, los prelados y ordinarios tienen, desde 1558 la posibilidad de dar licencias de impresión para libros religiosos y de latinidad (lo que incluye misales, diurnales, pontificales y brevarios), aunque su jurisdicción será limitada poco después. No será hasta el reinado de Fernando VI cuando se extienda la licencia del Consejo de Castilla a este tipo de obras, permitiéndoles solamente las reimpresiones de obras que ya hubieran sido censuradas por el Consejo e impresas. Para las comunidades religiosas, era necesaria, además de la censura previa del Ordinario, el Superior de su orden, para solicitar, entonces, la del Consejo. Esta legislación ahondaba sus raíces en las disposiciones emanadas del Concilio de Trento, donde se impuso la obtención de la licencia de los superiores para autores religiosos, norma que, sorprendentemente, tuvo un alto índice de cumplimiento. Del mismo modo, en el índice romano de 1618, el papa Clemente VIII introdujo una instrucción que afectaba a los escritores religiosos, según la cual era necesaria la licencia del Ordinario y de sus superiores respectivos, debiendo constar estos trámites en los preliminares del libro. Algunas órdenes religiosas incluirán en sus estatutos esta censura interna previa, aunque se observan algunos incumplimientos. El caso más famoso es la del jesuita Baltasar Gracián, que publicó ciertas obras sin la aprobación de la Compañía por los problemas que podrían haber tenido para ser aprobadas, mientras que las demás eran publicadas siguiendo la norma tridentina¹⁶². En el plano civil, el Consejo recuerda la obligatoriedad de cumplir estas normas mediante un nuevo acuerdo en 1626, que será recogida en la *Novísima Recopilación* de Carlos IV¹⁶³.

Otra autoridad de carácter eclesiástico con capacidad de censura previa es el Comisario General de la Santa Cruzada. Su labor era doble. Por una parte, tenía autorización para dar licencia a la *Bula* homónima, con el objetivo de monopolizar la

¹⁶¹ Sobre el papel que juega la Inquisición y las justificaciones para hacerlo, consultar el apartado referente a este tribunal en el apartado 2.3. del presente capítulo.

¹⁶² REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 310-311.

¹⁶³ Acuerdo del Consejo acerca de libros compuestos o traducidos por religiosos o regulares. 30 de julio. Reproducido por Carlos IV en 1804, *Novísima Recopilación*, Título XVI.

impresión de indulgencias y jubileos por parte de los monarcas católicos frente a los que llegaban de Roma y de los que muchas veces no se tenía garantía de autenticidad, en un claro afianzamiento del regalismo hispano. Por otra, desde que en 1575 Felipe II dispusiera el privilegio de los libros de Nuevo Rezado a los monjes jerónimos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, era necesario que este tipo de obras contaran con la aprobación previa del Prior de dicho monasterio y con la licencia del Comisario de Cruzada, disposiciones que fueron confirmadas por Felipe III y mantenidas, con escasos cambios hasta el último tercio del XVIII, cuando el Consejo de Castilla recibirá la jurisdicción sobre los escritos religiosos¹⁶⁴.

Desde las *Partidas*, el Rector era el encargado de hacer la censura previa a los libros de cada Universidad. Con la implantación de la imprenta se mantendrá esta costumbre, siendo él quien tiene la capacidad para conceder las licencias de impresión, que muchas veces se imprimen en las prensas de la misma institución. Como en el resto de corporaciones eclesiásticas, la concesión del Rector venía precedida por el examen de una persona de probada calidad, en este caso de manera más clara, pues era el del Catedrático de propiedad de la materia sobre la que tratara el texto. Sólo si en la ciudad había Chancillería o Audiencia, ésta era la encargada de dar la licencia y no el Rector. No obstante, en el XVIII existen varias muestras de que no era así, como es el caso de Valladolid, cuyo Rector emite licencias de impresión sin la rúbrica de la Chancillería. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, explica en un informe a Curiel que los impresos sobre materias escolásticas eran autorizados por el *maestrescuela*, las conclusiones por el Decano de la respectiva facultad y los actos presididos por miembros de comunidades religiosas y colegios, por los superiores respectivos. Esta situación se mantendrá así hasta que en 1768, por un episodio particular¹⁶⁵, se

¹⁶⁴ Para más información sobre los libros de Nuevo Rezado en el siglo XVIII se pueden consultar el artículo más completo de REYES GOMEZ, Fermín de los, "Los libros del *Nuevo Rezado* y la imprenta española del siglo XVIII" en *Revista General de Información y Documentación*, 9 (1999), págs. 117-158.

¹⁶⁵ Se trata de la tesis defendida en la Universidad de Valladolid por el bachiller Ochoa, en la que se defendía la superioridad de los cánones sobre las leyes positivas, y que será aprovechada por Carlos III, a través de Campomanes, para ejercer un control férreo sobre las instituciones universitarias, punto que trataremos con mayor extensión a lo largo del texto. Para más información, EGIDO, Teófanés, "La tesis del bachiller Ochoa y el regalismo universitario", en ALVAREZ BARRIENTOS, Joaquín y CHECA BELTRÁN, José (Coord.), *El siglo que llaman ilustrado: homenaje a Francisco Aguilar Piñal*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, págs. 297-306.

nombren censores regios en todas las universidades, que serán los responsables del pase previo.

Aunque continuamente hablemos de una separación entre la censura civil y la religiosa, cabe recordar que no existe una separación efectiva, de hecho el Santo Oficio, que se entendería dentro de la segunda, es, sin embargo, por su configuración, un aparato del Estado, pues su máximo órgano de decisión es un Consejo más del sistema real, y aunque tiene un carácter mixto, es un instrumento en manos del monarca. Así que por muchos conflictos que hubiese, también en el siglo XVIII, entre el Consejo de Castilla y la Inquisición (los casos de Macanaz o de Olavide son los más destacados, pero no los únicos) su colaboración y coordinación siempre fue estrecha, o se intentó que así fuera, siendo el mejor ejemplo la lucha conjunta desde 1789 para combatir el mal francés.

Además de la concesión de licencias, se encargó a las autoridades eclesiásticas y seculares la vigilancia del tráfico de libros, para lo que se dispuso un sistema de visita a las librerías, al menos anualmente, en la que los visitantes debían comprobar que no se ofrecía al público ninguna obra condenada y que se exhibía el *Catálogo* de obras prohibidas y expurgadas que elaboraba el Santo Oficio para que los compradores pudieran comprobar la ortodoxia de sus adquisiciones. Esto se unía a la presencia de comisarios en las aduanas para evitar la entrada de libros impresos en el extranjero y prohibidos en los territorios del monarca católico. La posibilidad de que la Inquisición condenara obras autorizadas por el Consejo de Castilla será una continua fuente de conflicto, ya que implicaba que una obra había sido autorizada conteniendo ideas heréticas. Pero por otra parte, esta concesión a la Inquisición suponía el reconocimiento automático de las obras que se consideraran heterodoxas como obras prohibidas por las leyes positivas del reino. Una prueba más de la simbiosis entre los dos mecanismos de censura.

La censura debía poner en principio toda su vigilancia en tres aspectos: el absoluto respeto del dogma católico, el de la moral cristiana y el de las regalías de Su Majestad. No cabe duda de que la censura se desempeñó a conciencia, pero sería un error creer

que, siendo invariables sus objetivos, no pudo evolucionar en su grado de exigencia. La moral cristiana del siglo XVIII ya no es la misma del XVII, y no menos ha cambiado el concepto de decoro, por lo que obras o expresiones que antes no habrían sido censuradas lo fueron en el Siglo de las Luces. Al legítimo deseo de preservar el dogma, la moral y las regalías, se añadía la preocupación por lo útil, lo pedagógico y lo edificante, criterios a los que sólo podía satisfacer una ínfima parte de todas las literaturas del mundo. Ya desde la Pragmática de 1558 se insiste en que no se imprimiesen libros “inútiles o innecesarios”, sino que se ocuparan de “lo más necesario a la república”, es decir, libros de teología, medicina, derecho y de religión (misales, brevarios, etc.)¹⁶⁶. El concepto de utilidad será una constante en toda la legislación y documentación de imprenta.

Tampoco nos debe extrañar que la superposición de jurisdicciones generara conflictos allí donde la presencia física era más patente, como son los puertos y aduanas¹⁶⁷. Obviamente, existe una tensión por la pugna que se produce entre el mantenimiento de los fines teológico-jurídicos asentados y la necesidad de definir estructuras administrativas racionalizadas y eficaces.

La actuación de la Inquisición en esta materia, sobre todo en los siglos XVI y XVII, mediante la condena, recogida, quema de libros heréticos y, en general, control posterior, ha tendido a oscurecer la importancia de la labor del Juez de Imprentas del XVIII para los historiadores. La organización se dirigía a consolidar el poder civil como encargado de la censura previa y a la Inquisición de su control posterior. La flexibilidad institucional y el carácter mixto de la materia harán que sus atribuciones se puedan ir modificando, según avanza el siglo, en función de las coyunturas y necesidades.

El libro y las Indias

La legislación del libro para la Indias siguió, de manera general, las pautas que desde la Corona se daban para los territorios castellanos, de los que dependían jurídicamente. El rigor en el control era el mismo que para Castilla, o mejor dicho, la intención de que

¹⁶⁶ LOPEZ, *op. cit.* (nota 3) págs. 68-72 y GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74) pág. 163.

¹⁶⁷ TORQUEMADA SÁNCHEZ, *op. cit.* (nota 95) págs.57-63.

fuera así. Del mismo modo que el fomento de esta nueva industria se había materializado en la exención del pago de determinados impuestos, el comercio de libros con las Indias quedó exento del almojarifazgo¹⁶⁸, debiendo contribuir, eso sí, con el impuesto de avería, destinado a sufragar la escolta armada que acompañaba las expediciones comerciales a América¹⁶⁹.

Para los impresos referentes a América, el Consejo de Indias, desde 1556, dispone de la facultad de revisar previamente el contenido de las obras que se impriman y vendan en Indias, así como los que tratan sobre dichos territorios, aunque la realidad sería distinta. En la disposición de 1558 no se le menciona, pudiendo entenderse que se incluía dentro de los Consejos territoriales, pero lo cierto es que se imprimieron libros sobre América con la sola licencia del de Castilla y para otras fue necesaria la doble licencia. Se ha apuntado que es posible que, al menos en el XVI, lo que hiciera el de Indias fuera emitir un dictamen previo a la concesión de la licencia por el Consejo de Castilla, lo que explicaría que se encuentren volúmenes con ambas licencias o sólo con una de ellas¹⁷⁰.

En general, la preocupación era evitar que se divulgaran obras que contuvieran información falsa sobre la conquista de las Indias, la evangelización posterior o el trato a los nativos. Para contribuir a este fin, desde la Corona se intentará unificar el mensaje creando la figura del Cronista Mayor de Indias en 1571, cuyo fin era erigir una crónica oficial de la conquista americana, prohibiendo todas aquellas no oficiales, especialmente las firmadas por el padre Bartolomé de las Casas. Es de sobra conocido el escaso éxito de estas medidas habida cuenta del alcance que hasta nuestros días ha tenido la “leyenda negra” de la conquista española de los territorios americanos¹⁷¹.

¹⁶⁸ Según el Diccionario de la Real Academia Española, derecho que se pagaba por los géneros o mercaderías que salían del reino, por los que se introducían en él, o por aquellos con que se comerciaba de un puerto a otro dentro de España. *Diccionario de la Lengua Española*, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, <http://lema.rae.es/drae/?val=almojarifazgo> [Consulta 20/08/2012]

¹⁶⁹ REYES, *op. cit.* (nota 49) pág. 171.

¹⁷⁰ *Ididem*, págs. 188-193.

¹⁷¹ GARCÍA CÁRCEL, *op. cit.* (nota 134).

En cuanto a las obras impresas en Indias o cuyo destino era el mercado editorial indiano, en 1539 se otorgó a los Cromberger, una familia de impresores alemanes afincados en Sevilla y bien relacionados con el arzobispo de la ciudad, el privilegio para la exportación de libros a México. Este privilegio se mantuvo hasta 1562, aunque de los Cromberger había pasado a otro impresor mexicano, Juan Pablos, oficialmente el primer impresor americano. Finalmente, en 1558, la Princesa, en nombre de Felipe II, y tras las numerosas protestas de los demás impresores por quedar fuera del negocio y de las autoridades indianas por el incumplimiento de las condiciones del privilegio, se concederá la libertad para ejercer el oficio, de igual manera que ya ocurría en Castilla. También en el siglo XVI se otorgan privilegios para las cartillas de primeras letras y para los libros de coro al Hospital Real de Indios de México y a un clérigo de Medina del Campo, respectivamente, pero éstos sólo serán efectivos pocos años¹⁷².

Ante la ausencia de una legislación específica, las primeras obras salidas de las prensas americanas intentarán copiar la legislación castellana, adaptándola a la realidad colonial. Así, si en Sevilla era necesaria la aprobación previa censura del Arzobispo de la ciudad, en México se establecerá la necesaria licencia del Obispo de México. Con el paso del tiempo las autorizaciones eclesiásticas se acompañarán de las civiles, mandadas hacer por el Virrey correspondiente. A partir de 1558 se observa que las obras impresas en los territorios de ultramar eran precedidas de la aprobación y licencia del Virrey y el Arzobispo, para el caso de México, y de las Audiencias y Obispos para el resto del territorio, hasta que en 1560 se determina, reiterando lo ya expresado por Felipe II en 1556, que las autoridades coloniales deben remitir los manuscritos originales para que el Consejo de Indias los examine, lo que en la práctica suponía un grave perjuicio para los autores indianos por la dilatación del tiempo que necesariamente transcurría hasta su impresión, así como los peligros que entrañaban los dos viajes oceánicos que eran necesarios para cumplir la orden real. A pesar de las quejas y secundado por el escaso desarrollo de la imprenta en los nuevos territorios, esta legislación se mantendrá, a grandes rasgos, durante todo el siglo XVII¹⁷³.

¹⁷² REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 69-78.

¹⁷³ *Ibidem*, págs. 175-180, 207-209 y 329-334.

El elemento diferencial más importante de la legislación indiana es el hecho de que se reiterara, desde las primeras normas, la prohibición de llevar a América o imprimir en sus prensas cualquier libro profano, para evitar que los indios, tenidos por “inocentes”, se aficionaran a lecturas inútiles, aunque como el resto de la legislación será reiteradamente incumplida, ya que hay constancia desde fechas muy tempranas de libros profanos en romance que eran llevados a Nueva España, muchos disimulando el contenido real de sus páginas detrás de títulos que llevaban al equívoco, como también ocurría en la Península. La realidad, por tanto, no difiere tanto de lo que sucedía en la metrópolis, donde el argumento de debilidad se esgrimía para alejar los libros profanos de jóvenes y mujeres y donde las obras intentaban burlar la estricta legislación con cuidados títulos o con el favor de censores o autoridades.

Además de las prohibiciones generales de obras cuyo contenido era herético, para el caso americano se cuidarán ciertos temas especialmente delicados. Además de los libros profanos y de caballerías, considerados poco útiles para la población autóctona, se cuidará que no circulen obras cuyo objeto sea la reciente conquista por parte de Hernán Cortés y el resto de descubridores, así como las descripciones exhaustivas del terreno, ya que podía afectar a la seguridad de los nuevos territorios al dar información valiosa a las potencias extranjeras. El control para lograr la efectividad de estas disposiciones será doble, tanto en Sevilla, el puerto de salida hacia el Nuevo Mundo a través de la Casa de Contratación, encargada de supervisar el material antes de embarcar, como en las Indias, donde se encargaba a Virreyes y obispos vigilar el cumplimiento de las leyes. Esta diversidad terminará culminando con la transferencia de la autoridad al Consejo de Indias, que se convertirá en el órgano encargado de otorgar la licencia de las obras que traten de aquella zona¹⁷⁴, en claro paralelo a lo que había ocurrido en Castilla.

Más difícil que el comercio librario fue el desarrollo de la prensa en los nuevos territorios, donde no se produjeron las condiciones económicas adecuadas para su impulso, en parte por lo reducido del potencial mercado lector, unido a la competencia que suponían los impresores peninsulares, que amortizaban la inversión que suponía

¹⁷⁴ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 178-180.

dar a luz una obra al poder venderla a ambos lados del océano. Los libreros castellanos, especialmente los sevillanos, influyeron para que la situación de dependencia se mantuviera y así seguir controlando esa parte del mercado.

Navarra

Durante toda la Edad Moderna la situación de Navarra difiere ligeramente de la del resto de los reinos peninsulares en materia de imprenta, del mismo modo que en el resto del marco legal. Durante los primeros siglos modernos, al igual que ocurría en los demás territorios de la Monarquía, existe una clara confusión legislativa motivada por la novedad que suponía la aparición de la imprenta y el reducido número de impresores que se van sucediendo en las villas y ciudades más importantes del reino, destacando de manera especial Estella y la capital, Pamplona. Ante este caos legislativo, y para evitar situaciones confusas, el 26 de junio de 1560 se ordena que no se pueda imprimir ningún tipo de libro o escrito sin permiso del Consejo Real de Navarra, “so pena de destierro perpetuo de todo este nuestro Reino de Navarra y perdimiento de todos sus bienes y aparejos”¹⁷⁵. En realidad, más que una norma *ex profeso* se trata de una transposición de la legislación castellana respetando la independencia institucional del reino navarro.

Como ocurriera en Castilla, la normativa al respecto se irá repitiendo a lo largo de los años para recordar a los impresores y editores navarros el procedimiento que debían seguir y evitar los continuos conflictos provocados por los reiterados incumplimientos que justifican la necesidad de promulgar de nuevo textos legales ya vigentes. Como ejemplo, tras la disposición de 1560, en 1572 se daría una nueva Pragmática sanción por la que se ordenaba que no se pudieran imprimir en el reino los libros de rezo sin ser examinados previamente por las personas que designara el Regente y el Consejo, en quienes recaía la responsabilidad de otorgar las licencias. Por la misma, se prohíbe la introducción y venta de los impresos fuera del reino sin el preceptivo examen del Consejo¹⁷⁶.

¹⁷⁵ Sobre estos aspectos y otros del libro en Navarra en la alta Edad Moderna conviene consultar OSTOLAZA ELIZONDO, María Isabel, *Impresores y libreros en Navarra durante los siglos XV-XVI*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004.

¹⁷⁶ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 247-249.

Durante el siglo XVIII la legislación Navarra intentará equipararla con la castellana y resolver los problemas que se derivaban de su consideración como reino extranjero¹⁷⁷.

La Corona de Aragón

La primera legislación civil de imprenta en el Reino de Aragón se remonta a 1593¹⁷⁸, cuando las Cortes de Tarazona establecen la obligatoriedad de la licencia del Rey, a través del Presidente de la Audiencia Real, que se anteponía a la necesaria licencia del Ordinario para las obras religiosas. La principal diferencia respecto a la normativa castellana, a primera vista, será la peculiaridad de que se comisiona a una persona y no a un organismo, aunque la autoridad de dicho comisionado recaiga en el desempeño de su puesto institucional.

El establecimiento legal de una censura previa en el Principado de Cataluña fue menos tardío que para el caso aragonés, y se remonta a 1573, cuando se estableció la necesaria censura previa de los libros por el Virrey de Cataluña, encargado de mandarla examinar y de otorgar la licencia en nombre del Rey cuando considerara oportuno en virtud de la aprobación del censor designado¹⁷⁹. El análisis de los libros publicados indica que la licencia del Virrey sólo se publicaba cuando iba acompañada de un privilegio, siendo la práctica común que las obras vieran la luz con la licencia del Obispo, del Vicario General o incluso de la Inquisición, lo que no quiere decir que no se emitiera la licencia civil, sino que no tenemos ninguna evidencia documental de que así fuera¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Para el siglo XVIII, ITURBIDE DÍAZ, Javier, *Escribir e imprimir: el libro en el Reino de Navarra en el siglo XVIII*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007.

¹⁷⁸ Como señala Reyes, no hay constancia de normas sobre imprenta antes de 1593, lo que no quiere decir que no se realizara el examen previo de las obras religiosas que quedó establecido en el Concilio de Trento. REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 249-251.

¹⁷⁹ Sobre la imprenta en Cataluña durante los siglos XVI y XVII se puede completar con LLANAS I PONT, Manuel, *L'edició a Catalunya: segles XV a XVII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2002 y para el XVIII, del mismo autor, *L'edició a Catalunya: el segle XVIII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2003.

¹⁸⁰ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 251-254.

El vacío legal en Cataluña fue puesto de manifiesto por el Subdelegado de imprentas Juan Moreno en su respuesta a Juan Curiel el de 2 de noviembre de 1754, en la que hace referencia a la práctica anterior a 1717, explicándolo así:

“No hay constitución ni fuero que hable de imprentas, y la inmemorial observancia de los impresores de esta capital hasta el año 16 era para imprimir libros nuevos acudir al Vicario general, presentarle los originales, y obtenida la Licencia, la pedían al regente quien la concedía precediendo la aprobación de persona de ciencia y conciencia a quien remitía el libro.

Para papeles sueltos como sermones, novenarios y otras de esta clase se practicaban las mismas diligencias.

Para papeles jurídicos, relaciones de servicios y otros semejantes solo se acudía por la licencia del Regente.

En cuanto a las reimpresiones de libros extranjeros se practicaban las mismas diligencias que si fuese obra nueva, pero en los libros impresos ya en estos Reinos, constando en el mismo libro aprobaciones y licencias, ni añadiéndoles cosa alguna, se imprimían con la sola licencia del Regente [...]”¹⁸¹.

De esta se desprende que, al menos, para el siglo XVII la licencia del ordinario era necesaria para todas las obras, a excepción de los papeles jurídicos, para los que bastaba la licencia del Regente de la Audiencia. Para los libros que habían sido editados previamente en Castilla, y que por tanto habían obtenido en beneplácito del Consejo Real, lo común era reproducir sus aprobaciones y licencias, suprimiendo el número de pliegos y el precio por si éstos no coincidían, lo que facilitaba, a su vez, que una vez impresos pudieran circular por Castilla.

La situación legal del reino de Valencia antes del siglo XVIII es, si cabe, aún más difícil de determinar. No se han encontrado disposiciones legales sobre la materia y los estudios hechos hasta la fecha sobre el tema no resultan tampoco esclarecedores¹⁸². En general, parece ser que la práctica común seguía la normativa eclesiástica para la licencia de impresión, imitando la legislación castellana para lo que afectaba a

¹⁸¹ AHN, Consejos, Leg. 50689.

¹⁸² Tratados en el capítulo primero, en el punto 1.2. “Estado de la cuestión”.

privilegios, importaciones y exportaciones. Es, por tanto, común la presencia de aprobaciones eclesiásticas desde la implantación de las primeras prensas hasta la extensión de la normativa tridentina, que establecía la necesaria licencia del ordinario y de los superiores de las órdenes religiosas en el caso de que se trata de autores religiosos, ambas con sus respectivas censuras previas. Con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XVII se irá implantando la censura civil por parte del Virrey, a imitación de lo que ocurría en Cataluña, pero sólo para la concesión de privilegios, siendo la censura religiosa la única universal.

Para todos estos territorios, el comercio con Castilla suponía una fuente constante de conflictos. A partir de la Pragmática de septiembre de 1558, cualquiera que quisiera introducir en Castilla libros en romance impresos fuera del reino debía solicitar la licencia del Consejo de Castilla, lo que incluía los salidos de las prensas del resto de reinos peninsulares (Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra). En 1569 se hará extensivo a los libros de rezo¹⁸³, lo que suponía, a la postre, un grave perjuicio a los impresores situados en los territorios periféricos, que para imprimir en sus propios territorios tenían pocas barreras, pero que si pretendían ampliar su comercio al principal mercado editorial debían sujetarse al filtro del Consejo de Castilla, con el consiguiente retraso en la impresión y el riesgo de encontrar una respuesta negativa, además de la sumisión que suponía a la autoridad regia, que ejercía un control más férreo en el reino castellano.

Privilegios

Un aspecto al que no hemos prestado atención hasta el momento es la figura de los privilegios de impresión. El origen de los mismos hay que buscarlo en los intereses comerciales de los impresores. Dadas las elevadas inversiones necesarias para poner en marcha una imprenta, las restricciones legales y el complicado mercado al que tenían que hacer frente sus productos, desde el poder se instrumentaliza una figura jurídica que ya existía en la legislación, el privilegio. Por éste, la persona beneficiada

¹⁸³ *Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley IV. *Pragmática y declaración sobre los libros Ecclesiásticos que vienen impresos fuera del Reyno. Y para que de aquí en adelante en estos reynos no se puedan imprimir sin licencia de los señores del Consejo de su Magestad...*

obtenía la exclusividad para la publicación de una obra por el tiempo que se estipulara (y que es variable). Se evitaba así que se dieran casos de competencia desleal entre impresores, autores y editores, además de asegurar al interesado la recuperación del capital invertido en el proyecto. El recurso al privilegio también se empleó como fuente de financiación de determinadas instituciones, sobre todo religiosas, al tiempo que se justificaba con el argumento de que así se aseguraba la calidad y utilidad de los libros impresos. El privilegio era concedido por un tiempo a una persona o institución, pero cada uno sólo tenía vigencia en el territorio concreto para el que era emitido. Así, un privilegio para imprimir una obra en Valencia no suponía la posibilidad de imprimirlo en Castilla, por ejemplo.

Para la obtención de un privilegio, el autor, impresor o editor de la obra debía elevar una solicitud al poder civil correspondiente, que tras mandar examinar la obra podía concederlo o denegarlo. La obtención, por tanto, de un privilegio, suponía la aprobación previa de la obra. Debe quedar claro, no obstante, que la licencia es la autorización para imprimir, mientras que el privilegio implica la exclusividad. Así, la concesión de un privilegio precisaba el paso previo de censura, lo que implicaba la licencia, pero ésta no aseguraba la exclusividad.

Así pues, durante los siglos XV, XVI y XVII se va creando un complejo engranaje de censura previa gubernativa que basa su existencia en una doble fundamentación. Por una parte el Monarca, como protector de la Iglesia y del dogma cristiano, debe proteger a las almas de sus reinos de las lecturas perniciosas. Por otro, recoge la herencia del derecho romano según la cual el rey debía velar por el buen funcionamiento de la república, lo que se traduce en buscar que todas las obras impresas en sus territorios o que circularan por ellos tuvieran el sello de la utilidad.

En cualquier caso, no debemos olvidar que claramente existen dos mecanismos de censura, no siempre coincidentes: el ideal, que es el que se rige por las leyes en vigor, y el real, fruto de los comportamientos humanos y que nos lleva a tener en cuenta los reiterados incumplimientos de la legislación y cómo los actores implicados en el

proceso adaptan la norma que deben cumplir a las prácticas comunes en su tiempo, que son vistas por sus contemporáneos como correctas.

2.2. Las reformas legislativas de los Borbones

2.2.1. Las primeras disposiciones

La tónica general del nuevo siglo, como ya sucediera en las centurias anteriores, es la indicación para que se cumpla la legislación vigente, prueba evidente de que la práctica común era su reiterado incumplimiento. Así lo había hecho Carlos II en 1682, y lo repetirá Felipe V en sus primeras disposiciones, ya que el contexto bélico no invitaba al nuevo monarca a iniciar profundas reformas, que deberían esperar a que la situación política fuera más estable y su control sobre la administración y los distintos reinos más efectivo.

Así, la primera medida adoptada por el nuevo rey en materia de imprenta se da en 1705¹⁸⁴ donde se ordena que no se imprima papel alguno sin expresa licencia de su Consejo. Se repite en 1707 un Auto del Consejo en los mismos términos que el anterior¹⁸⁵, estableciendo en ambos casos penas de diez años de presidio y quinientos ducados de vellón para los que lo trasgredieran. En 1709, en las que será la tercera norma en cuatro años, y para evitar el punto de evasión en el que se habían convertido las reimpresiones, se incluyen a éstas entre las obras que necesitan licencia previa del Consejo¹⁸⁶, variando las penas a merced del gobernante y una multa de treinta mil maravedíes.

No parece que ninguna de las medidas amedrentara a impresores y libreros, a pesar de que las penas a los infractores podían ser de diez años de presidio más una cantidad

¹⁸⁴ *Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley XI. *Cédula de 30 de junio de 1705. No se imprima papel alguno sin licencia del Consejo o del Ministro encargado de esta comisión.*

¹⁸⁵ *Auto acordado del Consejo. No se imprima nada sin licencia del Consejo.* AHN, Consejos, Lib. 1475, n° 55, f. 108. 30 de junio de 1707.

¹⁸⁶ *Real Provisión mandando observar el Auto Acordado de 30 de junio de 1707 sobre que no se imprima sin licencia del Consejo o del Comisionado.* AHN, Consejos, Lib. 1475, n° 55, f. 108. 6 de marzo de 1709.

pecuniaria variable. Aún así, todavía con el ruido de los sables y cañones, en 1712, para evitar los abusos que se venían registrando en la solicitud de licencias y privilegios, así como para que no se pidiera licencia por terceras personas (recordando que el nombre del autor original debía figurar en el manuscrito), ni se añadieran partes al texto no censuradas, se dispuso que las solicitudes de licencia de nueva impresión, reimpresión, tasas y privilegios fueran presentadas únicamente ante Escribanía de Gobierno de la Cámara¹⁸⁷, lo que suponía la inhibición del resto de escribanías y personal del Consejo en busca de una centralidad que facilitara el control y registro de cuanto se autorizaba imprimir.

Durante los primeros años del siglo XVIII las reformas en la organización institucional de la censura previa vendrían determinadas tanto por las nuevas atribuciones hechas al Consejo de Castilla como por las reformas introducidas en la organización interna. La consolidación del poder absoluto del monarca tras la Guerra de Sucesión, llevó a la centralización y uniformidad de la estructura político-administrativa. El hecho mas destacado, sin duda, es la aplicación de los denominados Decretos de Nueva Planta. Estos decretos extendieron la legislación castellana sobre los territorios de la antigua Corona de Aragón, que habían sido partidarios del de Austria frente al Borbón, entre 1707 y 1716, año en el que se concluye la sumisión definitiva de Cataluña y se hace público el Auto con los requisitos para la impresión de libros y papeles sueltos de estos reinos¹⁸⁸, quedando Navarra, que había permanecido fiel al rey francés, de nuevo exenta.

La unificación implantada con estos Decretos se justificaba por la constante impresión y reimpresión por prensas ocultas o falsificando el lugar de impresión, lo que afectaba tanto a los derechos y regalías de la Corona, que no podía ejercer su legítimo derecho de control de la información, como a los intereses económicos de los propios impresores. Las disposiciones eran muy sencillas: para la impresión de libros en estos territorios sería necesaria la licencia previa del Consejo de Castilla; y, para los papeles

¹⁸⁷ Auto de 27 de noviembre de 1716. En *Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley XII y AHN, Consejos, Leg. 50627. págs. 410-411.

¹⁸⁸ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 905-907.

sueltos que no fueran libros se debería pedir licencia a la Audiencia correspondiente. Con estas medidas se pretendía, por una parte, poner freno a los abusos de los impresores de estos territorios, donde era más frecuente la falta de petición de licencia, y por otra, avanzar hacia una unificación legislativa que reforzara la autoridad del poder real.

A pesar de lo que pueda parecer, las medidas no suponían una verdadera homogeneización del sistema de control previo, ya que se les eximió de la exigencia de que los textos fueran corregidos por el Corrector General de libros, como sí ocurría en Castilla, y se procedía al nombramiento para cada reino, y a propuesta de la respectiva Audiencia, de un corrector que sería el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes en lo tocante a los impresos¹⁸⁹, prestando especial atención a que las obras examinadas fueran acompañadas de la imprescindible licencia del Consejo. La novedad de este hecho no radicaba tanto en la extensión a Aragón de la legislación castellana como la asunción por parte del Consejo de Castilla de las atribuciones que en materia de imprenta habrían correspondido en aquellos territorios al ya suprimido Consejo de Aragón y que habían venido ejerciendo los obispos y, en menor medida, Virreyes y Audiencias¹⁹⁰, en lo que de hecho supone una cierta centralización de la censura previa y secularización de los agentes comisionados, que ya no lo son en función de un cargo eclesiástico, sino dentro del sistema de Consejos de la Monarquía.

Además, el hecho de que los escritos menores pudieran ser aprobados por las Audiencias, sin necesidad de ser enviados a Madrid, no es algo intrascendente, pues hay que tener en cuenta que este tipo de textos poco voluminosos representaban una parte importante de la producción impresa y que además en Cataluña y Valencia el vehículo preferido para estampar en sus lenguas vernáculas eran los pliegos y papeles sueltos cuya producción era más barata, su venta más fácil y su control menos efectivo.

¹⁸⁹ *Auto del Consejo de 18 de noviembre de 1716. Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley XII y AHN, Consejos, Leg. 50627.

¹⁹⁰ Ver capítulo 2.1. referente a la legislación anterior en los Reinos de la Corona de Aragón.

Las intenciones de los gobernantes no siempre se imponen a la práctica. Así, debido a los reiterados incumplimientos que se registran a las disposiciones mencionadas, y para evitar que las obras circularan sin licencia, lo que era aún más peligroso, Manuel Antonio de Acebedo Ibáñez¹⁹¹, Conde Torrehermosa, Juez Privativo de Imprentas en 1716, dispone que para evitar los graves perjuicios que supone el incumplimiento de la ley en el Reino de Aragón, subdelega la comisión de imprentas para este territorio en José de Camargo, del Consejo y Oidor en la Audiencia de Barcelona, a quien se encomendaba velar porque todos los libros llevaran la Licencia del Consejo y examinar él mismo, o por quien delegara, el resto de obras¹⁹².

Los cambios, aunque pocos, se producen de forma rápida y contradictoria. Por ejemplo, además de la excepción introducida en Aragón, si en 1716 se había establecido que sólo las Audiencias podían autorizar la impresión de obras menores, en 1738 el rey autorizará que en el resto de reinos de la Corona de Aragón se subdelegue ese poder en personas concretas, inhibiendo así a las Audiencias, y en 1749, finalmente, se dispone que cualquier papel tendría que pasar por el Consejo de Castilla. Todas ellas van encaminadas buscar el sistema de censura más eficaz, pero la reacción que provocan es el rechazo generalizado de los afectados y un incremento de las ediciones ilegales (sin licencia o contrahechas)¹⁹³.

Fue poco, por tanto, lo que el primer monarca del nuevo siglo dispuso sobre la censura propiamente dicha. La prioridad fue la centralización en el Consejo y recordar, nuevamente, las leyes promulgadas previamente y que siguen vigentes. Y la misma línea seguirá su hijo y sucesor Fernando VI en su primera provisión al respecto, pues por el real decreto de 1749 se prohíbe, una vez más, imprimir “papel alguno por pequeño que sea, sin que se presente copia al Consejo o Tribunal a que corresponda dicho escrito”¹⁹⁴.

¹⁹¹ Fichoz nº 00005974. Como la mayoría de sus sucesores en el cargo, era entonces Consejero de Castilla.

¹⁹² AHN, Consejos, Leg. 50627. *Auto del Juez de Imprentas por el que se subdelega en José de Camargo para Zaragoza*. Comentado en REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 425-426.

¹⁹³ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74) pág. 239 y REYES, *op. cit.* (nota 49) pág. 426.

¹⁹⁴ LOPEZ, *op. cit.* (nota 129) pág. 278.

Uno de los mayores problemas a los que se tienen que enfrentar los diferentes monarcas es al control de los denominados impresos menores por la facilidad que existía para su impresión y circulación. Y la preocupación residía en la facilidad con la que en ellos se podía ofender a los tribunales, ministros y otras personas, por venganza o fines particulares. Para evitarlo, en 1728 se recuerda la prohibición de imprimir papeles, por cortos que sean, sin las aprobaciones necesarias y se encarga a las Chancillerías, Audiencias, Corregidores y Justicias no permitir impresiones en sus jurisdicciones sin su licencia, además de establecer la obligatoriedad de enviar una relación mensual de todos los papeles que se impriman, en la que debe constar el nombre del autor y el tema principal de la materia que tocan¹⁹⁵. En 1738 se volverá a insistir en esta medida, recordando la obligación de que libros, romances y papeles vayan precedidos de las censuras, licencias y tasas¹⁹⁶. Y diez años después se dará un nuevo Auto para incluir los papeles de diversión entre los que deben solicitar licencia previa¹⁹⁷.

En 1738 se produce un cambio sustancial cuando el rey nombra a Juan José de Mutiloa, del Consejo de Castilla y del de la Santa Cruzada, Juez privativo para todo lo tocante a impresiones, tanto en Madrid como fuera de la Corte, debiendo encargarse incluso de las causas que ya estaban abiertas en otros tribunales. De esta manera se inhibe de su conocimiento a todos los demás Consejos, Chancillerías, Audiencias, jueces y justicias. Mutiloa recibirá también la facultad de subdelegar en otras ciudades para atajar los reiterados incumplimientos en la legislación de imprenta, y así lo hará el 14 de febrero de 1739 en la persona de Jerónimo de la Barrera, del Consejo e Inquisidor de Sevilla, para conocer los casos en aquella zona, aunque no estaba capacitado para conceder licencias ni tasas, materia reservada para el Consejo de Castilla¹⁹⁸, que descargaba parte de las competencias que había reunido hasta el momento.

¹⁹⁵ *Novísima Recopilación*. Libro VII, Título XVI, Ley XIV y AHN. Consejos, Leg. 50627, nº 2, ambas de 4 de octubre de 1728.

¹⁹⁶ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 456-457 y 459-460.

¹⁹⁷ *Auto de 26 de agosto de 1748 para que no se impriman papeles de diversión sin licencia*, AHN, Consejos, Leg. 51630.

¹⁹⁸ REYES, *op. cit.* (nota 49) pág. 460.

En la historiografía se ha solido afirmar la tendencia de la elite ilustrada a recortar atribuciones de concesión de licencias de impresión a las comunidades preexistentes, así como a centralizar el poder. Sin embargo, estudiando a fondo la realidad observamos que no sólo no dejaron de crearse corporaciones, sino que desde el propio poder real se fomenta su institucionalización, como son las Academias Española y de la Historia, favorecidas por el Estado y que desde 1755 tendrían una dispensa para conceder licencias de impresión para temas con ellas relacionados. Uno de los principales problemas del siglo fue, precisamente, construir un cuerpo de censores uniforme y eficaz que hiciese innecesario el control posterior, pero que a la vez no fuese excesivamente costoso. De ahí que una de las opciones fuese contar con la censura previa de los tribunales, juntas y corporaciones. Se está favoreciendo, así, la censura previa cualificada.

Dentro de esta dinámica, en 1735, por Real Cédula que respondía a una consulta de la Junta de Comercio y Moneda del año anterior, el Consejo de Castilla cede facultades en materia de censura previa a dicha Junta para examinar los libros de las materias de su incumbencia antes de que el Consejo emitiera su licencia, tal y como ocurría con el Consejo de Indias para lo referente a los territorios de ultramar. A partir de ese momento no se ha de dar licencia de impresión a libros ni papeles que traten de “comercio, fábricas y otras maniobras, ni perteneciente a los metales de oro, plata y cobre, sus valores en pasta, baxial...” sin que se presenten previamente a la Junta, que ha de dar su licencia, y que se incluirá al principio junto con las demás¹⁹⁹.

Del mismo modo en 1749 se recuerda una norma promulgada ya en siglo anterior por la que se prohibía imprimir informaciones, memoriales de pleitos, advertencias o cualquier otro impreso, de cualquier tamaño, de carácter jurídico sin el examen previo del manuscrito y licencia de los papeles por parte del Consejo o tribunal en el que se estuviese sustanciando el pleito. Al igual que ocurría con los panfletos e impresos menores, el origen de esta norma radica en la abundancia de manifiestos, defensas legales y otros papeles que contenían sátiras denigrativas del honor de diferentes personas. El Tribunal que concede la licencia quedaba, así, como responsable de

¹⁹⁹ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XV.

cualquier injuria que se descubriera. Ante el recurso del rector de la Universidad de Valladolid, se dio Auto del Consejo en 1751 por el que se declaró no incluirse en decreto de 1749 las impresiones de actos, ejercicios literarios, informes para cátedras y relaciones de méritos de los individuos de la Universidad, que según la costumbre se debían imprimir con la licencia del Rector, quedando éste responsable de lo que se escribía²⁰⁰.

Además de las normas generales que hemos ido desgranando, se dan circunstancias y casos particulares en los que se dictan prohibiciones específicas sobre un autor o un tema. El caso más destacado en la primera mitad del siglo será la prohibición general de que se publiquen papeles de cualquier tipo sobre la obra del cardenal Henry Noris, ya fueran a favor o en contra de sus postulados. En este caso la prohibición general promulgada en 1748 a instancia del Confesor Real, el famoso jesuita Rávago, requiere una especial atención, puesto que aunque oficialmente se produce ante la proliferación de impresos sin licencia a favor y en contra del controvertido cardenal agustino, por detrás subyace una fuerte y encarnizada lucha ideológica entre órdenes religiosas que tiene como protagonistas a los ignacianos y que afecta a las regalías del Rey²⁰¹. El asunto, que se prolongó hasta 1762, finalizó con la explícita indicación por parte de Carlos III de que quedaba prohibida la circulación de cualquier escrito de origen pontificio sin la autorización previa de su Consejo, lo que en la práctica suponía una reafirmación de las regalías y un duro golpe a la posible autonomía del Santo Oficio²⁰².

Así queda definida la planta genérica de concesión de licencias de impresión, que otorga una papel primordial al Consejo de Castilla, aunque integra a corporaciones a las que se asigna el examen de las materias para las cuales están especialmente cualificadas por las competencias que tienen asignadas, como el Consejo de Indias, la Inquisición o la Junta de Moneda. Es lo que ocurre también con las materias de Estado,

²⁰⁰ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 472-473 y 952-954.

²⁰¹ El asunto ha sido tratado de forma completa por DEFORNEAUX, Marcelin, *Inquisición y censura de libros en la España del siglo XVIII*, Madrid, Taurus, 1973, págs. 75-81.

²⁰² El tema se aborda con mayor profundidad en el capítulo 2.3. al ser la Inquisición, y no el Consejo, el órgano a través del cual surgió el conflicto.

incluyendo la *Gaceta* y las publicaciones periódicas, cuya competencia exclusiva corresponde, en detrimento del Consejo de Castilla, de la Secretaría del Despacho de Estado desde 1744. Es decir, que lejos de acercarse a una supuesta centralidad y uniformidad, se mantiene la desconcentración administrativa en la concesión de licencias, fomentándola en determinados casos.

Este panorama general se puede mantener hasta 1752, donde el Auto de Curiel, entonces Juez privativo de Imprentas, emitido el 22 de noviembre de 1752 y aprobado tras diversas modificaciones del Consejo el 27 de julio de 1754, intentará, partiendo de la legislación anterior, reordenar el sistema.

2.2.2. Juan Curiel, Juez de Imprentas

Los cambios decisivos en la legislación comienzan a mitad del siglo, cuando se escenifica el pulso de la industria de la imprenta, todavía incipiente y vulnerable, pero que el estado intenta favorecer, con la intención de la propia Monarquía de mantenerla dentro de sus límites políticos²⁰³.

El auto de Curiel no es un proyecto aislado de reforma legislativa, sino que para comprenderlo es necesario contextualizarlo y ponerlo en relación con la acción llevada a cabo por el gobierno reformista de Ensenada²⁰⁴. Se trata de un completo reglamento dictado en su nombre, y no en el del Consejo (lo que es en sí una declaración de intenciones), que se justifica por los repetidos y constatados incumplimientos de las normas vigentes. Es un compendio en diecinueve disposiciones de las normas precedentes que seguían en vigor, a las que se añaden algunos elementos nuevos que permiten, por ejemplo, la creación de una red de subdelegados capacitados nombrados por el propio Juez, entre otras cosas, para emitir licencias de impresión de obras menores en detrimento de los denominados subdelegados natos que lo habían venido haciendo hasta el momento.

²⁰³ LOPEZ-VIDRIERO, "Censura civil e integración nacional: el censor ilustrado", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, pág. 856.

²⁰⁴ LOPEZ, *op. cit.* (nota 129), pág. 278.

En realidad son pocas las novedades que introduce. No hay nuevas disposiciones sobre la obtención de licencias, sobre la tasa, sobre la necesidad de incluir el pie de imprenta o sobre los escritos de religión. Buscaba, más bien, que las leyes que eran desacatadas por autores, impresores y libreros se cumplieran y en caso contrario, las penas previstas fueran ejecutadas, por severas que parecieran. Curiel no es más que el primer escalón de las nuevas iniciativas que se toman desde el poder para conseguir la tan largamente buscada eficacia en la censura previa que hiciera innecesaria la intervención posterior de la Inquisición, como él mismo reconoce en 1755 en una carta al Gobernador del Consejo:

“Continuada y practicada en adelante la providencia del Consejo podrá esperarse que ni la Santa Inquisición se vea precisada a recoger los libros que se imprimen de nuevo en estos Reinos, ni la Nación tendrá que sufrir la sindicación y desdoro que padece en la impresión de varias obras que hasta de presente se han dado a luz pública”²⁰⁵.

Sin embargo no será Curiel quien consiga su objetivo, ni sus sucesores en el Juzgado de Imprentas, pues el Santo Oficio seguirá en pie hasta el final del Antiguo Régimen, siendo su labor, como veremos fundamental, sobre todo tras los hechos revolucionarios de 1789 en el país vecino.

*Juan Curiel y el Auto de 1752*²⁰⁶

A pesar de la importancia que su figura ha tenido en los temas relacionados con la imprenta, es escaso el interés que ha despertado en la historiografía. Muy atrás queda la única obra biográfica llegada hasta nosotros firmada por González Palencia en 1945²⁰⁷ y seguimos echando en falta un estudio completo sobre su persona.

²⁰⁵ Carta de Juan Curiel de 13 de marzo de 1755 al Gobernador del Consejo, AHN, Consejos, Leg. 50694.

²⁰⁶ Todos sus datos biográficos han sido extraídos de la base de datos Fichoz, ficha nº 00010570 y pueden completarse con el análisis de su trayectoria profesional en el capítulo 4.1. El Auto se encuentra en AHN, Consejos, Leg. 51634, y se inserta en la *Recopilación de las leyes, autos acordados por el Consejo y Reales Órdenes, que manda S.M. observar a los Impresores, Mercaderes y Tratantes de Libros de esta Corte y demás Ciudades, Villas y lugares de estos Reynos*, Madrid, Antonio Sanz, 1754.

²⁰⁷ GONZÁLEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78).

Por realizar un breve semblante biográfico antes de analizar su labor como Juez de Imprentas, destacar que fue casi desde su origen académico numerario de la Real Academia de la Lengua, y que tuvo una importante carrera profesional en la magistratura, primero en Sevilla y después en la capital como Alcalde de Casa y Corte, Fiscal del Consejo de Hacienda, Ministro honorario del Consejo de Castilla y del Consejo Supremo de la Inquisición y, finalmente, Consejero de Castilla y Juez de Imprentas, hasta su jubilación en 1769. Era, por tanto, un experto conocedor de la Administración y de su funcionamiento.

El 22 de noviembre de 1752 Juan Curiel dicta un completo Auto que justifica por la situación en la que se encuentra en ese momento la legislación de imprenta. El contenido a penas era novedoso, ya que la mayor parte de sus disposiciones son reiteraciones de la legislación dada con anterioridad, pero que apenas era observada por ignorancia de los actores implicados o por dejación de quienes debían hacerla cumplir.

Tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, Curiel aclara los motivos que le han llevado a la redacción de su norma: el reiterado incumplimiento que sufren las repetidas providencias dictadas por los Reyes, que hace que impresores y libreros actúen impunemente, por ignorancia o por creerlas abolidas, dando detalles de alguno de los incumplimientos, como era la falsedad de los pies de imprenta (fecha, lugar o nombre de los impresores falsos) o en los nombres de los autores.

Junto a los impresores, se reconoce la caótica situación en el propio aparato administrativo por la influencia que había adquirido el Portero del Consejo, algo que no le correspondía según las propias leyes del Reino. Este subalterno era el encargado de centralizar las peticiones de licencias, privilegios y tasas, actuando como intermediario entre el autor y el juez. El autor proponía el nombre del censor al que pasar el manuscrito y el Portero redactaba el decreto de remisión a censura, que el Juez se limitaba a firmar. Por esta labor el Portero se embolsaba la nada despreciable cantidad de setenta y dos reales por cada cédula de privilegio y treinta y dos por las licencias, mientras que en la Escribanía se cobraba, por la expedición de los mismos,

veinticuatro y doce respectivamente. Un claro abuso de una actividad sobre las que, en teoría, no tenía competencia pero que se había consolidado por la costumbre de su práctica.

Si no contenía elementos novedosos, el contenido de su Auto puede considerarse, más bien, como una recopilación de las leyes que hasta el momento se habían dado en materia de imprenta y que ya hemos visto rápidamente en este capítulo. Está dividido en diecinueve puntos, en los que se regula cómo deben actuar los impresores y libreros para no faltar a las leyes vigentes. Debido a su variado contenido vamos a intentar realizar un análisis general, agrupando, cuando sea posible, las disposiciones por su contenido.

El aspecto que más interés tiene para nosotros son los capítulos en los que se hace referencia a las necesarias licencias previas a la impresión. En el primer capítulo se recuerda que ningún impresor puede imprimir libro o papel, por pequeño que sea, sin licencia del Consejo o del Juez de Imprentas, con una pena de dos mil ducados y seis años de destierro para los que la infrinjan. Además, si estos textos versan sobre Religión o Sagrada Escritura, o están prohibidos por la Inquisición (lo que incluye impresión, venta o posesión) la pena es de muerte y pérdida de los bienes (capítulo quinto). En el sexto se confirma un decreto de 1749 por el que las informaciones sobre procesos abiertos deben contar con la aprobación del tribunal que esté tramitándolo. El capítulo noveno remite a la necesaria firma del Comisario General de Santa Cruzada para poder imprimir bulas, gracias, perdones, indulgencias y jubileos; el décimo a la licencia de los Obispos para la reimpresión de cartillas de primeras letras, vocabularios, artes de gramática y latinidad impresos en sus respectivas diócesis; y, el undécimo, la licencia del Inquisidor General o del Consejo de Inquisición para los asuntos referentes al Tribunal del Santo Oficio, tres medidas que recordaban los privilegios que hasta el momento mantenía la Iglesia.

En el capítulo cuarto se especifica qué datos deben incluirse al principio de todos los libros: licencia, tasa, privilegio (si lo hay), nombre real del autor, nombre del impresor,

lugar y fecha verdadera, considerando la pena de destierro para los que impresores que no la cumplieran.

El otro gran bloque de medidas engloba la necesidad de que los textos impresos sean examinados y corregidos por el Corrector General del Reino. El segundo capítulo establece el mecanismo de entrega de ejemplares impresos para cotejarlo con el original manuscrito, que debe firmarse por el Escribano del Consejo, siendo obligatorio el cotejo también para las reimpresiones, incluso cuando están dentro del periodo de vigencia de un privilegio, ya que el objetivo era impedir que se añadieran partes no autorizadas al texto original. Además, se refuerza el papel del Corrector General, que una vez tasado debe corregir todos los textos antes de poder darse a la venta (capítulo tercero).

Otra serie de artículos intentan poner orden al tráfico internacional de impresos. Así, también penado con la muerte, se prohíbe vender o introducir libros compuestos por naturales de los reinos impresos fuera de los mismos, salvo licencia especial para hacerlo (capítulo decimotercero). También se prohíbe a los libreros vender libros escritos por extranjeros de primera impresión y por naturales de segunda fuera del reino, sin solicitar licencia específica para ello (capítulo decimoquinto). El capítulo décimo octavo incide en la prohibición de reimprimir, traer y vender en los reinos misales, diurnales, etc., impresos fuera, lo que incluye Navarra, sin obtener licencia real.

De corte económico son las medidas encaminadas a asegurar la tasación de los originales antes de su venta, como es el tercer capítulo, donde se establece la obligatoriedad de que el Consejo tase las obras antes de poder proceder a su venta, tasas que deben incluir el precio total del libro y no sólo el de cada pliego (capítulo octavo). El capítulo decimocuarto también hace referencia a la tasa, recordando la necesidad de entregar un ejemplar al Consejo para que sea tasado antes de proceder a su venta. También de carácter económico sería el capítulo duodécimo, donde se establece el tipo de papel (fino), que han de tener las impresiones, y el

decimoséptimo, que prohíbe a los libreros de la Corte a comprar en conjunto ninguna biblioteca por fallecimiento hasta pasados cincuenta días de la muerte.

Finalmente, se encuentran normas para asegurar la correcta vigilancia de los talleres de impresores. Así es el capítulo séptimo, que prohíbe a los impresores tener prensas ocultas y les exige permitir la entrada del Corrector para registrar sus talleres si así es requerido y en el decimosexto se faculta al Superintendente o a sus Subdelegados a visitar sus casas.

En el último capítulo, el decimonoveno, Curiel recuerda que todos los capítulos anteriores afectan a los reinos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, manteniendo la excepción en lo referente a la corrección de libros, que no tienen que ser enviados al Corrector General, sino por un Corrector nombrado en cada una de las Audiencias, que comunicarán al Corrector General de la Corte la relación jurada de pliegos y la expresión de erratas.

Las quejas de los libreros

El Auto de Curiel provocó inmediatamente las quejas de los libreros de la Corte, que elevaron varios memoriales al Rey para quejarse por la “nueva” normativa. Estas quejas se articularon, fundamentalmente, en dos escritos fechados ambos en 1752²⁰⁸, uno de ellos obra de Manuel de Roda, que sería Secretario de Gracia y Justicia con Carlos III y que ocultó su nombre para evitar represalias²⁰⁹, donde se muestra contrario a las disposiciones del Juez sevillano.

Las airadas quejas de los mercaderes de libros se pueden resumir en tres puntos fundamentales, justificando su reclamación en que las leyes a las que hacía alusión

²⁰⁸ *Representación al Rey por los Libreros en 1752 sobre las demasiadas facultades concedidas en 1751 al Sr. Juez de Imprentas*, Madrid, Archivo de San Ginés, San Gerónimo, Pleitos y documentos, 46, y *Reclamación y reflexiones hechas sobre Autos del Sr. D. Juan Curiel, Juez Privativo de Imprentas, sobre las penas exorbitantes que impone a los que impriman sin licencia*, Madrid, Archivo de San Ginés, San Gerónimo, Pleitos y documentos, 60. Citados ambos por REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 478.

²⁰⁹ Así figura en la correspondencia entre Roda y Mayans conservada en el Colegio del Corpus Christi de Valencia y tratado por MESTRE, Antonio, “Informe de Mayans sobre el auto de censura de libros establecido por Juan Curiel en 1752” en *Homenaje al Dr. D. Juan Reglà Campistol*, II, 1975, págs. 53-63. La carta de Roda a Mayans, las quejas de los libreros e impresores y toda la documentación generada están reproducidos por REYES en su Apéndice documental, *op. cit.* (nota 49), págs. 1303-1333.

Curiel estaban olvidadas y derogadas por la tolerancia que hasta su nombramiento habían tenido los anteriores jueces de imprenta. Frente a esta laxitud protestan, primero, por la severidad de alguna de las penas, especialmente por la pena de muerte para quienes introdujeran libros de autores naturales de los reinos impresos en el extranjero y sin licencia del Rey. Además, se muestran contrarios a la tasación de todos los libros extranjeros, tarea que consideran imposible e inútil al encarecerlos, así como la licencia para su introducción y venta, pues habría que contar con personas que conocieran todas las artes, idiomas y profesiones para examinar los volúmenes²¹⁰, algo que sería muy costoso y que fomentaría, a la postre, el contrabando.

Las quejas de los sectores económicos implicados por el Auto de Curiel motivaron la suspensión temporal de su ejecución y la apertura de diligencias para examinar el caso. Curiel respondió a las alegaciones que presentaron los libreros en un extenso informe fechado el 29 de diciembre de 1752, en el que va desarmando uno a uno sus argumentos y donde saca a relucir que los libreros están defendiendo exclusivamente sus intereses particulares, y no el bien común que él trataba de proteger en el ejercicio de su cargo. Argumenta que a los mercaderes de libros les interesaba más el beneficio de comerciar con libros “sospechosos” que el fin de las normas. Además aseguraba que los motivos que habían movido a los monarcas a legislar con tal dureza no sólo no habían remitido sino que algunos, como la extensión de la herejía, seguían teniendo la misma fuerza y más peligro, puesto que el comercio de impresos era más intenso en el siglo XVIII que en el XVI.

A la vista del informe de Curiel, los Fiscales del Consejo también realizaron el suyo, que firmaron el 13 de enero de 1753. En él ratificaban que el Juez de Imprentas había actuado siempre dentro de las competencias que tenía asignadas y, atendiendo a las peticiones de los libreros, matizan algunos de los puntos de la ley. Curiel responde el 21 de abril aceptando las modificaciones en las penas y las matizaciones de los Fiscales y pedía los medios necesarios para poner en marcha su reforma. Tras un nuevo

²¹⁰ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 479.

informe individual de los Fiscales, la Reforma ve la luz, definitivamente el 27 de julio de 1754 por orden del Consejo²¹¹.

Las matizaciones incluidas en la disposición final, emanada ya del Consejo y no del Juez, y que será la que se incluya en la *Novísima Recopilación*²¹², son mínimas y casi todas hacen referencia a las penas mínimas por los delitos cometidos por los mercaderes, impresores y libreros²¹³. Por ejemplo, se excluye de la necesidad de licencia previa las “esquelas de convites”, un tipo de publicación sin contenido peligroso que sólo se empleaba para invitar a participar en fiestas o acontecimientos especiales tales como los velatorios. Sobre la pena de muerte para los que imprimieran, reimprimieran o importaran obras sobre religión sin la necesaria licencia o fueran obras prohibidas expresamente por la Inquisición, se limita a cuando tuvieran “depravada intención”, por ser “auxiliadores de herejes”, reduciendo en caso contrario la pena a seis años de presidio y doscientos ducados de multa. Parecido ocurre con la pena de muerte impuesta a quienes vendieran obras de romance compuestas por los naturales de los Reinos impresos fuera de ellos sin especial licencia, conmutándolo por cuatro años de presidio, aumentables según la reincidencia.

El intento de profesionalizar la censura previa

Quizás más interesante para el estudio de la censura previa sea el Auto del Consejo de 1756 que acordaba el establecimiento de un cuerpo de censores fijos a sueldo²¹⁴. Los antecedentes a este proyecto de Curiel habría que buscarlos, por una parte en su objetivo de hacer cumplir la legislación vigente hasta el momento, que desde época de los Reyes Católicos estipulaba el pago de un salario digno a los censores regios en compensación por su importante labor. Pero la oportunidad para llevarlo a cabo surge de un conflicto con el Secretario de Estado, Ricardo Wall, a raíz de la aparición de una

²¹¹ *Recopilación de las leyes, autos acordados del Consejo y Reales Órdenes, que manda S.M. observar a los Impresores, Mercaderes y Tratantes en Libros de esta Corte y demás Ciudades, Villas y lugares de estos Reynos*, Madrid, Antonio Sanz, 1754. AHN, Consejos, Leg. 51634. Está reproducido en el apéndice legislativo de REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 965-986.

²¹² Libro VIII, Título XVI, Ley XXII.

²¹³ Se encuentra copia del original en AHN, Consejos, Leg. 51634.

²¹⁴ *Auto Acordado del Consejo nombrando cuarenta personas de las más acreditadas de la Corte para que censuren los libros y obras que se hayan de imprimir, reimprimir y vender*, AHN, Consejos, Leg. 11275 y 51634. Se encuentra transcrito en GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 91-94 y REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 995-997. Se retoma este asunto en el punto 3.3.

obra que se imprime con las licencias oportunas y que, al parecer, contenía un material ofensivo para el Rey. Este hecho, que analizaremos más adelante, permitió a Curiel poner en cuestión el mecanismo de elección de los censores y proponer un cambio que supusiera una profesionalización de la censura.

Analizando la documentación emanada del Consejo de Castilla en enero y febrero de 1756 a raíz de la aparición de *El Piscator Complutense*, denunciado por Wall, se puede extraer cómo funcionaba el mecanismo de elección de censores para los manuscritos presentados ante el Consejo. Antes de la llegada de Curiel al Juzgado de Imprentas, eran los propios autores quienes, al presentar su instancia, proponían el nombre de la persona que podía realizar el informe previo, quien, como es lógico, estaba predispuesta a una aprobación elogiosa. Curiel, consciente del abuso de esta práctica intentó que las obras fueran examinadas por los principales literatos de la Corte, que alegando falta de tiempo por sus obligaciones se excusaban reiteradamente. Ante la necesidad de dar salida a las solicitudes, Curiel optó por una solución intermedia que pasaba por que los autores presentaran una terna de candidatos de sobrada solvencia, entre los cuales el Juez elegía censor. Éste no recibía ninguna remuneración por un trabajo que, como veremos, precisaba de cierta pericia y tiempo.

La condena de destierro que se impuso a los dos censores que habían aprobado el *Piscator* no debió ayudar a Curiel en la búsqueda de examinadores para los manuscritos, pues a la ausencia de reconocimiento se había sumado la obligación de asumir la responsabilidad sobre el contenido de las obras aprobadas con su firma, lo que actuó como medida disuasoria para muchos de ellos. Ante esta situación, y para evitar que se repitieran casos como el anterior, el Consejo propuso el 23 de febrero de 1756 el nombramiento de un número de personas que aceptaran y juraran su cargo, además de estipular un arancel con el que pagar su desempeño. El Rey se dio por enterado y permitió que el 19 de julio el Consejo resolviese el asunto de manera definitiva mediante un Auto en el que nombraban cuarenta personas que desde su juramento serían las únicas encargadas de censurar los manuscritos que llegaran a la Escribanía de Cámara.

Las cuarenta personas elegidas eran residentes en la Corte, condición necesaria para agilizar la tramitación de los expedientes, además de ser “de las más acreditadas circunstancias de literatura, juicio y prudencia, a los que se les despacharía el título de censor sin coste alguno”, y en caso de renuncia de alguno de ellos, se nombraría a otro en su lugar. En el Auto de nombramiento se estipulaba, además, la remuneración que deberían recibir: por cada pliego de letra manuscrita clara y regular, dos reales de vellón; si la letra fuera menuda o de difícil lectura, quedaría a la estimación del Juez de Imprentas, que estipularía la cantidad; de las obras ya impresas para reimprimir o importadas, se estipulaba un real de vellón por cada pliego de texto; si los impresos tenían condiciones especiales (letra de entredós, breviario, glosa, glosilla, o el papel de mayor tamaño que el habitual), también quedaría a la discreción del Juez. Para los papeles sueltos, cuya jurisdicción seguiría correspondiendo a los Subdelegados de Imprenta, se les remitirían órdenes de cómo proceder.

En total se nombraron a los trece párrocos de Madrid y otros veintisiete reputados personajes de la vida de la Corte, en total diecinueve sacerdotes seculares, diecisiete regulares y tan solo cuatro seglares²¹⁵, dejando claro el peso que se concedía a la Iglesia.

La reforma introducida por Curiel en lo referente al nombramiento de censores que percibieran un salario por su trabajo a costa de los editores no es tampoco una iniciativa novedosa. Ya en el siglo XVII se había intentado crear un sistema de censura similar que había resultado infructuoso, lo que demuestra que tampoco en este campo Curiel había intentado una gran innovación²¹⁶.

Para completar su reorganización del sistema de censura, Curiel mandó publicar el mismo día que se dio salida al Auto del Consejo una *Instrucción [...] sobre el modo y método con que los Censores [...] deberán examinar y dar su Censura*, o lo que es lo mismo, unas indicaciones para los censores en los que especificaba cómo debía ser el procedimiento y los aspectos que debían tener en cuenta. Es, posiblemente, el primer

²¹⁵ Sobre la identidad de los censores nombrados se hará especial análisis en el capítulo 3.3.

²¹⁶ Ver apartado 2.1.

documento en el que se expone de manera tan explícita el procedimiento que debía seguir un manuscrito antes de ver la luz y una de las veces en que más claramente se indica a los censores cómo debe ser su actividad²¹⁷.

En cuanto a la organización, se dispone que el Portero del Consejo, que era el encargado del despacho de impresiones, una vez recibida por el interesado la cantidad para la censura, la remitirá al censor nombrado junto con el expediente y la obra; aceptado el encargo, el censor recibirá la remuneración que le corresponde, incorporará el recibo al expediente y pondrá un plazo para que la obra pudiera ser recogida. En caso de no aceptar, se devolvería el dinero y los papeles al juzgado de imprentas, que designaría un nuevo encargado.

El autor no debía conocer a quién se remitía la censura, pero si el censor lo consideraba oportuno podía ponerse en contacto con él para advertirle de alguna cosa. Si el censor prefiriera el anonimato, bastaría con explicar en su censura la condición para aprobarla, ya fuera quitando, añadiendo o enmendando las proposiciones que considerara necesarias, que sería condición necesaria para que el manuscrito obtuviera el pase.

Para el examen, los censores debían tener en cuenta, como venía siendo tradicional, si el manuscrito contenía alguna proposición contraria a la religión católica, las buenas costumbres o las regalías del monarca. Pero además, establecía que debería prestarse atención a si contenía elementos supersticiosos, reprobados o de “cosas vanas y sin provecho”, y evitar que contuvieran ofensas a la comunidad, a algún particular o al honor de la nación. En esto tampoco incluye ninguna novedad.

²¹⁷ *Instrucción, que de orden del Consejo, y con su aprobación ha formado el Señor Don Juan Curiel, Ministro de él, y del de la Suprema, y General Inquisición, y Superintendente General de Imprentas en estos Reynos, sobre el modo y método con que los Censores, que tiene nombrados, y nombrase en adelante el Consejo, deberán examinar, y dar su Censura en los Libros, y Obras que se les remitiesen, o ya sea para imprimir, o reimprimir en estos Reynos, o ya para que los impressos fuera de ellos, puedan venderse por los Mercaderes, y Libreros, AHN, Consejos, Legs. 11275 y 51634. También transcrito íntegramente por GONZALEZ PALENCIA, op. cit. (nota 78), págs. 94-96 y REYES, op. cit. (nota 49), págs. 997-999. Posteriores instrucciones de finales de siglo copiarán el sistema, especificando el modo de actuar de los censores y la forma en la que presentar los informes, como veremos más adelante.*

Si varía, en cambio, la forma que debía tener el documento que saliera del censor. Bastaría en adelante con que dijera si contenía o no algo contrario a la religión, las buenas costumbres y las regalías, y si eran, por tanto “dignas de la luz publica”. Se advertía que había que evitar “dilatadas expresiones de alabanza del Autor o de las Obras”, así como “mezclarse en sus asuntos”, lo que limitaba el campo de acción que hasta el momento habían venido disfrutando los revisores y que les permitía no sólo evaluar el original, sino también opinar sobre su contenido. Si el autor quería que su obra incluyera aprobaciones más extensas, deberían correr por su cuenta y presentarlas junto al original para que todo fuera examinado por el censor designado.

Para evitar confusiones innecesarias se advierte a los censores que aprobar una obra no suponía adherirse ni suscribir las opiniones que en ella se expresaban, que era el motivo por el que muchos rehuían esta responsabilidad, y no se permitía que se excusaran alegando desconocimiento de la materia que trataban, pues cualquiera de ellos estaba capacitado para saber si la obra, fuera del tema que fuera, contenía algo contrario a la religión, las buenas costumbres o las regalías, que eran las máximas principales que se debían observar, dejando en este caso la utilidad en un segundo y escondido plano.

Puesto que a pesar de los intentos centralizadores eran varias las corporaciones y autoridades capacitadas por ley para emitir aprobaciones, se pedía a los censores que si el contenido incluía temas sobre materia de Estado, sobre el misterio de la Inmaculada Concepción, asuntos de Indias, de comercio, fábricas o metales, sobre casos de otros Tribunales o regalías, deberían dar su aprobación de la manera ordinaria y adjuntar a la misma un aparte que advirtiera de tal hecho para que el Juez lo pudiera remitir a quien procediera antes de emitir la licencia. En este sentido, poco tiempo después de la publicación de estas normas se aumentará la complejidad con la disposición de Fernando VI del 13 de noviembre de 1757 por la que no se podía dar licencia para imprimir obras médicas sin el examen de un médico nombrado por el

Presidente del Protomedicato²¹⁸, con lo que esta institución se une a las que ya disponían de jurisdicción especial.

El enfrentamiento entre Curiel y Wall

Entre los problemas a los que tiene que hacer frente Curiel durante su etapa como Juez de Imprentas, además de la oposición de impresores y librereros, está la creciente rivalidad con el Secretario de Estado, Ricardo Wall. Uno de los puntos donde se materializó la disputa fue en torno a las publicaciones periódicas. Aunque hemos señalado que dejábamos a un lado este tipo de obras, por las características propias del género, merece la pena detenernos en ellas para visualizar el nivel de enfrentamiento que se vivió entre ambos.

La *Gaceta* era una publicación periódica que se editaba en Madrid desde 1661, vinculada a Juan José de Austria y que sufrió los mismos altibajos que su protector. Desde 1683 se producía su impresión de manera más o menos continuada, a pesar de los intentos reiterados de prohibición. Desde 1690 el privilegio para la impresión de la *Gaceta* había recaído en el Hospital General de Madrid, que en 1697 lo subarrendó al industrial navarro Juan de Goyeneche por cuatrocientos ducados de renta. Es con Goyeneche con el que adquirirá su definitivo nombre, *Gaceta de Madrid*. El objetivo de esta publicación era dar noticia de los hechos extranjeros, por lo que siguiendo la lógica institucional anterior, se encomendó su supervisión al Secretario de Estado. En 1739 se había designado al marqués de la Regalía, el mismo que censuraba el *Mercurio*, como censor especial de la *Gaceta*, eximiéndola de cualquier otro trámite²¹⁹.

La concesión del control de las relaciones de sucesos a Estado provocaba el recelo del Consejo de Castilla y de su Juez de Imprentas, que veían como una publicación escapaba de su control. El 5 de mayo de 1755, a pesar de que estaba fuera de su

²¹⁸ No se de licencia para imprimir obras médicas, sin preceder su examen y reconocimiento por médico que nombre el Presidente del Protomedicato. *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XX.

²¹⁹ Sobre estas publicaciones periódicas oficiales existe una completa monografía en la que se estudian éste y otros aspectos: ENCISO RECIO, Luis Miguel, *La Gaceta de Madrid y El Mercurio histórico y político, 1756-1781*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957. También aparece, resumido, en URZAINQUI Inmaculada, "Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, *op. cit.* (nota 30), págs. 125-216.

jurisdicción, Curiel manda que se apoderen de los pliegos de la *Gaceta* que iba a salir. Wall, celoso de sus competencias y ejerciendo su influencia, consiguió anular las actuaciones del Juez y aprovechó el conflicto para iniciar su proyecto de que su Secretaría asumiera los privilegios de las publicaciones periódicas y controlar, así, la información que divulgaban. En 1758, tras alguna injerencia más de Curiel, Wall consiguió que la *Gaceta* fuera revisada por un oficial de su Secretaría, Miguel San Marín, y en 1762, contando con el respaldo del impresor, Juan de Mena, se comunicó la rescisión del privilegio, que asumía la Secretaría de Estado, encargando la impresión al maestro que había contribuido a que se pudiera llevar a cabo y encargando una censura dos veces por semana a Iriarte²²⁰. Es una prueba de cómo el poder de influencia del juez sevillano estaba en claro retroceso, habiendo perdido una batalla clave por el control de la difusión de las ideas.

Los choques entre el Juzgado de Imprentas y la Secretaría de Estado venían ya de lejos, y no se limitan a Curiel y Wall, aunque la fuerte personalidad de ambos los hizo más virulentos. Otro motivo de enfrentamiento fue el *Mercurio Histórico Político*. Esta publicación nació en 1738 como traducción de una similar que se publicaba en La Haya, cuyo privilegio recayó primero en Salvador José Mañer y después en Miguel José de Aoíz, recayendo su censura en el marqués de la Regalía, oficial de la Secretaría de Estado²²¹. El problema surge cuando Mañer publica la traducción de un libro titulado *Oráculo de Europa*, que vulneraba el privilegio que tenía Aoíz, que protesta enérgicamente ante el Secretario de Estado, el marqués de Villarias, pues varias publicaciones más habían salido con la licencia del entonces Juez de Imprentas, José de Bustamante, en 1745 y 1746 a pesar de que trataba de asuntos de Estado, lo que le valió una advertencia del Rey por su descuido²²². Según Romeu de Armas, parece que la práctica que se instituyó a raíz de este problema fue crear un examen preliminar de la obra por parte de la Secretaría de Estado, que en caso de ser positiva debía obtener la licencia ordinaria del Consejo²²³, aunque en la documentación del Archivo Histórico Nacional no se han encontrado evidencias de ello.

²²⁰ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 381-382.

²²¹ ROMEU DE ARMAS, *op. cit.* (nota 67), pág. 89.

²²² REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 382-384.

²²³ ROMEU, *op. cit.* (nota 67), pág. 29.

Dejando a un lado lo referente a la prensa periódica, resulta más interesante para nosotros las repercusiones que tuvo la publicación de un piscator²²⁴, al parecer escandaloso, que habría contado con la aprobación de Curiel y que fue denunciado por Wall. Este tipo de literatura popular gozaba de gran popularidad en la época, como comprobaremos a lo largo de la presente tesis, siendo muy elevado el número de peticiones que se recibían en el Consejo para imprimir calendarios, pronósticos y almanaques por conocidos autores año tras año.

El caso concreto que despertó la polémica fue la aparición de un papel titulado *El Piscator Complutense*, obra de un tal Francisco de Valdemoros²²⁵, que decía ser Profesor de Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. A juicio de Ricardo Wall contenía pasajes escandalosos que habrían llegado a oídos del Rey, quien se mostró preocupado por el asunto, ya que dejaba en evidencia la efectividad de la labor realizada por Curiel. Wall, en su carta dirigida al Gobernador del Consejo de Castilla, ataca al propio Consejo y al Juez de Imprentas, haciéndolo responsable del descuido:

“Son tales y tantas las suciedades, insolencias y desacatos que contiene que apenas se encontrará en él cláusula que no sea soez, obscena y desvergonzada. Hase escandalizado todo el público de ver que se haya permitido salir a luz un escrito de tales circunstancias, y este escándalo ha llegado también a los oídos del Rey. [...] No es fácil explicar el horror y justo enojo con que S.M. lo oyó, ni decir qué fue lo que con más vehemencia excitó su indignación y extrañeza: si la audacia desenfrenada del autor en presentar la obra...; si la disimulación de los aprobantes en calificar por dignos de la prensa los dislates, las obscenidades e insolencias que por su estado Religioso debían detestar con más ceño y censurar con mayor libertad; si ver autorizada la

²²⁴ Se conoce con este nombre a un tipo específico de publicaciones con pocas páginas en las que se mezclan los datos científicos con predicciones, poesías, etc. Suelen asimilarse a los pronósticos y almanaques, ya que recibían estos nombres aleatoriamente y recibían el mismo trato por parte de la legislación.

²²⁵ Al parecer el uno de los pseudónimos utilizados por Francisco Martínez Moles, presbítero, profesor de Teología en la Universidad de Alcalá y autor de pronósticos y alguna otra obra religiosa. Fichoz nº 00024947.

licencia con el nombre del Consejo, o considerar el abandono del Juez de Imprentas en esta Corte en el desempeño de lo que por esta comisión está a su cargo [...]”.²²⁶

Ante el escándalo, el Rey decretó un castigo de destierro a veinte lenguas de la Corte y Alcalá para el autor, con la prohibición de publicar más piscatores, y para los censores que la habían aprobado el mismo destierro con destino a conventos de sus respectivas religiones (fueron a Ciudad Real y Ávila), aunque más tarde fueron perdonados por el Rey.

Aunque el contenido de este expediente resulta especialmente claro en cuanto a la labor y responsabilidad que tenían los censores y el Juez de Imprenta, algo que veremos en los siguientes capítulos, conviene traer la cuestión aquí ya que en su respuesta a Wall, Curiel explica el procedimiento seguido para la censura de dicho papel, que había cumplido escrupulosamente con la legalidad, y asume él los posibles errores cometidos, proponiendo soluciones para evitar que se repitieran casos como ese. Entre las medidas propuestas está ya la creación de una “Junta de sujetos doctos y con salario”, que serían en lo sucesivo responsables de lo censurado. El Consejo y sus Fiscales respaldan la actuación de Curiel, reconociendo su labor en el tiempo que ha desempeñado su cargo, ya “que desde que se le hizo este encargo [de Juez de Imprentas] no ha cesado de hacer trabajar a el Consejo con el mayor esfuerzo en reducir a la práctica y restituir a su más puntual observancia cuantas legales disposiciones se han dado en este asunto por los señores Reyes de España en el discurso de más de dos siglos”, y secundan la propuesta del Juez, que será llevada a debate en julio del mismo año y supondrá otra de las actuaciones destacadas de nuestro protagonista, y que ya hemos visto, el nombramiento de un cuerpo de censores a sueldo. Huelga decir que Wall se mostró abiertamente contrario a esta propuesta, calificando la medida de “inútil”, ya que redundaría en un encarecimiento de los libros sin que se tradujera en una censura más eficaz, pues lo que había que buscar eran “sujetos doctos, literatos de honor y desinteresados”.

²²⁶ Todas las citas textuales, así como la información sobre el caso se encuentra en AHN, Consejos, Leg. 11275 y Estado, Leg. 3185. Ha sido analizado por GOMEZ DEL CAMPILLO, Miguel “El Rey, el Consejo de Castilla, el Juez de Imprentas y un estudiante chofista”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV, num. 53 (1947), págs. 17-56, donde dice que no era profesor sino estudiante de la universidad.

Los conflictos entre Curiel y Wall duraron tanto como su cohabitación en sus respectivos cargos. Fueron varios más los episodios que les enfrentaron por permitir el Juez de Imprentas la licencia de obras cuyo contenido era materia de Estado, lo que obligó al Rey a recordar al Juez cuáles eran sus limitaciones a este respecto, expidiendo para ello una nueva orden en la que reiteraba la necesaria aprobación de Estado para los escritos que trataran de temas de su negociado²²⁷. En 1762 los conflictos salpicaron también al hermano del Juez, Pedro Curiel, por entonces Subdelegado de imprentas en Sevilla, a quien Wall dirigió una directa acusación y que se resolvió de parte del Secretario de Estado, condenando al tipógrafo y al propio Subdelegado:

“Esta facilidad de Don Juan Curiel y de su hermano el subdelegado de Sevilla en dejar imprimir y en disculpar a los que imprimen los escritos que se publican por esta Secretaría, no puede tener otro objeto que el de chocarla, y circunstancialmente encierra un oculto desprecio de las órdenes que se le comunican por su conducto; pues en todo lo demás se muestra diligentísimo. A que se añade haber negado muchas veces su licencia para imprimir varios papeles, aún lo más ridículos, como jácaras, y coplas de ciegos con pretexto que trataban materias de Estado, remitiéndolos a esta Secretaría, cosa que no parece puede tener otro fin, que el hacerla despreciable.”²²⁸

La tensión entre ambas oficinas resulta evidente, jugando cada uno con las cartas que pueden y aprovechado el más mínimo desliz para hacer valer ante el Rey su opinión.

La personalidad de Curiel hizo que no sólo se enfrentase al poderoso Secretario de Estado. En su labor como Juez de Imprenta tuvo otros dos sonados casos que sólo vamos a mencionar. El primero de ellos es con la Real Academia Española, de la que Juan Curiel era miembro numerario y destacado. El 8 de mayo de 1755 se le había concedido a esta corporación, junto con la Real Academia de la Historia, el privilegio para imprimir sus obras y las de sus miembros con la única licencia de la propia

²²⁷ Orden circular disponiendo que no se dé facultad a los dependientes y subdelegados de imprentas para imprimir escritos que traten de materia de Estado, AHN, Consejos, Leg. 51634. Asunto tratado por ROMEU, *op. cit.* (nota 67) págs. 47-48, GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78) págs. 97-98 y REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 536-537.

²²⁸ AHN, Consejos, Leg. 11275.

institución, lo que suponía que esos escritos escaparan al control del Juzgado de Imprenta, en plena ofensiva por reforzar su autoridad. En junio del mismo año Curiel había iniciado un expediente que llevó a la suspensión del privilegio, a pesar de que tres de los censores nombrados en su Decreto eran miembros de la Academia. El conflicto desbordó los límites institucionales y propició la intervención de Ricardo Wall, que permitió imprimir la oración a Carlos III de Bernardo de Iriarte en 1760 sin licencia, aunque ese mismo año tuvo que solicitarla para imprimir una *Ortografía*²²⁹.

El segundo gran conflicto enfrentó a Curiel con el conocido impresor Joaquín Ibarra en los comienzos de su andadura a raíz de las inspecciones hechas a las imprentas madrileñas después de la aprobación definitiva del Auto de Curiel. De estas inspecciones se expedientó a Antonio Sanz, Gabriel Ramírez y Joaquín Ibarra, siendo el caso de este último un conflicto más intenso por las repercusiones que tuvo y que supusieron, incluso, su arresto domiciliario sólo levantado para la asistencia a misa las fiestas de guardar²³⁰. El caso y la relevancia de los impresores implicados son una muestra de la decisión del juez sevillano en llevar hasta sus últimas consecuencias las disposiciones aprobadas por iniciativa suya y que andaban en la búsqueda de un control efectivo y centralizado por parte de su Juzgado en defensa de los intereses de la Corona.

2.2.3. Las reformas de Carlos III

A pesar de que Curiel mantiene su puesto como Juez Privativo de Imprentas hasta 1769, su influencia y poder se verá seriamente mermado durante el reinado de Carlos III, cuando la oposición de libreros e impresores y la enemistad con el Secretario Ricardo Wall se sumen a la entrada de Pedro Rodríguez de Campomanes como Fiscal del Consejo de Castilla. El nuevo monarca, que llega a Madrid con la experiencia previa de su ejercicio en Parma y, sobretodo, en Nápoles, introducirá profundos cambios en

²²⁹ El asunto está tratado por GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78) págs. 65-67.

²³⁰ Este caso fue estudiado por GONZALEZ PALENCIA, "Joaquín Ibarra y el Juzgado de Imprentas", *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid*, XIII (1944), págs. 5-47, resumido por el propio autor en su biografía de Curiel, *op. cit.* (nota 78), págs. 69-74 y por REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 516-522.

la legislación de imprentas, leyes encaminadas a liberalizar la impresión y el comercio, frente al intervencionismo que había caracterizado, hasta ese momento, la política real.

Las quejas de los libreros estaban relacionadas siempre con cuestiones mercantiles y buscaban una mayor libertad de actuación para que su actividad fuera más lucrativa. Entre las reclamaciones se apreciaban siempre los mismos puntos: desaparición del Portero de la Comisión, que actuaba como intermediario entre autores, libreros e impresores para la obtención de privilegios, licencias y tasa, cobrando por ello sus derechos sin que tuviera asignada en ninguna ley dicho cometido; la revocación de los privilegios, especialmente los que disfrutaban las órdenes religiosas; supresión del salario a los censores, alegando que los habían que no cobraban, como el Vicario Eclesiástico; la desaparición del cargo de Corrector General, por ineficaz y anticuado; y, la abolición de las tasas, que no permitía un libre comercio de los libros²³¹.

La primera medida que se adopta, sin la consulta previa de Curiel²³², es la supresión de la tasa por Real Orden de 14 de noviembre de 1762²³³. Esta supresión suponía que se podrían vender los impresos al precio que acordaran libreros y autores, con la única limitación de los que se consideraban de “uso indispensable para instrucción y educación del pueblo”, esto es los de primera necesidad, que seguiría con un precio tasado por el Consejo para evitar abusos y asegurar su accesibilidad. Para determinar qué libros estaban incluidos, el Rey solicitó un informe al Consejo, que le respondió con una larga lista.

Los libreros elevaron un memorial el 25 de febrero de 1763 en el que descalificaban a los censores, a Curiel y al Corrector General, despreciando su trabajo, elogiaban la desaparición de la tasa y pedían la supresión del resto de cargas. La Secretaría de Estado, nuevamente, discrepa del número de libros que se habían incluido por parte

²³¹ RUMEU, *op. cit.* (nota 67), págs. p. 49-50.

²³² No consta, al menos, que realizara ningún informe antes de la publicación de la Real Orden de 1762, igual que tampoco se manifestó antes de la Real Orden de 1763.

²³³ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XXIII. Comentada por RUMEU, *op. cit.* (nota 67), pág. 50 y REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 545.

del Consejo y que ponían en riesgo la efectividad de la abolición, y realizó otro informe mucho más limitado en el que se incluían el *Catón cristiano*, el *Espejo de cristal fino*, los *Devocionarios del Santo Rosario*, el *Vía Crucis* y las cartillas y catecismos. El autor, Francisco Pérez Bayer, también hizo mención al sueldo cobrado por los censores, que veía prescindible, y la inutilidad de publicar aprobaciones y alabanzas junto con las obras, lo que encarecía los impresos al ocupar “dos o tres pliegos”. A la vista de estas reacciones, el 22 de marzo de 1763 se dio una nueva Real Orden en la que se procedía a liberalizar el comercio y que, de hecho, suponía una sustancial modificación de la normativa impulsada por Curiel apenas diez años antes²³⁴.

La nueva ley confirmaba como libros sujetos a tasa los expuestos en el informe elaborado por orden de la Secretaría de Estado y redactado por Pérez Bayer, a los que añadía las cartillas de Valladolid, los catecismos de Astete y Ripalda, los preparatorios para la Confesión y la Comunión, y meditaciones devotas como los novenarios. También se ordena que no se concedan privilegios más que a los autores, por lo que se deberán negar los que tan frecuentemente habían venido solicitando las distintas comunidades seculares y regulares, debiendo cesar desde ese momento las que hasta la fecha lo hubieran disfrutado. Las más afectadas por esta decisión eran las órdenes religiosas, que solían solicitar y obtener privilegios para las obras escritas por sus miembros, aún cuando estos ya hubieran fallecido, evitando que sus libros circularan libremente.

Se suprime también el oficio de Corrector General de Imprentas, “que sobre lo gravoso es totalmente inútil” y se cesa al Portero del Consejo en la Comisión de Imprentas en las funciones de intermediación en la solicitud de licencias y privilegios que hasta el momento había venido desarrollando. Así, cualquiera podría sacar las licencias y privilegios sin coste adicional, pues suponía también dejar de abonarle los derechos que cobraba por tal actividad, lo que debía redundar en un abaratamiento de los costes de impresión.

²³⁴ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XIV. La Real Orden y las reacciones e informes posteriores han sido comentados por GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 102-125 y REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 546-552.

También se procede a la supresión del salario que desde el Auto de Curiel venían percibiendo los censores por considerarlo “exorbitante y demasiado gravoso”. En adelante, los censores deberían realizar su trabajo por el honor del nombramiento y a cambio de un ejemplar del libro censurado, alegando que en el resto de Europa la práctica era ésa sin que por ello faltaran quienes estuvieran dispuestos a hacerlo.

Finalmente, se prohibía la impresión de aprobaciones y censuras en los libros, en los que bastaría con indicar que estaba aprobado por los superiores y el nombre del censor. Esta prohibición afectaba también a las alabanzas que se hacían al autor o a la obra en los preliminares del texto, “a no ser en alguna disertación útil y conducente al fin de la misma obra”, eliminando legalmente de esta manera la mayor parte de los paratextos que precedían al cuerpo de la obra.

Carlos III procedía, por tanto, a la definitiva prohibición de que las censuras y aprobaciones previas de los manuscritos fueran impresos junto a las obras originales de los autores. Esta medida estaba encaminada a evitar que los juicios emitidos por los censores estuvieran condicionados a su futura impresión. Si los censores sabían que sus textos no verían la luz, podían actuar con mayor independencia en su valoración. Además se reconsideran las censuras como documentos administrativos y no textos literarios en sí, que es en lo que se habían convertido a lo largo del Siglo de Oro. Finalmente, esta medida suponía un ahorro para autores e impresores, que prescindían de unos pliegos que no aportaban nada al original pero sí lo encarecían.

En definitiva, la Real Orden de 1763 pone fin a la caótica situación que Curiel no había logrado controlar. Las disposiciones que se incluyen, además de liberalizar el comercio de libros, fortalecen el papel del Consejo, reconocen un nuevo valor a la autoría (al facultar a los autores a solicitar las licencias y limitar la concesión de privilegios) y limitan el poder de intervención de la Iglesia (que copaba las censuras y los privilegios corporativos) y de intermediarios como el Corrector General o el Portero del Consejo

en la Comisión de Imprentas. La vinculación de estas medidas con la política educativa y la de reforzamiento del poder central es clara²³⁵.

A petición del Consejo, Curiel realizó un informe sobre el alcance de esta Real Orden, el 20 de abril del mismo año. A pesar de que ésta suponía, como hemos dicho, una enmienda a la totalidad de la reforma que con tanto esfuerzo había logrado implantar y que tanta oposición había despertado, el Juez de Imprentas se muestra partidario de alguna de las medidas, matizando otras y presentando sus alegaciones a las que se opone.

Siguiendo el mismo orden que la propia ley, Curiel manifiesta algunas contradicciones expresadas en la supresión de la tasa. Tras suprimir los privilegios de que gozaban muchas de las obras sujetas a tasa, considera que por su poca extensión la moderación de los precios sería natural para evitar la competencia, siendo sólo entendible la tasa para los libros de educación cristiana, que podían ser más voluminosos. En cuanto al rigor en la aplicación, Curiel muestra la contradicción que este punto representa por las críticas que se le habían hecho a él durante tanto tiempo por el celo guardado en el cumplimiento estricto de la ley:

“[...] que he sido notado de riguroso y aun de ridículo en la puntual observancia de estas leyes, ninguno se ha ofrecido sobre exceso de las tasas ni sobre ello ha habido denuncia, queja ni aun la menor noticia [...] y aunque también de oficio procuré que Antonio Sanz (que imprimía los calendarios y lunarios anuales y vendía a excesivos precios) se arreglase a lo justo, se me atajó la diligencia, por orden superior, para que cesara en este procedimiento [...]”.²³⁶

También muestra Curiel su preocupación por cómo la supresión de los trámites burocráticos podrían afectar al cumplimiento de la ley en lo tocante al depósito legal, así como la entrega del ejemplar impreso con el que se pagaría censor.

²³⁵ LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 856.

²³⁶ GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 103.

Sobre la extinción de los privilegios, la considera *justa* y advierte que ya el Consejo había comenzado a moderarlos, concediéndolos a los autores, es de suponer que por iniciativa suya. En cualquier caso, ante las dudas que podía suscitar su ejecución, pide que se aclare si la nueva disposición se aplica a los privilegios renovados a la catedral de Valladolid para las cartillas de primeras letras, al Nuevo Rezado del monasterio de El Escorial, del Hospital General de Madrid sobre el *Arte* de Nebrija y el *Piscator* de Sarrabal y los que disfrutaba hasta el momento la Real Biblioteca de obras de Nicolás Antonio, Mariana, Ferreras y Ambrosio de Morales.

Contrario se muestra, en cambio, a la supresión del Corrector General, por el daño que esto podría hacer al crédito de las prensas españolas y al contenido de los textos que de ellas salieran, pues quedaba al arbitrio de impresores la corrección, cuya fijación legal en 1558 había tenido como objetivo cuidar el texto y evitar que se alterara por “malicia o ignorancia”. Sobre la tarea del Portero, explica que los autores no tenían impedido realizar dicha solicitud directamente, sino que les resultaba más cómodo encargárselo a él, quien ya había cesado en esa actividad en cumplimiento de la Orden.

Sobre la supresión del salario de los censores no encuentra inconveniente, aunque dice que no era tan gravoso como los impresores querían hacer ver, pues sólo suponía un incremento de un maravedí o un maravedí y medio por libro, y que a cambio se obtenía la responsabilidad y rapidez de los censores, que ahora veía peligrar.

Finalmente, recuerda que las aprobaciones y censuras que precedían a la licencia del Consejo hacía ya años que no se imprimían por el carácter secreto de las diligencias, y que sólo se permitía imprimir las aprobaciones o paratextos (incluyendo alabanzas o elogios) que se presentaban con el original, aunque fueran las del superior de sus religiones y del Ordinario, tal y como se había recogido ya en su Auto, por lo que para evitar que sean sometidas a censura “se abstienen ya los autores de imprimirlas”. Y deja a determinar por el Consejo si el nombre de los censores debe aparecer en la licencia, ya que hasta el momento no se hacía.

Tras comunicar al Consejo su detallado informe, éste encargó a los fiscales Lope de Sierra y Pedro Rodríguez de Campomanes que diera su opinión al respecto. El primero coincide con Curiel en varios puntos, como en los libros sujetos a tasa o la supresión de privilegios. Sobre la eliminación del empleo de Corrector General, reconoce a Curiel que el fin con el que se estableció seguía siendo válido y que cualquier error que se cometiera por su inexistencia sería grave, pero también constata su inutilidad, por lo que como alternativa propone que fueran los mismos censores los que se encargaran de la corrección. Sobre el Portero, considera injusto cargar a los interesados con el gravamen que supone su mediación, pero no cree que se deba dejar a los interesados llevar los originales a los censores, en cuyo caso no podría mantenerse el secreto. También se manifiesta a favor de la supresión del sueldo de los censores, aunque reconoce que a la larga el honor y el ejemplar que se les da no serán suficientes para compensar su trabajo.

Campomanes, por su parte, secunda en su mayor parte lo expuesto por Lope de Sierra, aunque realiza algunas matizaciones, como a la duda planteada por Curiel sobre los privilegios, donde señala que se había renovado el de la catedral de Valladolid para las cartillas y se había otorgado a la Real Compañía de Libreros e Impresores uno para la impresión del rezo, mientras que la Real Biblioteca podría disfrutar del suyo hasta que algún particular solicitara imprimir dichas obras, en cuyo caso se decidiría lo que mejor conviniera. Campomanes también se pronuncia sobre el oficio de Corrector, juzgando que su trabajo tenía sentido cuando había pocas imprentas, pero que hacía tiempo había dejado de ser eficaz y útil, asegurando que “en España, más falta hay de buenos escritores que de rígidos censores”, y sobre el oficio del Portero, cuyos derechos adquiridos considera “abusivos” por el sobrecoste que suponía para las partes implicadas. Y, finalmente, sobre el sueldo de los censores, Campomanes expone que casi todos eran eclesiásticos o regulares, y que habría que añadir más seculares que velaran por las regalías. Afirma, además, que nunca habían faltado censores que no cobraran en la Vicaría de Madrid, por lo que no habría problema en que siguiera siendo así. Considera, sin embargo, que no se les puede privar del honor de ver su nombre impreso en las obras y que para mantener el secreto de su identidad hasta

obtenida la licencia, sería un oficial de la escribanía del Consejo quien llevara los manuscritos, como antes hacía el Portero, pero sin cobrar por ello.

Con estos informes se confirmaban y matizaban los posibles reparos de la Real Orden de 1763, y se materializaba una pérdida de autoridad del todavía Juez de Imprentas. En este mismo año Carlos III adopta dos decisiones más encaminadas a fomentar la industria de la imprenta nacional, con la prohibición de importar libros del extranjero que hubieran sido reeditados en España²³⁷ y con la concesión a principios de 1764 a la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino del privilegio para imprimir las obras de Nuevo Rezado que hasta el momento se habían importado²³⁸.

Aunque en nuestro repaso a las reformas legislativas hemos prestado atención, principalmente, a las disposiciones que afectaban al mecanismo de censura previa, conviene no obstante señalar una serie de medidas adoptadas poco después de las que acabamos de señalar y que profundizan en esa revalorización del autor a la que hacíamos referencia. Se trata de las reformas introducidas en materia de privilegios. Junto con la extinción de los privilegios corporativos, el 20 de octubre de 1764 se publica una nueva Real Orden por la cual los privilegios concedidos a un autor no se extinguían con su muerte, sino que si mediaba una solicitud, podrían pasar a su legítimos herederos²³⁹, lo que de hecho suponía un primer paso que transformara en el futuro de manera definitiva el concepto de *privilegio* por el de *derecho de autor*, aunque el camino que quedaba por andar para llegar a ese punto todavía era largo.

En pleno período de reforma legislativa del marco regulatorio de la imprenta, que afectaba a todas sus vertientes, se produjeron las sublevaciones dentro de lo que se conoce como *Motín de Esquilache* en 1766, que tendrán sus repercusiones para la imprenta con la restricción en la circulación de impresos. La primera medida para

²³⁷ *Privilegio concedido a la Compañía de Impresores de Madrid y demás mercaderes de libros, para que no se pudiese introducir en España ni América los libros extranjeros reimpresos en España*. Madrid, 29 de noviembre de 1763. Citado por REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 552-553.

²³⁸ Para más información consultar REYES GÓMEZ, Fermín de los, "Los libros del Nuevo Rezado y la imprenta española del siglo XVIII" en *Revista General de Información y Documentación*, 9 (1999), págs. 117-158.

²³⁹ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XXV.

evitar la difusión de las revueltas fue la de prohibir la impresión, circulación o lectura de cualquier escrito subversivo a través un bando el 18 de abril²⁴⁰.

Siguiendo esta línea, y debido a que desde los círculos anti-jesuiticos se culpaba a los hijos de la Compañía de incitar a la revuelta, el 16 de mayo de 1766 se continúa en la línea de limitar los privilegios de las comunidades religiosas con la prohibición de que éstas tengan imprentas propias en sus conventos²⁴¹, lo que incluía los lugares privilegiados y sus inmediaciones. Quienes las tuvieran deberían venderlas o arrendarlas a seglares en el plazo de dos meses, sacándolas de los lugares reservados a la clausura. Además, se ordenaba a los Corregidores que no se permitirá a ninguna persona privilegiada (nobles o eclesiásticos) regentar una imprenta. Curiel, a pesar de su cercanía a la Compañía de Jesús, debe proceder a cumplir la nueva disposición y manda órdenes a las autoridades provinciales para hacer cumplir la ley²⁴².

La última medida de calado adoptada por Curiel como Juez de Imprentas fue la prohibición de historias, pronósticos, romances y coplas de ajusticiados en 1767²⁴³. La literatura de cordel contaba ya con cierto desprestigio entre la elite ilustrada, ya que se acercaba más a la cultura popular que a los fines didácticos que los ilustrados pretendían infundar a los impresos. Lo cierto es que este tipo de literatura contaba con el favor del público, que devoraba año tras año los pronósticos y calendarios de luna y compraba con mayor interés las coplas de ajusticiados que las grandes empresas editoriales impulsadas por la elite. Prueba del éxito editorial de este género está en la declaración de uno de los autores más populares del momento, el Doctor Diego de Torres Villarroel, que en una de sus obras reconoce los pingües beneficios que esta actividad le reportaba:

²⁴⁰ Reproducido por DEACON, Philip, "García de la Huerta, *Raquel* y el motín de Madrid de 1766", *Boletín de la Real Academia Española* LVI (1976), pág. 732.

²⁴¹ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XV, Ley V y AHN, Consejos, Leg. 5529.

²⁴² En AHN, Consejos, Leg. 5529 hay varios ejemplos de estas comunicaciones de Curiel a las autoridades periféricas.

²⁴³ *Cédula Real por la cual se prohíba la impresión de Pronósticos, Romances de ciegos y Coplas de ajusticiados, Madrid, 21 de julio de 1767*. AHN, Consejos, Leg. 43719 y *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVIII, Ley IV.

“Trabajo (gracias a Dios) con deleite y sin fatiga; y soy tan afortunado de desatinos, que luego que me pongo de letra de molde mis majaderías, me acarrearán los ochavos a porrillo, y los pesos duros a mojicones; de modo que en cuarenta y dos años, que llevo ya a la cola de Escritor de Kalendarios y bobadas, he ganado más de novecientos mil reales.”²⁴⁴

La publicación de este tipo de publicaciones suponía un ingreso seguro para los maestros impresores, que paliaban así los posibles fracasos de otras empresas editoriales y aseguraban un beneficio económico fijo indispensable para el mantenimiento de sus negocios. No es de extrañar, por tanto, que surgiera una feroz competencia entre los distintos impresores por hacerse con el control de estas obras, como el pleito que enfrentará a dos conocidos impresores de la Villa y Corte, Manuel Martín y el poderoso Antonio Sanz, y que obligarán a intervenir a Juan Curiel para poner orden entre ellos²⁴⁵.

Pero más que el rechazo de los ilustrados, el acontecimiento que precipitó la decisión de prohibir todo este tipo de obras fue la publicación en uno de los piscadores de Diego Torres Villarroel de un episodio que fue interpretado como una profecía de lo ocurrido:

“La situación general del orbe político se registra con raras revoluciones que sorprenden los ánimos de muchos. Un Magistrado que con sus astucias ascendió a lo alto del valimiento, se estrella desvanecido, en desprecio de aquellos que le incesaban. Preparanse embarcaciones que tendrán venturosos pasajes. Un Ministro es despedido por no haber imitado en la justicia al significado del enigma. Ciertos genios turbulentos trastornan una Corte; pero algunos son condenados a muerte. Un personaje bien visto

²⁴⁴ TORRES VILLARROEL, Diego, *Pronóstico y Diario de quartos de luna para este año de 1761 por el Gran Piscador de Salamanca, el Doct. D. Diego de Torres Villarroel*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1760. Citado por REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 563-564.

²⁴⁵ Sobre este episodio conviene consultar LOPEZ, François, “Antonio Sanz, imprimeur du roi et l’édition populaire sous l’Ancien Régime”, *Bulletin Hispanique*, XCV (1993), págs. 349-378, donde se analiza el contenido del documento al respecto conservado en AHN, Consejos, Leg. 5529.

de la plebe no se rehúsa de entrar en un negocio por el bien del público; pero le cuesta entrar en el significado del enigma.”²⁴⁶

No cuesta poner nombre a tales personajes y acontecimientos a la vista de lo sucedido en 1766, pero también es cierto que este tipo de afirmaciones vagas abundaban en los calendarios y pronósticos de todos los años, sin que otras veces se hubiesen tenido por predicciones. En cualquier caso, Campomanes tomó cartas en el asunto y mandó retirar ese y otros pronósticos del popular profesor salmantino, al que además pidió explicaciones. Torres, haciendo un alarde de sinceridad, argumentó que nada de sus escritos tenía ninguna finalidad política, pues sólo buscaba ciertas ganancias con las que compensar su bajo sueldo como catedrático:

“Yo, que no tengo otro arbitrio para mantenerme, pues la Universidad y la Cátedra, después de trece años de asistencia y de haber gastado ocho mil reales en graduarme, me vale solo setecientos reales anualmente, he impreso mis almanakes, huyendo siempre de parecer astrólogo, y así solo he tirado a llenar los huecos de las lunas con algunas coplillas que diviertan e instruyan [...]”.²⁴⁷

Así, el 7 de julio de 1767 Curiel decide la prohibición de “pronósticos, piscatores, romances de ciego y coplas de ajusticiados”, impresos que se consideraban perjudiciales e inútiles, algo que no encajaba en el objetivo de los impresos como vehículos de difusión de las ideas ilustradas.

En 1769 se produce la jubilación de Juan Curiel, que es sustituido el 11 de mayo del mismo año por Miguel Nava y Carreño²⁴⁸, que desde 1767 era Consejero de la Cámara y Consejo de Castilla. Tras el cese del controvertido ministro, se procederá a recortar las atribuciones del cargo: el Juez de Imprentas no podrá ya nombrar subdelegados particulares de imprentas, siendo los Presidentes y Regentes de las Chancillerías y Audiencias y los Corregidores quienes recuperan su antigua condición de subdelegados

²⁴⁶ SERRANO SANZ, Manuel, “El Consejo de Castilla y la censura de libros en el siglo XVIII”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV-XVI (1906), págs. 42-43.

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ Fichoz, nº 00000561.

natos. Además, el Juzgado de Imprenta se somete definitivamente al Consejo y ya no censurará más que papeles sin consideración de libros, la denostada y desprestigiada literatura de cordel²⁴⁹, exceptuando los ya prohibidos pronósticos. Así la ocupación principal del nuevo Juez sería el tratamiento de los contenciosos sobre imprenta, tal y como ocurría antes del nombramiento de Curiel²⁵⁰.

Tras el nombramiento del nuevo Juez y delimitar sus nuevas competencias, se procede a cesar a los Subdelegados nombrados por el antiguo juez sevillano, lo que se llevará a cabo el 22 de mayo de 1769²⁵¹. A partir de ese momento serán los antiguos subdelegados natos los que vigilen el cumplimiento de la ley en materia de imprenta, especialmente lo concerniente a la necesaria licencia previa por parte del Consejo.

En resumen, la gran reforma de 1763 y las consecuencias que de ella se derivan no sólo eliminan trabas burocráticas, sino que cambian la definición de los componentes en juego: el *autor* que a partir de ese momento es el único que puede obtener el privilegio de impresión, el *censor* que considera esa función como propia de su servicio al Estado y no como una profesión en si, y el *libro* que como objeto comercial queda liberado de tasas y como objeto intelectual se despoja de protocolos legales²⁵².

El avance en los recortes de la intervención de los miembros de la Iglesia en el control previo de originales tuvo un primer intento en 1770, con el proyecto de creación de una “Mesa Censoria”, que asumiera facultades que la Inquisición tenía asignadas en materia de prohibición de obras publicadas con licencia, aunque no se materializará. Sí que fue más eficaz el nombramiento de un censor regio en las universidades para supervisar sus publicaciones (a raíz del caso del bachiller Ochoa, que defendió una tesis anti-regalista en la Universidad de Valladolid²⁵³) y la limitación del control previo de los prelados en 1773, cuando se les autoriza para censurar exclusivamente las

²⁴⁹ LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 856.

²⁵⁰ *Auto del Consejo que limita la actuación del Juez de Imprentas, 22 de mayo de 1769*. Comentado por RUMEU *op. cit.* (nota 67), pág. 60.

²⁵¹ *Real Cédula de su Magestad y señores del Consejo, sobre el conocimiento de los Presidentes de las Chancillerías, Regentes de las Audiencias, Corregidores y Justicias del Reyno en punto de Impresiones*. La Real Cédula tiene fecha de 8 de julio de 1769. *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XXVII.

²⁵² LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 67), pág. 857.

²⁵³ EGIDO, *op. cit.* (nota 165).

reimpresiones religiosas, lo que en la práctica suponía recortar la intervención de los miembros de la Iglesia en el control previo de originales, con lo que la regalía plena de licencia de impresión queda, para los libros originales, en manos del Consejo de Castilla gracias a Carlos III²⁵⁴, aunque lo veremos con más detenimiento en el último punto del presente capítulo.

El proyecto de formar una “Mesa censoria” se retoma en 1777 en el seno del Consejo, inspirado en el éxito que estaba teniendo la creada por el marqués de Pombal en el vecino Portugal. El objetivo era establecer unos criterios concretos de censura y poner solución a los problemas a los que se enfrentaba a diario. Para ello se emitieron diferentes informes por el Juez de Imprentas y varias Academias, en los que se expresa la dificultad del asunto pero la necesidad de establecer unas reglas claras que se pudieran aplicar con rigor²⁵⁵. El expediente no siguió su curso y no llegó a crearse ningún organismo como el portugués, pero pone de manifiesto el interés que la elite gobernante por aumentar la eficacia del aparato censor.

Hemos visto cómo con sus predecesores la pretendida uniformidad en la concesión de licencias de impresión por parte del Consejo de Castilla se quebraba por la existencia de procedimientos especiales de censura. Las obras que trataban temas de Estado debían remitirse a la Primera Secretaría de este nombre; si versaban sobre el misterio de la Inmaculada Concepción a la correspondiente Junta; los asuntos de Indias y de Inquisición a los Consejos homónimos; si su contenido trataba de comercio, fábricas o metales a su Junta; las de medicina debían pasar por el Protomedicato; las de rezo y bulas, por el Comisario de Cruzada; y sobre casos que se estuvieran viendo en otros Tribunales, se debía consultar a los mismos antes de emitir la licencia. A estos, a partir de 1798, se añadirían otros nuevos, como los libros sobre asuntos militares, que deberían obtener la licencia de la Secretaría de Guerra²⁵⁶. En definitiva, lejos de reducir el número de corporaciones y organismos a los que se encarga el examen de los

²⁵⁴ LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), págs. 856-857.

²⁵⁵ La idea lanzada por el Consejo se encuentra transcrita en DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70), págs. 317-319 y en REYES, *op. cit.* (nota 49), Apéndice Documental, págs. 1355-1357. El informe de la Real Academia de la Historia está analizado en DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70).

²⁵⁶ RUMEU, *op. cit.* (nota 67), pág. 63 y GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 231-232.

impresos, se sigue aumentando la complejidad, pues el objetivo no es tanto centralizar el poder del Consejo de Castilla, único que podía emitir licencias, como aumentar la efectividad de la censura para lograr un control real y efectivo sobre todos los impresos que vieran la luz.

Durante el reinado de Carlos III todavía se producen algunas reformas legislativas que merece la pena destacar. La más importante es que a partir de este momento desde el Consejo se retoma una forma poco utilizada hasta entonces, que era la prohibición expresa de ciertas obras, ciertos autores o de obras sobre determinado tema sensible, práctica que toman prestada de la Inquisición, que lo venía haciendo desde el siglo XVI, que había sido inaugurada por el poder civil con la prohibición de las obras de y sobre el cardenal Noris, y que será explotada, sobre todo, durante el reinado de Carlos IV. Para Romeu de Armas esta medida era un medio ineficaz, “ya que no tenía otro valor práctico que el de dar fama y hacer codiciables a los libros prohibidos”²⁵⁷, en lo que no le faltaba razón.

Así, las primeras que se prohíben serán las que tengan que ver, primero, con el motín de 1766 y poco después con la relevante expulsión de los jesuitas de los reinos del monarca católico en 1767, no permitiendo ni las obras de los jesuitas ni las que hablaran de la propia expulsión. El segundo grupo de obras que se prohíben de manera específica son los que atentan directamente contra las regalías, lo que se hará prohibiendo las obras en las que se diserta sobre el tema²⁵⁸.

El tercer gran asunto que valdrá un tratamiento específico serán los acontecimientos revolucionarios que sacuden Francia desde 1789 y que de la mano del conde de Floridablanca, Secretario de Estado hasta 1792²⁵⁹, pondrá en marcha el famoso “cordón sanitario”, que evitara la filtración de las ideas revolucionarias, frenando así el posible efecto contagio a este lado de los Pirineos. Ese es el objetivo de las órdenes dadas el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 1789, por las que se mandaba que

²⁵⁷ RUMEU, *op. cit.* (nota 67), pág. 70.

²⁵⁸ Sobre las obras concretas que se prohíben, REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 586-597.

²⁵⁹ Cabe destacar que la iniciativa surge de la Secretaría y no del Consejo.

todas las estampas, papeles impresos y manuscritos alusivos a la revolución francesa fueran retenidos en las aduanas por los oficiales del Consejo y de la Inquisición y remitidos al Secretario de Estado²⁶⁰. Estas medidas, como otras tantas, no fueron tan efectivas como se esperaba, por lo que fue necesario emitir nuevas disposiciones en los años siguientes, dadas ya en el reinado de su hijo y heredero, Carlos IV: Orden de 5 de enero de 1791, Real Cédula de 10 de septiembre de 1791 y Real Cédula de 23 de agosto de 1792, en la que se clarifican los procedimientos a seguir: los papeles que traten sobre la revolución o la nueva Constitución francesa deben ir de aduanas a Estado; los libros en francés en general, al Consejo, que deberá remitir los sediciosos a Estado. Para hacer cumplir estas disposiciones y las que en el mismo sentido se irán repitiendo, el monarca se vuelve a apoyar en los oficiales que la Inquisición conservaba en las aduanas junto con los propios oficiales reales.

2.2.4. De Carlos IV a la libertad de imprenta

A pesar de los esfuerzos puestos en evitar la entrada de las ideas revolucionarias en nuestro país puestas en marcha por Floridablanca, Aranda y Godoy, ni la Inquisición ni el Consejo habían sido capaces de contener la filtración de dichas ideas. En 1802 se promulga una nueva cédula que devuelve al Consejo el encargo de vigilar las licencias de introducción de libros, que desde 1789 había compartido con la Secretaría de Estado²⁶¹.

Surgen, entonces, nuevos problemas en torno a la normativa que obligaba a enviar a Madrid las balas de libros que se pretendían introducir por la frontera, con el coste en tiempo y dinero que esto implicaba para los libreros interesados en este comercio. Para evitarlo, se adoptan medidas que descentralizaran esta labor, como designar oficiales reales para su supervisión en las propias aduanas: el Juez de Imprentas en Madrid, los regentes en las Audiencias, corregidores y alcaldes mayores²⁶².

²⁶⁰ Nota 15 de la *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVIII, Ley XIII.

²⁶¹ *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XXXII.

²⁶² RUMEU, *op. cit.* (nota 67), págs. 85-86.

Por lo demás, Carlos IV mantendrá en los primeros años de su reinado el mismo sistema de censura previa que había terminado de configurar su padre, por el cual el grueso de las licencias eran otorgadas por el Consejo, tras el examen previo pertinente, o por el Juez de Imprentas para los escritos que no pasaran de cuatro o seis pliegos, trasladando el eje de la actividad legisladora a controlar la entrada y venta de libros extranjeros, especialmente los franceses, por el miedo al contagio revolucionario que reinaba entre la elite española y europea²⁶³.

Pero Carlos IV, impulsado por Godoy, era consciente de la ineficacia del sistema que había heredado por lo que, como habían hecho sus antecesores, a partir de 1805 intentará una nueva reforma de la censura previa que lograra sus objetivos. El monarca reconoce la dificultad que supone la existencia de libertad de imprenta en otros países y los elevados incumplimientos de las normas dictadas, achacados más a la dejación de sus responsables que a las propias disposiciones legales. El Consejo y el Juez de Imprenta estaban saturados, por lo que debían confiar con demasiada frecuencia en subalternos no tan preparados como se esperaba. Además, la poca o nula coordinación de las autoridades que otorgaban licencias y el celo por las competencias que tenían asignadas provocaban que una misma obra se prohibiera por unas pero se permitiera por otras. Los censores, que no recibían remuneración ni reconocimiento social por su laborioso trabajo, rehusaban los encargos ante el incumplimiento reiterado del secreto que debía conservarse sobre su comisión.

Para intentar remediar esta caótica situación, Carlos IV decide centralizar la censura en un mismo órgano que se dedicara en exclusiva a esta labor para conseguir una mayor efectividad que facilitara la publicación de obras útiles y la prohibición de las perjudiciales. Así, mediante una Real Orden emitida el 11 de abril de 1805²⁶⁴ creará un nuevo Juzgado de Imprentas, independiente del Consejo y del Juzgado de Imprentas ya

²⁶³ Como novedad específica del periodo sólo cabe destacar la aparición del sistema de venta por suscripción, que se solventa ordenando que no se pueda publicar ninguna suscripción sin que se presente la obra o parte de ella al Juzgado de Imprentas junto con el prospecto que lo anunciará al público, *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XXXIV, nota 6 y AHN, Consejos, Leg. 5566.

²⁶⁴ *Real Cédula de SM y Señores del Consejo, por la qual se manda que la autoridad relativa a las Imprentas y Librerías del Reyno se reúna en un solo Juez de Imprentas, con inhibición del Consejo y demás Tribunales, baxo las reglas que se expresan*. Madrid, Imprenta Real, 1805. *Novísima Recopilación*, Libro VIII, Título XVI, Ley XLI.

existente, unificando y simplificando la legislación con la experiencia que le daba la perspectiva de varios siglos de legislación.

El nuevo Juzgado de Imprentas

El nuevo Juez de Imprentas sería la autoridad competente para todas las imprentas y librerías, siendo independiente del Consejo de Castilla y del anterior Juzgado, así como de todos los demás tribunales, reconociendo sólo las órdenes de la Secretaría de Gracia y Justicia. La persona designada tendrá dedicación exclusiva y su cargo será incompatible con el de ministro de cualquier Consejo. Este cambio suponía, de hecho, la más importante novedad legislativa en el ramo de imprenta y rompía la tradición secular de control de los impresos que desde el siglo XVI había protagonizado el Consejo Supremo de Castilla.

Tiene el nuevo Juez a su cargo un Secretario, un Oficial, un escribano y un Portero, que realizan las notificaciones a los censores, cuidan el archivo, llevan la contabilidad y demás diligencias de su oficina. La labor fundamental del Juez era hacer cumplir la legislación vigente en materia de imprenta y conocer las causas contra los impresores y libreros que las contravengan, imponiéndoles, de ser necesario, las penas previstas en las leyes.

Recuperado el fallido modelo de Curiel, se dispone que el Juez nombre para realizar las censuras a personas “de acreditada ciencia, celo y probidad”. Admitido su nombramiento se les dará sus títulos y un ejemplar del reglamento. No se establece un número fijo, pero sí se indica que deben ser pocos y entre ellos reunir todos los conocimientos. Deberán trabajar de manera individual con las obras que se les remitan y devolverlas con su dictamen fundamentado en el menor tiempo posible. El censor que apruebe los manuscritos presentados será responsable de las consecuencias, no pudiendo alegar ignorancia, pues existe la posibilidad de excusarse de su conocimiento si se desconoce el tema que contiene, en cuyo caso se remitiría a otro censor.

En sus informes, los censores deben precisar las razones por las que se aprueba o reprueba la obra, y deberán contestar a la respuesta del autor si éste solicita copia de

la censura, como hasta el momento se venía realizando. El Juez, a la vista de la censura, la respuesta del autor y la contestación del censor decidirá o lo remitirá a otro censor. Los censores deberán atender que las obras no tengan cosas contrarias a la Religión, las buenas costumbres, leyes y regalías, pero también a la *utilidad al público* o si contienen errores en materias científicas o vicios en el estilo y el lenguaje. Por primera vez en un texto legal la utilidad pública no es el único argumento de peso, sino también la veracidad y la corrección. Y también es la primera vez que se les hace responsables de lo que censuran y que se les fija la misma pena que para los autores por obras que aprobaran contrarias a lo dictado por las leyes de imprenta que había jurado vigilar.

Se mantiene, como venía ocurriendo en las leyes anteriores, el secreto en la asignación de los originales sometidos a censura para que pudieran examinarse en libertad y sin presiones, castigando a quienes rompan el silencio, como medida para disuadir a quienes hasta el momento rompían el hermetismo que se debía. Esto afectaba también a los censores, que no podrían hacer público la recepción de sus encargos. Sobre las obras prohibidas por la Inquisición o por el propio Gobierno, el censor debía denunciarlo al tribunal competente, así como si consideraba que debería ser examinado por éste al contener doctrinas peligrosas.

Se presta especial importancia al control fronterizo ordenando que se envíen desde las aduanas listas con los libros que entren para su reparto a los censores, que no se fiarán de los títulos y reconocerán toda la obra, aunque sea conocida, para evitar que se hayan añadido prólogos o disertaciones peligrosas. En función del juicio del censor, el Juez podrá retener y retirar los títulos sin que sus importadores puedan reclamar compensaciones por ello.

El nuevo procedimiento de censura reduce y simplifica los privilegios que hasta el momento se habían ido extendiendo, aunque mantiene la obligatoriedad de las obras religiosas fueran vistas por la Vicaría de Madrid. Así, se mantienen las consultas previas, al Consejo de Indias y los Secretarios de Estado para los temas de sus respectivos asuntos antes de que el Juez diera su licencia. Se prohíbe, en cambio, que

ningún organismo dé licencia de impresión o que mande imprimir ningún papel sin autorización del Juez, salvo en los oficios, cédulas, órdenes, esquelas o papeles puramente administrativos. Ninguna corporación, academia ni sociedad puede imprimir, ni siquiera actas o memorias, sin la licencia del Juez de Imprentas y entregar los ejemplares obligatorios (en total son siete ejemplares encuadernados en piel, para la Real Biblioteca, El Escorial, los Reales Estudios, la Clínica, la Vicaría, el Juez de Imprentas y el censor).

No se restaura el oficio del Corrector General, pero una vez impresa la obra debe presentarse ante el Tribunal para cotejarlo con el autorizado, única forma de evitar añadidos no deseados. Además, se faculta al Juez para nombrar Subdelegados en las capitales donde haya imprentas, para la visita de las librerías y el control del comercio.

Juan Antonio Melón, Juez de Imprentas

El designado como nuevo Juez de Imprentas fue Juan Antonio Melón²⁶⁵. Las comparaciones entre Melón y Curiel son inevitables. Ambos ejercieron el cargo en medio de profundas reformas del sistema que tendrán una corta vigencia y durante su ejercicio chocarán con distintas corporaciones e, incluso, con miembros de la propia Administración que les había colocado ahí y de la que formaban parte. En cambio, también son notables las diferencias. Si Curiel tenía una larga experiencia en la administración antes de acceder al cargo, Melón era un sacerdote, que había disfrutado de diferentes beneficios eclesiásticos antes de ser llamado por Godoy a participar de la Junta de Comercio y Moneda, de la que cesará al ser nombrado para su nueva responsabilidad.

Los esfuerzos de Melón, como habían hecho sus predecesores, fueron encaminados a coordinar las licencias y prohibiciones de su Juzgado, pero fue infructuoso, como les había ocurrido a los anteriores jueces antes que a él.

Una de las prioridades del nuevo Juez fue evitar los frecuentes enfrentamientos con la Inquisición, ya que la aprobación por su Juzgado y posterior prohibición por el Santo

²⁶⁵ Fichoz, nº 00004423.

Oficio producía grandes pérdidas a autores e impresores, además de cuestionar la eficacia de su propio trabajo. Por ello intentó empujar al rey a una unificación por la cual se designara entre los canónigos y beneficiados a un número de censores que fueran al mismo tiempo los revisores previos a la impresión y calificadores inquisitoriales. De este modo se evitaría tener que buscar la forma de pagar a los censores por su trabajo y se ahorrarían los constantes choques entre dos instituciones que tenían el mismo objetivo: evitar la entrada de ideas perjudiciales para el público. Pese a los intentos del Juez, no contó con el apoyo ni del Inquisidor General ni del propio Rey, que no pretendía modificar el estatus de la Inquisición.

Tampoco pudo Melón conseguir el correcto funcionamiento de su nuevo Juzgado. El Vicario, por el que debían pasar las obras, tenía problemas para encontrar personas capacitadas que evaluaran los trabajos, que se iban acumulando en sus oficinas. El Juzgado se encontraba en una situación parecida. Melón nombró Subdelegados en las capitales de provincia y en las principales ciudades, pero el Rey se reservó el derecho de cambiar algún subdelegado, como el de Cádiz (importante por el tráfico con América), y a conceder licencias a través de la Secretaría de Gracia y Justicia. Melón no llegó a nombrar a los censores tal y como se había marcado en el reglamento y se enfrentó a la facción opuesta a Godoy, que les criticaban a él y a sus principales apoyos (Leandro Fernández de Moratín y Pedro Estala fundamentalmente), por considerarles partidistas en el desempeño de su labor. El propio Melón había expresado su malestar al rey porque el secreto de las censuras provocaba que las críticas recayeran siempre sobre él. Ante esta situación, el 27 de marzo de 1808 Fernando VII suprime el Juzgado de Imprentas, devuelve al Consejo de Castilla sus anteriores atribuciones y cesa a Melón, que será sustituido por José Joaquín Colón de Larreategui²⁶⁶, antiguo Consejero de Castilla que se había enfrentado abiertamente con Godoy.

A partir de este momento, con la ocupación de las tropas francesas y la injerencia en los asuntos de gobierno y el posterior papel de la Junta Central, el control sobre la imprenta resultaba, si cabe, más compleja. Se dictaron distintas órdenes y autos a lo

²⁶⁶ Fichoz nº 00000177. No se conoce el texto de nombramiento, pero sí la circular que informaba del mismo. REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 716.

largo de 1808 para poner orden, manteniendo siempre la necesidad de una licencia por parte del Consejo o del Juez, e incluso se intentó dictar un nuevo reglamento, al estilo de Curiel, en el que recoger toda la legislación en vigor adecuándola a los nuevos tiempos, pero el peso de los liberales se decantaba hacia la libertad de prensa de la que ya disfrutaban otros países europeos²⁶⁷.

El 10 de noviembre de 1810, tras dos años de vacilaciones y oscilaciones entre la Junta Central y el Consejo, las Cortes, que habían asumido el poder soberano a penas dos meses antes, aprobaron un reglamento por el que se instauraba la libertad de imprenta. En dicho reglamento se permitía a todas las instituciones e individuos publicar libremente sus ideas y opiniones sin licencia o aprobación previa, siendo cada autor, eso sí, responsable del contenido. La única excepción incluida fue a las obras de religión, que deberían ser aprobadas por el Ordinario eclesiástico, como se mandaba desde el Concilio de Trento. El nombre de los autores se podría suprimir, pero no el de los impresores, que además deberían llevar un registro de la autoría de las obras que dieran a la luz.

Para asegurar la libertad de prensa y evitar los posibles abusos se creaba una Junta Suprema de Censura, nombrada por las Cortes y compuesta de nueve miembros, de los que sólo tres podrían ser eclesiásticos. Se traba de una censura represiva, encargada de supervisar las denuncias que se presentaran y velar por el cumplimiento de las reglas. Se creaban además Juntas similares en cada capital de provincia, con cinco miembros, de los que sólo dos podían ser eclesiásticos.

Este reglamento se mantendrá en vigor, con algunos cambios, hasta el regreso de Fernando VII a España, que provocó la derogación sistemática de toda la obra legislativa que las Cortes habían llevado a cabo en su ausencia. En 1814 se retomará el Juzgado de Imprentas en los mismos términos en los que había estado José Colón,

²⁶⁷ Para una información más exhaustiva de este periodo, REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 716-732.

designando a Nicolás María de Sierra para el puesto, quedando de nuevo el Consejo de Castilla como el principal órgano encargado de la censura previa²⁶⁸.

La mecha de la libertad ya había prendido y a lo largo del siglo XIX los avatares políticos provocarán una alternancia de censura previa y represiva.

2.2.5. A modo de balance secular

Resume de manera gráfica la evolución secular de la legislación Miquel y Collantes:

“La España, donde tanto abundan las leyes, órdenes, reglamentos y decretos, sobre todo género de materias, en España donde la facilidad de legislar es tan maravillosa como la dificultad que hay para hacer observar lo mandado, hemos tenido un verdadero manantial inagotable de leyes, decretos y órdenes sobre imprenta... Todos los métodos se han ensayado; todos los sistemas se han experimentado; todas las teorías se han procurado realizar, lo mismo en lo sustancial, como en lo accesorio; lo mismo en la calificación de los delitos, en la variedad de las penas, en el procedimiento, en los tribunales, como en la parte de policía y reglamentaria”²⁶⁹.

Este testimonio resume a la perfección la excesiva proliferación de leyes y la dificultad que encontraba la clase gobernante para hacer que se cumplieran sus disposiciones, con independencia de quién la promulgara, qué método empleara o de cuán severas fueran las penas impuestas. Pero el sistema se mantuvo en vigor hasta el siglo XIX y sus protagonistas supieron, a pesar de las dificultades, articular redes de sociabilidad que les ayudaran a esquivar los inconvenientes y adentrarse en el mercado editorial con más o menos fortuna.

²⁶⁸ RUMEU DE ARMAS, *op. cit.* (nota 67), págs. 154-167 y ARTOLA, Miguel, “El camino a la libertad de imprenta, 1808-1810” en MOYA ESPÍ, Carlos; RODRÍGUEZ DE ZÚÑIGA, Luis e IGLESIAS, Carmen (Coords.), *Homenaje a José Antonio Maravall*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, Tomo I, págs. 214-217.

²⁶⁹ MIQUEL Y COLLANTES, Saturnino Esteban, *Memoria histórica sobre la legislación de la libertad de imprenta en España*. Madrid, Imprenta de C. Moliner y Compañía, 1870, p. 19. Cit. por REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 17.

¿Por qué eran posibles todos estos cambios legales? La respuesta ya la habíamos anunciado: la concesión de licencias de impresión es considerada como regalía del monarca, y por tanto podía ser delegada en quien considerara en cada momento, además de establecer las directrices para su ejercicio, como la obligación de que las obras que obtuvieran el permiso para publicar cumplieran el requisito de ser de utilidad pública y sirviera para una mejor instrucción de sus súbditos. En cualquier caso, en ningún periodo, ni el Juez de Imprentas ni el Consejo de Castilla tendrían en exclusiva la capacidad para conceder licencias de impresión, coexistiendo otras censuras previas especializadas que ya hemos mencionado, de forma que esta regalía, ni siquiera en el siglo XVIII, se define como la atribución exclusiva de una institución concreta, ni fue éste el objetivo de ninguno de los monarcas²⁷⁰.

También hemos visto que desde el siglo XVII existía la obligación de insertar al inicio de la obra la concesión de la licencia, el privilegio (si lo había)²⁷¹, la tasa²⁷², el nombre del autor, el del impresor, el lugar de edición y el año. Era la expresión externa más evidente de la conjunción de los criterios económicos y censores²⁷³. La lucha contra el anonimato es fundamental para identificar a los verdaderos autores de las obras y evitar que circularan obras de autores prohibidos bajo otros pseudónimos, sin embargo estas normativas, como las restantes, tuvieron un elevado incumplimiento. Así, por ejemplo, muchas de las obras carecerán del lugar de impresión, del año o del nombre del impresor, por no hablar de los que usan, conscientemente, pseudónimo, figurando éste, incluso, en las licencias del Consejo como si del verdadero nombre se tratara. Sólo entrados ya en el siglo XIX se permitirá el uso del anonimato y del pseudónimo, pero guardando siempre la referencia del nombre real del autor para

²⁷⁰ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 161.

²⁷¹ De este aspecto sólo señalar que tanto las licencias como los privilegios tenían un carácter temporal, que era señalado en el momento de la concesión. Esta característica era un mecanismo más de control, ya que para hacer nuevas ediciones era necesaria una renovación, y por tanto un nuevo examen, por los oficiales de la Monarquía, que podían denegarla si el contexto social o político había cambiado como para desaconsejar su reimpresión.

²⁷² Este impuesto era específico de Castilla, implantado en la Corona de Aragón a partir de los Decretos de Nueva Planta, establecía el precio al que debían ser vendidos los distintos libros según los criterios de la propia administración. Es la prueba económica del intervencionismo que imperaba en la legislación de imprenta. Como hemos visto, fue abolido con Carlos III dentro de su objetivo de liberalizar el sector del libro.

²⁷³ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 176-177.

asegurar su responsabilidad sobre lo escrito, y ya en un contexto que avanzaba inexorablemente hacia la libertad de imprenta.

Hemos visto, también, que aunque censura civil, no pierde totalmente su carácter religioso. Si muchos de los censores son parte del clero y una de las preocupaciones a la hora a censurar es el respeto a la fe católica, ¿por qué hablamos de censura civil? En realidad, el número de censores seculares irá aumentando con el transcurso de los años, pero el motivo fundamental es por el origen de la censura y por el carácter de la institución que emite la autorización, pues aunque entre sus miembros también hubiera clérigos, el Consejo de Castilla era un organismo exclusivamente real, ajeno a la jurisdicción eclesiástica, y si encargaba los dictámenes pertinentes a clérigos era porque todavía la mayor parte de los miembros de la más tarde denominada *República de las Letras*, tenían algún tipo de voto religioso.

Los censores, hemos visto, cobran, en determinados momentos, por trabajo realizado y no tienen un sueldo fijo, por lo que deben tener una ocupación principal ajena a la censura que se les sirva de sustento. En muchas ocasiones esa ocupación será un beneficio eclesiástico, una plaza de profesor universitario o algún puesto remunerado en el seno de cabildos u órdenes religiosas, por lo que al Consejo le resultaba más barato confiar en ellos que pagar a otras personas por hacer este trabajo.

Los ilustrados españoles no fueron revolucionarios en materia de libros. No buscaban crear un nuevo sistema jurídico, sino que se depura el existente buscando siempre el reforzamiento de la autoridad regia y la progresiva eliminación de la autonomía de los particulares, especialmente de los eclesiásticos. El clero, en su mayoría, se mostrará receloso de las propuestas reformistas por sus pretensiones jurisdiccionales, al socavar la tradicional Monarquía vicarial que tantos privilegios les había otorgado. Pero lo cierto es que no se trataba de cuestionar en ningún momento la dependencia de la Monarquía católica respecto a la interpretación que la Iglesia hacía de la religión. El bien público seguía siendo la religión²⁷⁴. Era, en definitiva, el triunfo del regalismo.

²⁷⁴ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs.180-181.

Así pues, el siglo XVIII, pese a los avatares políticos, no supone un cambio en la aplicación de la norma, y mucho menos en su incumplimiento. Es la censura previa, ejercida desde la esfera gubernativa, la que define la lógica del sistema en el Antiguo Régimen. Y la pieza angular será Consejo de Castilla. Si bien el Juez de Imprentas, tuvo en determinados periodos un protagonismo mayor, fue el Supremo, al menos nominalmente, el encargado de conceder las excepciones a la prohibición general de imprimir que son las licencias, conforme a su consideración como regalía. El Consejo experimenta, a lo largo de los siglos precedentes, un incremento de atribuciones sobre la imprenta que influye incluso en los territorios no castellanos antes de la Nueva Planta por el peso de su mercado. Aunque con el paso de los años la Monarquía vaya habilitando distintas instituciones para la supervisión previa, se trata de la búsqueda de una censura cualificada, no de una restricción de las atribuciones del Consejo. Prueba de la importancia que para la imprenta tenía el Consejo de Castilla es que su juicio es el que prevalece en los conflictos que surgen entre el resto de actores implicados durante los momentos más convulsos, como es la dirección de Curiel.

Aún así, no podemos hablar de un proceso lineal. El protagonista indiscutible es el Consejo de Castilla en tanto que Consejo Real, pero su ejercicio del control sobre la imprenta también tuvo limitaciones a tener en cuenta. La primera corre de la mano de Curiel, que relegó al Supremo en la concesión de las licencias. La segunda, y más importante, con la creación de un nuevo Juzgado de Imprentas, por primera y única vez independiente del Consejo, y que sólo esta vigente entre 1805 y 1808, cuando se recupera la práctica secular. La definitiva ruptura está condicionada por la invasión napoleónica y la convocatoria de unas Cortes extraordinarias.

Una de las primeras victorias de los liberales en las Cortes de Cádiz fue, precisamente, la libertad de imprenta, que emanaba de la libertad de opinión. Desde el principio de la guerra habían aparecido voces que la reclamaban. Dentro de la Junta Central, el primer gobierno opuesto a José Bonaparte, el canónigo José Isidoro Morales afirmó que

Godoy no hubiera dominado el país si hubiera habido libertad de imprenta²⁷⁵; y el mismo argumento empleó Diego Muñoz Torrero en las Cortes: la libertad de imprenta sería una garantía contra el despotismo a la manera de Godoy²⁷⁶. Se veía la necesidad de una constitución que impidiera tal despotismo, siendo la libertad su piedra angular.

2.3. El papel de la Iglesia

Decíamos al principio de este capítulo que desde su gestación, el Antiguo Régimen se configura en base a la unión entre el Estado y la Iglesia, según la cual cada súbdito de la Monarquía era, de manera irremediable, miembro de la comunidad religiosa que constituía la Iglesia. Esta dualidad de esferas permitía interpretar toda desviación del orden establecido como crimen contra la fe y contra el Rey, que era, además el garante de aquella. Bajo la creencia de que tras las ideas religiosas discrepantes se ocultaban realmente opiniones políticas disidentes, la Monarquía buscó el apoyo de la Iglesia en su objetivo de que todos los súbditos fueran fieles del mismo credo. La jerarquía eclesiástica proporcionaba la justificación para la intervención legítima de las autoridades civiles y éstas, a cambio, ejercían del brazo ejecutor que carecían los clérigos para imponer sus doctrinas. En esta simbiosis entre ambas instituciones se inserta, también, la censura libraria.

Hemos visto cómo desde la época de los Reyes Católicos se asigna a obispos y a cargos administrativos, como a los Presidentes de las Chancillerías, las competencias para conceder licencias de impresión. Sin embargo, según las ordenanzas que ellos mismos le dieron, sus presidentes debían ser obispos, algo que se cumplió, al menos, durante todo el siglo XVI. Es decir, aunque tuviesen la comisión por el cargo político-jurídico que desempeñaban, de hecho, todos los encargados del control eran prelados, pues habría que añadir a los obispos y arzobispos comisionados para dar licencias en sus

²⁷⁵ MORALES, José Isidro, *Memoria sobre la libertad política de la imprenta, leída en junta de instrucción pública por uno de sus vocales D. J.I.M. y aprobada por la misma Junta*, Sevilla, 1809, Colección del Fraile, v. 61, fº 165. Cit. por HERR, *op. cit.* (nota 2), pág. 137.

²⁷⁶ MUÑOZ TORRERO, sesión de 17 de octubre de 1810, citado en *Actas de las Cortes de Cádiz, antología*, edición de Enrique Tierno Galván, Madrid, 1966, p. 21-22. Citado por HERR, *Ibidem*.

diócesis. Los clérigos están desempeñando una función administrativa, si bien es cierto que muchos de ellos eran, además, doctores y/o catedráticos en teología y cánones. El criterio seguido era el de efectividad: se consideraba, principalmente un delito religioso, que aunque regalía, según Roma, era competencia de obispos²⁷⁷.

Ejemplos como el anterior dejan fuera de toda duda el relevante papel de la Iglesia y sus miembros en la cultura del Antiguo Régimen, que tiene su reflejo en la producción libraria, como autores de obras, como promotores y financieros y, por supuesto, como censores, pero dependientes del Rey y en el uso de una potestad delegada por él que sólo es una muestra más de la unión entre el trono y el altar.

Mucho antes de que la Ilustración plantease criterios racionalizadores y modernos de la división del territorio, el Santo Oficio presenta criterios de división administrativa global y lógica que tiende a repartir un territorio entre circunscripciones de extensión parecida. La Inquisición es consciente, antes que la propia Monarquía, de que es necesario remodelar el territorio para que fuera vigilado más eficazmente desde un centro²⁷⁸. Pero no sólo la Inquisición, la Iglesia en general es el aparato burocrático que mejor llega a la población, mucho más que la propia autoridad regia, a través de los obispos y la jerarquía (cabildos, vicarios...) hasta los curas párrocos y predicadores, a los que habría que sumar otras instituciones religiosas como colegios, universidades o cofradías. Es, por tanto, un agente fundamental para el control de la mentalidad y también de lo escrito. Así lo piensa, por ejemplo Jovellanos en su *Representación a Carlos IV*:

“Solo podría oponer con remedio eficaz la jurisdicción de los obispos que ayudados de sus vicarios generales, de sus cabildos y del respetable cuerpo de sus párrocos, podría extender la vigilancia hasta los últimos rincones de su diócesis... que esto es todavía más necesario en cuanto a la prohibición de libros, porque requiere providencias para que no cundan, y el método de la Inquisición no las permite”²⁷⁹.

²⁷⁷ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 118-119.

²⁷⁸ DEDIEU, Jean-Pierre y CONTRERAS, Jaime, “Geografía de la Inquisición Española: la formación de los distritos (1470-1820)”, *Hispania: Revista española de historia*, Vol. 40, nº 144 (1980), págs. 37-94.

²⁷⁹ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 267-268.

Con todo esto, no nos puede extrañar el relevante papel que juega la Iglesia dentro del mecanismo de control con el que se dotó la Monarquía para controlar la circulación de impresos. Pero con la aplicación de las ideas ilustradas, las tendencias regalistas que ya existían con los monarcas de la anterior dinastía se acentúan coincidiendo con el advenimiento de Felipe V. Se atenúan, en cierta medida, durante el siguiente reinado por la influencia que ejerce sobre el espíritu de Fernando VI su confesor, el padre jesuita Rávago, pero vuelven a aparecer con más vigor que nunca cuando Carlos III sucede en 1759 a su hermano²⁸⁰.

Como hemos visto en el presente capítulo, la Iglesia conserva a lo largo de toda la Edad Moderna un importante papel dentro del mecanismo de censura previa, además de determinados privilegios que verán recortados con el paso de los años. Recogiendo la tradición anterior, los prelados y ordinarios tienen, desde 1558 la posibilidad de dar licencias de impresión para libros religiosos y de latinidad (lo que incluye misales, diurnales, pontificales y brevarios), aunque su jurisdicción será limitada poco después. En 1752 Fernando VI extenderá también a los libros eclesiásticos las licencias dadas por el Consejo de Castilla, permitiendo a los obispos solamente dar licencia a las reimpresiones de las obras que previamente habían sido censuradas por su Consejo. Las comunidades y congregaciones religiosas tienen además una cortapisa más, pues era necesaria, además de la censura previa del Ordinario, la del Superior de su orden, antes de solicitar la licencia del Consejo y poder dar así su obra a las prensas.

Todos los estudios que se han hecho hasta el momento hablan de la progresiva pérdida de poder por parte de la Iglesia, y efectivamente, es así. Pero el ritmo de este ajuste es más lento de lo que hasta el momento se había considerado. Puede servir como primer ejemplo uno de los hechos más trascendentes en la legislación de imprenta, que fue el Auto de Curiel. Según se determina en el mismo, la Iglesia conserva a mediados del siglo la capacidad legal de intervenir en la licencia previa de determinadas obras, ya que la aprobación por parte de determinados miembros de su estamento era condición necesaria para su concesión. Así, era necesaria la firma del

²⁸⁰ DEFORNEAUX, *op. cit.* (nota 201), pág. 38.

Comisario General de Santa Cruzada para poder imprimir bulas, gracias, perdones, indulgencias y jubileos; la licencia de los Obispos lo era para la reimpresión de cartillas de primeras letras, vocabularios, artes de gramática y latinidad impresos en sus respectivas diócesis; y la licencia del Inquisidor General o del Consejo de Inquisición era necesaria para los asuntos referentes al Tribunal del Santo Oficio, tres medidas que recordaban los privilegios que hasta el momento mantenía la Iglesia.

Por otra parte están los libros de temática religiosa. Si se detectaba un texto que versara sobre Religión o Sagrada Escritura, o que estuviera prohibido por la Inquisición (lo que incluye impresión, venta o posesión) sin las licencias necesarias, se establecía como castigo la pena de muerte y pérdida de los bienes, endureciendo las penas respecto al castigo previsto para libros de otros temas, prueba de la importancia que desde la Corona se daba al dogma.

El segundo hecho que demuestra el peso del clero en la censura previa durante el reinado de Fernando VI es el nombramiento de censores profesionales por el controvertido juez sevillano. Hemos visto como este cuerpo especializado de cuarenta personas se nutría, fundamentalmente, de clérigos, pues se nombraron en total diecisiete sacerdotes regulares y diecinueve seculares, entre los que estaban los trece párrocos de Madrid, frente a los únicos cuatro seglares. Esto dejaba claro el peso que todavía se concedía a la Iglesia.

Uno de los principales puntos de fricción entre la Iglesia y la Monarquía, no sólo en el siglo XVIII, es la circulación de libros con ideas regalistas. Ya en el siglo XVII, los Austrias habían defendido con ahínco las prerrogativas reales aunque supusiera un enfrentamiento con el Papa. La prueba más palpable de este enfrentamiento es la inclusión en el *Índice de Libros Prohibidos* de la Congregación de Roma de un grupo de autores que habían defendido en diferentes obras las teorías regalistas que los monarcas castellanos utilizaban desde Madrid²⁸¹. Así, en 1647 se expide un Auto del Consejo para que no se recojan los libros que traten de las preeminencias reales,

²⁸¹ Entre ellos destacan Cenedo, Sessé, Torreblanca, Cevallos, Juan Bautista de Larrea y, en especial, Solórzano Pereira y Salgado de Somoza. REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 328.

especialmente la obra de Juan Solórzano Pereira sobre el Real Patronato, que facultaba al Monarca Católico a interferir en determinadas materias del gobierno de la Iglesia, como eran los nombramientos de obispados y las misiones²⁸².

Como ocurría con cada tema del que se quisiera controlar la información que llegaba a la opinión pública, la férrea defensa de las regalías se manifiesta en un doble sentido: permitiendo la circulación de obras regalistas, aunque estuvieran prohibidas por Roma (argumentado que la jurisdicción recaía en el Inquisidor General y en el Consejo de la Inquisición castellanos y no en las instituciones papales) y prohibiendo las obras en las que se argumenta a favor de la preeminencia papal²⁸³. Los conflictos irán en aumento en el siglo XVIII, donde las regalías se mezclan con temas de especial relevancia política y religiosa.

Otro de los temas que provocan conflictos entre la Corte de Madrid y la de Roma es el debate sobre el papel de la Compañía de Jesús. Hemos visto que en 1748, a instancias del Confesor Real, entonces el padre Rávago, un preeminente e influyente sacerdote jesuita, se prohíbe cualquier obra que trate sobre el cardenal agustino Henry Noris, aunque fuera en contra de sus postulados, para evitarle una publicidad contraproducente. Decíamos que oficialmente la prohibición nacía para evitar la proliferación de obras sin licencias que entraban en el debate sobre el cardenal en su defensa o refutación, pero que en realidad era la expresión externa de la lucha ideológica entre las diferentes órdenes religiosas y que había atrapado el asunto de las regalías en el fuego cruzado. La prohibición de 1748 era un triunfo de la Compañía de Jesús, que veía como se impedía la circulación de unas obras perjudiciales para sus intereses y que mostraba la influencia que la orden de San Ignacio había alcanzado en España. Sin embargo, el cambio de monarca conllevó un necesario reequilibrio de fuerzas y, a pesar de los múltiples apoyos que todavía tenían los ignacianos, Carlos III disponía primero la prohibición de que circulara ninguna obra de origen pontificio sin la autorización expresa de su Consejo, recortando atribuciones que tenía la Iglesia, y,

²⁸² *Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XV000. Ley II. 4 de noviembre de 1647.

²⁸³ Como ejemplo, la obra de Francisco Barambio *Casos reservados a su Santidad*, recogido por REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 328-329.

posteriormente, en 1767 la famosa expulsión de sus miembros por sus teorías (como el tiranicidio), su enfrentamiento a los jansenistas (todos los anti-jesuitas eran acusados de jansenistas) y, sobretodo, por su cuarto voto de obediencia al Papa, una autoridad temporal extranjera que siempre despertaba el recelo de los gobernantes, más allá de las posibles causas coyunturales como su posible protagonismo en el motín de 1766.

Desde la llegada de Carlos III al trono español, la reducción de la influencia que tenía la Iglesia en el control del espacio público, incluyendo la censura libraria, se convirtió en una de las prioridades de sus ministros, que encontraban en el clero la principal barrera para desarrollar su programa reformista.

Junto a la supresión del grupo de censores a sueldo, la mayor parte de los cuales pertenecían a la Iglesia, en 1763 se había decretado desde la Corona una primera medida destinada a recortar la influencia de la Iglesia sobre los impresos prohibiendo la concesión de privilegios a corporaciones. Los grandes perjudicados de esta norma eran las comunidades eclesiásticas, regulares y seculares, que con frecuencia habían venido disfrutando del privilegio para dar a la imprenta los textos compuestos por los miembros de sus propias comunidades o de las órdenes religiosas a las que pertenecían, incluso mucho después de la muerte del autor, con lo que esas obras quedaban fuera del comercio libre y de su impresión se financiaban las propias comunidades. La prohibición no afectaba sólo a futuras solicitudes, sino que suponía la extinción de las que hasta el momento había venido disfrutando, poniendo fin a una privilegiada situación que se remontaba a los propios orígenes de la imprenta. Parece que sólo la catedral de Valladolid, que había ido renovando el privilegio para imprimir las cartillas de primeras letras, mantendría su situación, o así se desprende del informe emitido por Campomanes en 1763 y que hacía referencia a la última renovación, que databa del 17 de agosto de 1758.

El segundo gran recorte afectaba al antiguo privilegio de Felipe II que ostentaba el monasterio de San Lorenzo de El Escorial sobre las obras del Nuevo Rezado. Muchos habían sido los intentos durante los reinados anteriores de crear una imprenta del

Rezo en España, tantos como los fracasos cosechados. Será Carlos III quien finalmente promulgue las reformas legislativas que lo permitan. En 1763 se había creado la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, en la que se agrupaban los principales profesionales del libro, lo que les permitía contar con el capital y medios técnicos suficientes para tan magna empresa. El 6 de enero de 1764 Carlos III resuelve que las impresiones de los libros de rezo se deben realizar por españoles en España, acabando con el negocio de Amberes. Tras alguna negociación, se adjudicó esta labor a la citada Compañía²⁸⁴. De hecho, suponía el mantenimiento del privilegio del Monasterio de El Escorial para la distribución y venta de estas obras, pero se veían obligados desde ese momento a servirse de la Compañía para su impresión y venderlo a los precios que fijara el Comisario General de Cruzada.

Dentro de las medidas encaminadas al fomento de la imprenta, los ministros de Carlos III introdujeron más cortapisas al poder que hasta entonces detentaba el clero. Tras el anticipo de 1764, en 1778 se regulan los privilegios en una Cédula del Consejo del 9 de julio que mantenía la prohibición de conceder privilegios a corporaciones eclesiásticas, pero hacía concesiones a las nuevas instituciones ilustradas, como la Real Biblioteca, las Academias y Sociedades, que junto con las Universidades, obtenían ciertas autorizaciones para imprimir obras escritas por sus miembros. Es un paso más en el proceso de secularización y sustitución de la Iglesia por instituciones laicas, que irán adquiriendo cada vez más protagonismo en la difusión de la cultura

Siguiendo esta línea, y en relación con las acusaciones vertidas sobre los jesuitas de ser los instigadores de la revuelta, en mayo de 1766 se avanza un paso más en la limitación de los privilegios de las comunidades religiosas con la prohibición de que los conventos pudieran tener imprentas propias. En realidad la medida aprovechaba la circunstancia para poder freno a la constante salida de pasquines y folletos anónimos desde las imprentas que inundaban las calles a la menor ocasión sin que las autoridades pudieran evitarlo. Para reducir esta circulación de impresos menores sin

²⁸⁴ *Real Cédula de SM aprobando la Escritura que se inserta entre los Religiosos del Escorial y la nueva Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para que se impriman en España los libros de Rezo, Aranjuez, 3 de junio de 1764. AHN, Consejos, Lib. 1518.*

licencia, cuyo contenido era normalmente ofensivo para los gobernantes, se determina que las imprentas que hubiera deberían sacarse de la clausura y arrendarse a seglares, permitiendo desde ese momento las inspecciones a las instalaciones. Vemos como de un hecho coyuntural se justifica una reforma estructural, siendo de nuevo la Iglesia la perjudicada.

Hemos visto como con el paso de los años la influencia del clero en el mercado editorial se había reducido considerablemente. Sin embargo, conservaban parte de capacidad de intervención en la censura previa y en la represiva, con la potestad de los obispos sobre las publicaciones religiosas y el activo papel de la Inquisición en la prohibición y persecución de obras sospechosas de herejía, en un equivalente hispánico a la policía del libro francesa. Estas atribuciones serán, por tanto, el nuevo caballo de batalla, que irá minando, o al menos intentando minar, su capacidad de intervención.

El primer intento surgirá en 1770 con el proyecto de crear una mesa censoria que aunara todas las atribuciones en materia de libros, tanto la licencia previa como la prohibición de obras ya impresas, lo que hubiera supuesto de hecho la exclusión de la Inquisición. Tras su fracaso, el Consejo retoma la idea en 1777, siguiendo el ejemplo de la institución creada por el marqués de Pombal en la vecina Portugal, teniendo como objetivo solucionar los problemas del mecanismo censor. Se llegaron a pedir informes al Juez de Imprentas y a las Academias, que coincidían en el beneficio que supondría el establecimiento de unas reglas más claras, pero debido a las dificultades teóricas y prácticas del modelo propuesto para ello, el proyecto, nuevamente, queda en el aire. Es una muestra de los intentos de los ilustrados por racionalizar el sistema reduciendo, al tiempo, el control que pudiera ejercer la Iglesia.

Sí que fue más eficaz el nombramiento de un censor regio en las universidades para supervisar las publicaciones de estas instituciones. Las circunstancias y hechos que empujaron a Carlos III a adoptar esta medida han sido estudiados convenientemente

por Teófanos Egido²⁸⁵ y se enmarcan en la lucha por la defensa pública de las regalías. El caso que desató la polémica fue la defensa en 1770 en la Universidad de Valladolid por parte del bachiller don Miguel de Ochoa de una tesis bajo el título *De clericorum exemptione a temporali servitio et seculari jurisdictione* en la que defendía los postulados anti-regalistas al afirmar que ningún clérigo debía sujetarse al “arbitrio de las potestades seculares”, lo que implicaba una defensa a ultranza del fuero eclesiástico, y mantener que la autoridad del monarca para conocer determinadas causas eclesiásticas residía en una delegación de la Iglesia y no como derecho de regalía, como tantas veces se había defendido desde las cátedras de cánones y desde el púlpito.

Este claro ataque a las teorías regalistas que con tanto ahínco estaba defendiendo Campomanes desde el Consejo de Castilla, una vez que los jesuitas habían sido expulsados por el anti-regalismo de sus propias constituciones internas y sus ideas desterradas junto a ellos, no podía quedar impune. Esta ocasión fue aprovechada por el Fiscal del Consejo para poner a las universidades bajo un estricto control al nombrar un censor regio que debía velar por que las conclusiones que se defendieran no atentaran contra las regalías del monarca. De nuevo los más afectados eran los eclesiásticos que se empleaban en estas instituciones mixtas destinadas a formar a los funcionarios del Estado vicarial.

El segundo gran golpe tuvo lugar en 1773 con la limitación del control previo que habían venido ejerciendo los obispos, que desde ese momento veían limitada su capacidad a la autorización para censurar exclusivamente las reimpresiones religiosas. De esta manera, Carlos III dejaba en manos del Consejo de Castilla el grueso de la regalía de licencia de impresión, subordinando al clero a las decisiones que se adoptaran previamente en su Consejo, también en materia religiosa.

No todo fueron noticias negativas para la Iglesia. Algunas de las reformas promovidas por los ilustrados incluían excepciones que beneficiaban objetivamente al clero. Por ejemplo, tras la supresión de la tasa, se exceptúan los libros de carácter religioso que

²⁸⁵ EGIDO, *op. cit.* (nota 165), págs. 297-306.

se consideran de primera necesidad, que seguirán siendo tasados por el Consejo: el *Catón cristiano*, el *Espejo de cristal fino*, los *Devocionarios del Santo Rosario*, el *Vía Crucis*, las cartillas de Valladolid, los catecismos de Astete y Ripalda, los preparatorios para la Confesión y la Comunión, y las meditaciones devotas como los novenarios.

Pero no sólo eso. Hemos visto que la historia de la legislación de la imprenta no es lineal. Así, tampoco la situación de la Iglesia será de continua pérdida de poder. El caso más significativo es ya en el siglo XIX el nombramiento de Melón, que era un sacerdote, como Juez de Imprentas, con las atribuciones que Carlos IV le había dado a la nueva institución. El simple hecho de nombrar a un clérigo para un puesto como ése es toda una declaración de intenciones tras el largo proceso de secularización que habíamos visto durante el reinado de su padre. Pero también pone de manifiesto que esta secularización no era una meta en sí, sino que respondía a la necesidad de conseguir un reforzamiento del poder real y de la eficacia del sistema.

Sí que es intencional el objetivo que se propone este Juez de Imprentas al proponer su reforma del sistema, proyecto que será rechazado por el monarca. El modelo de Melón pretendía otorgar a unos censores eclesiásticos la doble función de censores-calificadores, lo que hubiera otorgado a la Inquisición un papel que hasta entonces no había podido jugar: el control previo de las publicaciones. Ni el Inquisidor General ni el Rey apoyaron una reforma que no terminaban de ver clara, pero su planteamiento como opción de reforma nos devuelve al escenario en el que si el bien común, que era evitar la entrada de ideas perjudiciales, lo aconsejaba se podía no sólo aumentar el poder del clero, sino incrementarlo hasta cotas nunca antes alcanzadas, al invertir la situación heredada y trasladar del Consejo a un grupo de canónigos la facultad para definir las obras de utilidad pública, incluyendo en ello la defensa de la regalías.

Aunque ya hemos hecho referencia en algún momento al papel que juega la Vicaría Eclesiástica de Madrid en el mecanismo censor, no hemos analizado hasta el momento la trascendencia de este hecho. Se conocía su intervención desde, al menos, el siglo

XVII²⁸⁶ como órgano que elabora censuras para el Consejo de Castilla, práctica que se mantiene en el siglo XVIII e incluso se incrementa, siendo fundamental su trabajo en la censura de obras religiosas, pero también de piezas teatrales o poéticas. Era igualmente conocida la referencia a esta institución por los detractores de la creación de un cuerpo profesional de censores a sueldo, argumentando que la Vicaría hacía lo mismo gratuitamente. De hecho, la labor de la Vicaría de Madrid a lo largo del siglo XVIII había sido fundamental en el examen de todo tipo de obras, siempre por encargo del Juez de Imprentas y bajo la responsabilidad del Consejo Real de Castilla, del mismo modo que habían hecho la Real Academia de Historia o el Protomedicato. La ruptura de Melón no alterará tampoco esta privilegiada situación, por lo que su participación como órgano censor cualificado será una constante que escapa de ese proceso de secularización.

Sin embargo, pronto llegará una verdadera limitación en la influencia ejercida por la Iglesia en la censura. El reconocimiento de la libertad de opinión e imprenta por parte de las Cortes de Cádiz elimina su papel en una censura previa que había dejado de existir, pero introducirá cotas a la influencia que podría ejercer en los nuevos órganos creados para ejercer la censura represiva y evitar los posibles abusos de dicha libertad. Estamos hablando de la limitación legal al número de clérigos que podrían formar parte de la Junta Suprema de Censura y de las Juntas provinciales, siendo de tres y dos su número máximo, respectivamente, sobre un total de nueve y cinco, lo que les dejaba en clara minoría para asegurar que los contenidos no atentaban contra la religión, pero evitar que sus tesis pudieran suponer un estorbo al interés nacional.

En definitiva, no se puede entender el funcionamiento del aparato censor sin comprender el papel que la Iglesia juega en el mismo. Hablamos de una censura gubernativa y civil porque aunque en muchos casos los censores eran clérigos y uno de los principios que se debían observar era el cuidado de la fe católica, el sustento legal de su intervención emanaba de una regalía delegada en el Consejo Real y encomendada a ellos como expertos en la materia. Con esta designación el Consejo conseguía varios fines. Por una parte, muchos de los más acreditados miembros de la

²⁸⁶ BOUZA, *op. cit.* (nota 127).

República de las Letras eran eclesiásticos, por lo que su opinión sería respetada; por otro, puesto que muchos disfrutaban de algún beneficio eclesiástico, en muchas ocasiones en virtud del patronato regio, el encargo no suponía un coste adicional al encargarlo a quienes debían al rey su posición.

Ya habíamos anticipado que no existía entre los ilustrados españoles un proyecto revolucionario en materia de libros que cambiara por completo el marco jurídico de licencias de impresión. Más bien el objetivo era reforzar la autoridad regia y el control de sus oficiales, lo que en muchos casos chocaba con los privilegios heredados por las congregaciones y comunidades eclesiásticas. El recorte de estos privilegios no buscaba disociar el bien común del credo católico, por lo que los censores eclesiásticos seguirán teniendo un papel destacado incluso con las Cortes de Cádiz. Así, la capacidad de influencia y de intervención de la Iglesia en la concesión de licencias irá variando y, en general, reduciéndose, pero sólo se eliminará por completo con la desaparición de dicha licencia en la transición a los nuevos regímenes liberales y no por un proceso de secularización total de una Monarquía que conservó hasta el final su carácter vicarial.

El papel de la Inquisición

“Los españoles la quieren, y a mi no me estorba”. Ésta es la respuesta que Carlos III dio a su Secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, ante la sugerencia de éste para suprimir el tribunal de la Inquisición, alegando que Felipe I, Carlos V y Felipe V, los tres extranjeros, ya lo habían contemplado²⁸⁷. Nosotros podríamos añadir que más que no estorbar, el Santo Oficio seguía siendo uno de los aparatos de control político, social e ideológico más eficaces del monarca, como lo había sido de sus antecesores. Nada tiene que ver el respeto a las costumbres del país que, por otra parte, los Borbones demostraron no respetar en otros ámbitos, en la resistencia que la Inquisición tuvo frente a las campañas montadas por los ilustrados europeos. Simplemente, el Rey no podía prescindir de su policía más temida y menos costosa.

²⁸⁷ FUENTE, Vicente de la, *Historia eclesiástica de España o Adiciones a la Historia General de la Iglesia escrita por Alzog*, tomo III, Barcelona, Pablo Riera, 1855, pág. 381; y GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 19.

Según sus principios fundacionales, y su estatuto legal, el papel de la Inquisición era “saber de los asuntos de fe”. ¿Por qué, entonces, considerarlo parte del aparato de control de la letra escrita? Las palabras que el Inquisidor General Bernardo de Sandoval y Rojas escribió para el prólogo al índice inquisitorial de 1612, fechadas el 12 de diciembre de ese mismo año, nos sirven para entender claramente por qué la Inquisición consideró una de sus tareas la censura de libros. Si el motivo de su existencia y principal función consistía en perseguir y extirpar la herejía y a quienes la sostenían y difundían, no podía dejar a un lado uno de los elementos propagadores más eficaces, el libro. En 1700, más de doscientos años después de la puesta en marcha de la Inquisición y doscientos cincuenta años después de la llegada de la imprenta a territorio hispano, la censura inquisitorial era ya un complejo entramado de mecanismos de control, regidos por una normativa que había ido generándose a medida que los problemas iban planteándose²⁸⁸.

No nos interesa aquí el proceso de los autos de fe o los procesos inquisitoriales más allá de lo que afectan a la historia del libro y la influencia que tuvo su intervención en el mundo editorial del siglo ilustrado. Del mismo modo, más que las prácticas que los inquisidores llevan a cabo para desarrollar su cometido o los motivos dogmáticos por los que condenan una obra o parte de ella, preferimos identificar a los censores y todo lo que les rodea, sus carreras, sus vínculos sociales y familiares y, especialmente, ver si ellos mismos eran autores, si su intervención en la esfera de la creación cultural era algo anecdótico o parte de su quehacer cotidiano.

John Motley definió a la Inquisición española como una policía que “no condenaba hechos, sino pensamientos”²⁸⁹. Sin duda, tenía razón, pero sólo en parte, pues qué duda cabe que la mayoría de las veces sólo intervenía, sobre todo en el siglo XVIII, cuando dichos pensamientos se materializaban en hechos, que en este caso es cuando se había dado a la estampa, pues de hecho, su jurisdicción en el siglo XVIII se limitaba al examen de las obras publicadas que resultasen sospechosas, sin poder intervenir en

²⁸⁸ PARDO TOMAS, José, *Ciencia y censura. La Inquisición Española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII*, Madrid, CSIC, 1991.

²⁸⁹ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 17.

el proceso previo a la impresión, campo reservado para los censores nombrados por el Consejo de Castilla, como ya hemos visto. Como señala Francisco Peña en su comentario al *Manual de Inquisidores* de Nicolau Eimeric, “la finalidad de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino aumentar el bienestar público y aterrorizar al pueblo”²⁹⁰. Trasladado a nuestro campo, la intención de la censura libraria por parte de la Inquisición no era tanto evitar la condena de cuantos leyeran la obra (sino los permisos para leer obras prohibidas no habrían proliferado como lo hicieron en el siglo XVIII) como participar del fomento del bienestar público que se buscaba desde la Corte.

La prueba de lo anterior es la respuesta del Consejo de Castilla a la consulta hecha por el Inquisidor Quintana en 1768 sobre las reglas establecidas por el poder real para prohibir y expurgar libros²⁹¹. En ella se le recuerda que la Inquisición no debía participar en la evaluación previa de escritos y se hacía referencia a la ineficacia que había mostrado en la defensa de la autoridad regia frente a Roma²⁹².

La licencia para imprimir no garantizaba al autor o al impresor frente a posteriores prohibiciones civiles o inquisitoriales. La censura era simplemente un requisito legal previo a la impresión, prueba de que la licencia se había otorgado conforme a criterios de utilidad pública. Durante los siglos XVI y XVII las actuaciones *a posteriori* de la jurisdicción ordinaria no fueron tan frecuentes como las de la Inquisición. El primer factor es por la extensión que se hace de la jurisdicción inquisitorial a todo el territorio hispano con preferencia sobre la jurisdicción ordinaria y de los distintos fueros. De hecho, su peculiar organización administrativa y judicial en distritos, plenamente establecida desde 1574, se extendía por toda la geografía peninsular más allá de las divisiones administrativas y forales²⁹³. El segundo factor fue la exclusiva capacidad para elaborar un instrumento técnico como los *Índices* de libros prohibidos. Deforneuax considera esta herramienta como una de las causas principales por las que también

²⁹⁰ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 18.

²⁹¹ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 235.

²⁹² *Ibidem*.

²⁹³ DEDIEU y CONTRERAS *op. cit.* (nota 278).

durante el siglo XVIII el Santo Oficio siga desempeñando labores de control de libros junto con la autoridad civil²⁹⁴.

En este sentido, no debemos olvidar que la Inquisición era un tribunal religioso, pero sus miembros eran nombrados por el Rey, y su policía del libro fue la más efectiva que tuvo la Monarquía hasta el siglo XVIII, ya que no existía ningún organismo, ni si quiera del Rey, que tuviera un número de agentes tan eficaz y tan influyente en el pueblo como la Iglesia, que llega más y mejor a los súbditos de lo que su monarca podía pretender. No fue la Inquisición sino un aparato del Estado, por más que se haya producido alguna vez cierta tirantez en algún conflicto entre el Santo Oficio y el Gobierno. Y, siendo España un Estado monárquico, el único responsable de la Inquisición, desde que se fundó, siempre fue el Monarca, pues aunque en el fondo fuera algo querido por el pueblo, eso nos llevaría a abrir el debate sobre las responsabilidades colectivas en las violencias de los Estados en épocas lejanas²⁹⁵.

Dentro del funcionamiento de la Institución, la influencia de la Compañía de Jesús sobre el Tribunal va siendo cada vez más fuerte a todo lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, para alcanzar su apogeo en el reinado de Fernando VI. El padre Rávago, su confesor, ejerce entonces una especie de control sobre la Inquisición, absorbiendo las funciones del débil Inquisidor General. En el campo de la censura inquisitorial, la influencia de los padres de la Compañía se hace preponderante, hasta el punto de suscitar la protesta de las demás órdenes religiosas. Este predominio es, en gran parte, el responsable de que cundiera en la opinión pública la confusión entre las dos categorías de enemigos de la Compañía: los “jansenistas”, que recubren todas las posiciones doctrinales que difieren de las de la Compañía, y los “regalistas”. En este contexto es donde se entiende el proceso contra Macanaz o la inclusión por Cassani en el *Índice* de 1747 de un *Catálogo de los libros jansenistas* escritos en francés, en el que se prohibían obras que no habían sido condenadas ni por Roma ni por España, y lo que es peor, que no habían seguido el procedimiento habitual, pues no habían sido sometidas a censura ni calificación previa por los oficiales del Santo Oficio. Además, se

²⁹⁴ DEFORNEAUX, *op. cit.* (nota 201), págs. 36-48 y GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 260-261.

²⁹⁵ LOPEZ, *op. cit.* (nota 3), págs. 73-74.

había incluido a autores hostiles a la Compañía de Jesús, muchos de los cuales no tenían nada que ver con las condenas hechas desde Roma. Este carácter aparentemente arbitrario despertó el recelo del resto de órdenes religiosas, especialmente entre agustinos y dominicos²⁹⁶.

Uno de los casos que más trascendencia tuvo a nivel externo e interno fue la prohibición general de todas las obras del cardenal Noris en 1748, que ya hemos comentado, que incluía no sólo las firmadas por él, sino también las que le defendían o refutaban²⁹⁷. El cardenal Henry Noris nació en Verona en 1631 y falleció en 1704. Su obra, en defensa de San Agustín frente a los ataques de los jesuitas, provocó que la Compañía denunciase reiteradamente su obra a Roma como jansenista, a pesar de lo cual salió airoso, obteniendo el capelo cardenalicio en 1696. El asunto sobre sus escritos se complicó tras su muerte. En 1747 el Expurgatorio de libros de la Inquisición española incluyó la prohibición de la *Historia pelagiana* del cardenal, a instancias del inquisidor Cassani, un conocido e influyente jesuita. Este hecho despertó la curiosidad del Papa, Benedicto XIV, que dirigió un breve al Inquisidor General preguntando por los motivos de la prohibición, tratándose de una obra que había sido aprobada por el Vaticano. El asunto desató una batalla de impresos y manuscritos entre las distintas órdenes religiosas que ponía en peligro la autoridad regia sobre los impresos. Para evitarlo, en diciembre de ese mismo año se realiza la prohibición generalizada de cualquier texto sobre el tema.

En 1749 el Pontífice decretó la anulación de la prohibición de las obras de Noris, lo que suponía atentar contra la autonomía del Tribunal español. El padre Rávago reiteró esta independencia y denunció el atentado que dicha orden suponía contra las regalías, por lo que el cardenal siguió en el *Índice* español hasta la llegada de Ricardo Wall a la Secretaría de Estado en 1757, quien aprovechó el cambio de confesor e Inquisidor General para excluirle acusando a Cassani y Carrasco de condenar su obra sin seguir los procedimientos para su prohibición. El asunto de las obras de Noris quedó resuelto,

²⁹⁶ DEFORNEAUX, *op. cit.* (nota 201), págs. 39-48.

²⁹⁷ Como ya hemos mencionado, toda la información sobre el tema la hemos extraído de DEFORNEAUX, *op. cit.* (nota 201), págs. 75-81 y REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 471-472 y 537-543.

pero se había descubierto un problema en torno a las regalías del Rey. En 1761 se reaviva la polémica por la publicación del catecismo *Exposition de la doctrine chrétienne* del padre Menseguy, obra condenada por el índice romano en 1748 pero que se había impreso en Nápoles con las licencias de Carlos III. En 1761 el Inquisidor General lo prohíbe, siguiendo la orden de Roma pero sin comunicarlo al Rey ni a su Consejo, como era preceptivo, lo que irrita al monarca, que se siente desautorizado y puentado en un tema de su exclusiva competencia. Carlos III ordena diversos informes para resolver el asunto de las regalías y concluye con la Pragmática de 1762 en la que se prohíbe que se dé curso a ningún escrito pontificio sin el previo examen del Consejo del Rey²⁹⁸, lo que de hecho suponía una reafirmación de las regalías del monarca frente a las pretensiones autónomas del Inquisidor.

La literatura jurídica inquisitorial desarrolló toda una completa teoría acerca de la legitimación de las autoridades religiosas para decidir lo que sus fieles podían y lo que no podían leer, una elaboración doctrinal que serviría para justificar la competencia que el Santo Oficio tenía en la materia, plasmado todo en normas de derecho positivo²⁹⁹.

La prioridad de la Inquisición eran los libros escritos por herejes que contuvieran herejía o trataran de religión, entendiendo que lo hacían todas aquellas que se exponían cuestiones relativas a la fe, explicaban las Sagradas Escrituras, enseñaban teología eclesiástica, dogmática o moral, trataban sobre aspectos relacionados con el culto o sobre los religiosos. Los que eran condenados, eran quemados en una hoguera, porque los tratadistas que sentaban las bases de la doctrina inquisitorial eran conscientes que un libro era potencialmente mucho más peligroso que un sermón o un discurso, puesto que su público potencial era mucho más amplio y la circulación del mensaje más rápida y efectiva, además de que la letra impresa perduraba en el tiempo, con el riesgo de contagiar de ese pernicioso mal a las generaciones futuras. Además, la consideración de herético suponía, salvo aprobación expresa de la

²⁹⁸ AHN, Consejos, Lib. 1482, nº 32.

²⁹⁹ Para profundizar en este aspecto se puede consultar GACTO FERNÁNDEZ, Enrique, "Libros venenosos (Sobre los principios doctrinales de la censura inquisitorial)", en GACTO FERNÁNDEZ, *op. cit.* (nota 100), págs. 21-55.

autoridad eclesiástica, la condena de todas las obras del autor. Huelga decir, que esta normativa afectaba a obras nuevas, reimpresas o compiladas, en cualquier idioma, fueran impresos o manuscritos.

Además de los libros que tratan sobre religión, los inquisidores debían prestar atención a aquellos libros no escritos por herejes y que no trataban de cuestiones religiosas, pero cuya lectura pudiera ser perjudicial para un buen católico porque tuviera afirmaciones sospechosas, equívocas o contrarias a las buenas costumbres. Estos libros debían ser entregados a sabios y doctos para su evaluación, y en caso de que sus dictámenes fueran negativos, debería prohibirse y retirarse de la circulación. Si la Iglesia reconocía el derecho y el deber de los monarcas de vigilar la entrada y circulación de obras sospechosas dentro de sus dominios, y consideraba que era necesario prohibir las obras que causaran escándalo, aunque no fuera por herejía, ya estaba construido el argumento que necesitaban los monarcas ilustrados para utilizar los mecanismos inquisitoriales para retirar del mercado aquellas obras que atentaran contra sus intereses.

Los delitos que la Inquisición podía condenar relacionados con libros heréticos iban más allá de su escritura. En principio, se tipificaba a quienes, sin permiso expreso de la autoridad eclesiástica, leyeran o retuvieran libros condenados, pero la doctrina se ampliaba a la lectura, retención, comercio y defensa de toda obra condenada por el Santo Oficio, pues la única actitud que se permite es la entrega inmediata de toda obra sospechosa a un oficial del Tribunal. Obviamente, el delito más grave era lectura, con un intenso debate sobre el punto que se consideraba como peligroso, pero no es nuestro cometido entrar a analizar los debates que en torno al tema surgieron antes y durante el siglo XVIII³⁰⁰.

Descendiendo a la práctica podemos destacar varias tareas burocráticas de las que se hacían cargo los oficiales de la Inquisición para cumplir con su misión de velar por que se cumpliera la legalidad en el mundo del libro: calificar de obras nuevas (sólo si el tema es la propia institución), censurar los libros publicados, estudiar las denuncias

³⁰⁰ Para profundizar sobre el tema, GACTO FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 100).

presentadas sobre los papeles que circulaban, visitar a navíos y fronteras para evitar la entrada y/o salida de obras ya prohibidas, controlar de licencias para tener y leer libros prohibidos, etc. Y cada una de ellas era llevada a cabo por redes de “familiares”, comisarios de puerto, inquisidores, fiscales de la Secreta, notarios, censores y calificadores, alguaciles, secretarios, etc.³⁰¹ Por tanto, no sólo emitía edictos para hacer públicas las censuras a obras impresas, sino que centraba su atención a todos los espacios de potencial riesgo: librerías, aduanas, puertos, bibliotecas, etc.

La principal actividad de la Inquisición, además de la condena de los libros heréticos, fue la visita de librerías y bibliotecas. Se puede decir que en los siglos XVI y XVII casi ejerce un monopolio en esta tarea. Sin embargo, durante el siglo XVIII, la recogida de libros la llevarían a cabo cada vez en mayor medida oficiales laicos, hasta que en 1768 los Fiscales del Consejo de Castilla, en respuesta a la consulta del Inquisidor General, no dudan en considerarlo una actividad propia de la justicia civil. Lo mismo ocurre en otros aspectos del control posterior en los que la Inquisición verá limitada su intervención a lo largo de la segunda mitad del siglo, como es la transmisión *postmortem* de librerías de particulares. Todo ello no impidió que incluso en temas políticos siguiese presente, sobre todo tras 1789, la censura inquisitorial, aunque con menos atribuciones de intervención si no mediaba previa consulta o autorización de la jurisdicción civil³⁰².

Pese a la existencia de un férrea censura previa del Consejo de Castilla que garantizaba, en principio, que todo libro publicado en España no contenía cosa contra la fe ni las buenas costumbres, el Santo Oficio obligó a todos y cada uno de los españoles a transformarse en censor de las obras que leían y a denunciarle cualquier texto que ultrajase a la Iglesia y los principios de la religión católica³⁰³. La libertad no existía, pero se habían creado varias formas de burlar este control: falsas portadas, impresiones clandestinas, contrabando en la frontera, etc. Todo ello hacía necesario un control constante posterior a la impresión.

³⁰¹ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 28.

³⁰² GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 273.

³⁰³ DUFOUR, Gérard, *El libro y la Inquisición*, en INFANTES, LOPEZ y BOTREL, *op. cit.* (nota 36), pág. 285.

Contrariamente a lo que pasaba con las personas, los inquisidores admitían las delaciones anónimas cuando se trataba de libros. Así, quienes querían denunciar un libro no tenían más que enviar al tribunal más cercano la obra sin ninguna explicación. Cuando un inquisidor fiscal recibía una obra denunciada por algún lector, la remitía para su calificación a dos religiosos “de conocida ciencia y probada virtud”³⁰⁴. Estos emitían sendas calificaciones, las cuales permitían al tribunal del distrito pronunciar su veredicto. En caso de ser desfavorable, se enviaba la obra junto al expediente a la Suprema, que solicitaba otras dos calificaciones, tras las cuales el Consejo Supremo se pronunciaba definitivamente. En caso de prohibición o purga, se publicaba un edicto para dar publicidad a su decisión. Después, sería incluido en los *Índices* que se publicaran.

La principal herramienta del Santo Oficio para hacer efectivas sus condenas era la publicación de sus decisiones. Durante el siglo XVIII se publican, al margen de edictos complementarios, tres *Índices de Obras Prohibidas*. Se suelen conocer con el nombre del Inquisidor General que lo mandó imprimir. El primero, de Sarmiento y Vidal Martín, es de 1707, aunque su elaboración se había iniciado en 1679 y, por tanto, sus criterios responden más a la mentalidad del siglo anterior. En el año 1747 aparecerá un nuevo catálogo, obra de los jesuitas José Carrasco y José Cassani, con un apéndice antijansenista (en el que se incluía a Noris y a otros simpatizantes de los novatores), mandado hacer por Pérez del Prado. Provocó de inmediato grandes protestas y empezó a ser revisado en el año 1787. En 1790 aparece un nuevo catálogo atribuido a Joaquín Castellot, por mandato de Rubín de Ceballos. Se incluyó por primera vez un apéndice dedicado “a Francia y a la Revolución”, los grandes clásicos de la Ilustración y las primeras manifestaciones escritas relativas a los eventos de 1789, en definitiva toda la literatura que amenazaba la alianza del Trono y del Altar. Estos se completarían luego con el *Suplemento* de 1805 al *Índice* de 1790 y el *Apéndice* de 1819³⁰⁵.

³⁰⁴ Nótese la coincidente forma de calificar a los censores del Consejo de Castilla y a los revisores inquisitoriales.

³⁰⁵ GONZALEZ FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 98), pág. 30.

Estos *Índices* no se limitaban a la publicación de los títulos nuevamente condenados, sino que, en un proceso acumulativo, recopilaba la totalidad de los libros o autores anteriormente condenados. Así, el de Rubín de Cevallos contaba con unos 7.400 autores y/o libros³⁰⁶.

La Inquisición española, bajo la influencia del *Índice* tridentino promulgado por Pío IV en 1564, incluirá en las listas de libros prohibidos unas orientaciones genéricas para que todo lector pudiera descubrir y denunciar cualquier libro que todavía no estuviese condenado y que mereciera serlo. Esta es la filosofía de las *Reglas* que encabezan los *Índices* desde el que publicó en 1583 el Inquisidor General Quiroga³⁰⁷. Deforneaux, en su análisis de estos *Mandatos*, llega a la conclusión de que estas disposiciones no podían cumplirse³⁰⁸. El primer elemento que lo apunta es que según estudios publicados por López, en España existían, a mediados de siglo, al menos 180 librerías y puntos fijos de venta, una cifra superior a la que suponía el Santo Oficio. Una cifra puede ayudarnos a verlo: de los 333 ejemplares del *Índice* que el impresor entregó a la Suprema, 151 fueron enviados a los tribunales de Indias y 128 tan sólo se vendieron a los libreros de España, una cifra insuficiente³⁰⁹. Pero no sólo eso, sino que hay casos, como el de Cádiz, donde los libreros vendían abiertamente libros prohibidos para España y América.

Durante los siglos anteriores, sobre todo el XVI y primera mitad del XVII, cuando la principal preocupación eran los libros heréticos, la Inquisición y sus *Índices* son un arma eficaz. Sin embargo, una vez que esto cambia, los edictos empezarían a mostrar su ineficacia. Dentro de la toma de conciencia de este hecho por parte de la Monarquía se inserta la cédula de 1768³¹⁰, que obligaba a someter los edictos y bulas del Santo Oficio a la previa aprobación real a través de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia o de la de Estado. El fundamento para esta decisión la da Campomanes: la jurisdicción en materia de libros es privativa y delegada del Príncipe.

³⁰⁶ DUFOUR, *op. cit.* (nota 303), pág. 286.

³⁰⁷ GACTO FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 100), pág. 23.

³⁰⁸ DEFORNEAUX *op. cit.* (nota 201).

³⁰⁹ LOPEZ, *op. cit.* (nota 3), pág. 75.

³¹⁰ REYES, *op. cit.* (nota 49), Apéndice legislativo, págs. 1049-1051.

La Inquisición ya no resultaba tan útil para la defensa de las regalías del monarca, sobre todo cuando se trataba de defenderlas frente a Roma. Se sostiene, por tanto, que una cosa era la potestad declaratoria de errores y doctrinas en materia de religión y otra la autoridad pública temporal. De manera que la prohibición externa y la publicación de libros con la imposición y conminación de penas y procedimiento reales correspondía a la potestad temporal³¹¹.

No hay nada más propio del Antiguo Régimen que la existencia de privilegios. Y la censura inquisitorial no iba a ser menos. Exentos de la prohibición de leer libros condenados estaban quienes tenían la potestad para prohibirlos, en el caso español los inquisidores, que además tenían potestad para conceder licencias para leer y tener libros prohibidos a aquellas personas que alegaran motivos justificados para solicitarlas³¹², y durante el siglo XVIII las concesiones fueron más frecuentes que en siglos anteriores y las pesquisas previas cada vez menos importantes, hasta el punto de que muchos de los que obtiene la dispensa sólo necesitaron acreditar su posición dentro de la Administración gubernativa.

La visita de librerías era, desde el siglo XVI, otra de las tareas fundamentales encargadas de la Inquisición en el control posterior a la impresión. No queremos detenernos en este punto, que escapa a la censura propiamente dicha, pero que forma parte del sistema de control de la Monarquía. Aunque los obispos también tenían la posibilidad, lo cierto es que se fue configurando como una tarea inquisitorial. La visita era consecuencia directa de la publicación de los *Índices* de libros prohibidos, y se realizaban por auto de la Suprema o por iniciativa de cualquier inquisidor. Los encargos a autoridades civiles presentan un carácter esporádico cuando no subsidiario a la Inquisición. En 1738 se nombrará el primer visitador civil oficial, figura que se extenderá con el Auto de Curiel y que acabará provocando el trasvase de esta responsabilidad de la Inquisición a la administración civil, sin que esto signifique que los inquisidores pierdan su jurisdicción³¹³.

³¹¹ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 264-266.

³¹² GACTO FERNANDEZ, *op. cit.* (nota 100), págs. 33-35.

³¹³ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 273-285.

Además, según un mandato expedido por primera vez en 1612 e incluido en todos los *Índices* hasta 1790, todos los individuos que traían libros de fuera³¹⁴, libreros o simples particulares, estaba obligados, so pena de confiscación y multa, a presentar a los comisarios del Santo Oficio una *lista jurada* en la que constaran los autores, títulos, lugares y fechas de impresión de los libros introducidos. En los puertos de mar y tierra tenían que actuar los mismos comisarios. Dentro del territorio debía ejercitarse el control sobre las librerías y todos los vendedores de libros en general. Se disponía, además, que al principio de cada año, estuviesen éstos en la obligación de entregar en un plazo de dos meses al tribunal o comisario de su jurisdicción un inventario completo de los títulos que obrasen en su poder, como se especifica en el *Mandato a los libreros, corredores y tratantes de libros*, también incluidos en todos los *Índices*. Si esto hubiera sido así, dispondríamos hoy de una abundantísima y única documentación sobre el comercio de librería en España bajo el Antiguo Régimen, pero esta documentación no existe, y es de creer que nunca existió³¹⁵.

Esta superposición de jurisdicciones entre la Inquisición y el poder civil también se reflejará en el control de aduanas y puertos. Como en el resto de funciones, en el XVIII se pone de manifiesto la ineficacia de la Inquisición para el control aduanero de los libros procedentes del extranjero, en un momento en el que su comercio es cada vez más lucrativo y el mercado hispano sigue dependiendo de los libreros franceses, italianos y suizos. A esta situación, los ilustrados encargarían esta función a la jurisdicción civil, lo que suponía la reducción práctica de las atribuciones inquisitoriales, aunque sin derogarlas en ningún momento³¹⁶.

Una cosa era prohibir la lectura de una obra y otra conseguir que no se leyera. La Inquisición cumplía mal sus labores de vigilancia. Eso lo hemos visto. No tenía ni los medios materiales ni la voluntad para hacerlo. Pero el temor que despertaba no residía en su efectividad. Hay que revisar, entonces, cuanto se ha escrito sobre el rigor de la

³¹⁴ *Mandato a los que entran libros en estos reynos.*

³¹⁵ LOPEZ, *op. cit.* (nota 3), págs. 74-75.

³¹⁶ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 285-300.

Inquisición en materia de libros y censura, y evitar generalizar a partir de casos particulares. Suele pensarse que las visitas eran verdaderos registros, pero la realidad era que éstas eran escasas, y que cuando se practicaban, sólo iban a tiendas de dueños ricos que tuvieran trato con el extranjero. Los simples libreros quedaban exentos, pues al pedirles una lista jurada se dispensaba de averiguar la buena fe del declarante. Sin duda, tras el proceso revolucionario en Francia, el Gobierno pedirá a los inquisidores mayor firmeza para impedir la entrada de textos, fueran propagandísticos o informativos, por lo que a partir de entonces se tienen más datos de visitas y confiscaciones.

Difícil es, pues, hablar de la Inquisición como un freno a la impresión de obras en España durante el siglo XVIII. No sólo porque no le correspondía la censura previa, sino porque sus disposiciones no eran debidamente ejecutadas. Los libros prohibidos circularon y se leyeron, y no sólo por quienes disponían de licencia para ello. Existen delaciones de lectores de libros prohibidos, sí, pero la mayor parte de los casos quedó en eso. El tribunal al que tanto se temía y criticaba no era muy adicto al rigor administrativo. Los antiguos recuerdos del terror eran suficientes.

La menor presencia de la Inquisición en el control censor de libros obedecía no tanto a una disminución circunstancial de su poder como a su ineficacia para los objetivos pretendidos en su actuación: la vigilancia de los libros en circulación y el control en la entrada de los libros impresos fuera del reino. La intención no era sustituir jurisdicciones colectivas por individuales, pues en ocasiones la nueva delegación en la tarea de censura se hará nuevas corporaciones, pero laicas. También será importante la subordinación que, progresivamente padecen las demás autoridades eclesiásticas, como obispos y arzobispos, según avanza el siglo ilustrado³¹⁷.

³¹⁷ Nos referimos a la limitación introducida en 1773 según la cual obispos y arzobispos sólo podían conceder licencias de impresión a las reimpresiones de libros religiosos previamente autorizados por el Consejo (*Novísima Recopilación* Libro VIII, Título XVI, Ley XXVIII), así como la persecución de los monopolios eclesiásticos de impresión, clausurando desde mediados de siglo muchas de las imprentas ubicadas en institutos religiosos, que ya hemos visto en el apartado anterior.

De esa ineficacia surge que los objetivos de los ilustrados se concreten en el reforzamiento de las funciones de censura previa, de modo que la posterior intervención del Santo Oficio no llegase a ser necesaria. Esto no significa que todos los ilustrados pretendieran la abolición de la Inquisición como tribunal contrario a la libertad de pensamiento. Más allá de quienes como Roda o Urquijo buscaban su desaparición, lo que muchos critican es su ineficacia para los nuevos objetivos de utilidad pública de la Monarquía, que exigía como en épocas anteriores, el control y detención aduanera de los libros extranjeros.

En comparación con la censura gubernativa, lo prohibido por la Inquisición, que sólo intervenía cuando un texto había sido delatado, por muy ponderado que haya sido, parece al fin y al cabo tener menos importancia. Frecuentemente, cuando un libro resultaba finalmente condenado, existían inmensos desfases entre la fecha de la impresión de la obra y su inclusión en un *Índice*, aunque para muchas obras, sobre todo de origen francés, se recogían las condenas del *Índice* romano, pronunciadas con una prontitud de la que no era capaz el tribunal de la católica España.

A pesar de todo, a partir del estallido de la Revolución francesa, el poder real vuelve a hacer uso de la Inquisición junto a las autoridades civiles encargadas de la censura, para silenciar la masiva invasión de libros, cartas, folletos y literatura popular procedentes del país vecino. Así se pone de manifiesto con la Real Orden de 1792 en la que se establecen dos revisores en las fronteras con Francia, uno real y otro inquisitorial.

Por ello, y frente a la simplificadora oposición entre censura civil e Inquisición que se ha tendido a hacer, conviene estudiar conjuntamente todas las herramientas que el Rey tuvo a su disposición para observar cuáles fueron los intereses y estrategias de la Monarquía en la coyuntura de cada momento y su efecto en la producción impresa.

La Inquisición, principal institución eclesiástica de la época, ha despertado filias y fobias a lo largo de la historia, dejando un inabarcable legado bibliográfico en forma de estudios sobre su funcionamiento o sobre el efecto de su existencia. Pero éste ha sido

demasiadas veces sobredimensionado. Hay quienes depositan en el Santo Oficio la responsabilidad en las limitaciones impuestas a los impresos, que como hemos visto es cuanto menos exagerado por su capacidad de intervención, ya que el grueso del filtro se ejercía mediante la censura previa, siendo la acción inquisitorial de carácter represivo e inducido, ya que era necesaria una delación³¹⁸. Otros, en cambio, acentúan los conocidos incumplimientos de la normativa para resaltar que esa falta de efectividad era consecuencia de la corrupción burocrática, como si la corrupción fuera privativa de este tribunal. El problema es más complejo. No se puede negar que la acción del tribunal influyera en la cultura literaria (por el temor a que su obra fuera retirada, con el desprestigio y el coste económico que acarreaba), pero su poder no era tan fuerte como tantas veces se ha escrito³¹⁹, porque su actividad estaba limitada a una acción represiva articulada en las prohibiciones de leer y comerciar, en la visita de librerías y en el control de los puertos, facetas en la que se irá incrementando la injerencia de los agentes reales del Consejo de Castilla y del Juzgado de Imprentas, lo que matiza, aún más, la influencia ejercida por el temido tribunal de la Inquisición.

Llegados a este punto podemos concluir que ni las disposiciones gubernativas ni las prohibiciones inquisitoriales eran efectivas. El bajo nivel de cumplimiento de la ley queda reflejado en la necesidad de reincidir en cada ley promulgada en los mismos aspectos sobre lo que ya se había legislado. El quehacer diario de todos los actores implicados no se ajustaba a las leyes, sin que existiera una necesidad apremiante por ocultar el incumplimiento. Existe, pues, una clara distancia entre la teoría y la práctica que un estudio en profundidad no puede ignorar.

³¹⁸ ROLDAN PEREZ, Antonio, "Censura civil y censura inquisitorial en el teatro del siglo XVIII", *Revista de Inquisición*, nº 7 (1998), pág. 119.

³¹⁹ Sobre este aspecto, aunque para una cronología anterior que la que nos ocupa, resulta sugerente la lectura de KAMEN, Henry, "Censura y libertad: el impacto de la Inquisición sobre la cultura española", *Revista de la Inquisición*, (1998), nº 7, págs. 109-117.

3. Las redes de la censura

La relación entre autores y censores no era, en su definición una relación directa entre dos individuos, sino que, por la configuración del sistema, existía la intermediación del Consejo, representado normalmente por el Juez de Imprentas, que era el encargado de remitir los originales a su revisión por los sujetos que considerara adecuados. Así es como nace la unión entre autores y censores, que es uno de los objetivos de esta investigación. Sin embargo, hemos comprobado que la práctica distaba de la norma. Los autores proponían, en muchos casos, el nombre de las personas que podían revisar su obra, cuando no presentaban ya dichas aprobaciones con su manuscrito. El origen de las relaciones estudiadas es, por tanto, diverso. Por una parte, cuando funcionaba el procedimiento administrativo, era el Juez el que ponía en relación a autor y censor, sin que el primero supiera en teoría quién era el segundo. Por otra, los incumplimientos reiterados, que más que una excepción hacían de esta práctica la norma, provocaban que la interconexión entre unos y otros fuera más intensa de lo que cabría esperar.

Al tratarse de relaciones bidireccionales, para contemplar el mecanismo de censura y los responsables del mismo, hay que tener en cuenta, por un lado, quiénes son los que escriben y por otro quiénes son los que censuran, aún cuando en muchas ocasiones una persona desempeñara, a lo largo de su vida, las dos funciones. Puesto que el análisis conjunto de los datos de todo el siglo no sería científicamente válido, ya que supondría poner en relación personas que, realmente, pertenecían a generaciones diferentes y que no tuvieron conexión entre ellos, hemos procedido a dividir la información en tres periodos, que a partir de tres catas nos permitan establecer las continuidades y rupturas que se manifiestan a lo largo de la centuria.

Así, el capítulo queda estructurado en cinco partes. En la primera se analiza prosopográficamente las figuras de los titulares del Juzgado de Imprenta a lo largo del Setecientos mientras que los siguientes tres apartados se dedican, de manera

específica, al análisis pormenorizado y cualitativo de cada uno de los periodos: el de principios de siglo entre 1720 y 1749; los años centrales que corresponden a la vigencia de la reforma de Curiel (1756-1763); y las últimas décadas, entre 1770 y 1799. Finalmente, se intenta recoger las conclusiones más significativas para realizar un dibujo de cómo es la evolución de la práctica censora en el siglo XVIII.

La Corona, a través de los distintos mecanismos ya conocidos, ejerce una intervención directa sobre la imprenta, entre otras cosas, porque desde los orígenes de la misma había descubierto la cultura como un instrumento más del que valerse para aumentar su control sobre el reino. Que su autorización sea necesaria para la impresión y/o circulación de una obra implica que las relaciones entre los autores que quieren publicar y los oficiales reales estén profundamente imbricadas, y que los autores necesiten integrarse dentro de ciertos circuitos si quieren que sus obras vean la luz dentro de los cauces legales. Aquellos que no se ajustaran a las directrices del poder sólo podían recurrir a la clandestinidad o al uso de prensas fuera del Reino³²⁰.

Fueran clérigos, nobles o gentiles, hombres de armas o gentes de palabra, vivieran de las letras o fuera ésta una actividad complementaria, lo cierto es que todos los que escriben se convierten en actores del libro. Cada uno tenía una motivación, y no todos lograron sus objetivos, pero todos descienden a la arena editorial y establecen, a través de él, relaciones con otras personas e instituciones, que nos dibujan otras redes a las que pertenecen y que pueden ayudar a entender los comportamientos de los individuos a todos los niveles.

Los autores publican, pero pocas veces el objetivo es puramente monetario, pues los beneficios económicos que se obtenían de la venta de las obras en el siglo XVIII eran más bien escasos. Parte de los beneficios, en cambio, provenían del prestigio social

³²⁰ Éste fue el caso, por ejemplo, de Pedro Pineda, español emigrado a Inglaterra, donde se convierte en profesor de español para damas de la aristocracia británica y editor de clásicos españoles del Siglo de Oro, siendo el primer traductor de *El Quijote* en aquel país. Sobre este caso se trató de forma específica junto con Alba de la Cruz en la comunicación conjunta presentada en el Congreso Internacional *España y las Islas Británicas en el "largo" siglo XVIII*, organizado por la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y la British Society for Eighteenth-Century Studies en Barcelona en diciembre de 2009 y que llevaba por título *Ser autor en el siglo XVIII: el caso de Pedro Pineda, un español en Londres*.

que suponía que su nombre figurara en las portadas impresas, pues gracias a la circulación se convertía en un escaparate más en el que exhibirse. Este prestigio, además, podía ser menos público pero más efectivo, pues el objetivo de la publicación también era, en cierta medida, la obtención de algún beneficio profesional en forma de ascenso, obtención de un cargo administrativo/cultural o la concesión de un honor, en definitiva, un acercamiento al núcleo de poder.

3.1. Los Jueces de Imprenta

Más allá de las atribuciones asignadas en materia de imprenta al Consejo de Castilla, los responsables más directos de la aprobación de los impresos fueron quienes a lo largo de la centuria ocuparon el llamado Juzgado de Imprentas. Esta institución fue el eje central de las distintas medidas políticas que los diferentes gobernantes fueron tomando sobre los impresos y su evolución secular fue el espejo del desarrollo de la propia política de imprenta.

Como hemos ido viendo a lo largo del segundo capítulo, en general entre sus atribuciones estuvo siempre la asignación de censores y la licencia de impresión para las obras menores, las que no llegaban a constituir un libro, que vieran la luz en la Corte, mientras que para las demás ciudades importantes con imprenta la responsabilidad osciló entre los llamados Subdelegados natos y los Subdelegados nombrados por el propio Juez. Del mismo modo, la vinculación y dependencia del Juzgado respecto al Consejo de Castilla sufrió importantes variaciones a lo largo del siglo. La mayor o menor independencia, así como las atribuciones que tenga asignadas determinarán la capacidad de actuación de nuestros protagonistas, pues si bien para los libros era quien nombraba los revisores que debían examinar el manuscrito, la decisión final sobre la concesión o no de la licencia corría a cargo, al menos formalmente, del Consejo y no sólo de la opinión del Juez.

El estudio hecho sobre el juzgado de imprentas desde el punto de vista de jurídico por García Martín³²¹ resulta fundamental para conocer los orígenes de la institución, su naturaleza jurídica, las competencias que se le atribuyen y las justificaciones legales de las mismas, así como su evolución, pero siempre desde la perspectiva jurídica e institucional. Ese aspecto lo hemos abordado, ligeramente, en el capítulo segundo al analizar la evolución de las competencias de imprenta. El objetivo del presente apartado, en cambio, es un acercamiento distinto a los Jueces de Imprenta viendo, no las disposiciones legales que limitaban su acción como tales (lo cual ha quedado perfectamente establecido en el estudio de García Martín), sino estudiar prosopográficamente a quienes desempeñaron dicha función. Sobre la base del estudio individualizado de sus biografías personales y profesionales, intentaremos, al final, extraer conclusiones generales que permitan la creación de un patrón común, así como destacar los elementos diferenciadores destacados en los casos en los que sea relevante. No ha sido posible encontrar pruebas documentales que atestigüen una sucesión continua de jueces, encontrando para principios de siglo algunas lagunas difíciles de completar, a pesar de lo cual el material encontrado es suficiente para realizar el análisis y obtener conclusiones definitivas.

Como antecedente inmediato del Juez de Imprentas podría considerarse la figura del *encomendero*, agente fundamental en el proceso de censura durante los siglos XVI y XVII y que habían pasado desapercibidos en la historiografía hasta el reciente estudio de Bouza Álvarez³²². En su análisis de la tramitación administrativa de las licencias de impresión para el Siglo de Oro advirtió tres términos con los que se denominaba los consejeros de Castilla que por mandato del Presidente del Consejo quedaban a cargo de los memoriales de petición: *encomendero*, *encomendante* o *señor de la encomienda*, tres formas de denominar a una misma figura: la persona encargada de

³²¹ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74).

³²² Como honrosas excepciones, REYES *op. cit.* (nota 49) y, especialmente, el recién citado de García Martín, que es el primero en resaltar de manera específica esta figura.

tramitar el expediente de impresión, responsabilidad que iba más allá de la censura realizada por los aprobantes designados por este consejero³²³.

Señala Bouza que algunos nombres de consejeros aparecen de manera reiterada como señores de la encomienda de aprobaciones, pero que no parece que ninguno se ocupara específicamente de la materia³²⁴. García Martín apunta que el origen del Juzgado de Imprentas se encuentra en una disposición de 1627 por la que se restringe la concesión de licencias a una persona en una materia particular, aunque Bouza no observa una variación en la práctica de tramitación hasta 1672, donde surge la figura del “*consejero superintendente de imprentas*” para referirse al papel de Lorenzo Santos de San Pedro. En cualquier caso, estas atribuciones específicas sobre un tema concreto o para un territorio específico (Sevilla, Granada) anticipan la figura del Juez de Imprenta, que es, en definitiva, un encomendero del Consejo que se encarga en exclusiva de la comisión de un área acotada en un asunto determinado³²⁵, aunque recibe la encomienda directamente del Rey y no del Presidente del Consejo. La diferencia es importante porque es el Monarca el que firma los nombramientos de los jueces de imprenta del siglo XVIII frente la encomienda que reciben los consejeros de su Presidente durante el siglo anterior, lo que constituye en sí mismo un cambio en cuanto al origen de su autoridad³²⁶.

El primer titular del Juzgado del que tenemos conocimiento en el siglo XVIII es el conde de Gerena, que ocupó dicho puesto en 1713. Pedro Ursua Arizmendi³²⁷, que ostentaba el título como consorte³²⁸ y que tenía entonces la avanzada edad de sesenta y tres años, llevaba a sus espaldas una larga trayectoria de servicio a la Monarquía durante el reinado de Carlos II y en los últimos años con Felipe V. Antes de la llegada del nuevo monarca, y gracias a su formación como jurista, se había desempeñado como Fiscal y

³²³ BOUZA, *op. cit.* (nota 127), págs. 83-104. El término “señor de la encomienda” todavía se conserva en la primera mitad del siglo XVIII, ya que así se denomina en 1742 y 1743 a Mutiloa y Bustamante, respectivamente, por aquel entonces Jueces de Imprenta. AHN, Consejos, Leg. 50639.

³²⁴ *Ibidem*, pág. 91.

³²⁵ *Ibidem*, págs. 91-93 y GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), págs. 210-212.

³²⁶ Se puede consultar el listado completo de jueces de imprenta entre 1700 y 1808 en el Apéndice 8.1.

³²⁷ Fichoz nº 00006163.

³²⁸ Se convierte en conde consorte por muerte sin hijo varón de su hermano Miguel Jerónimo y su boda con la hija de éste, Adriana.

Oidor en la Chancillería de Valladolid entre 1685 y 1691 antes de ser nombrado Consejero de Hacienda (1691-1698) y Regente de la Audiencia de Grados de Sevilla (1698-1706), ciudad en la que realizó diversos servicios al nuevo Rey³²⁹. Esto le valdrá su traslado a Madrid, donde ocupará asiento en los Consejos de Indias (27 de septiembre de 1706-20 de enero de 1707) y de Castilla (20 de enero de 1707-23 de noviembre de 1713), siendo incluido en la Cámara de Castilla³³⁰ (15 de julio de 1707-23 de marzo de 1714) y compaginándolo con la Presidencia de la Audiencia de Aragón. Cesado del Consejo por indicación de Macanaz en 1714, quien opinaba de él que tenía “mala salud [...] no asiste, y todo es oponerse a cuanto se hace”³³¹. Para entonces había sido nombrado Juez de Imprentas y había participado en diversas juntas de carácter económico. Tras un breve paréntesis en el que fue Consejero togado del Consejo de Guerra (23 de abril de 1714 – 9 de junio de 1715), regresó al Consejo y Cámara de Castilla, hasta su muerte en 1718.

Pocas noticias más tenemos para saber cómo desempeñó dicho juzgado, ya que destacó más por su labor como Presidente de la Audiencia de Aragón, donde realizó un plan de división en corregimientos, que como Juez de Imprentas, seguramente condicionado por el ambiente bélico en el que ejerció y que no permitía un desarrollo normal de las funciones gubernativas.

Su sucesor en el cargo, según la documentación encontrada, fue Manuel Antonio de Acevedo Ibáñez, Conde de Torrehermosa³³². También jurista de formación, había desarrollado una brillante carrera universitaria en Alcalá de Henares³³³ antes de ser nombrado Fiscal Criminal de la Chancillería de Valladolid (1705-1706) y comenzar su andadura en Madrid como Fiscal de la Comisión de Millones, Vocal de la Junta de Comercio y Moneda, Presidente Quinto del Consejo de Hacienda (Presidente de la Sala

³²⁹ El más importante como administrador de los fondos para el ejército en el asedio a Gibraltar durante la Guerra de Sucesión.

³³⁰ Sobre el papel que los distintos Jueces de Imprenta jugaron en el funcionamiento de la Cámara de Castilla, así como la propia dinámica de la institución, resulta imprescindible la consulta de GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, *La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002.

³³¹ AGS GJ, leg. 133, fechado en marzo de 1714. Recogido en Fichoz.

³³² Fichoz nº 00005974

³³³ Doctor en Cánones en 1691, había llegado a ser Catedrático de Prima de Cánones en 1700, oficio que desempeña hasta su nombramiento como Fiscal Criminal de la Chancillería de Valladolid.

de Justicia), Presidente Quinto del Consejo de Castilla³³⁴ y, finalmente, Consejero del Consejo de Castilla en junio de 1715, donde se mantiene hasta su muerte, acaecida el 6 de octubre de 1725.

Como su predecesor, Acevedo ostentaba un título nobiliario como consorte de Antonia Hermosa, con quien se había casado en 1707 y quien había heredado el título al morir de su padre sin heredero varón en 1715, aunque él ya había demostrado su limpieza de sangre al haber sido colegial de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá y por la obtención de un hábito de Calatrava en 1692.

La primera, y casi única, referencia que tenemos de Acevedo como Juez de Imprentas no es su nombramiento ni su cese, sino un documento datado en 1716 y conservado en el Archivo Histórico Nacional³³⁵ en el que nombra a José de Camargo, Oidor de la Audiencia de Barcelona, subdelegado para el reino de Aragón, con la misión de velar porque todos los libros llevaran la Licencia del Consejo y pudiera dar licencia a las obras menores. No sabemos la fecha de su destitución.

Es interesante destacar, no obstante, algunos rasgos de la carrera de Torrehermosa. Por ejemplo, fue autor, que sepamos, de cinco manuscritos, uno de los cuales tiene para nosotros especial importancia pues aunque desconocemos los detalles de su contenido no deja de ser curioso el título que recibe: *Defensa de la regalía*, una declaración de intenciones de su opinión sobre las atribuciones propias de su Rey y que sin duda contribuyó a su ascenso en la administración y debió pesar en su designación como Juez de Imprenta en un momento en el que se intenta hacer valer la imprenta como regalía.

Curioso es también su enfrentamiento con el Marqués de Miraval, quien en 1724 desaconsejó su nombramiento como gobernador del Consejo de Hacienda, a pesar de

³³⁴ Se trata del intento de Felipe V de reforma del Consejo de Castilla que sólo estuvo vigente entre 1713 y 1715, entendiéndose que tras la supresión de la pentapresidencia, los restantes cuatro fueron designados Consejeros de Castilla.

³³⁵ AHN, Consejos, Leg. 50627. *Auto del Juez de Imprentas por el que se subdelega en José de Camargo para Zaragoza*. Se ha hablado ya de esta disposición en el apartado 2.2.

su experiencia en diversas juntas y como Presidente de la Junta General de Comercio y Moneda, que ejerció desde 1720 hasta su muerte, y que él mismo había ayudado a restaurar en un memorial escrito al Secretario del Despacho José Rodrigo Villalpando, que fue impreso el mismo año de su nombramiento³³⁶. Entre los argumentos esgrimidos aludía a su condición de eclesiástico y una excesiva dureza que no le hacían recomendable para el cargo, aconsejando para él a Juan Blasco Orozco. Lo primero que nos indica Miraval es que Torrehermosa debió tomar votos religiosos (no sabemos cuáles) al enviudar, lo que explica la pensión que antes de morir recibe con cargo al Arzobispado de Sevilla. Lo segundo es que ambos habían coincidido en el Consejo de Castilla por lo que conocían sus puntos de vista enfrentados en materia de regalías, de las que Miraval era conocido detractor, lo que provocó su cese como Consejero en 1713. Más tarde, en 1716 regresó como Gobernador del Consejo y en 1724 fue uno de los principales consejeros de Luis I durante su breve reinado, momento en el que interfiere en el nombramiento de Torrehermosa para Hacienda.

No es tan clara la identidad del siguiente Juez de Imprentas del que tenemos noticia: Francisco de Arana, ya que he podido localizar varias personas a principios de siglo que responden al mismo nombre, cualquiera de las cuales hubiera podido ser designada, pues en las mismas fechas formaban parte de la alta administración del Estado borbónico. A pesar de ello, todo parece indicar que pudo ser Francisco Arana Adraca³³⁷, nacido en Luyando. Catedrático de derecho en la Universidad de Salamanca (1688), inició su carrera en Milán como Fiscal del Senado y Senador, antes de ser Consultor del Reino de Sicilia. Presidente de la Chancillería de Valladolid en diciembre de 1706 tras comprar la plaza por 126.000 pesos³³⁸, permaneciendo en la ciudad del Pisuerga cinco años. Ascendido a Consejero de Hacienda y de Castilla en 1711 y 1712 respectivamente, fue cesado al año siguiente por su postura contraria a las regalías, aunque es restituido en 1715, antes de formar parte de la Junta encargada del proceso

³³⁶ Fichoz nº 0024747L

³³⁷ Fichoz nº 00004625.

³³⁸ Según recoge ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, "Vender cargos y honores, un recurso extraordinario para la financiación de la corte de Felipe V", en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (Coords.) *Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz*, Granada, Universidad de Granada, 2008, Vol. 3, págs. 89-110.

al Duque de Gandía. Designado Juez de Imprentas en 1728, fallece en 1738, sin dejar viuda ni hijos.

Desconocemos si Arana falleció ejerciendo de titular del Juzgado o fue sustituido por otra persona en los diez años que van desde su nombramiento hasta su muerte. Lo que sabemos con certeza es que a partir de entonces la lista se hace ya mucho más fiable. La figura que inicia esta serie de nombramientos consecutivos fue Juan José de Mutiloa, que lo obtuvo en 1738³³⁹.

Además, tal y como se ha señalado al analizar la legislación de imprentas, en 1738 el nombramiento de Mutiloa supone un cambio en las funciones que tenía asignadas el Juez de Imprentas, que tendrá desde entonces la jurisdicción en exclusiva sobre todas las causas relacionadas con las impresiones, inhibiendo a los demás Consejos, Chancillerías, Audiencias y jueces, pudiendo designar Subdelegados para intentar atajar el frecuente incumplimiento de las normas sobre las licencias de impresión, cuya concesión mantenía el Consejo como competencia exclusiva. El 14 de febrero de 1739 Mutiloa ejerció esta capacidad y nombró un subdelegado para Sevilla, Jerónimo de la Barrera³⁴⁰, Inquisidor de Sevilla.

Nacido en Tudela en 1670, Juan José López de Mutiloa comenzó sus estudios en la Universidad de Huesca, aunque la mayor parte de su carrera universitaria discurrió en la de Salamanca, siendo becario del Colegio Mayor de San Bartolomé y Rector del mismo en dos periodos (1691-1692 y 1694-1695). Entre 1701 y 1706 fue ascendiendo como Catedrático de Leyes en la Universidad de Salamanca antes de dar el salto como Juez de la Audiencia de Sevilla (1707-1710). En 1710 se le nombra Alcalde de Casa y Corte supernumerario para ejercer a su regreso de un viaje a Buenos Aires para el que fue comisionado. Ejerció como Alcalde hasta 1723, fecha en que es ascendido a Consejero del Consejo de Hacienda (cargo que ocupó hasta 1725), del Consejo de Indias (nombrado en ese mismo año) y, finalmente, como culminación de una carrera

³³⁹ Fichoz nº 00004579. Nombramiento en *Real Cédula de 27 de febrero de 1738, incluida en notificación de 1739*. AHN, Consejos, Leg. 50627.

³⁴⁰ Fichoz nº 00083086.

ejemplar, Consejero de Castilla el 25 de junio de 1730, no sin haber tenidos dos intentos fallidos en fechas anteriores³⁴¹. Siendo Consejero de Castilla recibió el encargo del nuevo Juzgado de Imprentas y fue nombrado Consejero asesor del Consejo de Castilla en el de Inquisición. No conocemos fecha de cese, por lo que es suponer que ostentaría dichas dignidades hasta su muerte el primero de agosto de 1743, sin que se le conociera esposa, descendencia ni votos religiosos.

El 30 de agosto de 1743 se nombra nuevo Juez de Imprentas a José de Bustamante y Loyola³⁴², que permanecerá como tal hasta su muerte en julio de 1748³⁴³. Nacido en Logroño, Bustamante, como Mutiloa, comienza como colegial del Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, en cuya Universidad obtuvo la licenciatura y el doctorado en Leyes y en la que será empleado como Catedrático de Cánones con diversos ascensos entre 1708 y 1715³⁴⁴. Su carrera judicial comienza, en cambio, como Juez Metropolitano de la Provincia de Santiago en 1718, pasando pronto al puesto de Fiscal Civil de la Audiencia de Cataluña, donde a la vista de las opiniones conservadas³⁴⁵ realizó un brillante trabajo que le valió su ascenso a Oidor de la Chancillería de Granada en 1721 y, tras un intento fallido en 1725 como tercero de la terna, en 1726 fue nombrado Alcalde de Casa y Corte, a pesar de no ser el primero de la Cámara y gracias a los informes favorables que se reciben sobre su persona y que compensaban la falta de experiencia en lo criminal, pues su desempeño hasta entonces había sido en el campo de lo civil.

³⁴¹ La Cámara de Castilla le había propuesto previamente en segundo lugar en una terna para el Consejo de Castilla en marzo de 1725 y en segundo lugar para la fiscalía del mismo Consejo en septiembre del mismo año, AGS GJ, Leg. 138.

³⁴² Fichoz nº 00010202.

³⁴³ El hecho de que varios de ellos ejercieran hasta su fallecimiento refuerza la teoría de que tanto Arana como Mutiloa también lo hicieran hasta sus últimos días, con lo que la lista tendría menos lagunas de las que hemos enunciado.

³⁴⁴ En 1708 de Decretales mayores, en 1709 de Sexto, en 1714 de Vísperas de Cánones y en 1705 de Decreto.

³⁴⁵ Según Francisco Velázquez Zapata: "Sujeto sobresaliente y de conocida habilidad fue catedrático y colegial en Salamanca, donde le conocí y experimente. Hallándose fiscal en Barcelona, informó el marqués de Castel Rodrigo era de muy suficiente literatura, ingenioso y perspicaz, aplicado a los negocios, de gran trabajo, muy fértil comprensión, de feliz explicación, así en voz como con la pluma, fundado en sus dictámenes, amante del acierto, desinteresado y de gallardía [...], de genio dulce y modesto, y que estaba nombrado oidor de Granada, pero que convendría mucho continuar en aquella fiscalía pues su separación entonces hacía notable falta". AGS, GJ, leg. 138.

Como tantos otros, su empleo de Alcalde supuso el inicio de su ascenso en la Corte. En 1731 se incorporó como Consejero al Consejo de Órdenes Militares, siendo reconocido previamente en ese mismo año como Caballero de Calatrava. En 1734 recibió el nombramiento de Presidente de la Sala del Crimen de la Chancillería de Granada, pero al parecer no tomó posesión del mismo y en 1736 fue designado Consejero del Consejo de Castilla, incorporándose, además, a la Cámara en 1737 tras contar con el apoyo expreso de Sebastián de la Cuadra, entonces Secretario del Despacho de Estado.

Poco conocemos de su desempeño como Juez de Imprentas a partir de 1743. En cambio sí hay en su expediente un curioso acontecimiento sobre su relación con uno de los más afamados intelectuales del momento, Gregorio Mayans y Siscar. Al parecer la relación entre ambos se remontaba a 1725, cuando Bustamante era Oidor de la Chancillería de Granada. José Borrull Ramón, que guardaba una larga relación con Mayans, actuó de intermediario entre ambos, entregando a Bustamante obras de Mayans, al que alaba por su talento literario y con el que dice compartir gustos³⁴⁶. En abril de 1743, meses antes de su designación como Juez, se produce la delación al Consejo por Diego Heredia, canónigo colegial del Sacromonte, contra Gregorio Mayans por la publicación de las *Historias fabulosas* de Nicolás Antonio, en paralelo a otra denuncia frente a la Inquisición por dar a entender que las reliquias del Sacromonte habían sido declaradas canónicamente como hechizos. En un primer momento Bustamante aprueba la delación, pero poco después cambia de opinión y promete a Borrull que apoyará al valenciano en este asunto. Borrull juega, sin duda, un papel fundamental en este proceso, ya que será quien aconseje a Mayans y consiga el favor no sólo de Bustamante, sino los fiscales del Consejo y del Inquisidor General y quien descubra detrás de todo el proceso la mano de Blas Nasarre.

Durante su carrera Bustamante fue también Protector de la Universidad de Cervera de manera interina y Consejero asesor del Consejo de Castilla en el Consejo de la Cruzada, además de Vocal en las Juntas de Tabaco, Obras Públicas y Bosques.

³⁴⁶ MESTRE SANCHIS, Antonio, *Epistolario. Volumen XVI: Mayans y los altos cuadros de la Magistratura y Administración borbónica*, 3. *Fernando José de Velasco Ceballos (1753-1781)*, Valencia, Diputación, 1972.

Tras la muerte de Bustamante se procede a nombrar el 3 de septiembre de 1748 a Juan Ignacio de la Encina y la Carrera³⁴⁷. Bautizado en 1691 en Huete, comienza su andadura pública como colegial del Colegio del Rey de Alcalá en 1715. Contrae poco después, en 1717, matrimonio con su prima Juana Ignacia Carrera. Elegido Alcalde de Tarancón en 1718 y 1719 y Regidor Noble de la misma en 1721, en 1729 comienza su vida en Madrid con el ejercicio de la abogacía. En 1733 obtendrá la plaza de Fiscal de la sala de Justicia del Consejo de Hacienda y al año siguiente el empleo de fiscal de la Junta de Comercio y Moneda, que no dejará hasta 1748, cuando pase a ser vocal de la misma. Obtiene el hábito de Santiago en 1735 y dos años después asciende a Fiscal Criminal del Consejo de Castilla. En 1739 aparece como Fiscal de la Sala de Justicia del Consejo de Castilla y en ese mismo año recibe los honores de Consejero de Castilla, siendo efectivo su nombramiento como tal el 28 de agosto de 1742. Encina muere el 14 de enero de 1752.

Así, en un breve repaso a los jueces de imprenta conocidos antes del nombramiento de Curiel en 1752, comprobamos cómo todos son jueces, abogados y/o juristas, con experiencia en la universidad y un largo recorrido en la administración, habiendo pasado por varios Consejos y juntas, algunos también por audiencias o chancillerías, antes de recalar en el Consejo de Castilla, final deseado en el *cursus honorum* de los magistrados de la época. Sin duda no se trata de algo casual. No nos puede extrañar tampoco que los elegidos para dicho cargo fueran jueces y fiscales con dilatada experiencia a sus espaldas, ni que estén poco tiempo en el cargo pues al ser nombrados al final de sus carreras les suele sobrevenir la muerte pocos años después.

El más famoso de todos los titulares del Juzgado de Imprentas fue, sin duda, Juan Curiel, aunque este reconocimiento no ha tenido hasta el momento repercusiones en la bibliografía ni ha despertado un interés específico por su persona, como sí ocurrió, sin embargo, con su homónimo francés Malesherbes³⁴⁸.

³⁴⁷ Fichoz nº 00010695.

³⁴⁸ Frente a la única biografía de Juan Curiel que ya hemos mencionado, obra de González Palencia en 1945, la historiografía francesa ha prestado gran atención a su homólogo francés, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, más conocido como Malesherbes, al que se han dedicado numerosos

Además de Juez de Imprentas, Curiel desarrolló una fructífera carrera administrativa que coronó como Consejero del Consejo de Castilla³⁴⁹. Nacido en Sevilla el 1 de enero de 1690, la primera aparición pública de la que tenemos constancia es su participación desde 1714 en la Real Academia Española, donde ocupó la silla "R", y aunque no figura como socio fundador³⁵⁰, fue uno de sus primeros miembros³⁵¹ y, además, de los más activos, ya que incluso llegaron a celebrarse tertulias en su casa como decano de la Academia durante las direcciones de Pacheco, Carvajal y Alba, cuando no podían tener lugar en casa de éstos por motivos de fuerza mayor, como podía ser por ausencia o por enfermedad.

Su carrera profesional comenzará, no obstante, en la Universidad de Salamanca, como colegial del Colegio Mayor de Cuenca, donde coincide con un joven Gregorio Mayans y

estudios, sin duda por su mayor proyección política tras la Dirección de la Librería como Ministro de Luis XVI y convertirse, antes de ser también guillotinado, en uno de los abogados de la defensa del Rey frente a la Convención. La biografía en castellano más completa de Malesherbes es la obra RODRÍGUEZ LABANDEIRA, José, *El Censor de las Luces y la Revolución Francesa. Malesherbes y su tiempo. 1721 - 1794*, Madrid, Editorial Cludia, 2008. Más importante es la producción francesa es mayor, aunque también con una cronología anterior, empezando por la edición de sus memorias hecha por Chartier, CHARTIER, Roger, *Malesherbes. Mémoires sur la librairie. Mémoires sur la liberté de la presse*, París, Imprimerie Nationale, 1994. Entre la bibliografía de Malesherbes: EGRET, Jean, "Malesherbes, premier président de la Cour des Aides (1750-1775)", *Revue d'histoire moderne*, 1956, págs. 97-119; GROSCLAUDE, Pierre, *Malesherbes témoin et interprète de son temps*, París, Fischbacher, 1961; SHAW, Edward P., *Problems and Politics of Malesherbes as "Directeur de la Librairie" in France (1750-1763)*, Nueva York, Albany University, 1966; BADINTER, Elisabeth, *Les "Remontrances" de Malesherbes, 1771-1775*, París, Union Générale d'Éditions, 1978; BIRN, Raymond, "Malesherbes and the Call for Free Press", en DARTON, Robert y ROCHE, Daniel (Eds.), *Revolution in Print. The Press in France, 1775-1800*, Berkeley, University of California Press, 1989, págs. 50-66; WYRWA, Marek (Ed.), *Malesherbes, le pouvoir et les Lumières*, París, Éditions France-Empire, 1989; BAKER, Keith Michael, "French Political Thought at the Ascension of Louis XVI" en BAKER, Keith M., *Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, págs. 109-127; y, NEGRONI, Barbara (Ed.), *Correspondance. Jean-Jacques Rousseau, Chrétien-Guillaume de Malesherbes*, París, Flammarion, 1991.

³⁴⁹ Como para el resto de nuestros protagonistas, siempre que no se indique lo contrario sus datos biográficos han sido extraídos de la base de datos Fichoz, ficha nº 00010570, completada en este caso con los datos que aporta GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78).

³⁵⁰ Su nombre no aparece entre los diez socios fundadores que reconoció la propia Academia en la redacción de su *Diccionario de Autoridades*, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o motivos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes del uso de la lengua*, Tomo I, Madrid, Francisco del Hierro, 1726, pág. 16.

³⁵¹ La página web de la Academia le reconoce como fecha de entrada el mismo año de su fundación, en 1714, siendo el primero en ocupar la silla "R", puesto que desempeñó hasta su muerte en 1775, lo que le convierte en uno de sus miembros más longevos.

<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/voTodosporId/2DC7914283895381C125714500416297?OpenDocument&i=0> [Fecha de consulta: 07/08/2012].

de la que será nombrado Catedrático de Derecho en la cursatura de Cánones en 1721, además de rector de su Colegio.

En un plano honorífico, pero igualmente importante, se encuentra su reconocimiento nobiliario al serle concedido en 1720, en el inicio de su carrera y con el apoyo de su padre, un hábito de la Orden de Calatrava³⁵².

Su carrera judicial comenzó en su ciudad natal, Sevilla. Primero como Alcalde Mayor de la Cuadra de la Audiencia de Grados entre 1722 y 1729, tras un primer intento de convertirse en oidor de la misma en 1726 al figurar en el segundo lugar de la terna para una vacante. Sobre su trabajo, los informes siempre fueron positivos: “buena habilidad, pero no puede tener tanta experiencia porque ha poco que entró en el ministerio” según Francisco de Araña en un informe a la Secretaria del Despacho de Gracia y Justicia en 1726³⁵³, similar a la opinión de José de Castro en su informe para la terna: “me informan es muy bueno y de gran habilidad”. Será ascendido a Juez de la Audiencia de Grados de Sevilla, empleo que ocupará entre 1729 y 1740, simultaneándolo desde 1736 con la Subdelegación de Alcabalas de la provincia de Sevilla.

El 9 de marzo de 1740 obtiene el esperado ascenso, muy habitual por otra parte, y es nombrado Alcalde de Casa y Corte. Como retrasa su traslado a la capital, solicita tomar juramento en manos del Regente de la Audiencia de Grados de Sevilla para empezar a cobrar como tal, lo que le es concedido. A penas estará un año, ya que el 14 de mayo de 1741 será nombrado Fiscal de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda, ocupación que le llevará cinco años y durante la cual recibirá los Honores de Consejero de Castilla, que logrará materializar el 13 de agosto de 1746.

La llegada de un magistrado al Consejo Real de Castilla era el final deseado por todos los juristas y suponía un gran reconocimiento profesional, pero a Curiel todavía le

³⁵² VIGNAU, Vicente y UHAGON, Francisco R. de, *Índice de pruebas de los caballeros de Calatrava, Alcántara y Montesa desde el siglo XVI hasta la fecha*, Madrid, Viuda e hijo De M. Tello, 1903, pág. 250.

³⁵³ AGS, GJ, leg. 138.

estaba reservado un papel protagonista. Tras la muerte de Juan Ignacio de la Encina, será designado el 8 de septiembre de 1752 como Juez de Imprentas, labor en la que se desempeña con ahínco, como hemos visto, con la promulgación de un polémico Reglamento con el que intentó poner orden en el sistema de censura previa gracias a las nuevas atribuciones que se le habían dado a su cargo y que le permitían abordar la concesión de licencias de manera global. Las quejas que su actividad despertó no mermaron su autoridad, ya que su Reglamento fue finalmente aprobado con alguna modificación en 1754 por el propio Consejo, en un reforzamiento de su autoridad pública, a pesar de la oposición de libreros e impresores, que encontraron un aliado en el poderoso Secretario de Estado, Ricardo Wall.

Durante los diecisiete años que estuvo al frente del Juzgado de Imprentas, Curiel asistió de manera irregular a las sesiones semanales de la Real Academia Española, de la que fue Académico Decano, pues por más que el Juzgado funcionara de manera autónoma, debía compaginarlo con sus demás obligaciones y responsabilidades como Consejero de Castilla. Su labor como Académico fue más allá de la asistencia a las sesiones siempre que sus obligaciones se lo permitían, ya que no fueron pocas las veces que él mismo preside las sesiones en calidad de Decano por ausencia del Director. Además, será Consejero Asesor del Consejo de Castilla en el Consejo de Inquisición en dos periodos, entre 1753 y 1761, cuando es cesado por el Rey al mismo tiempo que el marqués de Monterreal por su voto particular para que no se hiciera novedad en la recepción de los escritos pontificios de prohibición de libros, y entre 1767, en que fue propuesto en primer lugar en la terna del Inquisidor General y 1769, cuando se jubiló. Fue, además Presidente del Concejo de la Mesta desde el 10 de abril de 1766.

A lo largo de su carrera, Curiel tuvo no pocos enfrentamientos, como les ocurrió a la mayor parte de personas designadas para los distintos puestos de responsabilidad en el Gobierno. Su mano firme le empujó a no frenarse ante nadie, abriendo un expediente incluso al reputado y reconocido impresor madrileño Joaquín Ibarra³⁵⁴.

³⁵⁴ El expediente abierto a Ibarra tiene su origen en unas visitas a las imprentas de Madrid ordenadas por el Juez de Imprenta como parte de su control sobre la imprenta, en este caso aplicado al

Además del conflicto con Wall, sobre el que ya hemos escrito, y su enfrentamiento con la Real Academia Española en torno al privilegio corporativo de impresión al que también hemos hecho referencia³⁵⁵, su declarada posición projesuita le enfrentó a Campomanes, con el que ya había tenido sus roces al menos desde 1755. En un informe hecho en vísperas de la expulsión de la Compañía en 1765 se le califica de "jesuita militante"³⁵⁶ y como tal se comportará, aunque no podrá hacer nada por los ignacianos. Su último enfrentamiento fue con Francisco Pérez Bayer en 1771³⁵⁷, que era entonces preceptor de los hijos del Rey por recomendación de Roda y ya reconocido projansenista. El motivo fue la reforma de los Colegios Mayores, que el propio Pérez Bayer impulsaba junto con Roda, Secretario de Gracia y Justicia, y Eleta, Confesor Real. Curiel encabezó el partido de la resistencia en el seno del Consejo, mientras que el erudito valenciano era el impulsor de las reformas.

Para entonces, Curiel ya ocupaba un cómodo segundo plano, alejado de los focos principales de la acción pues en 1769 había solicitado su jubilación de todos los cargos que ocupaba hasta entonces: Presidente de la Mesta, Juez de Imprentas, Consejero de Inquisición y Consejero de Castilla, lo que le fue concedida el 30 de abril.

Algunos datos tenemos también sobre su vida personal. Uno de los grandes desvelos de su padre Luis Curiel, caballero de Santiago, fue el de conseguir instaurar un mayorazgo que legar a su primogénito y que sirviera como base para el

cumplimiento de las disposiciones por parte de los impresores. En este registro rutinario se observaron ciertas anomalías en el taller de Ibarra, por lo que Curiel inició un proceso ejemplarizante. Para profundizar en los detalles de caso, que escapan al objeto de la tesis: GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78) págs. 69-74.

³⁵⁵ La Real Academia Española, como la de Historia, había obtenido en 1755 un privilegio para publicar sus obras con la sola aprobación de sus miembros, sin que fuera necesaria la censura previa del Juzgado, como se había dispuesto desde el Reglamento de 1754. Curiel se niega a reconocer dicha dispensa, a pesar de ser miembro de la misma y de que ésta se reuniera en repetidas ocasiones en su propia casa. Wall intercederá por la Academia, a la que permite imprimir al *Elogio* que Tomás de Iriarte había hecho por la coronación de Carlos III sin la aprobación de Curiel, pero éste terminará imponiéndose y la Academia tendrá que pedir su licencia ese mismo año para dar las prensas su *Ortografía*. Para más información, GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78) págs. 65-67.

³⁵⁶ El informe se encuentra AGS. GJ. Leg. 590. *Noticia de los ministros que componen el Consejo Supremo de S.M. y de otros dentro y fuera de esta corte* (1765) y está citado por OLACHEA, Rafael, "Política anticolegialista del gobierno de Carlos III", en *II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo*, Oviedo, 1983, págs. 207-246, y por MESTRE Antonio, *Epistolario. Volumen XVI: Mayans y los altos cuadros de la Magistratura y Administración borbónica, 3. Fernando José de Velasco Ceballos (1753-1781)*, Valencia, Diputación de Valencia, 1972, págs. 10-11, e incluye a otros miembros de Consejos y Secretarías.

³⁵⁷ Fichoz nº 00002735.

engrandecimiento familiar, lo que consiguió gracias a que la mayor parte de su abultada descendencia o había fallecido o había abrazado el estado eclesiástico. Siguiendo las estrategias de ascenso, casó Juan Curiel en primeras nupcias, el mismo año que iniciaba su carrera administrativa en Sevilla, con María Josefa de Alamos y Miranda, la hija de un título de Castilla, los marqueses de Villasinda, en cuyas capitulaciones matrimoniales se contemplaba la creación del mayorazgo para sustentar a la nueva familia. Viudo de la hija de los marqueses de Villasinda, Curiel contrajo de nuevo matrimonio con la viuda de otro magistrado, aunque sólo duró cuatro años, también por el fallecimiento de su esposa. El apego de Curiel por las antiguas instituciones se manifiesta en su preocupación por el mantenimiento y enriquecimiento del mayorazgo heredado de su padre y su insistencia en fundar uno nuevo que legar a su hijo, para lo que obtuvo facultad del rey en 1763, siendo beneficiario su primogénito, Luis Curiel, Conde de San Rafael.

El caso de Curiel es, como el de otros jueces analizados, un buen ejemplo de tradición familiar al servicio de la Corona. Su padre, Luis Francisco Curiel y Tejada, miembro de una familia de la baja nobleza sevillana, también comenzó su carrera en Sevilla, donde fue Juez de la Audiencia de Grados antes de ascender a Alcalde de Casa y Corte y alcanzar en 1713 el ejercicio de Consejero del Consejo de Castilla. De su matrimonio, además de Juan, tuvo otros ocho hijos, de los cuales todos los que sobrevivieron, menos una, tomaron votos religiosos, lo que permitió la creación del primer mayorazgo familiar. Su segundo hijo, Pedro Curiel, alcanzó también cierta notoriedad siendo Arcediano de Sevilla y Subdelegado de Imprentas en dicha ciudad por encargo de su propio hermano mayor. También fue, como su hijo, académico de la Real Academia Española, y aunque su participación en las sesiones no fue tan prolífica, tomó parte por ejemplo en la revisión de la primera parte del *Diccionario de Autoridades*. El apoyo del consejero Luis Curiel a su hijo fue, sin duda, determinante en los inicios de la carrera de éste.

La creación y el mantenimiento de los mayorazgos, una institución tan desprestigiada en el discurso reformista ilustrado, fue una de las principales obsesiones de Juan Curiel. Al heredado de sus padres en 1724, Curiel pretendió sumar el suyo propio

primero a través de su testamento firmado en 1752 y que se fundará finalmente en 1764 gracias al permiso obtenido de Carlos III. En sus propias palabras, su modesta manera de vivir le había permitido ahorrar rentas de sus bienes y fincas y vivir de los sueldos que recibía por sus cargos, acumulando así la fortuna que pretendía blindar mediante la vinculación al mayorazgo.

Entre los reconocimientos otorgados a Curiel destaca el título de Castilla que obtuvo en 1760, como premio a sus dilatados servicios y con motivo de la jura de Carlos III. El monarca no se lo concedió a él mismo, sino a su hijo y sucesor, que fue hasta su prematura muerte primer Conde de San Rafael, denominación que había sido escogida por el propio Juan Curiel³⁵⁸. Esta concesión a su heredero y no a él mismo era una práctica común, ya que de esta manera se aseguraba al sucesor una preeminencia social que un Consejero de Castilla ya había alcanzado por el ejercicio de sus empleos al servicio del monarca.

El 11 de mayo de 1769 se procedió a nombrar formalmente al sustituto de Curiel al frente del Juzgado de Imprentas. Fue elegido Miguel María Nava y Carreño³⁵⁹, que también le había sucedido como Alcalde de Casa y Corte en 1741. El nombramiento de Nava, como ya habíamos visto, fue precedido de una serie de reajustes en las competencias asignadas al Juzgado de Imprentas que implicaban que su titular estaría de nuevo sujeto al Consejo de Castilla, siendo éste quien emitiera las licencias, impidiendo el nombramiento de Subdelegados de Imprentas y suprimiendo el cuerpo de censores a sueldo.

Sin embargo, la elección de Nava tiene cierta trascendencia. Decíamos que los individuos están inmersos en redes sociales y que sus movimientos deben entenderse dentro de las dinámicas del grupo, sin que eso suponga anular su capacidad individual

³⁵⁸ Carlos III concede a Luis Curiel "Título de Castilla, para sí y sus descendientes, libre del derecho de la media annata y lanzas", en comunicación de 24 de septiembre de 1760, entre las gracias concedidas a los asistentes a su jura como Rey y de su hijo Carlos como heredero. La Real Cédula de concesión tiene fecha de 24 de noviembre del mismo año, y en el se especifica "porque habéis elegido la denominación de Conde de San Rafael". Sobre la concesión del título, GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 129-130.

³⁵⁹ Fichoz nº 000561.

de movimientos. Hemos visto como en los últimos años de su ejercicio Curiel había sido anulado por un enérgico Campomanes que había devuelto protagonismo político al Consejo de Castilla, a lo que se añade que tampoco Carlos III era ya tan favorable al juez sevillano como lo había sido su predecesor. Y veremos como su sustitución por Nava implica redimensionar el propio cargo de Juez.

Nava fue bautizado en Madrid en 1703 e ingresa como colegial del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid en 1722, del llegará a ser rector en 1727. Con 19 años es reconocido como caballero de la Orden de Calatrava. No conocemos cuando terminó sus estudios de derecho, pero su carrera profesional comienza en 1732 como Fiscal y Abogado del Real Patrimonio del Consejo de Navarra, donde permanece hasta mayo de 1741. El 14 de dicho mes es designado Alcalde de Casa y Corte, en sustitución de Curiel que había ascendido al Consejo de Hacienda. Durante trece años mantiene dicho empleo, pasando a asistente de lo civil en 1750 y como decano de la sala desde 1754, para ser ascendido, directamente, a Consejero del Consejo de Castilla el 4 de agosto de 1754. Como tal, en 1766 será uno de los elegidos para formar parte del Consejo Extraordinario sobre el Motín de Esquilache, prueba de la cercanía al poder del Consejero, que además desde 1783 es el decano del mismo. El premio a los trabajos prestados a la Monarquía se plasma definitivamente el 11 de junio de 1767, con su nombramiento como Camarista de Castilla³⁶⁰.

³⁶⁰ La Cámara de Castilla era el Consejo encargado de proponer al Rey un terna de nombres para la provisión de las distintas vacantes que hubiera tanto en puestos y oficios de la Administración (corregidores, consejeros, oidores, justicias, etc.), como beneficios eclesiásticos a los que tenía derecho por Patronato Regio. En origen los Camaristas que no estuvieran de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría podían emitir un voto particular con su alternativa, que es elevada al Rey junto con la terna oficial. Durante un breve periodo de tiempo esta posibilidad fue eliminada para evitar que las diferencias de este órgano salieran a la luz. Poco después se volvió a permitir los votos particulares, ya que como órgano consultivo, al Rey le interesaba más saber la opinión de todos sus consejeros, y más si la decisión no era unánime. Desde la reforma borbónica que situaba en un primer plano del aparato administrativo a los Secretarios de Estado y del Despacho en detrimento de los Consejos, salvo para el Consejo de Castilla que seguía despachando los viernes con el Rey a través de su Presidente/Gobernador, la Cámara elevaba sus resoluciones al Secretario de Gracia y Justicia, que era quien lo despachaba con el Rey. El monarca, a la vista de la consulta, procedía a nombrar a quien debía ocupar la vacante, siguiendo normalmente la terna presentada, aunque podía, en el ejercicio de su soberanía, designar a quien creyera conveniente, fuera o no el primero de la terna oficial o de alguno de los votos particulares e, incluso, a alguien que no hubiera sido contemplado en la Cámara. Para conocer mejor el funcionamiento de la Cámara conviene consultar el estudio de LOUPÈS, Philippe, "Los mecanismos de la Cámara de Castilla en el siglo XVIII. La selección del alto persona judicial" en CASTELLANO, DEDIEU, y LÓPEZ-CORDÓN, *op. cit.* (nota 39) págs. 49-64.

La actividad de Nava como Camarista es especialmente fecunda, emitiendo desde la fecha de su nombramiento hasta su muerte en 1783 multitud de votos particulares en las ternas que la Cámara proponía a través del Secretario de Gracia al monarca para la provisión de los diferentes puestos de la Administración y, sobretodo, de las dignidades eclesiásticas incluidas en el Patronato Regio desde el Concordato de 1753, siendo escogido en muchos casos el candidato propuesto en su voto particular y no el que había obtenido más votos en la Cámara, prueba más que evidente del peso que su opinión tenía para el monarca.

Más allá de las distintas atribuciones de su cargo, entre Nava y Curiel, hubo muchas diferencias. Ambos eran miembros del Consejo de Castilla, pero su sintonía con Carlos III es diferente. Por ejemplo, ambos militaban en bandos contrarios según el informe sobre las inclinación jesuíticas de los miembros de la Administración realizado secretamente en 1765, pues si Curiel era calificado de “pro-jesuita militante”, Nava engrosa las filas del partido antijesuita que se acabará imponiendo. No en vano Nava será uno de los elegidos para formar parte del Consejo Extraordinario que se convoca tras el motín, y del que se concluirá la responsabilidad de los miembros de la Compañía en la agitación de las masas y que contribuirá a su expulsión un año después.

A diferencia de Curiel, Nava conservó el favor real hasta su fallecimiento. Así, en 1783, como consejero más antiguo, ocupará de manera interina el cargo de Gobernador del Consejo, que llevaba aparejada la Presidencia de la Cámara³⁶¹, entre el 3 de marzo y el 23 de septiembre, fecha de su fallecimiento.

Sobre su vida familiar tenemos, en cambio, menos datos. Sabemos que antes de morir contrajo matrimonio con María Jacinta Lara Morales, hija de Juan Francisco de Lara Monsalve y María Morales Villamayor, sin que tengamos constancia del año del enlace ni de la posible descendencia. Del padre de Nava, Matías Nava Mansilla³⁶², sabemos,

³⁶¹ Como Presidente interino de la Cámara de Castilla mantendrá su costumbre de emitir votos particulares.

³⁶² Fichoz nº 00016728. Los datos familiares han sido extraídos de la base Actoz_Genealogy.

gracias al expediente para la concesión del hábito de Calatrava, que fue Contador de la Contaduría Mayor de Hacienda y que había casado con Barbara Carreño, con quien tuvo otros dos hijos. La madre, por su parte, casó de segundas nupcias con Juan Gregorio Blasco Orozco³⁶³, con quien tuvo otros tres hijos, sin que tengamos datos relevantes sobre ninguno de ellos. Si es importante la identidad de quien fue su padrastro, ya que Blasco Orozco tuvo una importante carrera administrativa al servicio del Rey³⁶⁴ que finalizó como Consejero y Camarista de Castilla. Sin duda, desde este puesto pudo influir en los inicios de la prometedora carrera de su hijastro, aunque Blasco murió poco antes de que Nava fuese nombrado Alcalde de Casa y Corte³⁶⁵. Cabe señalar que ambos fueron caballeros de la Orden de Calatrava.

El noveno titular del Juzgado de Imprentas fue Fernando José de Velasco³⁶⁶, que como Nava era Consejero y Camarista de Castilla. El encargo fue recibido en septiembre de 1784. A diferencia de los anteriores, Velasco era manteísta, pues sólo había pasado por el Colegio Mayor del Arzobispo en Salamanca en 1726 en calidad de huésped, a pesar de lo cual, a la altura de 1770, era considerado un acérrimo defensor de los colegiales, siendo por ejemplo uno de los firmantes de la exposición elevada al Rey en contra de la reforma de los mismos propuesta por Pérez Bayer.

La carrera de Velasco parece que comenzó en 1739, con su designación como alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón, donde permanecerá doce años. El ascenso de un oidor de la Chancillería de Valladolid a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte permitió la designación de Fernando Velasco para cubrir esa vacante de oidor, trasladándose a

³⁶³ Fichoz nº 00004719.

³⁶⁴ Había sido Presidente de la Chancillería de Valladolid y Gobernador de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y del Consejo de Hacienda antes de alcanzar la Cámara de Castilla.

³⁶⁵ Muere el 14 de abril y Nava es designado formalmente el 14 de mayo.

³⁶⁶ Fichoz nº 00000855. Sobre Velasco existe cierta producción biográfica en distintas obras que merece la pena destacar. ESCAGEDO SALMON, M. *Índice de montañeses ilustres de la provincia de Santander*, Cádiz, 1924; SOLANA, M., "D. Fernando José de Velasco Ceballos y Fernández de Isla", *Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo*, VIII (1925), págs. 205-249; FAYARD, J., *Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos*, Madrid, 1982, pág. 191; ANDUJAR CASTILLO, Francisco, *Consejo y consejeros de Guerra en el siglo XVIII*, Granada, 1996, págs. 283-284; y ANDRES, Gregorio de, "La biblioteca manuscrita del camarista de Castilla Fernando José de Velasco en la Biblioteca Nacional", *Cuadernos de Investigación Histórica*, 16 (1995), págs. 143-165. Los datos de su perfil biográfico han sido extraídos de la base Fichoz y completadas con la valiosa información que nos proporcionan Mestre y Pérez García en el estudio introductorio de volumen XVI del *Epistolario* de Mayans, donde analizan la relación entre el valenciano y el santanderino, *op. cit.* (nota 356).

dicha ciudad castellana con su familia. En Valladolid entró en contacto con Manuel de Villafañe, que actuó de intermediario entre Mayans y Velasco, que siguió en la ciudad del Pisuerga otros siete años y medio. Fue entonces cuando viajó a Madrid en búsqueda de algún ascenso que permitiera su traslado a la capital. Así se lo expresa al ilustrado valenciano en una de sus cartas:

“[...] quedo con el debido reconocimiento a las finas expresiones que se sirve reiterarme Vm. en asunto de mis ascensos. Sobre el que sólo puedo decir hoy que tengo fundamento sólido para creer que en la Cámara de mañana miércoles se me consultará para consejero de Órdenes después de ese decano Dávila; y que si vaja en él la expresada plaza, seré atendido en la Regencia de Zaragoza o, a lo menos, en una de las alcaldías de Corte que hay vacantes [...]”³⁶⁷.

Efectivamente, tras el rechazo a su entrada en la Sala de Alcaldes de Corte, la Cámara le propuso en segundo lugar para Regente de Zaragoza y primero para la plaza de Fiscal de la Sala de Alcaldes, descartándole para las dos vacantes del Consejo de Órdenes que al parecer tenían más pretendientes y con mejores padrinos. La designación final de Velasco como Fiscal de la Sala de Alcaldes de Corte se produjo el 24 de febrero de 1760, destino que no le contentaba pero que satisfacía su aspiración de recalar en Madrid, donde podría profundizar en su vertiente erudita con mayor facilidad.

El mayor inconveniente de Velasco a la hora de promocionarse en el aparato administrativo de la época no fue tanto su formación, capacidad y profesionalidad, siempre destacada en todos los informes sobre su persona, como su consideración de miembro firme del partido colegial y pro-jesuita, en un momento en el que el Gobierno se había distanciado de ambos. Ésta sería la causa que subyace a los reiterados rechazos de ascensos para fiscal del Consejo (5 de junio de 1762) y Consejero de Castilla (27 de julio de 1765), en cuyo expediente figura un informe que retrata la situación:

³⁶⁷ Carta de Velasco a Mayans, 15-I-1760. MESTRE *op. cit.* (nota 356) pág. 10.

“[...] es jesuita profeso, y de ningún modo convendría para presidente de Chancillerías, que es todo su deseo, o entrar en el Consejo, y en cualquier parte sería dominado de la ropa para todo lo graciable; en una plaza de Órdenes, que resiste, es donde pudiera colocársele, pues en Indias, o Castilla o presidencia pudiera tener inconveniente por lo expuesto, asegurándose como notorio, que no es para Fiscal de la Sala [...]”.³⁶⁸

Las fluidas relaciones que Velasco tenía con Roda y Pérez Bayer no impidieron este repetido veto, que sólo fue salvado por la intermediación del conde de Aranda. En 1766, después de otro rechazo para ingresar en el Consejo de Castilla, Velasco fue propuesto en primer lugar para la Presidencia de la Chancillería de Granada, que le fue comunicada el 22 de junio de 1766. Al igual que la Fiscalía de la Sala de Alcaldes, la Presidencia de la Chancillería no entusiasmaba al ilustrado santanderino, que se veía alejado de las tertulias y librerías de la Corte, pero suponía un avance en su carrera que no podía permitirse rechazar.

En octubre de 1768 y en 1769 (esta vez por la jubilación de Juan Curiel, amigo de Velasco), su nombre se volvió a barajar para entrar en el Supremo de Castilla, sin éxito. Finalmente, en enero de 1770 será consultado en primer lugar para la vacante que había dejado Simón de Anda y Salazar al desplazarse a la Capitanía General de Filipinas, siendo designado Consejero el 10 de febrero de dicho año, en principio como interino. Su tan perseguido y esperado acceso al Consejo de Castilla se vio completado poco después con su designación como Consejero Asesor en el de la Inquisición (31 de julio de 1770) y en el de Guerra (septiembre de 1770, estaría hasta la reforma del mismo en 1773, aunque conservó una pensión por su cese). Este ascenso colocó a Fernando Velasco en una envidiable posición, desde la que apoyó todas las peticiones de su amigo valenciano³⁶⁹.

Las opiniones personales sobre determinados temas, como la expulsión de los jesuitas o la reforma de los Colegios Mayores no fueron un obstáculo ni para su relación con

³⁶⁸ AGS. GJ. Leg. 590. *Noticia de los ministros que componen el Consejo Supremo de S.M. y de otros dentro y fuera de esta corte* (1765). Citado por MESTRE *op. cit.* (nota 39) pág. 11.

³⁶⁹ Entre ellas el intento de imponer su gramática latina en la Universidad de Valencia, el canonicato de su hermano Juan Antonio y la promoción de su hijo José Mayans, para lo que aprovechó su destino en la Sala Primera.

conocidos anti-jesuitas y anti-colegiales, como Aranda o Mayans, ni para su leal servicio a Carlos III, que, en prueba de sus desempeños, le concedió en 1777 la dignidad de caballero pensionado de la Orden de Carlos III, a lo que contribuyó la distinción reconocida de las dos ramas de su familia santanderina, los Velasco Ceballos y los Fernández de Isla, a lo que habría que sumar del título de Castilla cedido a su hijo en 1782, siguiendo la misma estrategia de Curiel de favorecer a la siguiente generación.

El punto álgido de su carrera llegó el 23 de octubre de 1785 cuando es elevado a la Cámara de Castilla que tantas veces le había rechazado. Fernando Velasco falleció en Madrid el 1 de agosto de 1788. Campomanes, conocedor de su valiosa biblioteca, envió al también camarista Manuel de Lardizábal y Uribe a velar por la integridad de sus fondos, destacando a modo de epitafio los variados cometidos del recién fallecido, alguno de los cuales no nos constan en su hoja de servicios pero que merece la pena destacar:

“[...] presidente de la Junta de Tabacos y últimamente de la Cámara de Castilla. Obtuvo las concesiones de Juez Privativo de Imprentas, Asesor de la Sumillería, Junta del Bureo, Presidente de la del Código Civil y Criminal, Vocal de la Junta Magna de Obispos, Presidente de Honrado Concejo de la Mesta; todas las que desempeñó con el celo y desinterés que es notorio. Su inteligencia en las antigüedades, su profundo conocimiento de la Historia, su amor a la sabiduría, hacen sensible su pérdida a todos los literatos españoles [...]”³⁷⁰.

Quizás el aspecto que más se haya destacado del ilustre santanderino, a raíz de su abundante correspondencia con lo más granado de la intelectualidad española, es su erudición y su pasión por los libros. Esa vinculación a los libros pudo influir en el encargo que recibió en 1784 para hacerse cargo del Juzgado de Imprentas por parte del Supremo de Castilla, aspecto poco estudiado hasta ahora en las biografías hechas sobre su persona.

³⁷⁰ MESTRE, *op. cit.* (nota 356) pág. 13.

Sobre la vida personal de Velasco sabemos que contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera fue el 30 de agosto de 1741 con Nicolasa Montoya de la Riva, con quien tendría sus tres únicos hijos. El primogénito fue José María de Velasco y Montoya, que en 1768 era teniente del regimiento de infantería de Murcia y en 1782 capitán del regimiento provincial de Valladolid, y que falleció en septiembre de 1785, siendo por cesión de su padre Barón de Velasco, título que le había otorgado Carlos III. El segundo de sus hijos, Fernando José, también siguió la carrera militar, tras los intentos fallidos de su padre de obtener para él del Confesor Real algún beneficio eclesiástico y poder realizar una carrera de letras. En 1775 era alférez en el primer batallón del regimiento de Mallorca y alcanzaría los galones de Capitán de Infantería. Su hija, María Joaquina de Velasco, ingresó como monja de la orden de San Bernardo en 1764 en el convento que la orden tenía en Valladolid. La carrera militar que siguen sus hijos no deja de ser excepcional, aunque más convencional es el intento de que al menos uno siguiera una carrera en la administración a través del clero, estrategia recurrente entre los ilustrados de la época.

Parece que en los primeros años de la década de los sesenta es cuando Fernando Velasco contrae matrimonio con su segunda esposa, Paula de Quevedo Hoyos y Colmenares, heredera de un mayorazgo en Santander, y con quien no tendría hijos. Ninguno de sus descendientes tuvo interés por la erudición de su padre, pues Velasco temía la disgregación de su rica biblioteca, por lo que encomendó a Mayans su venta, aunque finalmente sería Campomanes, tras su muerte, el encargado de velar por su integridad.

Otro de los aspectos importantes de cara al papel público del personaje, es su ascendencia nobiliaria, pues al fin y al cabo era hijo del Señor de Velasco³⁷¹. Esta posición fue reforzada en dos ocasiones. Tras la tramitación oportuna, fue reconocido por Carlos III como caballero de la Orden que llevaba su nombre en febrero de 1776, además del título de Barón de Velasco que le fue concedido por el Rey en pago por sus servicios a la Monarquía en 1782 y que, como hemos visto, cedió a su primogénito.

³⁷¹ Su padre era Teodoro Velasco, Señor de Velasco y su abuelo paterno, Juan Antonio Velasco había sido Caballero de la Orden de Santiago.

Como en el caso de Curiel, Velasco es un ejemplo de un ilustrado fuera de los estereotipos tan largamente difundidos. Lejos de ser un revolucionario, su opinión sobre temas clave como la reforma del sistema universitario le sitúan en unas posiciones conservadoras que no son incompatibles con su elevada formación intelectual y su frecuente contacto con los intelectuales ilustrados. Y como también hiciera Curiel, Velasco unió al mayorazgo de Mújica, heredado de su padre, el de Quevedo en Silió (Santander) al que su segunda esposa tenía derecho.

Fernando Velasco mantuvo una abierta relación de amistad con Curiel, con el que comparte ideas sobre asuntos como los jesuitas o los Colegios Mayores, y con Nava, al que sucede en el Juzgado de Imprentas y con el que coincide en el Consejo de Castilla desde 1770 hasta 1783. Pero también se relacionó con otros cargos de la administración y que aparecen a lo largo de este estudio, como Villafañe, al que conoce en la Chancillería de Valladolid y que jugará un papel clave en la censura tras su nombramiento como Director de los Reales Estudios, en detrimento de su también amigo Mayans.

El siguiente Juez de Imprentas fue Felipe Rivero Valdés³⁷². Su biografía se asemeja mucho a las que ya hemos visto. De origen norteamericano como su predecesor, nació en Llanes en 1732. Fue Colegial del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid desde 1753, obteniendo el título de Bachiller en leyes por dicha Universidad. En 1765 ingresa en la Chancillería de Valladolid en una de las magistraturas típicas de entrada, como sustituto del Juez Mayor de Vizcaya, que cubre hasta 1767, cuando es nombrado Ministro Criminal de la Audiencia de Aragón.

Estuvo en Zaragoza hasta 1776, siendo ascendido a Ministro Civil en 1775. Tras la expulsión de los jesuitas, su nombre fue barajado para la plaza de Director de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, al igual que Mayans, aunque finalmente será designado Villafañe. La carrera de Rivero seguirá, no obstante, por la magistratura,

³⁷² Fichoz nº 00000699.

pasando en mayo de 1775 a ejercer de Regente de la Audiencia de Mallorca por periodo de un año.

En septiembre de 1776 Rivero vuelve a la península al ser nombrado Regente del Reino de Navarra, oficio que mantiene durante siete años, hasta 1783. En calidad de tal, y siguiendo la prelación legalmente establecida, cubre el cargo de Virrey de Navarra de forma interina en dos ocasiones: en 1776 por la ausencia de su titular, Francisco de Bucareli, y en 1780 por el fallecimiento del mismo. Antes de dejar la Regencia, en 1782 es nombrado Consejero del Consejo de Órdenes Militares, a pesar de que su nombre no figuraba en la terna propuesta por la Cámara y de que no se había hecho la comprobación de su limpieza de sangre, condición indispensable para ser consejero del mismo. De hecho, Rivero no tenía, todavía, ningún hábito. El argumento esgrimido es el de las “seguras noticias que tiene el rey de la distinguida genealogía de su familia”. Un año después, en 1783 le será concedido, no obstante, el hábito de Calatrava.

En diciembre 1785, tras una dilatada carrera en la magistratura periférica y realizar determinados servicios al rey³⁷³, fue nombrado Consejero del Consejo de Castilla, abandonando el cargo que ocupaba en el de Órdenes. Como otros jueces, será candidato en tercer lugar para ocupar plaza de asesor en el Consejo de Inquisición en 1787, argumentando a su favor el haber desempeñado el empleo de Inquisidor en el Obispado de Valladolid en el periodo que había estado en la capital castellana, oficio del que apenas tenemos noticia. No le fue concedida esta distinción, pero sí el nombramiento como Juez de Imprentas en 1787 y el de Asesor del Juzgado de la Real Cámara en 1788.

De su implicación directa con el panorama cultural da fe su nombramiento como Académico Supernumerario de la Real Academia de la Historia en 1784 que se

³⁷³ Fue encargado junto con Antonio Tavira de una visita al convento de Sancti Spiritu de monjas de la orden de Santiago en Salamanca para tratar un asunto de partos clandestinos de las monjas, que debió satisfacer al monarca por la *delicadeza* de ambos en la resolución del mismo.

convirtió en efectivo en 1787, llegado a ser designado en 1791 Censor³⁷⁴ de la misma. Fue, además entre 1786-1787 Vicedirector de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, lo que demuestra su compromiso con las nuevas instituciones del reformismo borbónico.

De su vida personal sólo conocemos algunos datos aislados. Por ejemplo, que al morir el 9 de abril de 1792 dejó viuda a María Antonia de Sierra, que era también viuda de otro Consejero de Castilla fallecido anteriormente, Antonio Marcelino Inclán Valdés³⁷⁵, que como Rivero había sido Colegial de Santa Cruz, había hecho carrera en la magistratura en la Chancillería de Granada, para pasar después a ser Alcalde de Casa y Corte y ocupar, más tarde, una fiscalía en el Consejo de Órdenes Militares. En 1774 fue nombrado consejero del Consejo de Castilla, siendo, también, Juez de la Real Cámara, aunque no debió tener relación con Rivero en ninguno de estos dos órganos, ya que el ingreso de Rivero se produce, precisamente, en sustitución de Inclán. Del matrimonio entre Rivero y Sierra³⁷⁶, del que desconocemos también fecha de celebración pero que tuvo que ser posterior a 1785³⁷⁷, quedó al menos una hija, María Josefa Rivero Valdés.

A la prematura muerte de Rivero Valdés siguió un largo periodo durante el cual el cargo de Juez de Imprenta estuvo vacante, ya que hasta el 9 de junio de 1794 no tenemos constancia de un nuevo nombramiento para el mismo, que recayó en la persona del conde de Isla³⁷⁸.

³⁷⁴ Este es un cargo académico de la Real Academia de la Historia, que no se debe confundir ni vincular a la actividad censoria de la Institución. Su función era la de velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos de la propia Academia. Su duración era anual y desde el Reglamento de 1792 pasó a ser trienal. Otros ilustres Censores fueron, por ejemplo Pedro Rodríguez de Campomanes en 1753 (antes de ser Académico Numerario), Vicente García de la Huerta (1758), el predecesor de Rivero, Gaspar Melchor de Jovellanos desde 1787, Casimiro Gómez Ortega (en varios periodos), José Guevara Vasconcelos o Diego Clemencín (1806). En época más reciente lo han sido Ciriaco Pérez-Bustamante (1970-1975), Gonzalo Menéndez-Pidal (1985-1988) y Carlos Seco Serrano (desde 1988 hasta la actualidad). <http://www.rah.es/laAcademia/organización/censor1.htm> [Consultado en agosto de 2012].

³⁷⁵ Fichoz nº 00000382.

³⁷⁶ Sierra es, precisamente hija de otro Consejero de Castilla, Lope Sierra Cienfuegos, que había muerto en 1772.

³⁷⁷ Fecha de la muerte de su primer marido.

³⁷⁸ Fichoz nº 00000396.

Realizar un semblante biográfico de este personaje resulta fácil, por cuanto es bien conocido por la historiografía del periodo. Lo cual no quita complejidad a su figura por la extensión e importancia de las redes en las que se integra. Nacido en 1745, Luis Manuel era hijo de Juan Manuel Isla, conde de Isla. Estudió en la Universidad de Osma y en la Alcalá, siendo colegial del de San Ildefonso y comenzó su andadura profesional como abogado en Valladolid hacia 1771. En 1775 heredó de su padre el título de conde y en marzo contraía matrimonio con María Viviana Rodríguez Campomanes³⁷⁹, hija del poderoso Pedro Rodríguez de Campomanes, lo que, sin duda, supuso un salto en su carrera pública, ya que en mayo de ese mismo año fue designado Alcalde del Crimen de la Chancillería de Valladolid. Su ascenso en esta institución fue rápido ya que fue nombrado Oidor en junio de 1778, cargo en el que permaneció hasta 1784. Los informes sobre su trabajo hechos por el entonces Presidente de la Chancillería, Gregorio Portero, no eran muy positivos, ya que según él tenía “mucha desaplicación y no tiene instrucción alguna”, aunque le reconocía que era “de buenas costumbres y capacidad.”

Su relación familiar con Campomanes debió ser más influyente que los negativos informes hechos por su superior, pues en julio de 1784 Isla es nombrado Alcalde de Casa y Corte y en 1787, tras recibir un hábito de Montesa, Consejero del Consejo de Órdenes Militares. Su labor como alcalde fue más fructífera, y se le reconoce su trabajo por mantener la paz de la Corte. En 1787, ya viudo, acompaña a las infantas Carlota Joaquina y María Ana Victoria y al infante Gabriel en sus viajes a Portugal y Badajoz respectivamente, lo alegó como mérito para la obtención de plaza en el Consejo de Castilla, señalando que todos los Alcaldes que acompañaban a miembros de la Familia Real en sus viajes habían ascendido, incluyendo su colega Francisco Mesía. Así, en 1787 obtiene el nombramiento honorífico que se convertirá en numerario el primero de mayo de 1791.

Siendo Consejero es cuando el 9 de junio de 1794 se le designó Juez de Imprentas. Para entonces ya había entrado en la Real Academia de la Historia (1796). En 1802 Isla

³⁷⁹ Tuvo cinco hijos: Miguel, Manuel, Luis, María Satoria y María Gertudis Isla y Rodríguez de Campomanes.

heredó de su suegro Campomanes parte de su biblioteca de derecho y en 1806, como consejero más antiguo, desempeñó de manera interina el cargo de Gobernador del Consejo de Castilla, en virtud del cual entró como Consejero de la Cámara de Castilla. De manera honorífica y ausente, fue designado Director Perpetuo de la Real Sociedad Caritativo-Económica de la Villa de Alaejos, donde había nacido. Muere el 12 de mayo de 1807.

No conocemos ni la fecha ni los motivos del cese de Isla como Juez de Imprentas, pero a partir de 1803 figura como tal el Marqués de Fuerte Híjar, Germán Salcedo Somodevilla³⁸⁰, que ocupa el cargo sólo dos años, hasta el nombramiento de Juan Antonio Melón por parte de Carlos IV.

La carrera de Salcedo Somodevilla siguió el patrón de sus predecesores. Nacido en 1748 en Santo Domingo de la Calzada, estudió en las Universidades de Oñate y Valladolid. Este manteísta comenzó su carrera de magistrado como Oidor en la Audiencia de Mallorca en 1780 y ascendió en 1782 a Juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid. Prosigue su ascenso en 1787 como Oidor de la Chancillería, empleo que desempeña cuando el 12 de agosto de 1788 recibe el título de Marques de Fuerte Híjar. En 1789 es nombrado Fiscal de la Asamblea de la Orden de Carlos III y comienza la tramitación para su ingreso en la misma, obteniendo dicha distinción el 14 de septiembre. La coronación llegará en febrero de 1802 con su ingreso en el Consejo de Castilla, hasta su proceso y deportación por orden de Napoleón en 1808.

La vinculación de Fuerte Híjar con la sociedad civil se articula a través su activa participación en las Sociedades Económicas que proliferan a finales del siglo por la geografía peninsular. Así, durante su estancia en Valladolid, fue socio fundador de la Sociedad Económica de dicha ciudad en 1784, de la que llegó a ser Vice-director en 1785 y 1788 y director un año antes. Con su traslado a Madrid, se convirtió en Socio de la Matritense en la Clase de Artes y Oficios, de la que también fue elegido Vice-director en 1795 y 1799 y Director entre 1802 y 1804. Además, fue Vice-protector de la

³⁸⁰ Fichoz, nº 00000477.

Sociedad de Artes de Valladolid y Consiliario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde 1792.

Sobre su vida familiar, conocemos su matrimonio con María Lorenza de los Ríos Enríquez Hoyo en 1787. Lo más destacado no es la identidad de la esposa, sobre la que apenas ciertos datos, destacando su pertenencia a la Junta de Damas de la Matritense y de la cuantiosa dote que aportó al matrimonio³⁸¹, sino que actuó de padrino de la misma José Colón de Larreategui, quien, varios años después, ocuparía el Juzgado de Imprentas, siendo, además, su mujer testigo del enlace.

Nuestro siguiente protagonista ya ha sido parcialmente analizado. Se trata de Juan Antonio Melón³⁸², que fue nombrado Juez Privativo de Imprentas el 11 de abril de 1805, después de la reforma que Godoy introdujo en la institución, que quedaba definitivamente independizada del Consejo de Castilla, pasando a depender directamente de la Secretaría de Gracia y Justicia y siendo su cargo incompatible con cualquier otro puesto en la Administración al incluir una cláusula de exclusividad. Juan Antonio Melón era doctor por la Universidad de Salamanca y había recibido la Ordenación Sacerdotal antes de 1781, fecha en la que es nombrado por Felipe Bertrán³⁸³ Vicedirector del Seminario de San Carlos de Salamanca recién fundado por él con el objetivo de mejorar la deficiente formación del clero seglar, ocupando así el edificio que los ya expulsos jesuitas habían tenido en la ciudad.

Es destacable la relación de Melón con Felipe Bertrán, el influyente obispo de Salamanca desde 1763 e Inquisidor General desde 1775, quien contaba con el favor de Carlos III y que era conocido por sus posturas antijesuíticas y anticolegiales, siendo uno de los impulsores de la reforma de estas instituciones. Fruto de esa relación Melón

³⁸¹ Fichoz nº 00009586. Vecina de Cádiz, perteneció la Junta de Damas de la Matritense, de la que fue, en distintos periodos, Vice-censora, Censora y Vicepresidenta en 1797, 1803 y 1806, desempeñando en 1808 la función de Curadora de la Inclusa en representación de dicha Junta.

³⁸² Fichoz nº 00004423.

³⁸³ Fichoz nº 00016492. Aunque el inicio de su carrera eclesiástica se debió al patrocinio del Marqués de Dos Aguas, su ascenso de canónigo de la catedral de Valencia a obispo de Salamanca en 1763 fue posible gracias al apoyo recibido por personajes como el Duque de Béjar, Roda o Pérez Bayer (valenciano como él y con quien mantiene una larga relación, hospedándose en su casa y presentándole al Rey) inclinados por las posturas ligeramente jansenistas, antijesuíticas y anticolegiales del reputado eclesiástico.

actuó como testigo en el testamento hecho por el Inquisidor General en 1783, fecha en la que éste media ante el Rey para la concesión a Melón, familiar suyo³⁸⁴, de un beneficio eclesiástico que le será concedido en 1783 sin terna de la Cámara y sólo por la petición del obispo.

En 1787 Melón recibió una comisión real para llevar a cabo la publicación de clásicos latinos, en virtud de la cual realiza un viaje por Europa durante diez años, cuyo fruto será la publicación de las obras completas de Cicerón en catorce tomos por la Imprenta Real en 1797. La obra fue considerada por Menéndez Pelayo “una de las más bellas muestras de la tipografía española de fines del siglo XVIII”. En ese mismo año, y siguiendo el ejemplo de la obra pastoral de su mentor Bertrán, fue el responsable del *Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos*, periódico con una finalidad claramente ilustrada³⁸⁵.

En 1804, apoyado por Godoy, a cuya clientela pertenecía, fue nombrado Ministro de la Junta General de Comercio y Moneda, cargo en el que cesará al ser designado por el Príncipe de la Paz para ocupar el recién creado Juzgado de Imprentas. Para el desempeño de sus funciones, ante los frecuentes choques con el bando contrario a Godoy y los recelos del Rey a depositar en él toda la política de imprenta, Melón se apoyará en dos viejos amigos suyos, Leandro Fernández de Moratín y Pedro Estala³⁸⁶, que por ello adquieren el apodo de *Triunvirato*.

³⁸⁴ Debe entenderse este término dentro de los parámetros del Antiguo Régimen. Melón y Bertrán no mantenían vínculo sanguíneo, pero el influyente obispo de Salamanca le incluye entre los sacerdotes bajo su protección, por lo que se puede considerar a Melón como criatura de Bertrán.

³⁸⁵ DIEZ GONZALEZ, Fernando, *Prensa agraria en la España de la Ilustración: El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980. Melón abandonó la redacción del Semanario tras su nombramiento como Juez de Imprentas, pasando la responsabilidad a Francisco Zea, Claudio Boutelou y Simón de Rojas Clemente, profesores del Real Jardín Botánico de Madrid, del que dependía el periódico desde 1804. Sobre esta publicación se pueden consultar los estudios de Elisabel Larriba, especialmente LARRIBA, Elisabel, “Un intento de reforma agraria por y para las clases productoras: el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)”, *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, nº 23 (1999), págs. 87-118 y “Contribution du clergé à la rédaction du Semanario de Agricultura y Artes a los Párrocos”, *Cahiers du GRIAS*, nº extra 2 (1997), págs. 217-234.

³⁸⁶ Fichoz nº 00039017. Padre escolapio que fue Catedrático de Retórica Griega en el Seminario de San Carlos de Salamanca, la misma institución de la que Melón fue Vice-director y Bertrán fundador e impulsor. Además de censor, fue un prolífico autor, incluyendo importantes traducciones. Fue Bibliotecario y Profesor de Historia Literaria de los Reales Estudios de San Isidro de Madrid y terminó sus días siendo Canónigo de la Catedral de Toledo.

La llegada de Fernando VII al trono tras la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV tras el motín de Aranjuez, supuso la supresión de la institución creada por el Príncipe de la Paz y su reemplazo por el antiguo Juzgado de Imprentas dependiente del Consejo de Castilla, que vuelve a ser el órgano comisionado para la concesión de licencias de impresión. El sustituto de Melón fue, además, un antiguo enemigo de Godoy, José Joaquín Colón de Larreátegui, que es nombrado el 3 de abril de 1808³⁸⁷. Tras la invasión napoleónica, Juan Antonio Melón se convirtió en afrancesado, por lo que en 1813 se exilió a Francia y tras una breve estancia entre 1820 y 1827 de nuevo en España, tomó definitivamente el camino de los Pirineos para morir exiliado en el país vecino en 1843.

Tras la atípica incursión de Melón, Colón de Larreátegui³⁸⁸ recupera el *cursus honorum* típico de los jueces de imprenta ilustrados: laico y de formación jurídica, que se desempeña en distintos puestos de la magistratura antes de ser designado Juez de Imprentas. Cursó estudios de derecho en las universidades de Huesca y Valladolid. Colegial en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, de cuya universidad fue Rector (1768) y Catedrático sustituto (1772). En 1776 inicia su carrera judicial como Juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid, tras ocupar la primera plaza para la vacante en la terna de la Cámara. Durante el desempeño de este oficio menor de la Chancillería recibió la comisión de la Junta General de Comercio de la ciudad, a la que pertenecía, para realizar un informe sobre las ordenanzas de los cinco Gremios Mayores de Valladolid, informe que presenta en 1781.

Tras un intento fallido en 1780, gracias a los muy elogiosos informes sobre su trabajo en el tribunal³⁸⁹ y de nuevo tras ser el primero en la terna, es nombrado Oidor de la Chancillería de Valladolid en 1781. Un año después se traslada, también por iniciativa de la mayoría de la Cámara, como Corregidor de Vizcaya en febrero 1782, destino que

³⁸⁷ Existen dudas sobre la fecha de su nombramiento como Juez. Según figura en Fichoz es 10 de agosto de 1809 y según GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), es el 3 de abril de 1808, fecha más próxima a su rehabilitación como Consejero de Castilla, con la que se puede confundir o coincidir.

³⁸⁸ Fichoz nº 00000177.

³⁸⁹ Según el presidente de la Chancillería en informe secreto en 1778, "sirve con mucha exactitud y celo, siendo de arreglada vida y costumbres, y de una circunspección, literatura y circunstancias muy apreciables, que también dice de él en 1779 que era de buen talento, bastante aplicación y de literatura más de mediana".

mantiene durante cinco años, en los que será incluido en diversos puestos de las ternas para distintas vacantes que en esos años se producen en el Consejo de Órdenes (aunque no parece que tuviera por entonces ningún hábito) y en la sala de Alcaldes de Casa y Corte.

Durante su estancia en Vizcaya, José Joaquín fue propuesto como socio de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (1783), estableció contacto epistolar con Jovellanos y fue comisionado por la Diputación General del Señorío para acompañar al Marqués de Valdecarzaña en el saludo al nuevo monarca, Carlos IV, en 1789.

En marzo de dicho año, obtuvo el nombramiento como Alcalde de Casa y Corte sobre resulta, sin consulta a la Cámara de Castilla, como era el procedimiento habitual. A finales de 1789 se le nombra, esta vez sí siguiendo los trámites necesarios, Caballero de la Orden de Carlos III, preámbulo de su ascenso a Consejero de Castilla en 1791, que también se realizó sin mediación de la Cámara.

Si en el caso de Melón el clientelismo con Bertrán y Godoy había sido determinante en su ascenso, Colón tendrá sus principales apoyos en su propia familia. El padre de José Joaquín era Pedro Isidro Colón de Larreátegui³⁹⁰, Caballero de Alcántara y Consejero Camarista de Castilla, que había fallecido en 1770 después de una larga carrera en la magistratura característica de un colegial: Colegial de Oviedo en Salamanca, Fiscal de la Chancillería de Granada, Regente de la Audiencia de Cataluña, Fiscal en el Consejo de Castilla, donde será Consejero, Presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y, finalmente Camarista. Pedro, que también fue socio de la Vascongada, había sido un conocido projesuita, por influencia de su esposa, María Antonia Jiménez de Embrun. José Joaquín es, de hecho, la cuarta generación de Consejeros de Castilla, pues su abuelo paterno, Francisco Antonio Colón de Larreátegui³⁹¹ y su bisabuelo Martín Larreátegui Iturbe³⁹², también lo habían sido previamente, en un claro caso de sucesión de carreras en la magistratura en el seno de una familia noble de provincias

³⁹⁰ Fichoz nº 00010458.

³⁹¹ Fichoz nº 00014668. Había sido Colegial de Santa Cruz, Oidor en la Chancillería de Valladolid, Alcalde de Casa y Corte y Consejero de Indias y Castilla.

³⁹² Fichoz nº 00050620.

norteñas³⁹³. Del matrimonio de José Joaquín Colón con Josefa Sierra en 1780 nacieron tres hijos que siguieron la dinámica propia de enlaces de los magistrados de su categoría, casando con la nobleza titulada castellana de segunda fila: a su hija mayor, María Bernarda Colón, con el X Conde de Robres y, en segundas nupcias, con el Agregado de la embajada de Rusia en Francia; la segunda, María Josefa, con Antonio María Arce Ovando, VI Marqués de Camarena la Vieja, V Marqués del Reino y V Conde de las Encinas; y su único hijo varón, Diego, con la primogénita del Conde de Torre-Arias, pariente suya³⁹⁴.

Sin embargo, la oposición que Colón había manifestado hacia el favorito llevó a su destitución como Consejero en junio de 1794, dentro de las purgas a las que Manuel Godoy sometió a la institución y que también afectaron, por ejemplo, a Manuel de Lardizábal. Desde su retiro en Bilbao, participó en la *zamacolada*, un conflicto local entre la nobleza rural y el campesinado que le valió un nuevo destierro a Burgos en 1804.

Con la llegada de Fernando VII a la Corona se produce su rehabilitación y retorno a la Corte, siendo restituido en su puesto de Consejero de Castilla en marzo de 1808. Como tal formó parte de la Junta de Gobierno, de la Comisión de Censura de la Gaceta de Madrid, fue Presidente de la Junta de Suministros para el Ejército francés y en junio Vocal de la Diputación de Bayona, junto con el también restituido Lardizábal. En esta ciudad francesa fue uno de los firmantes de la Constitución el 7 de julio de 1808, aunque un mes después, de nuevo en España, revocó su juramento, negándose a jurar a José I como rey. Esta rectificación le valió su nombramiento como Vocal para la Junta Central en representación de Madrid, que rechazó. Nombrado Consejero Decano del Consejo Supremo de España e Indias (1809), se opuso a la convocatoria de Cortes erigiéndose cabeza del partido absolutista, y del Consejo de Regencia. La publicación

³⁹³ Los Larreátegui procedían de Eibar, donde el tatarabuelo paterno había sido, en el siglo XVI, Alcalde.

³⁹⁴ Carlos III concedió a Pedro Colón de Larreátegui el título de Conde de Torres-Arias en 1761, quien lo trasladó a su hija, por lo que la primera titular de este condado fue la hermana mayor de José Joaquín Colón de Larreátegui, María Francisca, de quien pasó a su hijo Cayetano Pedro Golfín de Carvajal y Colón de Larreátegui en 1771, primo y suegro de Diego Colón Sierra. El hijo de María Francisca, Mariano Colón de Larreátegui, después de un largo pleito se le reconoció el Ducado de Veragua, que había pasado a la Casa de Berwick y que entroncaba a su familia con el descubridor de América.

de su *España vindicada*, en la que defendía el absolutismo y el régimen señorial, le valió la condena por las Cortes y su exilio en Lisboa hasta que Fernando VII, en pago por sus servicios, le llama a Madrid en 1814 para ser reconocido como Consejero y Camarista de Castilla, dignidades que ya mantendrá hasta su muerte en 1820.

Consideraciones generales

Hecho este rápido repaso por las biografías profesionales y personales de los diferentes Jueces de Imprenta del siglo XVIII podemos afirmar que existen una serie de rasgos comunes para todos, o casi todos, ellos, lo cual nos indica que, por una parte, existe la búsqueda de un perfil claro del Juez de Imprentas en lo que a formación y trayectoria se refiere, acorde con su carácter de comisionado por el Rey, que dejaba en sus manos una de las regalías más importantes por su proyección pública.

La única excepción relevante que hemos encontrado es la que presenta Juan Antonio Melón, que no se ajusta a ninguno de los parámetros comunes. Su ejercicio en el Juzgado no se diferencia demasiado del de sus antecesores y sucesores en cuanto al control de libros en la práctica común, pero sí en la carrera desarrollada y en las cualidades personales que reúne. El motivo principal de esta diferencia reside en el carácter que Godoy quiso imprimir a la institución dentro de su proyecto de reforma administrativa, separándola por primera y única vez del Consejo Real de Castilla, que había recibido el encargo de la censura libraria desde el origen mismo del control sobre la imprenta. Melón será, por tanto, la excepción para la mayor parte de los rasgos comunes analizados.

El primer elemento que merece la pena destacar es que la mayoría de ellos forman parte, de alguna forma, de la nobleza. Unos por herencia familiar, otros por concesión real, los jueces de imprenta de la Ilustración vestirán alguno de los hábitos de las antiguas órdenes militares vinculadas a la Corona de Castilla, con un claro predominio de Calatrava, de la que forman parte cinco de ellos; Encina fue caballero de la de Santiago, mientras que ninguno lo es de Alcántara, y sólo el conde de Isla, recibió el hábito de Montesa, vinculado a la antigua Corona de Aragón. Personajes destacados como Velasco o Colón de Larreátegui, por su parte, fueron distinguidos con la Orden

de Carlos III, creada para reconocer los servicios a la Monarquía sin condicionamientos de las antiguas órdenes militares. En ocasiones, incluso, ostentarán además un título de Castilla, bien sea por herencia, por matrimonio o por nueva creación, como son los casos de Salcedo Somodevilla, y Curiel y Velasco, que lo cedieron a sus primogénitos.

Otro elemento común es su estrecha relación con los Colegios Mayores. Casi todos los Jueces forman parte de alguno de ellos a lo largo de su etapa de formación universitaria. Cuatro son colegiales en Salamanca, tres en Alcalá de Henares y otros tres en Valladolid, siendo además varios de ellos elegidos como rectores y/o catedráticos de los mismos. Sólo uno, Salcedo Somodevilla, figura explícitamente como manteísta, sin que sepamos a ciencia cierta si los restantes formaron parte de estas antiguas instituciones universitarias. En cualquier caso, es una muestra de que la extracción de los Jueces de Imprenta era, sino elitista, al menos si exigente.

Vinculado a los Colegios Mayores encontramos la relación existente entre los Jueces de Imprenta y la Compañía de Jesús, no porque ninguno de ellos perteneciera a la misma, sino por la posición que adoptan ante la reforma de los Colegios y respecto a la presencia de los jesuitas en los reinos del monarca católico. Entre los jueces figuran activos partidarios de los ignacianos, entre los que destacan de manera especial Curiel y Velasco, opuestos también a la reforma de los Colegios Mayores. Frente a ellos se situaría Nava, quien ejerció en el puesto entre ambos y que era conocido por sus posturas antijesuiticas y anticolegiales. Cabe destacar que sólo conocemos la opinión de quienes ejercieron durante el periodo de máximo debate sobre el tema, y si bien hemos visto que el apoyo a los jesuitas suponía un inconveniente para el ascenso en una administración anti-jesuitica, de lo que Velasco es el ejemplo más explícito, también es cierto que la cercanía o enfrentamiento a la Compañía no fue tan determinante para el encargo del Juzgado, pues a Curiel (pro-jesuita) le sigue un anti-jesuita (Nava), que a su vez es sustituido por otro jurista, Velasco, cercano los jesuitas y amigo del primero.

Lo que sin duda se constituyó en la práctica como condición *sine qua non* para el ejercicio del Juzgado de Imprenta fue la formación en derecho. Este requisito se

fundamenta en el carácter judicial que, como García Martín subrayó, iba anexo a tal Juzgado. Pero, profundizando más, al analizar las distintas carreras administrativas de todos ellos, encontramos que no sólo son juristas. Formados en derecho en alguna de las principales universidades peninsulares (casi todos pasan por Salamanca, Valladolid o Alcalá, como ya hemos señalado), desempeñan distintas magistraturas antes de recibir esta comisión: oidores, fiscales, jueces, alcaldes de Casa y Corte, etc. y todos ellos desembarcan en el Juzgado tras una dilatada experiencia en otras instancias civiles y/o criminales a lo largo de la geografía española, siendo las dos Chancillerías y las Audiencias las instituciones más repetidas. Cabe destacar el paso de muchos de ellos por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues la mitad de los Jueces del XVIII ejerció como tal, y siempre antes de recalar en el Consejo de Castilla y en el Juzgado de Imprenta, lo que nos dibuja una carrera administrativa tipo en la que nuestros protagonistas comienzan ejerciendo de magistrados en instituciones periféricas, ascendiendo de manera ordinaria hasta conseguir su traslado a la Corte, a través de la Sala de Alcaldes, paso previo y obligado a su designación como Consejeros de Castilla. Muchos lo fueron también de otros Consejos, como Indias, Hacienda o Inquisición, además de formar parte de las distintas juntas que se van creando, sobre todo vinculadas a moneda y comercio.

Pero si hay un rasgo común a todos los Jueces del Setecientos, excepción hecha de Melón, es sin lugar a dudas su pertenencia al Consejo de Castilla. Los trece jueces identificados son Consejeros del Supremo de Castilla antes de recibir la comisión de imprentas. Esta pertenencia nos puede parecer obligada si tenemos en cuenta la vinculación casi permanente del Consejo con el Juzgado, con la excepción ya señalada de la etapa de Godoy, pero que para su dirección el Monarca designara a uno de sus miembros es ya de por sí un hecho significativo. No podemos olvidar que la delegación real del control sobre la imprenta recayó en el Consejo de Castilla y que no era éste sino el propio Rey quien nombraba y destituía al Juez, aunque la práctica demuestre que siempre entre los que ya tenían silla en el Supremo.

Seis de los titulares del Juzgado serán, además miembros de la Cámara de Castilla, desde donde sus opiniones podían ayudar a favorecer a clientelas y familiares,

aumentando sus influencias. Queda pendiente un estudio pormenorizado de cómo aquellos jueces que fueron Camaristas pudieron emplear, o no, los votos particulares a las ternas de la Cámara como método de captación de clientelas, pero sin duda su pertenencia a este órgano implicaba una proyección social mucho mayor de la que cabría esperar para un puesto medio dentro del organigrama administrativo como era el Juzgado de Imprentas.

Si atendemos a la consideración que, hasta ahora, se ha tenido del Juzgado de Imprenta podríamos caer en el error de creer que los Jueces tuvieron una fluida relación con la intelectualidad del momento. En realidad, nuestro conocimiento sobre el tema es escaso, habida cuenta de los pocos epistolarios que se conservan y las lagunas que todavía tenemos sobre muchos de ellos. Las excepciones en este sentido serían Fernando José de Velasco, que como ya hemos señalado, fue reconocido en su tiempo por su formación y por su excepcional biblioteca, que mantuvo una prolífica relación con Mayans, al igual que Bustamante, y Curiel, quien por el contrario mantuvo un agrio enfrentamiento durante su mandato con un sector importante en el mundo cultural, el de los impresores. Sí queda constatada, no obstante, la pertenencia de muchos de ellos a las instituciones ilustradas que proliferan a lo largo del siglo: las academias y sociedades económicas, de las que muchos son fundadores. Estas herramientas impulsadas desde la Corte para difundir los principios ilustrados contaron con una activa presencia de nuestros jueces, que fueron académicos entregados, que ejercieron de socios de forma activa y que, incluso, desempeñaron en ellas tareas de dirección. De nuevo en este caso emerge la figura de Juan Curiel, uno de los primeros académicos de la Real Academia Española, en cuyas sesiones participó hasta su muerte siempre que sus obligaciones se lo permitían, ejerciendo como decano y ofreciendo su casa para tuvieran lugar las reuniones siempre que fue necesario. Rivero Valdés, por su parte, fue Académico de la Historia y Socio de la Matritense, ocupando en ambas responsabilidades de gestión³⁹⁵ y el conde de Isla compartió espacio en la de Historia y de manera honoraria en una Sociedad Económica³⁹⁶. También el futuro marqués de Fuerte Híjar, que fue socio de la

³⁹⁵ Censor de la Real Academia de la Historia y Vicedirector de la Matritense.

³⁹⁶ Se trata de la formada en su pueblo natal, Alaejos.

Matritense, la Sociedad de Valladolid y protector de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Menos prolongada, pero más intensa fue la relación de Colón de Larreátegui, se integró en la pionera Sociedad Bascongada de Amigos del País durante su estancia en Vizcaya.

Finalmente, debemos huir de los estereotipos que dibujen a los jueces de imprenta dieciochescos como ilustrados reformadores impulsores de avances en la política de imprenta de la monarquía que desembocarían, a la postre, en la libertad de imprenta decretada en Cádiz. Hemos visto como por su extracción social y comportamiento, se manifiestan, en general, como personajes más arraigados en la tradición que propensos a las novedades. Sus estrategias matrimoniales, reflejadas en las bodas de sus hijos, que buscan el matrimonio con títulos de Castilla, o de ellos mismo con vistas a heredar mayorazgos; sus vinculaciones a los Colegios Mayores, instituciones que ya muchos consideraban en su tiempo como una herencia elitista a reformar, o de manera más evidente las recompensas en forma de títulos nobiliarios, hábitos de Calatrava, Santiago o Montesa o la incorporación a la recién creada Orden de Carlos III como caballeros, apuntan más bien a una actitud conservadora, que en uno de ellos incluso se manifiesta con una opinión contraria a las regalías. La última evidencia de ello, y la de mayor calado, sería el apego a los mayorazgos que muestran dos de los Jueces: Curiel y Velasco, que no sólo mantienen los heredados, sino que buscan ampliarlos, utilizando uno de los mecanismos más tradicionales para la transmisión patrimonial a su descendencia, del mismo modo, por otra parte que otros ilustrados como Campomanes o Cabarrús. Así, lejos de ser entusiastas reformistas, la mayoría, independientemente de su opinión sobre la reforma universitaria o la presencia de los jesuitas, se sitúan en posiciones conservadoras.

3.2. Las redes de autores y censores de principios de siglo (1720-1749)

El primer paso para poder recrear las redes formadas a partir de la censura es determinar el periodo concreto de análisis. Como explicábamos en la introducción,

para abordar la gran cantidad de información sobre las publicaciones del siglo, procedimos a seleccionar una cata que fuera lo suficientemente representativa como para considerar los resultados del análisis como significativos. Para la primera mitad del siglo se escogió la fecha de 1738, que más allá del nombramiento de un nuevo Juez de Imprenta, era un año en el que no se produce ningún acontecimiento de gran relevancia como la muerte de un Rey o el nacimiento de un heredero, hechos que siempre tenían un reflejo en la producción impresa. Se seleccionaron todos los autores que hubieran publicado una obra en dicho año y se vaciaron todas sus obras. Hecho esto se apartaron todas las obras que, aún publicadas en esa fecha, no conservan las licencias y aprobaciones previas que legalmente se exigían ni en los ejemplares físicos ni en la documentación de archivo, ya que no aportaban datos cuantificables para nuestro estudio. Este vaciado sistemático ha sido completado con la aportación de las investigaciones realizadas sobre otros aspectos de la producción impresa durante la Ilustración, de manera que el volumen de la muestra alcanza un porcentaje muy elevado del total de la producción estimada. Para no desvirtuar los resultados, se ha trabajado considerando la duración de una generación, por lo que se han incluido todas las obras, fueran textos nuevos y traducciones nuevas, de aquellos autores que publicaron entre 1720 y 1749. La elección no es casual, pues se ha observado que ése es el periodo más fértil de la generación que imprime en 1738. Obviamente, los autores incluidos pueden publicar antes y después, pero la acotación permite analizar de forma concreta una población estable y ver las relaciones que se establecen entre ellos. Como en toda reducción, parte de la información se pierde para el análisis, pero sin un límite temporal no sería posible dibujar la red, pues como señalamos al hablar de las redes sociales, se trata de la foto fija hecha a un colectivo en continuo movimiento.

Otra precisión necesaria antes de abordar la información es de carácter tipológico. Por un lado, frente a las distintas formas de publicación, nos hemos limitado a los impresos publicados de manera independiente. Esto excluye no sólo las publicaciones periódicas, sino también los artículos, folletos, capítulos de libros y fragmentos de obras, además de los manuscritos, que si bien han de tenerse en cuenta para analizar la población de autores en conjunto y la producción escrita española del siglo XVIII no

son determinantes para la censura, ya que la forma en la que ésta se realiza difiere de la empleada en los impresos sueltos y la presencia e intervención de los censores es menos evidente. Finalmente, como ocurre en la actualidad, en la Ilustración hay obras que, por la demanda existente, se reimprimen tantas veces como se requiere. Sin duda, que una obra se reedite más o menos nos señala el éxito que tuvo en el momento, pero para un estudio como el presente puede resultar un elemento distorsionador, pues aunque aumenta el número páginas que salen de las prensas, éstas, cómo se ha visto, no necesitaban de aprobaciones siempre que no hubiera modificaciones sobre el texto aprobado anteriormente, con lo que aunque incrementara el número de obras, no guardaría relación con las aprobaciones emitidas.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han registrado un total de mil setecientas once relaciones, entendiendo como tales la existencia de una censura sobre la obra de un autor. Así, hemos recogido mil cuatrocientos sesenta y nueve actores, que se han dividido en función de la actividad que desempeñan en la materialización de los libros. De ellos, cuatrocientos nueve sólo son autores de los impresos, noventa y seis que actúan como autores y censores y los novecientos sesenta y ocho restantes son exclusivamente censores.

Más allá de los número globales, y siguiendo el análisis cuantitativo, es necesario acercarse a la identidad de cada uno de ellos. Hemos establecido una primera división en función al número de censuras que reciben en las obras que publica cada uno. Se han incluido dentro del grupo de autores importantes a todos los que tienen, al menos, quince censuras entre 1720 y 1749. Aunque no se puede establecer una relación directa por volumen, pues en una obra puede aparecer más de una censura, sí resulta significativo para nuestro estudio quién es el que registra más relaciones efectivas, lo que no quiere decir que sean los autores más prolíficos en cuanto a su producción, ya que sus censuras pueden no haberse conservado.

AUTORES	Nº CENSURAS
Torres Villarroel, Diego	75
Suárez Rivera, Francisco	31
Alcalá, Marcos [Fray]	29
Ecija, Pablo [Fray]	27
Mayans Siscar, Gregorio	25
Mañer, Salvador José	25
Ribera, Manuel Mariano [Fray]	24
Sevilla, Isidoro [Fray]	21
Argenti, Jerónimo	20
Solís, Antonio	18
Arias, Gómez	18
Martínez, Martín	17
Feijoo Montenegro, Benito Jerónimo [Fray]	17
Echeverz, Francisco Miguel [Fray]	17
León Ortega, Francisco	16
Torrubia, José [Fray]	15
Horta Aguilera, Francisco	15

Tabla 1. Número de censuras por autor

El autor más destacado es, con diferencia el profesor de la Universidad de Salamanca, Diego Torres Villarroel³⁹⁷, un célebre autor de pronósticos que es, también, responsable de varias censuras a colegas suyos. El siguiente, Francisco Suárez Rivera³⁹⁸ es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, y donde ejerció como catedrático antes de trasladarse a la capital, donde practicó la medicina en calidad de médico del Seminario de Nobles y del Noviciado Jesuita de la Corte. Es autor de un elevado número de tratados sobre cirugía, anatomía y medicina en general, y será reconocido como Médico de Cámara supernumerario en 1733. Suárez Rivera es autor de una censura durante este periodo.

³⁹⁷ Fichoz nº 00037152.

³⁹⁸ Fichoz nº 00031511.

El tercer puesto corresponde a Fray Marcos de Alcalá³⁹⁹, el primer religioso de la lista. Franciscano descalzo, lector de teología, predicador del Rey y cronista general de su orden, fue además Calificador y Visitador de Librerías del Consejo de Inquisición. Todas sus obras son de carácter religioso, especialmente oraciones y hagiografías, además de las crónicas de su *religión*. A pesar del elevado número de censuras recibidas, veintinueve, sólo es responsable de nueve impresos. La causa de que esté sobredimensionado es la existencia de aprobaciones por parte de religiosos presentados por el autor junto con el original, práctica que ya habíamos visto era común durante este periodo, y cabe recordar en este sentido que no podemos determinar cuáles responden a la iniciativa del autor y cuáles al mandato del Consejo. Lo mismo ocurre con el fraile, en este caso capuchino, Fray Pablo de Écija⁴⁰⁰, que le sigue con veintisiete censuras recibidas, a pesar de contar con tan sólo siete obras impresas. Por otra parte, la presencia de religiosos en el mundo editorial es fundamental para entender el panorama cultural de principios de la centuria. La inclusión de hasta dieciocho miembros del clero regular en la lista sobre un total de treinta y siete es ya de por sí un hecho significativo, que nos lleva a valorar el peso de las órdenes religiosas en el mercado editorial, más si tenemos en cuenta que ambos son, también, autores y censores.

Con veinticinco censuras cada uno encontramos a dos conocidos personajes, Gregorio Mayans y Siscar⁴⁰¹ y Salvador José Mañer⁴⁰². Ambos, como quienes les preceden, son autores y censores, los que ya nos apunta un hecho que veremos al dibujar las redes: el papel central que juegan los autores como censores de obras de sus contemporáneos. Poco se puede añadir sobre la importancia de Mayans en las relaciones entre los intelectuales del siglo XVIII, que ha quedado acreditada no sólo por su producción impresa, sino por la abundante correspondencia que de él se ha conservado⁴⁰³. También está bastante estudiada la figura de Mañer, fundador del *Mercurio histórico y político* (excluido de la lista al ser una publicación periódica), que

³⁹⁹ Fichoz nº 00037638.

⁴⁰⁰ Fichoz nº 00057168.

⁴⁰¹ Fichoz nº 00031774.

⁴⁰² Fichoz nº 00011882.

⁴⁰³ MESTRE, *op. cit.* (nota 356).

es responsable de hasta veinticinco obras, muchas de ellas traducciones del francés, que abarcan un abanico temático muy amplio que va desde la ortografía hasta la religión, siendo destacable la disputa literaria que mantiene con Feijoo a partir de la publicación del *Antiteatro Crítico*⁴⁰⁴ en 1731 en respuesta a la obra del benedictino y que despertará cierto revuelo en los círculos de escritores.

Si decíamos que la censura implica una doble vertiente, es necesario analizar, también quiénes son los principales censores del periodo y si de la comparación de ambas listas se puede extraer alguna conclusión. Para ello procedemos a dibujar las relaciones binomiales de la censura en un gráfico donde cada vértice es un actor y cada línea que los une una relación entre los dos actores. Dibujar en un sólo gráfico todas las relaciones entre grupos de escritores y censores a partir de las aprobaciones emitidas en un periodo tan largo, de 1720 hasta 1749, no puede dar otro resultado que una maraña de líneas y puntos en la que resulta imposible no sólo identificar a los sujetos, sino sacar ninguna conclusión en claro. De esto somos conscientes. Era, sin embargo, necesario mostrar este panorama general para comprender la complejidad de este estudio.

Para poder comprender el dibujo es necesario explicar los pasos que se han dado al realizarlo. En primer lugar la diferenciación cromática no es casual. Se ha pedido al programa que dibujara en color verde a aquellos actores cuya única actividad registrada es la publicación de, al menos, una obra impresa. En color azul figuran, por su parte, los censores que, o bien no fueron responsables de ningún impreso, o bien el rastro documental de éste no ha llegado hasta nosotros. Finalmente en rojo se añaden aquellos sujetos que a lo largo del periodo actúan en distintos momentos como autores y censores.

La segunda indicación antes de analizar el dibujo es explicar la disposición de los grupos. Para la investigación resulta interesante analizar cuántos autores y censores están, indirecta o directamente, relacionados con otros, formando distintas *islas* en las que todos los sus miembros están unidos, al menos, por una relación con otro. Esto es

⁴⁰⁴ Fichoz nº 0012042L.

lo que aparece en el gráfico dibujado. Dibujadas todas las relaciones acreditadas documentalmente entre autores y censores, se han separado en grupos diferenciados a todos los autores que están relacionados entre sí, aunque sea indirectamente, para diferenciar, de ser posible, los distintos subgrupos existentes dentro de la red general.

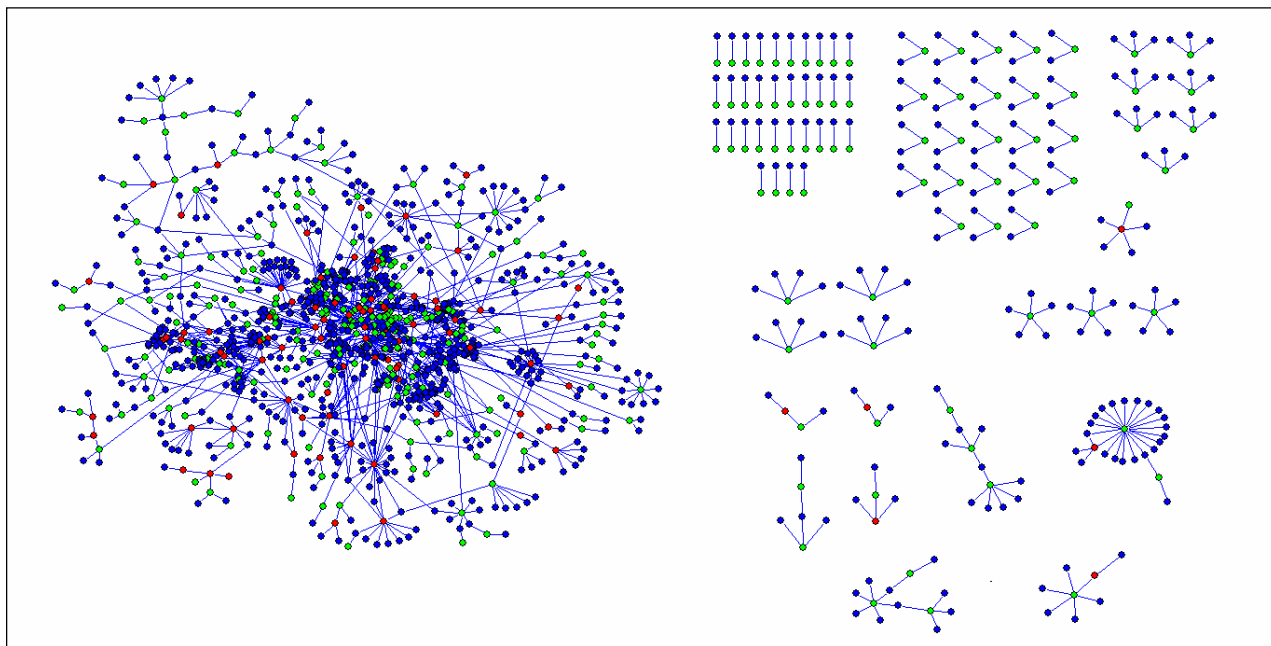


Gráfico 1. Relaciones del periodo divididas en islas

Así, se han identificado ochenta y cinco grupos diferenciados compuestos por miembros que no tienen relaciones con nadie que no esté en su grupo. El número es, sin duda, elevado, pero si nos fijamos en el número de actores de cada grupo la impresión varía. Del total de actores, mil ochenta y uno están agrupados en una misma *isla*, mientras que los trescientos ochenta y ocho se encuentran en grupos aislados de tamaño medio o menor.

La primera valoración que se puede hacer a la vista del gráfico es de carácter general. Muchos autores publican una o pocas obras. Muchos censores, a lo largo de su actividad profesional, son responsables sólo de una o dos censuras. Y en más ocasiones de las que nos pueden parecer, esa única obra y esa única censura es la única relación existente entre los dos individuos y, por tanto, su única aparición en el mercado

editorial. De ahí que la mayor parte de los vértices dibujado sólo tengan una o dos relaciones.

Huelga decir, que para este estudio la red más interesante por los resultados que puede proporcionar es la subred principal, pero eso se abordará más adelante. Antes debemos hacer un repaso general por el perfil de los censores.

Un primer paso es determinar el carácter de los censores, esto es si pertenecen al clero o no. En total hemos contabilizado seiscientos siete censores que, antes o después, emitieron algún voto religioso. El porcentaje es bastante elevado, ya que un 57 % de los censores son miembros del estamento eclesiástico. La magnitud del dato nos vuelve a señalar el peso que la Iglesia tiene en el aparato censor gubernativo. Como ha apunta la historiografía existente sobre la materia, la Monarquía recurre a los clérigos porque son consideradas las personas más preparadas para llevar a cabo este trabajo con la mayor diligencia. La mayor parte de estos censores son, además, profesores universitarios o desempeñan algún cargo de relevancia dentro del clero, como cronistas de órdenes religiosas, vicarios episcopales, priores de conventos o, incluso, obispos y generales de sus órdenes religiosas, lo que les acreditaba para realizar la función censora. Es la búsqueda de la efectividad por parte del poder civil lo que concede a los miembros de la Iglesia la capacidad de controlar qué es lo que se publica.

Además, dentro del grupo eclesiástico habría que diferenciar al clero regular del secular, ya que aunque dentro del mismo estamento, su consideración y características son distintas. La búsqueda más fácil es la del clero regular. En total se han contabilizado cuatrocientos noventa y tres censores que pertenecen a alguna de las órdenes religiosas con presencia en España a principios del siglo XVIII. El desglose se puede observar en el siguiente cuadro. La suma corresponde al total de religiosos de cada orden, pero cuando ha sido posible se ha diferenciado los que dentro de esa religión pertenecían a algunas de las ramificaciones existentes.

ORDEN RELIGIOSA	RAMA	SUMA
Agustinos		42
	Agustinos calzados	3
	Agustinos recoletos	3
Antonianos		2
Basilios		11
Benedictinos		12
Bernardos		4
Camilos ⁴⁰⁵		2
Capuchinos		20
Carmelitas		33
	Carmelitas calzados	1
	Carmelitas descalzos	7
	Carmelitas observantes	3
Cistercienses		5
Clérigos regulares ⁴⁰⁶		5
	Clérigos regulares menores	3
Dominicos		53
Escolapios		4
Filipenses ⁴⁰⁷		5
Franciscanos		56
	Franciscanos descalzos	9
	Franciscanos observantes	3
	Franciscanos terciarios	1
Hospitalarios de San Juan de Dios		2
Jerónimos		9
Jesuitas		103

⁴⁰⁵ También son conocidos como Ministros de los Enfermos o de los Agonizantes.

⁴⁰⁶ No se especifica a cuál de las congregaciones de clérigos regulares pertenecen, pero al aportar más información que su simple pertenencia a una orden religiosa se ha creado una categoría diferente a la de Desconocida.

⁴⁰⁷ Como se conoce a los sacerdotes que se integran en la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri.

Mercedarios		39
	Mercedarios calzados	4
	Mercedarios descalzos	2
Mínimos ⁴⁰⁸		12
Oratorio del Salvador		1
Premonstratenses		6
Teatinos ⁴⁰⁹		4
Trinitarios		27
	Trinitarios calzados	7
	Trinitarios descalzos	2
Desconocida		36
Total		493⁴¹⁰

Tabla 2. Extracción de los censores por orden religiosa

Aunque como señalábamos parte de las obras son censuras hechas a religiosos de su misma orden religiosa para cumplir con la legislación y el mandato tridentino, que el número de censores religiosos sea sensiblemente superior al de autores sólo se explicaría considerando que la mayoría o una parte significativa de ellos lo hicieron por encargo del Consejo, aunque no se pueda afirmar sin el apoyo documental correspondiente.

Cabe destacar la necesidad de crear la categoría *Desconocida*. En ella se han incluido todos aquellos que, perteneciendo a una orden religiosa no se ha podido determinar ni por las obras, ni por las censuras, ni por la búsqueda en otras fuentes a cuál de ellas debía incluirse. El motivo de este desconocimiento radica en la forma de extraer la información. En la mayoría de los casos, se han podido definir porque en la censura que firman se especifica su orden o porque en la base de datos figuraban otras entradas sobre su persona. Cuando no ocurre así, se les ha considerado frailes por el

⁴⁰⁸ Como también se denominan a los Ermitaños de San Francisco de Paula.

⁴⁰⁹ Nombre que se emplea para designar a los Clérigos Regulares de San Cayetano.

⁴¹⁰ Un trinitario calzado, Fray Juan de la Concepción, Fichoz nº 00036319, ingresó primero en la orden carmelita descalza pero cambió el hábito por el de los trinitarios calzados por rivalidades y enfrentamientos dentro de su orden. Se ha contabilizado como miembro de las dos órdenes pero para la suma final computa como un único individuo.

título que antecede a su nombre (*Fray*) y se les ha asignado un número a la espera de que la continuación de la investigación sirva para ampliar la información, aunque se antoje difícil si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos son personas con escasa proyección pública documentada y que suelen ser responsables de una única intervención en la aprobación de impresiones.

A pesar de que los análisis cuantitativos no siempre reflejan la realidad tal y como era, no podemos evitar referirnos a las órdenes con más peso dentro de la censura previa. En la primera mitad del siglo XVIII existe un claro predominio de la Compañía de Jesús. En primer lugar, son seguidores de San Ignacio de Loyola quienes prácticamente monopolizan el cargo de Confesor Real hasta la muerte de Fernando VI, destacando por encima de todos la figura del padre Rávago⁴¹¹. A pesar de que durante el Setecientos no son la orden religiosa con mayor número de miembros en nuestro país, el número de censores es significativamente el más alto, casi duplicando a la siguiente orden. La influencia de la Compañía no es algo nuevo para la historiografía sobre el tema. Su papel como responsables de las principales instituciones educativas de la Corte, como el Colegio Imperial, su presencia en las cátedras universitarias y su cercanía a los círculos cortesanos apoyados por pro-jesuitas confesos como Ensenada eran sobradamente conocidas, pero no había sido contemplado hasta ahora el papel que habían jugado en la censura libraria, recibiendo el encargo reiterado por parte de los Jueces de Imprenta para supervisar las impresiones que se autorizaban.

Un segundo bloque es el que ocupan franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, carmelitas y trinitarios, que son los siguientes en importancia tanto en números totales como por su importancia dentro del sistema. Sus cifras también superan el de autores de sus propias órdenes, si bien el orden cuantitativo difiere de la concepción generalizada que sitúa a los miembros del Orden de Predicadores como los responsables de la censura, siendo superados, por ejemplo, por los franciscanos, sin duda la orden más numerosa en los reinos hispánicos durante el XVIII. En el extremo

⁴¹¹ Para analizar la influencia del Confesor Real en política borbónica sigue siendo fundamental la obra de ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, *Jesuitas y reformismo. El padre Francisco de Rávago*, Valencia, Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, 1995.

opuesto están los sacerdotes del Oratorio del Salvador, antonianos, camilos, escolapios y teatinos, con una presencia casi anecdótica, inferior a cinco censuras para todo el periodo y que en la mayoría de los casos se deben a asuntos relacionados con su orden, por lo que sí era preciso su aprobación.

Al clero regular debemos añadir a todos aquellos que, sin pertenecer a ninguna orden, realizaron los votos mayores. Este rastreo es más difícil, pues además de no figurar siempre con un título antecediendo a su nombre (si aparece suele ser el de *Padre*), muchos de los miembros del clero regular eran, al mismo tiempo, sacerdotes. Se han considerado, para contabilizarlos, todos los que recibieron la ordenación sacerdotal y que no pertenecieran a ninguna orden religiosa, o no se tenga constancia de ello. Entre ellos se encuentran simples sacerdotes, canónigos de distintos cabildos catedralicios, vicarios episcopales y obispos. Como ocurría en el caso de los frailes de los que no se identifica la orden, muchos de los sacerdotes sólo son identificados por un *padre* y su no pertenencia a órdenes que no utilizara el tratamiento *fray*, como los jesuitas, filipenses o teatinos. En total se han contabilizado ciento dieciséis ordenados sacerdotales, entre los que se incluyen obispos, canónigos y demás dignidades eclesiásticas, además de los simples sacerdotes.

Un punto importante al hablar de la Iglesia y la producción escrita es comprobar si, más allá del requisito legal, las obras que examinan los clérigos son sólo de temática religiosa o también participan en otros ámbitos. Del mismo modo que, como hemos visto, no sólo censuran a autores religiosos, tampoco su intervención se limita a obras religiosas. Es cierto que censuran sermones, novenarios o hagiografías, pero también tratados de medicina, de ortografía, de astronomía.

Al realizar un rápido repaso por las carreras profesionales de los censores observamos que la gran mayoría de ellos, dentro de los que tenemos algún dato biográfico adicional, además de colaborar en el control de la prensa ocupan cargos relevantes en la sociedad. Para ello hemos considerado los ascensos a lo largo de su vida profesional, no sólo en el periodo acotado, ya que lo que nos interesaba resaltar no era tanto la

posición que tenían en el momento de hacer la censura como la proyección de sus carreras.

Del total de censores, hemos registrados cuatro obispos auxiliares, diecinueve obispos electos, ochenta obispos titulares que tomaron posesión y siete arzobispos, de los cuales sólo uno, Fray Gaspar Molina Oviedo⁴¹² alcanzó la dignidad de Cardenal. Sin duda es una cifra bastante elevada, pero la coyuntura de cada uno es muy diferente. Existen casos en los que la realización de una censura fue anterior cronológicamente al ascenso a la mitra. Este hecho pudo incluirse en la relación de méritos que se elevaba a la Cámara de Castilla, lo que evidenciaría que la dedicación, aunque puntual, a la censura, se podía convertir en un mérito personal y en una prueba de la valía intelectual de la persona. Obviamente, se puede hacer la lectura inversa: si los censores ocupan posteriormente cargos relevantes en la jerarquía eclesiástica es, precisamente, porque la selección de los prelados se hacía sobre el clero más preparado, que es el mismo que se emplea para una tarea prioritaria para la Monarquía como era la del control de lo escrito.

Sobre la identidad de estos prelados, encontramos distintos perfiles. Figuran obispos que nunca tomaron posesión de su cátedra, como Agustín Lozano con la mitra de Calahorra⁴¹³, Fray Juan Puga con la de Badajoz⁴¹⁴ o Fray Juan Zuazo Tejada con la de Orense⁴¹⁵. Pero también tenemos titulares de algunas de las sedes episcopales más importantes de la Monarquía, como Julián Domínguez Toledo⁴¹⁶ y Martín Delgado⁴¹⁷, ambos obispos de Valladolid, o mucho más importante que todos ellos, el que más tarde sería Cardenal y Presidente del Consejo de Castilla, Gaspar Molina Oviedo, que fue titular de Barcelona y Málaga, mitra que ostentaba cuando falleció. Molina, por ejemplo, ya vestía el púrpura cuando firma una censura. Sin embargo, Julián Domínguez Toledo, por ejemplo, firmó hasta cuatro censuras siendo catedrático de Alcalá, años antes de ser nombrado obispo de Valladolid. Lo mismo que Martín

⁴¹² Fichoz nº 00013429.

⁴¹³ Fichoz nº 00038464.

⁴¹⁴ Fichoz nº 00024872.

⁴¹⁵ Fichoz nº 00016558.

⁴¹⁶ Fichoz nº 00016499.

⁴¹⁷ Fichoz nº 00016500.

Delgado. Manuel López Aguirre, por su parte, firma censuras antes y después de su toma de posesión de la mitra barcelonesa, una muestra más de la variedad existente en el seno del episcopado. Si conviene destacar, no obstante, que exceptuando a Molina, los titulares de Valladolid y los tres arzobispos peninsulares que figuran en el censo de los aprobantes⁴¹⁸, la mayor parte de los censores que ocupan una diócesis lo son de las más pequeñas o modestas o, incluso, de las Indias (muchas de las cuales no se llegan a tomar posesión) o *In Partibus*, lo que les convertía más en Obispos honorarios que en pastores de una comunidad.

Por tanto, para determinar si la realización de aprobaciones es un elemento que afecta en el ascenso profesional de los censores, debemos buscar entre las demás dignidades eclesiásticas. Por ejemplo, encontramos hasta once generales de su orden; diecinueve fueron provinciales de su orden en la provincia que residen; siete son priores de sus conventos; cincuenta y cuatro canónigos, alguno de los cuales desempeñó más de una canonjía, siendo Diego Merino Cevallos⁴¹⁹ quien más ocupara, con cuatro canonjías diferentes; y así sumamos los Vicarios, visitadores, procuradores, definidores, abades, priores, cronistas, capellanes y otras dignidades eclesiásticas con distinta denominación, hasta alcanzar la cifra de ciento cuarenta y tres censores que fueron distinguidos de alguna u otra forma y que se emplearon, también como dirigentes de sus órdenes, obispados o parroquias. La cifra, sumada a la de los preladados, arroja que la mayoría de los clérigos que fueron comisionados por el Juez como censores ocuparon algún cargo eclesiástico.

La coyuntura es, como hemos visto para los obispos, difícil de unificar. Algunos de ellos firman las aprobaciones antes de su designación, en otras ocurre después y en amparados en esa nueva posición, y otros desarrollan esa actividad con independencia de su posición profesional. No podemos concluir, por tanto, que la función de censor fuera determinante en el ascenso socio-profesional, aunque todo indica que el elevado

⁴¹⁸ Son José Javier Rodríguez Arellano, Fichoz n° 00016404, arzobispo de Burgos en 1764; Andrés Mayoral, n° 00006521, arzobispo de Valencia en 1738; y Juan Saenz de Buruaga, n° 00016540, que lo fue de Zaragoza en 1768. Los restantes no lo eran de territorios peninsulares, sino de territorios indianos: México, Santo Domingo, Lima y Santa Fe de Bogotá.

⁴¹⁹ Fichoz n° 00037656.

número de personas que se encuentran en esta situación es un signo de que pudo serlo en ascensos particulares. En cualquier caso, lo que sí confirma es que, a pesar de las críticas existentes por sus contemporáneos, se empleó para el control de los impresos a las personas que, *a priori*, mejor preparación tenían⁴²⁰.

Precisamente la preparación, al menos teórica, de los censores puede comprobarse fijando nuestra atención en la presencia de profesores, catedráticos y docentes en general dentro del cuerpo de censores. Dentro del periodo hemos identificado noventa y cuatro censores que fueron catedráticos, veinticinco profesores y otros siete regentes de estudios de las distintas instituciones educativas existentes en la España del XVIII, todas ellas vinculadas, no lo olvidemos, a la Iglesia: universidades, colegios mayores, colegios, conventos o reales estudios. Y volviendo al peso de las órdenes religiosas, de nuevo los jesuitas ocupan la primera posición, ya que asciende a veintiséis la cifra de profesores y catedráticos jesuitas, seguidos, esta vez sí, de los dominicos. Maestros, profesores de colegio, rectores de estudios o regentes de colegios y conventos, se encargan a menudo de censurar obras relacionadas con la materia que imparten en las aulas, lo que constituye, en sí mismo, una censura profesional, alejada de los tópicos que señalaban a los censores como clérigos ignorantes.

Hay entre los censores, también, miembros del tan temido tribunal de la Inquisición, más concretamente Fray Juan Ellacuriaga⁴²¹, el doctor Juan Ferreras García⁴²² y José Casani⁴²³, que son visitadores revisores de librerías y calificadores de la Suprema; hasta once calificadores de la Suprema, entre ellos Fray Gaspar Molina, Fray Juan de la Concepción o Fray Antonio Ventura Prado; un inquisidor que fue previamente fiscal en

⁴²⁰ En este sentido cabe destacar el estudio estadístico de Ofelia Rey sobre la producción impresa y la promoción eclesiástica en Galicia a finales de siglo, donde se pone de manifiesto el papel decisivo que tuvieron los eclesiásticos en la producción y el consumo de libros. Incluye una clasificación temática de las obras y se presta especial atención al foco de Santiago de Compostela. REY CASTELAO, Ofelia, "Producción impresa y promoción eclesiástica en la Galicia de fines del Antiguo Régimen", *Semata. Ciencias Sociales y Humanidades*, nº 10 (1998), págs. 281-319.

⁴²¹ Fichoz nº 00038469.

⁴²² Fichoz nº 00028359.

⁴²³ Fichoz nº 00028361.

la Inquisición de Valladolid, Sebastián Flores Pavón⁴²⁴ e, incluso, dos consejeros de la Suprema, Fray Sebastián Erauso⁴²⁵ y Fray Juan Berceal del Pino⁴²⁶, ambos en plazas reservadas a la orden dominica. Ninguno interviene en la censura previa por la naturaleza del tema, es decir, ninguna de las obras en las que participan reciben el encargo por orden de la Inquisición, sino del Consejo de Castilla, ya que ninguna de esas obras trata sobre el Santo Oficio. Por tanto, la coincidencia entre la Inquisición y el Consejo de Castilla en determinadas figuras, alguna muy relevante como Casani, que era el polémico autor del *Suplemento al Índice Expurgatorio* de 1739 en el que si incluye al Cardenal Noris, se debe valorar como una muestra de que en ambos Consejos se buscaban personas de reconocida valía. No obstante, habría que matizar la importancia de estas figuras en relación con el Santo Oficio, ya que a la altura de 1700 no todos los que recibían el nombramiento ejercían como tales, siendo en muchos casos más un reconocimiento honorífico que un oficio efectivo.

Dicho todo esto, debemos tener en cuenta que en muchos casos una persona desempeñaba simultáneamente o de manera sucesiva, diversos puestos de los que hemos ido mencionando. El cardenal Molina, que fue fraile agustino, obispo, calificador de la Inquisición, provincial de su orden, maestro en teología y Presidente del Consejo de Castilla es el más claro ejemplo. Pero no es el único: Alejandro Aguado, monje basilio, fue catedrático, abad del convento de Salamanca, Vicario General de su Orden y Calificador de la Suprema; el franciscano Fray Francisco Arbiol, fue profesor en un convento de su orden, ministro franciscano de Aragón y obispo; o Juan Escobar Carreras, que tras ser ordenado sacerdote fue, sucesivamente canónigo doctoral y catedrático de Valladolid y obispo electo de Mondoñedo. Esta superposición de cargos en una misma persona provoca que no se puedan sumar las cifras que hemos ido desglosando, aunque si nos apuntan a que existe una relación evidente entre el ascenso socio-profesional y la realización de censuras, fuera ésta anterior y/o posterior al ascenso. Así la cifra total de cargos eclesiásticos asciende a más de ciento cuarenta, a los que hay que añadir los miembros del clero regular, cuatrocientas noventa y tres

⁴²⁴ Fichoz nº 00016068.

⁴²⁵ Fichoz nº 00030713.

⁴²⁶ Fichoz nº 00024431.

personas, por lo que de los mil sesenta censores registrados, al menos seiscientos treinta seis pertenecían al estamento eclesiástico.

El grupo principal

Para poder concretar más el análisis y comprender el funcionamiento real de la censura es necesario centrarnos en el que numéricamente era el subgrupo más numeroso y, al mismo tiempo, el más fuertemente cohesionado. Como nos ocurría al presentar el panorama general resultante de dibujar en una misma figura todas las relaciones extraídas de la cata, el gráfico de lo que hemos denominado grupo principal, y que no es otra cosa que la subred principal, resulta igualmente complejo.

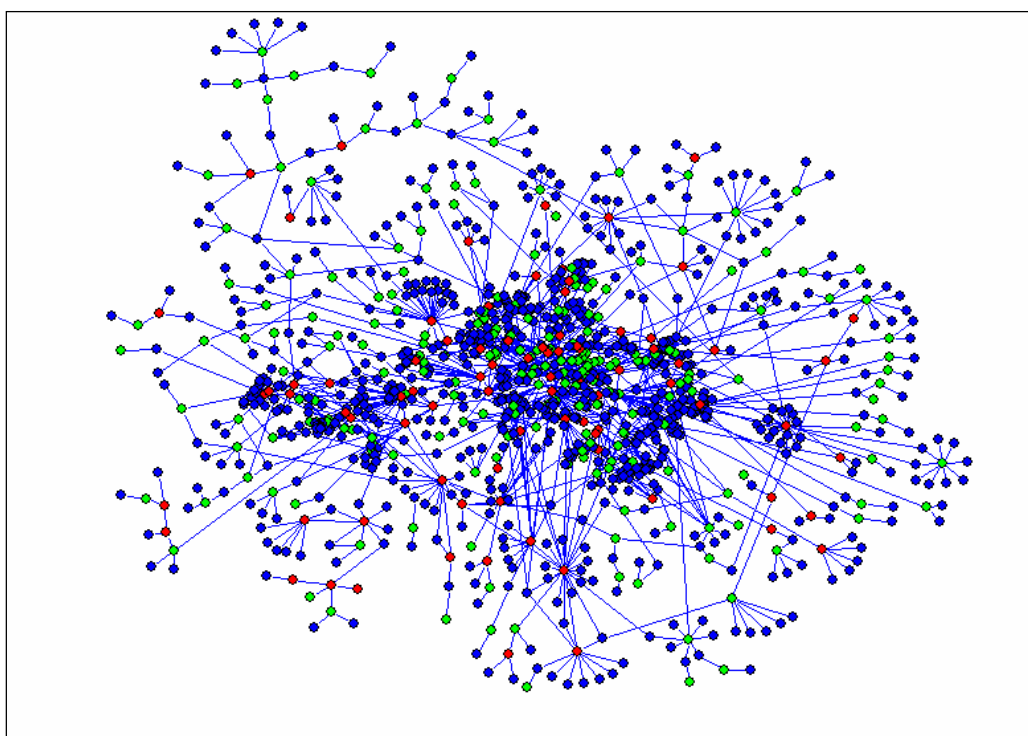


Gráfico 2. Grupo principal del primer periodo

A pesar de la confusión que genera un gráfico de estas magnitudes, antes de continuar la transformación de los datos se pueden extraer unas primeras conclusiones sobre las características del grupo y, por tanto, del sistema. Al seguir la misma diferenciación cromática en todos los dibujos, lo primero que podemos señalar es la mayor presencia de censores puros. Muchos de ellos sólo tienen una relación con un autor, otros pueden tenerla con dos, pero son pocos los puntos azules con más de dos relaciones.

Esa dispersión de censores con poca densidad de censuras dibuja esa suerte de abanicos alrededor de los autores, que pueden ser, a su vez, censores.

La segunda cuestión a tratar es la distribución de los censores-autores, o autores-censores, como se prefiera denominar. Por la propia configuración que les hemos dado, deben tener, al menos, dos relaciones, una como autor, con sus correspondientes censuras, y otra como censor, que les unirá a otros autores. Este hecho es el que determina que los puntos rojos ocupen, preferentemente, los lugares centrales dentro del gráfico, ya que son los que realmente articulan el grupo.

La presencia de un elevado número de censores y, en menor medida autores, que sólo tienen una censura o una obra, es un dato que nos interesa sólo en la medida en que este hecho es definitorio del sistema de censura. Pero esta participación circunstancial y puntual en la materialización de los libros no es suficiente para comprender el mecanismo del grupo.

En términos numéricos, este subgrupo está compuesto por quinientos ochenta y tres vértices, cada uno de los cuales representa un individuo. Muchos de los individuos tienen una sola relación, mientras que el máximo está situado en cincuenta y una. En los apéndices se incluye un dibujo complementario en el que se han sumado las líneas que recibe cada vértice, aumentando proporcionalmente el tamaño del mismo. El resultado no es más claro que en el dibujo anterior, por lo que es necesario acotar los datos y convertirlos en más manejables.

Así, continuamos la transformación de los datos reduciendo la población a tratar. Seleccionamos, dentro de este subgrupo, la red que forman todos los individuos que tienen más de diez relaciones constatadas, lo que deja un total de cincuenta individuos, en lo que se considera el subgrupo más fuertemente cohesionado dentro de la subred principal. Ellos son los que tienen mayor participación en el control de los impresos por volumen y una mayor importancia por sus relaciones con el resto de actores, un hecho que no podemos considerar casual.

Como en el resto de gráficos, el color de los vértices está determinado por el tipo de actividad que tenemos registrada del actor. Sin embargo, hemos introducido, al mismo tiempo, una variación en el tamaño de los puntos según el número de líneas, es decir, de relaciones que tienen, de manera que las dimensiones están condicionadas por el volumen de obras que pasan por sus manos, lo que ayuda visualmente a valorar la importancia que cada uno tiene dentro del sistema.

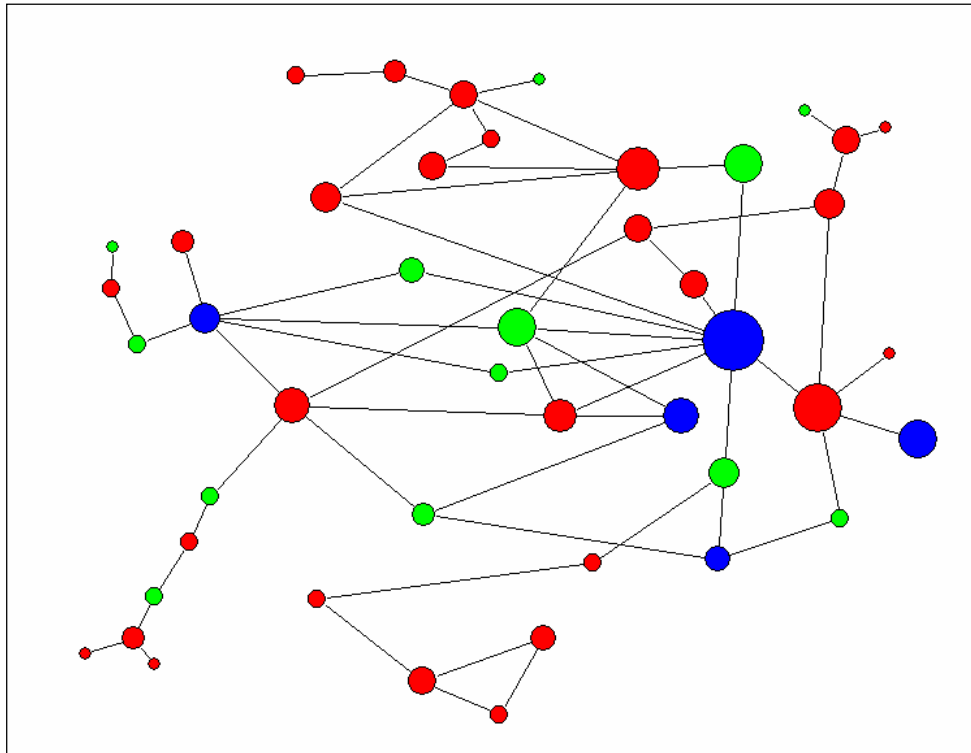


Gráfico 3. Suma de relaciones del grupo principal

En general, podemos señalar una notable diferencia respecto al gráfico del grupo al completo: si en el total de la población y el subgrupo principal existía un claro predominio de los censores puros, aunque sólo fuera con una intervención, o precisamente por ello, en éste el predominio corresponde a los censores-autores, dibujados en color rojo, que suman más de la mitad de los vértices y que con una única excepción, tienen en global un tamaño superior al de los otros puntos, lo que implica un mayor número de relaciones, que en este caso podríamos denominar interrelaciones.

Si hemos hablado al principio de este apartado del papel de los autores, es necesario referirnos ahora a los censores que cuantitativa y cualitativamente destacan sobre el resto. En el siguiente cuadro se recogen los censores de este grupo que registran más de diez censuras realizadas, el mismo número que habíamos considerado para la transformación de la red y que implica una intensidad alta de interrelaciones entre los actores:

NOMBRE	NÚMERO DE CENSURAS
Reguera, Carlos [Padre]	56
Fresneda, Pedro [Padre]	18
Téllez Acevedo, Antonio	15
Concepción, Juan [Fray]	13
Díaz, Gaspar [Padre]	11
Reinoso Quiñones, Bernardo José	11
San Agustín, Pablo [Fray]	10
Torres Villarroel, Diego	10

Tabla 3. Censores según el número de censuras registradas.

Carlos de la Reguera es, con diferencia, el censor más prolífico de todos. Curiosamente es, además, censor puro, como también lo es el padre Pedro Fresneda que le sigue en número y con el que comparte militancia en la Compañía de Jesús. También Téllez Acevedo, Bernardo José Reinoso y Fray Pablo de San Agustín son censores puros. Sólo Gaspar Díaz, Fray Juan de la Concepción y Diego de Torres Villarroel son además de censores, autores, siendo éste, además, uno de los más prolíficos e importantes del momento. Así pues, aunque en el gráfico existe un claro predominio de vértices rojos, en términos cuantitativos son los únicos censores puros de este subgrupo lo que más importancia tienen.

Puesto que ver las redes de los cincuenta individuos podría resultar demasiado repetitivo, nos detendremos sólo en aquellas que por las personas implicadas tienen mayor interés para el estudio. El primer caso que conviene examinar detenidamente es el de quien encabeza la lista, el padre jesuita Carlos de la Reguera. Para el análisis de

caso debemos, por un lado, ver el papel de la persona en concreto dentro la sociedad, su carrera profesional y como ésta le lleva a esta posición de control. Por otro, hay que analizar con quiénes está relacionado y la razón de esta relación. Además, habría que ver la temática de las obras que pasan por sus manos para determinar si su elección como censor está justificada. Finalmente, su pertenencia a un instituto religioso nos vuelve a acercar al papel que la Iglesia tenía en este periodo dentro de este sistema de control de la Monarquía.

Sobre la persona en cuestión tenemos pocos datos⁴²⁷, aunque bastantes significativos. Nacido en Toledo el dos de diciembre de 1678, ingresó en la Compañía de Jesús el día de su decimosexto cumpleaños. En una carrera que podríamos denominar brillante, en la primera década del nuevo siglo será empleado por la Compañía como profesor, y más tarde catedrático de gramática, filosofía, teología y matemáticas en diversos colegios. En 1722 era designado catedrático de teología y en 1725 era nombrado profesor de matemáticas del Colegio Imperial de Madrid. El 27 de enero de 1730 se le nombra miembro supernumerario de la Real Academia Española para suplir la ausencia de Manuel Villegas Pignateli, siendo el encargado de las correspondencias latinas de las voces del *Diccionario* de la Academia hasta que es confirmado como Académico numerario el diecisiete de diciembre de 1731, pasando a ocupar la silla “F”. Su carrera no queda ahí. El veintidós de abril de 1733 será nombrado, además, Cosmógrafo Mayor de Indias. Hasta su muerte, acaecida el 22 de octubre de 1742, la actividad profesional que tenemos registrada se enfoca, pues en una triple vertiente: la docente como profesor de los prestigiosos colegios jesuitas, la académica con la redacción de varias voces del *Diccionario* de la Real Academia Española y la censora, como encargado con frecuencia por el Consejo de Castilla de revisar diversas obras antes de concederles la necesaria licencia de impresión.

⁴²⁷ Todos estos datos han sido extraídos de la base de datos Fichoz, ficha 00026346. Es necesario destacar que no existe ninguna biografía sobre este personaje, y que su nombre sólo aparece citado en la obra de SIMON DIAZ, José, *Historia del Colegio Imperial de Madrid (del Estudio de la Villa al Instituto de San Isidro: años 1346-1955)*, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992, donde aparece como catedrático del Colegio Imperial justo en el periodo que estamos analizando.

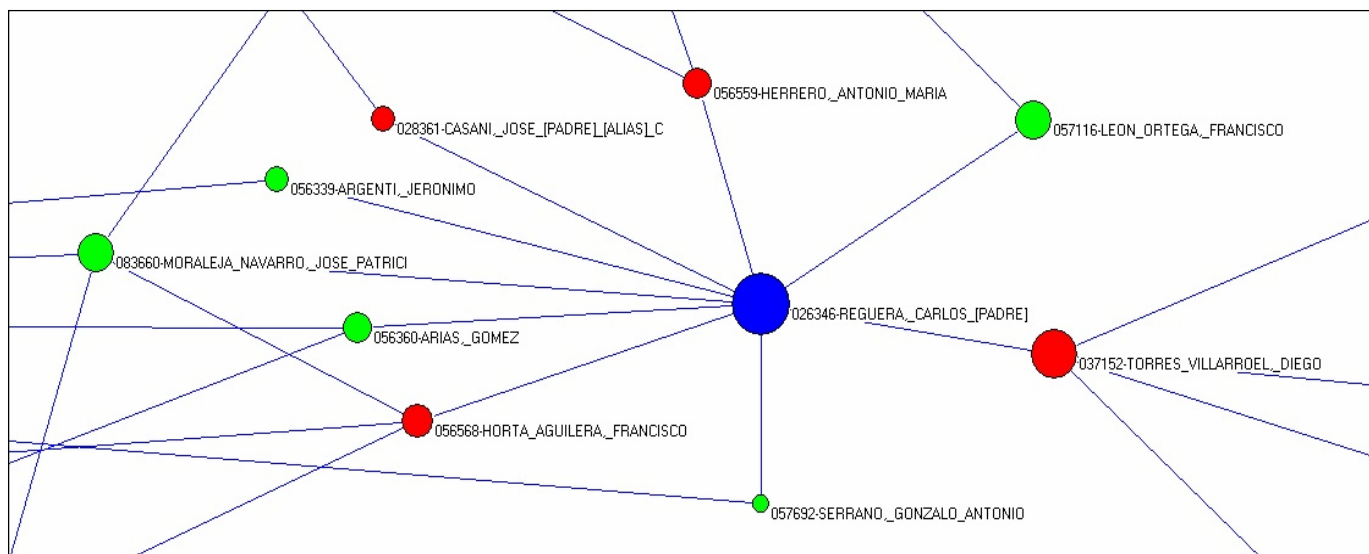


Gráfico 4. Red de Carlos de la Reguera

Como se puede ver en el gráfico, Reguera no tiene, al menos no tenemos constancia de ello, ninguna obra propia impresa suelta y su participación en el mercado editorial se limita a la emisión de dictámenes previos a la impresión de obras de otros autores. Ver quiénes son los que reciben aprobaciones de este profesor jesuita puede resultar revelador: Francisco Horta Aguilera, Gómez Arias, José Patricio Moraleda Navarro, Jerónimo Argenti, José Casani, Antonio María Herrero, Francisco León Ortega, Diego Torres Villarroel y Gonzalo Antonio Serrano son los que figuran en el gráfico, pero no son los únicos relacionados con Reguera, ya que también podemos ver aprobaciones suyas en impresos de Andrés Martí, Luis Losada o Miguel José Córdoba Orellana, sin embargo éstos han quedado excluidos del grupo principal al tener menos de las diez relaciones establecidas como criterios en la selección. De los que aparecen en el gráfico destaca, además, que cinco de ellos son autores y sus relaciones se reducen a un número pequeño de censores, mientras que la relación de Reguera con otros cuatro autores que también son censores, especialmente Torres y Horta Aguilera, es lo que proporciona al jesuita su papel central en la red sin necesidad de recibir ninguna censura.

Conviene preguntarse quiénes son las personas a las que censura de la Reguera. Argenti es astrólogo, León Ortega profesor de matemáticas y filosofía en la Academia de Barcelona y autor de pronósticos, como Jerónimo Argenti y Moraleja Navarro.

Gómez Arias, también profesor de filosofía, medicina y matemáticas, era astrólogo y autor de pronósticos. Gonzalo Antonio Serrano, médico cirujano, que tuvo su propia imprenta y que también dio a luz numerosos pronósticos y almanaques. Casani, jesuita como él, profesor de matemáticas en el Colegio Imperial, miembro fundador de la Real Academia Española, revisor y visitador de librerías de la Suprema, autor de numerosas obras, entre ellas un tratado de cometas que es aprobado por su correligionario Reguera. Horta Aguilera, que fue miembro de la Academia de Guardamarinas de Cádiz, es uno de los más prolíficos autores de pronósticos, y Reguera es el responsable de varias aprobaciones a obras suyas. Antonio María Herrero, doctor en medicina, es autor de varias obras, aunque su importancia reside más en su responsabilidad como coeditor del *Mercurio Literario*. Mención aparte merece Torres Villarroel, catedrático de matemáticas en Salamanca y el más célebre autor de pronósticos de todo el siglo.

Hemos registrado cincuenta y seis censuras emitidas por Carlos de la Reguera entre 1722, cuando firma su primera censura, y 1742, fecha de su muerte. De ellas, veintiséis son censuras de pronósticos. El resto, de una u otra manera, están vinculadas en su mayor parte a sus conocimientos de matemáticas y filosofía, materias sobre las que impartía o había impartido clases en colegio de su instituto, aunque habría que sumar alguna hagiografía y alguna oración, que no le resultaría difícil examinar dada su condición de sacerdote jesuita. Así, encontramos un tratado de usos del globo terráqueo, obra del también jesuita Losada; un tratado de física de Antonio María Herrero; el tratado de los cometas del jesuita Casani; una obra de astronomía de Serrano; la *Gramática lacónica* de Ignacio del Campo; o una obra de navegación de Blas José Moreno Zabala, para lo que eran imprescindibles los conocimientos de astrología. Así, como primera conclusión, a pesar de las frecuentes quejas de sus contemporáneos sobre la escasa preparación de los censores encargados de las aprobaciones por el Consejo de Castilla, lo cierto es que en este caso resultan ser, cuanto menos, exageradas, ya que no se puede considerar que un profesor del Colegio Imperial, Académico y Cosmógrafo Mayor no estuviera preparado para evaluar la conveniencia de publicar obras sobre temas de su negociado.

Una segunda conclusión que se puede extraer es que, también a pesar de los defectos del sistema, existía una cierta especialización temática de los censores. El grueso de las aprobaciones firmadas por Carlos de la Reguera son pronósticos astrológicos, un tipo de publicación muy específica, vinculada a las matemáticas, materia de la que impartía clase el jesuita toledano, a lo que habría que añadir su condición de Cosmógrafo Mayor, lo que acreditaba su experiencia con el tratamiento de los astros. La astrología emplea cálculos matemáticos y observación ordenada y sistemática de los fenómenos y la repetición de los mismos, es decir, la experimentación, y por ello era considerada una ciencia, aunque el tema de su estudio, el futuro, era difícil de cuantificar, y por ello no se considera como ciencia plenamente.

Vimos en el cuadro en el que se reflejaba la pertenencia a distintas órdenes religiosas de los censores cómo era la Compañía la que encabezaba la lista de órdenes por el número de censores. Esto nos proporciona una primera pista y nos anuncia que, cuando menos, su presencia será fundamental para el desarrollo de la censura previa. Jesuita es el censor más destacado del periodo, Carlos de la Reguera, como también lo son Pedro Fresneda y Gaspar Díaz, dos de los censores que más aprobaciones realizan. En definitiva, en términos cuantitativos no cabe duda de que los jesuitas jugaban también un papel fundamental en la censura previa.

Más interesante, sin embargo, resultaría encontrar la existencia de temas que, de alguna manera, pudieran estar monopolizados por miembros la Compañía, algo que no se ha podido encontrar en otras órdenes religiosas más allá de la necesaria aprobación para obras que versasen sobre su propia institución. La realidad es que, al menos para el periodo que hemos tratado, sí se puede establecer esta relación directa. El tema no es otro que la astronomía. Además del importantísimo papel que juega Carlos de la Reguera, otros miembros de la Compañía se emplean también en este cometido dentro de este periodo:

José de Silva⁴²⁸ aprueba pronósticos de Jerónimo Argenti y Gaspar Álvarez⁴²⁹ los de León Ortega, además de una obra sobre astronomía de Juan de Santacilla. Del primero sólo conocemos su pertenencia a la Compañía, del segundo, en cambio, sabemos que impartió clases de matemáticas y filosofía en el Colegio Imperial de Madrid entre 1734 y 1759, coincidiendo, por tanto, con Reguera. Y qué decir del padre Pedro Fresneda, jesuita encargado de censuras de Argenti, Losada (también jesuita) y Novoa, y que sucedió como Cosmógrafo Mayor de Indias al propio padre toledano. No se puede decir, desde luego, que sólo los jesuitas intervienen en la censura de pronósticos, almanaques y otras obras de astronomía, pues encontramos a seglares y otros regulares, como dominicos en esta misma parcela, pero sí es cierto que los jesuitas tienen en este campo un peso específico, que se refleja también en el monopolio del cargo de Cosmógrafo Mayor de Indias y en la relación entre los profesores del Colegio Imperial y el Consejo de Castilla.

Siguiendo el análisis del subgrupo más cohesionado, se podrían destacar otros tres actores: José Patricio Moraleja Navarro⁴³⁰ y Francisco León Ortega⁴³¹, sobre los que ya hemos apuntado algo, que son los dos vértices de autores con mayor número de relaciones y Diego de Torres Villarroel, que tras Reguera es el que tiene un volumen mayor de actividad en calidad de autor y censor. La preponderancia de estos tres sujetos viene determinada por la tipología de sus publicaciones, ya que los tres centran el grueso de producción en la impresión de pronósticos astrológicos, los mismos sobre los que Reguera realizaba sus censuras y motivo por el cual los cuatro están tan intensamente relacionados. De quienes son sólo autores sólo se puede añadir la identidad de sus censores. Reguera censura a ambos, ya lo hemos visto, pero la intensidad es distinta, ya que si bien firma una censura a Moraleja, es el responsable de ocho de las aprobaciones a pronósticos de León Ortega, a quien otro jesuita, Gaspar Álvarez, aprueba otras cuatro. Algo parecido le ocurre a Moraleja Navarro con Bernardo José Reinoso, quien aprueba seis de sus obras. De lo cual podemos concluir

⁴²⁸ Fichoz nº 00053295.

⁴²⁹ Fichoz nº 00040259.

⁴³⁰ Fichoz nº 00083660.

⁴³¹ Fichoz nº 00057116.

la relativa frecuencia con la que un censor era comisionado para censurar las obras del mismo autor.

Más detenido debe ser el tratamiento a Torres Villarroel. Su importancia para nosotros radica en que, como hemos visto, en cada una de las tablas aparece en un lugar destacado tanto como autor, encabezando la lista de autores por número de censuras recibidas, y como censor en la octava posición, con diez censuras firmadas. A diferencia de Carlos de la Reguera, la controvertida figura del doctor salmantino si ha sido estudiada con detenimiento, aunque la mayoría de estos trabajos son anteriores a los años ochenta del siglo XX y no tratan su figura de forma global, sino sólo prestando atención a ciertos aspectos concretos de su vida o de su obra⁴³².

Pronósticos y almanaques

Si todavía hoy los periódicos dedican papel y tinta en horóscopos, no nos puede resultar extraño que en la Edad Moderna una parte importante de la producción impresa estuviese monopolizada por la astrología. Con carácter de profesionalidad para aquellos que quisieran practicarla, las universidades europeas establecieron cátedras e impartieron desde ellas el arte de leer el firmamento, arte que los estudiosos recibían como mensaje de las propias estrellas. España no escapó a este movimiento y a mediados del siglo XVI Salamanca y Valencia enseñaban de forma legal astrología⁴³³. Los almanaques y pronósticos, que se vendían a finales de diciembre o principios de enero del año que trataban, logran enorme éxito en todas las capas sociales. Recoge Aguilar Piñal una lista de noventa y cinco autores de pronósticos en

⁴³² Entre los estudios publicados sobre Torres cabe destacar las más recientes, que datan de la década de los noventa del siglo XX, especialmente MARTINEZ MATA, Emilio, "La predicción de la muerte del rey Luis I en un almanaque de Diego de Torres Villarroel" *Bulletin Hispanique*, XCII (1990), págs. 837-845; MARTINEZ MATA, Emilio, "Los Sueños de Diego de Torres Villarroel", en *Acta Salamanticensia*, 228, Universidad de Oviedo, 1990; y MERCADIER, Guy, "Littérature populaire et traces d'utopie au XVIIIe siècle: le cas de Torres Villarroel et les almanachs", en *Las utopías en el mundo hispánico*, Actas del coloquio celebrado en la Casa de Velázquez en noviembre de 1988, Madrid, Casa de Velázquez-Universidad Complutense, 1990, págs. 95-107. De las obras anteriores conviene resaltar ZAVALA, Iris, "Utopía y astrología en la literatura popular del setecientos: los almanaques de Torres Villarroel", *Nueva Revista de Filología Hispánica*, XXXIII (1984), págs. 196-212, y la tesis doctoral de MARK, Alexandra, *El Doctor Don Diego de Torres Villarroel: Major figure of the Spanish Enlightenment*, Boston College, 1984, que no ha podido ser localizada. Toda la bibliografía sobre Torres está recogida en el tomo VIII de Aguilar Piñal, *op. cit.* (nota 71), entradas 952-1056.

⁴³³ MUÑOZ CALVO, *op. cit.* (nota 143), pág. 79.

distintas ciudades españolas, durante el siglo XVIII. Pero distingue entre almanaques y calendarios (fiestas, estaciones del año y fases lunares) y los pronósticos de acontecimientos futuros. Se trata de una literatura efímera y popular, que no se solía encuadernar y que ocupaba muy pocas hojas, favoreciendo su rentabilidad. Por sus características no solía contabilizarse en los inventarios post-*mortem*, lo que sin duda ha provocado que muchos ejemplares no hayan llegado hasta nosotros. Los autores se hacían llamar a sí mismos con pseudónimos fácilmente reconocibles, como “Piscator complutense”, “Piscator de las damas”, “Piscator de Galicia”, “Piscator de La Mancha” o “Gran Piscator de Salamanca”. Tanto los autores como los lectores de los pronósticos conocían la falta de validez científica de estas profecías, pero constituían un entretenimiento para la ociosidad de las gentes, como hoy la lectura del horóscopo⁴³⁴.

Sin embargo, este tipo de estudios corrían el riesgo de caer en la herejía. No puede sorprender, por tanto, que la Iglesia, defensora del dogma, tuviese que adoptar una postura contra los hombres que se dedicaban a las ciencias ocultas⁴³⁵. Así, la Iglesia, fiel a su cometido, se preguntaba hasta qué punto las influencias de los planetas en el ser humano no se contravenían con los postulados de la fe; si los astros condicionaban a la persona, suponía que se negaba la libertad y el libre albedrío de la misma. La cuestión no estaba clara. Como posible solución, Sixto V en 1585 promulga su *Coeli et Tèrrea*, que prohibía “todas las artes que provienen de los futuros eventos, a excepción de aquellas que por causas naturales necesariamente o frecuentemente se siguen”. En cuanto a la astrología concreta el Papa que será lícita y permitida siempre que se aplique a la medicina, agricultura y navegación, pero caerán en delito los

“[...] astrólogos que con vana superstición por observancia del día de nacimiento u otro, presumen y afirma el estado, condición, duración de vida, honra, riquezas, sucesión, salud, muerte, caminos, peleas, amistades, enemistades, cárceles, azotes, varios delitos y otros casos prósperos y adversos de los humanos, atribuyendo a los astros lo que nace la libre voluntad de ellos, debiendo saber que las estrellas se hicieron por el hombre y no el hombre por las estrellas”.

⁴³⁴ LOPEZ DE ZUAZO, Antonio, “La Prensa periódica”, en ESCOLAR, Hipólito, *Historia ilustrada del libro*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, pág. 380.

⁴³⁵ MUÑOZ CALVO, *op. cit.* (nota 143), pág. 15.

Queda así establecida la persecución de la astrología judiciaria, como queda reflejado en los edictos que se repiten hasta el siglo XIX. La Inquisición también se pronunció al respecto e incluyó una referencia a este género literario tan popular en la *Regla Novena* del *Catálogo de Libros Prohibidos*. En lo fundamental se establece la prohibición general de imprimir cualquier libro sobre la adivinación del futuro por poner en cuestión “el libre albedrío y la voluntad de los hombres”, permitiendo sólo aquellas que “pueden ayudar a la arte de navegar, agricultura y medicina”⁴³⁶.

A pesar de esta prohibición, era una práctica frecuente que cuando se comenzaba un nuevo año algunos astrólogos publicasen calendarios que junto con los días festivos y los ciclos lunares anunciaran acontecimientos que se iban a producir. Para evitar la intromisión de los oficiales inquisitoriales, los autores respaldaban sus afirmaciones tras la medicina, la agricultura y la meteorología, basándose, sobre todo, en las fases lunares y en los posibles eclipses, acontecimientos que despertaban gran conmoción.

La mayoría de los astrólogos investigados por la Inquisición eran gente docta: de los doce tratados por Muñoz Calvo en sus estudio⁴³⁷, dos eran médicos, dos estudiantes de medicina, dos boticarios, un licenciado en derecho, otro catedrático de matemáticas, tres sacerdotes y sólo dos carecían de oficio. Torres Villarroel tuvo también problemas con la autoridad inquisitorial en octubre de 1766, porque en su pronóstico editado en enero había previsto unos tumultos por el precio del pan en Madrid; además se consideró que había profetizado ciertos acontecimientos varios años que sucedieran, como la muerte de Luis I, el Motín de Esquilache o la Revolución Francesa de 1789⁴³⁸.

Los censores son conscientes, como los lectores y las autoridades, de la escasa validez científica de unos textos que nada aportaban al desarrollo de la sociedad, pero que tampoco atentaban contra la fe, las buenas costumbres o las regalías de Su Majestad.

⁴³⁶ MUÑOZ CALVO, *op. cit.* (nota 143), págs. 80-85.

⁴³⁷ *Ibidem*, pág. 91.

⁴³⁸ LOPEZ DE ZUAZO, *op. cit.* (nota 434), pág. 380.

Así lo expresa, por ejemplo Juan López Lobo en repuesta al memorial presentado en 1745 por Bernardo Antonio Ochoa de Arteaga y que obtuvo, en diciembre de ese mismo año el permiso para ser impresa:

“[...] y así por la verdad con que procede, en la parte de astrolo, confesando por quimericas fantasías, quanto han escrito, esta especie de gentes queriendo persuadir al vulgar auditorio que su ciencia se eleva mas alta que los tejados, y que diariamente consultan con las estrellas y demás planetas, de cuya contestura y sobre el material que los compone, es liquido o solido, nada han escrito, pues en verdad que estos llamados Astrologos, tanto mas rateros, son quanto quieren hacerse creer de elevados. Y que en las noticias historicas que comprehende, se ha tomado el Autor la fatiga de unir a su Pronostico las que en repetidas obras estan repartidas [...]”.⁴³⁹

En cualquier caso, Curiel, como vimos, acabará prohibiendo en 1767 todo tipo de “pronósticos, piscatores, romances de ciegos y coplas de ajusticiados por entenderlas perjudiciales en el público, además de ser una lectura vana, y de ninguna utilidad a la pública instrucción”⁴⁴⁰. Es, por tanto, una materia que preocupaba, desde el inicio del siglo a las autoridades civiles y religiosas. Y es por ello, que la elección de una misma persona o de un grupo pequeño de ellas para censurar una parte importante de la producción resulte interesante, ya que se está monopolizando de esta manera el control sobre un tipo de publicación concreta que, además en este caso, tenía un gran éxito editorial y un peligro potencial por su contenido.

Aunque son muchos los autores de pronósticos, sin duda el que mayor éxito tuvo fue Torres Villarroel⁴⁴¹. Ya hemos visto algunos acontecimientos de su vida, que él mismo contribuyó a difundir en vida siendo pionero en la impresión de su autobiografía por fascículos. Nacido en Salamanca en 1694, comenzó la publicación de pronósticos en 1718, cuando apenas era catedrático de Astronomía de la prestigiosa universidad de su ciudad natal. Entre 1722 y 1753 ocupará la ligeramente más prestigiosa cátedra de Matemáticas de la misma Universidad, a la que se sentía orgulloso de pertenecer,

⁴³⁹ AHN, Consejos, Leg. 50641.

⁴⁴⁰ GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), pág. 234.

⁴⁴¹ Como con los Jueces de Imprenta, los datos biográficos que no aparecen con una referencia explícita han sido extraídos de la información que está contenida en la base de datos Fichoz nº 00037152.

aunque no siempre tuviera buenas relaciones con el resto del claustro, que miraban con recelo los pingües beneficios que Torres obtenía de sus incursiones editoriales. Ordenado sacerdote en 1745, compaginó la publicación de sus pronósticos con la docencia hasta su jubilación en 1753. Para complementar los ingresos que recibía, aceptó después de su retiro voluntario la Capellanía Mayor del Convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca y entró bajo la protección de la casa de Miranda, que le designó administrador de los estados de Acevedo, continuando la impresión de sus obras hasta su muerte en 1770.

De la fama que alcanzó en vida nos habla no sólo el volumen de su producción en Salamanca, donde publicó la mayor parte de sus obras, sino las numerosas reimpresiones que tienen lugar el mismo año que la obra original en distintos puntos de la geografía peninsular, principalmente Sevilla y Barcelona, cubriendo así el mercado nacional. Además, como tantos otros autores de la época, utiliza las portadas de sus obras para dar a conocer los lugares de venta de sus publicaciones, y así, por ejemplo en 1742, publica su obra *Juicio de París y robo de Elena*, festejo cómico que se había representado con motivo de la celebración del Carnaval en casa de los Marqueses de Coquilla y al final del texto de Torres figura la siguiente anotación: "Se hallará en Valencia en la Librería de Vicente Navarro, enfrente de las Generalidades y Casa de la Diputación, donde se encontrarán todas las obras de Don Diego de Torres"⁴⁴².

Otra prueba de la fama que alcanzó fue la publicación de su autobiografía, que apareció dedicada a la Duquesa de Alba en 1743 bajo el título *Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventura del Doctor Don Diego de Torres Villarroel*, obra que contará hasta 1840 con nueve reimpresiones en Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona y Pamplona. Su fama incluso le sobrevive más allá de muerto, pues cuatro de esas reediciones son cuando ya ha fallecido. Su adaptación a los intereses de los lectores y su afán innovador le convirtieron también en uno de los pioneros de la impresión por suscripción, iniciando en 1752 la primera edición de sus obras completas, dedicadas a Fernando VI y que ocupará 14 volúmenes. La elección de la venta por suscripción no

⁴⁴² Fichoz nº 0017118L.

sólo nos indica su éxito comercial, sino también su adaptación a la modernidad al elegir un nuevo mecanismo de financiación y publicidad que se extenderá en la segunda mitad de la centuria.

El reconocimiento público alcanzado por el Gran Piscator de Salamanca le convertía, sin duda, en un reclamo publicitario de primer orden. Al carecer de descendencia, fueron sus sobrinos los que aprovecharon su nombre. Isidoro Francisco Ortiz Gallardo Villarroel⁴⁴³ utiliza la fama de su tío y desde los 17 años comienza la publicación de estos piscatores, parafraseando incluso el título que utilizaba el célebre Don Diego. Si éste era el Gran Piscator de Salamanca, su sobrino se hace llamar “el Pequeño Piscator de Salamanca” y le sucede en 1753 en la cátedra salmantina. El hijo de Isidoro Ortiz, Judas Tadeo Ortiz Gallardo y Villarroel, que también será Catedrático de Prima de Matemáticas pero en la Universidad de Zaragoza⁴⁴⁴, será como su padre y su tío-abuelo, un prolífico autor de pronósticos, sin duda aprovechando el tirón del apellido y evadiendo la prohibición de publicar pronósticos al dar a sus impresos un matiz más religioso que los anteriores y suprimiendo todo vaticinio que no fuese estrictamente astronómico. También Isidoro reproduce las estrategias de emplear los mismos censores, especialmente a su tío, que al menos una vez que esté documentada lo hace por encargo del Consejo, y no como mera aprobación propagandística. Las complicidades entre parientes no son elucubraciones. Sin ir más lejos, Isidoro Francisco Ortiz dedica su pronóstico de 1752 a los Marqueses de Coquilla, los nobles para los que Torres había redactado la relación de fiestas la que antes hacíamos referencia.

Otro sobrino de Diego de Torres es José de Villarroel⁴⁴⁵, sacerdote que también publica obras aludiendo a su famoso tío, aunque en este caso no son pronósticos, sino poemas, descripciones y obras su célebre pariente. Aunque sus obras no son de carácter astronómico ni matemático, en varias de ellas aparecen censuras y aprobaciones de Diego de Torres. Y de modo recíproco, José de Villarroel realiza, al menos, una censura a una obra de Torres. Pero la fama de Torres no solo se hace

⁴⁴³ Fichoz nº 00092570.

⁴⁴⁴ Fichoz nº 00092571.

⁴⁴⁵ Fichoz nº 00083267.

extensible a sus parientes, sino da buena cuenta de ello que todos sus discípulos lo incluyan en la portadas de sus obras como reclamo para el público. Así hace, por ejemplo, Tomás Martín⁴⁴⁶, que es profesor en la Universidad de Salamanca y se reconoce a sí mismo en las portadas de sus pronósticos como discípulo de Torres Villarroel. Curiosamente el Consejo de Castilla encarga a Diego Torres, precisamente, la censura en dos ocasiones de las obras presentadas por Martín, a pesar de la más que evidente relación entre ambos.

Uno de los testimonios más significativos sobre la proyección de Torres en su época es el aportado por Gómez Arias⁴⁴⁷, también autor de esta literatura popular, quien escribe en uno de sus prólogos: "sólo debes comprar tres [calendarios]: el de Serrano, para instrucción; el mío, por justicia, y el de Torres, para risa"⁴⁴⁸, en un claro elogio al doctor Serrano y crítica explícita de la obra del catedrático salmantino. Y es que Torres también sirve de ejemplo para observar cómo se producen relaciones entre los autores de un mismo género literario. Público es, por citar sólo algún caso, su enfrentamiento con Fray Juan de la Concepción⁴⁴⁹, autor de numerosas obras y aprobaciones, a raíz de la aparición de 1748 de su obra *Resurrección del Diario de Madrid*. O las numerosas obras que salen sólo para oponerse a sus teorías, como la publicada por Francisco Rossi⁴⁵⁰, para oponerse a los efectos que Torres había previsto que causaría un eclipse en 1764, sobre el que, por cierto, también había escrito Serrano, lo que nos evidencia las relaciones implícitas y explícitas que existen entre todos los miembros de la República de las Letras.

Aunque escape al objeto de la presente tesis, cabe mencionar brevemente el uso ejemplar que hace Torres de las dedicatorias como estrategia de captación de apoyos entre la clase dirigente. Siguiendo la práctica común de dedicar los almanaques a importantes personajes de la Corte, Torres publica dedicatorias a sus principales protectores, como la Duquesa de Alba a la que dedica su autobiografía; al rey

⁴⁴⁶ Fichoz nº 00084633.

⁴⁴⁷ Fichoz nº 00056360.

⁴⁴⁸ Fichoz nº 0004210L.

⁴⁴⁹ Fichoz nº 00036319.

⁴⁵⁰ Fichoz nº 00084889.

Fernando VI en el primer pronóstico de su reinado; al Duque de Huéscar justo en el momento en el que éste es uno de los principales asesores de Fernando VI; a distintos obispos, intentado lograr así su favor, etc. Por encima de las demás menciones destaca su especial relación con los principales linajes nobiliarios castellanos, lo que le valió para ocupar diversos puestos en la administración de sus estados después de ser jubilado por el rey como catedrático. Así no es casual no sólo la dedicatoria a la Duquesa de Alba, sino también la que firma a la Duquesa viuda de Osuna, que era por entonces, madre y tutora de su benefactor, el duque de Osuna, como administrador de sus posesiones en las Cuatro Casas.

En cuanto a la labor de Torres como censor, hemos registrado hasta diez censuras a su nombre, todas por encargo del Consejo de Castilla. De ellas cabe destacar el severo juicio que le valió el pronóstico presentado al Consejo para su impresión por Antonio Muñoz en 1742⁴⁵¹, y del que el profesor salmantino desaconseja su aprobación “por sus muchas irreverencias dignas de la abominación”⁴⁵².

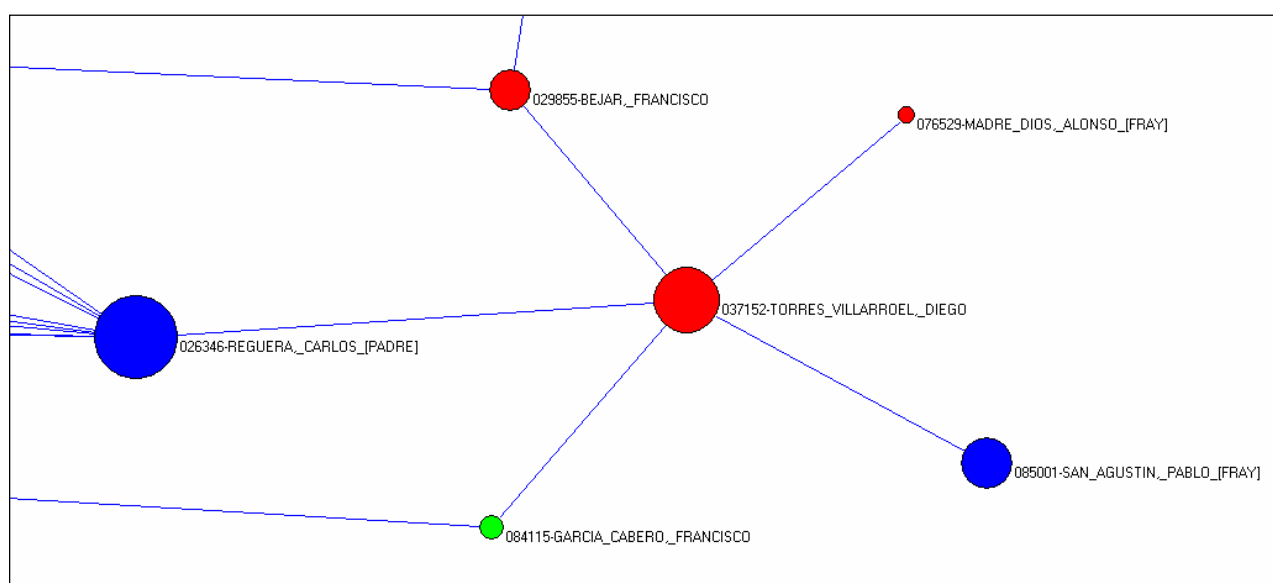


Gráfico 5. Red de Diego de Torres Villarroel

Más allá de su ya conocida relación con Reguera, Torres también mantiene una intensa relación con Fray Pablo de San Agustín, otro censor puro que aparece reiteradamente

⁴⁵¹ Fichoz nº 00084620.

⁴⁵² AHN, Consejos, Leg. 50638

en obras del catedrático, además de estar relacionado con Francisco Beja y Fray Alonso de la Madre de Dios, ambos, como Torres, autores y censores. Menos relevante en número, pero significativa en cuanto al papel de Torres como censor, son las aprobaciones que firma para las obras de Francisco García Cabero, tal y como se refleja en el gráfico anterior.

Otras subredes

Aunque menos importantes para el estudio de redes, no nos podemos olvidar del conjunto de subgrupos que hemos detectado en la primera vista de conjunto. Estas subredes pueden dividirse, a su vez en dos categorías atendiendo al número de relaciones que contemplan. Hemos considerado intermedias a aquellas que tienen más de cinco relaciones, y secundarias las que tienen menos de cinco y como mínimo, obviamente, dos.

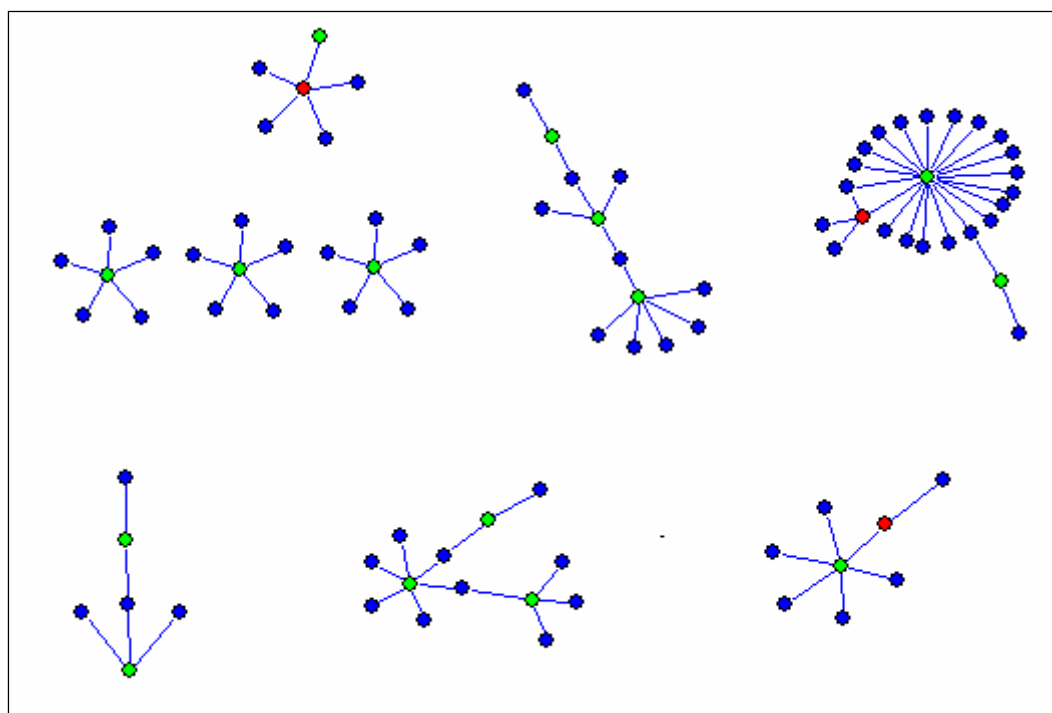


Gráfico 6. Subgrupos intermedios

De las nueve islas intermedias, sólo una reproduce, a pequeña escala, lo que hemos visto en el grupo principal: las relaciones cruzadas y complejas, y sólo en tres figura un actor como censor y autor, aunque sólo en una su papel es fundamental como nexo

del grupo. Esta ausencia casi total de estas figuras ya nos habla de la escasa complejidad de estos sistemas. Relaciones únicas de un censor con un autor, a lo sumo dos autores. Autores que sólo reciben una censura y que sólo se unen al grupo por ello. Nada, como vemos, que se pueda destacar.

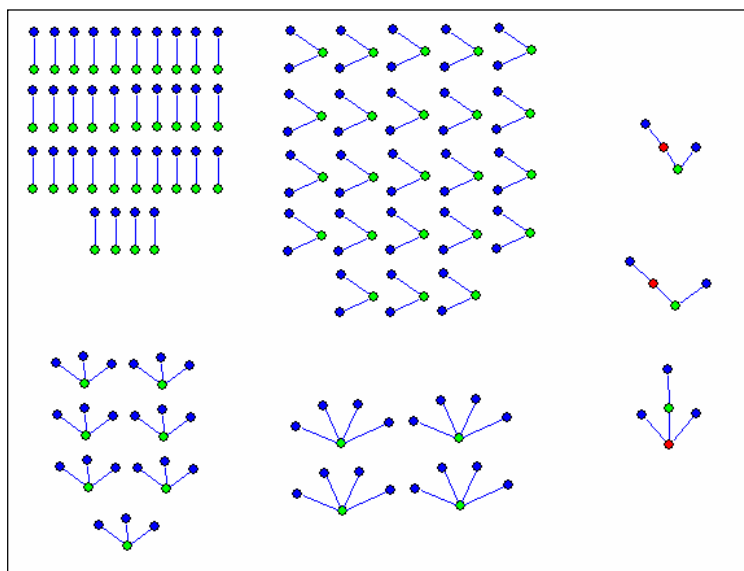


Gráfico 7. Subredes secundarias

Los subgrupos secundarios son, si cabe, más sencillos. Ochenta y un grupos, treinta y cuatro de los cuales son simples relaciones binomiales, mientras que los restantes son, en su mayoría grupos de dos, tres o cuatro censores relacionados únicamente con un único autor. Es posible que parte de ellos tuvieran más intervenciones que no han llegado hasta nosotros, y puede que, incluso, a través de ellas se vincularan a otros grupos. Pero no podemos trabajar sobre suposiciones. Estos grupos aislados no son significativos ni por el volumen de páginas que incluyen, ni por el número de actores que están implicados, ni por la estructura que reproducen, pero reflejan, como señalábamos al principio del apartado, un rasgo de la producción impresa de la época, que es la excepcionalidad de la participación de muchos individuos en el mundo editorial.

3.3. La censura en época de Curiel: 1756-1763

Uno de los objetivos más largamente buscados por la Monarquía a lo largo de la Edad Moderna, pero más especialmente durante el siglo XVIII, fue la búsqueda de una censura previa cualificada y efectiva. Para ello se realizaron propuestas de diversa índole, unas llegaron a materializarse, mientras que otras fueron aparcadas por su inconveniencia o por la imposibilidad de materializarlas. De entre todas ella la que más cerca estuvo de ser realmente eficaz fue la creación de un cuerpo de censores a sueldo, eligiendo para ello a personas sobradamente capacitadas y que abarcaran todas las áreas del conocimiento. De hecho, el proyecto no sólo se materializó, sino que estuvo vigente durante casi una década, pero su impecable planteamiento teórico no obtuvo en la práctica los resultados que cabía esperar, por lo que fue desmantelado antes de llegar a su primera década.

El primer intento serio de crear un aparato estable de censores se remonta a principios del siglo XVII, con la creación en noviembre de 1607 de una Junta cuya finalidad era reformar el sistema de licencias de impresión. La Junta estuvo compuesta por el conde de Miranda, el Inquisidor General, el Confesor del Rey, el Comendador Mayor de León, dos miembros del Consejo de Castilla y dos inquisidores. Se propuso que, siguiendo las normas en vigor, se diera un salario a los censores y se nombrara un número limitado de ellos para que su función fuera más efectiva. La propuesta no prosperó y sólo se recordó al Consejo de Castilla que sólo se debían dar licencia a “libros de provecho”, previo examen de censores religiosos⁴⁵³, lo cual evidencia que el interés no era tanto separar Iglesia y censura como conseguir que sólo los libros útiles para la formación de los lectores llegaran a la imprenta.

Poco tiempo después, se produjo una iniciativa similar de la mano esta vez del Inquisidor General Andrés Pacheco que, en septiembre de 1623, envió un memorial al Rey en el que proponía una serie de medidas para atajar la circulación de libros perniciosos por Castilla. En él proponía que se encargaran de la censura personas que

⁴⁵³ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 269-271.

estuvieran incentivadas y remuneradas “a costa de los autores de los libros porque es mucho lo que se debe trabajar para aprobar o reprobar, y sin premio es dificultoso hallar quien trabaje, y tan de ordinario”. Felipe III respondió que coincidía con la opinión del Inquisidor y subraya la necesidad de que se mantuviera el proceso en secreto “para que sus autores no pudiesen agenciar la aprobación ni escandalizarse de no ser aprobados”⁴⁵⁴. El interés del monarca no fue, sin embargo, suficiente y la censura previa continuó como hasta el momento, incumpliendo el anonimato en las censuras y sin que los censores vieran remunerado su trabajo⁴⁵⁵.

El continuo interés por crear un cuerpo remunerado de censores nombrados por el Rey y reconocidos públicamente como tales a lo largo de todo el Setecientos debemos enmarcarlo dentro la evolución general que con el paso del tiempo experimentan los servidores del Rey. Este aspecto, estudiado por López-Cordón⁴⁵⁶, pone de manifiesto la toma de conciencia que, como grupo, van adquiriendo los empleados en la Administración gubernamental. Realmente, la instauración del censor profesional no fue una demanda de los implicados, que debido a su trabajo más o menos esporádico no comparten una conciencia de pertenencia a un mismo grupo, sino que forma parte del proceso general de profesionalización del personal burocrático que habría que poner en relación con la toma de conciencia como grupo que experimentan por los mismos años otros actores del libro, como son los impresores⁴⁵⁷ o los escritores⁴⁵⁸.

Siguiendo en esta línea, una de las preocupaciones que expresó el Juez Curiel en sus diferentes autos había sido la necesidad de dignificar el trabajo de censor, pues en ocasiones resultaba difícil encontrar examinadores aptos para la cantidad de manuscritos que se presentaban ante el Consejo. En parte, esta dignificación se

⁴⁵⁴ *Ibidem*, págs. 304-306.

⁴⁵⁵ BOUZA, *op. cit.* (nota 127), págs. 167-168, recoge para el siglo XVII dos casos de censores que, *a posteriori*, vieron remunerado su trabajo de censores, aunque como excepción más que como práctica habitual.

⁴⁵⁶ LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria, “Oficiales y caballeros: la carrera administrativa en la España del siglo XVIII”, *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 844-853.

⁴⁵⁷ FLOCON, *op. cit.* (nota 10), págs. 416-422.

⁴⁵⁸ ALVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, “El hombre de letras español en el siglo XVIII”, en *Actas del Congreso Internacional sobre “Carlos III y la Ilustración*, Tomo III, Educación y pensamiento, págs. 415-426, y *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII: apóstoles y arribistas*, Castalia, Madrid, 2006.

conseguía con el establecimiento de un sueldo, pero también con la certificación de un nombramiento emanado directamente del rey que les permitiera ir tomando conciencia de cuerpo, lo que además habría favorecido su defensa frente a las críticas continuas que recibían. A diferencia de lo ocurrido con el personal de las Secretarías, los censores no conseguirán constituirse como cuerpo, lo que impidió que se superaran los prejuicios que existían sobre su actividad.

Los cuarenta censores de Curiel

La reforma hecha por Juan Curiel en 1756 supuso el primer intento serio de profesionalización de la figura de los censores, pues implicó la existencia de un nombramiento, toma de posesión bajo juramento y la recepción de una remuneración a cargo de los solicitantes. Aunque fue el único que se llevó a la práctica con todas sus consecuencias, la realidad es que fue un fracaso y, a penas diez años después, el sistema fue completamente desmantelado por Carlos III. Sin embargo, ha sido considerada con acierto “la reforma más trascendental llevada a cabo por don Juan Curiel”⁴⁵⁹, ya que, aunque en realidad formaba parte de su plan para hacer cumplir una legislación vigente desde la Alta Edad Moderna, realmente supuso un giro radical en la práctica de la censura previa gubernativa.

Como hemos visto en el segundo capítulo de este trabajo, el 19 de julio 1756 se promulgó un Auto del Consejo por el cual se nombra un cuerpo de cuarenta censores residentes en la Corte que desde el momento de su juramento como tales serían los únicos capacitados para emitir las censuras previas a la concesión de una licencia de impresión. Conviene recordar que los motivos que llevaron a Curiel y al Consejo a aprobar esta medida se remontaban a febrero de ese mismo año, con motivo de una Consulta que el Consejo elevó al rey sobre el famoso *Piscator Complutense*, cuya condena había valido a los censores que la habían aprobado previamente la pena de destierro. En su defensa, Curiel proponía al monarca una solución que evitara que casos tan escandalosos como ése se pudieran repetir. La fórmula no es otra que el nombramiento de un cuerpo de censores a sueldo. Éstos, considerados cada uno como “letrado muy fiel y de buena conciencia”, jurarían cumplir su función fielmente, lo que

⁴⁵⁹ RUMEU, *op. cit.* (nota 67), pág. 39.

implícitamente les disuadía de dejarse influir por otros factores que no fueran la estricta legalidad vigente.

El nombramiento de los censores, que fue acompañado de un reglamento de cómo debía ser su modo de trabajar, reflejaba, perfectamente, la idea que Curiel tenía sobre el mecanismo de censura. Hemos destacado ya que la mayor parte de esos censores eran eclesiásticos, pero, ¿quiénes eran?

Los primeros nombrados fueron los “trece curas propios de sus Parroquiales, los que al presente son y a los que en adelante fuesen”, haciendo referencia a los párrocos de Madrid. Estos nombramientos no suponían una novedad en tanto que los titulares de las parroquias de la Corte habían sido designados de manera ordinaria censores por parte del Consejo durante los siglos anteriores⁴⁶⁰. Pero si el nombramiento de Subdelegados de Imprentas en las provincias había supuesto la inhibición de los Subdelegados natos, con este nombramiento se estaban creando, en realidad, unos Censores natos, ya que se nombra a los sacerdotes que en ese momento ejercían el ministerio, pero no en su condición de individuos, sino por la función que desempeñaban, evitando así su carácter vitalicio. Es, por tanto, importante subrayar la vinculación que se crea entre la designación gubernativa y una dignidad eclesiástica. En su parte expositiva Curiel ya había adelantado que “el negocio de mayor importancia y cuidado en estos Reinos debe ser y ha sido siempre la pureza de la Religión Católica y la inocencia de las buenas costumbres”, y por ello, no había nadie mejor que los párrocos de la Corte para cuidar de la fe. Por otra parte, se cumplía con el criterio de que los designados fueran personas doctas, pues el encargo de las parroquias de Madrid no recaía sobre cualquier sacerdote, sino sobre alguno de los más distinguidos del momento.

En cuanto a la división parroquial, Madrid contaba, según el Fuero de 1202, con diez parroquias: Santa María de la Almudena, San Miguel de la Sagra, San Juan, Santiago,

⁴⁶⁰ No hay datos sistemáticos sobre el empleo de los párrocos como censores para los siglos XVI y XVII, pero así se desprende de las menciones a los mismos en obras que estudian este periodo, especialmente BOUZA, *op. cit.* (nota 127), pág. 129.

San Nicolás, El Salvador, San Miguel de Octoes, Santos Justo y Pastor, San Pedro y San Andrés, alguna de las cuales existían durante el dominio árabe y han llegado, con evidentes cambios, hasta nuestros días. Tras una ligera reforma parroquial en el siglo XVI, en 1606 quedó definida la división de las circunscripciones parroquiales de la Villa en trece sedes: Santa María de la Almudena, San Andrés, San Pedro, Santos Justo y Pastor, San Miguel de los Octoes, El Salvador, San Nicolás, Santiago, San Juan, San Martín, San Ginés, Santa Cruz y San Sebastián⁴⁶¹. Éstas serán las sedes parroquiales a las que Curiel hace referencia en su Auto⁴⁶². La distribución parroquial era muy desigual en términos territoriales y económicos, con grandes diferencias en cuanto al número de feligreses y cuantía de las rentas asignadas. Así, por ejemplo, San Martín, San Ginés, San Sebastián y San Justo se vieron favorecidas por la progresiva expansión de la ciudad, siendo su feligresía mayor al de numerosas ciudades castellanas. Para paliar las dificultades que esta división acarreaba, desde el siglo XVI se habían ido creando distintos anexos a las parroquias, donde poder administrar los sacramentos. A este entramado se le añadió, a partir de 1753, la Capilla Real, reconocida por el Papado como Parroquial Ministerial de Palacio, con un territorio propio dependiente del Patriarca de Indias, para atender los servicios religiosos de la Corte, siéndole asignados territorios propios de los sitios reales (Palacio, Casa de Campo, el Retiro, y los reales sitios de Aranjuez, El Pardo, San Lorenzo del Escorial y La Granja, cuando la Corte residiera en ellos, además de algún hospital de la capital). La Capilla de Palacio también tenía jurisdicción sobre los servidores del monarca, aunque sin que afectara a las circunscripciones de la Villa⁴⁶³.

⁴⁶¹ La antigua parroquia de San Miguel de la Sagra, anexo al Alcázar, fue trasladada a la calle San Gil con motivo de las reformas hechas por Felipe II para acomodar la residencia real a las necesidades de la Corte y con Felipe III en su lugar se levantará un convento de franciscanos descalzos, perdiendo la categoría de parroquia. San Sebastián, por su parte, se había desgajado en el siglo XVI de su matriz, la parroquia de la Santa Cruz.

⁴⁶² Éstas son, además, la parroquias que aparecen mencionadas en la *Guía de Forasteros* de dicho año, contemplando además los anexos de San Luis y San José. *Kalendario Manual y Guía de Forasteros de Madrid*, Madrid, Antonio Sanz, 1756, pág. 87.

⁴⁶³ Sobre la evolución de las parroquias de Madrid, con planos sobre la distribución espacial de las mismas, véase PINTO CRESPO, Virgilio, "Las circunscripciones eclesiásticas, siglos XII-XIX", en PINTO CRESPO, Virgilio y MADRAZO MADRAZO, Santos (Dir.), *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, Fundación Caja Madrid y Lunweg Editores, 1995, págs. 132-137.

Así pues, a la altura de 1756 la Villa contaba con las trece parroquias que se habían establecido en la reforma eclesiástica de 1606 y cuya configuración permanecería intacta hasta 1805. Cabe recordar que Madrid careció, a pesar de reiterados intentos, de sede episcopal hasta bien entrada la edad contemporánea por la oposición del poderoso Arzobispo Primado de Toledo, que temía que, con la disgregación, pudiera perder parte de su influencia en la Corte y de las rentas que tenía asignadas. La dependencia de Madrid respecto a su sede metropolitana se articuló a través de un Vicario Eclesiástico, subordinado al Vicario General de Toledo, pero que a lo largo de la Edad Moderna disfrutó de cierta autonomía para el ejercicio de sus obligaciones, como fueron los asuntos ordinarios del arciprestazgo madrileño, el control de los monasterios o de las propias parroquias de la Corte, siendo además, juez ordinario para los asuntos corrientes que pudieran surgir. Como veremos más adelante, el Vicario jugará un papel fundamental en la censura gubernativa a lo largo del siglo.

La dificultad que hemos encontrado para identificar a los párrocos de Madrid que entre 1756 y 1763 ejercieron como censores radica en la ausencia de listados precisos sobre sus nombres y documentación suficiente para reconstruir sus trayectorias vitales. No obstante, rastreando en la base de datos hemos localizado alguno de ellos, aunque su número es muy reducido⁴⁶⁴.

El primero de ellos es el sacerdote Diego Caballero Arteaga⁴⁶⁵. Desconocemos la fecha de su nombramiento o cuando cambió de destino. Tampoco conocemos nada acerca de su ordenación sacerdotal o las relaciones que tuviera, pero hacia 1760 figura como cura de la parroquia de San Sebastián de Madrid. El hecho que nos impulsa a considerarle como cura propio de dicha iglesia, y no como simple beneficiado, es la existencia de una censura con su firma, "por encargo del Consejo"⁴⁶⁶, a la obra *El Agur de los Vascos* de José Apezteguia, cura párroco de Andoain, cuya impresión se

⁴⁶⁴ Si bien es cierto que muchas de estas parroquias cuentan con importantes archivos parroquiales, donde se recogen los titulares de las mismas a lo largo del tiempo, la búsqueda era demasiado compleja para el resultado que se iba a obtener, porque más allá de quienes fueran los párrocos, el factor que nos interesaba era su participación en la censura, que sólo queda reflejada en los expedientes de impresión.

⁴⁶⁵ Fichoz nº 00050763.

⁴⁶⁶ Sobre el motivo por el que se hacen referencias al Consejo, aunque el encargo de realizar la censura corriera a cargo del Juez se explica en el capítulo correspondiente al hablar del proceso de censura.

desaconseja al considerar que el objetivo era realizar un ataque directo a los jesuitas, motivo por el cual la obra no verá la luz⁴⁶⁷.

Algo parecido ocurre con Manuel Ubago Oriarte⁴⁶⁸, cura se hizo cargo de la dirección de la parroquia de la Santa Cruz de Madrid antes de 1756, fecha en la que recibe el encargo de examinar una oración fúnebre realizada en las exequias por Fray Antonino Bremond, General del Orden de Predicadores, dicho por Fray Francisco Antonio Freile, padre franciscano y predicador del Rey⁴⁶⁹. La obra, a diferencia de la anterior, supera sin problemas la censura de Ubago y de Fray Agustín Sánchez, con cuyas aprobaciones se imprime en Madrid en 1756.

Por último, tenemos a Francisco de la Fuente, cura de la Parroquia de San Justo y San Pastor de Madrid⁴⁷⁰. Sabemos que estuvo destinado en dicha parroquia al menos desde 1750, ya que en octubre de ese año figura como celebrante del bautizo de Vicente Godinez Paz⁴⁷¹, que más tarde ingresaría como estudiante del Real Seminario de Nobles de Madrid, superando satisfactoriamente las necesarias pruebas de limpieza de sangre. Nos constan ocho censuras de Francisco de la Fuente entre 1757 y 1768, realizadas a diferentes autores: dos pronósticos (de Moraleja Navarro y de Jacinto Pedrosa), alguna oración y obra de piedad y otras más conocidas, como *El arte de bien hablar* de Díaz de Benjumea⁴⁷², el *Discurso sobre el sistema del mecanismo* de Piquer⁴⁷³ o *Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres* de Juan Cubie⁴⁷⁴.

⁴⁶⁷ AHN, Consejos, Leg. 50660.

⁴⁶⁸ Fichoz nº 00083778.

⁴⁶⁹ Fichoz nº 00051262.

⁴⁷⁰ Fichoz nº 00085233.

⁴⁷¹ Fichoz nº 00063212.

⁴⁷² DIAZ DE BENJUMEA, José, *Arte de bien hablar. Modelo utilísimo para todos estados, sexos y edades de personas, y digna ocupación de cualquier rato desocupado. Compuesto por el Dr. D. José Díaz de Benjumea*, Madrid, Manuel Martín, 1759. Expediente de impresión en AHN, Consejos, Leg. 50655, donde consta otra censura de Leopoldo Jerónimo Puig.

⁴⁷³ PIQUER Y ARRUFAT, Andrés, *Discurso de D. Andrés Piquer sobre el sistema del mecanismo*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1968. Expediente de impresión en AHN, Consejos, Leg. 50662.

⁴⁷⁴ CUBIE, Juan, *Las mujeres vindicadas de las calumnias de los hombres. Con un catálogo de las españolas que más se han distinguido en ciencias y armas*, Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1768. Expediente de impresión en AHN, Consejos, Leg. 50662.

En cuanto al resto de censores, que sí son citados con nombre y apellidos en la Cédula de nombramiento, encontramos una clara descompensación en cuanto a información y a participación en el mecanismo censor. De alguno de ellos no hemos encontrado ninguna participación como censores, a pesar de su designación oficial. Parece ser que alguno rechazó su nombramiento, y así figura manuscrito junto a una copia de la Cédula conservada en la sección Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional, junto con otras correcciones a la información sobre los designados⁴⁷⁵, que se irá indicado en cada caso. No hemos encontrado, en cambio, si el rechazo fue comunicado y, en caso de ser así, si designó a alguien para sustituirlo, tal y como se había previsto en la ley, aunque la ausencia de evidencias en este sentido invita a pensar no fue así⁴⁷⁶.

El primero citado el Doctor José de Rada⁴⁷⁷, que la altura de 1756 era cura de Palacio y miembro de la Real Academia Española, como Curiel puso de manifiesto en el nombramiento. Había estudiado en las Universidades de Santiago de Compostela y Valladolid, donde se doctoró en Cánones. Conocido por su oratoria, se convirtió en uno de los predicadores más afamados del momento, lo que le valió para ser nombrado Capellán de Honor de la Real Capilla y en 1741, Predicador del Rey, en virtud de lo cual realizó una oración fúnebre en el funeral que se hizo en la Corte por la muerte de Felipe V en 1746. Académico Supernumerario de la Real Academia Española desde 1748, fue reconocido como Teólogo de la Nunciatura de España y en abril de 1750 Cura del Real Palacio de Madrid. Como Académico, cargo que se hizo numerario en abril de 1754, se posicionó con los partidarios de Carvajal frente a los de Ensenada y realizó varias censuras por encargo de Curiel, entre otras a Juan de Aravaca y Nicolás Gallo⁴⁷⁸, que eran también censores, y a Andrés Piquer. Al final de la enfermedad de Fernando VI, y como Cura de Palacio, actuó como confesor del Rey y alineado en la facción del Duque de Huéscar, se enfrentó a la Reina Isabel de Farnesio al apoyar la

⁴⁷⁵ AHN, Consejo, Leg. 11275.

⁴⁷⁶ Existe la opción de que el nombramiento se produjera, pero no quedara rastro documental. Lo mismo ocurre con aquellos censores nombrados pero de los que no tenemos ninguna censura, pues si bien se procura llevar un registro documental de las licencias emitidas desde las Escribanías del Consejo, no siempre se recoge el autor a la que se envió cada obra. A esto habría que sumar la inexistencia de un concepto de archivo similar al contemporáneo, por lo que parte de la documentación permanecía en los domicilios de los oficiales y censores y no en las instituciones que generaban el expediente.

⁴⁷⁷ Fichoz nº 00016262.

⁴⁷⁸ ARAVACA, Juan, *Oración panegírica de San Ignacio de Loyola* [...], Madrid, Antonio Sanz, 1752, y GALLO FUENTES, Nicolás, *Sermón de San Francisco de Sales* [...], Madrid, José de Orga, 1753.

intención del monarca de hacer testamento. Elogiado por sus contemporáneos, como el padre Isla, el 3 de marzo 1760 fue elegido Obispo de Orihuela tras figurar en primer lugar en la terna de la Cámara, pero murió al mes de su nombramiento sin haber sido consagrado. Resulta curioso que a pesar de su fama como orador, lo que le llevó a ser reclamado en multitud de ocasiones, sólo se conserve un impreso suyo, precisamente del sermón fúnebre por la muerte del Rey celebrado por la Congregación de la Esperanza⁴⁷⁹ de la Corte y presidido por el cardenal Juan Bautista Barni⁴⁸⁰, Confesor de Isabel de Farnesio, y que fue aprobado en 1747 por el padre Francisco José de Isla. Precisamente Rada es uno de los que, atendiendo a las anotaciones al margen en el Auto referido, rechazó su nombramiento, aunque como hemos visto sí se conocen censuras firmadas por él, lo que nos lleva a cuestionar quién hizo dichas anotaciones y sus motivaciones.

Juan de Santander⁴⁸¹, era según Curiel, canónigo de Sevilla y Bibliotecario Mayor del Rey. Había comenzado sus estudios en el Colegio Jesuita de Villagarcía de Campos, pasando después a la Universidad de Sigüenza, y en 1736 figura como Colegial Capellán Mayor del Colegio de San Ildefonso de Alcalá. En 1741 recibió un encargo para comprar libros en España y Francia, que pasaron a engrosar los fondos de la Biblioteca de su Colegio Mayor. Fue elegido en 1744 Canónigo Doctoral de la Catedral de Segovia y en 1750 Visitador de la Iglesias del Real Patronato de la Diócesis de Granada. Poco antes de su designación como Censor oficial, en 1757 fue nombrado Bibliotecario Mayor del Rey en sustitución de Nasarre⁴⁸². En 1762 se incorporó al Consejo de Inquisición como Consejero y fue elegido obispo de Urgel y de Ciudad Rodrigo, aunque rechazó ambos cargos. Entró como Socio de la Matritense en 1775 y fue Socio de la Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1752. Mantuvo una intensa correspondencia con el jesuita padre Isla, entre otros, y se enfrentó a Vicente García de la Huerta con motivo del viaje de éste, siendo, sin embargo, valedor de

⁴⁷⁹ Esta Congregación tenía su sede en el Real Convento de la Encarnación de Madrid, una de las fundaciones con Patronato Regio de la capital y muy vinculado a la vida cortesana.

⁴⁸⁰ Fichoz nº 00013298.

⁴⁸¹ Fichoz nº 00022988.

⁴⁸² En el Auto de Curiel ya figura como Bibliotecario Mayor, aunque en GUTIÉRREZ TORRECILLA, Luis Miguel, *Catálogo biográfico de los colegiales y capellanes del colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá (1508-1786)*, Alcalá de Henares, 1992, sitúa su nombramiento en 1757.

Francisco Cerda y Rico⁴⁸³. Según el cuestionado documento, Juan Santander no era doctor, tratamiento que Curiel le otorga en el Auto, y, efectivamente, no nos consta que alcanzara dicho grado. Del mismo modo, también figura en la nota marginal “no acetó”, lo que sí encaja con la ausencia de censuras a su nombre en la documentación consultada.

El Padre Nicolás Gallo⁴⁸⁴ es uno de los dos sacerdotes del Oratorio del Salvador nombrados por Curiel. Al parecer recibió su ordenación sacerdotal en 1719, ingresando después en la Congregación de Sacerdotes Misioneros del Salvador y siendo nombrado Capellán Mayor del Hospicio de Madrid. Fernando VI le propuso en varias ocasiones convertirse en su Confesor, pero rechazó tal dignidad. Responsable de diversos impresos y manuscritos⁴⁸⁵, la mayor parte son oraciones y sermones pronunciados en distintos acontecimientos. Entre sus censores están Fray Isidro Rubio, José de Rada y Leopoldo Puig, también Censores oficiales en 1756 y alguno de los censores más conocidos (Manuel Quintano Bonifaz, el jesuita José Guerra o Cerdá y Rico). Cabe destacar que antes de ser nombrado Censor ya había ejercido como tal por comisión del Consejo de Castilla y del propio Curiel en varias ocasiones, aunque sólo conservamos una para el periodo en que ejerció con sueldo, una oración de Fray Francisco Freile⁴⁸⁶ por la muerte de la duquesa de Medinaceli.

Muy vinculada a las letras está también la vida del Padre Juan de Aravaca⁴⁸⁷, también del Oratorio del Salvador. Comienza a publicar obras a partir de 1752, casi todas de temática religiosa, como una oración panegírica a San Ignacio de Loyola⁴⁸⁸ o una relación de la exequias por Fernando VI⁴⁸⁹. En 1764 adquiere la condición de

⁴⁸³ LOPEZ, *op. cit.* (nota 32), pág. 179.

⁴⁸⁴ Fichoz nº 00030681.

⁴⁸⁵ Tenemos registradas un total de once obras, de las cuales cuatro quedaron manuscritas, dos de ellas relacionadas con el cargo de Confesor del Rey, que él mismo había rechazado, uno de los cuales resulta esclarecedor en su título: *Circunstancias que deben concurrir en al persona que ejerza el delicado encargo de Confesor del Rey*, Citado por AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71), tomo IV, ficha 0310.

⁴⁸⁶ Fichoz nº 00051262.

⁴⁸⁷ Fichoz nº 00029124.

⁴⁸⁸ Las censuras corren a cargo de Rada y Montoya, nombrados en 1756 Censores por Curiel como él mismo.

⁴⁸⁹ Otra oración fúnebre de Aravaca está aprobada por Fray Juan Puga, dominico que también está relacionado con Aguado, y Manuel Macías, Fichoz nº 016311, projesuita que será obispo de Lérida y que

Supernumerario de la Real Academia Española, en la que ingresará como miembro de pleno derecho en 1767. Su labor como académico será destacada, ya que además de colaborar en la redacción del *Diccionario*, recibirá la comisión de redactar la *Gramática* junto con Trigueros. Sólo hemos registrado cinco censuras firmadas por Aravaca, todas entre 1757 y 1762, periodo que coincide con su designación como Censor oficial. Mantuvo correspondencia con el padre jesuita Andrés Burriel y con Agustín de Montiano. Muere en 1786.

Leopoldo Jerónimo Puig⁴⁹⁰ nació en Barcelona aunque fue educado en Madrid. Destacó pronto en el campo de las letras, ya que a partir de 1729 tenemos sonetos suyos en obras de Mañer. En 1735 participa en la tertulia que tiene lugar en la casa del Marqués de Hermosilla, antecedente de la Real Academia de la Historia, de la que será miembro. A partir de 1737 participará como redactor del *Diario de los Literatos de España*, cuyo primer número fue dedicado a Felipe V. Capellán Real de la Colegiata de San Isidro, en 1751 recibe los honores de Académico Supernumerario de la Real Academia Española, hasta que en 1756 lo haga de manera oficial ocupando el sillón "M". Antes de morir en 1763 fue nombrado, también, Bibliotecario de la Biblioteca Real⁴⁹¹ y Administrador del Hospital San Luis de los Franceses de Madrid. Para entonces su participación como censor había sido muy activa. Desde 1730, año en el que firma su primera aprobación a la *Ortografía* de Salvador José Mañer hasta 1762, en el que firma la última, siendo incluso más frecuente su actividad censora antes de su nombramiento por Curiel. Entre los autores que censura destacan el también censor, Nicolás Gallo, Salvador Mañer (con el que había colaborado al inicio de su actividad como autor), Fray José Torrubia, José Díaz Benjumea, entre otros, lo que le resalta como uno de los censores oficiales con mayor volumen de censuras conservadas (siete). Como redactor del *Diario* defiende públicamente el *Teatro Crítico Universal* de Feijoo, tomando así posición en uno de los debates que más tinta vertió en el siglo XVIII.

fue Censor entre 1756 y 1757, cuando era curra párroco de San Justo y San Pastor de Madrid, aunque sólo se le conoce esta censura.

⁴⁹⁰ Fichoz nº 00023151.

⁴⁹¹ En AHN, Consejo, Leg. 11275, figura junto a su nombre la nota "Era Bibliotecario", por lo que el nombramiento tuvo que ser antes de 1756, olvidando Curiel incluirlo entre sus ocupaciones.

Menos datos tenemos sobre el Doctor José Domínguez⁴⁹², Administrador del Hospital General de la Corte. Fue también Capellán de Honor de la Real Capilla y Penitenciario de la misma en 1761. En 1765 Isidro Gil de Jaz le había nombrado heredero suyo, junto con el más conocido Pedro Ric Egea⁴⁹³, colegial menor que era Consejero de Castilla desde 1761 y Camarista en 1767 (sólo cuatro meses antes de su muerte), sobrino del Marqués de la Compuesta y que jugó un papel importante en la pesquisa secreta que desembocó en la expulsión de los jesuitas. Desconocemos la relación entre ambos herederos y de ellos con el fallecido. Más interesante para nosotros y conocida es la disputa que entre 1765 y 1768 mantiene con el cisterciense Fray Antonio José Rodríguez⁴⁹⁴ sobre el origen y gobierno del orden monástico. Aunque no se conservan obras salidas de su pluma, sí una censura en 1757 para el pronóstico presentado por Moraleja Navarro.

Uno de los más prolíficos fue Miguel Pérez Pastor⁴⁹⁵, nacido en Guadix en 1721, colegial de San Bartolomé y Santiago de la Universidad de Granada, recibió las órdenes sacerdotales. Académico de la Historia desde 1755, había recibido el nombramiento de miembro honorífico en 1753, al igual que de la Academia Española en 1756, de la que se convirtió en supernumerario al año siguiente y en efectivo en 1763. En la Academia de la Historia fue Censor⁴⁹⁶ y Anticuário en 1756 y 1763 respectivamente. Publicó un par de obras, destacando una traducción de Muratori de la que se hicieron cuatro ediciones. Se conservan cuarenta y tres censuras con su firma entre 1758 (después de su nombramiento) y 1764 (tuvo que firmarla antes, pues muere en 1763), aunque la última data de 1762, en vísperas de su cese por Carlos III. Esta elevada cifra convierte a este sacerdote en uno de los principales censores no sólo de entre los censores

⁴⁹² Fichoz nº 00026568.

⁴⁹³ Fichoz nº 00003709.

⁴⁹⁴ Fichoz nº 00053728. Monje cisterciense, autor de al menos trece obras, doce de ellas impresas, sobre distintos aspectos médicos y alguno histórico-religioso, como el origen de la orden benedictina en España o la referida obra sobre el origen y gobierno del orden monástico, publicada en 1766. Fue Académico de la Real Academia Médica Matritense y tuvo Honores de Real Academia de la Historia entre 1738 y 1744 que le fueron retirados por falta de interés en las actividades académicas de la institución.

⁴⁹⁵ Fichoz nº 00037272.

⁴⁹⁶ Sobre este cargo ya hemos visto que se trataba de un control sobre el gobierno de la institución, sin vinculación a la censura sobre libros que estamos estudiando.

oficiales, sino de todo el siglo. Sin duda, la confianza en su persona se debió basar en su efectividad como censor, ya que la variedad de temas que examina abarca casi la totalidad de áreas de conocimiento: diccionarios, comedias, oraciones, astrología, música o pronósticos, sin duda la materia que más aprueba.

Fray Alejandro Aguado⁴⁹⁷, nacido en Valdemoro, ingresó en la orden de San Basilio y fue colegial del Colegio que su orden tenía en la Universidad de Salamanca. Cursó estudios en las universidades de Ávila y Alcalá de Henares, por la que se doctoró en teología. En 1733 y 1740 fue elegido Abad del Colegio de San Basilio Magno en la Universidad de Salamanca⁴⁹⁸. En 1745, y hasta 1757, fue Catedrático de la Cátedra de Suárez de Teología Moral de la Universidad de Alcalá de Henares. Ascendió dentro de su orden hasta ser designado Vicario General para las provincias de España y finalmente Abad General de la Orden de San Basilio. Fue también Calificador del Consejo de la Inquisición. Es autor de once impresos, la mayoría oraciones o sermones, aunque también un tratado sobre la oposición de los basilios españoles a un intento de cisma de los monjes del monasterio de San Agripino de Nápoles⁴⁹⁹ y una historia de su propia orden en italiano publicada en Roma y dedicada al papa Clemente XIII, el firme defensor de los jesuitas⁵⁰⁰. Sólo nos figura una aprobación hecha por él en 1736 a la *Historia de San Basilio el Grande* hecha por Fray Francisco de Bejar y Segura, también fraile basilio, que llegó a Obispo de Puerto Rico⁵⁰¹. Sabemos más sobre los censores que aprobaron sus obras, entre ellos dos a cargo de jesuita Casani, que ya hemos mencionado, o la del Duque de Frías, Bernardino Fernández Velasco, hecha a la única obra no teológica de Aguado, *Política española para el más proporcionado remedio de nuestra Monarquía*, discurso pronunciado e impreso por el fraile en 1746⁵⁰².

⁴⁹⁷ Fichoz nº 00034208.

⁴⁹⁸ Hay dudas sobre la institución. Podría tratarse del Colegio-convento de los basilios en Alcalá de Henares, ya que en Salamanca sólo había un convento.

⁴⁹⁹ AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71), tomo IV, 6062 y tomo I, 0316.

⁵⁰⁰ *Ibidem*, tomo IV, 6264.

⁵⁰¹ Fichoz nº 00029855.

⁵⁰² Entre los otros censores destacan: el prolífico fraile carmelita descalzo, Fray Juan de la Concepción, Fichoz nº 00036319, responsable de hasta siete censuras entre 1730 y 1750; Fray Juan Puga, nº 00024872, dominico que fue prior del convento de Atocha, en 1746, con el apoyo del Nuncio para apartar al monarca de los regalistas jesuitas, Fernando VI le propone como Confesor Real, cargo que rechaza. En 1755 Rávago le propone como Obispo de Badajoz fuera de la terna de la Cámara, siendo nombrado por el Rey, aunque también lo rechazará y finalmente aceptará su designación como Consejero de la Suprema Inquisición en 1756 en una de las plazas reservadas a su orden. La otra censura

También es designado el maestro Fray Isidro Rubio⁵⁰³, monje benedictino, Lector de Teología en el convento de San Martín de la corte. Sólo se conserva el expediente de impresión de un manuscrito presentado por este benedictino en 1772, siendo Abad de San Juan de la Peña y aprobado por José Cevallos. Se trata de una traducción de la *Historia dogmática de la religión* escrita en francés en el siglo XVII por Juan Claudio Sommier, Arzobispo de Cesárea⁵⁰⁴. No sabemos si la obra llegó a imprimirse. Conocemos dos censuras con su firma, sobre dos pronósticos para los años 1760 y 1762.

El padre Juan Antonio del Río⁵⁰⁵, era en 1756 Lector Jubilado de los padres agonizantes o camilos, como se conocían popularmente a los miembros de la Orden de los Ministros de los Enfermos. Este clérigo regular es autor de tres censuras, dos a Fray Pablo Fidel Burgos y otra a José Cevallos Ruiz Vargas. Sólo imprime una obra, un sermón pronunciado en una profesión de monja en las Descalzas Reales de Madrid, con aprobaciones de Fray Antonio Sánchez de la Fuente y Fray Fernando de la Concepción.

Dos censuras tenemos registradas del maestro Fray José Rey⁵⁰⁶, carmelita, predicador de número de Su Majestad. La primera, en 1752, a una obra Fray José Torrubia y la segunda, después de su nombramiento, a Juan Galisteo en 1757, siendo ésta, además, de carácter negativo. Hay un manual para aprender gramática impreso por un José del Rey en 1734 en Zaragoza⁵⁰⁷ que, tal vez, fuera el mismo que nuestro censor, al que Curiel califica de "Maestro" en el nombramiento, pero no tenemos más datos para confirmarlo.

que firma es a una oración fúnebre hecha por el padre Juan de Aravaca, también censor real. Muere en 1756. Fray Juan Picazo, nº 00047843, franciscano responsable de cuatro censuras, también a Fray José Torrubia, entre otros. Finalmente, un desconocido Francisco Javier Arias.

⁵⁰³ También aparece en otros documentos como Fray Isidoro Rubio, Fichoz nº 00010030.

⁵⁰⁴ AHN, Consejos, Leg. 50668.

⁵⁰⁵ Fichoz nº 00083336.

⁵⁰⁶ Fichoz nº 00056632.

⁵⁰⁷ AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71), tomo VII, 0557.

Otro de los censores nombrados fue Fray Alonso Cano Nieto⁵⁰⁸. Nacido en Mota del Cuervo 1711, ingresó en la orden trinitaria descalza en 1726. Su primera aprobación data de 1755 y la última la firma en 1770, el mismo año de su consagración como Obispo de Segorbe. En total realiza diecinueve censuras, once de ellas en la etapa de Curiel, lo que le convierte en el segundo en cuanto al número de censuras localizadas. Entre ellas destacan una en 1756 a las *Cartas morales* de Mayans; otra en 1758 al famoso *Fray Gerundio* del padre Isla; y dos más realizadas en 1770 por encargo de la Real Academia de la Historia, el mismo año que se le concede el obispado. Es el mejor ejemplo de cómo Curiel designó a censores que ya venían siendo empleados y que lo siguieron siendo después de eliminar el puesto y el sueldo. En 1756 obtiene los Honores de Académico de la Historia, pasando a ser Académico numerario en 1767, cuando ya había sido Censor de la misma y había contribuido a varios de los trabajos que la institución tenía en marcha. Con su traslado a Segorbe su plaza volverá a ser honoraria. Fue Calificador del Consejo de la Inquisición, maestro de Teología y Provincial de su Orden, de la que fue Redentor General y Censor para los libros que se imprimieran en España⁵⁰⁹. Su nombre estuvo incluido en varias ternas de la Cámara para ocupar el obispado de Orense en 1764, aunque no será hasta 1770 cuando se le recomiende en segundo lugar para el Obispado de Segorbe y sea nombrado para tal a pesar de que Aranda emitiera un voto particular y le colocara en el tercer lugar. En 1776 Hita le propuso en tercer lugar en una terna para el arzobispado de Sevilla. Fallece en 1780 en la sede de su obispado. Es autor de cinco impresos: dos oraciones panegíricas, una oración fúnebre por Agustín de Montiano, Director de la Real Academia de la Historia, una hagiografía y un método de estudios monásticos para su orden en 1767⁵¹⁰.

⁵⁰⁸ Fichoz nº 00016275.

⁵⁰⁹ Se trata de una comisión encargada por su propia orden para las obras que sus miembros pretendieran imprimir. No implicaba el *imprimatur*, pero sí era necesaria para que el Consejo de Castilla procediera a la tramitación de la licencia, ya que formalmente la revisión era encargada por el Superior de la Orden, que era el mecanismo legal establecido.

⁵¹⁰ CANO NIETO, Fray Alonso, *Oración panegírica que en la solemnissima fiesta que celebra anualmente la muy Noble Congregación de Nacionales de España a la Milagrosa Imagen de Ntra. Sra. De Guadalajara de México, predicó en el Colegio de la Sma. Trinidad de Alcalá el M.R.P. Fray Alonso Cano*, Madrid, 1743; *Panegirico funeral que en la annual memoria, que celebra el Ilmo. Colegio Mayor, Universidad de Alcalá, a su glorioso Fundador, el Santo Cardenal de España, Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros, con asistencia de la Santa Iglesia Magistral de San Justo y Pastor, Alcalá, María García Briones*, 1746; *Oración fúnebre que en las exequias hachas por la Real Academia de la Historia al Señor D. Agustín de Montiano y Luyando, su Director primero y perpetuo, dixo el M.R.P. Mro. Fray Alonso Cano*,

El dominico Fray Eugenio Basualdo⁵¹¹, fue Prior del Convento de Santo Tomás de Madrid, Provincial de la Provincia de Castilla del Orden de Predicadores y Predicador Numerario del Rey. Según Curiel, Calificador Suprema Inquisición⁵¹², en 1758 fue propuesto en segundo lugar para el Consejo de Inquisición, siendo designado en 1760 al ocupar la primera plaza en la terna propuesta por el Inquisidor General. Muere en 1768 sin que le conozcamos ni obras impresas con su nombre ni censuras hechas por él.

El maestro Fray Cristóbal Jiménez⁵¹³, era en 1756 definidor general de la Orden de la Merced y Teólogo de la Real Junta de la Concepción. Había ingresado en la orden de la Merced Calzada antes de doctorarse en Teología por la Universidad de Alcalá de Henares en 1729. Es responsable de dos impresos, ambos sermones, en 1748 y 1749. De su mano sólo conocemos una censura en 1748, antes incluso de su nombramiento por Curiel.

El primero de los dos padres jesuitas fue Diego de Rivera⁵¹⁴, Catedrático de Prima jubilado de Alcalá. Sólo se le conocen tres censuras hechas en 1742, 1748 y 1757, siendo por tanto sólo la última, hecha a una obra del padre Pedro Tomás de Torrubia⁵¹⁵, durante su periodo de censor a sueldo. Es, sin embargo, autor de varias obras: dos vidas de padres de la Compañía dirigidas a sus superiores de Toledo; dos sermones, uno hecho en Alcalá en la celebración anual por el fundador de la Universidad y otro en el Colegio Imperial; y junto con el padre Juan Manuel Villarrubia (el otro jesuita nombrado censor), en 1757 la nueva edición del famoso *Catecismo* de Ripalda, de la que saldrán múltiples ediciones. Entre quienes le censuran: Celedonio

Madrid, Gabriel Ramirez, 1765; *Compendio histórico de la vida, virtudes y fama póstuma del Beato Simón de Roxas, del Orden de la SS. Trinidad de Calzados*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1766; y *Método de Estudios Monásticos, que debe observarse en la provincia de Castilla, León y Navarra del Orden de la Santísima Trinidad de redemptores calzados, aprobados por S.M. y Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla*, Madrid, Joaquín Ibarra, 1767.

⁵¹¹ Fichoz nº 00024873.

⁵¹² En AHN, Consejos, Leg. 11275 se recoge que ni él ni Fray Juan Álvarez, el otro fraile dominico nombrado, eran calificadores.

⁵¹³ Fichoz nº 00083330.

⁵¹⁴ Fichoz nº 00057554.

⁵¹⁵ Fichoz nº 00081610.

Arnedo (Catedrático de Teología de la Universidad de Alcalá) y Nicolás de Echeverría (como el anterior catedrático de Alcalá, ambos Canónigos de la Colegiata de los Santos Justo y Pastor de dicha ciudad) y Manuel Collado de Ruete (desconocido). Su sermón de 1756 sobre la Madre Santísima de la Luz es el primero a esta advocación hecha en Madrid, era un intento de la Compañía por contrarrestar la luz de la fe a la luz de la Ilustración, movimiento que había comenzado en Sicilia a principios del siglo. La Congregación madrileña fue la primera de este tipo y tuvo sede en el Colegio Imperial de Madrid⁵¹⁶.

El otro jesuita fue el ya mencionado padre Juan Manuel Villarrubia⁵¹⁷, Prefecto de Estudios en el Colegio Imperial de Madrid. Constan de él dos censuras en 1738, una de ella al periódico del *Mercurio histórico y político* fundado por Salvador José Mañer y otra en 1756, al poco de su nombramiento. Como responsable sólo le conocemos la reedición de 1757 del *Catecismo* de Ripalda junto con el recién nombrado Diego de Rivera.

Terminando, encontramos al padre Fray Ignacio Andrés Moraleda⁵¹⁸, que tras ingresar en la orden franciscana, fue Colegial del Colegio de San Pedro y San Pablo de la Universidad de Alcalá en 1721. Fue profesor de Artes y Catedrático de Teología en dicha Universidad en 1743. Examinador sinodal del Arzobispado de Toledo antes de 1756, desempeñó diversas dignidades dentro de su orden, que le nombró Lector de Teología, Guardián del Convento de San Diego de Alcalá de Henares y del de San Francisco de Madrid, antes de ser designado Definidor de la Provincia Franciscana. Muere en 1765. No se le conocen ni manuscritos, ni censuras. Aguilar Piñal no le reconoce ningún impreso, sin embargo parece que es el responsable de una declamación fúnebre por Fray Diego de Espinosa en 1739⁵¹⁹, en la que sería su única obra impresa.

⁵¹⁶ GIMENEZ LOPEZ, Enrique, "La devoción a la *Madre Santísima de la Luz*: Un aspecto de la represión del jesuitismo en la España de Carlos III" en *Revista de Historia Moderna*, nº 15 (1996), págs. 213-231.

⁵¹⁷ Fichoz nº 00057015.

⁵¹⁸ Fichoz nº 00034210.

⁵¹⁹ GUTIERREZ TORRECILLA, Luis Miguel y BALLESTEROS TORRES, Pedro, *Cátedras y catedráticos de la universidad de Alcalá en el siglo XVIII*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1998, pág. 74.

Sobre el último de los censores nombrados, Pedro Rodríguez de Campomanes⁵²⁰, poco cabe decir más que remitir a la abundante bibliografía que hay sobre su persona⁵²¹. Manteísta, ejercía de abogado en Madrid y desde 1745 era Abogado de los Reales Consejos, tenía honores de Académico de la Historia desde 1748, Supernumerario en 1751 y en 1754, tras haber ejercido de Censor, Académico Numerario. Presidió la Institución entre 1764 y 1791, el periodo en el que mayor número de censuras se le encargan. Fue también miembro de otras Reales Academias, como la Real Academia Española desde 1763⁵²² o la de Jurisprudencia. Considerado uno de los grandes políticos ilustrados del reinado de Carlos III, desde el 11 de mayo de 1754 disponía de una licencia pontificia para leer libros prohibidos. Muy bien relacionado en la Corte, Wall apoyó los primeros pasos de su carrera administrativa que le llevó a ser Fiscal de lo civil del Consejo de Castilla entre 1762 y 1783 y de la Cámara de Castilla desde 1767, Consejero y Camarista de Castilla desde 1783, y Gobernador del Consejo desde 1789⁵²³, lo que le permitió participar en los principales acontecimientos del momento, como la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Fue autor de numerosas obras de diverso tipo, entre las que destacan los archiconocidos *Discurso sobre el fomento de la industria popular* y el *Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento*. En 1775 fue el principal impulsor de la fundación de la Real Sociedad Económica Matritense siguiendo el modelo de la Vascongada y que extenderá por el resto del territorio nacional. Relacionado con los principales ilustrados y políticos del momento, muchos de ellos, como Jovellanos, pasaron por la tertulia que formaba en su casa madrileña. Fue recompensado por sus servicios en 1772 al ser nombrado como Caballero pensionado de la Orden de Carlos III y en 1780 con la concesión del Condado de Campomanes. En 1791 terminó su carrera como Consejero de Estado hasta su muerte en 1802. Como censor individual se le reconocen, al menos, nueve censuras

⁵²⁰ Fichoz nº 000709.

⁵²¹ RODRÍGUEZ DÍAZ, Laura: *Reforma e Ilustración en la España del XVIII: Pedro R. de Campomanes*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975; AVILÉS FERNÁNDEZ, Miguel, "Regalismo y Santo Oficio: Campomanes y la Inquisición", en *Historia de la Inquisición en España y América*, Madrid, 1984, págs. 1276-1285; CORTÉS PEÑA, Antonio, "Campomanes contra los jesuitas", *Historia* 16, nº 103 (1984), págs. 33-38; PESET REIG, José Luis, "Ciencia y política en la Ilustración española. El pensamiento de Pedro Rodríguez de Campomanes", en *Carlos III y la Ilustración*, Madrid, Sociedad Económica, 1990, tomo II, págs. 87-100; y CASTRO, Concepción de, *Campomanes. Estado y reformismo ilustrado*, Madrid, Alianza, 1996, por citar los más destacados.

⁵²² Tenía plaza de supernumerario desde 1757.

⁵²³ Desde octubre de 1783 había ejercido de manera interina.

entre 1748 y 1796, posiblemente el periodo cronológico más amplio registrado para un censor, pero de todas las aprobaciones sólo dos corresponden a su etapa como censor a sueldo, que además no fueron encargos de Curiel sino de la Academia de la Historia, ya que se trataba de dos académicos que solicitan a la institución el permiso necesario para beneficiarse de los privilegios que llevaban parejos a su condición de académicos, siendo uno de ellos fue negativo.

También abogado de los Reales Consejos y Académico de la Historia fue Rafael Bustamante⁵²⁴, quien realiza una censura en 1762 a una obra jurídica presentada por Isidro Alcaraz Castro, aunque desconozcamos más datos sobre su persona. Lo mismo ocurre con el grupo de censores sobre el que no tenemos más información que la que figura en el propio auto de nombramiento. Desconocemos datos relevantes sobre su biografía o sobre su carrera profesional, lo que ya tiene en sí mismo un significado. Si tenemos en cuenta que el origen de la base de datos que utilizamos surge a partir de la extracción de carreras de manera sistemática de todo el personal de la administración cuyo sueldo con cargo a las arcas públicas fuera superior a 12.000 reales, y a esto le añadimos que la base se ha completado de manera sistemática con otros estudios posteriores que han permitido que en la actualidad estén incluidos, por ejemplo, todos los miembros de los Consejos, los Obispos o la mayor parte de los autores, se puede concluir, al menos provisionalmente, que no destacaron en el aparato civil ni alcanzaron la dignidad episcopal. Esto no implica, claro está, que no tuvieran carreras significativas, una formación intelectual amplia o ciertas dotes personales, sólo que no hemos dado hasta ahora con ellos. En cualquier caso, la ventaja de la Cédula de nombramiento es que al menos refleja uno de los desempeños de estos personajes a la altura de 1752 y de que por la propia definición de su puesto para ese año tenían su residencia en Madrid.

Estos son el padre Miguel de Alvira⁵²⁵, del Oratorio de San Felipe; el doctor José de la Fuente⁵²⁶, ecónomo de la parroquia de San Ginés; Francisco Mestre⁵²⁷, colector del

⁵²⁴ Fichoz nº 00066048.

⁵²⁵ Fichoz nº 00083328.

⁵²⁶ Fichoz nº 00083329.

⁵²⁷ Fichoz nº 00083332.

Real Hospital de Aragón; el padre Antonio Núñez⁵²⁸, de los Clérigos Menores, Calificador de la Suprema, que lo fue antes de la Inquisición de Llerena y del que se conserva una censura; el maestro Fray Juan Álvarez⁵²⁹, dominico y Prior del Rosario; el padre Fray Fernando Maurueza⁵³⁰, franciscano, Provincial de su orden; Fray Juan Ponce⁵³¹, lector jubilado de los Mínimos de San Francisco de Paula; y, Juan Antonio Herrero⁵³², Académico de la Historia y Abogado de los Reales Consejos.

Al igual que nos ocurría con los Jueces de Imprenta, existen algunos elementos comunes a una parte importante de los censores, pero estos elementos no son comunes a todos ellos, sino que cada uno reúne alguna de estas características, sin que se den en ninguno todas ellas. Como ya hemos señalado, existe una abrumadora mayoría de clérigos, lo que demuestra que el interés no era tanto alejar a los ordenados de la censura como que su ejercicio de la misma dependiera directamente de la autoridad real para que velara por sus intereses y por los de la jerarquía eclesiástica. Decíamos que muchos son sacerdotes y/o religiosos de diferentes órdenes, incluyendo casi todas las más representativas de la península: franciscanos, basillos, jesuitas, dominicos, carmelitas, oratonianos, camilos, benedictinos, trinitarios y mercedarios. No están representados en función al peso que tenían dentro del clero regular y se echa en falta alguna orden como los jerónimos, con mucho arraigo en el reino, pero el resultado fue lo suficientemente equilibrado como para evitar que se convirtiera en una fuente de conflicto.

Lo que si es común a todos ellos es su elevada formación, que se proyectará, en la mayoría de los casos conocidos, en una exitosa carrera. Alguno de los clérigos nombrados habían desempeñado o desempeñarían después importantes puestos dentro de sus respectivas órdenes, registrándose varios abades, vicarios, provinciales y generales. En cuanto al clero secular, son varios los canónigos, curas de Palacio e, incluso, algún obispo. Además muchos de ellos, regulares y seculares, destacaron por

⁵²⁸ Fichoz nº 00027896.

⁵²⁹ Fichoz nº 00083327.

⁵³⁰ Fichoz nº 00083331.

⁵³¹ Fichoz nº 00083334.

⁵³² Fichoz nº 083330. Es el último de los designados por Curiel al lado de cuyo nombre figura la nota manuscrita "No acetó". AHN, Consejos, Leg. 11275.

su oratoria, siendo reconocidos como Predicadores del Rey e, incluso un Confesor del rey, aunque fuera de manera accidental. Además, anticipándose al intento de Melón, entre los designados por Curiel había hasta cuatros que tenían para entonces un vínculo con la Inquisición, bien fuera como Calificadores (tres) o como Consejeros (sólo uno).

Otro rasgo común entre los censores, y que también encontramos en los Jueces de Imprenta, es su implicación con las nuevas instituciones de la Monarquía: Academias y Sociedades Económicas. Destacan, de manera abrumadora, la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, no sólo por la presencia de Campomanes, sino de varios activos académicos. Junto a estas, también están representadas la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Matritense⁵³³. Sí que es destacable otra institución de nueva creación cuya proyección en la censura no se había medido hasta ahora: la Biblioteca Real, ya que es designado censor el Bibliotecario Mayor del Rey, Juan de Santander, y Puig, que también fue Bibliotecario. Esto da, al menos por un periodo de tiempo, una nueva dimensión a la “primera institución de la República de las Letras”⁵³⁴ que no había sido contemplada hasta el momento.

A diferencia de los Jueces de Imprenta, la vinculación de los censores con los Colegios Mayores no es tan intensa. En parte, porque la mayoría de ellos siguieron una carrera eclesiástica, para lo que no era imprescindible dicho paso. Según nuestros datos, sólo tres de ellos pasaron por estas instituciones: uno por el de San Ildefonso de Alcalá de Henares, uno por el de San Basilio Magno de Salamanca y otro por el de San Bartolomé y Santiago de Granada. Muchos son los que pasan por diferentes universidades, como estudiantes y como profesores, además de los que se desempeñaron en los colegios e instituciones educativas de sus propias órdenes, alcanzando al menos cinco de ellos al grado de Doctor.

⁵³³ La necesidad que los censores fueran residentes en la Corte explica que la única Sociedad Económica que aparezca sea, precisamente, la Matritense.

⁵³⁴ ÁLVAREZ BARRIENTOS, *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII: apóstoles y arribistas*, Castalia, Madrid, 2006, págs. 255-274. También GARCÍA EJARQUE, Luis, *La Real Biblioteca de S. M. y su personal (1712-1836)*, Madrid, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1997.

Una de las características comunes a todos ellos es, paradójicamente, que aunque podrían considerarse como *intelectuales orgánicos*, con una basta formación, universitarios y académicos, son pocas las obras que ellos firman. En el capítulo anterior habíamos comprobado que el papel central de las redes de censura correspondía, de manera general, a autores-censores, sin embargo los designados por Curiel no destacan por su producción propia, sino que sus obras suelen ser oraciones, sermones o alguna obra de escasa entidad, más allá de la reedición del *Catecismo* de Ripalda hecha por los jesuitas Diego de Rivera y Juan Manuel de Villarrubia. La otra característica, solo extensible al grupo compuesto por los censores oficiales de los que conservamos censuras, es que la mayor parte de ellos no limitan su actividad censoria al periodo de Curiel, sino que suelen ser designados censores en fechas anteriores y/o posteriores, siendo los casos de Pérez Pastor y Fray Alonso Cano los más evidentes.

Cabe destacar que si bien los nombres de los censores nombrados en 1756 se publicó en Real Cédula, éstos no se incorporan a la *Guía de Forasteros* que se publica en esos años⁵³⁵, mientras que sus colegas franceses sí aparecen en el *Almanach Royal*⁵³⁶, por lo que la publicidad de sus identidades no fue tan amplia como cabría esperar. De hecho, en la misma ni siquiera se menciona el cargo de Juez de Imprentas, y Curiel por ejemplo sólo parece en calidad de Consejero de Castilla, sin que se le añada a tal condición la de Juez, como si se hacía a otros individuos que ostentaban varias dignidades y oficios simultáneamente.

⁵³⁵ Esta publicación periódica tenía su origen en los Calendarios agrícolas, denominados *almanaques*, en los que se detallaban los cambios lunares, solares, estaciones, cambios atmosféricos y fiestas en el calendario para ayudar a la previsión agrícola. De hecho su nombre completo era *Kalendario manual y guía de forasteros de Madrid*. Con el tiempo se amplió su contenido y se acabó convirtiendo, con el apoyo y privilegio real, en una completa guía de la administración del Estado del Antiguo Régimen, en el que se detallaban los componentes de todos los órganos e instituciones de la Monarquía, tribunales y alto clero, respetando la jerarquía y antigüedad e incluyendo la dirección de la residencia de cada uno de los sujetos. En 1768 se le sumará el *Estado Militar de España*, con los principales grados militares. Se publica, de manera interrumpida, desde 1744 hasta 1837. Se puede consultar en la Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional de Madrid y son accesibles a través de la página web de la institución: <http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?o=&w=1579-1068&f=issn&l=500>.

⁵³⁶ Sobre este aspecto se habla también el punto 4.3.

De la teoría a la práctica

Para estudiar el grado de cumplimiento de las disposiciones de Curiel, hemos analizado todas las censuras realizadas entre 1756 y 1763. En total hemos contabilizado doscientas noventa y cuatro aprobaciones para el periodo de vigencia del cuerpo de censores de Curiel. De ellas, ochenta y cuatro son responsabilidad de los censores que integraban el cuerpo fijo, mientras que las doscientas diez restantes fueron hechas por personas que no figuraban en el Auto. Tenemos, así, la constatación de que durante este periodo no sólo se comisionó a los censores nombrados para el examen de las obras, sino que se mantuvo la asignación a personas ajenas al sistema según la conveniencia del momento. Que muchos de los censores oficiales no tuvieran ninguna aprobación en su haber no invita a pensar que el exceso de trabajo fuera el motivo que empujara a Curiel a buscar a otras personas, pero el empeño del Juez por la creación del sistema choca con que él mismo lo incumpliera en la práctica.

Dejando las conjeturas a un lado, la realidad es que fueron muchos más los que aprobaron obras en este periodo. Antes de sacar conclusiones precipitadas debemos recordar que alguna de estas aprobaciones pudo tener su origen en los propios autores y no ser directamente encargos del Juez de Imprenta. Sin embargo, la cifra parece demasiado elevada como para considerar que todas las restantes fueron propuestas por los peticionarios, aunque tampoco tenemos ningún dato que indique lo contrario.

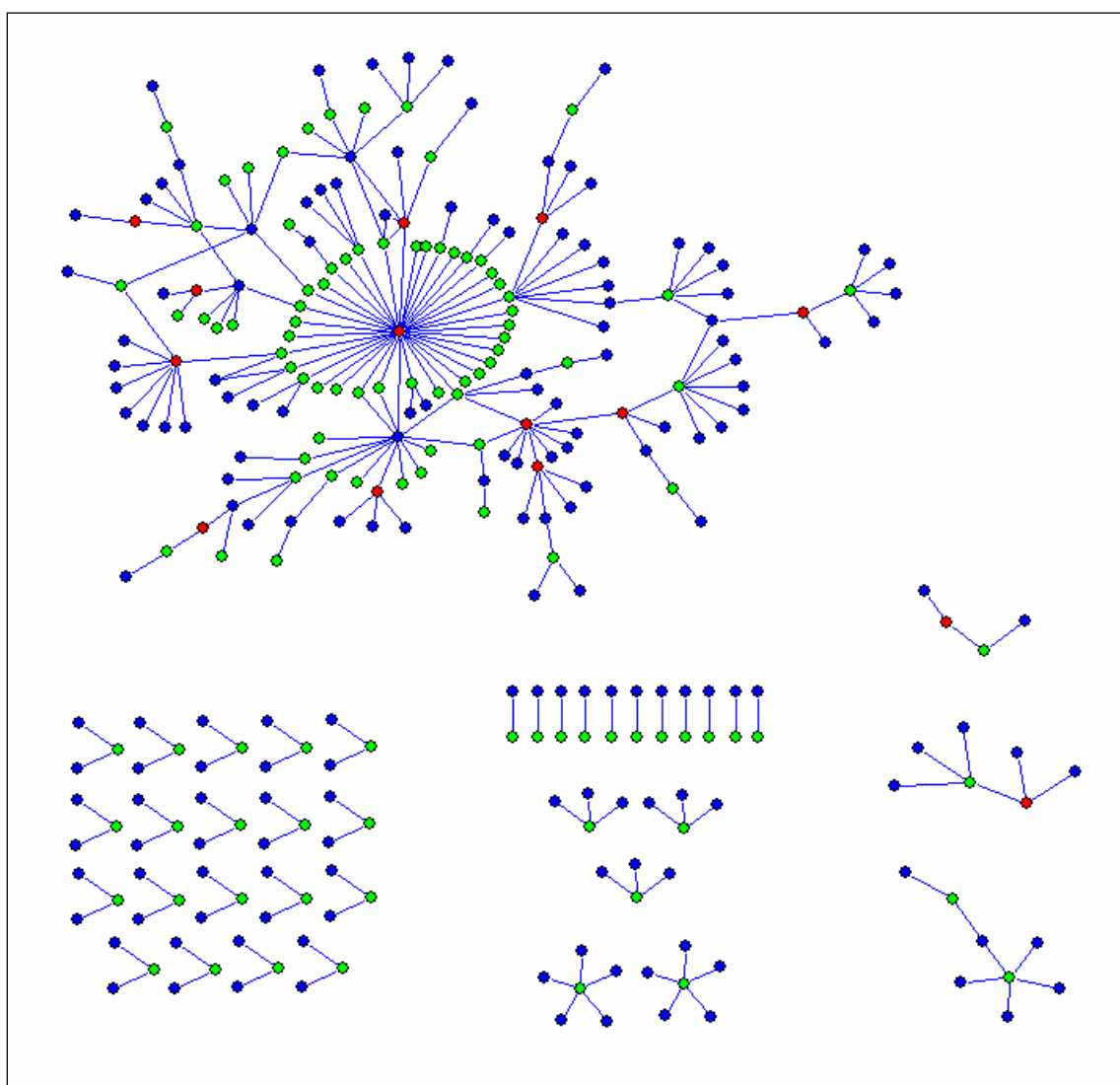


Gráfico 8. Censuras del periodo de Curiel divididas en islas

Siguiendo los pasos descritos para los gráficos de la primera mitad del siglo, se han tratado los datos de este periodo de manera similar. El resultado es el que se puede apreciar en el gráfico superior. En total se han podido diferenciar treinta y nueve *islas* o grupos de censores y autores relacionados entre si. Como en el caso anterior, el tamaño de una de las redes la configura, a primera vista, como la red que articula el sistema en general y que será analizada individualmente.

La estructura de estas redes, incluyendo la principal, es más sencilla, en parte determinada por una casuística más reducida, consecuencia directa el menor volumen de otras que se contemplan. Los datos en bruto no pueden compararse con los obtenidos para las primeras décadas del siglo, pues la horquilla temporal era mucho

más amplia. En este punto no buscamos tanto una comparación como detectar cómo se produjo el funcionamiento del sistema creado por Curiel.

AUTORES	Nº CENSURAS
Roche, Juan Luis	9
González, Francisco Javier [Fray]	8
Hierro, José [Padre]	8
Aguado, Juan Francisco [Fray]	7
Casas, José Santiago	7
Freile, Francisco Antonio [Fray]	7
Ortiz Gallardo Villarroel, Isidoro Francisco	7
Torres Villarroel, Diego	7
Machado, Antonio Jacob [Fray]	6
Otero Mallon, Pedro [Fray]	6
Zacarías Abec, Domingo Máximo	6
Feijoo Montenegro, Benito Jerónimo [Fray]	5
Gómez Barreda, Iñigo	5
Mayans Siscar, Gregorio	5
Soler, Antonio [Fray]	5

Tabla 4. Relación de autores según las censuras recibidas

Como anticipábamos, el volumen de censuras manejadas afecta a los resultados. En el cuadro de la parte superior se recogen, ordenados, los autores en función del número de censuras recibidas, con independencia de las obras que publicaran. Las diferencias entre ellos, considerando sólo a los que tienen más de cinco aprobaciones, son escasas, oscilando entre las nueve que registra Juan Luis Roche, el que mayor número recibe, a las cinco de Feijoo o Mayans. En mitad de las tablas, dos personajes sobre los que ya hemos hablado en el apartado anterior, los autores de pronósticos Torres Villarroel y su sobrino y sucesor Isidoro Francisco Ortiz, que continúan durante estos años con su lucrativo negocio. La escasa densidad de censuras por autor es lo que ha permitido separar tan visualmente las figuras del gráfico, donde cada autor, fuera

verde (sólo autor) o rojo (autor y censor) tenga a su alrededor abanicos más o menos grandes de censores o censores-autores y que sean relativamente pocos los censores que interactúan con más de dos.

La facilidad de identificar rápidamente en el dibujo la identidad de los autores de la tabla, contrastado con las cifras brutas, apuntan a una primera conclusión. La mayor parte de los autores son exclusivamente responsables de libros, y no censores. De hecho sólo cuatro de los quince son también censores, y con pocas aprobaciones a su cargo: Mayans que es autor de una, Torres Villarroel y Francisco Freile, que los son de dos cada uno, y el jesuita José Hierro, de tres.

La escasez de vértices en rojo, con los que se indica a los autores-censores, nos apunta a que si bien son los que articulan el grupo, por su posición de centralidad, su peso real en números absolutos es más bajo de lo que cabría esperar. Para analizar los censores seleccionamos aquellos que tengan, al menos, tres censuras, puesto que el grueso tienen un máximo de dos.

CENSORES	Nº CENSURAS
Pérez Pastor, Miguel	44
Cano Nieto, Alonso [Fray]	15
Puig, Leopoldo Jerónimo	7
Aravaca, Juan [Padre]	6
Fuente, Francisco Antonio	6
Arenzana, Martín	3
Collado Ruete, Manuel	3
Díaz, Gaspar [Padre]	3
González Cernuda, Juan Francisco	3
Hierro, José [Padre]	3
Macias Pedrejón, Manuel	3
Saavedra, Manuel [Fray]	3

Tabla 5. Censores según el número de censuras

Numéricamente destaca por encima de todos Miguel Pérez Pastor, sobre el que ya hemos hablado. Le siguen Fray Alonso Cano, Leopoldo Jerónimo Puig y el padre Juan de Aravaca, todos ellos censores oficiales designados por Curiel. En cambio, el resto de los integrantes de la lista son personas ajenas al sistema, lo que unido al elevado número de censuras que suman confirman que fue el propio Juez de Imprentas el que incumpliendo su reglamento confió la supervisión de manuscritos a personas ajenas al sistema recién creado, por más que fueran sujetos de “probada virtud”, como lo fueron los jesuitas Gaspar Díaz y José del Hierro.

Siguiendo el esquema planteado antes, es interesante estudiar la pertenencia de los diferentes censores al clero, diferenciando los censores que, además pertenecieran a alguna orden religiosa. En total se han registrado ochenta y siete individuos que formaban parte del clero regular, lo que sumado a los cuarenta y dos del clero secular hacen un total de ciento veintinueve⁵³⁷. Comenzando por el clero regular podemos separarlos en atención al instituto religioso del que formaban parte.

ORDEN RELIGIOSA	RAMA	CURIEL	CENSORES
Agustinos		0	7
Basilios		1	0
Benedictinos		1	3
Bernardos		0	2
Camilos		1	0
Capuchinos		0	4
Carmelitas		1	6
	Carmelitas descalzos	0	2
Clérigos regulares menores		1	5
Dominicos		2	7
Filipenses		1	2
Franciscanos		2	12

⁵³⁷ A estos habría que sumar tres personas que reciben órdenes menores, en la mayoría de los casos para poder disfrutar de beneficios eclesiásticos vinculados a sus familias. Son Gregorio Mayans, Pedro Rodríguez de Campomanes y Sebastián Antonio Cortés.

	Franciscanos observantes	0	1
Jesuitas		2	15
Mercedarios		1	4
	Mercedarios calzados	1	1
Mínimos		1	1
Oratorio del Salvador		2	2
Premonstratenses		0	2
Trinitarios		1	7
	Trinitarios calzados	0	1
	Trinitarios descalzos	1	3
Desconocida		0	8
Total		19	87

Tabla 6. Censores del periodo según la orden religiosa a la que pertenecen

En esta tabla hemos introducido una nueva columna en la que se recogen los censores nombrados por Curiel en su Auto, lo que nos permite ver las diferencias entre ese planteamiento inicial, pensado para evitar conflictos por el peso de cada orden, y la práctica real, donde los jesuitas son de nuevo los grandes beneficiados, ya que vuelven a obtener la cifra más alta, aunque reduciendo la diferencia con los segundos, los franciscanos, y eso a pesar de que son los años de mayor control de la facción pro-jesuita en la Corte, abanderados por el Confesor Real, el padre Rávago, y el Marqués de la Ensenada. El resto se comporta de manera homogénea, ampliando el número de censores reales frente a los originalmente nombrados, siendo sólo camilos y basilios los que no registran ninguna censura pese a que ambos contaban con un censor oficial. De hecho, órdenes que habían sido excluidas en el planteamiento original, como los capuchinos y los agustinos, encuentran acomodo en la práctica, con cifras, por otra parte, bastante elevadas.

En cuanto la ocupación de puestos de responsabilidad en el gobierno interno de la Iglesia, no se observan cambios significativos con respecto a las décadas precedentes. Así, hemos registrados un arzobispo, once obispos (de los cuales dos lo fueron auxiliares y uno, el padre Rada sólo electo), diecisiete canónigos, dos generales de sus

órdenes y cinco provinciales, a los que sumar vicarios, capellanes, visitadores y un único fiscal inquisidor. En cuanto al carácter docente de los censores, treinta y uno son empleados como profesores y catedráticos de colegios y universidades, de los que sólo cinco son jesuitas, destacando, por encima de los demás los profesores de las universidades de Alcalá y Salamanca.

El subgrupo principal

Decíamos al comentar el panorama general de este periodo que quedaba claro cuál era el subgrupo principal, así como la composición del mismo. Y al ver los censores y autores en función al número de intervenciones se identificaba fácilmente quién era cada uno de los vértices.

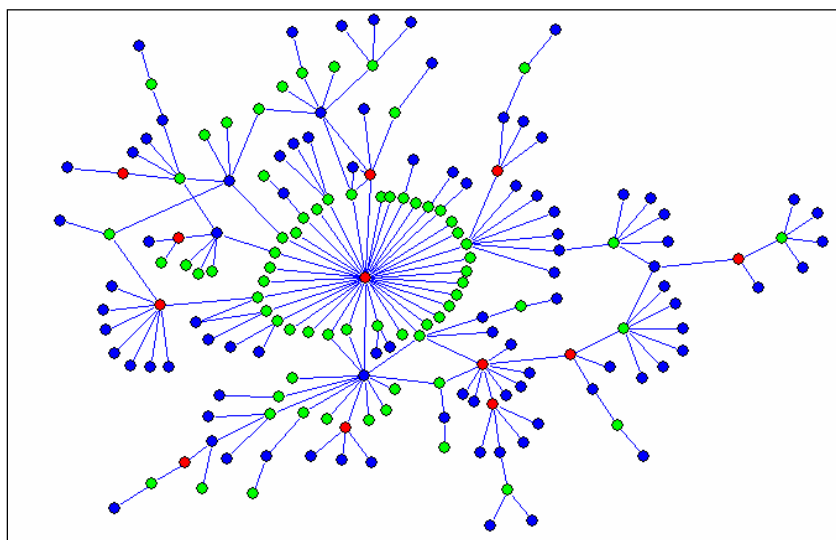


Gráfico 9. Subgrupo principal

En este subgrupo de ciento setenta y cinco individuos, a diferencia de lo observado en el gráfico del primer periodo, donde existía un claro predominio de censores puros, existe un equilibrio entre autores y censores, siendo los vértices rojos los más escasos pero determinantes para la configuración de la red.

Dado que el volumen de censuras es sensiblemente inferior, al transformar esta red hemos considerado sólo los actores con más de cinco relaciones, ampliando el tamaño de los vértices de los dieciocho sujetos restantes en función del volumen de actividad.

El tamaño nos permite visualizar, en un mismo dibujo, las etiquetas con la identidad de cada uno de los actores, lo que nos facilita su análisis.

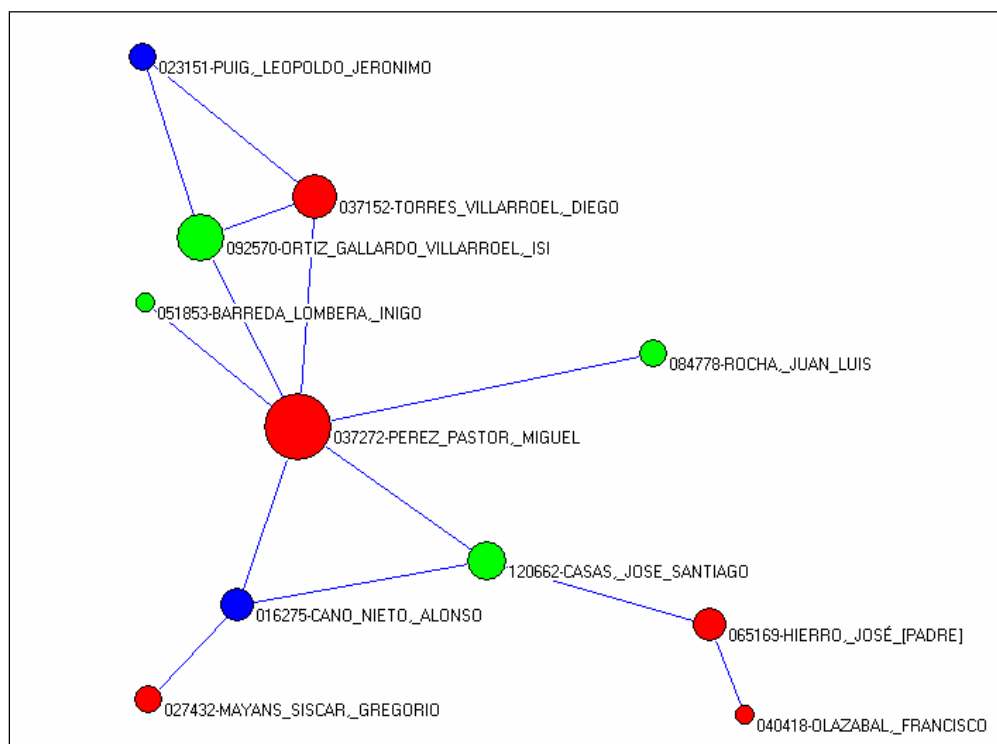


Gráfico 10. Suma de relaciones del grupo principal

Como vimos con las redes de Reguera y Torres, al centrar el foco en los elementos centrales del sistema, el predominio de los autores-censores crece exponencialmente. En este caso, que Pérez Pastor fuera autor además del censor más prolífico de la etapa de Curiel le sitúa, por méritos propios en el centro de la red, siendo sólo Cano y Puig los censores puros con peso suficiente en la red. Volviendo a la pregunta que planteábamos al inicio del apartado, referente al grado de cumplimiento del Auto por el que se nombraban censores, sirve este gráfico para comprobar que si bien alguno de los más solicitados censores pertenecían a dicho grupo, encabezado por Pérez Pastor, también es cierto que emergen otras figuras que por importancia tienen un papel más determinante en la distribución de la censura, como el padre José del Hierro o Gregorio Mayans, en lo que parece que constituyó la práctica cotidiana de la censura incluso entre 1756 y 1763.

No podemos hablar en el caso de Pérez Pastor de una especialización en la censura que habíamos detectado para Reguera y la Compañía de Jesús con las obras

astrológicas, sino que como destacábamos al repasar su biografía, se caracteriza por una diversidad temática que sigue las indicaciones de Curiel que apuntaban a que cualquiera de los censores designados estaba capacitado para valorar si el manuscrito que tenían delante de sus ojos respetaba la fe, las buenas costumbres y regalías de Su Majestad, dejando la utilidad y veracidad del contenido en un segundo plano.

En definitiva, es un hecho constatado que fueron más de esas cuarenta personas designadas por Curiel las que participaron entre 1756 y 1763, de algún modo, en la censura, lo que nos permite afirmar que ni siquiera en el periodo de vigencia del proyecto de Curiel, éste se cumplió en su totalidad.

3.4. Redes de autores y censores a finales de siglo (1770-1799)

De la misma manera que para analizar el inicio del siglo XVIII recurríamos a acotar una periodo concreto, debemos hacer lo mismo para los últimos años de la centuria. En este caso situamos el punto de partida en el primer año de la década de los ochenta, un año que además de no presentar políticamente ningún acontecimiento relevante supone el inicio de la considerada “edad de oro” de la imprenta hispana. Considerando, como hicimos para 1738, el periodo más fértil de una generación, seleccionamos todas las obras impresas entre 1770 y 1799. No en vano, en dicho periodo se publican más de diez mil obras, entre obras nuevas y reimpressiones.

El volumen de censuras tratadas, no obstante, no es tan elevado como cabría esperar con una producción tan alta. Por una parte, muchos de los expedientes de reimpression eran aprobados sin necesidad de un nuevo examen. Además, como veremos a continuación, los reiterados fracasos en el intento de lograr una censura profesional motivó un cambio en la política de censura, favoreciendo la participación de distintas instituciones de la Corte cuyo origen no era específicamente censor, pero cuya actividad posibilitaba que con el encargo de esta comisión se avanzara en la eficacia del sistema. El problema para evaluar esta medida es que en el estudio prosopográfico

sólo se tuvo en cuenta la participación de actores individuales, que permitían conocer la identidad de los intervinientes, con lo que se han excluido de los gráficos y tablas que se muestren en este apartado los datos referentes a corporaciones como la Real Academia de la Historia o el Colegio de Abogados de Madrid, que remitían sus censuras al Consejo a través de su Secretario sin identificar quien había sido el designado por la corporación para la revisión del manuscrito.

Los proyectos fallidos

Coincidiendo con el periodo seleccionado, el Consejo de Castilla proyecta la creación de una “Mesa censoria que centralizara la actividad de control, siguiendo el ejemplo de la que el marqués de Pombal había instaurado para Portugal. El intento más serio se produjo en 1777⁵³⁸, cuando desde el Consejo se solicitan distintos informes para evaluar cómo debía ser, qué problemas tendría que hacer frente y unificar los criterios de censura que se deberían seguir a partir de ese momento.

El hecho de que se planteara esta nueva institución que centralizara la censura suponía, de base, reducir el poder que la Iglesia todavía ejercía a través del tribunal de la Inquisición, ya que el nuevo órgano asumiría también todas las funciones de policía del libro que hasta el momento había tenido asignadas en parte el Santo Oficio, lo que le equiparaba no sólo con el modelo portugués, sino también con el francés de Malesherbes. Pero también manifestaba el deseo de introducir un cambio sustancial, pues todas las atribuciones en materia de impresión ya no serían competencia del Consejo de Castilla, como lo había sido siempre hasta el momento, sino de un nuevo órgano ajeno al mismo

En el documento de propuesta de creación de este órgano se hacen diversas observaciones sobre la especialización e instrucción que debían tener los nuevos censores que se designaran desde este órgano, detallando también los aspectos a los que los censores debería prestar atención a la hora de autorizar la publicación de una obra:

⁵³⁸ Como ya hemos mencionado, la idea del Consejo está transcrita en DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70) págs. 317-319 y REYES, *op. cit.* (nota 49), Apéndice Documental, págs. 1355-1357.

“En fin el que examina un libro ha de mirar el bien el reino para no privarle de un tratado útil, aunque sea a costa de alguna corrección en uno u otro pasaje de dudoso o mal sentido, cifrando su deber respecto a los libros de mala doctrina, para estorbar que se introduzca en España libro que pueda ofender a la religión, a lo dispuesto en las leyes, a las buenas costumbres o a las regalías de la Corona, o suscitar perturbación”.⁵³⁹

No existe, como se puede observar, diferencia entre las condiciones indicadas y las que hasta el momento se venían mandando por parte del Consejo en los reiterados Autos y reglamentos.

Antes de proceder a la reforma del sistema de censura, desde el Consejo se pidieron informes a las academias reales para conocer su opinión al respecto⁵⁴⁰. El de la Academia de la Historia fue firmado por Hilarión Domínguez de Riezu, Benito Martínez Gayoso, Ignacio de Hermosilla, Juan José López de Sedano, Tomás Sánchez, Antonio Barrio, Casimiro Ortega, Pedro Rodríguez de Campomanes, José Guevara Vasconcelos, Fray José de la Concepción, el Padre León, Martín Martínez y Alonso Martín Acevedo⁵⁴¹. En él expresan la dificultad que entrañaba el asunto, si bien coincidían en lo inconveniente de establecer unas reglas pormenorizadas que fueran llevadas a la práctica con todo rigor, para lo cual proponían que su número fuera reducido y su contenido conciso, respetando siempre el espíritu de la ley.

Más importancia daban a los censores, que debían ser especialistas en la materia que juzgaban, por lo que deberían pertenecer a las academias y otras instituciones eruditas, lo cual se justificaba con el argumento de que sus miembros “se contemplan exentos de pasiones y por su instituto se hallan en mejor estado de juzgar del mérito y

⁵³⁹ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 1355-1357.

⁵⁴⁰ Se conocen la remisión de trece, incluyendo el que emite el Juez de Imprentas, aunque el más estudiado es el emitido por la Academia de la Historia, tratado por DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70) págs. 317-319.

⁵⁴¹ *Ibidem*.

calidades de los libros que se van a publicar o se introducen impresos desde fuera del Reino”⁵⁴².

La Academia de la Historia parte de la necesidad previa de la reforma de los estudios universitarios, lo que incluía la necesidad de formar jurídicamente a los censores y crear una historia literaria de cada facultad para su propio uso y el de los autores y censores, que podrían conocer así la materia que se somete a su juicio y los progresos que se habían ido realizando desde su origen. Además, el informe incluye algunas novedades interesantes: excluir de la censura los originales antiguos, ser más exigentes con las obras extranjeras que traten de dogma y regalías que con las nacionales, y la determinación de no prohibir una obra por las condiciones del autor, como se venía haciendo, “ya que se puede ser hereje y buen matemático”, lo que era una clara evolución respecto a postulados anteriores, pues se afirmaba que un hereje podía inocular su virus a través de cualquier tipo de obra, aún cuando no tratara de teología.

Parecido fue el sentir de la Academia Médica Matritense, que recomienda ser indulgente con los escritos de artes y ciencias, pero no con los de fe o política, aunque introduce una nueva limitación: que no se impriman obras que contradigan los principios de la razón o contengan falsedades, pues el fin último de un libro es la alimentación intelectual de los ciudadanos. El padre Andrés Piquer, sobre el que ya hemos hablado y que es el encargado de redactar este informe, cree que los censores deben ser expertos en la materia que censuraran, pero que todos ellos deberían ser versados en lógica, metafísica, crítica y retórica y su perfil debía incluir sinceridad, moderación, celo, justicia y civismo. Como todas estas cualidades no era fácil encontrarlas en una sola persona, abogaba por la creación de un comité, cuyos miembros, conjuntamente, sí podrían reunirlos, estando así facultados para pronunciarse sobre las solicitudes de impresión con autoridad suficiente⁵⁴³.

⁵⁴² *Ibidem*.

⁵⁴³ REYES, *op. cit.* (nota 49) págs. 579-580.

Censura y teatro

Uno de los proyectos más importantes abordados por el Gobierno de Carlos III fueron los sucesivos intentos de reforma del teatro. Este exitoso género literario era una vía de filtración de las ideas nocivas contra las que tan arduamente luchaba la censura gubernativa. La reforma del teatro debía servir, al mismo tiempo, para convertir la escena en un potente medio de educación. Durante la segunda mitad del siglo llegaron a presentarse una treintena de proyectos dirigidos a esta finalidad⁵⁴⁴. Entre los primeros en hacerlo destacan José Clavijo y Fajardo y Nicolás Fernández de Moratín en 1762, seguidos del interesante plan de Francisco Mariano Nifo en 1769, más cercano a los postulados del conde de Aranda. El político aragonés llegó a poner en marcha una reforma del teatro en 1770, en la que participaron, de una u otra forma, Olavide, Clavijo o Tomás de Iriarte. Pero el que más interés para la cuestión de la censura es el que presentó el censor Santos Díez González en febrero de 1789 como respuesta al intenso debate periodístico que había suscitado la posible reforma y en el que habían participado personalidades tan conocidas como Cándido María Trigueros, Félix María de Samaniego o Juan Pablo Forner⁵⁴⁵.

El plan de Díez González se desarrolló definitivamente en 1797, cuando ya se había difundido la *Memoria para el arreglo de los espectáculos y diversiones públicas* de Gaspar Melchor de Jovellanos⁵⁴⁶. Antes, en 1791, había visto la luz el *Discurso sobre el estado actual de nuestros teatros y necesidad de su reforma*, de Mariano Luis de Urquijo. De la propuesta de reforma del político vasco destaca su intención de crear una mesa censoria que examinara las obras destinadas a la representación, lo que hasta el momento hacía un censor nombrado por el Consejo, y que en aquel momento

⁵⁴⁴ Para una visión de conjunto de los distintos planes de reforma del teatro a finales del siglo XVIII conviene consultar la obra HERRERA NAVARRO, Jerónimo, "Los planes de reforma del teatro en el siglo XVIII", *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Editorial Complutense y Fundación Duques de Soria, Madrid, 1996, págs. 789-803.

⁵⁴⁵ Para el punto de vista de Trigueros: Francisco AGUILAR PIÑAL "La polémica teatral de 1788", *Dieciocho*, 9, (1986), págs. 7-23, y *Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros*, Madrid, CSIC, 1987, págs. 290-307; la de Samaniego se expresa a través del periódico *El Censor*, usando para ello el seudónimo *Cosme Damián*, GARCIA PANDAVENES, Elsa (ed.), "El Censor" (1781-1787). *Antología*. Prólogo de José Fernández Montesinos, Barcelona, Labor, 1792; y, sobre el proyecto de Forner véase HERRERA NAVARRO, Jerónimo, *Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993, pág. 795.

⁵⁴⁶ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85).

era el Corregidor de Madrid, y la propuesta de crear una escuela dramática para que se pudiera formar en ella a los actores, cuidando así el decoro y fidelidad de la puesta en escena. Esta “mesa censoria”, que ya había sido contemplada por el duque de Híjar en 1788, estaría formada por seis personas de talento para seleccionar y corregir todas las piezas teatrales (comedias, tragedias, zarzuelas, tonadillas, sainetes...), lo que favorecería, según el noble, que acreditados autores cultivaran un género del que antes rehuían por miedo al juicio de los cómicos. Ninguno de estos proyectos llegó a buen puerto, y sólo cuando Urquijo fue nombrado Secretario de Estado se afrontó el ansiado proyecto de reforma, a cuyo frente sitúa al propio Moratín. Como ocurrió con las iniciativas anteriores, la empresa fracasó por inoperante, volviendo a recaer la responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid y su censura a una persona designada, que vuelve a ser Díez González⁵⁴⁷.

El proyecto de Godoy

La reforma más importante introducida en la censura previa fue la introducida por el Príncipe de la Paz en 1805. Con este proyecto, Godoy pretendía recuperar en parte el fallido modelo de censores profesionales que había intentado Juan Curiel años atrás, pero corrigiendo alguno de sus errores. La primera diferencia se sitúa en el origen de la autoridad. Si Curiel, que era Consejero de Castilla, recibía del Rey el encargo de coordinar la política de imprenta, pero dependiendo orgánicamente del Consejo, Godoy optará por crear un nuevo Juzgado de Imprentas, independiente del Consejo y dependiente, directamente de la Secretaría de Gracia y Justicia, habilitándole, además, para nombrar a las personas encargadas de la censura. A diferencia del modelo precedente, no se estableció un número fijo de censores, pero sí se especifica que su número no debía ser muy elevado y que sus conocimientos debían abarcar todos los saberes. La persona designada para esta nueva responsabilidad fue Juan Antonio Melón, que fue nombrado Juez Privativo de Imprentas el 11 de abril de 1805. Como ya hemos señalado el nuevo cargo era incompatible con cualquier otro puesto en la Administración al incluir una cláusula de incompatibilidad, que obligó a Melón a renunciar a sus anteriores obligaciones. De esta manera, el Juez tendría dedicación completa para una tarea que, por su complejidad e importancia, requería de toda la

⁵⁴⁷ HERRERA NAVARRO, *op. cit.* (nota 544), págs. 797-803.

atención y todo el tiempo posible. A diferencia de los anteriores Jueces, que compaginaban el control de la imprenta con sus muchas obligaciones, especialmente en el Consejo de Castilla, y, su participación en instituciones culturales como las Academias y Sociedades Económicas, Melón sólo debía atender a su nuevo Juzgado. Con esta decisión Godoy evidenciaba la importancia que le otorgaba a la circulación de impresos y reconocía que era necesario que la institución que se dedicara a su control lo hiciera sin interferencias de otras autoridades y sin que sus miembros se distrajeran con otras obligaciones.

La otra novedad importante es la cuestión de la responsabilidad. Por ella, el censor se convierte en co-responsable del contenido de la obra por él aprobada, algo que no había ocurrido hasta ese momento en España⁵⁴⁸, siendo para ellos las penas iguales que la de los autores de los manuscritos presentados. Con esta medida se obligaba a los examinadores a ser rigurosos en sus juicios y consecuentes con sus valoraciones, disuadiéndoles de aceptar si no se sentían capacitados para valorar una obra, lo que implicaba, también, una mayor dificultad para encontrar personas formadas que quisieran correr ese riesgo. Sobre los aspectos a los que el censor debía prestar atención, junto a los ya tradicionales relativos a la fe, las buenas costumbres, las leyes y regalías, se añadía ahora otros nuevos, como la utilidad pública y, por primera vez en un texto legal, la veracidad del contenido. También se ordenaba, como novedad, velar por el estilo del lenguaje empleado.

Para conservar la calidad de las publicaciones, se mantiene el control especializado que hasta el momento habían realizado distintas instituciones del Reino. Así, sigue siendo obligado el paso por la Vicaría Eclesiástica de Madrid para las obras que trataran temas religiosos, o por el Consejo de Indias y Secretaría de Estado para las materias de su competencia. También se facultó al nuevo Juez para nombrar Subdelegados provinciales que realizaran la visita de librerías y el control del comercio, con lo que se aunaba en una sola autoridad todas las competencias relacionadas con el libro, pues si bien el anterior Juez estaba capacitado para ejecutar lo que se conoce como policía del

⁵⁴⁸ En Francia los censores sí eran responsables de las obras que aprobaban. Estas negativas son las que motivaron, en parte, la aparición de los permisos tácitos en época de Malesherbes.

libro, también la Inquisición conservaba su jurisdicción al respecto, produciendo en algunos casos conflictos entre ambas autoridades que ahora se evitaban.

Melón intentó que la unificación de la censura previa e inquisitorial fuera lo menos traumática posible, para lo cual se propuso nombrar como censores a canónigos y beneficiados que fueran al mismo tiempo calificadores inquisitoriales, evitando así la posible prohibición posterior del Santo Oficio, pero no logró los apoyos suficientes para llevarlo a cabo. De hecho, durante su corto mandato Melón no nombró oficialmente censores, aunque sí algún Subdelegado provincial. Que la nueva institución fuese criatura del favorito, propició que desde su gestación se tuviera que enfrentar a la facción cortesana opuesta Godoy, dificultando en gran medida su normal desarrollo. Para poder cumplir con sus obligaciones, Melón se apoyó, fundamentalmente, en Leandro Fernández de Moratín y Pedro Estala, quienes estaban unidos por una larga relación. Los tres fueron conocidos como el "Triunvirato" por su labor conjunta para el control de los impresos. Estala y Moratín fueron los más firmes apoyos de Melón dentro de la República de las Letras para llevar a buen término la difícil tarea que le habían encomendado, pero su cercanía al poder no fue siempre tal, por lo que en momentos anteriores no tuvieron facilidades para que sus obras fueran aprobadas. Antes de esto, por ejemplo, Pedro de Estala e Ignacio García Malo presentaron al Consejo un proyecto para dar a la imprenta lo que denominan un *Diario enciclopédico*. Fray Vicente Navas⁵⁴⁹, que fue el encargado de realizar el examen preceptivo en 1792, emitió un juicio negativo, lo que supuso la denegación de la licencia.

Finalmente Melón fue destituido el 27 de marzo de 1808 y sustituido por Colón de Larreategui, Consejero de Castilla enfrentado con Godoy, en un claro cambio de poder dentro de los partidos cortesanos, pero que a la postre implicaba la constatación de un nuevo fracaso. El Juzgado Privativo de Imprentas ideado por Godoy nunca se desarrolló como se había concebido por la oposición enconada con que fue recibido por los autores y por quienes no se encontraban dentro de la clientela del favorito, que veían en el Juzgado un nuevo instrumento de control en manos de sus criaturas. La

⁵⁴⁹ Fichoz nº 00029977.

falta de apoyos impidió, por ejemplo, el nombramiento de un número suficiente de censores que permitiera el normal desarrollo de su actividad. La eliminación del Juzgado y la reintegración de las competencias en el Consejo de Castilla tampoco tuvieron el efecto deseado, pues el estallido de la guerra condicionó el periodo posterior, alterando por completo los cauces administrativos llevados hasta el momento.

Así pues, todos los intentos de reforma del sistema de censura y de sustitución por un cuerpo de censores estable, estructurados como colectivo o en torno a una mesa profesional, resultaron fallidos, algunos sin que el expediente terminara de tramitarse, tal y como había ocurrido el siglo anterior, y otros, sobrepasados por la realidad. Sin embargo, merece la pena analizarlos, aunque sea de manera escueta, para comprender que el intento de Curiel de crear un cuerpo burocrático especializado no fue una idea aislada, sino que circuló antes e, incluso, después de su fallido intento, impulsado por la experiencia exitosa que, al menos en apariencia, había proporcionado su implantación en otros países de nuestro entorno.

En cualquier caso, el fracaso de la puesta en marcha en España de un cuerpo de censores estable no significó una reducción del control, sino la búsqueda de nuevos mecanismos que hicieran factible la existencia de una censura cualificada y eficaz que velara por los intereses de la Corona. Ahí es donde juegan un papel fundamental las nuevas instituciones borbónicas, como academias y sociedades económicas, que reunían las condiciones necesarias para jugar ese papel sin que supusiera un coste económico añadido a las maltrechas arcas públicas.

Las redes de censores

Vista la coyuntura institucional, necesaria para contextualizar el objeto de estudio, podemos continuar con el análisis específico de la censura en este periodo. Decíamos al comenzar el apartado que se han contabilizado ciento setenta y seis censuras entre 1770 y 1799 en las cuales ha sido posible identificar al responsable concreto. De los doscientos treinta y tres sujetos implicados, ochenta y nueve son autores, ciento

veintinueve censores puros y los quince restantes figurarán en rojo como censores y autores.

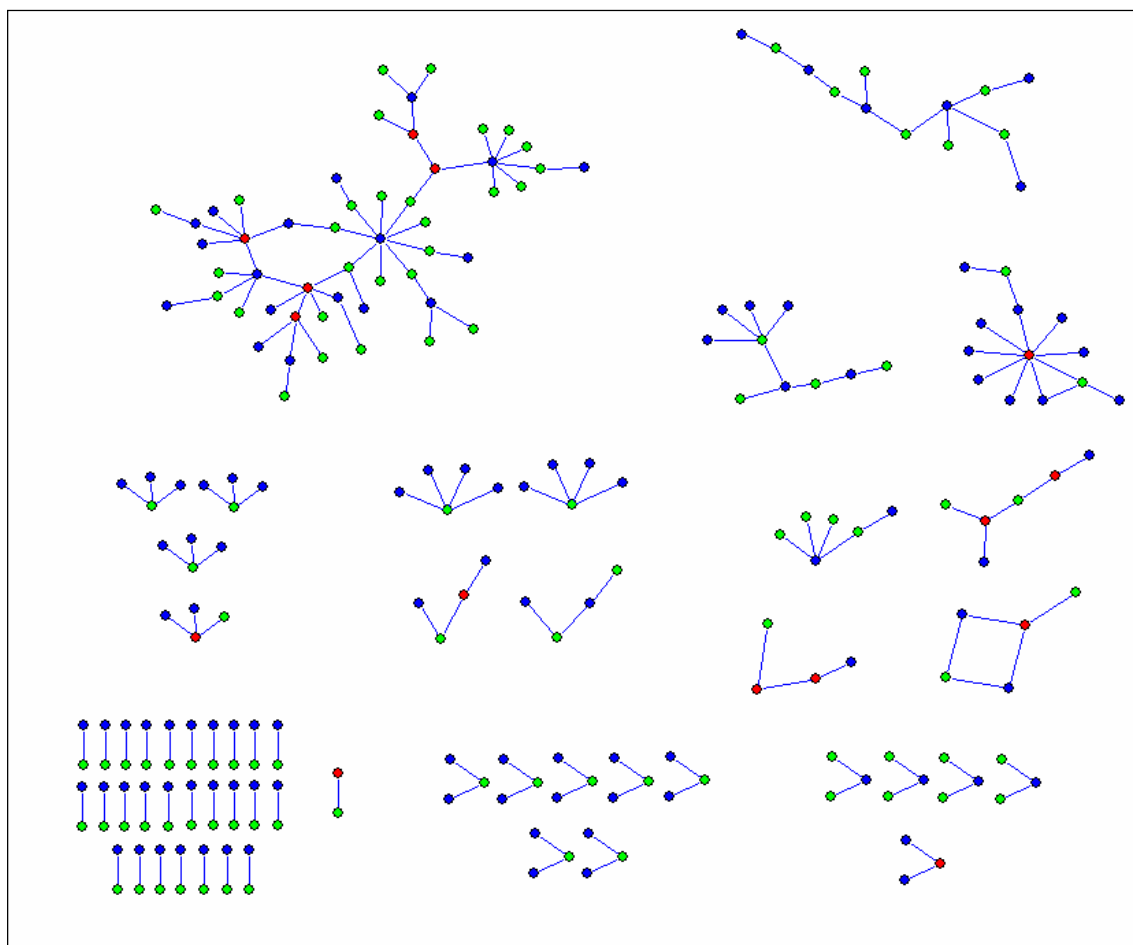


Gráfico 11. Relaciones del periodo divididas en islas

Se han diferenciado un total de cincuenta y nueve islas, la mayor parte de ellas con escasa entidad, aunque cuatro de ellas reproducen en cierta medida una estructura más compleja, los números de relaciones que incluyen no las hacen importantes para el conjunto. En cualquier caso, el planteamiento inicial, en comparación con el dibujo hecho para la primera mitad del siglo y con independencia del menor número de relaciones, es de una mayor simplificación en la estructura. En realidad, detrás se esconde una reducción de las censuras cruzadas entre autores y censores y una mayor presencia de relaciones únicas, que nos apuntan a un incremento del control por parte del Juez, que era, a la postre, el encargado de realizar la comisión. Que sean menos los individuos implicados supone que el control ejercido sobre ellos y, al mismo tiempo, la confianza que se deposita es mayor.

Al trabajar con cifras tan bajas de actores, las búsquedas y reducciones deben hacerse con números de relaciones más bajas. Así, hemos recogido, como en los casos anteriores, el listado de autores según el número de censuras recibidas:

AUTORES	Nº CENSURAS
Alonso, Isidoro [Fray]	8
Iriarte Nieves Rabelo, Tomas	6
Custodio, Manuel	5
Nifo Cagigal, Francisco Mariano	5
Estala, Pedro	4
García Huerta, Vicente	4
Jaén, Francisco [Fray]	4
Peñalba Mira, Antonio [Fray]	4

Tabla 7. Autores según el número de censuras recibidas

La mayoría de ellos nos son reconocibles, destacando Tomás de Iriarte, Francisco Mariano Nifo y Vicente García Huerta, los tres importantes autores del Parnaso español del cambio de siglo. De todos ellos, sólo Alonso, Iriarte, Estala y García Huerta son también censores, lo que denota, como anticipábamos antes, una menor interrelación entre autores y censores que se aprueban mutuamente. Es destacable, no obstante, que de los ocho, tres sean frailes y uno más, Estala, sacerdote, lo que supone que la mitad de estos autores sigue perteneciendo al clero.

Centramos de nuevo nuestro interés en el grupo principal, que, aunque menos numeroso, sigue siendo el más representativo.

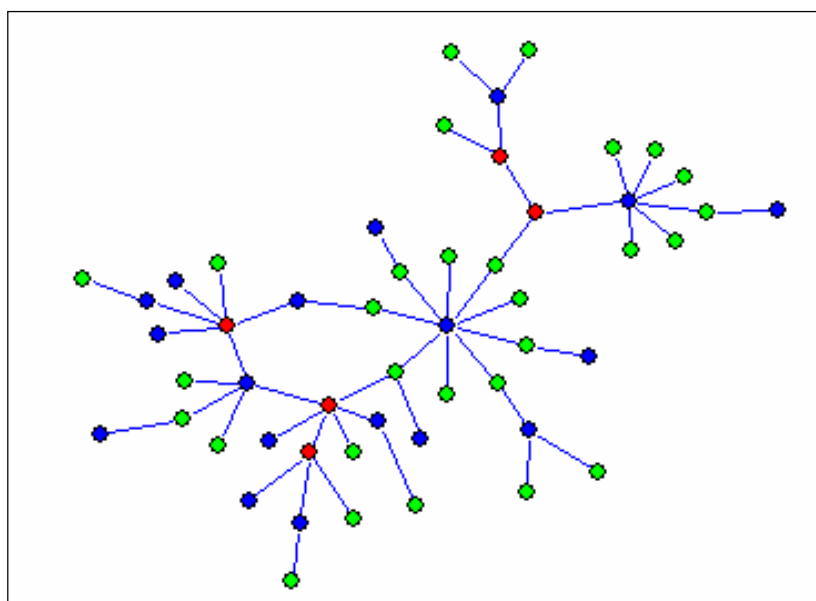


Gráfico 12. El subgrupo principal

Compuesto por cincuenta y dos individuos y articulado en torno a cinco censores-autores que dan cohesión al grupo, existe un claro predominio de los autores, cuyas obras son aprobadas con la única intervención de un censor, lo que explica el menor número de éstos y que los abanicos hayan invertido su color en relación a los que veíamos al principio del capítulo, siendo los autores los que se articulan en torno a los censores.

Así pues, aunque numéricamente inferior, el grupo de censores, sean puros o también autores, cobra, si cabe, más importancia para este periodo. Entre ellos, siguen contabilizándose clérigos, pero con un volumen sensiblemente inferior al observado para la primera mitad. Treinta y ocho censores forman parte de las distintas órdenes religiosas, destacando la presencia de tres jesuitas en los años ochenta, una cifra bastante elevada si tenemos en cuenta que la Compañía había sido extrañada de los territorios de la Corona.

ORDEN RELIGIOSA	RAMA	CENSURAS
Agustinos		2
Basilios		1

Benedictina		5
Capuchinos		4
Carmelitas		2
Cistercienses		1
Clérigos regulares menores		1
Dominicos		2
Escolapios		2
Franciscanos		5
	Franciscanos descalzos	1
Jesuitas		3
Mercedarios		2
Mínimos		3
Oratorio del Salvador		1
Orden de Alcántara		1
Premonstratenses		1
Orden religiosa desconocida		2
Total		38

Tabla 8. Extracción de los censores por orden religiosa

El clero secular experimenta, como el regular, una reducción, por el descenso del número de censuras contempladas, pero con una cifra total de treinta y ocho individuos, igualando al clero regular, nos indica que no se trataba tanto de desplazar a los eclesiásticos de la censura, como a los regulares, o al menos así se tradujo en la práctica. De hecho, sólo encontramos un general y algún abad vinculados a órdenes religiosas, mientras que el número de obispos asciende a catorce (de los cuales sólo dos electos) y el de arzobispos a dos, Rafal Muzquiz⁵⁵⁰ de Santiago de Compostela y Juan Acislo Vera Delgado de Laodice y con honores de la mitra gaditana⁵⁵¹. Además, se incluyen dos Inquisidores Generales, que no estaba representados en ninguno de los

⁵⁵⁰ Fichoz nº 00016395.

⁵⁵¹ Fichoz nº 00016022.

periodos analizados con anterioridad: Felipe Bertrán⁵⁵², que era también obispo de Salamanca, y Manuel Abad Lasierra⁵⁵³, que le sucedió al frente de la Suprema.

La suma de las relaciones del grupo principal es, sin duda, el más claro de todos los gráficos presentados. Manteniendo las cinco relaciones como el mínimo necesario, y reduciendo la búsqueda al grupo principal, la reducción es más que evidente y, por tanto, clarificadora:

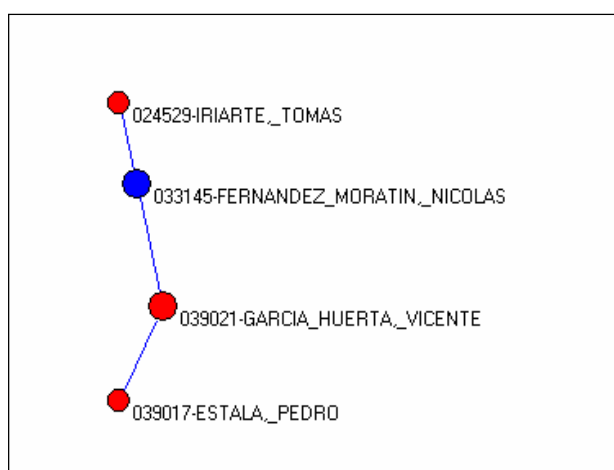


Gráfico 13. Suma de relaciones del grupo principal

Son sólo cuatro los actores con más de cinco relaciones entre ellos, y si se reduce la intensidad a tres sólo incluye a un quinto, Antonio Campmany, el Secretario de la Real Academia de la Historia⁵⁵⁴. De estos cuatro, tres son autores-censores, Iriarte, García Huerta y Estala, y que Nicolás Fernández de Moratín figure como censor puro es porque no se incluyeron en esta red las censuras a sus obras. Así, estamos hablando de quienes eran percibidos por sus contemporáneos como los colaboradores más estrechos de Melón, más otros dos prolíficos autores del momento, como son Tomás de Iriarte y Vicente García Huerta, todos cercanos al círculo de control de los impresos. En definitiva, si bien veíamos que parecía diluirse el papel de los autores-censores para ceder el protagonismo a los censores puros, éstos siguen ocupando un segundo plano y la centralidad, como ocurría a principios del siglo corresponde a censores que son, al mismo tiempo autores.

⁵⁵² Fichoz nº 00016492.

⁵⁵³ Fichoz nº 00016379.

⁵⁵⁴ Fichoz nº 00056898.

Pedro Estala⁵⁵⁵ había nacido en Daimiel en 1757. Ingresó en la orden de los escolapios y fue catedrático de Humanidades y Retórica en el Seminario de San Carlos de Salamanca. El cambio de siglo y su cercanía a Melón le permitieron trabajar como Bibliotecario y profesor de Historia Literaria en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, al tiempo que se intensifica su actividad como censor. Autor de numerosas obras, entre las que destacan traducciones del griego, fue nombrado antes de morir Canónigo de la Catedral de Toledo.

Sobre Nicolás Fernández de Moratín⁵⁵⁶ existe una bibliografía más completa, incluyendo su labor como censor⁵⁵⁷. La mayor parte de ellas las realiza a partir de los años setenta comisionado para ello no sólo por el Consejo⁵⁵⁸, sino también por encargo de la Matritense, a la que pertenecía desde 1777 y de los Reales Estudios de San Isidro, donde ocupó la plaza de profesor de poética. Su periodo de mayor participación fue 1778 y 1780, mostrándose siempre bastante benévolo con los originales que le llegaban.

Si el interés por el control de la imprenta va incrementándose con el paso del tiempo y la producción impresa alcanza su más alta expresión durante la década de los ochenta, no resulta comprensible el bajo índice de censuras registradas en nuestro estudio. El motivo de esta descompensación se encuentra en la práctica real de la censura en los últimos años del siglo. En un intento por luchar contra el descrédito que ya entonces circulaba sobre la ingrata tarea de censurar, Sempere y Guarinos explica el funcionamiento del aparato censor:

“Si se hubiera de dar crédito a algunos Autores extranjeros poco instruidos de la constitución de nuestro gobierno, las censuras de los libros están confiadas

⁵⁵⁵ Fichoz nº 00039017.

⁵⁵⁶ Fichoz nº 00033145.

⁵⁵⁷ En especial, AGUILAR PIÑAL, Francisco, “Moratín y Cadalso”, *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 135-150; ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro, “Nicolás Fernández de Moratín en la Sociedad Económica Matritense”, *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 221-246; y DOMERGUE, Lucienne, “Nicolás de Moratín censor”, *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980) págs. 247-260.

⁵⁵⁸ Sus censuras se conservan en AHN, Consejos, Legs. 5542 y 5544.

únicamente a la corta literatura de algunos Frayles ignorantes, que destituidos de las luces de una sólida instrucción, condenan regularmente las mejores obras, y dan el pase a las que debieran estar sepultadas en el olvido. Acaso esta noticia tiene algún fundamento en la Cédula de 1757, por la qual se nombraron quarenta Censores, la mayor parte Religiosos. Pero la práctica ha variado enteramente. Los libros en que de algún modo se trata de la Religión, se suelen enviar al Cabildo de Curas, o al de San Isidro, o a alguna de las Congregaciones más respetables, o de los Regulares más instruidos. Los de Jurisprudencia van al Colegio de Abogados; los de Medicina a la Academia Médica-Matritense; los de Eloquencia a la Academia Española; los de Historia y Erudición a la de la Historia; y los de Política, Economía, Comercio, Artes, Proyectos, etc., a la Sociedad Económica. Si alguna vez se quebranta este orden, solo suele ser para remitir el libro a algunos sugetos particulares, que se han acreditado en el asunto de que se trata. No ignoro que negociación y la cábala pueden alguna vez invertir este método, ¿Pero en qué parte dexa de haber semejantes maniobras?”⁵⁵⁹

Así pues, el recurso a censores individuales debe entenderse como la excepción y no como la norma. De hecho, no son Moratín y García Huerta los únicos literatos empleados en la aprobación de originales. José Cadalso, que sufrió la censura como autor, comenzó a recibir encargos en 1772⁵⁶⁰ y Gaspar Melchor de Jovellanos desarrolló estas tareas entre 1780 y 1790 en una decena de obras por comisión del Consejo, más las que le encargan la Academia de la Historia o la Matritense.

El caso de Gaspar Melchor de Jovellanos es ejemplar, ya que dentro de su prolífica actividad desempeñó labores de gobierno, se empleó en el uso de la pluma y ejerció como vigilante de lo escrito. Esta triple faceta se repite en otros escritores contemporáneos, por lo que el estudio de su persona puede ayudar a construir un modelo sobre los escritores-censores y su vinculación con el poder. Que Jovellanos se implicó de lleno en los asuntos públicos, aún estando exiliado, no es nada nuevo. Desde Sevilla, Madrid, Gijón o Mallorca escribió sin descanso sobre los más diversos asuntos. Entre su infatigable actividad destacan los numerosos informes que escribió sobre todos los ámbitos de la vida pública, desde los cuales defendía su ideario

⁵⁵⁹ SEMPERE, *op. cit.* (nota 19), págs. 70-71.

⁵⁶⁰ Sobre Cadalso como censor, DEACON, Philip, “Cadalso, censor del Consejo de Castilla”, *Revista de Literatura*, XXXVIII (1970) 75-76, p. 172.

reformista. Los cambios no eran fáciles, y toda reforma acarreaba resistencias y represalias que nuestro protagonista vivió en su propia piel, ya que sus propuestas le provocaron destierros y caídas en desgracias. Esto, sin embargo, no supuso un freno para su afán reformista, y seguirá escribiendo con el único objetivo de servir a su patria y lograr la felicidad de sus compatriotas⁵⁶¹.

Instituciones al servicio de la censura

A excepción del breve periodo en que Curiel logró mantener su red de censores y subdelegados, a penas una década de todo el siglo, el control de los libros no fue ejercido de manera privativa por un número cerrado de censores. El fracaso en los reiterados intentos de profesionalizar la censura que acabamos de ver no residía tanto en la inviabilidad de los proyectos como en la influencia que los demás acontecimientos políticos tenían en la política de imprenta.

En el ejercicio de la aprobación de manuscritos participan, a lo largo del siglo, un conjunto variado de agentes. Desde oscuros personajes casi anónimos de los que sólo conocemos el nombre a ilustres miembros de la República literaria. El órgano designado para la realización de esta comisión, fuera el Consejo de Castilla o el Juzgado de Imprentas, tenía siempre presente la idoneidad de la persona elegida, por lo que el estudio de sus trayectorias profesionales nos suele revelar importantes personajes vinculados a órdenes religiosas, dignidades eclesiásticas, magistrados civiles, funcionarios de la Administración del Estado, altos cargos de Consejos y Secretarías, como hemos podido ir viendo a lo largo de este capítulo. En algunos casos, el encargo de aprobación se realizaba a una persona concreta, en atención a su preparación para llevar a cabo la comisión, pero en otras ocasiones se podía asignar a colegios o a órdenes, como los teólogos de Alcalá, los canónigos de San Isidro, el claustro del Colegio Imperial, a la Compañía de Jesús o al Orden de Predicadores, por poner los más frecuentes.

⁵⁶¹ PAMPLIEGA PEDREIRA, Víctor, "Jovellanos y la censura", en *Jovellanos, el valor de la razón (1811-2011). Congreso Internacional Jovellanos (1811-2011), Gijón, mayo 2011*, Acción Cultural Española e Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, págs. 405- 412.

Los cambios en el mecanismo de censura en las últimas décadas del siglo XVIII no se manifestaron en un cambio normativo, por más que Godoy lo intentara con su Juzgado de Imprentas. Fue la práctica cotidiana la que determinó un cambio de estrategia que, a la postre, resultaría más eficaz y menos costoso en términos de desprestigio social de esta ingrata actividad. Aunque estas instituciones culturales han sido excluidas de las redes al no poder determinar la responsabilidad individual sin consultar exhaustivamente sus fondos, conviene detenernos no tanto en quienes realizaran el informe, dato que también es interesante, como en las propias instituciones, por son todos sus miembros los que, en definitiva, secundan las opiniones que se reciben en el Consejo de Castilla, y como tales son valoradas para proceder a la concesión o no de la licencia de impresión solicitada.

La Real Academia de la Historia

Si hay un órgano vinculado a la censura ese es la Academia de la Historia. Su origen se remonta a una tertulia privada que se reunía desde 1735 en casa del abogado Julián de Hermosilla⁵⁶². En ella, un grupo heterogéneo de eruditos y profesionales compartían dos características: su interés por la historia y el desempeño de cargos importantes dentro de núcleo administrativo, militar y eclesiástico del Estado. Sus miembros pronto se dotaron de unas normas de funcionamiento interno y fueron logrando un reconocimiento oficial, primero al trasladar sus reuniones a la Biblioteca Real en 1736 y después con el decreto de protección que se materializó en su conversión en la Real Academia de la Historia en 1738. La institucionalización de la Academia suponía la creación de una estructura jerárquica oficial en la que se recogían las intenciones de reformas y difusión del conocimiento propia de los ilustrados, combinando las estructuras tradicionales con la igualdad, al menos teórica, de sus miembros.

El caso de la Academia de la Historia no es único, ni en España (donde surgen varias, destacando por su importancia la Academia Española, que es anterior a la de Historia,

⁵⁶² Sobre los orígenes y desarrollo de la Real Academia de la Historia es imprescindible la consulta de NAVA RODRIGUEZ, Teresa, *Reformismo Ilustrado y Americanismo: la Real Academia de la Historia (1735-1792)*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1988, y VELASCO MORENO, Eva, *La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una institución de sociabilidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, 2000.

la de Bellas Artes de San Fernando o la Médica Matritense) ni en Europa, en lo que se ha considerado un fenómeno continental de consolidación y oficialización de espacios de sociabilidad, como eran las tertulias, en órganos de la propia Monarquía⁵⁶³.

La creación de estas instituciones suponía el respaldo por parte de la monarquía a los impulsos ilustrados de reforma, pero al mismo tiempo suponía la posibilidad de ejercer un control sobre la actividad que desarrollaran. A cambio de esta tutela, los miembros de la Academia, 24 numerarios y 24 supernumerarios⁵⁶⁴, obtenían no pocos privilegios. Algunos de carácter individual, ya que eran considerados Criados de la Casa del Rey, con los privilegios e inmunidades que conllevaba. La calidad de sus miembros estaba asegurada por las condiciones impuestas para ser admitidos como académicos. Según el artículo 2 los Estatutos, los académicos debían ser “sujetos todos juiciosos, decentes, bien opinados”, además de haber demostrado aplicación e inclinación por los trabajos que la Academia tenía asignados, siendo sometidas las candidaturas a votación de sus miembros, sin necesidad de confirmación real.

Acreditada su valía intelectual, no cabe extrañar el encargo de determinados proyectos por parte del monarca. El mecanismo de trabajo era el mismo que el empleado para los proyectos propios. Uno o varios académicos se encargaban de elaborar una ponencia, que se presentaba a los demás miembros en la reunión semanal y se debatía, debiendo ser sus conclusiones aprobadas por la mayoría de los presentes. El procedimiento era idéntico cuando era un académico el que pretendía publicar utilizando los privilegios propios de la Academia, que tiene su propio impresor, lo que supone una censura previa de carácter interno, en la que todos los académicos son censores de sus compañeros. Esta práctica no les eximía de cumplir con el procedimiento ordinario de revisión⁵⁶⁵. Igualmente se aplicó cuando la Academia

⁵⁶³ En este sentido es interesante la comparación que Eva VELASCO MORENO realiza entre los orígenes y constituciones de la Real Academia de la Historia y la Academia Real de Inscripciones de Francia en su artículo “Las Academias de la Historia en el siglo XVIII: una comparación entre Francia y España”, en *El mundo hispánico en el siglo de las Luces*, págs. 1319-1329.

⁵⁶⁴ Los estatutos de 1701 de la Real Academia de la Historia se pueden consultar en el anexo de la tesis ya citada de NAVA, *op. cit.* (nota 562), págs. 867-877.

⁵⁶⁵ En algunos casos el informe negativo de los académicos impedía al interesado utilizar su condición de tal, pero no impedía la impresión de la obra. El objetivo era que no se relacionara el contenido de la obra con la Institución por las afirmaciones que podía contener y que no se ajustaban al sentir general

recibía el frecuente encargo de censurar las obras que llegaban al Consejo de Castilla, por lo que los responsables de la censura no son los redactores de la misma, sino toda la corporación.

Si bien hemos hecho referencia a la escasa o nula remuneración de los censores, los académicos no tenían estipulado un salario, pero sí tenían un compromiso previo con el monarca, ya que a cambio de los privilegios de los que disfrutaban aceptaban la responsabilidad de desempeñar ciertas actividades al servicio de los intereses de la Monarquía.

La Academia de la Historia, como las demás Reales Academias, había nacido para difundir a través de sus publicaciones los nuevos principios del saber acordes a los nuevos postulados ilustrados. Eran una parte fundamental del programa cultural de la Monarquía, que pretendía el progreso de la sociedad mediante una correcta instrucción. Cada academia dentro de la especialidad asignada en su propia constitución formaba parte del proyecto ilustrado de reforma y fomento de las letras, por lo que su encargo de participar en la censura previa se percibe como parte de sus obligaciones. Siendo instituciones eruditas vinculadas directamente con los impresos, se van articulando como los nuevos actores especializados.

Uno de los elementos que no se puede obviar al analizar la labor central que tiene la Real Academia de la Historia dentro del mecanismo de examen previo de los impresos en la segunda mitad del siglo XVIII tiene que ver con el hecho de que desde 1764 su presidente es, precisamente, uno de los puntales de la propia reforma ilustrada, Pedro Rodríguez de Campomanes, que era, a la sazón, fiscal del Consejo y Cámara de Castilla. En atención a los expedientes de censura que se conservan en la Biblioteca, que conserva los originales desde 1746, durante su dirección, la Academia cuenta con un promedio de cuarenta censuras al año hasta 1793, momento en el que comienza a

de sus miembros, aunque no se pudiera permitir su circulación sólo por este motivo. Luis Germán Ribón en 1749 o Matías Huarte Lubian en 1758, cuya negativa va firmada por Campomanes, son los mejores ejemplos de ello. En este último caso el secretario de la Academia justificó la denegación de la licencia de usar el título de académico por el hecho de que la Academia no tenía opinión formada sobre el tema de la obra, la predicación del Apóstol Santiago en España. VELASCO, *op. cit.* (nota 563), pág.211.

decrecer⁵⁶⁶, al igual que la propia producción impresa. A finales de siglo la Academia solicitó que se le exonerara de tal labor, ya que según los propios académicos ocupaba la mayor parte de sus tiempo, lo que les impedía desarrollar el resto de tareas que el monarca les había encomendado en sus Estatutos y que eran el motivo de existencia de la institución.

Una de las ventajas de recurrir a la Academia de la Historia era que la revisión de originales se solía despachar con rapidez, y en un plazo aproximado de quince días la corporación, en su reunión semanal, se pronunciaba sobre el dictamen propuesto por el académico que había sido encomendado para la revisión, siendo normalmente coincidentes el sentido del censor y de la mayoría de los presentes, aunque se podía acordar lo contrario. Es el caso del *Político gobierno* de Ramírez de Barragán, cuyo censor dictaminó que “en toda la obrita sólo he hallado dos reparos fáciles de enmendar” pero el certificado enviado al Consejo por Flores, en su calidad de Secretario, estipula que se “estimó conveniente se negase al autor la licencia que solicita, puesto que la obra carece de erudición y literatura que pide la dignidad de la materia”⁵⁶⁷, seguramente después de un debate entre los académicos sobre el alcance de los reparos presentados por el encomendero. Cuando se excedía el tiempo prudencial para la examinar la obra, y ante la instancia por parte del Consejo a actuar con mayor celeridad, se apelaba a la necesidad de la lectura y meditación de las fuentes para justificar el retraso, pues los informes devueltos al Consejo para que éste adoptara su decisión final debían ir perfectamente justificados, de manera que los consejeros tuvieran los elementos suficientes para valorar la idoneidad del manuscrito presentado. La temática de las obras enviadas a la Academia de la Historia no se limitaba a la que le daba nombre, sino que incluía más materias, como las de geografía o, incluso, obras de ficción, aunque generalmente se buscaba la valoración del trasfondo histórico, que era fundamental en la articulación de un mensaje claro.

⁵⁶⁶ Se pude ver FERNANDEZ DURO, Cesáreo, “Catálogo sucinto de censuras de obras manuscritas pedidas por el Consejo a la Real Academia de la Historia antes de acordar las licencias de impresión”, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, XXXV (1899), págs. 369-434.

⁵⁶⁷ RAH, Censuras, 8013-24. Citado por LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 860.

Sempere y Guarinos muestra en su famoso *Ensayo de una biblioteca española de los mejores autores del reinado de Carlos III* la satisfacción que le produce la reorganización de la censura y la importancia que atribuye a que la Academia la asuma como una de sus responsabilidades, al tiempo que critica a quienes desde fuera, sin conocer el mecanismo, asignan esta función al clero:

“Fuera del objeto principal de su instituto, la Academia se encarga de censurar un gran número de libros por comisión del Supremo Consejo de Castilla. Si se hubiera da dar crédito a algunos autores extranjeros poco instruidos de la constitución de nuestro gobierno, las censuras de los libros están confiadas únicamente a la corta literatura de algunos frailes ignorantes, que destituidos de las luces de una sólida instrucción, condenan regularmente las mejores obras y dan el pase a las que debieran estar en el olvido.”⁵⁶⁸

Opiniones como ésta demuestran que la revisión crítica de originales, en tanto que actividad lectora y reflexiva, encajaba a la perfección en los hábitos de los académicos, cuya actividad cotidiana estaba relacionada con la lectura y el debate. Los libros están presentes en la actividad cotidiana de los censores desde la responsabilidad de redactar un *Diccionario Histórico* hasta las sesiones de lectura de disertaciones que luego tomarán forma como publicaciones. Como explicaba López-Vidriero, “la lectura crítica forma parte de su vida, sólo que la finalidad es distinta: como ciudadano le sirve para su propio cultivo, como censor contribuye a la educación de la nación”⁵⁶⁹.

Otras instituciones

Si tomamos como referencia la *Guía de Forasteros*, entre las instituciones culturales que se recogidas y enumeradas con su Director y Secretario, destacan además de la de la Historia, la Real Academia Española, el Real Protomedicato y la Real Academia Medica Matritense. Eran, sin duda, las mejor posicionadas para evaluar el contenido de las obras que sobre sus objetos de estudio se presentasen ante el Consejo. A éstas habría que añadir, a la vista de la documentación cuatro instituciones más: la

⁵⁶⁸ *Ibidem*, pág. 859.

⁵⁶⁹ *Ibidem*.

Academia Latino-Matritense, el Colegio de Abogados de Madrid⁵⁷⁰ y los Reales Estudios de San Isidro⁵⁷¹, herederos del antiguo Colegio Imperial que los jesuitas regentaban en la Villa y Corte y que como hemos visto también tuvo un papel activo en la censura de la primera mitad del siglo.

No es necesario detallar el procedimiento que seguían, ya explicado para la de Historia, ni la justificación de su elección. Tampoco parece necesario resaltar la temática de los temas escogidos, porque el nombre de las instituciones suele ser suficientemente explícito. El Real Protomedicato y la Real Academia Médica de Madrid se alternan en la evaluación de las obras médicas, farmacológicas, quirúrgicas y asimiladas, siendo además sus miembros en muchos casos los mismos individuos, reputados médicos al servicio de la Corona y autores ellos mismos de tratados similares a los que evaluaban⁵⁷². La corporación que ha pasado más desapercibida en la historiografía ha sido el Colegio de Abogados de Madrid, en el que también se dejó sentir el peso de Campomanes, lo que justifica que se recurriera ella y no individuos independientes para la valoración de tratados jurídicos, como el que en 1772 presenta Pedro Castro en defensa de la tortura⁵⁷³. Con los Reales Estudios de San Isidro ocurre algo parecido. El Colegio Imperial había sido co-partícipe de la censura en la primera mitad del siglo XVIII, cuando la influencia jesuítica llega a su máximo esplendor, pero había sido por el encargo que sus profesores habían recibido. Tras la expulsión de los jesuitas y su reconversión en un centro de estudios laico, las censuras estarán dirigidas al colectivo de profesores, siendo el Director de Estudios⁵⁷⁴ el encargado de distribuir las peticiones entre el personal docente del momento, pero siendo él quien devuelve

⁵⁷⁰ Fichoz nº 0000187C.

⁵⁷¹ Sobre la institución, SIMON DIAZ, José, *Historia del Colegio Imperial de Madrid (del Estudio de la Villa al Instituto de San Isidro: años 1346-1955)*, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992.

⁵⁷² El Real Tribunal del Protomedicato era una institución de origen medieval que agrupaba a los principales médicos del país, generalmente médicos de cámara de los reyes, que velaban por la práctica y enseñanza correcta de la medicina, la farmacia y la cirugía, de manera parecida a un colegio profesional, pero combinándolo con la docencia que más tarde se reconoce a las facultades, pues sus miembros eran también los responsables de examinar a los candidatos a médicos. La Academia de Medicina, en cambio, era una institución de nuevo cuño, que como las de la Lengua y la Historia había comenzado como tertulia, en este caso en la rebotica de la farmacia de José Ortega en la calle Montera, y que en 1735 obtendrá el reconocimiento real por parte de Felipe V.

⁵⁷³ Fichoz nº 00038796.

⁵⁷⁴ El primer Director fue Villafañe, aunque para el puesto se postularon, entre otros, Gregorio Mayans.

al Consejo los dictámenes. Pero en ambos casos se cumplía el objetivo: una censura intelectualmente sólida.

Otra institución cultural empleada para la censura fue la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, fundada en 1775 por iniciativa de Campomanes, que impulsa no sólo la de Madrid, sino que anima su proliferación por toda la geografía peninsular. El Consejo encarga a sus socios, normalmente, censuras relacionadas con temas de agricultura, industria, artes y oficios, las actividades en torno a las cuales giraba su actividad. La tramitación de las solicitudes llegadas desde el Consejo transcurrirían de manera similar a como lo hacían en las Academias, aunque el volumen de trabajo fue sensiblemente menor. La Matritense, que es con diferencia la que mayor número de censura realiza, creará para ello la figura de censor fijo y nombrará en 1777 al presbítero Francisco Vidal⁵⁷⁵, lo que demuestra, una vez más, que sus votos religiosos no le incapacitaban para revisar los impresos, pero que tampoco era el motivo por el que realizaba el trabajo.

El Vicario de Madrid

Una institución ajena, estrictamente hablando, al entramado estatal pero que durante todo el siglo tendrá un papel primordial en la aprobación de impresos fue el Vicario Eclesiástico de Madrid. Su nombre aparece en un elevado número de expedientes conservados en el Archivo Histórico Nacional como autoridad delegada por el Consejo de Castilla para evaluar las solicitudes presentadas.

Ente los expedientes y los impresos conservados se encuentran numerosas licencias del ordinario⁵⁷⁶. Muchas de ellas son, en realidad, parte de los trámites requeridos para la concesión del *imprimatur*, como hemos visto al repasar la legislación, pues era necesario el visto bueno del ordinario para todas las obras religiosas o escritas por algún clérigo. La práctica común era que los interesados presentaran junto con su memorial de petición la aprobación del ordinario, aunque en otras fue preciso

⁵⁷⁵ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 584.

⁵⁷⁶ Dentro de la base de datos bibliográfica que forma parte de Fichoz existe un apartado específico donde indicar si la obra se imprime junto con las licencias, lo que permitiría en caso de realizar un estudio exhaustivo sobre el tema, extraer los números y casos concretos.

reclamarlas antes de continuar el proceso⁵⁷⁷. Sin embargo, habría que diferenciar este tipo de licencias con las veces en las que el Juzgado de Imprentas requiere al Vicario como censor cualificado. La dificultad estriba en que en ambos tipos la aprobación va acompañada de la indicación de que se ha visto la obra por mandato de los señores del Consejo.

Al Vicario de Madrid acudía el Consejo de Castilla para la censura de todo tipo de obras, no solo las de contenido religioso como son, por ejemplo, las piezas teatrales. El Vicario comisionaba para la revisión a su Teniente, a clérigos de conventos, parroquias o capellanías de la capital, o a laicos de confianza, quienes realizaban el encargo sin ninguna remuneración. Recibidos en la Vicaría, los pareceres se resumían o se copiaban íntegramente y se devolvían junto con el original al Consejo, pero sin incluir el nombre del censor que había hecho el examen, porque era el Vicario el que asumía la responsabilidad⁵⁷⁸. Esto dificulta analizar quiénes leyeron realmente el manuscrito, aunque a efectos jurídicos lo que interesaba es que era la opinión que la principal autoridad episcopal de Madrid tenía al respecto.

Es, por tanto, el Vicario una institución más empleada para censura especializada al servicio del Juez de imprenta para evaluar los memoriales de impresión que se reciben, con la ventaja de que no era el Juez quien tenía que buscar quien leyera y evaluara la obra, sino el delegado episcopal, que sin ofrecer tampoco remuneración tenía una autoridad jerárquica sobre el clero madrileño que facilitaba la aceptación por parte de los designados, aunque alguno (veremos un caso en el siguiente capítulo) ofreciera también al Vicario ciertas reticencias. Recurrir a esta dignidad eclesiástica parece chocar con la tónica general de secularización de la censura, pero en realidad lo importante no era que quien revisara una obra fuera o no sacerdote, sino que tuviera los conocimientos y la erudición necesaria para hacerlo con la suficiente solvencia, además de que dicha petición emanaba de la autoridad real y no de la eclesiástica.

⁵⁷⁷ Así lo recoge también para el siglo anterior BOUZA, *op. cit.* (nota 127), pág. 88.

⁵⁷⁸ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 582.

Del mismo modo que con los censores oficiales o con los censores particulares, es necesario recordar que la decisión final sobre la concesión o no de la licencia recaía en el Consejo, que podía asumir el contenido del informe recibido, ignorarlo o pedir otro complementario a otra persona o institución, en aras de asegurar la idoneidad de imprimir el manuscrito presentado.

Si la creación de un cuerpo profesional de censores fue un fracaso, la utilización de otras instituciones culturales como censores cualificados y especializados podría considerarse como un éxito. La práctica se remonta a los propios orígenes de la censura, pero sólo se hace habitual en la segunda mitad del siglo, cuando su desarrollo es mayor. El intento de reforma de Melón en fechas muy tardías demuestran, no obstante, que esto fue una solución condicionada por la propia necesidad y tras la cual se deja ver la mano de Campomanes, que controla la elaboración de los informes de censura, y por tanto del mensaje que se quiere difundir, valiéndose para ello de las distintas corporaciones, bien directamente o mediante sus redes clientelares, lo que le sitúan como la pieza clave del complejo entramado burocrático de la censura.

3.5. Balance secular

Resulta complicado resumir en unas pocas palabras la evolución secular de un aparato tan complejo como el de la censura. Sin embargo, la metodología empleada nos facilita esta labor. La selección de tres periodos distintos a lo largo de la centuria nos ha permitido indagar de manera específica en las coyunturas propias de cada momento, pero es necesario buscar los puntos comunes y los elementos diferenciales.

La premisa de la que partíamos al enunciar este trabajo, la existencia de redes de poder formadas por autores y censores por las que transcurre el control de la imprenta ha quedado sobradamente demostrada. Pero como explicábamos al detallar la metodología, cada uno de los gráficos mostrados es una suerte de foto fija que pretende mostrar las complejas relaciones sociales que, con sus cambios y mutaciones, se producen durante un periodo de tiempo.

Las redes existen, pero su tamaño, composición y características internas difieren entre sí. El primer aspecto sobre el que debemos fijarnos es el cuantitativo. A pesar de que la producción manifiesta un sostenido crecimiento a lo largo del siglo, la existencia de censuras expresa un claro retroceso. Entre las causas de este descenso destacan, por una parte las numerosas aprobaciones que en los primeros años acompañan los originales y cuyo contenido son textos elogiosos al autor y a la obra que nada tienen que ver con los duros textos legales que se asocian al término censura. La reducción y posterior prohibición de estos paratextos influye en el resultado. Por otra parte, influye el incremento de las reimpresiones, para las que era obligatoria la petición de licencia por parte del interesado, pero que no siempre precisaba de un nuevo examen por parte de los censores. Finalmente, la utilización progresiva de las numerosas instituciones culturales de la Corte en detrimento de los censores-autores individuales, modifica la concepción de los dictámenes, aunque no la esencia de los mismos.

En general, dentro de las redes, con independencia del periodo del siglo, el papel central correspondió a censores que, además, también participaron del mundo editorial como autores. Son ellos los que articulan las redes y ponen en relación, directa o indirecta, a los diferentes grupos de censores y autores. A excepción de Carlos de la Reguera para las primeras décadas del Setecientos, las grandes figuras de la censura fueron autores y censores: Torres Villarroel, Pérez Pastor, Estala o Fernández de Moratín conocieron ambos lados de la censura, colaboraron con el Consejo en la revisión de manuscritos de sus colegas y, en ocasiones, también sufrieron su efecto.

A pesar del protagonismo que se ha dado en la historiografía al Tribunal de la Inquisición como herramienta de control de libros, ésta no fue la más afectiva de la que dispusieron los sucesivos Monarcas Católicos. Es el Consejo de Castilla el que ejerce un férreo control de las obras que pueden imprimirse y circular por los territorios de la Monarquía. Se valió, para ello, en primer lugar, de los Jueces de Imprenta, seleccionados de entre los más prestigiosos juristas que integraban el

Consejo Real. Ellos fueron el primer filtro y quienes fomentan o permiten la creación de esas redes de censores que hemos visto reproducidas.

Puesto que el trabajo de examinar todos los originales manuscritos que llegaban a las Escribanías de Gobierno del Consejo exigía más tiempo del que disponía el Juez de Imprentas, éste se valió de otras personas, los censores, para la revisión y corrección, cuando fuera necesario, de los textos que se intentaban imprimir. Es aquí donde las continuidades se rompen. Si para los primeros años hemos observado una presencia intensa de clérigos regulares y seculares, en los últimos gráficos ese peso se había diluido, dando paso no tanto a laicos como a las instituciones culturales protegidas por el Monarca, que por su composición eran mixtas, pero por su función, seglares.

Cabe destacar que en el ánimo de todos los Jueces de Imprenta estuvo siempre la búsqueda de la efectividad en la censura. Por ello se empleaban en la ingrata comisión de censurar a los sujetos que en cada momento resultaban más idóneos. Ninguno de los intelectuales, como veremos, se manifiesta en contra del sistema de censura, sino del uso que se hace de él. Y detrás puede encontrarse que ellos mismos formaban parte del sistema.

Si bien la Inquisición ha sido sobrevalorada, no así el papel jugado por el estamento eclesiástico. A pesar de las críticas a los frailes y sacerdotes empleados en la censura, la presencia de clérigos en el aparato censor es una constante a lo largo del siglo. Sin ir más lejos, uno de los últimos Jueces de Imprenta, Melón, era sacerdote, lo que desmiente un supuesto proceso secularizador de la censura. Sí es cierto que se emplean cada vez menos religiosos, pero éstos estarán presentes tanto tiempo como el propio sistema censor, e, incluso, le sobrevivirán, pues la supresión de la censura previa decretada en Cádiz no eximió del control de las obras de fe por parte de los ordinarios. Pero tampoco la presencia de eclesiástico fue inmóvil. El peso que los regulares ejercieron se fue reduciendo en beneficio del clero secular, cuyo control por parte del Monarca, gracias a la disposición que podía hacer de los beneficios y dignidades desde el favorable Concordato de 1753, era mucho mayor. Ahora bien, el monopolio que en la práctica ejercieron los jesuitas para las obras de astrología y

astronomía durante los reinados de Felipe V y Fernando VI no tendrán equivalente para el resto del siglo. Ni si quiera con la dirección del Juzgado ejercida por un jesuita como Curiel.

Los intentos reiterados de reforma del aparato censor resultaron, como hemos visto, un fracaso. Pero no lo fue el control ejercido sobre la imprenta. La configuración del sistema de censura permitió una adaptación progresiva que trasladó el centro de las redes de censura de los conventos, universidades y colegios a las Academias. Sus miembros serán los responsables del mayor número de censuras, pero ni siquiera este traslado suponía, en realidad, un cambio sustancial. Reguera o Pérez Pastor ya habían sido destacados Académicos, como el propio Curiel. La diferencia no es a quién se delega, sino lo que motiva la elección. Durante la primera mitad del siglo se seleccionan a sujetos que, casualmente, suelen ser profesores y/o académicos, además de autores de obras propias. En la segunda, en cambio, se encarga una corporación, compuesta por los más importantes autores del momento y miembros de la alta Administración del Estado. Los censores reúnen las mismas características personales y profesionales, pero la responsabilidad se hace colectiva, reuniendo entre todos sus miembros esas cualidades que tan difícil era encontrar en una sola persona.

4. Las lecturas de las censuras

Más allá del trámite burocrático-judicial que supone la censura, los censores son, al fin y al cabo, los primeros lectores de las obras, pero lejos de ser sujetos pasivos, su opinión sobre el original tiene un efecto concreto, ya que se puede transformar en norma y puede modificar la estructura, el contenido e incluso el título del original que examinan. Su papel es, por tanto, determinante y no debe dejarse a un lado en un estudio sobre la producción escrita dieciochesca.

En el imaginario colectivo existe una concepción negativa del trabajo de los censores. Ya entre sus contemporáneos su papel no era bien visto y son, por ejemplo, los viajeros extranjeros los que en sus relatos más contribuyen a este desprestigio, aunque la especial atención que se ha prestado a la acción de la Inquisición en la historiografía no ha contribuido a mejorar esta imagen. Los bien informados trabajos de Déforneaux o Domergue ayudan a visualizar la intolerancia de las autoridades inquisitoriales, de manera que parece que la producción impresa estuvo condicionada por el temor de los autores a hacer frente a la censura inquisitorial. Sin embargo, como ya hemos visto, no fue el Santo Oficio la principal arma de la Monarquía para controlar la circulación de impresos, sino el Juzgado de Imprentas y los censores que de él dependían. No en vano es el Consejo Supremo de Castilla y no el de la Inquisición el que recibe el encargo de velar por el contenido de los libros. En realidad, el Consejo Real también ejercía, dentro de sus atribuciones, el control de la circulación de impresos (mediante la visita de librerías) y la vigilancia el cumplimiento de privilegios, pudiendo mandar recoger aquellas obras que por cualquier motivo no debían estar en circulación, práctica que se llevará a cabo como veremos para algún caso concreto. Sin embargo, el estudio de esta actividad de manera exhaustiva escapa al objetivo de la presente tesis.

Como se desprende de sus propias palabras, los censores de la Ilustración eran conscientes de lo ingrato de su trabajo, pero concebían su acción como algo positivo y eficaz, pues era su contribución al enriquecimiento de la sociedad de su tiempo, en la

búsqueda, como escribe López-Vidriero, de “un hombre nuevo, más sabio, más útil y más sociable”⁵⁷⁹.

El objetivo del presente capítulo es, por tanto, arrojar algo de luz sobre las vidas de esos personajes que hemos visto que forman las redes de la censura, analizar cómo era su práctica cotidiana, los problemas a los que tenían que hacer frente al desarrollar este trabajo, qué aspectos se reflejan en sus textos, cómo se comportan ante determinadas coyunturas específicas, cómo su acción incide en los originales presentados por los autores.

La importancia de las censuras no reside sólo en extraer de ellas información útil para el análisis de las redes de la censura y comprender su funcionamiento. También supone acercarse a la relación que se establece entre el texto presentado en manuscrito y su primer lector, el censor, que lo es antes incluso de que la obra salga de las prensas. Como se verá, la censura incide de manera directa sobre el texto que ve después la luz, transformándolo. Si bien hablar de los censores como co-autores sería excesivo, sí que hay que considerar el papel que ellos jugaron en la configuración de las obras. Pero a diferencia trabajo realizado por editores e impresores en las modificaciones textuales previas a la impresión, la intervención de los censores no había sido ponderada hasta el momento.

4.1. La tramitación de los expedientes

Ya hemos apuntado a lo largo de la exposición que no existía una nomenclatura única para hacer referencia a la censura. Muchos escritos se titulan censuras sin serlo, y otros, por el contrario reciben los más variados nombres (informes, valoraciones, dictámenes, etc.) cuando realmente son censuras. Esta confusión nace de las distintas acepciones que admite esta palabra. Sin embargo, la diferencia es, procesal y conceptualmente hablando bastante sencilla: en las censuras administrativas, que son las que más nos interesan, se valora si la obra examinada merece darse a la imprenta

⁵⁷⁹ LÓPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 867.

para hacerse pública por no ir contra la moral, las regalías del Rey ni la fe e Iglesia católicas. El resto son juicios sobre premios literarios, opiniones sobre temas concretos, disputas y críticas literarias o valoraciones sobre las obras a petición del propio autor o de alguna autoridad o institución.

La confusión se refleja en la propia documentación, de manera que lo que nosotros conocemos como censuras que son llamadas dictámenes, pareceres, aprobaciones, censuras, exámenes, etc. Debemos, por tanto, reconocer la dificultad existente para diferenciar el origen de cada aprobación si no es posible cruzar la información con otra documentación de archivo, lo que ocurre en contadas ocasiones. La lectura de los propios textos tampoco es mucho más esclarecedor, ya que en ocasiones el carácter literario de muchas de ellas evita mencionar por encargo de quién la han realizado, mientras que otras, aunque incluyen el tratamiento (normalmente “Vuestra Merced” o “Vuestra Alteza”), éste puede hacer referencia a varias de las autoridades implicadas, lo que no sirve como indicador. No hemos encontrado tampoco ninguna pauta de comportamiento que ayude a determinar porqué unas se imprimen y otras no. Lo que sí sabemos es que todas las censuras no se imprimen con el original, y que su presencia tampoco era obligada, aunque sí sabemos que se va reduciendo su presencia con el paso del tiempo.

Las censuras, desde el punto de vista administrativo, se integran dentro de un expediente judicializado como partes probatorias⁵⁸⁰. A estos textos que a veces aparecen en las páginas iniciales de los libros y que otras sólo se conservan en los archivos, hay que sumar otros paratextos que suelen adjuntarse a las obras, como son las dedicatorias, los elogios, cartas, poesías (octavas, sonetos, romances y décimas son las más frecuentes) que se incluyen en los libros junto con las aprobaciones y licencias (que incluyen, hasta su desaparición la tasa), y que a su vez, por su contenido se asemejan más a elogios que a textos administrativos⁵⁸¹.

⁵⁸⁰ Así se desprende del estudio de GARCIA MARTIN, *op. cit.* (nota 74), sobre la dimensión judicial del proceso de concesión de licencias.

⁵⁸¹ Basta leer, por ejemplo, el tono de la censura que don Lucas Ortiz de Zugasti, Abogado de los Reales Consejos, hace a *El Gallo Español* de Torres Villarroel, y que se publica con la obra: TORRES VILLARROEL, Diego, *El Gallo Español, respuesta al Conde de Meslay por el gallo canta a las doce de la noche en*

Así pues, no todas las aprobaciones que conservamos tienen carácter oficial, sino que muchas son encargadas por los propios autores a amigos, conocidos o compañeros suyos. El objetivo es reforzar el manuscrito que se presenta al Consejo para que tanto éste como los censores por él designados sean más receptivos. La obra de Escolano de Arrieta, que se presentó con la aprobación previa del fiscal del Consejo, Pedro Rodríguez de Campomanes, fue la mejor carta de presentación posible. Es frecuente también que los autores pertenecientes a órdenes religiosas presenten sus manuscritos con aprobaciones literarias de otros miembros de su propia orden, más allá de que alguna de ellas fuera paso necesario para cumplir con la legislación, del mismo modo que la coincidencia de residencia entre el autor y el superior que debía aprobarlo facilitaba los trámites⁵⁸². De hecho, el mayor número de aprobaciones no legales se concentran en las obras de los miembros de las distintas órdenes religiosas y nos puede servir de indicador del número de relaciones existentes entre los autores de la época, de lo que ya se ha dado cuenta en el capítulo precedente. Sirva como ejemplo Fray Pablo de Écija, un capuchino que tiene una media de cuatro aprobaciones en sus obras, de religiosos de otras órdenes: hospitalarios, dominicos, mercedarios, franciscanos, jesuitas, mínimos, agustinos y, por supuesto, capuchinos escriben junto a él. Y en ocasiones la presentación de aprobaciones por parte del autor suponía la aprobación directa de la obra, sin que fuera necesario un nuevo examen encargado por el Juez, como ocurre en 1745 con el *Compendio historico-lego-seraphico* del franciscano descalzo Fray Manuel Barbado, que ante la aprobación presentada junto con el original, y que no se conserva en el archivo, se dictamina que se le conceda la licencia “mediante aprobación que esta parte presenta” o con el agustino Fray Antonio de Ballesteros y su oración fúnebre por el Cardenal Molina, predicado en el convento de San Felipe el Real de Madrid y que presentó ese mismo año con la aprobación del obispo de Ceuta, lo que fue suficiente para lograr la licencia aún cuando en el memorial, el autor, respetuoso de los procedimientos, había seguido la

Portugal y llevado a Francia cata a las mismas doce, siendo así que hay una hora de diferencia, Madrid, Imprenta de Don Gabriel del Barrio, 1725.

⁵⁸² También lo era así en el siglo XVII. ANDRÉS ESCAPA, Pablo, DELGADO PASCUAL, Elena, DOMINGO MALVADI, Arantxa y RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, José Luis, “El original de imprenta” en RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, págs. 36-37.

fórmula estereotipada que decía que solicitaba la licencia “remitiendolo a la censura de la persona que más sea de su agrado”, lo que no fue necesario⁵⁸³.

También podemos afirmar que en pocas ocasiones el Juez tuvo que recordar la necesidad de contar la autorización del Ordinario y/o del superior de la Orden, lo que muestra claramente que los autores y editores conocían los pasos que debían dar, a lo que habría que añadir la existencia en muchas comunidades religiosas de controles internos previos, como es el caso de la Compañía de Jesús. Un caso ejemplar, del que se conservan todos los pasos dados por el autor es el del fraile cisterciense Fray Roberto Muñiz, abad del monasterio que su orden tenía en Rioseco. En 1779 elabora una historia de su orden, para la cual sigue todos los pasos previos a la censura gubernativa: solicita primero la licencia del general de su orden, quien encarga para ello una censura a otro padre de su religión, catedrático de Salamanca, que en su texto se manifiesta en los mismos términos que solían hacerlo los censores gubernativos, determinando que no contenía nada contra la fe, las buenas costumbres y regalías; tras la autorización de su Ordinario, solicita la licencia del Consejo, que lo remite a la Real Academia de la Historia, que si bien comparte el criterio del cisterciense, introduce ciertos reparos a la obra, como la necesidad de una mayor crítica y exactitud en los datos. Satisfechos los reparos por el autor, la obra finalmente se aprueba, siguiéndole en 1782 y 1784 los siguientes tomos⁵⁸⁴. Este sería, a grandes rasgos, el proceso que toda obra compuesta por un eclesiástico debía seguir, debiendo superar no sólo el filtro de la censura del Consejo, sino también la su orden, si bien ésta solía ser más benévola.

La acumulación de aprobaciones constituía una estrategia que tenía como fin intentar “garantizar” la aprobación de la edición. Así lo reconoce, por ejemplo, Antonio de Rojas, en su obra *Vida del espíritu para saber tener oración y unión con Dios*, impresa en Madrid en 1629, cuando escribe:

⁵⁸³ AHN, Consejos, Leg. 50641.

⁵⁸⁴ AHN, Consejos, Leg. 5544.

Doy gracias a Dios... que el libro Vida del espíritu está aprobado por un obispo, por cuatro calificadores de la Suprema y nueve aprobaciones de las más graves que ha tenido libro, y en breve tiempo se han gastado tres impresiones con gran aprovechamiento de muchos [...]⁵⁸⁵

Pero el que, posiblemente, sea el ejemplo más significativo de la presentación de aprobaciones de otros eclesiásticos como prueba de la utilidad del manuscrito cuya autorización se solicita es el catecismo elaborado por José Miguel Yeregui Echegaray⁵⁸⁶. Éste había recibido el encargo personal de Carlos III para elaborar un nuevo catecismo que estuviera libre de las enseñanzas jesuíticas para su uso personal en 1768. Amigo de Roda, había sido acusado de introducir ideas heréticas en sus enseñanzas como Maestro de los Caballeros Pajes del Rey, pese a lo cual mantuvo su posición gracias al apoyo no sólo de Roda sino, también, del Inquisidor General, Manuel Quintano Bonifaz. A pesar de ser un encargo, Yeregui, sabedor de la controversia que despertaría su obra, buscó el apoyo de lo más granado del clero español con la esperanza de que sirviera para darlo a la imprenta con todas las licencias necesarias. Las aprobaciones fueron firmadas por Rafael Lasala, obispo auxiliar de Valencia; José Tormo, obispo de Orihuela; José Climent, obispo de Barcelona; José Laplana, obispo de Tarazona; y Felipe Bertrán, obispo de Salamanca, todos reconocidos anti-jesuitas, cuando no directamente jansenistas. Estos juicios fueron, obviamente, favorables, sin embargo su amistad con Roda y el enfrentamiento que éste mantenía con Fray Joaquín Eleta provocó el rechazo por parte de éste, y en su condición de confesor del rey ataca a José Miguel Yeregui, criticando y enviando al Inquisidor General su *Catecismo* al considerar que contenía ideas heréticas, así como

⁵⁸⁵ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 357.

⁵⁸⁶ Fichoz nº 00030458. Protegido por el obispo de Málaga, Juan Hipólito Álvarez Eulate y después formado por los jesuitas Welingen y Esteban Terreros en el Colegio Imperial, había estudiado en París, donde estableció contacto con el Padre Richard, dominico, autor de un diccionario eclesiástico y con el Padre Quiroga, trinitario, quienes le ponen en contacto con la obra de Fleury y San Agustín. De vuelta a la Corte establecerá una especial relación con Roda, Secretario de Gracia y Justicia, unidos en parte por su común animadversión a los ignacianos. Durante sus estancias en Madrid fue asiduo a la tertulia que la condesa de Montijo mantiene en su casa y en 1783 es procesado por jansenista por la Inquisición, en una acusación promovida por un grupo de clérigos influyentes del arzobispado de Toledo, entre ellos el cura párroco de San Andrés de Madrid. De nuevo le salvará su relación con el Inquisidor General, Manuel Abad Lasierra, quien, además, le propone en 1793 como teólogo en la Junta que según su proyecto debía reformar la institución. En 1794 será reconocido con los honores de Consejero del Consejo de la Inquisición.

hablando de él al monarca en términos negativos. Estas acusaciones, de evidente motivación personal, no llegaron a provocar la desgracia del presbítero⁵⁸⁷, pero sí impidieron la impresión de la obra, que no verá la luz hasta 1803 y en Francia, muestra de que si bien esas aprobaciones eran tenidas en cuenta, en la decisión de imprimir una obra pesaban más otros argumentos o las relaciones personales de los personajes implicados.

La prohibición de imprimir las aprobaciones, dictada por Carlos III, puso fin a una práctica que, como tantas otras, había sido heredada también del Siglo de Oro⁵⁸⁸. La justificación de esta medida era bastante clara. Por una parte se conseguía eliminar unos preliminares que no aportaban nada a la obra, reduciendo el contenido al texto que contribuyera a la instrucción de los lectores. De paso, la reducción del número de hojas implicaba una rebaja en el coste de producción, y por tanto el precio del libro, lo que debería redundar en beneficio de la venta y, al tiempo, de la extensión de la lectura de las obras, que al fin y al cabo era el objetivo último de la impresión de una obra: transmitir el mensaje⁵⁸⁹.

El siglo XVII había sido, sin duda, el momento de máximo esplendor de las censuras, que colmaban los primeros pliegos de cualquier libro⁵⁹⁰. Las fórmulas son muy similares a las que habían ido apareciendo en el siglo XVI y que se mantienen en el XVIII, pues los censores responden en todos los casos a un encargo administrativo. Así,

⁵⁸⁷ En 1776 sea propuesto en primer lugar por la Cámara de Castilla para el arcedianato titular de la catedral de Cartagena, para el que no será nombrado, aunque obtendrá, a cambio, el beneficio de la ciudad de Antequera. En 1782 será nombrado Sacristán de la Parroquia de Cadalso, en el Arzobispado de Toledo.

⁵⁸⁸ En su discurso en el Instituto de España de 1946 Agustín G. de Amezúa señala la costumbre de los autores de acompañar su texto con "ajenas composiciones encomiásticas. Para que el autor no vaya solo, sino en la buena compañía de amigos que le amparen[...] pagando con ello un tributo a la humana vanidad. AMEZÚA MAYO, Agustín, *Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro*, Madrid, Imprenta de Editorial Magisterio Español, 1946, pág. 36.

⁵⁸⁹ En este sentido, para el siglo XVIII AMEZÚA MAYO ya señala: "crece tanto, que librito hay de pocas páginas que tiene cerca de veinte composiciones laudatorias propias y ajenas", *Ibidem*, p. 36. Si bien es cierto que el número fue decreciendo a lo largo del siglo XVIII antes de su prohibición por Carlos III.

⁵⁹⁰ Quien mejor ha estudiado este fenómeno es José SIMON DIAZ. Quien reproduce muchas en *Textos dispersos de autores españoles I. Impresos del Siglo de Oro*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978, así como en sus artículos "Índice de Aprobaciones de libros del Siglo de Oro", *Revista de Literatura*, XXXVII, 1974, págs. 177-232; XXXVIII, 1976, págs. 177-187; y XXXIX, 1978, págs. 131-148. Para profundizar sobre el tema también se puede consultar CAYUELA, Anne *Le paratexte au Siècle d'Or. Prose romanesque, livres et lecteurs en Espagne au XVIIe siècle*, Génova, Droz, 1996.

todas comienzan de manera protocolaria con un “He visto por mandado de VA” o “Por comisión de...”, etc. Sin embargo, no todas guardaban la neutralidad que se esperaba, llegando a mostrar de manera explícita la parcialidad del aprobante hacia el autor, como hace en 1627 Fray Hortensio Félix Paravicino con Lope de Vega:

“[...] Y en esta ocasión, fuera de lo que yo estimo y amo, verdaderamente a Lope de Vega, no sólo reusara la aprobación, sólo solicitara la encomienda, por el Autor, por la obra, por el asunto, por la protección”⁵⁹¹.

No es necesario indicar que todas las aprobaciones que figuran junto a los textos impresos son de carácter positivo, pues en el caso contrario la obra hubiera tenido más problemas para ver la luz.

En cuanto al peso que se concedía a las censuras, a tenor de lo señalado, podemos afirmar que hemos visto que a las numerosas solicitudes se daban distintas respuestas. Lo frecuente era que la decisión final confirmara el juicio presentado en la aprobación del censor, y pocas veces se adoptaban decisiones sin el respaldo de una censura. En ocasiones, se optaba por buscar una segunda opinión de otro censor, y ante dos valoraciones distintas, era el juez el que, según las justificaciones de cada uno e influido, indudablemente por su propia inclinación personal, determinaba si se debía otorgar el *imprimatur* o no. El Juez podía, en determinadas ocasiones, indicar en qué aspecto concreto de la obra debía fijar su atención el censor nombrado, práctica frecuente cuando se encomendaba la revisión a más de un censor, pues el objetivo era determinar con la mayor exactitud posible la utilidad del manuscrito. Así, por ejemplo, son frecuentes los libros cuyo examen es encargado al Vicario de Madrid para evaluar su respeto a la fe y a la Academia de la Historia para valorar el contenido histórico, siendo necesario que ambas fueran favorables, lo que suponía que la obra se ajustaba las condiciones pedidas a todo libro.

Cuando las censuras eran negativas se solía responder la solicitud con un lacónico “no ha lugar” o un “Excusese”. Esta denegación no siempre suponía el cierre del

⁵⁹¹ Citado por REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 356.

expediente. Muchos de los autores reclaman al Consejo su original con copia de la censura para corregirlo atendiendo a las objeciones presentadas por el examinador. Algunos de los interesados desistían de su intento de dar a la luz sus obras antes los impedimentos alegados, pero otros insistían en ello solicitando la revocación de la decisión anterior sobre el original corregido. Este manuscrito se solía remitir al mismo censor que había revisado la primera versión de la obra, que debía entonces evaluar si los cambios realizados eran suficientes para hacer de la obra un impreso útil.

Cabe recordar que el “no ha lugar” también podía producirse sin mediar censura externa, sólo por los jueces de imprenta, que cerraban así el proceso sin asignar censores, pero en todos los casos, a la repuesta negativa del Consejo se podía oponer una nueva petición de revocación de la decisión comunicada. Las censuras negativas también podían ser contundentes en sus juicios. Antonio Tellez de Acevedo se expresa así ante el *Relampago de la Justicia y Antidiario de los Literatos de España* presentada por Gómez Arias en 1737:

“A orden de VA he visto y reconocido con toda atención el papel intitulado “Relampago de la Justicia y Antidiario de los Literatos de España. Su author, Don Gomez Arias, Profesor de Filosofia y Medicina. Y cumpliendo como debo con el cargo en que VA se ha dignado en ponerme, digo que no solo cumple el autor con el desempeño del título, pues sobre ser relampago, es trueno, y vaya, todo a un tiempo, barbaramente disparado que asusta, hiere y destroza, [...] y diciendo en las ultimas paginas de su contexto que ejerce su caridad en este tratado, confieso que jamas he visto esta virtud mas desgraciada, es opuesto formalmente a la buena política de estos Reynos. Por lo que si VA fuere servido, le podía mandar recoger, negandole la licencia que pide para la prensa [...].”⁵⁹²

O el siempre comedido Bernardo José Reinoso, censor de comedias al que recurren con frecuencia los Jueces de Imprenta de la primera mitad del siglo, y que solía ceñirse a considerar si la obra merecía o no la impresión según las normas descritas en la legislación, aprovechando, como veíamos, el propio expediente que le remitían para

⁵⁹² AHN, Consejos, Leg. 50634.

sancionar su opinión, lo que nos ha permitido recuperar la mayor parte de sus respuestas. En 1743, sin embargo, responde al Juez de manera categórica:

“[...] He visto con especial cuidado el papel por el que se digna remitir a mi censura. Su título Discurso astronomico y pronostico general del año de 1744 hasta el fin del mundo. Su author D. Antonio Muñoz, cathedratico de Gracias. Cuyo grado obstante en lo desgraciado de su contexto, pues con ser todo jocoso no contiene algun gracioso chiste, algun concepto agudo, algun equivoco discreto [...] para erudicion o diversion del público, a quien el author pretende defraudar con la venta de esta obra, como su introducción manifiesta, pues aunque es regla sentada que no hay obra literaria tan mala que o tenga alguna cosa buena y estoy persuadido a haber hallado en esta la excepción de esta regla, porque ni su estilo, su concepto, su materia, ni su asumpto puede ser utiles ni merecen la pena leerse, antes bien, los hallo opuestos a la politica y buenas costumbres de estos reinos, y aun a la christiana veneración de los sagrados ritos, pues con clausulas visibles, parece que se burla de los computos del años, de sus número y letras dominicales, y hace mofa en la expresión de las sagradas temporas y fiestas mobibles, de que tratase con la mayor veneración y sin que intervenga la menos claridad. Por todo lo qual me parece que no es digna esta obra de salir al publico en la prensa y que no teniendo (como tiene) erudición, moralidad, exemplo, aviso, doctrina ni diversion alguna para el público esta su impresión prohibida.”⁵⁹³

No entraremos a valorar su contenido, pero anuncia los elementos que iremos viendo en este capítulo. Pero no siempre las respuestas eran tan tajantes. Un buen número de las aprobaciones estaban condicionadas a la modificación, supresión o adicción de determinados pasajes, ideas, temas o sólo palabras. En estas censuras condicionadas el censor manifestaba su disposición favorable siempre que se cumplieran sus objeciones, opinión que solía ser respetada por el Consejo. Antes de la concesión de la licencia, el autor o impresor debía presentar la nueva versión corregida, que se remitía también al mismo censor para evaluar si las correcciones eran suficientes⁵⁹⁴.

⁵⁹³ AHN, Consejos, Leg. 50639.

⁵⁹⁴ Esto ya se había observado para el siglo XVII, como Tomás Gracián que en 1605 condicionaba la aprobación: “Me parece, que enmendado como va el original, no tiene cosa que ofenda”, o como Juan Besora en 1646 que actuaba más corrector al censurar el *Diablo Cojuelo* de Vélez de Guevara del dice que “tengo advertido al impresor algunos yerros de la impresión primera, y algunas palabrillas, y así

En aras de la utilidad pública los censores acababan permitiendo muchas veces la publicación, siempre que se lleven a cabo las correcciones propuestas. Algunas de estas correcciones afectaban a capítulos enteros, grandes fragmentos o párrafos. Así, lo hace Casimiro Florez, de los Reales Estudios de San Isidro, que por encargo de Villafañe examina la traducción que Vicente María Tercilla había hecho de las *Ventajas de la elocuencia popular* de Muratori. Si bien estima que la traducción era “de mucha utilidad”, no así el prólogo que añade el traductor, pues considera que “está lleno de puerilidades e impropiedades”. La licencia se concede “solo de la traducción como se propone en la censura”⁵⁹⁵. Pero en otras ocasiones podían ser simplemente un par de palabras. Es exactamente lo que le ocurre a Miguel Álvarez de Cerrica, vecino de Madrid, que solicita licencia para reimprimir el *Retiro de Damas* del expulso padre jesuita Francisco Guillo. El censor al que el Vicario de Madrid encomienda la revisión del texto encuentra ciertos problemas de carácter teológico por el uso de los adjetivos “infinito” y “eterno” aplicados a las almas, pues sólo Dios es infinito. La licencia se otorgará condicionada en 1780 “omitiendo los adjetivos infinito y eterno, poniendo solo que nunca una alma halla gozo perfecto en lo que acaba”⁵⁹⁶.

Atendiendo al contenido de las censuras, también se observan diferencias según el periodo analizado. Para la primera mitad del siglo, así como las aprobaciones presentadas por los autores junto con el original para iniciar la tramitación del expediente, el contenido suele ser más literario, y en ellas el aprobante aprovecha sus líneas para alabar públicamente los méritos de los autores, la calidad de las obras y los beneficios que para el público y para la nación tendría su publicación. La llegada de Curiel supone un primer cambio, al solicitar en sus instrucciones para los nuevos censores brevedad y concisión en sus valoraciones, provocando que las censuras se reduzcan a unas pocas líneas que repiten fórmulas estereotipadas que siguen normalmente el mismo esquema: “De orden de VA he examinado la obra [título de la obra o diminutivo del mismo] y no he hallado cosa alguna contra la Religión, ni el

enmendado es mi parecer que se le de licencia”. Ambas citas recogidas por REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 356.

⁵⁹⁵ AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁵⁹⁶ *Ibidem*.

Estado, ni las buenas costumbres, por lo que soy de parecer que VA permita su impresión". El esquema es similar en la mayoría de países europeos⁵⁹⁷. Cuando se presenta alguna objeción, la respuesta es más extensa, ya que el censor debía justificar los motivos de su negativa o los elementos que se debían modificar para mejorar el original, pues la decisión final se debía tomar valorando las impresiones del censor⁵⁹⁸.

Antes de la prohibición de Carlos III la mayor parte de las censuras se ajustan ya a este esquema, por lo que Curiel no se opondrá a una medida que, sin hacerla tan estricta, ya había estando extendiéndose:

"Se encarga a los Censores reduzcan su Censura a estas meras o equivalentes expresiones, procurando escusar dilatas extensiones en alabanza del Autor o de las Obras, sin mezclarse en sus asuntos, para evitar la molestia del Consejo o del Señor Juez de Imprentas, que las ha de reconocer y que acaso necesitará, con perjuicio de la Parte, remitir a otro Censor la misma Censura, pues quando el Autor quiera Aprobaciones mas dilatadas, podrá y deberá presentarlas con la misma Obra, para que todo vaya a la censura."⁵⁹⁹

De esta manera se va operando un cambio progresivo que el monarca sólo sancionará, pero que había ido calando desde la década de los cincuenta y que transformó las aprobaciones de elogiosos textos laudatorios al autor en meros papeles que formaban parte de un trámite administrativo necesario para imprimir un manuscrito pero que no se reflejaba en el impreso final, evitando así que el juicio del examinador estuviera influido por la posibilidad de ver su nombre impreso junto con la obra que estaba censurando.

⁵⁹⁷ En Francia, por ejemplo, la fórmula solía ser: "J'ai examiné par ordre du chancelier, un ouvrage appelé « le Coran par Mahomet » et je n'y ai rien trouvé qui soit contraire à la religion ou à la morale ». Citado por FLOCON, *op. cit.* (nota 10), pág. 414.

⁵⁹⁸ Así se especifica en las instrucciones dadas por Curiel el 19 de julio de 1756, conservadas impresas en AHN, Consejos, Leg. 11275: *Instrucción que de orden del Consejo y con su aprobación ha formado el Señor Don Juan Curiel, Ministro de el y del de la Suprema y General Inquisición, y Superintendente General de Imprentas en estos Reynos, sobre el modo y methodo con que los censores que tiene nombrados y nombrasse en adelante el Consejo deberán examinar y dar su censura en los Libros y Obras que se les remitiessen o ya sea para imprimir o reimprimir en estos Reynos o ya para que los impressos fuera de ellos puedan venderse por los mercaderes y libreros.*

⁵⁹⁹ AHN, Consejos, Leg. 11275.

Es necesario resaltar que, a pesar de lo que pueda parecer, la importancia de una obra en atención a su contenido, o a las repercusiones que tuviera su divulgación, no tenía porqué guardar relación directa con la importancia que se le concede en la tramitación de su expediente. Por ejemplo, dentro del impulso reformador protagonizado por el conde de Aranda, el escritor y periodista Francisco Mariano Nifo, por encargo del corregidor de Madrid Alonso Pérez Delgado, presentó un amplio y detallado plan para la reforma del teatro. El objetivo, era controlar los mensajes que se enviaban a la población a través de uno de los géneros más populares de la época. El título del proyecto era *Idea política y cristiana para reformar el actual teatro de España*. Esta obra, a pesar de estar inserta en el espíritu reformista del Gobierno, no llegó a publicarse. En el manuscrito que se conserva en el Archivo Histórico Nacional se deniega con un escueto *No ha lugar*⁶⁰⁰, único comentario que merece un completo proyecto para moldear el teatro al “buen gusto” y convertirlo en un instrumento para la instrucción del pueblo, que fue así desechado sin más explicación que la propia negativa⁶⁰¹.

Aunque sean pocos los casos encontrados, era posible que la decisión final del Consejo no fuera la expresada en la censura a quien el Juez había encomendado el examen del original. En general, se atendían los reparos de los censores, respetando sus valoraciones, pero cuando el Consejo consideraba que los inconvenientes no eran suficientes para frenar la impresión, se podía conceder la licencia a pesar de la existencia de una censura negativa, como ocurre con la obra sobre los partos hecha por Carlos Nicolás Jenty y que presenta el Doctor Juan Gamez en 1779. La Academia Médica Matritense, encargada de la censura, valora que “no se debe imprimir”, justificando su decisión no en su contenido o peligrosidad, sino porque “esta obra se halla bien traducida al castellano por el Dr. José Iranzo e impresa en Zaragoza en la Imprenta de la Viuda de José Fernández”. Puesto que no es la utilidad, sino la existencia de otra traducción, el Consejo concede la licencia⁶⁰². También puede ocurrir el caso opuesto, que ante censuras positivas se prohíba la impresión, aunque

⁶⁰⁰ AHN, Consejos, Leg. 5530.

⁶⁰¹ HERRERA NAVARRO, *op. cit.* (nota 544), pág. 790.

⁶⁰² AHN, Consejos, Leg. 5544.

generalmente los informes presentaban reparos que debían subsanarse, optando el Consejo por desestimar la petición por la entidad de los errores.

Finalmente, frente a lo detectado por Bouza para el Siglo de Oro, donde una obra podía resultar eximida del proceso de concesión de licencia por la necesidad de divulgar el mensaje que contenía, en la Ilustración no se ha encontrado un caso similar. Más bien al contrario. Como veremos, incluso el Catecismo que Carlos III encarga para su uso particular pasa por un complejo sistema de evaluación para determinar la conveniencia de su contenido, siendo necesaria la revisión por varios obispos y participando del proceso personajes de la talla del Confesor Real y el Inquisidor General.

4.2. El trabajo del censor

Si bien hasta el momento hemos centrado la atención a la relación formada entre autor y censor, es necesario conocer cómo era la práctica cotidiana de éste, aspecto sobre el que se ha arrojado poca luz hasta el momento⁶⁰³. Es un trabajo gris, con escaso reconocimiento pero que requería preparación y dedicación para cumplirlo con profesionalidad, además de importante, pues en sus manos quedaba la responsabilidad de decidir si una obra merecía ser impresa o no, pues si bien hemos visto que la decisión no era propiamente dicha del censor, la opinión de éste siempre fue fundamental.

El Juez de Imprentas era el encargado de fijar la persona que debía examinar, de orden del Consejo, el manuscrito presentado. Su nombre era anotado en el propio memorial de petición para que se le hiciera llegar. En ocasiones la respuesta del censor y la aprobación por el Consejo se hacían sobre el mismo papel, aunque no existe una pauta única y depende, más bien, de la persona en cuestión. Así por ejemplo, Santos Díez González, que fue catedrático de poética de los Reales Estudios de San Isidro y censor de comedias, siempre aprovecha el propio memorial para responder, en unas pocas

⁶⁰³ La aportación de M^a Luisa López-Vidriero en este sentido es, hasta el momento, el único acercamiento al tema. LÓPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), págs. 855-867.

líneas, aunque la mayoría de los censores respondían en su propio documento que quedaba adjuntado al expediente para seguir su tramitación.

4.2.1. La actividad profesional

Según las instrucciones dadas por Curiel a los recién nombrados censores en 1756, la persona designada para evaluar un manuscrito debía prestar atención a múltiples aspectos:

“El examen de estas obras y su censura, no solo ha de ser sobre si contienen algo contra la Religion, contra las buenas costumbres o contra las Regalias de su Magestad, sino tambien, si son apócrifas, supersticiosas, reprobadas o de cosas vanas y sin provecho, o si contienen alguna ofensa a Comunidad o a Particular, o en agravio del honor y decoro de la Nacion; y aunque el juicio y dictamen del Censor deba extenderse a todos estos respectos para formar su resolución; en la Censura bastará que diga si contienen o no algo contra la Religion, buenas costumbres, y Regalías de su Magestad, y si son o no dignas de la luz pública.”⁶⁰⁴

El texto dado por el Juez de Imprenta resulta esclarecedor para entender la documentación conservada. La mayor parte de las censuras positivas se reducen a unas pocas líneas en las que el censor aprueba la impresión del manuscrito examinado atendiendo a que en la misma no hay ningún elemento que vaya contra la Religión, las buenas costumbres y las regalías del Rey, considerando por tanto que son dignas de publicarse. Habían aparecido, sin embargo, algunas en las que a pesar de no encontrar ninguna objeción de las anteriormente descritas se desaconsejaba su impresión al considerar que de su contenido no se obtenía ninguna utilidad que contribuyera a la instrucción de los lectores. Si bien la legislación ordinaria sobre imprenta hacía hincapié en los tres elementos principales, hemos visto como la *utilidad* está latente en toda la Edad Moderna.

⁶⁰⁴ AHN, Consejos, Leg. 11275.

El trabajo de censor era laborioso, ya que debía leer la obra completa, analizar su contenido y valorar la conveniencia de su publicación. En el caso de encontrar proposiciones equivocadas o cuya interpretación pudiera llevar a error, debía además razonar los motivos de su dictamen, detallando las mejoras que se podrían introducir en la obra o las razones de su negativa⁶⁰⁵. Así es frecuente que se citen incluso las páginas y párrafos en las que figuran los errores, lo que daba muestra de lo minucioso de su labor.

Los dictámenes favorables podían despacharse con la fórmula rutinaria, pero aún en estos casos, el censor había realizado su laborioso trabajo de análisis previo.

Además de lo costoso, la censura era una tarea ingrata. Salvo el breve periodo de vigencia del sueldo estipulado por Curiel (a penas ocho años en todo el siglo), quienes eran comisionados para examinar un manuscrito no recibían remuneración económica alguna por su trabajo. Cabe preguntarse, entonces, qué beneficio obtenían los censores de realizar censuras. La nota del Inquisidor General Andrés Pacheco en 1623 en su memorial al Rey en el que proponía que las personas encargadas de la censura estuvieran remuneradas “a costa de los autores de los libros porque es mucho lo que se debe trabajar para aprobar o reprobar, y sin premio es dificultoso hallar quien trabaje, y tan de ordinario”⁶⁰⁶, nos apunta a que eran pocos los beneficios directos que se obtenían.

Durante la primera mitad del siglo, el encargo de la censura de manera individual dificultaba la asignación de personas de reconocido prestigio. Es por ello que se opta por comisionar a importantes personajes del mundo de las letras que eran o bien clérigos destacados o bien miembros del aparato administrativo del Estado. No hemos sido capaces de encontrar en ellos una relación directa sobre la participación en el

⁶⁰⁵ El trabajo del censor fue igual de complejo en todos los territorios con mecanismos de censura previa. Para compararlo con el caso portugués es interesante el breve análisis presentado por ABREU, Márcia, “La libertad y el error: la acción de la censura luso-brasileña (1769-1834)”, en *Cultura Escrita & Sociedad*, nº 7 (2008), págs. 130-138 y completado por CARREIRA, Laureano, *O teatro e a censura em Portugal na segunda metade do século XVIII*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988. Tesis doctoral defendida en 1980, págs. 39-114.

⁶⁰⁶ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 304-306.

mecanismo de control librario y los ascensos en el escalafón de su profesión, pues la casuística es muy variada. Que las personas designadas fueran las más destacadas en sus respectivos ámbitos supone que en sus carreras la implicación en la censura sólo sea un elemento más. Así, hemos visto como participan sacerdotes que llegarán a obispos o frailes que serán superiores de sus órdenes religiosas, pero también modestos clérigos cuyas carreras nos son totalmente desconocidas, lo que indica que no llegaron a los más altos puestos de la jerarquía, que sí han sido estudiados. Estos personajes realizan censuras antes o después de sus ascensos, sin que en sus nombramientos figure su desempeño como censor de manera explícita, aunque no podemos obviar que éste sería tenido en cuenta como otros tantos servicios prestados al monarca, y si bien no hemos encontrado referencias explícitas, sin duda pudo ser tenido en cuenta por quienes les recomendaban o alegado por ellos mismos en sus memoriales de méritos⁶⁰⁷.

El progresivo traslado de los individuos a las instituciones ilustradas que hemos visto en el capítulo anterior introduce una nueva matización. Son varias las instituciones en las que se delega esta responsabilidad, y son ellas las que eligen de entre sus miembros quienes deben examinar el manuscrito. Según López-Vidriero, “cuando uno de los miembros de estas instituciones emprende la lectura de un original lo hace con la mentalidad de quien va a revisar una obra cuyo destino es mejorar la formación del ciudadano”⁶⁰⁸, por lo que califica al revisor como pedagogo. Sin llegar tan lejos, aunque el examen de la obra es individual, las censuras son enviadas a la Escribanía del Consejo de manera colectiva, pues la mayor parte de las veces es la corporación en pleno la que secunda el informe y la que asume su contenido. Ocurre así con las Reales Academias y Sociedades Económicas. Otras, como la Vicaría de Madrid, lo remiten a un individuo cuya identidad no suele revelarse, asumiendo el Vicario en persona el juicio emitido. Una tercera variante la presenta una de las principales instituciones educativas de la Corte, los Reales Estudios de San Isidro, que si bien también reciben

⁶⁰⁷ En este sentido se puede apuntar el estudio de Elisabel Larriba sobre los méritos no profesionales para los ascensos en el ámbito de la Inquisición y en relación con las listas de suscriptores de la prensa periódica, en LARRIBA, Elisabel, “Inquisidores lectores de prensa ilustrada”, en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 817-829.

⁶⁰⁸ LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 858.

encargos como institución, la censura suele ir firmada individualmente por el profesor que la ha llevado a cabo, actuando el Director como un mero intermediario entre el Consejo y el censor efectivo.

El empleo de estas instituciones es vista como algo natural por todas las partes implicadas y se entiende desde su gestación que la revisión de manuscritos forma parte de su misión de transformar la sociedad y transmitir los nuevos valores ilustrados, siendo los libros el medio más eficaz para ello. En este sentido, la remuneración monetaria se hacía innecesaria pues no era un servicio extraordinario el que se pedía a los nuevos censores, sino que éste formaba parte de sus obligaciones con su benefactor, el rey, que era además el que aseguraba su progreso profesional.

Más allá del pago monetario a costa de los autores e impresores y del honor que para un hombre de la época debía suponer recibir el encargo de realizar una censura, que siempre podía ser tenido en cuenta para futuros ascensos, cargos u honores, durante algunos momentos del siglo XVIII las leyes en vigor sobre lo que ahora conocemos como “depósito legal” obligaba a los impresores a entregar un número variable de ejemplares tras la impresión de su manuscrito, alguno de los cuales tenía como objetivo incrementar los fondos de alguna biblioteca regia, mientras que otros servían tanto para controlar el contenido de los libros, como para retribuir la intervención en el proceso de dichos agentes⁶⁰⁹.

Los orígenes de la entrega de ejemplares a una biblioteca para incrementar de manera natural y continua sus fondos, a la vez que conservar todos los libros impresos en el reino, se remonta a 1619, por Real Cédula de Felipe II, ante la petición del bibliotecario del monasterio de El Escorial, donde debería enviarse un ejemplar de todos los libros impresos no sólo en Castilla, sino en todos los reinos de la Monarquía. Los incumplimientos serán muchos. Durante todo el siglo XVIII se irán sucediendo las leyes y autos por las que se obligaba a los impresores a entregar un número variable de ejemplares a distintas autoridades y bibliotecas del Reino, como condición para concesión de la licencia. Entre los beneficiados se suelen citar la biblioteca de El

⁶⁰⁹ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 412.

Escorial⁶¹⁰, la Biblioteca Real⁶¹¹, los ministros del Consejo y su Presidente, el Secretario de Gobierno y para el propio Juez de Imprentas⁶¹², aunque a lo largo del siglo y debido a lo gravoso que suponía para autores e impresores entregar tan elevado número de ejemplares, cuyo coste debían asumir ellos, se irá limitando su número en sucesivas leyes⁶¹³. Esta retribución podría considerarse como un “pago en especie” a los principales agentes de la Monarquía implicados en la obtención de la licencia: Juez de Imprenta, censores y Secretario de Gobierno de la Cámara.

Con la supresión de su sueldo monetario impuesta en la reforma de Carlos III en 1763, la entrega al censor de un ejemplar impreso del libro autorizado se convierte así en la única recompensa material que los censores reciben por su trabajo. Esto contribuye a que los Jueces de Imprenta y los censores, como hemos visto, tengan a menudo grandes bibliotecas, pero no parece que compensara el esfuerzo que requería su trabajo ni las críticas que sus opiniones provocaban de los otros actores implicados.

A la ausencia de una compensación económica tampoco se sumaba el reconocimiento público a su trabajo. A lo largo de toda la legislación se mantuvo como fundamental el carácter anónimo de las censuras, y así lo mantiene Curiel:

“La Parte que presentare la Obra para imprimir o reimprimir, o para sacar licencia de venderla, no sabrá a quien se remite a censura, (de que esta prevenido gravemente el Portero) pero si el Censor tuviese conveniente advertir a el Autor de alguna cosa que deba quitar, añadir o enmendar, para que toda la Obra no se repruebe, o porque salga mejor al público, podrá avisar a el Autor, para que concurra a esta diligencia, y de su

⁶¹⁰ Es así desde la Real Cédula de 12 de enero de 1619 de Felipe III. REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 411-412.

⁶¹¹ Desde su fundación y la redacción de sus constituciones, lo que se dispone en una orden de 1716, con carácter retroactivo a 1711, fecha de la creación de la institución. *Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley XXXVI. Comentada en REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 412-414. Para toda la información sobre la Biblioteca Real, ver la obra de GARCIA EJARQUE, *op. cit.* (nota 534).

⁶¹² *Auto del Juez de Imprentas. 10 de julio de 1713. Novísima Recopilación*. Libro VIII. Título XVI. Ley XXXVII. Mencionado por GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), I, doc. 7, pág. 10 y REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 412.

⁶¹³ En 1717, 1746, 1771, 1773, 1793, 1802, 1805 y 1811-1813. Por lo largo que sería enumerarlo, para mayor información se puede consultar REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 409-423 o el monográfico GUASTAVINO, Guillermo, *El Depósito Legal de obras impresas en España. Su historia, su reorganización y resultados*, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1962.

consentimiento se podrá añadir, quitar o enmendar lo conveniente; pero si el Censor no quisiese manifestarse a el Autor, ni su concurrencia, podrá dar su Censura con la condicion de que se hayan de quitar, añadir o enmendar estas, o las otras palabras o clausulas para que por estos medios no se malogren las Obras, que expurgadas puedan ser utiles al Público.”⁶¹⁴

El secreto, vemos, quedó a la voluntad del censor, que podía comunicarse directamente con el autor o, si prefería la discreción, hacerlo siguiendo el cauce oficial. En cualquier caso, este punto fue escasas veces respetado y más bien al contrario son frecuentes los ataques directos que sufren los censores de los airados autores. De modo que, como veremos más adelante, lejos de obtener un reconocimiento social por su trabajo, sólo recibían las críticas de quienes sufrían sus juicios.

Del tiempo que esta actividad ocupa a los censores, pues ninguno se dedica en exclusiva a ello, toman nota los implicados que como los designados por el Vicario en 1780 dicen haber “visto con el cuidado que nos han permitido nuestras ocupaciones”⁶¹⁵ o como Jovellanos, que reconoce que en revisar las obras emplean el tiempo “que necesitan para el desempeño de objetos más importantes”. Por ello escribe en 1805 desde Bellver: “¡Censor! Dios libre a usted de estotra tentación. Empleo oscuro, penoso, peligroso, ajeno del carácter de usted y también de sus estudios”⁶¹⁶.

Entre los aspectos que se han podido observar al analizar los miembros de las distintas redes que se forman a lo largo del siglo, cabe traer aquí un fenómeno destacado por la importancia que tiene en la práctica de la censura: la frecuencia con la que un mismo censor realiza el examen de todas o al menos de gran parte de las obras que imprime un mismo autor. Hemos encontrado un elevado número de coincidencias. Las censuras de Leopoldo Jerónimo Puig en las obras de Salvador José Mañer o las de Carlos de la

⁶¹⁴ AHN, Consejos, Leg. 11275.

⁶¹⁵ AHN, Consejo, Leg. 5545.

⁶¹⁶ “Porque ¿qué sabe usted cuántos libros le echarían encima, y cuáles le vendrían a la mano, y cómo podría desembarazarse de aquellos puntos y materias ambiguas, en que tan duro parece la tolerancia como el rigor? ¿Y si alguna contestación ocurriese, o con algún protegido, o algún descarado se topase...? Vaya, no hablemos de ello. Quieto, y en casa, como la pierna mala”, RAH, 11-8046, doc 5. Citado por Elenea de Lorenzo en el estudio introductorio de JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), pág. XXIX.

Reguera en todos los pronósticos de Francisco León y Ortega son sólo algunos de los ejemplos. Casos como el de José Patricio Moraleja Navarro⁶¹⁷, madrileño autor de pronóstico entre 1745 y 1763, a quien con bastante frecuencia le censuran de manera positiva el revisor de comedias Bernardo José Reinoso, Fray Francisco Freile, el jesuita Pedro Fresneda y el capellán de la cárcel arzobispal, Francisco de Huerta y Aguilera, son más complejos, pues son varios los censores que aparecen reiteradamente. Esta frecuencia se traduce, en muchos casos, en un juicio favorable al demandante, pero la seguridad no es total. Así, por ejemplo, en 1741 Moraleja Navarro presenta ante el Consejo de Castilla su primer pronóstico para 1742 bajo el título *El salvador de los astros* que obtiene el juicio favorable del conocido autor Francisco Horta Aguilera, pero que no ve la luz por la oposición de Bernardo José de Reinoso, que a pesar de aprobar otros manuscritos del mismo autor, afirma de éste que es “un conjunto de desatinos, sin concierto desde la cruz hasta la fecha”⁶¹⁸. Sin duda una prueba de la profesionalidad de la que hacen gala los censores y que tanto podrán en duda los autores.

Otros ejemplos resultan más curiosos por las implicaciones que contienen y qué si que cuestionan la efectividad del sistema. Es el caso de Isidoro Francisco Ortiz Gallardo Villarroel⁶¹⁹, sobrino del archiconocido Diego de Torres Villarroel, y que como él, fue autor de pronósticos desde la temprana edad de los 17 años y a quien sucede en la cátedra salmantina. Don Diego realiza hasta cinco censuras a pronósticos presentados por su sobrino, algunos por encargo expreso del Consejo, y siempre impresas junto con el original, en lo que constituye una clara estrategia de venta, dada la popularidad de su pariente.

Ya hemos visto, en este sentido, cómo Curiel denunciaba la práctica existente hasta su llegada al Juzgado por la cual eran los propios autores los que proponían al censor:

⁶¹⁷ Fichoz nº 00083660.

⁶¹⁸ AHN, Consejos, Leg. 50637. La aprobación de Horta Aguilera está en el legajo 50636.

⁶¹⁹ Fichoz nº 00092570.

"[...] Aquellos censores que proponía el autor de la obra, que siendo unas veces amigos y otras pagados por el autor, sólo se ocupaban en alabanzas desmesuradas de la misma"⁶²⁰.

La creación de un cuerpo único de censores, unida al debido silencio sobre las personas designadas, deberían haber terminado con esta práctica también heredada de siglos anteriores, pero el demostrado fracaso del sistema ideado por el juez sevillano y las repetidas coincidencias observadas en el capítulo anterior nos apuntan lo contrario.

Para evitar episodios como los vividos con motivo de la polémica suscitada con el Secretario de Estado por la publicación del *Piscator Complutense*, en la que los censores habían sido "castigados a proporción del exceso de su libertad"⁶²¹, Curiel aclara el nivel de responsabilidad que recaía en cada una de las partes:

"Asimismo se previene a los Censores que reducido su examen a lo que va prevenido, el aprobar una Obra no es adherir, ni suscribir a sus opiniones, o assertos [...]"⁶²²

Esta exención de responsabilidad desentona con la práctica existente en otros países de nuestro entorno que gozaban de un sistema similar de censura, como Francia, donde Malesherbes había establecido una responsabilidad para los censores de las obras que aprobaran que sólo tendrá reflejo en nuestro país con la creación del nuevo Juzgado de Imprentas encargado por Godoy a Melón, sin que se tradujera a la práctica debido a la ausencia de nombramiento de censores y la corta duración del mismo.

La profesionalidad y la minuciosidad con la que los censores, a pesar de todo, llevaban a cabo su trabajo se visualiza, también, en las ocasiones en las que expresan su recuerdo sobre obras que ya han pasado por sus manos, especialmente cuando se

⁶²⁰ GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), pág. 52.

⁶²¹ AHN, Consejos, Leg. 11275.

⁶²² *Ibidem*.

trata de reimpresiones⁶²³. Así ocurre con el censor de Lalaing, que busca en el archivo la censura que se había hecho para una traducción anterior a la misma obra, y que transcribe junto a su respuesta para que así conste en el Consejo⁶²⁴. Esta práctica parece ser común, ya que no es el único caso. Alonso Camacho, el censor que en 1779 designa el Vicario de Madrid para examinar la *Historia de los principios y establecimiento de la Iglesia* que pretende reimprimir Manuel Martín, recurre para emitir su juicio a la valoración que el padre Nicolás Gallo había hecho en 1752 para la misma obra, pidiendo que se suprimieran, como se había hecho entonces, ciertos pasajes⁶²⁵. Pero no sólo cuando ha sido el mismo censor el que ha visto con anterioridad la misma obra u otras hechas por el mismo autor. El censor, diligente, también busca entre los archivos evidencias del historial del solicitante, para que a la vista de expedientes anteriores se pueda completar su juicio. Así hace, por ejemplo el censor, cuya identidad desconocemos, que por encargo de la Secretaría de Estado examina el *Espíritu de la Nación Española* que Joaquina Tomaseti y Aranda, vecina de Cádiz, pretendía dedicar al Duque de Alcudia en 1795, cuando en respuesta a Godoy explica: “Este es el primer papel de esta dama que ha llegado a mis manos y ningun otro he hallado en la correspondencia de escritores y literatura que sea obra suya”⁶²⁶.

La complejidad de la legislación afectaba también a la labor realizada por cada censor, pues reconocidas las limitaciones legales impuestas, la multiplicidad de órganos implicados debía ser tomada en cuenta:

“Si los Libros que impressos se remitieren a censura para permitir su venta en estos Reynos, estuviessen en particular o baxo de las reglas generales, prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición o mandados expurgar, no se hallasen expurgados, no necesitan de otra Censura que esta, con la que habrá cumplido el Censor.

⁶²³ Otro caso es el de los censores de las obras del Padre Echeverz que solicita reimprimir el Convento de la Merced Calzada de la Corte en 1780. En sus disposiciones mandan recortar el texto de acuerdo a la legislación vigente, suprimiendo por ejemplo las aprobaciones que antecedian al texto propiamente dicho, y mandaban que cada una de las obras se corrigiera de acuerdo a lo que otros censores habían dispuesto para cada uno de los libros en su momento. AHN, Consejos, Leg. 5545.

⁶²⁴ AHN, Consejos, Leg. 5556.

⁶²⁵ AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁶²⁶ AHN, Estado, Leg. 3248.

Por quanto ni el Consejo, ni el Señor Juez de Imprentas pueden reconocer por si solas las Obras que se intentan imprimir, ni los tratados que contienen y estar algunos asuntos o reservados a su Magestad o necesitar de otra licencia, que haya de preceder a la del Consejo, se previene a los Censores que si dichas obras tuviessen conexión con materias de Estado, Tratados de Paces y sus semejantes o se tratasse en ellas del Santo Mysterio de la Inmaculada Concepción o de cosas de las Indias, o pertenecientes a otros Tribunales, a cuya jurisdiccion competa lo que se hubiere de imprimir, o en que se trate de Comercio, Fabricas y otras Maniobras, o perteneciente a Metales, sus valores y pesos para su comercio o de Regalias de la Corona, lo adviertan y prevengan en Esquela separada, dando sin embargo su Censura en la forma ordinaria, para que el Consejo o el Señor Juez de Imprentas den la providencia que corresponda.”⁶²⁷

Poco queda añadir a la clara exposición de Curiel. Los censores debían advertir de manera separada si el tema del manuscrito afectaba a otro de los órganos habilitados por el rey para la concesión de licencias de impresión, pues los títulos y las intenciones de los interesados expresados en sus memoriales de petición no siempre se correspondían con el contenido real de la obra. Esto no les eximía, en ningún caso, de realizar su valoración, pues queda claro que para la concesión del *imprimatur* la opinión del Consejo de Castilla, basada en su juicio, era fundamental.

Finalmente, recibidas por parte del Juez las censuras y aprobaciones por él encargadas, se daba provisión de la concesión de la licencia, se elevaba al Consejo, que lo aprobaba normalmente en pleno y se redactaba por parte de la Escribanía correspondiente la cédula que se enviaba al demandante, terminando así el control que correspondía a los censores.

⁶²⁷ AHN, Consejos, Leg. 11275.

4.2.2. Los problemas de los censores: críticas y contradicciones

La labor de los censores no era grata para los designados, por lo que no nos debe extrañar que, aunque a penas queden restos documentales, alguno se mostrara reacio a aceptar estos encargos que no tenían remuneración ni reconocimiento. De hecho, cabe recordar que uno de los argumentos esgrimidos por Curiel para el establecimiento de un cuerpo estable y a sueldo de censores es, precisamente, la supuesta dificultad existente para encontrar literatos “de probada virtud” dispuestos a tan ingrata tarea.

Las dos excusas más frecuentes hacen referencia a los problemas de salud de los censores o al escaso tiempo del que disponían, al tener que cumplir con sus demás obligaciones. En otras ocasiones, las quejas de los censores se muestran más abiertamente, dejando de manera explícita lo poco deseado que era recibir este encargo. Tal es el caso del sacerdote Montes y Goyri, quien solicita al Vicario de Madrid no ser incluido entre los censores:

“Ni de otro modo le dé noticia de mí ni directa ni indirectamente para semejante comisión, tan inútil como impertinente y aún odiosa si se ha de desempeñar tal cual como corresponde. Tengo poca capacidad, pocos libros y sobre todo poquísima o ninguna inclinación a este trabajo y por otra parte quisiera vivir en este mundo con los menos cargos que sea posible. Por todo lo cual deseo extraordinariamente se sirva V.S.I. exonerarme del de las censuras, al mismo tiempo que quedo sumamente reconocido a la confianza con que ha tenido a bien honrarme en las que me ha remitido en estos cuatro o cinco años”⁶²⁸.

Es evidente el desprecio que muchos censores sienten hacia su propia actividad. De este testimonio se desprenden además varias cuestiones más vinculadas al oficio de censor: la actividad habíamos dicho requiere tiempo y dedicación, si se desea desempeñar “tal cual como corresponde”, pues implica una lectura analítica del

⁶²⁸ DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70), pág. 75.

contenido. Requiere una sólida formación y, a menudo, la consulta constante de otros libros para contrastar la información, comprobar su veracidad y valorar su utilidad. En cambio, y de ahí su agradecimiento, al mismo tiempo supone un reconocimiento de confianza por parte de quien encarga el examen, en este caso del Vicario de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que será él que firme el parecer que se devuelve al Consejo asumiendo la responsabilidad de lo que otro ha dicho por él.

Otra de las evasivas frecuentes entre los aprobantes es el cuestionamiento de su propia capacidad de juzgar ciertas proposiciones, como expresa Pedro Estala en 1797 al ser comisionado para evaluar el *Ensayo sobre la Historia de la sociedad civil*:

“He hallado cosas reparables en orden a la religión, la cuales me he tomado la libertad de corregir, pero son más abundantes las máximas en que abundan de donde se pueden sacar consecuencias muy perjudiciales contra nuestro gobierno, las cuales no me atrevo a censurar por no ser de mi profesión.”⁶²⁹

Del mismo expresa su falta de conocimientos para valorar el contenido el socio de la Matritense que en 1793 examina el décimo tomo del *Tratado de Agricultura general* de Valcarcel:

“[...] es preciso confesar con mi natural ingenuidad que muchas de las plantas casi me son desconocidas, y aun de alguna no tengo la menor noticia, respecto a no ser producciones de la provincia de Extremadura de donde podría hablar con tal qual propiedad. Y en este concepto solo dire que me ha sido muy agradable su lectura, pues se manifiesta que este juicioso autor se ha dedicado a registrar con extraordinaria diligencia y cuidado quanto han escrito sobre el asunto los mejores observadores y que su trabajo es digno de que salga a la luz publica porque ademas de fomentar la aplicación que puede servir remitirlo a muchos poderosos para facilitar sus auxilios al pobre labrador, a fin de que haga los ensayos correspondientes para adelantar en un ramo el mas precioso y principal de un Estado.”⁶³⁰

⁶²⁹ *Ibidem*, pág. 76.

⁶³⁰ AHN, Consejos, Leg. 5544.

En este caso no se trata de una justificación para evitar el trabajo, sino que una vez realizado reconoce su ignorancia sobre los detalles del tratado, lo que no le impide valorar la utilidad que su publicación tendría para “adelantar” la ciencia que trataba, la agricultura, y en especial al “labrador”.

En general, en las críticas recibidas sobre el control de los impresos no se cuestiona la existencia de las censuras previas a la impresión, ya que estaba aceptado el hecho de que se trataba de una regalía. Lo que se critica abiertamente es la forma en la que los censores actuaban, dejándose guiar más por sus intereses personales que por el bien común, como se les había encomendado reiteradamente en la legislación.

Una de las críticas más frecuentes por parte de los autores es que la actuación de los censores no se llevaba a cabo según lo establecido en las leyes, que los reparos presentes en las censuras no se ajustaban al contenido real del manuscrito presentado, o que existían opiniones personales contrarias a la obra. Así se expresa, por ejemplo, Felipe Scio de San Miguel, provincial de los escolapios, que solicita licencia para imprimir varias obras en 1779, entre ellas un *Tratado de Urbanidad Cristiana* que sería empleado como manual de sus colegios: “[...] despreciando los reparos de los censores, como poco justos y mal fundados [...]”, a lo que los censores suelen responder con firmeza e, incluso, ironía:

“[...] en nada pusimos mayor cuidado que en no incurrir en expresión alguno de que pudiera el Autor darse por ofendido, antes bien elogiando cuanto encontramos digno de alabanza solo propusimos aquellos reparos que no se podía disculpar y la confianza de VA nos obligaba a descubrir. Ahora hemos reconocido que desprecia nuestros reparos, se burla de nuestros elogios, nos acusa de mala fe [...]”⁶³¹.

El asunto sólo se resolvió con la intervención de Francisco Antonio Lorenzana, que a la altura de 1782 era ya Arzobispo de Toledo, que secundó la opinión de los censores y reprochó al autor que no “hubiera reconocido por justos seis reparos para humillarse y callar en los demás”, añadiendo que los censores habían podido criticar más

⁶³¹ AHN, Consejos, Leg. 5544.

duramente una obra que por estar dedicada a la enseñanza de los más jóvenes en las Escuelas Pías debía cuidar más aspectos no bien resueltos, aconsejando al Consejo que se siguieran las recomendaciones de los censores. La autoridad del Arzobispo no fue discutida por el Consejo, que archivó el expediente.

Sin embargo, una de las críticas más persistentes no era la autoridad de los censores, sino su escasa formación, alegando que no era la adecuada para juzgar la validez de la obra. Sobre este asunto los primeros estudios relativos a la primera mitad del siglo, para la realización del trabajo de investigación del doctorado, nos arrojaron cierta luz que apuntaba a que las quejas de los autores estaban, en la mayor parte de las veces, infundadas. En la primera mitad del siglo, antes de la creación de las sociedades patrióticas y academias, las censuras eran encomendadas a personas lo suficientemente formadas. Es el caso del padre jesuita Carlos de la Reguera, profesor del Colegio Imperial en materia de matemáticas y encargado de la mayor parte de las censuras sobre astrología y astronomía, como son los pronósticos anuales, y más evidente, si comprobamos que las que no están firmadas por él llevan el sello de otros jesuitas, también maestros de matemáticas. Lo mismo sucede para otros casos donde los censores son altos cargos de la jerarquía eclesiástica, como Generales o Provinciales de las diferentes órdenes religiosas; funcionarios de la Administración regia o profesores de las universidades y colegios más prestigiosos. Avanzando en el tiempo se observa una significativa disminución del número de censuras encargadas a sujetos concretos por el encargo colectivo a Reales Academias y Sociedades Económicas, lo que *a priori* también resta credibilidad a la falta de formación de los aprobantes.

Hace también Curiel mención a este problema en su *Instrucción* de 1756, pues con el objetivo de evitar que alegar desconocimiento sobre la materia impidiese encontrar quien entre los nombrados por él examinara una obra, afirma que:

“[...] no deberán excusarse del examen de Obras y Tratados por mas estraños y agenos que sean de su profesion, respecto a su unica y mas importante ocupacion ha de ser el

cuidado de la Religión, las buenas costumbres y las Regalías de SM lo que es fácil de discernir en todo género de materias.”⁶³²

Los ejemplos que evidencia la especialización de los censores son numerosos, pero merece la pena detenernos en aquellos que por tratar temas más específicos requerían una formación mayor. Uno de los campos donde la preparación de los censores debía ser mayor, más allá del caso de los matemáticos que ya hemos visto, es el de la medicina. Podemos destacar el ejemplo de Martín Martínez⁶³³, que fue Médico de Cámara de Felipe V, y que publica varias obras de anatomía y cirugía, cuyas censuras son firmadas por médicos del Rey, de la Reina y miembros del Protomedicato, del que él mismo era examinador, como ocurre con su célebre *Anatomía completa del hombre*, que tiene hasta seis reimpresiones entre 1728 y 1788. Lo mismo ocurre con su *Examen nuevo de Cirugía moderna*, aprobada por Juan Higgin, primer médico de Cámara del Rey y por Pedro Aqueña, Protomédico de Castilla y segundo médico de Cámara del Rey. Desde luego, nadie les pondría en cuestión sobre su capacidad para juzgar obras de medicina. Martínez, por cierto, que mantiene una relación de amistad con Feijoo, defiende públicamente su *Teatro Crítico Universal* frente a las acusaciones de uno de sus aprobantes, Pedro Aqueña, lo que demuestra que existía una cierta independencia de los censores al realizar sus valoraciones, ciñéndose a la obra que se estaba analizando, al menos en ocasiones. No parece que el de Martínez fuera un caso aislado. Sin ir más lejos, la obra del cirujano militar José López sobre los métodos de curación de los heridos fue aprobada por Francisco Suárez de Rivera⁶³⁴, que además de médico de Cámara supernumerario era un prolífico autor de todo tipo de tratados médicos, por lo que no parece que se pudiera cuestionar su capacidad para discernir si era conveniente su publicación.

Por poner algún otro ejemplo, podríamos hablar de las publicaciones musicales. Es el caso de Fray Antonio Soler⁶³⁵, fraile jerónimo, que fue maestro de Capilla del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, autor de un conocido tratado de

⁶³² AHN, Consejos, Leg. 11275.

⁶³³ Fichoz nº 00030735.

⁶³⁴ Fichoz 00031511.

⁶³⁵ Fichoz 00084784.

modulación, que desató la polémica con otros músicos del momento. Su obra fue aprobada por el maestro de capilla de la Encarnación, José Mir; el maestro de Capilla de las Descalzas Reales, Antonio Ripa; el maestro de música de la Reina y discípulo de Farinelli, Nicolás Conforto y, por parte del Consejo de Castilla, del segundo organista de la Capilla Real, José Nebra, tal y como se conserva en el expediente de impresión⁶³⁶. Sin duda, todas autoridades sobradamente reconocidas y preparadas para la materia que aprobaban, pues no en vano desempeñaban los principales puestos musicales de la Corte. Y lo mismo observamos, por ejemplo, con el *Nuevo arte de cocina* de Juan Altimiras, cuya censura corre a cargo de Francisco Ardit, cocinero del Rey, o con las *Reglas útiles para los aficionados a danzar*, de Bartolomé Ferriol, que es examinada por Bernardo Botín, el maestro de danza del Colegio de Nobles⁶³⁷.

De lo minucioso de su labor dan cuenta también las ocasiones en que un censor, ante el desconocimiento de la materia de la obra encomendada, recurre a otras personas que le ayuden en su examen. Así actúa, por ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos, quien solicita en varias ocasiones la colaboración de otros intelectuales más versados en los temas que trata la obra, como ocurre cuando reclama la ayuda de Capmany para revisar los italianismos de la *Historia* del jesuita Masdeu⁶³⁸, o cuando expresa directamente su incapacidad para dictar una sentencia, como demuestra al renunciar a calificar la *Institución e instrucción cristiana*, pues “sería una temeridad en nosotros el empeñarnos en hacerlo y mucho más en juzgar de unas materias reservadas a los doctores de la Iglesia, a cuyo juicio nos parece que podrá remitirse el Consejo”⁶³⁹.

En las disposiciones legales que determinaban el modo por el que debían discurrir los trámites previos a la concesión de una licencia de impresión se establecía, desde su origen, que la identidad de los censores debía permanecer en secreto para evitar las posibles interferencias que sobre ellos pudiera haber. Del mismo modo, se hacía especial hincapié en que el aparato censor debía funcionar con la mayor discreción posible para que el control no se hiciera demasiado patente, ya que perdería parte de

⁶³⁶ AHN, Consejos, Leg. 50658.

⁶³⁷ AHN, Consejos, Leg. 50641.

⁶³⁸ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), pág. XXIV.

⁶³⁹ *Ibidem*.

su efectividad. Sin embargo, es de sobra conocido que dicho silencio se cumplió en escasas ocasiones, siendo, en cambio, frecuentes las reclamaciones y peticiones de revisión sobre las censuras iniciales, los debates públicos sobre la actividad de los censores y un sin fin de voces que hacían de la censura un hecho cotidiano.

El incumplimiento de esta normativa es frecuente, al menos, desde el siglo XVII⁶⁴⁰. Cabe recordar que, por ejemplo, al memorial que recibe el Rey en 1623 para frenar la circulación de libros perniciosos, el monarca responde remarcando la necesidad de que se mantuviera el proceso en secreto “para que sus autores no pudiesen agenciar la aprobación ni escandalizarse de no ser aprobados”⁶⁴¹.

El hecho de que con Curiel se hiciera pública la identidad de los censores no contribuía al secreto. Si bien es cierto que Curiel en sus reglamentos insiste en la necesidad de mantener el anonimato para evitar las presiones, éstas se producen, en lo que es una nueva grieta del sistema. Lo mismo ocurría, por otra parte, en Francia, donde la publicación cada año en el *Almanach Royal* permitía que los autores pudieran dirigir sus críticas a un colectivo reconocible, cuyos individuos eran citados con nombres y apellidos⁶⁴².

Podemos señalar, a este respecto, por ejemplo, la terrible insistencia con la que una señora de la nobleza titulada, la Condesa de Lalaing, María Cayetana de la Cerda, solicita que se cambie el revisor que había sido asignado a su censura, ya que los informes de éste habían sido negativos, llegando a sugerir el posible sustituto, que, obviamente, formaba parte de su círculo más cercano (el inicio del expediente data de 1790)⁶⁴³, lo que pone de manifiesto que también en el siglo XVIII los peticionarios conocían el estado de tramitación de sus expedientes e, incluso, el lugar físico donde

⁶⁴⁰ Como en otros aspectos de la censura, es frecuente que los solicitantes tuvieran conocimiento de los censores designados para la revisión de sus manuscritos. BOUZA, *op. cit.* (nota 127), págs. 120-123.

⁶⁴¹ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 304-306.

⁶⁴² Flocon habla también de estas presiones de autores y editores para que sus obras vieran la luz sin frenos por parte de los censores, FLOCON, *op. cit.* (nota 10), pág. 414.

⁶⁴³ AHN, Consejos, Leg. 5556.

se encontraban, ya que no existía el concepto contemporáneo de archivo⁶⁴⁴. La realidad es que las obras que no se aceptaban o que se aceptaban con modificaciones eran devueltas a los interesados, normalmente tras una petición formulada por el interesado, en el que evitaba mencionar el nombre del censor (según las notas del despacho, *supreso nomenclum*), lo que no evitaba que éstos supieran de quién la opinión que impedía que su manuscrito viera la luz pública.

La identidad de los censores era, por tanto, conocida por los interesados. Antonio Ponz, Secretario de la Real Academia de San Fernando envía al Consejo su noveno tomo del *Viaje de España* en 1779. La censura le fue encomendada a Felipe Samaniego, pero Ponz envía un nuevo memorial explicando respecto al censor asignado que “ha ocurrido la novedad de haber tenido que ausentarse de Madrid y pasado a restablecer su salud a Vizcaya, de que paso recado a mi parte para que solicitase se remitiese el noveno tomo a otro censor”. Se manda recoger el tomo de casa de Samaniego y se remite a censura “del Alcalde de Corte Don Gaspar de Jovellanos”, quien se muestra favorable a que la obra viera la luz pública el 18 de abril de 1780⁶⁴⁵. En este caso es el censor el que contacta con el interesado para que éste solicite un nuevo censor, evitando ser él quien hiciera la solicitud ante el Consejo.

Otra de las críticas más frecuentes que reciben los censores en las réplicas a sus juicios remitidas al Consejo en su intento de salvar una censura negativa es que anteriormente obras similares habían sido aprobadas sin inconvenientes. Los censores son conscientes de este tipo de afirmaciones y en ocasiones ponen la venda antes que la herida. Así, Luis Billet, por ejemplo, a la comedia presentada por Gabriel Suarez para su comedia “*El asombro de Geres*”, en septiembre de 1734 pide que se corrija por “indecorosa e irreverente [...] sin que sirva de exemplar el que a semejantes comedias se les aya dado permiso en otras ocasiones, pues el tiempo y las circunstancias pueden

⁶⁴⁴ ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M^a Jesús, “La Cámara de Castilla: secretarías de Gracia y Justicia. Problemas archivísticos e investigación histórica” en SCHOLZ, Johannes-Michael (Ed.), *El terder poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt, Klostermann, 1992, págs. 1-32.

⁶⁴⁵ AHN, Consejos, Leg. 5544.

y deben variar los dictámenes”⁶⁴⁶, en una demostración de que la coyuntura histórica de cada momento determinaba las obras dignas de la imprenta.

Otro de los problemas a los que deben hacer frente los censores es el de las continuas reclamaciones de los autores. Hay para el caso de Jovellanos diversos ejemplos, en los que él mismo protesta por el retraso que implica en la emisión de los informes, distrayéndole de sus otros quehaceres. Es el caso de las obras de Ramón Diosdado Caballero, las *Consideraciones americanas* (1790) y *Medios para estrechar la unión entre españoles y americanos* (1790), la misma obra con distintos títulos⁶⁴⁷. O el caso de las *Revoluciones de Inglaterra* del jesuita Pierre Joseph d’Orleans, traducido por José Alonso Ortiz Rojo, que envía hasta cuatro originales supuestamente corregidos siguiendo las indicaciones del censor en cada una de ellas y que termina con una airada respuesta de Jovellanos:

“Parece preciso que se le prevenga haga las demás correcciones con el mayor cuidado, pero sin necesidad de que vuelva la obra a la Academia; pues semejantes idas y venidas sólo sirven para aumentar sin fruto sus ocupaciones y robar a sus individuos el tiempo que necesitan para el desempeño de objetos más importantes.”⁶⁴⁸

La demora que podía producirse en la tramitación de los memoriales de petición suponía un grave trastorno económico para autores e impresores, que con las prensas paradas no podían obtener el beneficio esperado. Así lo expresan los interesados en los numerosos requerimientos en que se enviaba recuerdo al Consejo de la obra pendiente de examen, pero ni el Consejo ni las personas u órganos censores se dejan impresionar por estas reclamaciones, tras las cuales se produce un nuevo oficio instando al censor designado a que lo haga en el menor tiempo posible, sin que estos retrasos, bastante frecuentes por otra parte, se tradujeran en amonestaciones.

La Academia justifica estos retrasos al argumentar que

⁶⁴⁶ Madrid, Biblioteca Municipal, 1-5-7. Citado por AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71), tomo VII, 5488.

⁶⁴⁷ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), págs. 178-187.

⁶⁴⁸ *Ibidem*, págs. 122-125.

“expondría su veredicto y no correspondería a la confianza con la que honra si despachase con la brevedad que desean los authores unas obras que aunque de corto volumen pide mucha lectura, profunda meditación y mucho tiempo para consultar las fuentes originales”⁶⁴⁹.

También se muestra Jovellanos preocupado por el tiempo de demora que se tarda en emitir alguna las de censuras solicitadas, a pesar de que él era bastante dirigente en este aspecto si compara con el tiempo que otros censores tardaba en emitir sus. Así, empieza su censura al *Compendio histórico de los descubrimientos del Nuevo Mundo* de Bernardo de Estrada disculpándose por el tiempo que ha tardado, que justifica por el volumen de la obra y la necesidad de atender al contenido y corregir la ortografía al mismo tiempo. Del mismo modo, el 20 de marzo de 1782 firma 3 censuras y devuelve 2 libros diciendo que “no habiendome permitido mis ocupaciones examinar todas las obras que la Real Academia había remitido a mi censura, devuelvo a manos de V.S. las dos adjuntas [...] para que si sus autores instasen por el despacho de las censuras, se sirva la Academia confiarlas a otro individuo, y si no, las reserve para mi vuelta”⁶⁵⁰.

Algunas veces, sobrevenían causas de fuerza mayor que hacían necesario el nombramiento de un nuevo censor, como podía ser la muerte del comisionado. Así ocurre con la reimpresión de una obra propuesta por Andrés de Soto en 1779, cuya censura había sido asignada a Nicolás Fernández de Mora, cuya viuda, al fallecer antes de satisfacerla, devolvió el libro al Consejo, siendo remitida en su lugar a Tomás de Iriarte, que la firma en términos positivos⁶⁵¹, y con las *Aventuras de Juan Luis* de Ventura Lucas, que vio retrasar la tramitación de su obra por la enfermedad y posterior fallecimiento de Nicolás Fernández de Moratín, que había sido encomendado para ello, siendo finalmente Tomás Sánchez quien la firmara⁶⁵². Tanto en estos casos como cuando el elegido alegaba otras ocupaciones más urgentes que le impedían llevar a cabo la censura en un tiempo breve de tiempo, era el Juez de Imprentas el que

⁶⁴⁹ RAH, Censuras, 8015-27. Citado por LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 860.

⁶⁵⁰ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 81), pág. XXIX.

⁶⁵¹ AHN, Consejos, 5544.

⁶⁵² *Ibidem*.

debía determinar si se remitía a otro censor para no prolongar el proceso o si se devolvía al mismo el tiempo que fuera necesario.

La realidad es que el Juez de Imprentas podía designar varios censores para que examinara la misma obra, aunque era raro que se hiciera de manera simultánea, ya que normalmente se encargaba primero un informe y, a la vista de éste, se enviaba de nuevo a censura por otra persona u organismo. Es entonces cuando pueden surgir diferencias en torno a la conveniencia o no de publicar los originales.

El ejemplo más claro en este sentido es la solicitud de reimpresión en 1779 de la obra *Cuaresma poética* de Félix Eguía, que fue elogiada por el Vicario de Madrid y puesta en evidencia por Moratín en su censura, aunque sin llegar a desaconsejar su impresión:

“He leído Cuaresma poética con mucha devoción pero no con la admiración y asombro que los censores antecedentes pues se conoce que el piadoso autor subía mejor la cuesta del Calvario que la del Parnaso, pero como esta obra no se propone para modelo de elocuencia poética y sí sólo para meditaciones más importantes y esto lo consigue la piedad sin el primor como ya dicen que se ha sucedido: por eso soy de sentir que puede el Consejo, siendo servido, dar la licencia que se pide para la reimpresión y lo firmo en estos Reales Estudios de Madrid a 3 de febrero de 1779.”⁶⁵³

Pero no es el único. María de las Mercedes Gómez de Castro presenta la obra *Pintura del talento y carácter de las mujeres* en 1797. Se remite en primera instancia al dictamen de Leandro Fernández de Moratín, que aconseja la impresión. Sin embargo, no es suficiente y se envía de nuevo, pocos días después, al Vicario Eclesiástico de Madrid, para que

“[...] exprese si la obra contiene o no cosa que se oponga a nuestra santa fe catolica, buenas costumbres y regalías de SM; si es o no contraria a lo prevenido en las leyes del Reyno que mandan no se permitan imprimir libros inutilles y sin provecho alguno o

⁶⁵³ AHN, Consejos, Leg. 5544.

contiene asuntos impertinentes o si de su impresión y publicación se puede seguir alguna utilidad [...]”.

El censor, que reconoce en el original una mala traducción francesa que ya había sido impresa en castellano en 1773 y de la que existían suficientes ejemplares en circulación, desaconsejó la licencia, prevaleciendo esta opinión, ya que se le contesta con un sencillo “Excusese”⁶⁵⁴.

En ocasiones el enfrentamiento se produce por enemistades personales, y no tanto porque la obra no fuera útil para el público. Sólo así se entiende que la Real Academia de la Historia, por iniciativa de Campomanes, pusiera todas las trabas a su disposición para impedir la publicación del tratado *Defensa de la tortura* de Pedro Castro, al que se prohíbe el derecho a usar para imprimirla su título de académico de la misma, pero que verá la luz con el dictamen favorable del Colegio de Abogados de Madrid⁶⁵⁵, o a Matías Huarte y su disertación sobre la cronología de la predicación del Apóstol Santiago en España, al que se le niega también el privilegio de académico, en este caso justificando el rechazo ante la ausencia de una opinión clara en la Academia sobre el tema⁶⁵⁶. El papel de Campomanes desde sus distintas obligaciones resulta crucial, no sólo por la labor que desempeña la Academia que él preside o como censor⁶⁵⁷, sino por su capacidad para influir en las decisiones que otros deben tomar. Así ocurre en 1785 con el *Juicio o dictamen sobre el proceso de inoculación* presentado por Vicente Ferrer Gorraiz, donde la censura positiva del Protomedicato no pudo hacer nada frente a las presiones de Campomanes para que no viera luz, a pesar de lo cual fue impreso en Pamplona⁶⁵⁸.

Campomanes no es el único que ejerce su influencia en la Corte. La *España primitiva* de Francisco Javier Huerta y Vega, dedicada a Felipe V e impulsada por el cardenal

⁶⁵⁴ AHN, Consejos, 5562.

⁶⁵⁵ Fichoz nº 0006380L.

⁶⁵⁶ Fichoz nº 0010810L.

⁶⁵⁷ Su papel como censor no se limita al nombramiento por Curiel. Suya es, por ejemplo la censura al pronóstico de Torres Villarroel para 1767, del que manda suprimir todos los párrafos de contenido político, a pesar de que previamente, y también por encargo del Curiel, había obtenido la aprobación de Alonso Crisanto de la Fuente. Fichoz nº 0017189L y AHN, Consejos, Legs. 50661 y 5529.

⁶⁵⁸ Fichoz nº 0010232L y AHN, Consejos, Leg. 5546.

Gaspar Molina pudo ver la luz gracias su protección, que se impuso a la dura censura que por encargo de la Real Academia de la Historia había hecho del manuscrito Gregorio Mayans, viendo la luz en dos tomos en 1738 con las aprobaciones de Fray Antonio Ventura y Fray Pablo de San Nicolás⁶⁵⁹.

Pero el que resulta más curioso es el caso de la más conocida y, sin duda, polémica obra del Padre Isla. Su manuscrito fue examinado en 1758 por dos de los censores que habían sido designados por Curiel: Fray Alonso Cano y el padre José de Rada. Éste, como hemos visto, despachó el original en términos muy elogiosos, al considerarlo “muy *útil* para la reforma que desean todos los juiciosos”. Está haciendo referencia al intento de reforma de la expresión religiosa, ya que la obra de Isla era ataque frontal contra la predicación floripondiosa que tanto éxito tenía en el momento. El tono humorístico no evitó que rápidamente se levantaran suspicacias y la obra fuera denunciada a la Inquisición, que finalmente la condenó y la incluyó en su *Índice* por “contener proposiciones sediciosas, malsonantes, ofensivas, injuriosas gravemente a las Sagradas Religiones y predicadores del Santo Evangelio [...] y porque el medio de que se vale su autor es muy impropio y ajeno del que usaron los Santos Padres para reprehender los abusos de la predicación”⁶⁶⁰. La obra, que incluso había resultado graciosa para el rey, fue rápidamente prohibida, impidiéndose la publicación de su segundo tomo, que no vio la luz en la vida de su autor, ya que se imprime por primera vez en 1768⁶⁶¹.

En contra tenía nada menos que al padre Eleta, entonces Confesor del Rey, figura que ya hemos comentado se acercaba más a la de un Ministro que a la de un orientador espiritual por la trascendencia que tenía su cargo en el funcionamiento del aparato administrativo para las cuestiones religiosas. Fue él, el conocido padre franciscano, uno de los pilares del partido anti-jesuita de la Corte, quien impidió la publicación del segundo tomo por su presión a Carlos III, y también fue él quien desterró al padre Isla tras manifestarse éste en contra de la canonización del venerable Palafox.

⁶⁵⁹ Fichoz nº 0010822L y AHN, Consejos, Leg. 50633.

⁶⁶⁰ AGUILAR PIÑAL, *op. cit.* (nota 71), tomo IV, 4362.

⁶⁶¹ *Ibidem*, 4363.

Sin duda pesó más en el ánimo de Carlos III la presión ejercida por Eleta que el apoyo que la obra había suscitado desde antes de su publicación entre lo más granado de la República de las Letras. A las elogiosas censuras firmadas por dos de los censores regios, José de Rada y Fray Alonso Cano (cuya aprobación se imprime en la edición *princeps*), se le añaden las cartas que Isla hace imprimir junto con su original: Agustín de Montiano, Juan Manuel de Santander y Miguel Medina. O el apoyo que tras su impresión obtuvo de Leopoldo Jerónimo Puig, también censor real. Es cierto que todos los censores habían sido nombrados por el pro-jesuita Curiel, pero Carlos III no los había removido, todavía, de su cargo.

Es el caso más claro de cómo los informes positivos podía abrir la puerta a la impresión de la obra, pero no eran suficientes. Subyacen las más fuertes luchas de influencias en la Corte, cuya trascendencia supera la impresión de libros, que no deja de ser un escenario más de las luchas de poder entre los diferentes partidos que conviven en la Administración borbónica. En este caso, la oposición anti-jesuita, que carecía de representación en el sistema censor, pudo impedir la publicación del segundo tomo y prohibir la circulación del primero a pesar de que contara con todos los beneplácitos de los que legalmente podía otorgar el *imprimatur*.

En ocasiones las diferencias no son tanto personales como por la valoración del contenido. Es el caso del pronóstico presentado en 1741 para el año siguiente por José Patricio Moraleja Navarro denominado *El saludador de los astros*. El manuscrito de este escribano real, apodado el Gran Piscator de Carabanchel, había obtenido el pase del también autor de pronóstico Francisco Horta Aguilera, en cambio un parecer contrario firmado por Bernardo José Reinoso, que lo definía como “un conjunto de desatinos, sin concierto desde la cruz hasta la fecha” se hará valer y el manuscrito no fue enviado a las prensas⁶⁶².

⁶⁶² Fichoz nº 0050252L. El dictamen de Francisco Horta Aguilera figura en AHN, Consejos, Leg. 50636 y el de Reinoso en AHN, Consejos, Leg. 50637.

Más extenso es el expediente conservado sobre la obra que en 1779 Manuel Martín, impresor, presenta al Consejo bajo el título *Instrucción de la festividad del Corpus Christi y de la Vida y muerte de la Virgen Santa Juliana*, que se conserva impreso con 77 páginas. Santa Juliana, según reza en la portada fue Priora del Monasterio de San Cornelio, de la Orden Cisterciense de San Bernardo y a la que el autor, el padre Fray Francisco de Vivar, Prior del Monasterio de Nogales, del orden de San Bernardo, atribuye la institución de esa sagrada solemnidad. La obra había sido impresa en Valladolid en 1618. El Consejo remite el original al Vicario para que un censor suyo la evalúe, y éste la juzga “útil para la instrucción de los fieles”. Se remite después a la Academia de la Historia, práctica común cuando la obra afectaba no sólo a la religión. El informe de la Academia no es tan positivo y condiciona la impresión de la obra a varios cambios que debían introducirse. En primer lugar matiza el título, pues la beata no era la instauradora, sino promotora de la festividad y expone, después, algunos puntos desarrollados en el original sobre milagros y acontecimientos vividos con el Diablo que le habrían ocurrido a la Beata y que no se consideran verídicos porque habrían sido extraídos de obras medievales no muy fidedignas:

“Por esta sumaria exposición comprenderá ya la Academia que en el tratado que se pretende reimprimir hay algunas cosas (quales son las mencionadas arriba) que no convendría dejar correr, y que lo demas del cuerpo de la obra puede permitirse, esta escrito según el espíritu de otros tiempos menos ilustrados, en que por la mayor parte de los autores candidos y piadosos mas se proponian dejar atonita y divertida devocion de los fieles con la abundancia de prodigios extraordinarios y virtudes inimitables, que en formar con sus escritos las buenas costumbres, hacer amable la Religión fructuosos sus misterios y racional el obsequio de nuestra fe”.

En ese sentido, en la misma censura se señala que la obra del Papa Benedicto XIV sobre el Corpus, traducido y publicado el año anterior por el presbítero D. Joaquín Moles, era más oportuna al ajustarse más a los hechos ocurridos. Así, tras un largo proceso que se prolonga hasta 1784 se determina que “si la Academia juzgare deberse aprobar la obra para su reimpresión, a lo menos haya de ser haciendo presente al Consejo todos estos reparos”. La resolución se ajusta, finalmente, a los cambios

introducidos en la Real Academia, mandando que se comunicara “la censura al autor *supreso nomine* para que arregle la obra conforme a ella”⁶⁶³.

Así pues, la intervención de varios actores en la aprobación de una misma obra provocaba, con frecuencia, la aparición de diferencias entre ellos, prevaleciendo generalmente la opinión más restrictiva, que solía ser la emitida en segundo lugar, aunque en caso de conflicto la influencia ejercida por protectores y detractores siempre fue el elemento que más influyó en la concesión o denegación de una licencia.

4.3. El objeto de las censuras

Aunque dentro de la práctica administrativa todos los peticionarios expresan en sus memoriales su vocación de servir, los censores eran los que debían evaluar si esto era así, fijándose para ello en los más diversos aspectos que se reflejaban en las censuras presentadas. Y esto era conocido por los demandantes, que en sus solicitudes son conscientes de que su manuscrito debe ser examinado previamente, reflejándolo de manera patente al pedir expresamente que fuera dado a la censura de quien considerase oportuno.

4.3.1. Regalías, Fe y costumbres. El concepto de utilidad

Las condiciones legales para la impresión de una obra están establecidas, como ya hemos visto, en la abundante legislación sobre imprenta. Es de nuevo Curiel el que, en su *Instrucción* para los censores lo explica de manera más clara. En primer lugar, pues en ello residía la justificación teórica de la imprenta como regalía, se ponía el acento en la fe:

“Y a todos se previene y encarga muy particularmente el mayor cuidado en lo perteneciente a nuestra Santa Fe, teniendo preferente el empeño y fugacidad con que los enemigos de la Religión esfuerzan su malicia, introduciendo cautelosamente

⁶⁶³ AHN, Consejos, Leg. 5544.

disimulado el veneno y contagio de las heregias y errores nunca mas temibles que en los tiempos presentes, ni mas dignas del cuidado y vigilancia del Consejo.”⁶⁶⁴

Junto a la fe, y en relación con ella se debía velar por las buenas costumbres, y, finalmente por la regalías y derechos del Rey. Pero también hemos visto como más allá de esta la *triada* de la censura, los censores debían vigilar que no se ofendiera el honor de ningún particular, comunidad o de la propia nación, además de impedir la publicación de aquellas obras que fuera consideradas “apócrifas, supersticiosas, reprobadas o de casas vanas y sin provecho”, pues no en vano es la utilidad de una obra la que le daba sentido.

En una de las comunes peticiones de revisión de la negativa a imprimir una obra, José Moraleja, en septiembre de 1745, pide explicaciones de los motivos que han impedido ver impresa la obra que llevaba por título *Guía de litigantes* en los siguientes términos:

“No se funda la denegación en repulsa que merezca la obra por oposición que no haga o contenga contra la regalías del Rey (que Dios guarde) ni contra los preceptos y costumbres de nuestra Catholica Fee y Santa Romana Iglesia. Lo segundo porque faltando esto no aparece motivo por el qual se coarte a mi parte la libertad que a extensión de los ingenios [...] se halla permitir a todos, a menos que satíricamente [...] se impugnen los escritores. Lo otro porque la obra compuesta por mi parte y solicitada a dar a la estampa no se registra sea perjudicial a dicho alguno de tercero porque aunque en apellidarse Guía haga conveniencia con otra que corre para los forasteros [...]”⁶⁶⁵

Quien resuelve es el propio Bustamante, que rechaza la impresión propuesta por un conflicto con la *Guía de forasteros*, que gozaba del privilegio real. Por desgracia no se conserva la censura inicial ni el nombre del censor que la firmó, pero basta para ver cómo los autores conocen la legislación y preguntan el verdadero motivo de la prohibición si en la respuesta no se ha alegado ninguno de los figuran las leyes. En el

⁶⁶⁴ AHN, Consejos, Leg. 11275.

⁶⁶⁵ AHN, Consejos, Leg. 50641.

fondo, esta vez, estaba un conflicto de intereses, en otros estará el concepto de utilidad.

Sobre el concepto de utilidad

Las referencias a la utilidad de las obras que debían ver la luz nacen con la institucionalización del propio sistema censor. Ya desde la Ordenanzas del Consejo de 1554 por las que Carlos V unificaba la mayor parte de las competencias en materia de imprenta en el Consejo Real de Castilla, se hace referencia a que sólo se debían otorgar licencias para aquellos que no fueran “inútiles y sin provecho alguno”.

La utilidad subyacía en todos los expedientes de aprobación de los siglos XVI y XVII, incluyendo el que seguramente sea el más significativo de la historia de la literatura en español por la importancia posterior del impreso al que dio lugar, el *Quijote* de Cervantes. Así, Antonio de Herrera firmaba en el expediente de 1604 que “será de gusto y entretenimiento al pueblo lo qual en regla de buen gobierno se debe de tener atención”⁶⁶⁶, incluyendo el entretenimiento del público entre lo útil. Del mismo modo, en la propuesta de reforma de la censura emanada de la Junta de 1607 ya se había dispuesto que sólo se debería dar licencia a “libros de provecho”, para lo que el Consejo de Castilla se debería apoyar en el juicio previo de varios religiosos. En la Pragmática de 1627 Felipe IV también había hecho referencia a la necesidad de frenar la proliferación de libros “no necesarios y convenientes”, lo que implicaba que parte de la producción no se ajustaba a este precepto⁶⁶⁷.

Durante todo el Setecientos, los peticionarios incluyeron, por norma general, en sus memoriales una justificación de los beneficios que para el público tendría la impresión de su manuscrito, además de explicar que la obtención de la licencia vendría a satisfacer las horas de trabajo que el autor había empleado en su elaboración. Cuando el autor ya había dado a luz otras obras también se incluía esto como mérito, sobre todo si se trataba de una reimpresión o una segunda parte de una obra que había disfrutado de cierto éxito editorial.

⁶⁶⁶ BOUZA *op. cit.* (nota 127), pág. 12.

⁶⁶⁷ REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 269-271.

Cualquier elemento que pudiese favorecer la predisposición del Consejo para conceder la licencia podría ser incluida en la petición. Más allá de la utilidad y aprovechamiento, se hacen alusiones a datos biográficos relevantes y se refieren también a desterrar la ignorancia sobre un tema concreto, al ensalzamiento de la Monarquía o a satisfacer una demanda que no se puede satisfacer por la ausencia de ediciones en el reino.

Si bien hemos señalado que las indicaciones dadas a los censores fijaban como objetivos que las obras no debían ser contrarias a la fe o al rey, éstas no son las únicas características que debía tener un manuscrito para mudar a impreso. Por ejemplo, el marqués de Arellano, al censurar una obra de Ambrosio Valderrama en 1779 dice de él:

“[...] manifiesta [el autor] sus deseos del mejor servicio del Rey, pero como no demuestra la utilidad en lo que propone o proyecta, ni tampoco lo figura ni explica metódicamente, para hacerlo comprehensible, soy de sentir que aunque no se nota expresion contraria a la fee y buenas costumbres, no conviene a la opinion y concepto del autor que se le conceda licencia de imprimirle”⁶⁶⁸.

La respuesta que se da es, de nuevo, un lacónico “Excusese”. El autor solicitó la censura para corregir la obra y se le entregó *supreso nomine*, pues si bien se ajustaba a las tres condiciones legales, de su publicación no se derivaba *utilidad* para los lectores.

En la propuesta de creación de una mesa censoria en 1777, al explicar cómo debía ser el funcionamiento de la censura, se hacía referencia de manera destacada al concepto de utilidad que condicionado por el respeto a la fe, las buenas costumbres y regalías de la Corona, se establece como la única condición que deben cumplir las obras que se dieran al público, admitiendo incluso errores en el contenido:

“En fin el que examina un libro ha de mirar el bien el reino para no privarle de un tratado *útil*, aunque sea a costa de alguna corrección en uno u otro pasaje de dudoso o

⁶⁶⁸ AHN, Consejos, Leg. 5544.

mal sentido, cifrando su deber respecto a los libros de mala doctrina, para estorbar que se introduzca en España libro que pueda ofender a la religión, a lo dispuesto en las leyes, a las buenas costumbres o a las regalías de la Corona, o suscitar perturbación".⁶⁶⁹

La utilidad se enfoca sobre todo a cuestiones prácticas. En el expediente del ya mencionado *Tratado de Agricultura General* de José Antonio Valcárcel, el censor, cuya identidad desconocemos establece:

"Nos persuadimos que puede convenir y traer utilidad a la agricultura en general la impresión del adjunto tomo VII, y no ofreciéndose en el especie alguna contraria a las buenas costumbres, ni a lo dispuesto por las Leyes del Reyno, esperamos se sirva hacerlo presente a la Real Sociedad la clase, en cumplimiento de la orden de remisión, sujetandonos sin embargo rendidamente a la determinacion que acordase."⁶⁷⁰

Y para la segunda parte del mismo tomo:

"[...] aunque con un estilo demasiadamente difuso, esta lleno este tratado, como los ya publicados, de noticias excelentes y conocimientos practicos y utilisimos para los que quisieran dedicarse a conocer por principios ciertos y fundamentales el necesario arte del labrador, abandonando por lo comun desgraciadamente a practicas inverteradas, que sin el menor examen se siguen por rutina y con notabilisimo perjuicio de los mismos, por quienes son ejecutados."⁶⁷¹

En este caso la utilidad redunda en un beneficio práctico difundiendo técnicas y conocimientos dirigidos a mejorar la productividad agraria, al instruir a los labradores en los principios agrícolas más novedosos. Normalmente se hacía más hincapié en la *utilidad* de una obra que en la *novedad* de la misma, sustentando además aquella en la erudición y la autoridad del autor, prueba evidente de las prioridades de la Monarquía, aunque en ocasiones como ésta, utilidad y novedad iban de la mano.

⁶⁶⁹ REYES, *op. cit.* (nota 49), Apéndice documental. La cursiva es nuestra.

⁶⁷⁰ AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁶⁷¹ *Ibidem*.

Aún más claro de la preponderancia de la utilidad se muestra el juicio que emite La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Corte, en boca de su Secretario, José Faustino Medina, cuando censuran el tratado *Ensayo sobre el blanqueo de los lienzos* que Miguel Jerónimo Suárez había traducido del francés en 1779. En el informe enviado al Consejo se relata el debate mantenido en la sesión correspondiente, en la que se evidenció “el aprecio que merece la obra y la utilidad que podrá resultar de su publicación”⁶⁷², al importar técnicas que se practicaban en Europa, sin que se haga en ningún momento referencia ninguna a las regalías, la fe o las costumbres, que, por otra parte, no tenían mucha cabida en un texto tan práctico.

La originalidad en los planteamientos suponía un riesgo evidente para lograr el *imprimatur* de una obra, pues dependía del ánimo del censor, que debía compartir sus inquietudes reformistas. Es lo que ocurre con el *Fray Gerundio de Campazas* del padre Isla. La obra fue mandada revisar por Curiel a dos de los censores a sueldo, Fray Alonso Cano y José de Rada, quien 1758 afirma que el libro sería “muy útil para la reforma que desean todos los juiciosos”. A pesar de contar con los parabienes de los censores y de la repercusión de su publicación, no era del gusto de quienes se sentían atacados por su provocativo contenido, por lo que finalmente fue prohibido por la Inquisición “por contener proposiciones sediciosas, malsonantes, ofensivas, injuriosas gravemente a las Sagradas Religiones y predicadores del Santo Evangelio, con irreverencia y abuso de la Sagrada Escritura, y porque el medio de que se vale su autor es muy impropio y ajeno del que usaron los Santos Padres para reprehender los abusos de la predicación”⁶⁷³. Dos juicios muy diferentes, fruto de dos cosmovisiones enfrentadas, cuya convivencia no fue sencilla.

Pero las no sólo debían ser útiles. También debían ser veraces. Por ejemplo en 1779 la Real Academia Médica Matritense desaconseja la impresión de una obra que presenta el licenciado Pedro de Anssa y Lacarra sobre la utilidad de la inoculación. En la censura se recusan uno a uno todos los principios médicos que sustentan la tesis del autor, y en el juicio remitido al Consejo no se hace referencia a las regalías, la fe o las buenas

⁶⁷² AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁶⁷³ AHN, Consejos, Leg. 50654.

costumbres, sino que la falta de veracidad en los planteamientos médicos que contienen son suficientes para evitar su impresión⁶⁷⁴.

La utilidad, no obstante, no fue un concepto inmutable. Tomás de Iriarte, por ejemplo, se muestra partidario de reimprimir una obra de Andrés de Soto en 1779 a pesar de considerar que “[...] aunque el asunto más es de entretenimiento que de utilidad”, puesto que el tema, una novela pastoril, había sido ejecutado con “pureza y suavidad de estilo” y el autor había cuidado de respetar “las leyes de la decencia y de las buenas costumbres”⁶⁷⁵. En otras palabras, no se traducían una utilidad práctica o instrucción de su publicación, pero satisfacía la necesidad de los lectores de este género manteniendo la pureza del idioma y de las costumbres. Era, por tanto, una utilidad similar a la expresada por Herrera para el Quijote: entretener al público o divertir inocentemente⁶⁷⁶.

Título, estructura y forma

El censor realiza su trabajo de manera minuciosa, prestando atención todas las aristas de una obra. Uno de los primeros aspectos en los que se materializa la intervención del censor es el título de la obra. No es necesario destacar su importancia cuando todavía hoy la elección de una lectura radica, la mayor parte de las veces, en que una atractiva denominación encabece la portada. La labor tutelar del censor comienza por el principio de la propia obra y por ello el título debe ser sencillo y fidedigno. Es frecuente que se solicite el cambio de los títulos a la antigua, considerados ostentosos o pedantes, optando por otros más sencillos, claros y apropiados, cambio que en ocasiones puede ser la condición para la concesión de la aprobación. En muchas ocasiones, el título que figura en el memorial de petición no coincide exactamente con el que finalmente apareció en la portada de la obra impresa, como la obra de Fray Manuel Barbado de la Torre *Compendio histórico-lego-seráfico. Fundación de la Orden de Menores*, traducción del portugués que el interesado había presentado a censura como *Compendio histórico-lego-seráfico. Vidas de los Santos Legos*, que si bien es

⁶⁷⁴ AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁶⁷⁵ *Ibidem*.

⁶⁷⁶ Es la expresión usada por Nicolás Fernández de Moratín en 1779 para conceder su aprobación a una obra presentada por Damián Maron y Rama. AHN, Consejos, Leg. 5544.

parecido, no fue el definitivo⁶⁷⁷. En ocasiones, los memoriales hacían referencias genéricas al contenido de las obras sin especificar el título y en otras el título no es el que finalmente llegó a la imprenta. Fijar el título que se emplea al solicitar la impresión era importante porque ayudaba la labor de los escribanos, que debían agrupar todas las peticiones que llegaran al Consejo sobre dicha obra en un mismo expediente, de manera que siempre estuvieran los antecedentes, siendo así como muchos han llegado hasta nosotros.

La intervención más drástica por parte de los censores se produce cuando se determina que la estructura del original no se adecua al objetivo didáctico que se supone a todo libro. Son frecuentes, así las peticiones de reorganización del original, de supresión de fragmentos que no aportan información relevante o, incluso, la exigencia a que se complete el contenido con otras referencias a las que el autor no habría accedido por desconocimiento, y que contribuirían al enriquecimiento de su obra y, por tanto, de la instrucción del lector⁶⁷⁸.

Son muchas las censuras en las que el parecer del censor es contrario a la impresión de la obra. Si en la mayor parte de las censuras favorables el contenido no aporta nada novedoso y se limita a repetir las fórmulas predeterminadas, en las censuras negativas sucede algo similar, y la mayoría desaconsejan la impresión del manuscrito por no cumplir algunas de las premisas establecidas legalmente, aunque el censor debía detallar los puntos en los apoyaba su juicio negativo. Los interesados podían así solicitar copia de la censura, de la que se suprimía el nombre del censor, para corregir, cuando era posible, el original atendiendo a las indicaciones y solicitar de nuevo la impresión presentando el original corregido. Las censuras negativas son, por tanto, bastante extensas, lo que unido a las peticiones de los interesados provocan que estos legajos sean, sin duda, los más voluminosos de cuantos se conservan sobre imprenta en el Archivo.

⁶⁷⁷ Fichoz nº 0004346L. AHN, Consejos, Leg. 50641. La licencia, por cierto, fue concedida bastando las aprobaciones que presentó el autor, si que se enviara a otros censores.

⁶⁷⁸ LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), pág. 866.

No obstante, la mayor parte de las negativas se despachaban con un "no sólo no hallo cosa útil ni provechosa al publico, sino muchas perjudiciales a las buenas costumbres y política de estos Reynos", que escribiera Antonio Tellez de Acevedo sobre el *Discreto censor en la Puente sin pero* de Antonio Muñoz para desaconsejar su impresión en 1737⁶⁷⁹. Más contundente es Bernardo José Reinoso al rechazar el pronóstico presentado por José Patricio Moraleja Navarro en 1741, cuando afirma "ser un conjunto de desatinos, sin concierto desde la cruz a la fecha"⁶⁸⁰ o Torres Villarroel al realizar la censura del pronóstico de 1742 de Antonio Muñoz en la que desaconsejaba su impresión "por sus muchas irreverencias dignas de la abominación"⁶⁸¹.

Con el paso de los años se produce, además una reducción del número de originales conservados en la Escribanía del Consejo, ya que se va extendiendo la práctica de que los autores reclamaran sus obras tras una censura negativa, muchos, sin duda, para buscar su circulación clandestina, bien manuscrita, bien impresa (sobre lo que todavía falta un estudio equivalente a los que existen para Francia), aunque otros serían sinceros en su intención de corregir la obra y adaptarla a las exigencias de los censores, aunque muchos quedaran desanimados al comprobar el alcance de las críticas, que suponía un juicio demoledor que hacía casi imposible corregir la obra sin cambiarla de inicio a fin.

Encontramos también censuras en las que se cuestiona el contenido de la obra si ésta no se ajustaba al mensaje ilustrado que se pretendía difundir, prohibiendo taxativamente su impresión. Es el caso de Ignacio López de Ayala⁶⁸², que en 1777 es comisionado por la Real Sociedad Económica Matritense para censurar el *Discurso político económico* de Juan Cubié⁶⁸³ y por el que el Consejo de Castilla rechaza la obra, ya que a ojos del censor difundía una visión de los gremios antagónica con la que tenía

⁶⁷⁹ AHN, Consejos, Leg. 50634.

⁶⁸⁰ AHN, Consejos, Leg. 50637. En este caso, además, se había producido previamente la censura positiva por parte de Francisco Horta Aguilera, AHN, Consejos, Leg. 50636. Hay que destacar que los tres eran autores de pronósticos.

⁶⁸¹ AHN, Consejos, Leg. 50638.

⁶⁸² Fichoz nº 014508.

⁶⁸³ Fichoz nº 045034.

la Matritense, que era la compartida por la Corona y que pretendía una reducción de su influencia y una liberalización progresiva de los oficios.

Al final del periodo, coincidiendo con el incremento de la producción, se produce de manera paralela o como causa de ese aumento, una mayor permisividad. Así, obras cuyos proyectos no son viables no se prohíben, pues si bien no se pueden materializar tal y como se plantean, si pueden contribuir al debate público sobre el tema. Un ejemplo de censura en este sentido es la realizada en 1801 por el conde de Isla que por orden del Consejo de Estado examina el *Proyecto de sistema de escritura universal* de Pablo Olavide, aconsejando su impresión tras apuntar la imposibilidad de su materialización, una postura que es compartida por otro ilustre censor, Gaspar Melchor de Jovellanos.

Precisamente, otra forma de exceder el formalismo de las censuras aparece representada en las ocasiones en que se exponen los defectos de una obra sin desaconsejar su publicación. Es el caso de dos obras de las que Jovellanos admite que sin ser todo lo correctas y útiles que deberían (motivos por los que otros autores habría desaconsejado su impresión), se deben dar a la imprenta, puesto que al circular ya por Europa en diversas traducciones puede ser leídas, y negar su entrada sólo perjudicaría a los propios españoles, que quedarían fuera de ese debate. Nos referimos, por ejemplo, a la censura de las *Memorias del Marqués de Pombal* (hecha el 13 de marzo de 1785) y la de *Fasti novi orbis et ordinationum apostolicarum ad Indias* de Domingo Muriel (1786), de la que afirma que “siendo una obra impresa ya, que corre, se lee y aprovecha en otros países, no hallo tampoco motivo para que se le niegue la entrada en estos reinos”⁶⁸⁴. Que la obra fuera ya pública hacía inútil su prohibición, mostrando su preferencia a que prevaleciera la publicación de un texto sobre los posibles errores que contuviera.

Los intereses propios de los comisionados para censurar se reflejan, también, en sus los juicios que emiten. Así, la Real Academia de la Historia, muestra su preocupación por la supuesta decadencia de la lengua, preocupación compartida con la Academia

⁶⁸⁴ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), pág. 115.

Española y con los principales ilustrados del momento. Es por ello que la adecuación de la lengua y la ortografía se convierte en una de sus principales metas, ante la amenaza que suponía la contaminación por galicismos. Especialmente agudo es el problema de las traducciones, por donde es más fácil que se introduzcan voces extrañas. Muy contundentes pueden mostrarse los académicos sobre este punto:

“Se halla tan mal traducida que no puede leerse sin compasión y nausea [...]. No puedo omitir una reflexión que he hecho sobre la mayor parte de las traducciones de la lengua francesa a la castellana que se publican en nuestros días y es que parece que todas se han vaciado en un mismo molde y creo que esto proviene de que los traductores eligen asuntos que no han estudiado anteriormente ni con la atención y profundidad que se requiere para que salga buena la traducción, y temerosos de que si separan de la colocación de voces pueden faltar al sentido del original tanquam saxo adherent, de que resulta que la traducción no es castellana sino un conjunto de frases francesas explicadas con voces de nuestra lengua”⁶⁸⁵.

La labor de cuidar por la corrección en el uso del castellano siempre estuvo de manera latente en el ánimo de los censores, pero no es hasta la reforma de 1805 cuando se hace referencia a ello de manera explícita en el reglamento emitido para el nuevo Juzgado de Imprentas que se encomienda a Melón.

La restitución de datos históricos es otro de los puntos en los que el censor se muestra más interesado, sobre todo a partir de la creación de la Academia de la Historia que precisamente había sido creada para limpiar la historia de fábulas y dar reglas para escribirla con pureza y dignidad. Los académicos entraron a fondo en la revisión de los contenidos, consultan bibliografía para acompañar sus opiniones, corrigen fechas y nombres que pueden estar equivocados, exigen, como ya hemos visto la eliminación de leyendas sin sustento histórico y se valoran positivamente el uso de técnicas auxiliares como la cronología, la numismática o la paleografía.

⁶⁸⁵ RAH, Censuras, 8014-9. Citado por LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203), págs. 861-862.

Los censores muestran su propia erudición en las notas y correcciones a los impresos, en los que las citas a la actualidad bibliográfica perfilan al censor como un lector al día de las novedades. Cuando lee un original puede situarlo con facilidad en el contexto bibliográfico francés o italiano, está al tanto de la opinión que fuera se tiene de esa obra. Pero también la bibliografía anterior publicada sobre la materia que trata la obra, señalando las coincidencias y censurando las contradicciones, sobre todo en aquellas obras consideradas como fuente de autoridad, reflejando entonces la erudición de la que todo buen censor hace gala.

La superación del proceso de censura previa gubernativa implicaba la posibilidad de hacer público el texto presentado en forma de impreso. Para ello debía determinarse que el manuscrito cumplía con los requisitos legalmente establecidos: respeto a la ortodoxia religiosa de la fe católica, a la propia institución de la Iglesia, a las buenas costumbres y a las regalías del monarca, al tiempo que se justificaba la utilidad que la difusión de dicha obra tendría en el resto de la población. La Corona era responsable del orden público de su Reino, y en ello la circulación de impresos jugaba un papel determinante, por lo que el papel de los censores como examinadores de lo correcto y, por tanto, como guardianes del orden debe ser reconsiderado.

Puesto esto en relación con Europa encontramos numerosas similitudes. En el Reglamento de la Mesa Censora portuguesa se fijaron diecisiete condiciones para que una obra fuera susceptible de prohibición, entre las que destacan las obras de ateos o protestantes, contrarios a la fe católica; obras que negasen la obediencia al Papa; obras de hechicería y astrología y las que apoyaran la superstición; las que contuvieran obscenidades que corrompiesen las costumbres y la moral de país o que atacasen a personas directamente excediendo los límites de la decencia. Y, obviamente, los que impugnasen los derechos, leyes, costumbres, privilegios, concordatos, etc., de la Corona⁶⁸⁶. En Francia, Malesherbes había fijado en sus *Mémoires* los límites de la libertad de expresión, estableciendo cuatro elementos que podían impedir la

⁶⁸⁶ VILLALTA, Luiz Carlos, "Censura literaria en el mundo luso-brasileño (1517-1808): órganos censores, criterios de censura y obras prohibidas", en *Cultura Escrita & Sociedad*, nº 7 (2008), págs. 106-107.

impresión de una obra, y eran el ataque a las personas, el gobierno, la moral o la fe⁶⁸⁷. Se observa una coincidencia entre los preceptos legales establecidos, fueran estos explícitos o no en la legislación.

4.3.2. Autoría y géneros literarios

La autoría

Veíamos en la introducción a los principios metodológicos la dificultad existente para determinar qué es un autor y para averiguar el verdadero responsable de una obra. A esto debemos sumarle, llegados a este punto, la variedad de solicitantes que hemos encontrado. Dentro de nuestro análisis hemos intentado desgranar de manera objetiva el papel que cada agente juega en la edición de una obra, pues todos fueron necesario para la materialización del impreso, pero no todos intervienen de la misma forma ni con la misma profundidad. Hablábamos, entonces, de la categoría “responsable”, en la que incluimos a quienes solicitan la impresión al Consejo y/o quienes figuran en la portada de la obra impresa, fuera autor o editor de la misma. Cuando el cruce de documentación e información nos permite separar claramente las funciones de cada actor hemos podido avanzar en la clasificación diferenciando al autor del texto, al editor del mismo e, incluso, a quien realiza el encargo de la obra y corre con las gestiones administrativas. Este es el caso mayoritario de las solicitudes presentadas por el superior de una orden, de una comunidad religiosa o por el procurador de la misma, donde se respeta la autoría del religioso pero se beneficia de la impresión su comunidad religiosa. Para el análisis gráfico que hemos observado se han empleado sólo los “responsables”, fueran autores o editores, dejando aparte a los solicitantes de la obra, que pueden ser interesantes para análisis posteriores.

Los peticionarios de las licencias al Consejo son también variados en relación con su intervención en el texto que presentan y no supone, tampoco, ningún cambio relevante con respecto a los presentados para el siglo XVII⁶⁸⁸:

⁶⁸⁷ MINOIS, *op. cit.* (nota 18), págs. 224-225.

⁶⁸⁸ BOUZA, *op. cit.* (nota 127), pág. 38.

- Autores responsables del manuscrito, por sí mismos o a través de un procurador
- Procuradores o superiores de una orden o comunidad religiosa a la que pertenece o pertenecía el autor
- Herederos de los autores de la obra, hubieran tenido o no permiso para imprimir dicha obra anteriormente
- Libreros o impresores que desean imprimir obras cuyos privilegios han expirado o cuyos autores han cedido sus derechos

Conviene recordar que la obtención de una licencia no suponía la exclusividad, ya que ésta sólo era concedida a través de los privilegios, que se solían expedir simultáneamente cuando se solicita por parte del interesado. Así, tres de las cuatro categorías de diferencias son peticiones realizadas por personas ajenas al autor de la obra, que actuaban en muchos casos tras el fallecimiento del mismo. Era así, por ejemplo, en el caso de los eclesiásticos, cuyas órdenes religiosas podían reimprimir sus obras tiempo después de su muerte como fuente de financiación.

Hemos visto en el apartado referente a la legislación que desde el primer momento existe un especial interés por que junto al título de la obra figure, siempre, el nombre del autor del texto, además del impresor, ciudad y año, datos que sin embargo no aparecen en todas las portadas. Algunos censores son conscientes del incumplimiento y demandan que los autores pongan sus verdaderos nombres en los manuscritos censurados. Pero el propio sistema contaba lagunas al respecto y el nivel de cumplimiento de estas normas era, también, escaso. Algún autor sufre esta falta de definición, como Ventura Lucas. Ante el manuscrito que presenta en 1779, el Consejo aprecia que se podría tratar de un apodo tras el que se escondiese el verdadero autor, por lo que determina que se haga “saber a este procurador se presente el Autor de esta obra al presente Secretario de Gobierno para que se informe y certifique de ser el mismo que se titula en este pedimiento y fecho se de cuenta”. El interesado responde que era su nombre verdadero y que con él había publicado otras obras, aunque también era conocido como Diego Ventura Rejón y Lucas, que dice no tener inconveniente en poner todos sus nombres, pero que había puesto sólo parte de ellos

porque así había publicado con anterioridad sin ningún reparo, pidiendo perdón por el descuido y pidiendo se le permitiera imprimir si su obra se consideraba “útil al público”. A pesar de la aclaración, el Consejo determina que se pusiera el verdadero nombre en la portada⁶⁸⁹.

Conviene retomar por un momento las publicaciones periódicas para comprobar cómo el celo que las leyes muestran por identificar los autores de todo tipo de impresos no tenía su reflejo en quienes firmaban los artículos de los principales periódicos del momento. Tomamos una de las publicaciones más conocidas y estudiadas, *El Censor*⁶⁹⁰, que contó con respaldo por parte del poder, a pesar de varios cierres temporales, y que sirvió de altavoz para las ideas de los principales ilustrados. Podemos observar la dificultad para determinar la autoría de cada uno de sus ensayos de sus diferentes números, lo que se justifica para que cada escritor pudiera exponer libremente sus pensamientos sin que se le descalificara personalmente. Son las autoridades las que permitían y fomentaban una publicación sin que fuera necesario especificar quién firmaba cada opinión, o, al menos, sin que el público lector fuera consciente de quién lo hacía. El objetivo declarado era que la polémica no girase en torno a ellos, sino a sus argumentos⁶⁹¹, mostrándonos un trato diferenciado respecto a los libros que no se basa sólo en la materialidad de los objetos, sino en las funciones y objetivos que se pretendía dar a cada soporte.

Se conocen, también, numerosos casos de obras presentadas bajo pseudónimo ante el Consejo que, a pesar de lo establecido en la legislación vigente, salían a la luz pública con todas las aprobaciones y licencias necesarias. Si bien es cierto que alguno de los nombres empleados podía confundirse con un nombre real, solicitantes como el “*Licenciado Lampiño*” que imprime un pronóstico en 1728, con censuras de Carlos de la Reguera y Fray Lorenzo García, parece que no deja lugar a dudas a que escondía la

⁶⁸⁹ AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁶⁹⁰ Sobre este periódico, que se publicó interrumpidamente entre 1781 y 1787, existen interesantes y sugerentes estudios, entre los que destacan CASO GONZALEZ, J. M., “*El Censor, ¿periódico de Carlos III?*”, en *El Censor*, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 1989, edición facsimil y GARCIA-PANDAVENES, E. “Prologo”, en *El Censor (1781-1787)*, Barcelona, Labor, 1972.

⁶⁹¹ FLECHA ANDRES, Francisco, “La función crítica en la dialéctica unidad-diversidad: el ejemplo de “*El Censor*”, en *El mundo hispánico en el siglo de las Luces*, tomo I, pág. 631.

identidad real de su autor. No se puede creer que el público lector conociera quien se escondía detrás de la firma, porque no tenemos constancia de más obras salidas de su pluma. En otros casos, son los mismos autores, como Mañer, quienes en su correspondencia con amigos o en otros impresos reconocen la autoría de obras firmadas bajo pseudónimo, pero por su volumen es más fácil que el propio público conociera su identidad. Este fenómeno es frecuente en los pronósticos, cuyos autores suelen esconder su verdadero nombre tras un alias que hace referencia a la ciudad de donde escriben, como El Piscator de Toledo, de la Corte, de Madrid, el de Lavapiés, el Gran Piscator de Castilla, como se hacía llamar Gómez Arias⁶⁹², o el celeberrimo Gran Piscator de Salamanca, Diego de Torres Villarroel y su sobrino y sucesor, el Pequeño Piscator de Salamanca. El éxito editorial de uno de estos nombres empujaba al autor a sacar sus obras bajo el mismo pseudónimo como reclamo para el público.

En 1786, por ejemplo, José Antonio Valcárcel, socio de la Real Sociedad de Valencia, envía a censurar el tomo VII de un *Tratado de Agricultura general* que él mismo había escrito. La revisión se encarga a la Matritense, cuyo socio encargado señala:

“No viene firmado este papel de mano del autor ni de otro alguno. Pero hallandose remitido por el Consejo a informe de la Real Sociedad y de acuerdo de esta a la Clase de Agricultura, parece que no debe servir de obstaculo esta omisión o defecto a la condescendencia del permiso que solicita para imprimir, quando se han dado a luz a nombre suyo los tomos anteriores y sin duda alguna son de la misma mano todos ellos, según el orden y distribución de los tratados y estilo o lenguaje uniforme que contienen.”⁶⁹³

Se trata del séptimo tomo de una obra conocida, cuyo autor ha gozado en todas las ocasiones anteriores del beneplácito de la crítica, por lo que se le perdona un defecto de forma, como era la ausencia de firma, aunque en este ejemplo se debiera a que la autoría era reconocida por todos. Que el censor comentara este hecho apunta por sí sólo la importancia que desde los órganos censores se concedía a la identificación de los responsables.

⁶⁹² Fichoz nº 00056360.

⁶⁹³ AHN, Consejos, Leg. 5544.

En relación con la autoría está el reconocimiento de los derechos de autor, elemento al que no hemos prestado atención hasta el momento. Las autoridades se enfrentaban a numerosos problemas a la hora de controlar la circulación de impresos dentro de los que se denomina *policía del libro*, es decir, el control posterior a la impresión. Los autores son conscientes de estos problemas, pero no les disuade de protestar cuando es necesario. Así, en la solicitud para su pronóstico de 1737⁶⁹⁴, Torres Villarroel se queja al Consejo de que otros autores aprovechan sus pronósticos sin su permiso, en lo que constituye una clara llamada de atención. El elevado número de obras que aparecen para atacar o defender al Gran Piscator de Salamanca, todas con autorización para ser impresas, pudieron motivar la referida queja del profesor salmantino, que está reivindicando su obra como propiedad, cuya protección debe ser salvaguardada por la Monarquía.

Censura, novela y traducciones

Uno de los géneros literarios más controvertidos a lo largo del siglo XVIII fue, sin duda la novela⁶⁹⁵. Los ilustrados la conciben como un medio especialmente propicio para la divulgación de todo tipo de inmoralidades entre un público particularmente delicado: la juventud y la mujer. Los novelistas son conscientes de que el género que cultivan no encaja con la pretendida uniformidad cultural y sabían que sus mayores obstáculos eran la falta de reconocimiento del género y la obstinada persecución de los censores, que temían tanto la desviación de la ortodoxia religiosa como al excesiva atención concedida a la sensualidad. Por ello utilizarán los prólogos de sus obras o bien para alejarla de cualquier sospecha de subversión o bien como reivindicación de la dignidad literaria del género y, por tanto, la utilidad de su creación⁶⁹⁶. Sirva como ejemplo el *Eusebio* de Pedro Montengón⁶⁹⁷. En el prólogo de esta novela pedagógica al estilo de Rousseau se hacía eco del debate sobre la existencia de una “virtud moral” al margen

⁶⁹⁴ AHN, Consejos, Leg. 50632.

⁶⁹⁵ ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, *La novela del siglo XVIII*. Madrid, Júcar, 1991.

⁶⁹⁶ GARCIA LEON, M^a E. “Los prólogos de las traducciones de novelas en el siglo XVIII”, *II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo. Vol. II*. Oviedo, Cátedra Feijoo, 1983, págs. 483-494. Citado en MADERA SEOANE, M^a Jesús, “La novela bajo sospecha: uniformización cultural frente a diversificación en el género narrativo a finales del XVIII”, en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, págs. 869-875.

⁶⁹⁷ MONTENGÓN, Pedro, *Eusebio*, Madrid, Sancha, 1786-1788, 4 vols.

de cualquier credo religioso, y deja entrever que su obra tiene el objetivo de ser un compendio de moral ilustrada, concibiendo, por tanto, la novela como un género por el que era posible transmitir a los lectores una enseñanza, lo que implicaba situar a la novela entre la tipología de obras aceptadas por ser útiles para la instrucción de los lectores, o lectoras, opinión que en este caso será compartida por los censores. En el prólogo Montengón hace referencia al principal objetivo de toda obra impresa: la utilidad, y por ello su autor dice que “el Eusebio está escrito para que sea útil a todos”. Esta utilidad generalizada será también el argumento que emplee para evitar hablar de religión en sus tres primeros volúmenes y utilizar la filosofía clásica en lugar de la doctrina católica. El censor, José Ferrer según recoge González Palencia, reconoce en 1785 la existencia del debate sobre el tema principal de la obra, si existe una facultad anterior a la revelación y la gracia, llamada “virtud moral”, cuyos principios se alcanzarían por la razón y no por la revelación:

“[...] que la Philosophia moral debe o no engañarse prescindiendo de la Religión, como lo hace el autor del Eusebio, es una cuestión muy controvertida, y no muy bien decidida todavía por los autores.”⁶⁹⁸

El censor coincide con el autor y aconseja su publicación al considerar que esta novela es un tratado útil:

“Diré, no obstante, que los que escriben y enseñan Filosofia moral pueden y aun deben, a mi parecer, conformar sus preceptos con la recta razón, pero haciendo ver al mismo tiempo que los naturales y revelados, lejos de ser opuestos, tienen una consonancia admirable.”⁶⁹⁹

Los trasvases culturales fueron intensos en el siglo XVIII como fuentes de enriquecimiento cultural y económico, especialmente a través de las traducciones del francés, y aunque en la segunda mitad se incrementa el fenómeno de anglofilia, los textos se traducen de las versiones francesas, pues muy pocos de nuestros ilustrados

⁶⁹⁸ GONZÁLEZ PALENCIA, A. “Pedro Montengón y su novela *El Eusebio*” *Entre siglos*, Madrid, CSIC, 1943, págs. 140-141.

⁶⁹⁹ MADERA SEOANE, *op. cit.* (nota 696), pág. 871.

conocían el idioma de Shakespeare e incluso los que la conocían, se apoyaban para sus traducciones en versiones francesas o italianas. Es por ello que los censores prestaron especial atención a este tipo de textos.

Hay que recordar que durante todo el Antiguo Régimen, las traducciones no tenían porqué ser un traslado inalterable de una lengua a otra. Más bien al contrario, los traductores podían dar rienda suelta a sus expresiones, alterando cuanto creyesen necesario el texto original. Las traducciones debían adaptarse a las condiciones y características culturales del país receptor. Ya D'Alembert había señalado que un traductor no debía tanto copiar el original como adaptar los textos al gusto de los franceses, lo que harán también nuestros traductores. En las obras no francesas, además, la transformación era doble, pues la versión original del texto era modificada para los franceses y, de nuevo, para el público español.

En los prólogos de las traducciones, así como en los memoriales de impresión, se suele aludir a los cambios que los traductores se ven obligados a introducir a sus textos, presentando la obra al público español “expurgada de todo error” o como “obra corregida y acomodada a nuestras costumbres por el traductor”. Significativa es la afirmación de García Malo al frente de su traducción de *Pamela Andrews*: “que esto se diga o no con las mismas expresiones del autor, y aun con los mismos episodios, importa poco para la moralidad que se pretende sacar”⁷⁰⁰. La infidelidad con el texto original era, por tanto, una obligación para poder superar la censura del Consejo de Castilla.

El padre Isla, en su famoso *Fray Gerundio*, arremete contra los malos traductores:

“¡Traductores de libros franceses! ¡Traductores de libros franceses! No los llame Vd. así, llámelos traductores de su propia lengua y corruptores de la ajena; pues, como dice con gracia el italiano, los más no hacen traducción, sino traición a uno y otro idioma, a la reserva de muy poquitos, quo digito monstrare omni, vel caeco, facile est.

⁷⁰⁰ RICHARDSON, S. *Pamela Andrews o la virtud premiada*, Madrid, Imprenta Real, 1794.

Todo el resto échelo usted a pares y nones, y tenga por cierto que es la mayor peste que ha inficionado a nuestro siglo”⁷⁰¹.

También Leandro Fernández de Moratín censura el trabajo de los traductores, cuando en el prólogo de su versión de Hamlet critica a quienes “han querido mejorar a Shakespeare con el pretexto de interpretarle”, aunque él había hecho lo mismo⁷⁰². A la “pureza del idioma” hace referencia Jovellanos en el prólogo de su *Pelayo*⁷⁰³ y Sempere y Guarinos cuando culpa a las malas traducciones de afean “nuestro idioma con voces y frases nuevas y con cierta languidez muy ajena del carácter y genio de los españoles”⁷⁰⁴.

No se puede negar la influencia que en la segunda mitad del siglo tuvieron los escritos franceses en la cultura española. Así lo refleja el Padre Isla en 1778 cuando se queja de que “Voltaire, Rousseau y los otros corifeos de la impiedad moderna han invadido hasta los rincones más apartados de España”⁷⁰⁵. Este hecho tiene su reflejo en las censuras, como se ve en la que realiza Jovellanos a la traducción que Bernardo María de la Calzada hizo en 1784 a la obra de Voltaire *Alcira o los americanos*, en el que según el ilustrado asturiano había graves críticas a la historia española del siglo XVI:

“Esta tragedia, escrita originalmente por Mr. Voltaire en el año de 1736, es toda de su invención, según confiesa su mismo autor y, sin embargo, corre con grande aplauso en Francia tanto por el mérito esencial que tiene en calidad de drama, como porque lisonjea la opinión que se han formado los extranjeros de los conquistadores del Nuevo Mundo. La Humanidad reprobará siempre la conducta de algunos de ellos, que deslucieron con su crueldad el esplendor de sus hazañas; pero esta crueldad se supone tan general en la tragedia, se realza con tanta afectación y se pinta con colores tan

⁷⁰¹ ISLA, Francisco, *Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes*, Madrid, Gabriel Ramirez, 1758, pág. 158. Consultado en su versión digitalizada, en la Biblioteca Virtual Cervantes: <http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02585063211381617421291/index.htm> [Consulta agosto 2012].

⁷⁰² PAJARES, Eterio, “Traducción inglés-español en el siglo XVIII: la “traducción tutelada””, en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, pág. 1000.

⁷⁰³ JOVELLANOS, *Obras completas. I Obras literarias*. Ed. José M. CASO GONZALEZ. Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII-Ayuntamiento de Gijón, 1984, pág. 360.

⁷⁰⁴ SEMPERE, *op. cit.* (nota 19), pág. 230.

⁷⁰⁵ REYES, *op. cit.* (nota 49), pág. 621.

negros y terribles, que no puede dejar de ofender aun a los españoles más imparciales y menos amantes de la gloria de su país”⁷⁰⁶.

No deja de ser un ejemplo de cómo la traducción podía resultar peligrosa para el público receptor porque su contenido atacaba nuestra propia historia, en lo que sin duda favorecía la creación de una Leyenda Negra sobre la conquista americana, lo que nos demuestra, una vez más, hasta qué punto el censor era consciente de las repercusiones que las obras analizadas tenían fuera de nuestras fronteras.

Ante las numerosas críticas que se reciben de los censores y del propio Consejo, preocupado por la entrada de galicismos, los traductores intentan defenderse justificando los errores por la dificultad de su oficio, como hizo Pedro Díaz Guereña ante los problemas que afronta para publicar su traducción de unos *Sermones panegíricos*:

“El empleo de traductor no debe ser tan execrable, pues ha tanto tiempo que VA sufre a los traductores, sin haber hasta ahora castigado, ni reprehendido a ninguno por haberse dedicado a este ejercicio; ni sé por qué a los libros escritos originalmente en otros idiomas distintos del nuestro se les ha de dar nombres de cisternas extrañas, poco puras y defecadas. Los libros, señor, son naturales de todos los países; en la república de las letras no hay más extranjeros que los ignorantes”⁷⁰⁷.

El trabajo de estos autores no siempre era tan denostado, sino que en ocasiones se elogia el papel de los traductores. Es lo que ocurre con Juan Galisteo, profesor de Medicina en Madrid, cuando traduce en 1779 los *Aforismos de Cirugía* de Hernan de Boherave. En la censura a su Antonio Fernández Solano deja escrito:

“[...] no he hallado cosa por la qual desmerezca la luz publica, antes siendo la obra original muy recomendable por si y mucho mas por las notas y memorias que se le

⁷⁰⁶ SERRANO SANZ, Manuel, “El Consejo de Castilla y la censura en el siglo XVIII”, *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV-XVI (1906), pág. 36.

⁷⁰⁷ *Ibidem*, pág. 388.

agregan, me parece sera muy util que VA siendo servido, conceda licencia para su impresión.”⁷⁰⁸

La obra, que según el aprobante era mejor que el original por las adaptaciones introducidas por el censor, obtuvo su licencia ordinaria ese mismo año.

Aunque todas las peticiones de licencia señalan que el texto ha sido “bien y fielmente traducido” y que “costó la traducción mucho trabajo”, sus autores no siempre mencionan el título original o el autor de la obra, sin duda para evitar que se convirtiera en un obstáculo para su aprobación. Así, obras de autores franceses como Voltarie, cuya heterodoxia era conocida, suelen omitirse en las solicitudes, esperando que ni el Juez ni los censores conocieran la obra, y de hecho así se imprimen muchas de estas obras en nuestro país, ocultando bajo expresiones “de un autor francés” obras que, si bien por su contenido no habrían tenido problemas con la censura, de conocerse su autor original habrían sido examinadas con mayor atención o incluso prohibidas por prevención.

En el examen de las traducciones, no sólo de novelas, sino también de otros géneros literarios como el teatro, existe un interés por el contenido que puede llegar a calificarse de crítica literaria. Si bien es cierto que cada miembro de la República de las Letras albergaba una idea de lo que era “buena literatura”, condicionado por su condición, educación, costumbres y trayectoria, pero sobre todo por su estilo para narrar sus pensamientos, existe en el colectivo de los censores una tendencia por valorar, por encima de las diferencias personales, si el texto era digno de darse a la imprenta. Para ello, y salvando el principio de diversidad, pues con buen criterio ser buen escritor no tenía por qué comportar uniformidad, se aprecia en los textos de los aprobantes la aparición del concepto de peculiaridad nacional, según el cual cada nación adquiere un estilo propio determinado por el carácter, el clima y las condiciones sociales y culturales de sus habitantes y las traducciones debían adaptarse a este carácter nacional para ser útiles a los lectores. Algunos de los autores españoles más populares del Setecientos como Nicolás Fernández de Moratín, Bernardo de

⁷⁰⁸ AHN, Consejos, Leg. 5544.

Iriarte, Agustín de Montiano o Gregorio Mayans reconocen en sus escritos la existencia de un “carácter nacional” que representa las costumbres de la nación y que deben reflejarse en todas las producciones literarias⁷⁰⁹.

Puesto que el final último de un libro debía ser la instrucción de quien lo leyera, los aspectos didácticos fueron siempre un objetivo a tener en cuenta por parte de los censores. En la aprobación que Tomás de Iriarte realiza a la *Gramática francesa y castellana* de Pedro Nicolás Chantreau, cuya solicitud de impresión presenta Antonio Sancha en 1779, se hace referencia de manera directa a la claridad del método y al estilo en el que está escrito, argumentos que pesan en su decisión de recomendar su impresión:

“[...] le considero provechoso así por el método y claridad con que está escrito como por que comprende quanto conduce a la buena enseñanza del idioma francés, con mas amplitud que los Artes hasta ahora publicados, pues no contento el autor con dar los preceptos de gramática y de pronunciación, se extiende a tratar de la propiedad de las voces y de las delicadezas de aquella lengua, a formar una nomenclatura de los términos mas usuales en ella, a proponer ciertas reglas de traducir, apoyándolas en ejemplos, y ultimamente a indicar algunos de los libros mas necesarios de que debe componerse la biblioteca de un aficionado al estudio de aquel idioma. Por estas razones y por no contener dicho libro cosa contraria a las buenas costumbres, ni a la Real cédula de 1777 contemplo que merece ver la luz pública, concedido VA el permiso para ello se solicita.”⁷¹⁰

Se unen, así dos elementos. Por una parte, las obras debían cuidar no sólo el contenido, sino también la estructura y la forma de expresarlo. Por otro, era necesario cuidar los libros dedicados a la enseñanza, fuera de religión o de idiomas, puesto que de su buena factura dependía la instrucción de cuantos los leyeran.

⁷⁰⁹ URZAINQUI, Inmaculada, “Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica”, en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, François López e Inmaculada Urzainqui, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 1295-1299.

⁷¹⁰ AHN, Consejos, Leg. 5544.

Un estudio completo de la producción libraria no puede olvidar una parte fundamental de los impresos que anualmente se producían en cualquier país, con más lectores que la mayoría de novelas y comedias por nosotros conocidas. Estamos hablando de la edición escolar, cuyos textos respondían a una demanda estable, lo que favorecía el desarrollo de la industria del libro. Los riesgos de los editores de estos libros son casi nulos y las ventas cuantiosas y regulares como. Al estudiar cuáles son las obras que más se venden no podemos pensar en los libros de los grandes intelectuales ilustrados, al alcance de muy poco no sólo por el coste de su adquisición, sino por la posibilidad de comprender su contenido. Los más vendidos son los humildes cuadernillos de pequeño formato, manejados, destruidos por generaciones y generaciones de niños. Cuadernillos cuyo consumo ha sido tan masivo que a pesar de las continuas impresiones y reimpressiones resulta difícilísimo encontrar ejemplares incluso en las más extensas bibliotecas⁷¹¹.

El material escolar, que lo era al mismo tiempo de catequesis, estaba hecho para ser manejado diariamente, impreso en pocos cuadernillos y en formatos pequeños, que se vendían a bajo precio y que se desgastaba con mucha rapidez. En este campo, como en tantos otros, existía un gran inmovilismo, y sirva como prueba que el privilegio de la cartilla de primeras letras concedido al cabildo de Valladolid en 1583 para tres años fue prorrogado sucesivamente hasta 1788⁷¹².

Se conservan muchas obras cuyo fin era la instrucción y el aprendizaje de diferentes materias, especialmente las primeras letras. La mayoría eran examinadas, precisamente, por maestros de las mismas materias que se contenían en los libros, que además solían ser reimpresas en muchas ocasiones, sin que fuera necesaria una nueva censura. Entre las que ediciones *princeps* de este tipo tan específico de literatura podemos destacar las *Epístolas familiares de Cicerón*, traducidas por el Catedrático de latín de los Reales Estudios, Rodrigo de Oviedo. La censura se encargó a su propia institución, siendo el Consejero de Castilla y Director de los mismos, Manuel de

⁷¹¹ LOPEZ, François, "Las lenguas de España y la lengua española. De las primeras letras a la literatura", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 141-142.

⁷¹² *Ibidem*, pág. 146.

Villafañe quien debe designar a la persona para su censura. En estos casos no sólo era necesario que se cumplieran las condiciones generales exigidas a todos los libros, sino también valorar su utilidad didáctica y así lo refleja el censor en cuestión, como había hecho Iriarte en el ejemplo anterior, cuando afirma que “será muy útil en los estudios de latinidad.”⁷¹³. De nuevo la utilidad como justificación última de la licencia de impresión.

4.3.3. *Por respeto a su sexo. La censura y las mujeres*

Dentro de la casuística, los expedientes de censura previa también nos permiten conocer cómo es el comportamiento de un grupo concreto de autores: las mujeres. De las censuras se puede analizar cómo las autoras se presentan ante el Consejo, ante los censores y ante el público, y al mismo tiempo la opinión que se forjan los censores tanto de ellas como de la actividad que desempeñan. El objetivo final es determinar, en la medida de lo posible, si la diferencia sexual está presente en el ánimo de autoras y censores, y si éste fue un factor determinante que impidiera o facilitara la impresión de sus obras, lo que nos permitirá comprobar el protagonismo de las mujeres en la construcción de discursos políticos y sociales a través del uso de la pluma, siendo, en cualquier caso, reducido en cuanto al número y a la extracción social de nuestras protagonistas.

A lo largo del siglo XVIII es elevado el número de mujeres escribe en comparación con los siglos anteriores, pero si la escritura en general seguía siendo una actividad reducida, aún lo era más entre el género femenino. Muchas mujeres escriben, pero no todas lo hacen con la intención de que sus textos perduren en el tiempo, circulen, sean públicos. En la mayoría de los casos, la escritura femenina es de carácter doméstico y de uso interno, como lo es la correspondencia que se conserva de alguna de las grandes damas de la época, la escritura conventual o la de pequeñas piezas teatrales escritas para ser representadas en sus propios palacios, en los conventos o en las cada

⁷¹³ AHN, Consejos, Leg. 5544.

vez más frecuentes tertulias literarias regentadas por mujeres⁷¹⁴. Así pues, la primera precisión que debemos hacer es que no se puede considerar “escritora” o “literata” a toda mujer que cogiera la pluma. Está todavía sin resolver para los varones el debate sobre quién es “autor”, a quién considerar “escritor” o qué implicaciones conlleva el nombre de “literato”, por lo que responder cuántas escritoras fueron partícipes de la Ilustración española resulta aún imposible. Lo que sí podemos determinar es la diferencia fundamental que existe en general entre escribir y escribir para un público⁷¹⁵.

Además, debemos tener siempre presente la consideración del sexo femenino como colectivo débil que había que proteger. Así figura en los tratados de la época y así se refleja en la documentación consultada. No en vano Curiel, en su defensa del Auto de reordenación de la censura justifica que la prohibición de entrada de libros sin examen previo porque “entre legos y aún entre mugeres, se oían disputas y dificultades en materia de religion, de culto y eclesiasticas que jamas se habian oido sino entre los Doctos”⁷¹⁶, o lo que es lo mismo, las malas lecturas podían influir en el ánimo de las mujeres, que podían creerse con derecho a participar en debates reservados no a los hombres, sino a los más doctos de entre ellos.

⁷¹⁴ En este campo destacan los estudios de FRANCO RUBIO, Gloria A., especialmente: “Los actores de la sociabilidad ilustrada en España: proyectos y realizaciones”, en BERBESÍ DE SALAZAR, Ligia (Coord.), *Poder y mentalidad en España e Iberoamérica. Seminario hispano-venezolano*, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2001. págs.157-186; “Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales en la España del siglo XVIII”, en SERRANO MARTIN, Eliseo, *Felipe V y su tiempo: congreso internacional*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, Vol. 2, págs. 659-708; “Espacios de sociabilidad, espacios de poder: algunas reflexiones sobre la articulación de redes sociales en la España del siglo XVIII”, en MARTÍNEZ-RUIZ, Enrique (Coord.), *Vínculos y sociabilidades en España e Iberoamérica: siglo XVI-XX*, Madrid, Ediciones Puertollano, 2005, págs. 59-110; “Mujeres y espacios urbanos en la edad moderna: algunas consideraciones”, en SEGURA GRAIÑO, Cristina, *Mujeres y espacios urbanos: homenaje a Christine de Pizan en el VI Centenario de la 1 edición de “La ciudad de las damas” 1405-2005*, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 2007, págs. 119-156; y, “El salón parcialmente iluminado. Prejuicios, contradicciones y tópicos sobre las mujeres en los espacios de sociabilidad de la España ilustrada”, en CARZOLIO DE ROSI, María; FERNÁNDEZ PRIETO, Rosa Isabel y LAGUNAS, Cecilia (Coords.), *El Antiguo Régimen: una mirada en dos mundos: España y América*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, págs. 151-174.

⁷¹⁵ M. BOLUFER (2009). “Mujeres de letras. Escritoras y lectoras del siglo XVIII” [recurso electrónico]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
<<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482852434581844132257/p0000001.htm>>
[consultado: 28-08-2010]

⁷¹⁶ AHN, Consejos, Leg. 11275.

El primer elemento a observar es cómo se produce la relación entre las mujeres y la censura. Un primer caso es el que protagoniza de Antonia Sáenz de Tejada, viuda de Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey y Escribano de Cámara y de Gobierno del Consejo de Castilla⁷¹⁷. En 1795 solicita licencia para imprimir la obra compuesta por su marido bajo el título *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios en sus diferentes salas*, que incluye los cuatro tomos redactados por el difunto junto con una censura previa hecha por el conde de Campomanes. No es raro que una viuda intentara publicar los manuscritos de su difunto marido, sobretodo si el fallecido era alguien como Escolano de Arrieta, pieza clave del engranaje de la Administración real durante un periodo tiempo considerable. Traemos el asunto aquí porque a esos cuatro tomos Antonia Sáenz de Tejada añadió un quinto, de su propia pluma, aunque ella justifica en su memorial de petición que “a partir de las notas del autor”. Recibido en el Consejo, se remite a la censura del conde, ya conocedor del texto, siguiendo en todo momento los procedimientos habituales de censura. Su respuesta fue contundente: considera “muy útil y conveniente la publicación de esta obra”, que confirma que conoció en vida del autor, pero respecto al quinto añadido por su viuda juzga que no lo halla “en estado de publicarse”, porque los temas que incluyen sobre el funcionamiento de algunos órganos dependientes del Consejo de Castilla no era conveniente que fueran conocidas por el “público”. El Consejo, siguiendo las directrices de su fiscal, concede la licencia solicitada y el privilegio de su impresión sólo para los cuatro primero tomos⁷¹⁸.

Con estos datos no podemos afirmar que la calidad literaria del quinto tomo fuera equiparable a la de los cuatro primeros; tampoco que Campomanes no estuviera cargado de razones al argumentar la inconveniencia de dar a conocer al público el funcionamiento de determinadas instituciones, pero el hecho objetivo es que sólo se impidió lo que estaba escrito por la mujer. Ahora bien, no parece suficiente como para

⁷¹⁷ Fichoz nº 00001507. Oficial de la Escribanía de Aragón entre 1762 y 1771, cuando es designado Escribano de la Escribanía Cuarta de Gobierno de Castilla, siendo responsable de los asuntos de la Corona de Aragón entre 1771 y 1784. En 1785 es nombrado Escribano de la Segunda Escribanía de Cámara del Consejo de Castilla, recibiendo los honores de Secretario del Rey en 1788. En 1790 ingresa en la Orden de Carlos III como Caballero tras superar éxito el examen requerido. Fallece sin descendencia en enero de 1794.

⁷¹⁸ AHN, Consejos, Leg. 5562.

argumentar que se debió a la condición femenina de la autora. Desde luego ella no pleiteará sobre el quinto tomo, como si hacían muchos autores de su época, y el resto de la documentación que se conserva en el legajo hace referencia a la defensa del privilegio que obtiene en otros territorios de la Monarquía, lo que nos lleva a pensar que más que un interés intelectual, detrás de la petición de la viuda residía una necesidad económica que quedaba satisfecha con el privilegio para el texto de su difunto marido siempre que se cumpliera en su totalidad.

Decíamos que el hecho de que una mujer solicitara permiso para publicar la obra de un varón recientemente fallecido era una práctica bastante común. Por citar otro caso, Josefa Riofrío, siendo viuda del autor de la *Guía de la Grandeza*, solicita en 1798 licencia y privilegio para continuar con la publicación de su difunto marido⁷¹⁹. La petición pasa por dos censores distintos, ambos favorables a que se le permitiese, por lo que se le concede en los mismos términos en los que había disfrutado Jerónimo de Zúñiga Bracamonte⁷²⁰ hasta su fallecimiento, sin que el sexo fuera considerado en ninguna de las dos censuras como elemento a tener en cuenta, aunque en la portada del impreso no figurará el nombre propio de la demandante, sino su condición de “Viuda de Jerónimo de Zúñiga y Bracamonte, su autor”.

No tuvo la misma suerte María Francisca de la Isla⁷²¹. La hermana del famoso padre José Francisco de Isla solicita en 1790 permiso para imprimir un libro compuesto por su hermano con el título de *Colección de dichos y hechos singulares*. En este caso la mujer tampoco juega un papel activo sobre el manuscrito presentado, que es escrito por un varón de reconocido prestigio. La censura y la resolución son negativas⁷²². El censor designado fue Fray Pedro Centeno, que en su respuesta al Consejo desmerece el contenido de la obra sin que en ningún momento se haga referencia a que la demandante es una mujer, lo que impide pensar que fuera el sexo lo que pesara en su

⁷¹⁹ AHN, Consejos, Leg. 5562.

⁷²⁰ Fichoz nº 00083301.

⁷²¹ Fichoz nº 00041258.

⁷²² AHN, Consejos, Leg. 5556.

juicio⁷²³. De hecho hay más solicitudes presentadas al Consejo por parte de la hermana del renombrado autor del *Fray Gerundio de Campazas*, que no encontraron ningún obstáculo. Suya es la solicitud para imprimir la traducción del francés de las *Reflexiones cristianas sobre las grandes verdades de la fe y sobre los principales misterios de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo*, impresas por Ibarra en 1785, traducción de la obra homónima del jesuita francés Claude Jude⁷²⁴; o las *Cartas familiares* que había recibido de su hermano y que vieron la luz entre 1785 y 1786 en la Imprenta del Consejo de Indias, por lo que contando con el beneplácito institucional⁷²⁵. Y en ninguno de estos casos su condición femenina fue impedimento, por lo que a primera vista no parece que el sexo fuera determinante para permitir o denegar una licencia.

En cuanto a la temática de las obras presentadas, es cierto que algunas escriben lo que se considera apropiado para su condición, como es la poesía, los texto auto-biográficos o místicos, además de ensayos más o menos admitidos, esto es obras de carácter moralizante sobre el comportamiento y/o educación de una mujer, como la *Pintura del talento y carácter de las mujeres*, de María de las Mercedes Gómez Castro de Aragón, o incluso de carácter devocional, como lo es la obra que la Marquesa de Tolosa dedica en 1793 a la reina con el título *La Muerte de los Justos o Colección de las últimas oraciones y palabras de algunas personas ilustres en Santidad de la Antigua y Nueva Ley*.

Pero las escritoras escriben, y sobre todo traducen, sobre todo tipo de temas, rozando, incluso campos que parecían terreno vedado, como es la astrología⁷²⁶, la política⁷²⁷ o la teología. Me estoy refiriendo a un caso bastante conocido, el de la María Cayetana de la Cerda, Condesa de Lalaing. Por no alargarnos en este asunto, podemos resumir que

⁷²³ La negativa se sustenta en que la obra no aporta novedad alguna, al ser un compendio de historias de diverso tipo, por lo que “no puede ser de utilidad al público ni servir para aumentar los conocimientos científicos”, AHN, Consejos, Leg. 5556.

⁷²⁴ AHN, Consejos, Leg. 5548. Fichoz nº 0011066L.

⁷²⁵ AHN, Consejos, Leg. 5548, para la primera edición. La segunda edición la imprime Ibarra en seis volúmenes entre 1789 y 1794, AHN, Consejos, Leg. 5560.

⁷²⁶ Hemos localizado dos licencias concedidas a dos mujeres distintas para la impresión de unos pronósticos, en concreto a Teresa González y Francisca Osorio, en AHN, Consejos, Legs. 5538 y 50652, respectivamente.

⁷²⁷ Veremos el caso de Joaquina Tomaseti y su *Espíritu de la nación Española*, de 1795, un encendido manifiesto patriótico escrito en plena revolución francesa. AHN, Estado, Leg. 3248.

la obra que presenta en 1790 es la traducción del original escrito en francés por Madame Leprince de Beaumont, bajo el título de *Las Americanas o la prueba de la religión cristiana*, una obra destinada en principio a los creyentes protestantes⁷²⁸. Éste es, precisamente, el motivo por el que oficialmente se deniega la solicitud de impresión, pero la condesa se resiste e insistirá en publicarla, dando origen a un abultado expediente del que se pueden anticipar alguna de las conclusiones⁷²⁹.

La primera, es que las autoras son conscientes de que su incursión en el mundo de las letras es algo extraordinario, anecdótico, y que sólo por eso les está permitido participar. Es por ello que en las solicitudes se justifican. Por ejemplo, la propia Condesa de Lalaing explica que ha traducido su obra “en los ratos que la han dejado libre la atención del cuidado y obligaciones de su Casa y familia”, lo que pone de manifiesto que socialmente no está contemplado que una mujer por escribir pueda descuidar la que por tradición es su labor fundamental en la sociedad: cuidar de su familia⁷³⁰. Pero este rasgo no está presente sólo en las mujeres, sino que en general es la argumentación que presentan quienes ostentan obligaciones para con el rey, y que deben justificar que la composición del texto que solicitan imprimir no les han desviado de sus ocupaciones principales, como hace en 1797 José Mor de Fuente, ingeniero de la Real Armada con su obra *El militar en la vida civil*, en cuya solicitud de impresión afirma de manera explícita que “[...] ha compuesto en los ratos que sus faenas se lo han permitido”⁷³¹.

La segunda es el peso que tiene la extracción social de las demandantes y sus conexiones con los resortes de poder. Lalaing no queda conforme con el juicio emitido por el Vicario Eclesiástico de Madrid y en sus múltiples instancias solicita que su manuscrito sea visto por otra persona. Pero esta solicitud no es inocente. No pide que

⁷²⁸ Aunque esta obra no pudo ver la luz por la oposición de los censores, otros manuscritos suyos no tuvieron problemas y, por ejemplo, se conserva el expediente de impresión de la traducción que de su *Biblioteca completa de educación de mujeres jóvenes* hizo José de la Fresa en 1779, de la que la Academia de la Historia afirmó no encontrar “defecto alguno de consideración que pueda impedir la licencia”. AHN, Consejos, Leg. 5544.

⁷²⁹ AHN, Consejos, Leg. 5565.

⁷³⁰ AHN, Consejos, Leg. 5556.

⁷³¹ AHN, Consejos, Leg. 5562. La obra no verá la luz por la censura negativa de Manuel de Ávila, que no lo considera útil porque “no respira otra cosa que como instruir a la juventud en el estudio de una correspondencia amorosa”.

sea entregada a cualquier otro censor, sino que directamente propone al Inquisidor General⁷³², consciente de que su juicio sería más benevolente con su traducción y su valoración pesaría más que la de un simple censor. De nuevo, más que diferencias lo que encontramos son elementos coincidentes con los escritores varones, lo que nos demuestra que el comportamiento de estas mujeres no está tan condicionado por su sexo como por su conocimiento del sistema.

Y finalmente, como ponía de manifiesto Bolufer, el caso de Lalaing también revela el peso de la extracción social⁷³³. Una condesa con buenas relaciones en la Corte puede permitirse dirigirse al Juez de Imprentas empleando un lenguaje más agresivo al que se observa en la mayoría de reclamaciones de sus colegas varones, pero no condicionada por su sexo, sino por su clase y condición. De hecho Lalaing tras recibir la censura *supreso nomine* se dirige directamente al Presidente del Consejo, el conde de Cifuentes, en una carta manuscrita por ella misma en la que acusa a los encargados de ver su traducción de hacer una “censura vaga e infundada, y aún capciosa con unos reparos absolutamente fútiles e insubsistentes”.

Como vemos, las mujeres a penas hacen referencia en sus memoriales a su diferencia sexual, y cuando lo hacen es para destacar que la escritura no les ha restado tiempo de sus obligaciones familiares. Es más, en sus respuestas y estrategias se comportan de la misma manera que los autores varones. Cabría, no obstante, preguntarse cómo responden los censores a este elemento diferenciador.

De nuevo, no encontramos pautas claras que nos permitan establecer un procedimiento universal. Entre los casos estudiados hallamos alguno como el siguiente:

“[...] expresa ver unas novelas en que se propone su autora las de D^a Maria de Zayas por modelo, y con menos corrección en el estilo, ni felicidad en la invención, tienen

⁷³² En este momento ocupa el cargo Agustín Rubín de Ceballos.

⁷³³ BOLUFER, Mónica, “Pedagogía y moral en el Siglo de las Luces: las escritoras francesas y su recepción en España”, *Revista de Historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante*, nº 20, (2002), págs. 275-278.

todos los defectos de aquellas: sin un fin moral conocido, sin episodios que instruyan o interesen, sin variedad que divierta. Entre ellas está comprendida una comedia que sin observar una tan sola de las reglas teatrales, tiene todos los defectos de falta de verosimilitud, de frialdad en el dialogo, que los caracteres ni son verdaderos ni están sostenidos, que la trama ni está bien seguida ni su desenlace es natural. Por cuyos méritos juzga que la obra será muy despreciada, pero que en lo demás no encuentra cosa alguna que impida la satisfacción de verla impresa. La Academia en virtud del dictamen acordó que el manuscrito no mude de estado por no ser útil ni necesario [...].”⁷³⁴

Se trata de la respuesta enviada al Consejo por la Real Academia de la Historia a raíz de la solicitud presentada por Clara Jara de Soto en 1790 para dar a la imprenta una novela amorosa. Los contundentes términos incluidos en la censura determinarán la resolución negativa. Sin embargo, en ningún momento se argumenta que la obra carezca de calidad por el sexo de su autora y se la llega a comparar con otra conocida escritora del Siglo de Oro, María de Zayas, que es citada como autoridad. Podemos, por tanto, afirmar que detrás de esta negativa no está el sexo del autor, sino el contenido de la obra, entrando en juego la consideración negativa que todavía a finales de siglo tiene la novela España, considerada como una lectura inútil que desvía a las mujeres de sus obligaciones⁷³⁵.

Aunque su número no es muy alto, sí se han encontrado entre las censuras analizadas alusiones directas al sexo de las escritoras. Éstas nunca son el motivo esgrimido por los censores para justificar la prohibición, pero sin duda es un elemento presente en su juicio. Veamos el caso de María de la Mercedes Gomez Castro de Aragón y Ballesteros. En 1791 presenta una solicitud para dar a la imprenta un manuscrito titulado *Pintura del talento y el carácter de las mujeres*⁷³⁶, “compuesto por ella”. Se encarga una primera censura a Leandro Fernández de Moratín, que afirma no haber encontrado en ella “cosa alguna contra las Regalías de S.M. y buenas costumbres”, y recomienda su alumbramiento público. No debieron quedar conformes en el Consejo con esta

⁷³⁴ AHN, Consejos, Leg. 5556.

⁷³⁵ Para ampliar este asunto resulta imprescindible ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, *La novela del siglo XVIII*. Madrid, Júcar, 1991.

⁷³⁶ AHN, Consejos, Leg. 5562.

resolución por lo que lo envían para disponer de una segunda opinión al Vicario Eclesiástico de Madrid con el objetivo de que juzgara si encontraba algún elemento contrario “a la santa fe católica buenas costumbres y regalías de Su Majestad”. Después de varias reclamaciones, y siguiendo la recomendación del Vicario, se rehusó la publicación de la misma alegando que se trataba de una copia de una traducción que ya circulaba añadiendo, eso sí, que “*por respeto a su sexo* se la pudiera tal vez disimular este defecto y tratarla en todo con la indulgencia y el favor que se merece”. La debilidad que supone su sexo puede justificar el error, aunque no se permita su impresión, en parte “por el honor también de la escritora” y por otro lado porque “la mala disposición del manuscrito es un estorbo insuperable”, a pesar de que se reconocía cierto mérito, dejando en mano de los miembros del Consejo que

“[...] pueden inclinarse a los deseos de la Editora y favorecer su pretensión, porque aunque es cierto que la obra pudiera mejorarse y hacerse mas digna del destino que se la piensa dar, también lo es que ella no contiene dogma alguno contra la religión, ni el estado, y que no deja de proponer algunas buenas máximas y verdades que pueden ser útiles y servir a la instrucción y buena conducta de las mujeres.”

En el juicio emitido por el Vicario de Madrid encontramos ciertos rasgos presentes en el imaginario colectivo de la época. Las mujeres, como sexo débil, pueden caer en un error como el de intentar imprimir una obra sin la debida calidad literaria, lo que no es conveniente porque el Estado debe velar también por la deshonra que sería para la propia solicitante que se dejara publicar un manuscrito sin los méritos requeridos. Este paternalismo está también presente en otros ejemplos de varones, con la única salvedad de que se vela por su honor sin que se mencione el sexo. Además, el error cometido es tan grande, que ni mitigado por su condición de mujer se aconseja su impresión, por más que la obra no contenga ideas peligrosas, sino que más bien al contrario se le reconozca cierta utilidad para las lectoras.

La censura negativa contiene aún más información. En palabras del censor, el Consejo puede inclinarse por la autora

"[...] porque en fin la obra aunque poco trabajada, no parece que contiene dogma alguno contra la Fe de la Iglesia, ni error contra las buenas costumbres ni máxima o proposición contra las regalías de Su Majestad ni doctrina alguna o peligrosa a la tranquilidad y buen orden del Estado; y sin duda esta obra, mejor dispuesta y ordenada podría ser más útil al otro sexo que los libros de galantes y de amores, cuya lectura es en el día la principal ocupación de una gran parte de las mujeres, que en esta a lo menos aprenderían muchos sentimientos y verdades para la buena conducta."

Como se puede ver, el censor considera que el público lector al que va dirigida una obra de estas características, escrito por una mujer, son individuos de su propio sexo, y a pesar de los reparos que presenta, valora que la obra aporte al menos un contenido constructivo para moldear su conducta, frente a las lecturas de novelas amorosas, tan desprestigiadas como se puede apreciar y que se puede poner en relación con el ejemplo anteriormente mencionado.

Habría que señalar que los motivos del censor para impedir la obra van más allá del sexo de la autora, de su honor o de la utilidad para las lectoras. En realidad, califica la traducción en términos muy negativos, empleando para ello afirmaciones que ya hemos visto empleadas para traductores varones:

"El prologo además de eso no tiene orden ni plan, ni concierto en lo que propone; en el cuerpo de la obra no parece que se lleva mas objeto, ni designio que hablar a bulto de las mujeres y referir de sus cosas un montón de sucesos e historias; el todo en fin de este manuscrito están tan informe, tan ininteligible, tan mal dirigido y ordenado, que sin tener necesidad de entrar en otro examen sobre el merito y el fondo de la obra, se puede devolver desde luego que por el mal estado en que se halla, por el respeto que se debe al publico, y aun por el honor también de la escritora, se debe estorbar la publicación del manuscrito y negarse la licencia que solicita."

Y no sólo eso, sino que a pesar de no querer entrar en el fondo de la obra se hace eco de las críticas que el texto original tenía en su país de origen para justificar que no es sólo su opinión la negativa, sino también la de otros reconocidos intelectuales:

"[...]otros la critican frecuentemente aun en su propia nación, como lo hace el abate Sabathier en el tomo 4º de los tres siglos de la literatura francesa, edición del 779 en el artículo de Mm. Thomas, donde después de una critica terrible de las otras producciones del autor, dice del Ensayo en la pagª 139 que "el conjunto de las observaciones [...] de frases y de sublimes pensamientos es un conjunto de insipideces, de incorrecciones, de tonterías y vanas futilidades, y que este escrito hecho según la voz general, con el fin de atraer a las mujeres al partido filosófico no era el que mas las convenía".

No todas las referencias de los censores son negativas. En ocasiones los censores elogian a la autora de la obra que están examinando. Muchos de estos ejemplos hacen referencia a una de las formas más frecuentes de participación de la mujer en la República Literaria, la traducción, que como ya se ha señalado, debe entenderse como una actividad más activa, ya que el traductor debía adaptar el contenido, cuidando las expresiones y sus posibles interpretaciones, por lo que era fundamental una buena comprensión del otro idioma y un conocimiento exhaustivo del léxico. Los elogios a las mujeres que se atrevieron a hacerlo deben ser, por tanto, tenidos en cuenta.

María Luzuriaga presenta una traducción del *Viaje de Sir Jorge Stanton a la China*, cuyo original se encontraba en francés. Del manuscrito afirma el censor que "la traducción está ejecutada con mucha propiedad y exactitud, habiendo cuidado de omitir algunas expresiones peligrosas"⁷³⁷. Igual de benevolente se había mostrado Nicolás Fernández de Moratín en 1779 ante la traducción de la tragedia *Andromaca* presentada por Antonio Fernández de la Oliva, de la que dice "[...] está bastante ajustada a su original y no carece del mérito y aunque tuviera más que el poder de excitar con su ejemplo a desterrar la ociosidad de muchas Damas, me parecería que por eso y por no contener cosa opuesta a ningunas leyes, dignas de VA conceda la licencia [...]"⁷³⁸. Algo parecido ocurre en con la Marquesa de Tolosa, dama de la Reina, y su traducción de *La Muerte de los Justos o Colección de las últimas oraciones y palabras de algunas personas ilustres en Santidad de la Antigua y Nueva Ley*, donde el censor señala "que el lenguaje

⁷³⁷ AHN, Consejos, Leg. 5562.

⁷³⁸ AHN, Consejos, Leg. 5544.

es puro, sin mezcla de voces extrañas, que suelen afeár comúnmente las traducciones. Todas estas circunstancias, la de ser tan recomendables en personas del sexo y clase de la Marquesa de Tolosa, una instrucción tan útil..."⁷³⁹ Y esto en palabras de Manuel Abad y Lasierra, por aquel entonces (1793) Arzobispo-Inquisidor General.

El juicio del Inquisidor General nos repite algunos rasgos a los que ya hemos hecho referencia. Por una parte valora la *utilidad* de una obra como elemento para permitir la su impresión. Este concepto está presente en el fondo de todas las censuras examinadas a lo largo del siglo XVIII, y se aplica también para la escritura femenina. Además, hace hincapié en que esa utilidad es mayor "en personas del sexo" de la Marquesa, o lo que es lo mismo, se considera útil para las mujeres un texto traducido por una de ellas. Esto nos remite a la consideración de la escritura femenina como adecuada para las propias mujeres, a lo que también Moratín había hecho referencia, pues la alejaba de la tan temida *ociosidad*. Pero el censor de Abad y Lasierra añade un dato más: es recomendable en personas de la "*clase*" de la Marquesa. De nuevo la extracción social como elemento diferenciador, situado al mismo nivel que el sexo. La obra no está destinada a cualquier lector, sino a una lectora; y no a cualquier lectora, sino a mujeres de su condición, o lo que es lo mismo, nobles instruidas que supieran comprender el significado de la obra y que, por otra parte, eran las únicas que tendrían acceso a este tipo de libros.

Además de las censuras propiamente dichas, en el Archivo se encuentran, casi sin explorar, las solicitudes de dedicatorias a miembros de las principales instituciones de la Monarquía y, especialmente a miembros de la Familia Real. Este mecanismo era la estrategia de muchos autores de buscar el amparo del poder para dar mayor prestigio a su texto y, al tiempo, lograr una mayor proyección pública. Cuando alguien acepta una dedicatoria en realidad está aceptando el texto que se le está dedicando y está respaldando al autor que la firma. Como hemos visto hasta el momento, las escritoras siguen las mismas estrategias que los varones en sus estrategias editoriales, y las dedicatorias no son una excepción. Por señalar el caso más significativo por su contenido, Joaquina de Tomaseti escribe ofreciendo su obra *El Espíritu de la nación*

⁷³⁹ AHN, Estado, Leg. 3248.

Española a Godoy, un encendido elogio patriótico. La petición es contestada por él mismo diciendo que “para no faltar a los derechos del sexo constestasela estimando su oferta”. Es decir, de nuevo se argumenta que por su condición femenina se le debe dar un trato diferente. Ella le contesta utilizando también el sexo como justificación y diferenciación respecto a otras solicitudes que hubiera podido recibir por parte de un hombre, y lo hace en los siguientes términos:

“No puede haber duda en que la acreditada política de VE no le permitirá el que desprecie un obsequio de una Señora circunstanciado con los sólidos fundamentos de la fidelidad y amor a nuestros Augustos. El mas apreciable carácter de un grande héroe ha sido siempre la afabilidad con nuestro sexo, y el principal atributo de una ilustre alma a no despreciar aun a la mas infeliz.”⁷⁴⁰

Cabe señalar, no obstante, que el motivo por el que se desestima no es el sexo de la solicitante, sino que el censor en quien delega el Secretario de Estado considera que “no puede haber lugar a su publicación” porque “aunque es muy apreciable la expresión [...] y el celo y aplicación que en él manifiesta” la autora,

“desde el principio de la revolución francesa está prohibido por expresa orden del Rey el dar a luz papel alguno que se ocupe en pretender demostrar la obligación que tienen los vasallos de obedecer a su soberano, y del mismo modo las exhortaciones a la nación con motivo de la presente guerra y quanto pueda ser relativo a la actual revolución, pues la experiencia ha hecho ver que lo mas conveniente es evitar el que se dispute y se escriba de estas materias.”⁷⁴¹

Dicho en otras palabras, si bien se le dispensa una respuesta menos tajante de lo ordinario, en atención a su sexo, el motivo real de la prohibición no ese, pues incluso se llega a elogiar la aplicación que manifiesta como escritora en la obra presentada. Es la prohibición general dictada para evitar el contagio revolucionario lo que desaconseja la impresión de cualquier libro sobre el tema, fuera su autor hombre o mujer.

⁷⁴⁰ AHN, Estado, Leg. 3248.

⁷⁴¹ *Ibidem*.

En definitiva, las mujeres del siglo XVIII siguen participando en la República de las Letras de manera ocasional y excepcional. Sólo por esta doble condición su incursión en la esfera pública es aceptada por una sociedad en la que, a pesar de las dificultades para establecer dónde situar el límite entre público y privado, había reservado a las esposas e hijas un papel menos protagonista, pues casos como los de Inés Joyes, Josefa Amar o Gálvez no dejan de ser excepciones.

El hecho de que la participación de las mujeres en el espacio público a través de la pluma sea excepcional no determina necesariamente que su comportamiento en estas circunstancias fuera diferente al de los hombres. Las escritoras que desean ver impresas sus obras siguen los patrones masculinos, copian sus estrategias y utilizan los mismos recursos que los varones para dar a luz sus manuscritos. En este sentido el peso del estrato social al que se pertenece y el rol que por ello juegan dentro de las redes sociales formadas entre la intelectualidad orgánica y los círculos de poder pesan más que otras consideraciones. Lo hemos visto con la Condesa de Lalaing.

La diferencia entre sexos es, no obstante, imposible de disimular. Hemos visto, también, como tanto censores como escritoras mencionan, cuando es necesario este hecho para justificar el resto de sus alegaciones. Ellas justifican su participación en un mundo masculino como es la escritura pública recordando que han tomado la pluma sin desatender el cuidado de sus familias, su razón de ser en la sociedad. Los censores, piden, en ocasiones, un trato especial a las mujeres, el sexo débil al que se debe proteger.

Dicho esto, sigue resultando difícil determinar el peso que el sexo tenía en el juicio de los censores. Tanto escritoras como censores son conscientes en todo momento de que la impresión de un texto escrito o traducido por una mujer es algo excepcional y de que el trato a una mujer no puede ser igual que el que da a un hombre. Sin embargo no podemos ir más allá. No podemos afirmar en ningún caso que un manuscrito fuera denegado sólo porque quien lo firma fuera una mujer y que si hubiera sido un hombre se habría permitido. No está el historiador para trabajar con

hipótesis futuristas, pero tampoco hay en la documentación ningún indicio que permitiera si quiera apuntarlo.

La realidad es que la condición femenina está presente en todas las partes implicadas en la aprobación de un manuscrito, pero este hecho aislado no fue suficiente ni para permitir ni para denegar su impresión. Las mujeres sufren igual que los hombres juicios acertados y valoraciones injustas, críticas constructivas o contundentes refutaciones. No se puede hablar de una igualdad que todavía en pleno siglo XXI no se ha alcanzado, pero tampoco se puede determinar que existiera una discriminación exclusivamente sexual, sino que habría que analizar otros factores como la extracción social de la autora o el contenido de la obra para estudiar correctamente las causas que llevaron a que la política editorial del poder incluyera o excluyera de la luz pública los manuscritos por ellas presentados⁷⁴².

4.4. El efecto de las censuras

Hemos visto, a lo largo de este capítulo, cómo se desarrolla la práctica de la censura y cuáles son los principales objetos de atención por parte de los revisores. Pero también se ha ido viendo, de manera latente, cuál era el efecto que las censuras tenían en la producción impresa. Por su propia justificación, el sistema de censura previa debía impedir que viera la luz o circulara cualquier obra que no respondiese a los intereses de la Monarquía. Más allá de la fe, las buenas costumbres o las regalías del monarca, interesaba que cada libro contribuyera de alguna manera a la instrucción de los lectores. Es la utilidad del texto el principal elemento que se debía valorar. Por tanto, visto de manera restrictiva, el principal efecto de la censura fue la prohibición de todas aquellas obras que, por algún motivo, no encajaban en el proyecto de quienes en ese momento dirigían la política del reino.

⁷⁴² GARCÍA GARROSA, María Jesús, "Estorbos a la Ilustración: la novela extranjera ante la censura", en ASTIGARRAGA, Jesús, LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria y URKÍA, José María, *Ilustración, ilustraciones. Vol. I*, San Sebastián, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Instituto Internacional Xavier María de Munibe de Estudios del Siglo XVIII, 2009, págs. 369-388.

El segundo lugar donde el efecto de la censura es más evidente es en las traducciones. Las modificaciones, supresiones y matizaciones introducidas por los traductores para adecuar el contenido y obtener la necesaria licencia redundaron en un empobrecimiento de los textos que llegaban a los lectores españoles. Sin ir más lejos, la supresión de los fragmentos en los que se hablaba de la libertad que se disfrutaba en Inglaterra o el lenguaje coloquial típico del realismo inglés no encontraba acomodo en nuestro idioma, que era sustituido por el discurso culto para evitar la corrupción del idioma que tanto preocupaba a los intelectuales del momento, lo que afectaba no sólo al uso del léxico, sino que también reducía la posible crítica social que pudiera contener y limaba la fuerte personalidad de alguna de las protagonistas femeninas, reduciendo su protagonismo y su posible rebeldía para que no fuera tomado como un modelo de comportamiento válido. Los traductores debían tener en todo momento en mente que su trabajo no podía ser estéril, por lo que traducen esperando obtener una censura favorable que permita su publicación, primero en la versión francesa y después en la española. Un doble filtro que afecta, sin duda, al fondo de los textos⁷⁴³.

Es, por tanto, la modificación de los originales presentados ante la más inmediata consecuencia de la censura. Normalmente las censuras negativas son las que mayor interés despiertan, pero no hay que olvidar que la censura opera de modo efectivo también en las obras que se autorizan, pues en sus informes los censores detallan los cambios que se han de efectuar o las partes que han de ser suprimidas. Vamos a tomar como ejemplo para esto algunas de las censuras emitidas por Melchor Gaspar de Jovellanos a finales de la centuria. Por ejemplo en la censura a las *Órdenes religiosas y militares* editadas por Sancha entre 1788 y 1789, se muestra favorable a la impresión, pero plantea los cambios que se deben hacer para mejorar la obra y que vea sin problemas la luz. Con esas modificaciones el censor se está convirtiendo, de alguna manera, en co-autor de la obra que finalmente será impresa. A veces la intervención modifica el texto, como el caso anterior; en otras suprimiendo, como sería el caso de la censura de la *Carta crítico-reflexiva sobre el poema "La mujer feliz"*, de 1787⁷⁴⁴, donde pide eliminar directamente diez páginas. Y en otras proponiendo añadir aspectos que

⁷⁴³ PAJARES, *op. cit.* (nota 702), págs. 992-1000.

⁷⁴⁴ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), págs. 143-144.

han pasado desapercibidos por el autor, como ocurre con los tomos V y VI de la *Biblioteca Española de los mejores escritores del reinado de Carlos III* de Juan Sempere y Guarinos, al que recomienda añadir tres autores que habían escapado de su pluma⁷⁴⁵.

Como ocurre para el resto de censores, hemos visto que existe una cierta uniformidad formal en las censuras de Jovellanos obligada por la propia tramitación del documento. Pero esta uniformidad era excedida por los censores cuando más allá de afirmar no hallar en la obra cosa que se oponga a las buenas costumbres, la religión, las leyes, ni regalías de Su Majestad, se preocupan de otros aspectos como la reputación del autor, siendo el ejemplo más claro la censura que Jovellanos hace de las *Fábulas literarias* de Iriarte, al añadir a la fórmula de que no “contiene cosa que se oponga al dogma ni a las leyes que corresponden a la reputación del autor y al concepto que le ha granjeado las demás obras suyas anteriormente publicadas”⁷⁴⁶. O al desestimar la publicación del *Bando a favor de toda moda y Clorinda sindicada* de Pedro Francisco Sotelo por el desorden del contenido, pero también porque “combate groseramente a su autor” Son intervenciones del censor en la estructura y contenido de los originales presentados que los modifican sustancialmente, desde el título hasta el último punto.

Resulta complicado conciliar la creación y el orden, sin embargo la censura funcionó en algunos casos como incentivo a la creación, y los autores agudizan su ingenio para salvar los obstáculos de la censura y transmitir, sin quebrantar la ley, sus mensajes. En este sentido ya hemos hecho referencia a las traducciones que ocultaban el autor original de la obra. La percepción negativa que generalmente se ha transmitido de la censura, que va implícita en la propia palabra, ha contribuido a generar esa imagen de oscuros sacerdotes que prohíben todas las obras que favorecieran el desarrollo. Ya hemos desmontado el tópico sobre la identidad de los censores, pero también debemos hacerlo sobre su actividad. Basta un repaso por la producción de las prensas españolas del XVIII para comprobar que muchas las obras impresas aportaron interesantes proyectos de reforma de los más diversos aspectos de la vida, desde la

⁷⁴⁵ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85), págs. 166-167.

⁷⁴⁶ *Ibidem*, pág. 31.

agricultura a la medicina, pues era, al fin y al cabo, el objetivo de quienes controlaban el sistema: el progreso de la sociedad. Casos concretos de posiciones inmovilistas, también en la censura, no pueden ensombrecer el funcionamiento de un sistema de control que, sin ser totalmente eficaz, pudo contener las críticas y moldear la opinión pública.

Precisamente un aspecto que no debemos olvidar en ningún momento es quiénes son los receptores de los impresos. Como sabemos por los numerosos estudios al respecto⁷⁴⁷, el número de personas que sabían leer y escribir era muy reducido, a penas un 10% de la población⁷⁴⁸, por lo que es difícil pensar que el proceso de difusión de las ideas se basase en la lectura de textos impresos por parte del pueblo. En realidad, los ilustrados no pretendían influir sobre toda la sociedad, sino sobre ese mínimo porcentaje de personas que podía acceder a los textos, normalmente ricos nobles y burgueses cercanos a las esferas de poder, precisamente a los que se suponía con autoridad y poder suficientes para influir, a su vez, indirectamente en el resto de la población, a la que se considera ignorante. Se trataba de crear una opinión pública influyente en los círculos eruditos⁷⁴⁹.

Junto a los libros, el otro gran vehículo de difusión de la Edad Moderna fue el púlpito. La lectura de cartas pastorales, obligatorias en las también ineludibles misas, creaba un público oyente esclavo, obligado a escuchar lo que el clero, ilustrado o no⁷⁵⁰, quería transmitir. Y a esta obligatoriedad habría que sumar el prestigio de los oradores, que hacían que su mensaje llegara mejor a unos receptores oídos de clase baja y media. Hay que recordar que muchas de estas obras se daban a la imprenta y se difundían

⁷⁴⁷ NAVA RODRIGUEZ, Teresa, *La educación en la Europa moderna*, Madrid, Síntesis, 1992.

⁷⁴⁸ FLECHA ANDRES, Francisco, "La función crítica en la dialéctica unidad-diversidad. El ejemplo de "El Censor""", en *El mundo hispánico en el Siglo de las Luces*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Fundación Duques de Soria, 1996, Volumen 1, pág. 631.

⁷⁴⁹ Sobre este aspecto se puede ver el apartado "Libros, lectores y opinión pública" en RUIZ TORRES, P., *La época de la Razón*, en FONTANA, J. (Dir.), *Historia Universal Planeta*, Barcelona, Planeta, 1993, vol. 9, págs. 96-104 y ENCISO, L.M., "La prensa y la opinión pública", en MENÉNDEZ PIDAL, R. (Dir.), *Historia de España*, Madrid, Espasa Calpe, 1987, tomo XXXI, Vol. 1, págs. 59-128.

⁷⁵⁰ Sobre la existencia de un grupo de intelectuales contrarios a las ideas de la Ilustración y a los avances que éstas suponían sigue siendo de obligada lectura el capítulo de EGIDO, Teófanos "Los anti-ilustrados españoles", en MATE, Reyes y NIEWÖHNER, Friedrich (Coords.), *La Ilustración es España y Alemania*, Barcelona, Anthropos, 1989, págs. 95-119.

impresas, aunque como recuerda Teófanés Egido, ningún instrumento de comunicación podía compararse en el Antiguo Régimen en presencia, frecuencia y efectividad con el sermón, el medio de comunicación más apto en sociedades analfabetas. El poder de los predicadores era inmenso y fue el motivo por el que los reformadores buscaran limitar su influencia y controlar sus mensajes para influir sobre esta plataforma de dominio de la opinión pública. No se podía controlar lo que se predicaba en las iglesias, pero sí lo que se publicaba de ellas. El mejor ejemplo de la efectividad de estas prácticas y de la importancia de su control reside en el contenido de los sermones, cartas pastorales y demás papeles episcopales y la difusión impresa de los mismos tras la expulsión de los jesuitas en 1766⁷⁵¹.

Sobre la opinión que se tiene en esta naciente opinión pública de la actividad de los censores ya hemos hablado al referirnos a las críticas que recibían quienes se encargaban de ella, pero merece la pena nombrar el análisis que hace José del Campillo en *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que deber y no lo que es*, escrito en 1741. Este autor afirma que hay un exceso de libertad para los escritores y falta una buena censura ejercida de forma estricta. Cree que hay responsabilidad en los censores, que consienten la circulación de libros con proposiciones malsonantes, escandalosas, opuestas a la fe y temerarias. Por ello se recogen muchas después de impresas, lo que justifica las críticas de “los que os satirizan”, mediante este silogismo:

“Los grandes hombres de España son los que están señalados para censurar las obras que se pretenden dar al público; muchas de ellas se recogen y aun se queman después de impresas, luego los que las aprobaron son más necios que los que las compusieron. Luego los grandes hombres de España son en esta parte la misma necedad.”⁷⁵²

⁷⁵¹ También puede resultar interesante el análisis de uno de los predicadores más famosos de la segunda mitad del siglo, Fray Diego José de Cádiz, LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria, “Predicación e inducción política en el siglo XVIII: Fray Diego José de Cádiz”, *Hispania*, 38 (1978), págs. 71-119.

⁷⁵² DEL CAMPILLO, José, *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, edición y estudio de Antonio Elorza, Madrid, Seminario de Historia Social y Económica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, 1969. Citado por Reyes, *op. cit.* (nota 49) págs. 462-463.

Como remedio Del Campillo propone una pragmática sanción que atemorice a los malos censores, una responsabilidad que nunca se implantará. Así, en el caso de una obra impresa con aprobación y privilegio real, hubieran sido únicos responsables los censores, bajo rigurosas penas pecuniarias, privándoles de tal cargo en caso de reincidencia. No es el único que participa de este debate. También Feijoo critica a los censores por aprobar sin censurar:

“Aún menos hay que fiar en los aplausos de los aprobantes. Las aprobaciones de libros, epístolas, dedicatorias y sermones funerales, poca o ninguna más fuerza tienen para testificar el mérito de los aplaudidos, que las adulaciones de los pretendientes.”⁷⁵³

Muchas son las críticas que recibe el sistema censor. Podríamos citar varios casos más. Uno de ellos es especialmente significativo porque está firmado por el prestigioso militar y científico Jorge Juan:

“He leído y examinado en toda su extensión la obra, y quedo admirado de que se haya permitido imprimir igual cúmulo de errores, absurdos, e ignorancias, que más parecen hijas de la demencia, que de falsa doctrina.”⁷⁵⁴

Se trataba de la obra de Fray Miguel de Hualde *Notas al destierro merecido de opiniones equivocadas*, de 1765. Su crítica a todo el sistema de censor, aunque carente de razón es lo suficiente ácida como para traerla a colación:

“Este mismo hecho puede asegurar a VE de la facilidad con que conceden las impresiones de cuantas quiméricas ideas ocurren a unos y otros. Basta que no tengan nada contra nuestra santa fe para que se puedan dar a luz: no implica que puedan ser perjudiciales al adelantamiento de las ciencias y de las artes; todas éstas son especies tan subalternas que no merecen sino el desprecio, de que deduce, por consiguiente el poco adelantamiento que podemos tener. En los países extranjeros se examinan las obras por revisores inteligentes nombrados por el gobierno: no se permite impresión que no sea útil al público; pero aquí se escoge al revisto a gusto del autor: un religioso

⁷⁵³ FEIJOO, Benito, *Cartas eruditas y curiosas*, Madrid, Pedro Marín, 1777, Libro IV, carta XII. Citado por DOMERGUE, *op. cit.* (nota 70) pág. 45.

⁷⁵⁴ AHN, Estado, Leg. 3240.

da una aprobación de náutica, de maniobra, de fortificación, de cualquier mecánica, y esto basta..."⁷⁵⁵

Hay que recordar que la fecha de esta censura es 1765, cuando acababa de suprimirse el sistema de censores a sueldo, la mayoría de los cuales eran eclesiásticos, y hay que tener en cuenta que el informe no va dirigido a Curiel, todavía Juez de Imprentas, sino al marqués de Grimaldi, entonces Secretario de Estado. No es casual la referencia a lo que se hacía en otros países del entorno por un militar que había viajado como espía y embajador por diversos países de Europa y por las colonias americanas.

Del mismo modo que hemos visto cómo las censuras recogen la participación de las mujeres en la República de las Letras, el contenido de estos textos nos puede ayudar a acercarnos a la idea que los propios censores tienen de su actividad. Para ello resulta fundamental centrar la atención en aquellos que se permiten introducir valoraciones subjetivas y comentarios personales en sus dictámenes. El caso más claro es el de Jovellanos.

Integrado en las instituciones que la propia Monarquía ha creado e instrumentalizado, Jovellanos se muestra favorable a la intervención del poder civil en la cultura, especialmente a través de la censura; intervención que significa el control de las prácticas culturales y de excluir de la censura a los vicarios eclesiásticos, práctica bastante extendida en periodos anteriores, salvo para los casos de asuntos dogmáticos. Del mismo modo que se opone, como es por todos conocido, al papel que jugaba la Inquisición, siendo partidario de su supresión.

Que Jovellanos se manifieste como un censor convencido de la necesidad de su labor y como un discreto defensor de la libertad de prensa, que confía en el público y en que los lectores regularán el éxito de las obras⁷⁵⁶ no es en sí contradictorio, puesto que confía en que deben ser los lectores los que determinen el éxito, pero es obligación del

⁷⁵⁵ AHN, Estado, Leg. 3240.

⁷⁵⁶ JOVELLANOS, *op. cit.* (nota 85) pág. XXIV.

Rey, a través de su Consejo y de sus censores, cuidar de que no se publique algo que no convenga a la utilidad pública, pensando siempre en la felicidad de sus súbditos.

Un ejemplo de esta postura la encontramos en la censura que en mayo de 1787 hace de *Carta crítico-reflexiva sobre el poema "La mujer feliz"*, donde afirma que la negación de la licencia no supondrá pérdida para el público, pero "que esta especie de obras más que reprimir conviene fomentar la libertad de prensa", ya que no confía en su éxito editorial. Añade, además:

Por otra parte, la denegación de la licencia es un ejemplo más opuesto a la facilidad de imprimir, el cual, sin provecho del mal escritor, puede acobardar al bueno cuando la licencia sólo puede producir un estímulo a los juiciosos y un escarmiento a los necios impugnadores".

También en la censura a la *Historia de Filipinas* señala que el tamaño excede lo prudencial, pero que si se realizan las correcciones que señala es su juicio, nada debe impedir que la obra vea la luz, siempre que el autor "tenga el ánimo de costearla y exponerse a encontrar lectores", protegiendo, eso sí, al Consejo de Indias de tan gravosa carga. En otras palabras: si se deniegan obras que no son útiles pero tampoco perjudiciales, se podría disuadir a los buenos escritores, perdiéndose así el público la oportunidad de ilustrarse convenientemente. Así pues: censura sí, pero no estricta, pues más vale obras publicadas sin valor que perder las posibles obras útiles.

No creamos, con ello, que Jovellanos es un firme defensor de la libertad de imprenta. En realidad cree que el poder "también debe cuidar de que el público no gaste su dinero en obras que, lejos de instruirle y deleitarle, pueden llenarle de ideas perjudiciales y erróneas", como expone en la censura que realiza a la *Clorinda sindicada* de Pedro Francisco Sotelo en enero de 1782. Y en este sentido se encuadra también su posicionamiento a favor de la censura de las obras teatrales expresada en su *Memoria de espectáculos*.

También el académico Capmany expresa su opinión sobre el límite que deben imponer los censores en el desarrollo de su función ante las equivocaciones que se han encontrado en *La fuerza de la fantasía humana* de Muratori:

“Yo creo que un censor no puede exigir de todos los escritos lo perfecto sino lo bueno, porque entonces no habría obras desiguales en mérito, no me hago responsable de la mejor traducción sino de la merezca la luz publica pues cuando un autor, que es el único interesado por su propia gloria en hacer cosas excelentes, no las quiere o no las sabe hacer, el censor se reduce a examinar sólo los yerros que impiden la publicación de los escritos...Y no puede enviarle a un hombre sus ideas ni el modo de expresarlas.”⁷⁵⁷

No existe por tanto una opinión unánime sobre el papel que juega y que debería jugar la censura. Unos por severa y otros por permisiva, todos encuentran fallos en un sistema que por otra parte ni era perfecto ni funcionaba como se esperaba. Los cambios que se introducen durante el reinado de Carlos III en el mecanismo legal previo a la impresión, y que permiten que un grupo de élite se incorpore a tarea de tutelar originales, ha sido interpretado por la historiografía como un cambio del sistema. Se ha entendido su actuación como parte de un programa político-cultural emanado del poder y canalizado a través de las instituciones ilustradas, logrando la ansiada instrucción y progreso de la sociedad⁷⁵⁸. Sin dejar de ser cierto, debe ser matizado. Críticas a los revisores y a la censura los hubo siempre, sobre todo por quienes la ejercía o la sufrían. Pero ni antes fue tan poco cualificada ni después tan efectiva.

Censura y legislación

Aunque ya hemos referencia a esto, no habíamos reflexionado sobre cómo la opinión, pues al fin y al cabo una censura es eso, se convierte en norma. Los censores participan en el proceso de creación a través de sus opiniones, que más que tenidas en cuenta suelen convertirse en norma cuando el Consejo las suscribe. Se impide la publicación de una obra o se introducen las modificaciones que se consideran

⁷⁵⁷ RAH, Censuras, 8015-43. Citado por LOPEZ-VIDRIERO, *op. cit.* (nota 203) pág. 862.

⁷⁵⁸ *Ibidem*, págs. 855-856.

necesarias, pero no como consejos al autor, sino como condiciones para que sea concedida la licencia.

Esta sería la relación más directa entre censura y legislación, pero no es la única. La trascendencia de algunos casos determinó, incluso, un cambio de la normativa y de la práctica de la censura. Sin duda el que causó más expectación y provocó unas consecuencias más notables fue la publicación en 1756, con todas las licencias necesarias, de un papel intitulado *El Piscator Complutense*, caso que ya hemos mencionado al hablar de la acción de Curiel como Juez de Imprentas⁷⁵⁹.

El conflicto surgido entre el primer Secretario de Estado, Ricardo Wall, y el Juez de Imprentas, Juan Curiel, en torno a un impreso controvertido en cuanto a su contenido y se saldó con un castigo ejemplar para autor y censores y con una llamada de atención al Juez, pero le autorizó para proponer las reformas que fueran necesarias para que estos acontecimientos no se repitieran. Un episodio que podría haber pasado desapercibido, posibilitó la acción reformadora más importante de Curiel, si bien, como hemos visto, fue a la postre un rotundo fracaso.

En su defensa, el Juez sevillano había alegado que todo el procedimiento había cumplido escrupulosamente con la legislación vigente, obteniendo en ello el cerrado respaldo del Consejo de Castilla. Es más, los censores castigados eran dos predicadores reconocidos de la Corte: el benedictino Fray Vicente Marín, predicador en el Monasterio de San Martín de Madrid, y Fray Antonio de la Madre de Dios, predicador y bibliotecario en el convento de San Hermenegildo de Carmelitas descalzos de Madrid.

La responsabilidad atribuida sobre el contenido de la obra a los censores, que fueron severamente castigados, suponía un problema añadido para el Juez:

“Si el Juez de Imprentas o el Consejo han de ser responsables de todo cuanto se imprime es menester que el Rey lo mande, porque hasta ahora no hay ley que lo

⁷⁵⁹ Ver capítulo 2.2. La documentación sobre este episodio se encuentra en AHN, Consejos, leg 11275.

prevenga y por esto el Juez de Imprentas y el Consejo se desentienden de las prohibiciones que frecuentemente se hacen por el Santo Oficio de la Inquisición de libros que autorizados con su licencia se hallan con proposiciones heréticas, con blasfemias y errores contra nuestra Santa Fe y buenas costumbres”.

Efectivamente, en ninguna de las numerosas disposiciones que regulaban los impresos se había establecido hasta el momento una responsabilidad por parte de los autores o del Juez de Imprenta sobre el contenido de las obras aprobadas, algo que sí ocurría en Francia y que incluirá Godoy en su reforma de la censura. Para justificarlo, Curiel recurre a la Inquisición, explicando que si esa responsabilidad fuera efectiva, el propio Consejo de Castilla sería responsable subsidiario de las obras que siendo aprobadas eran después condenadas por los inquisidores.

Uno de los problemas que según el Juez de Imprenta pudo llevar a este conflicto fue el nombramiento de los censores de cada manuscrito. En su alegato, Curiel explica cómo antes de su llegada al Juzgado, los autores proponían a la persona que censurara su manuscrito, que, como es lógico, estaría predispuesta a una aprobación de oficio. Al considerarlo un abuso, Curiel intentó que fueran literatos reconocidos de la Corte quienes realizaran los exámenes, pero era frecuente que éstos se excusaran alegando demasiadas ocupaciones. Antes esta situación, Juez flexibilizó su postura y permitió que, al menos, el autor propusiese una terna de la que se eligiera a una persona. Sin embargo, la condena que habían sufrido los censores del *Piscator Complutense* disuadiría a muchos de asumir la responsabilidad de aprobar una obra que podría ser reprobada tiempo después, convirtiéndose en una vía para resolver cuitas personales⁷⁶⁰.

⁷⁶⁰ “Cuando yo entre a servir esta comision halle la practica de que el autor de la obra proponia el sujeto a cuya censura se habia de remitir y asi se ejecutaba de cajon, me crei poderoso a enmendar este abuso y empeze a remitir las censuras, especialmente en obras grandes a los mas condecorados sujetos y literatos de esta Corte, pero en vano, porque casi todos se me escusaban por sus mayores ocupaciones. Me vi precisado a permitir que el interesado propusiese tres sujetos conocidos y autorizados entre quienes elegia uno, y aun de esta suerte apenas pueden conseguir los Autores que el nombrado se quisiera hacer cargo de la censura. Hoy, a vista del justo castigo de los dos aprobantes del Piscator Complutense, dudo mucho que haya quien quiera meterse sin utilidad en este riesgo, y habremos de incidir en la antigua practica mas perjudicial que todo.”

Existía en la legislación una alusión permanente a la necesidad de que a los revisores se les diera “por su trabajo el salario que fuese justo”, remontándose a los Reyes Católicos y Felipe II. En su alegación, Curiel recuerda este hecho y reconoce que, en cambio, “no hay memoria ni noticia de que algún tiempo se hubiese tasado o dado a los aprobantes este salario o remuneración de su trabajo”. Lo mismo había alegado Martín Sarmiento en 1743⁷⁶¹ y lo hará, poco después, el padre Isla en 1758⁷⁶², cuando propuso la profesionalización de los censores y la retribución con pensiones conforme a su actividad. Curiel, en su alegación del 2 de febrero de 1756, está preparando el camino para su Auto posterior de 19 de julio, y aprovecha para proponer la asignación de censores remunerados, lo que facilitaría la búsqueda aprobantes cualificados.

Consultados los Fiscales del Consejo sobre la propuesta de Curiel responden afirmativamente y reconocen que la situación se evitaría con la elección de una “Junta de sujetos doctos y con salario como entonces y hasta ahora se había propuesto”, sumándose en febrero de 1756 a la iniciativa de Curiel. Introducen, eso sí, un matiz que evitara situaciones como las ocurridas: “ni el Consejo ni el Juez de Imprentas pueden ser responsables de las obras”. El Consejo en pleno ratifica la opinión de los Fiscales, que habían exculpado a Curiel de toda culpa (habían calificado de manera explícita la “atención y cuidado” del Juez como “bien notoria”), y trasladan la responsabilidad de la censura al letrado que la hiciera, que será asalariado, pero determina que no deben agruparse como Junta, sino de manera individual, facilitando la asunción de responsabilidad. Se muestran partidarios de que los elegidos sean *literatos*, “por los inconvenientes, dilaciones y embarazos que deben recelarse en su práctica”.

La propuesta final se materializó en la elección de un número de personas que aceptaran y juraran su cargo. Esta alegación se firmó el 23 de febrero y el Rey se dio

⁷⁶¹ SARMIENTO, Martín, “Reflexiones literarias para una Biblioteca Real y para otras bibliotecas públicas”, *Semanario Erudito*, XIX (1789), pág. 215.

⁷⁶² ISLA, José Francisco, *Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes*, Madrid, 1758. Su reimpresión fue prohibida por la Inquisición en 1758 y el libro prohibido por decreto el 20 de mayo de 1760.

por enterado, mandó que no se le importunase más con estas consultas, pero permitió que el Consejo resolviese el asunto, lo que hizo por Auto acordado el 19 de julio.

A esta idea se opuso Ricardo Wall, que acusa al Consejo de constantes descuidos, porque dice que cada día se recogían obras impresas que ni eran útiles ni de buena doctrina ni enseñanza. Para el ministro de Estado, nombrar cierto número de censores sería inútil y redundaría en el dinero que pagaran tanto autores como los compradores, en perjuicio de las letras. Según Wall, dispuesto a enfrentarse con Curiel en cualquier ocasión para minar su poder, el hecho de tener salario tampoco les haría más cuidadosos, sino que se pondría empeño en lograr el empleo, por lo que se debe buscar “sujetos doctos, literatos, de honor y desinteresados”.

Finalmente, un posible efecto que todavía no hemos podido constatar documentalmente es si el ejercicio de la censura fue considerado como mérito para la concesión de mercedes, honores y oficios en la administración del Estado. Conocemos cómo la escritura de una obra había sido argumento para ello, como, Juan Meléndez Valdés, que dedicó al entonces Secretario de Estado, Godoy, su crítica a la Inquisición y los excesos religiosos en *Fanatismo*, lo que le valió ser nombrado fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte de Madrid⁷⁶³, pero no hay pruebas de que fuera así para los censores, por más que en los capítulos anteriores hayamos aventurado el peso que pudiera tener en ascensos y nombramientos.

Balance

El trabajo del censor es tedioso y no remunerado, ni económicamente ni con el reconocimiento social. El desempeño de este servicio exige un análisis concienzudo del manuscrito, que tras su examen debe quedar preparado para que vea la luz. Esto requería que los revisores conocieran la materia de la que trata la obra, consultaran la bibliografía existente y valoraran las afirmaciones que se contenían, tanto por el

⁷⁶³ ENCISO RECIO, Luis Miguel, “Las Cortes de Cádiz y la cultura: Los compases finales de la cultura ilustrada”, en ESCUDERO, José Antonio, *Cortes y Constitución de Cádiz: 200 años*, Volumen 1, Espasa-Calpe, 2011, pág. 524.

sentido que tenían como por las posibles interpretaciones que de ellas pudiera hacer cualquier lector.

Siguiendo las máximas expresadas en la normativa, el censor debía velar por el escrúpulo respeto por la fe y la Iglesia católica, las buenas costumbres regidas por la moral cristiana y el carácter de los españoles y las regalías del Rey, pero además el contenido debía ser veraz y, lo más importante, útil. Los censores son los responsables de que las lecturas sean útiles y contribuyan a la formación de la nación, que era el fin último de la censura. Así, frente a la imagen tradicional del censor inquisitorial sólo preocupado por la fe y la tradición cristiana, debemos contraponer al censor ilustrado, que si bien no olvida la fe y la tradición, concibe su propia acción como algo positivo eficaz cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la sociedad. Por ello, hay que entender la crítica que subyace tras las palabras de los censores como una forma más de utilidad, cuyo fin es contribuir a la construcción del proyecto ilustrado.

La censura se encuadra, por tanto, en el ámbito educativo. Se trata de poner a disposición del público unos conocimientos que gracias a la intervención de los censores podrán ser más útiles. Y es así porque en sus valoraciones deben atender a todos los aspectos de la obra, desde el título hasta la estructura, pasando por cuidar el contenido, requiriendo el uso de un léxico depurado y expresiones convenientes, exigiendo el uso de fuentes fiables y desterrando cualquier atisbo de superchería o leyenda. Para esto el censor utiliza su propia formación, aportando citas de autoridad e información que el autor puede no conocer, no para demostrar sus mayores conocimientos, sino porque con su crítica busca la perfección y la máxima utilidad de cada obra.

Que los censores se empleen a fondo no evita que su trabajo no sea grato ni reconocido. Los autores critican durante todo el siglo el sistema de revisión, incluso en la segunda mitad, cuando el epicentro se desplaza las nuevas instituciones ilustradas. Critican la formación de los censores y su trabajo, buscando que sea revisada la decisión de impedir la publicación su obra. Pero también los propios censores critican el sistema del que forman parte, se excusan cuando pueden para no participar en él y

lamentan el tiempo y la dedicación que censurar conlleva motivados por la escasa, por no decir nula, gratificación que reciben.

Aunque tanto la Iglesia como la censura estatal tenían la circulación de libros entre la clase dirigente, desde la censura gubernativa se presta especial atención a los más débiles, entre los que destacan mujeres y jóvenes. Éstos acceden a las letras a través de las cartillas y libros de enseñanza, en los que se cuida el contenido y el sentido didáctico de la obra. Para las mujeres el control es más complejo. Tanto los censores como las autoras son conscientes de la diferencia sexual, pero en ningún caso es el elemento determinante de la relación entre ellos. Las pocas autoras que dan sus manuscritos a la censura se comportan de manera similar a la de los hombres, en parte porque la legislación no preveía un trato diferenciado, en parte porque al participar en un espacio preferentemente masculino tienden a imitar sus estrategias, influidas más por su estatus social y sus influencias en la Corte que por su condición de mujer. Los censores, en cambio, sí recogen la diferencia sexual en sus valoraciones sobre ellas, pero no causa de la negativa, sino expresando una mayor condescendencia hacia sus errores. La escritura femenina se considera, además, destinada a personas de su misma clase y condición, cuidando mucho qué se permite imprimir, manteniendo siempre la utilidad como fin último de la obra.

Los censores, por la naturaleza de su actividad, participan en un doble sistema. Por una parte, sus opiniones se convierten en norma, al ser su informe preceptivo para que los manuscritos pasen a letra impresa. Por otra, con su injerencia en el contenido de los manuscritos, adquieren, en cierta medida, la consideración de co-autores de las obras que censuran, siendo en parte responsables del contenido que han autorizado imprimir. Esto no es raro, ya que muchos de ellos, la mayoría, participan de la República de las Letras también de manera activa como autores de sus propias obras, por lo que las redes que se crean se retroalimentan con censuras y aprobaciones mutuas entre los integrantes de esa elite ilustrada, redes en las que se visualizan claramente las relaciones de amistad y enemistad, y que nos devuelven a ese matiz coyuntural que termina condicionando, en este caso, la política cultural del Reino.

Al final, un país no podía permitirse que sus más importantes pensadores emigraran a otros países. Era más útil introducirles en el sistema para aprovechar su pluma a favor de los intereses de la Monarquía. Es el intento de que todos los intelectuales se conviertan en *orgánicos*, bien a través de Academias, bien por los diversos y numerosos puestos en el aparato administrativo de Consejos y Secretarías, bien con los incontables beneficios eclesiásticos que con mayor fuerza desde 1753 estaban a disposición de los intereses del Rey.

5. Epílogo. Hacia un modelo europeo de censura

Como veíamos en el capítulo introductorio, resulta todavía complicado determinar qué es un autor y, todavía más, quién era considerado autor en el Siglo de las Luces. Englobados bajo la terminología *hombres de letras*, podemos considerar, siguiendo las indicaciones de Joaquín Álvarez Barrientos⁷⁶⁴, no sólo a los que nosotros denominamos escritores, sino a todos los que de alguna manera tenían contacto con las letras, recogiendo el sentir expresado por Voltaire en el artículo *gens de lettres* del tomo VII de la *Encyclopédie* de 1757. Pero esta vinculación debemos entenderla como algo ocasional, pues son pocos los que viven exclusivamente de pluma, dependiendo siempre de la obtención del mecenazgo del algún noble, las rentas del algún beneficio eclesiástico o de algún puesto en la Administración civil por gracia del monarca. Siendo difícil la profesionalización del escritor, más aún lo es, hemos visto, de quienes debían controlar su trabajo. Si bien es cierto que muchos de los censores eran al tiempo autores, también lo es que la inmensa mayoría tenían una ocupación estable que les permitía no sólo subsistir, sino progresar socialmente independientemente de su trabajo como escritores. En este sentido, los reiterados intentos de profesionalización de la censura fracasaron por uno u otro motivo, impidiendo su consolidación como grupo social sin que se llegase a ninguna solución hasta la desaparición del propio sistema censor. Pero también es cierto que sus protagonistas no se preocuparon tanto de reclamar esa consolidación profesional porque no veían ese desempeño como su trabajo principal, sino como un servicio más al rey que podrían alegar en su hoja de servicios al solicitar nuevos ascensos.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si los reiterados intentos de creación de un cuerpo estable de censores se enmarcan dentro de una dinámica europea o si, por el

⁷⁶⁴ A este respecto resulta imprescindible su capítulo “Los hombres de letras” en ÁLVAREZ BARRIENTOS, LOPEZ y URZAINQUI, *op. cit.* (nota 103), págs. 19-61, donde diserta sobre distintos aspectos como la consideración social de los escritores, su sustento económico o las relaciones con las autoridades a través del mecenazgo y las Academias, temas en los que profundiza en su posterior monografía *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII. Apóstoles y arribistas*, Madrid, Castalia, 2006.

contrario, fueron soluciones originales dadas por los ilustrados españoles para controlar los impresos. Los estudios nacionales sobre estos temas, entendiendo como tales los que circunscriben la materia analizada a un solo país, pueden caer en el error de determinar que se trata de un proceso característico de la nación en cuestión, o, cuando menos, a considerar como propiedades específicas del proceso nacional lo que pueden ser elementos comunes de un movimiento cultural supranacional. Ampliar la vista y contemplar trabajos que sobre temas similares se realizan en los países del entorno pueden ayudar a entender si estos cambios son procesos exclusivos o, por el contrario, tendencias que se desarrollan en paralelo influidas, posiblemente, por las relaciones directas e indirectas entre los protagonistas de cada territorio⁷⁶⁵.

Inglaterra, pionera en las normas sobre la libertad de imprenta, representa desde un primer momento la excepción al panorama general europeo dado carácter diferenciador que en materia de censura tuvo desde finales del siglo XVII y que la configuró como la primera nación en instaurar la libertad de imprenta y los derechos de autor. El desarrollo de la imprenta en las islas británicas durante el XVIII será, por tanto, completamente diferente al que tendrá lugar en la Europa continental.

Aún así, abarcar todo el continente europeo resultaría demasiado ambicioso. Por ello se han seleccionado aquellos países que tuvieran una vinculación política, cultural y geográfica mayor con nuestra Corona. La primera mirada se dirige a nuestro más cercano vecino, Portugal⁷⁶⁶. Desde el siglo XVI y hasta la reforma de 1768, en el país vecino existía una triple censura, cuyo origen se remontaba a la superposición de legislación que desde 1517 se había ido produciendo: el Ordinario, la Inquisición (a

⁷⁶⁵ Sobre este tema se trató en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores de la Fundación Española de Historia Moderna en Zaragoza, celebrada en febrero de 2012, aunque en un estado embrionario que ha sido completado para la presente tesis. PAMPLIEGA PEDREIRA, Víctor, "La censura libraria. Una mirada a Europa", Zaragoza, Fundación Española de Historia Moderna, Institución Fernando el Católico y Universidad de Zaragoza [En prensa].

⁷⁶⁶ Para la censura en Portugal resulta fundamental la obra CARREIRA, *op. cit.* (nota 605), donde se dedica la primera parte del libro a un análisis de la evolución del sistema de censura luso, antes de profundizar en su efecto en el teatro en la segunda mitad del siglo, y los artículos de Villalta y Abreu, donde se hace un resumen mucho más sencillo, ABREU, *op. cit.* (nota 605) y VILLATA, Luiz Carlos, "Censura literaria en el mundo luso-brasileño (1517-1808): órganos censores, criterios de censura y obras prohibidas", en *Cultura Escrita & Sociedad*, nº 7 (2008), págs. 98-117.

partir de 1536) y el Tribunal de Palacio⁷⁶⁷ (desde 1676). Estos tres tribunales eran independientes unos de otros, poseyendo cada cual sus reglas y principios. En general, existía un claro predominio de eclesiásticos, pues sus miembros controlaban dos de las tres licencias necesarias para la obtención de una licencia. Pero éstos no sólo se preocupaban de aspectos relacionados con la fe, aunque ahí radicara su origen, sino que también asumieron entre sus objetivos el control de los intereses de la Corona. En 1768 se crea la Real Mesa Censoria, órgano regio compuesto por el mismo número de laicos y de clérigos. Su creación seguía la tendencia general de secularización de la censura y formaba parte de la política reformista y regalista llevada a cabo por José I. La reforma del sistema de control librario formaba parte del empeño de Sebastiao José de Carvalho, más tarde Marqués de Pombal, de reafirmar la supremacía del Rey frente a la nobleza y a la Iglesia, especialmente los jesuitas. Esta Mesa quedó encargada de la elaboración de un nuevo *Índice expurgatorio* diferente al de Roma, que desde entonces debería contar con el pase regio para circular por Portugal. El objetivo de la Mesa era reunir “todas las sobredichas Tres Jefaturas en una sola Junta [...] compuesta de Censores Regios, que continuamente vigilasen sobre esta importante materia, como se está practicando en otras cortes iluminadas y pías de Europa”⁷⁶⁸. La composición de la Real Mesa se fijó así: un presidente (el primero el Arzobispo de Evora, seguido del obispo de Beja, del arzobispo de Lacedemonia y finalmente un fraile, por tanto siempre eclesiásticos), siete diputados, un inquisidor de Lisboa, un Vicario General del Patriarcado de Lisboa y cinco letrados. Compuesta también por eclesiásticos, pero siempre cercanos al modelo reformista impulsado desde la Corte. A la Mesa le competía el examen, aprobación o reprobación de libros y papeles presentes en Portugal, que se pretendiesen introducir o imprimir, además de las Conclusiones que se defendieran públicamente. Presidencia eclesiástica pero manteniendo un equilibrio en las fuerzas entre Estado e Iglesia. Atendiendo a los miembros, se asemeja bastante al modelo español y puede interpretarse como un intento de centralizar la censura y profesionalizarlo mediante el nombramiento de personas acreditadas, que son, como en el caso español, en su mayor parte

⁷⁶⁷ *Mesa do Desembargo do Paço* en portugués.

⁷⁶⁸ Decreto de 5 de abril de 1768, Citadp por ABREU, *op. cit.* (nota 605), pág. 119.

eclesiásticos de distintas órdenes e incluyendo, también, un inquisidor⁷⁶⁹, aunque la diferencia fundamental radica en que en Portugal adoptaban las decisiones de manera colegiada, mientras que en España la última palabra no era de los censores, cuyos dictámenes eran normalmente individuales, sino del Consejo de Castilla.

María I reformó la censura en 1787 sustituyendo la Real Mesa Censora por la Comisión General para el Examen y la Censura de los Libros, justificando este cambio por la inoperancia de la primera⁷⁷⁰. La composición de la Comisión fue la siguiente: un presidente eclesiástico⁷⁷¹ y ocho diputados (cuatro de ellos formados en Teología). El principal cambio concernía al papel de la Iglesia y supuso un paso atrás en la secularización de la Monarquía, ya que de una posición de primacía de los intereses portugueses, se devolvió al Papa el derecho de censurar los libros, presentando a la Reina como figura autorizada por el Sumo Pontífice para la creación de dicho Tribunal. Matiz importante sobre el origen de la autoridad sobre censura, que ya no es una regalía, sino una obligación eclesiástica. Además, se facultaba a los obispos para censurar libros. Tras el estallido de la Revolución Francesa, en 1791 se reconocía, de nuevo, la autoridad del Santo Oficio en un intento de multiplicar los controles, recurriendo para ello a esquemas del pasado.

A pesar de los cambios se manifiesta una continuidad en los procedimientos que se manifiesta en una continuidad de los censores en sus cargos. Abreu cita, al menos cuatro censores que se mantuvieron como tal durante más de 20 años, sin que los cambios institucionales variaran más que el nombre del órgano que le encargaba la censura, de manera similar al caso de Miguel Pérez Pastor, censor antes, durante y después del sistema profesional de Curiel.

En 1794 la Corona extinguió la Comisión General y restableció el sistema de triple censura, por la ineficacia de la censura unificada y ante el temor de que los nuevos principios políticos, filosóficos, teológicos y jurídicos penetrasen en Portugal. Así,

⁷⁶⁹ CARRERIA, *op. cit.* (nota 605), págs. 53-54.

⁷⁷⁰ Decreto de 21 de Junio de 1787. Citado por ABREU, *op. cit.* (nota 605), pág. 121.

⁷⁷¹ No suponía un cambio sustancial, ya que de hecho la Real Mesa Censora siempre estuvo presidida por un eclesiástico, como hemos señalado anteriormente.

Inquisición, Ordinario y Tribunal de Palacio volvieron a ocuparse de la censura literaria, iniciando el Ordinario o el Santo Oficio el proceso y actuando, después, el Tribunal de Palacio. Es el último paso en el retroceso en la secularización de la censura, por más que el Tribunal de Palacio, compuesto por laicos, tuviera el papel final del proceso censor. Sin embargo, en 1795 el Príncipe Regente sancionó una cédula en la que regulaba los criterios por los cuales los tres tribunales debían censurar los libros. La Iglesia, libros religiosos, pero era la Corona la que evaluaba los asuntos laicos y quien podía dar la prohibición de todos los libros, fuesen civiles o religiosos, lo que colocaba a la Corona por delante. Además, cada tribunal tendría una esfera de actuación: el Ordinario para censurar doctrinas religiosas y disciplina eclesiástica; la Inquisición verlaría por la pureza doctrinal, persiguiendo la herejía; y el Tribunal de Palacio se reserva el examen de las doctrinas que corrompieran las costumbres de la Nación y las leyes y derechos de la Corona. En general, se mantuvieron los principios establecidos para la Mesa Censoria en 1768, tanto con la Comisión General como con la censura tripartita, siendo en este último caso necesario que cada autoridad observara dicho reglamento para los asuntos que les concernían tras el reparto.

A diferencia del caso español, durante todo el periodo de funcionamiento de la censura, en ningún momento fue suficiente la opinión de un único censor para decidir el destino de una obra. Con la Real Mesa y la Comisión General, cada libro fue asignado a un censor que preparaba un razonamiento que se presentaba a los demás miembros de la mesa, siendo la decisión colegiada. En los momentos de la triple censura, cada uno de los tres órganos deliberaba de forma colegiada, siendo el Tribunal de Palacio el que tomaba la decisión final⁷⁷². Si bien es cierto que en España la decisión era colegiada, también lo es que las obras menores podían ser aprobadas por el Juez de Imprentas o algún Subdelegado y que el titular del Juzgado podía denegar tal permiso sin ni siquiera remitirlo a un censor para su examen en profundidad.

Diferencia fundamental entre España y Portugal es también el trato a los territorios extrapeninsulares. Los Reyes de España instalaron tribunales en sus colonias,

⁷⁷² ABREU, *op. cit.* (nota 605), pág. 131.

empleando desde el siglo XVI como censores a personas originarias del lugar⁷⁷³, sin embargo la Corona lusitana mantuvo la censura centralizada en la matrópoli hasta el inicio del siglo XIX⁷⁷⁴.

Como para España, es incorrecto atribuir la responsabilidad de la censura de libros en Portugal a la Inquisición, ya que no tuvo esta competencia en exclusiva. Así, tampoco se produce un proceso lineal de secularización de la censura, pues si bien Pombal se propuso centralizar y controlar la política de imprenta, en lo que supone la aplicación práctica del depotismo ilustrado, también con su reforma se comisiona para el examen de los originales a miembros del clero regular y secular, extendiéndose dicha práctica durante todo el siglo. Además se pueden determinar dos conclusiones: a pesar de las posibles discrepancias entre los diferentes órganos censores, nunca una autorización denegada por el Ordinario o por la Inquisición fue aprobada por Palacio⁷⁷⁵, lo que choca con los continuos enfrentamientos entre oficiales inquisitoriales y reales españoles. La segunda es que la eficacia de las reformas se demuestra en tanto que los principios censores establecidos en la ley de 1768 se mantienen, aún variando las instituciones que lo tuvieran que aplicar, hasta 1821. Veremos en el siguiente capítulo si lo mismo ocurre en España.

El modelo francés será, por motivos evidentes, el que se tome como referencia por los ilustrados españoles en sus proyectos de reforma de la censura. La cercanía cultural y política, combinada con la unión dinástica, permitía que las transferencias culturales salvaran los Pirineos con una mayor facilidad. A pesar de que este hecho está contrastado, no hemos encontrado, al menos hasta el momento, referencias explícitas a que fuera el sistema de censura francés el que inspirara las reformas en nuestro país. Estudiar de manera exhaustiva la evolución a lo largo del siglo XVIII del sistema de censura francés, como el de cualquier país, requeriría una tesis doctoral en sí misma, que además tendría que tener en cuenta los numerosos estudios que al respecto ya se

⁷⁷³ GUIBOVICH PEREZ, *op. cit.* (nota 97).

⁷⁷⁴ ABREU, *op. cit.* (nota 605), pág. 125.

⁷⁷⁵ CARREIRA, *op. cit.* (nota 605), págs. 109-111.

han hecho por su historiografía⁷⁷⁶. Pero para poner en relación los distintos modelos podemos fijarnos en varios aspectos concretos. El primero, el comportamiento en la jefatura de la censura; el segundo, el de los propios censores, lo que nos permitirá establecer una comparación con el caso español, nuestro objeto de estudio.

El caso galo de censura libraria presenta algunas peculiaridades que merece la pena destacar. En una Monarquía tan absolutista como la Francia de Luis XIV o Luis XVI, donde el sistema de censura era similar al español, la República de las Letras supo articular, o más bien, encontrar los subterfugios y los aliados para que fuera posible burlar los rígidos sistemas de control y que las ideas reformistas de los ilustrados fluyeran entre los letrados. La principal institución de control librario es la denominada *Dirección de la Librería*, subordinada a la Cancillería. De aquella dependía un cuerpo de censores, cuyo número varió a lo largo de los años, que servían de especialistas en las distintas materias y que se encargaban del examen previo de los manuscritos que querían ser impresos. Obtenido su beneplácito y el correspondiente privilegio de impresión, era la policía del libro la que debía velar por su cumplimiento. A partir de la década de 1750, cuando la Dirección de la Librería es encargada a Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes⁷⁷⁷, personalidad fundamental para comprender la historia del libro en Francia durante este siglo, se extenderá lo que se conoce como “permiso tácito”. El fundamento de este mecanismo residía en que, si bien las autoridades no se atrevían a otorgar al solicitante el privilegio de impresión o de introducción en el Reino, que implicaban la aceptación por parte de la Monarquía de la totalidad de su contenido, tampoco encontraban en la obra los argumentos necesarios para proceder a su prohibición, por lo que se permitía la circulación de la obra sin que ésta disfrutara de las ventajas de los libros privilegiados. Estos impresos carecían de la protección frente a reediciones fraudulentas, pero era el pago por permitir circular obras cuya heterodoxia no encajaba con un privilegio real. Este mecanismo, junto a la

⁷⁷⁶ Basta con ver las obras comentadas en el Estado de la cuestión de este mismo trabajo o la relación de obras recogidas en la Bibliografía.

⁷⁷⁷ Hemos visto la bibliografía sobre Malesherbes en la nota 348, a lo que habría que añadir el capítulo “I censori garanti della libertà di stampa” de Edoardo TORTAROLO, *L’invenzione della libertà di stampa*, págs. 119-148, cuya figura central es también Malesherbes.

conocida y estudiada circulación de libros clandestinos⁷⁷⁸, muchos de los cuales veían la luz en zonas fronterizas, como los Países Bajos, Suiza o Inglaterra, permitió que los ilustrados llenaran la República de las Letras de obras cuyo contenido no podía ver la luz, por ejemplo en España. Los permisos tácitos habían nacido para permitir la entrada de obras impresas al otro lado de la frontera, pero la industria francesa utilizó el viejo subterfugio de imprimir los libros en sus propias prensas con un pie de imprenta falso para acogerse a dicho permiso de circulación.

Decíamos que el personaje que más importancia tiene al hablar de la imprenta en la Francia de la Ilustración es Malesherbes. De una familia noble al servicio del Rey Cristianísimo, su padre ocupaba la Chancillería cuando le fue encargada la Dirección de la Librería, cargo que ocupará entre 1750 y 1763, en una cronología muy similar a la de nuestro afamado Curiel y tras un inicio profesional también en la carrera judicial. Su objetivo al frente de la institución fue más económico que ideológico, pues su prioridad era favorecer a los editores franceses, considerados como una industria nacional fundamental, motivo que le llevará a relajar la concesión de privilegios con la emisión de los permisos tácitos y licencias simples. Como a este lado de los Pirineos, los límites para dar permiso de impresión, en cualquiera de sus variantes, era que la obra no atacara directamente a Dios, al Rey o la moral; el resto dependía de autores y censores. Esta permisividad se tradujo en un considerable incremento del número de libros y de páginas impresos en Francia durante la dirección de Malesherbes⁷⁷⁹.

Se suele hacer referencia en los estudios realizados sobre la figura de Malesherbes a la amistad que cultivó con los principales filósofos de la Ilustración francesa, lo que favoreció que sus obras vieran la luz. Y no deja de ser cierto. Pero no fue él su único apoyo en París. Madame de Pompadour favoreció a Voltaire y *l'Encyclopédie*; el conde de Argenson, Guardián del Sello y director de la Librería toleró libros que su antecesor,

⁷⁷⁸ DARNTON, Robert, *Edición y subversión: literatura clandestina en el Antiguo Régimen*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003.

⁷⁷⁹ Según MINOIS, op. Cit. (nota 18), pág. 190, se pasó de entre 200 y 400 publicaciones anuales en torno a 1700 a más de 500 en entre 1750 y 1763. En 1764 se cuenta, por ejemplo, 1548 libros de más de 48 páginas impresas y 2500 volúmenes, lo que implicaba una media de 20 obras por censor.

Aguersseau, había prohibido; y el cardenal de Bernis utilizaba grandes palabras para definir su opinión sobre Montesquieu, Voltaire o D'Alambert.

Malesherbes era, como Curiel, consciente de las contradicciones y de la ineficacia del sistema que le había tocado dirigir. Para poner remedio a estos problemas, escribe en 1759 un completo informe conocido como *Les Mémoires sur la Librairie*⁷⁸⁰. Si la controversia por el *Piscator Complutense* había precipitado la reforma de Curiel, los conflictos surgidos por la *Encyclopédie* y *De l'esprit* impulsaron el proyecto de Malesherbes. Su posición sobre la censura debe entenderse como intermedia, pues no es partidario de la libertad de prensa, pero tampoco de la represión extrema. El primer problema que plantea es la ausencia de unos criterios claros que homologaran los exámenes de los diferentes censores, lo que permitía que unos fueran permisivos donde otros intransigentes. La solución estaba en la creación de un nuevo reglamento, el mismo remedio que Curiel había propuesto en España al crear el cuerpo de censores y entregarles un reglamento que explicara lo que se esperaba de ellos. El Director de la Librería era consciente de que por la cantidad de obras impresas al año, era fácil para un autor o un impresor saltar los controles legalmente establecidos, por lo que había que concentrar los esfuerzos en impedir que los más peligrosos vieran la luz, siendo permisivos con los demás. Sólo se debían prohibir los libros que atacaran y calumniaran a personas, al gobierno, la moral o la religión, en lo que serían para Malesherbes los límites de la libertad de expresión, aunque el elemento primordial a conservar era la autoridad del Rey. Su postura es, por tanto, proclive a un relajamiento de la censura, lo que permitió que durante su mandato vieran la luz las grandes obras de Voltaire, Diderot, d'Alambert, Rousseau o Mirabeau.

Como habíamos visto en el segundo capítulo, el hecho que mayor revuelo provocó entre los impresores y libreros españoles fue la imposición de severas penas, incluyendo la muerte, para quienes incumplieran la ley, por más que ésta no fuera una novedad de Curiel sino una transposición de la normativa promulgada anteriormente y que al no ser derogada, seguía vigente. En Francia la situación heredada era similar,

⁷⁸⁰ MALESHERBES, *Mémoires sur la Librairie. Mémoire sur la liberté de la presse*, editado por CHARTIER, Roger, Paris, 2004.

pero el responsable francés optó por criticar esa dureza y proponer en su lugar condenas más pragmáticas, pues si bien se mantenía la prohibición de imprimir y comerciar con obras sin ningún permiso, si introdujo medidas para liberalizar en cierto modo el comercio del libro (limitando la herencia de privilegios, permitiendo a los autores vender sus propias obras, aumentando las ciudades de entrada de obras extranjeras, etc.), además de la creación de los permisos tácitos que ya hemos comentado.

El nombramiento de censores reales en Francia es anterior al que se hace en España. Así, desde 1742 y hasta 1790 el *Almanach royal*⁷⁸¹ publica en sus páginas la lista de censores regios, enumerados además según las especialidad que debían controlar. El número no está preestablecido, sino que fue aumentando a lo largo del siglo, pasando de los setenta y siete en 1742 a los ciento ochenta y tres que figuran en el número de 1785. Las especialidades también variaron, llegando a ser doce diferentes: teología; derecho, que será la que tenga un número mayor de censores asignados; medicina, química e historia natural; cirugía; matemáticas; bellas letras e historia; imprenta; geografía y viajes; arquitectura; hidráulica; pintura; y música⁷⁸².

En cuanto al papel que juega la Iglesia, si bien es cierto que el peso del clero es menor que el que tenía en España, esto se debe a la mayor implantación del galicanismo. No obstante debemos recordar que entre los criterios inamovibles de Malesherbes se encontraba evitar los ataques a la religión pues según sus propias palabras los libros contrarios a la religión no podían ser tolerados en ningún país, aunque no se refería

⁷⁸¹ Esta publicación periódica tiene su primer número en 1683. Se trata de un calendario de origen astronómico que ordenaba en el calendario información astrológica, como los eclipses y cambios lunares, y que se complementa con información útil para los lectores como los festivos. Las ediciones del *Almanach royal* se pueden consultar en la Bibliothèque Nationale de France, que conserva una colección casi completa, de 1694 a 1914, accesible en la sala Tolbiac (Rez-de-Jardin en salle L sous la cote [944.002 ALMA]). Además, están parcialmente digitalizadas, por lo que son accesibles a través de Gallica y de su página web: http://grebib.bnf.fr/html/almanach_royal.html. El equivalente español a esta publicación es la *Guía de Forasteros*, que ya hemos mencionado y en la que no se incluyeron los censores a sueldo de Curiel.

⁷⁸² FLOCON, *op. cit.* (nota 10), págs. 413-414.

tanto a la fé católica como al respeto a la religión en sí, ya que sus hechos posteriores le dibujan como partidario de la igualdad legal de los protestantes calvinistas⁷⁸³.

El caso italiano es más complejo de analizar por la fragmentación política existente en lo que hoy conocemos como Italia. A un lado dejamos los Estados Pontificios, cuyo control de la prensa se canalizaba a través de sus propias instituciones, pero motivos obvios no es posible separar en ellas entre lo gubernativo y lo eclesiástico, que van unidos indisolublemente. Del resto de principados habría que diferenciar los grandes estados como Venecia, Florencia, Milán o Nápoles, de los pequeños principados, ducados y demás divisiones territoriales, cuyo estudio debería ser diferenciado. En cuanto a los grandes territorios, la mayoría sigue la estructura de las grandes monarquías europeas como Francia, España o Portugal, y su estudio resulta más productivo ya que desarrollan sistemas de censura similares en cronologías parecidas a las que estamos viendo⁷⁸⁴.

Quien después sería coronado rey de España con el nombre de Carlos III fue previamente soberano de varios territorios italianos, donde es conocido como *Carlo di Borbone*. El Ducado de Parma fue su primer destino de calado, aunque no tuvo tiempo suficiente para desarrollar en él un programa completo de reformas como si hará en su destino más prolongado: el reino de Nápoles. Concretamente, el mayor desarrollo de la imprenta en Parma se producirá, precisamente, al poco de la marcha de Carlos a Nápoles, cuando desembarque en la Biblioteca Palatina Gianbattista Bodoni, que llevará a la tipografía ducal a las más altas cotas de calidad⁷⁸⁵.

Es, por tanto, en Nápoles donde nuestro Carlos III iniciará un complejo y ambicioso programa de reformas que afectarán al funcionamiento general del reino y que le servirán como *banco de pruebas* para las reformas que tras la muerte de Fernando VI impulsará o continuará desde Madrid. En lo referente a temas de censura libraria,

⁷⁸³ "Les livres expressément contraires à la religion ne peuvent être tolérés dans aucun pays", MINOIS, *op. cit.* (nota 18), pág. 225.

⁷⁸⁴ Para el estudio de Parma, Venecia, Florencia o Turín, consúltese la bibliografía al respecto recogida en el Estado de la cuestión y en la bibliografía.

⁷⁸⁵ De manera tagencial también se trata el tema en CERIOTTI, Luca y DALLASTA, Federica, *Il Posto de Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milán, Franco Agnelli, 2008.

Carlos de Borbón se encuentra a su llegada a la capital del sur de Italia con un sistema de control dominado por la Iglesia. El carácter subsidiario de la Santa Sede y la influencia de la jerarquía eclesiástica había provocado que fueran los agentes eclesiásticos los que controlaran la publicación y circulación de impresos⁷⁸⁶. De manera similar a Portugal, la impresión estaba controlada por un doble sistema de censura, el eclesiástico, cuyo origen se remontaba a la aparición de la propia imprenta, reforzada por las disposiciones papales durante la Edad Moderna; y la estatal, articulada desde el siglo XVI por las autoridades españolas en torno al *Cappellano Maggiore*, un cargo palatino subordinado al Virrey. Durante los siglos XVI y XVII no hay grandes novedades legislativas, y el periodo se caracteriza por una indefinición legal mitigada por la publicación periódica de los *Índices* romanos y la autoridad que por parte de la Iglesia ejercía el Arzobispo.

La dificultad que se encuentra Carlos a su llegada a Nápoles son las expectativas que la diplomacia española había suscitado en la corte papal sobre la probada catolicidad del hijo de Felipe V. Desde Roma se realizan todas las presiones posibles para esto se traduzca en el mantenimiento del control por parte del clero local, argumentando que de la unión entre trono y altar ambos salían fortalecidos, pues el ataque a cualquiera de ellos era un ataque a ambos. En su defensa, el clero napolitano argumentaba la facilidad que hasta la fecha había en acceder a lecturas prohibidas, y que la creación de un reino autónomo podía atajar de manera más efectiva que las anteriores administraciones virreinales. El programa de Carlos III y sus ministros pretendía secularizar el aparato censor, sustituyendo las licencias eclesiásticas por autorizaciones regias. Además, como hiciera Pombal en Portugal, existía un claro interés porque el *Índice* romano no tuviera validez en Nápoles, pues los inquisidores papales solían incluir en él obras en defensa de las regalías que el nuevo monarca no tenía ningún interés en prohibir, mientras que otros títulos que no estaban contenidos en el índice sí estaban prohibidos por el Estado.

⁷⁸⁶ NAPOLI, Maria Consiglia, *Lecture proibite. La censure dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica*, Milán, Franco Agnelli, 2002, págs. 21-49.

Durante la etapa borbónica, el sistema de censura real napolitano no sufrió grandes cambios y se asemeja bastante a los ya vistos. Para los libros que se imprimían en el reino, la nueva obra se enviaba a la Secretaría del Eclesiástico, que la transmitía al *Cappellano Maggiore*, el encargado de remitirla a los revisores. La respuesta de éstos se enviaban de nuevo al *Cappellano* antes de pasar el último trámite: su aprobación en la *Real Camera di Santa Chiara*. Una vez impreso con la licencia real debía ser corregido para verificar que el impreso se correspondía con el manuscrito presentado, función abolida en España precisamente por Carlos III. La reimpresión, en cambio, estaba controlada por otro organismo, el *Delegato della Real Giurisdizione*, si bien en ocasiones, cuando no estaba clara la licencia de la primera edición, se sometía al proceso descrito como si se tratara de una obra nueva. Este sería el modelo ideal, pero lo cierto es que entre los impresores y las autoridades implicadas reinaba cierta confusión sobre la competencia de cada uno y el proceso a seguir. Esta falta de claridad se traduce, como en España, en quejas de autores e impresores, que presentan distintas alegaciones para redefinir las competencias y aligerar los trámites burocráticos que obstaculizaban su actividad, sin mucho éxito⁷⁸⁷.

El Concordato firmado en 1741 mantuvo el sistema de doble censura, por el que una obra para ser impresa o circular por Nápoles debía contar con la autorización del Ordinario y del Rey, sin embargo esto no zanjó el conflicto entre las dos autoridades interesadas. La mayor parte de las obras impresas en el reino circularon sin problemas a pesar de no contar con la aprobación arzobispal y todas las negociaciones que desde ese momento se producen entre la Santa Sede y Nápoles tuvieron el control de libro como uno de los asuntos más conflictivos. La práctica en torno a 1760 hizo que bastara con que el revisor regio comprobara que la obra no contenía nada contra la pureza del dogma, las costumbres y la religión para que no fuera necesaria la intervención episcopal. El cambio de Carlos por su hijo Fernando tampoco supuso un cambio en la política regia, que fomentó la primacía de los revisores regios sobre los exámenes del Ordinario, de manera que si el Arzobispo quería prohibir de manera expresa una obra

⁷⁸⁷ COVINO, Luca, "Stampa e burocrazia in una supplica degli stampatori napoletani del 1786", en RAO, Ana Maria (dir.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 5-7 dicembre 1996*, Nápoles, 1998, págs. 427-475.

debía recurrir al poder real, que decidía en función de sus propios intereses y a la oportunidad política. El proceso de reafirmación de la imprenta como regalía se expresa gráficamente en 1788 con motivo de la obra *Lo spirito della giurisdizione ecclesiastica* del abate Cestari: la Iglesia “no tiene la facultad de prohibir o impedir la impresión de los libros, estando esa facultad reservada a la Potestad Soberana”⁷⁸⁸.

En cuanto a los revisores napolitanos, su elección corría a cargo del Capellán Mayor, que designaba uno entre la terna presentada por el solicitante, siguiendo el mismo método de Curiel antes de su reforma. Los censores debían ser especialistas en el tema, sin que importara que fueran laicos o clérigos, y su juicio debía ser independiente, aunque también se han estudiado casos en los que nombrar censor a un amigo del autor era suficiente para que la obra en cuestión viera la luz⁷⁸⁹. No eran por tanto un cuerpo estable, aunque sí debían ser especialistas en la materia que examinaban, prestando atención a que la obra no atacase a la religión, al Rey o las buenas costumbres, si bien el contenido de cada censura dependía del revisor, que en ocasiones podía profundizar en el contenido de la obra, lo que provocaba, indudablemente, un debate con el autor sobre la veracidad de lo expuesto en el manuscrito, pudiendo determinar que se debían suprimir o modificar algunas partes del original para conceder el *imprimatur*.

No podemos decir que este proceso de reforma de la censura que enfrentó a los ministros de Carlos III con la Curia papal sirviera de antecedente de las que más tarde introdujera en España, porque la situación heredada en España distaba de la práctica consuetudinaria en cuanto a la intervención del clero que había en Nápoles, pero sí que comparte no solo con su predecesor, Fernando VI, sino con los monarcas francés y portugués un claro reforzamiento de la consideración jurídica de la imprenta como regalía, según la cual era responsabilidad y potestad del rey otorgar la licencia de impresión o de circulación de una obra, conservando siempre, eso sí, la fe y las buenas

⁷⁸⁸ CESTARI, Gennaro, *Spirito della Giurisdizione ecclesiastica sull'ordinazione dei vescovi*, Nápoles, Vincenzo Orsino, 1788, p. XVII. Citado por NAPOLI, *op. cit.* (nota 786), pág. 49.

⁷⁸⁹ *Ibidem*, págs. 58-59.

costumbres como los principios básicos que el monarca debía proteger. Y todo esto en los años centrales del siglo.

Éste es, precisamente, el primer rasgo común de los aparatos de censura de los principales territorios de la Europa continental. Todos los proyectos de reforma tienen lugar en una cronología similar, que se sitúa en torno a los años cincuenta del siglo. La evolución y el éxito de este proceso será, no obstante, diverso. En Francia la apertura será imparable, desembocando en el reconocimiento final del derecho de imprenta y de opinión en la *Declaración de los derechos del hombre* tras la Revolución Francesa. Precisamente los hechos revolucionarios que sacuden París serán los que motiven un intento de fortalecer los procesos de control en los demás estados, que aunarán sus fuerzas con la Iglesia para evitar el contagio de las ideas subversivas que habían triunfado en Francia. En Portugal supone un retorno a la triple censura y en Nápoles y España se prohíbe no sólo las obras que se imprimieran allí, sino todas las que informaran sobre los acontecimientos revolucionarios, lo que no sirvió en ninguno de los dos casos para frenar, años después, a las tropas de Napoleón.

Estos países comparten también objetivos. Las legislaciones nacionales establecen que los revisores deben salvaguardar la fe, las buenas costumbres y las regalías y leyes del reino, aunque en el trasfondo todas emplean términos como *utilidad* y se convierten, de hecho, en instrumentos de control político y social para imponer la voluntad del rey, promoviendo obras que legitimaran su poder y sus reformas, influyendo y condicionando así la naciente opinión pública.

Coinciden también en la existencia de personajes clave con quienes los sistemas de control de la imprenta sufrirán trascendentales cambios, siempre encaminados a aumentar el control y racionalizar el mecanismo de censura. Curiel para España, Malesherbes para Francia, siguen a la espera de un estudio comparado. Estos personajes acumulan más poder que el que en principio se les asocia al relacionarles con el control librario. Hemos visto a los jueces españoles y su posición como miembros del más alto tribunal de la Monarquía. No menos el gran Pombal o Malesherbes, que será al final de su vida abogado del rey en su proceso por las fuerzas

revolucionarias. O el Capellán Mayor napolitano, que no sólo ejercía como árbitro en la censura, sino que tenía a su cargo enormes competencias y funciones, como la supervisión de la capilla palatina, los castillos y fortalezas y las fuerzas armadas que se encontraban al servicio del rey, debiendo reunir la persona nombrada “conocida capacidad”⁷⁹⁰. Todas ellas eran personas cercanas a sus respectivos monarcas, cuyos intereses debían vigilar.

Y, finalmente, también existen coincidencia sobre los censores. En Francia existía para mediados de siglo un cuerpo fijo de censores públicamente conocidos, especializados en los diferentes temas que podían abordar los manuscritos. En España, Curiel propone un sistema similar con el objetivo de terminar con las dificultades que tenía para llevar correctamente el trabajo que tenía encomendado. Y en todos ellos se observa una continuidad temporal de quienes revisan los manuscritos, más allá de los cambios legislativos y de los nombres de los organismos de los que dependieran. Veíamos como en Portugal los revisores reales son los mismos individuos con independencia del nombre y composición del órgano encargado formalmente de la censura. En Nápoles, Francesco Conforti, que durante la república jacobina fue nombrado Ministro del Interior y como tal, defensor del sistema de censura previa, había ejercido como censor regio entre 1770 y 1791⁷⁹¹ y en España, personajes como Pérez Pastor o Villarroel destacan antes, durante y después del sistema de Curiel.

A la pregunta de si es posible hablar de un incremento generalizado del control de los Estados sobre los impresos, la respuesta, según lo expuesto, parece obvia. El proceso no fue homogéneo en todos los países europeos. La libertad de imprenta de los ingleses o los permisos tácitos franceses nos muestran que no fue un proceso lineal, y que es preciso analizar pormenorizadamente cada país para atender debidamente a las particularidades nacionales. Pero la referencia que el propio Pombal hace a las reformas que se hacían en “otras Cortes iluminadas y pías de Europa”, evidencia que existía la conciencia general de la necesidad de reformar la censura previa incrementando el poder de los gobiernos y en detrimento del clero, y que estas medias

⁷⁹⁰ NAPOLI, *op. cit.* (nota 786), págs. 55-57.

⁷⁹¹ *Ibidem*, pág. 85.

formaban parte del proyecto ilustrado para conseguir el *progreso*, sin que por ello se pusiera en duda la religiosidad de sus promotores, pues entre los criterios a observar en todos y cada uno de los casos el respeto a la fe era el primer elemento a tener en cuenta.

En definitiva, todos los países de nuestro entorno, cada uno con sus coyunturas específicas, responden de manera similar a los mismos problemas. Las monarquías europeas compartían preocupación por controlar la circulación de ideas a través de las prensas y lo expresan poniendo en marcha instituciones emanadas directamente de autoridad que otorgaran licencia de impresión sólo a aquellas obras que encajaran en el programa gubernamental del momento o que, al menos, no atacaran ni a la Iglesia, ni a la Corona ni a sus reconocidos privilegios. Se llamara Tribunal de Palacio, Consejo de Castilla, Superintendencia de Imprenta o Cámara de Santa Clara, son órganos controlados directamente por el Rey, cuyos miembros dependen de su gracia para progresar y cuya legitimidad de origen no reside en el Papa, un soberano extranjero, sino en su propio monarca. Pero, también en todos los territorios, es preciso contar con miembros la propia República de las Letras como examinadores objetivos que evaluaran el contenido de la multitud de manuscritos presentados, aunque la decisión final siempre estuviera en manos de un órgano institucional. Y ahí es donde la participación de clérigos se afronta como algo natural, sin que esto supusiera una contradicción con el incremento del poder absoluto del rey, un proceso general y más amplio del que la censura libraria era sólo un apéndice más.

6. Conclusiones

La innovación que supuso la imprenta, en tanto que permitía la reproducción mecánica de un texto en múltiples ejemplares, originó nuevos hábitos, pero también nuevas situaciones y nuevos peligros. Los monarcas absolutos supieron ver el poder que podía alcanzar la información y llegaron a la conclusión de que lo más satisfactorio sería utilizarla en beneficio propio.

La posibilidad de intervención real estaba justificada por la consideración de la imprenta como una regalía, según la cual sólo el Rey podía autorizar la impresión de manuscritos. Es así como el poder ejercía su control sobre la intelectualidad. Así, la censura previa, ejercida desde órganos gubernamentales, especialmente desde el Consejo de Castilla, se convirtió en la pieza angular de un sistema que, más allá de su eficacia, era el filtro más importante del que disponía el monarca para asegurar que lo que se publica y circula por sus reinos se atenía a los intereses de su gobierno. No podemos creer que el sistema funcionaba como un perfecto engranaje, pero el hecho es que se intentó.

El establecimiento de un examen previo a la impresión implicaba que miembros de la República de las Letras debía examinar los originales de sus colegas, formando así unas redes entre autores y censores, que muchas veces eran también autores de sus propias obras. Esas redes estaban directamente conectadas con el poder, ya que recibían la comisión de censurar las obras del principal órgano colegiado del sistema administrativo español, el Consejo de Castilla. Partíamos de esta hipótesis para estudiar las relaciones entre autores y censores y analizar el progresivo aumento del control por parte de la Monarquía, que reduce el número de actores implicados en la censura, lo que supone, en la práctica, un incremento de su injerencia.

Para ello hemos considerado cada libro como el resultado de la acción sucesiva de un conjunto variable de actores que incluía a los autores, editores, impresores, censores y

demás personajes necesarios para la materialización de la obra. A través de los impresos, o más concretamente de cómo se produce la intervención de los individuos sobre ellos, podemos estudiar la creación de redes de poder en el ámbito cultural, destacando de manera especial la formada en torno a la censura previa.

Para abordar esta primera red de poder hemos contemplado, desde una perspectiva política, cómo el poder va tomando conciencia de la importancia de lo escrito como configurador de una naciente opinión pública que se construye a partir de los impresos. Al controlar lo que se imprime a través de la censura previa, se controla lo que piensa. Es el motivo por el que los monarcas y sus ministros aumentan su preocupación por el control de la imprenta, lo que se traslada a un aumento de la legislación sobre la materia.

Una de las características del siglo XVIII es, precisamente, la desmedida proliferación de leyes emanadas del monarca o de sus ministros, que tenía su origen en la práctica acumulativa que pervivió durante toda la Edad Moderna. El número de pragmáticas, reales órdenes y demás disposiciones nos indica no sólo el interés de los Borbones por convertir la censura previa en un mecanismo eficaz, sino también de la dificultad que se encontraban sus agentes para hacer cumplir su voluntad, con independencia de la dureza de las penas que se establecieran por contravenirla.

A lo largo de todo el siglo, y a pesar del elevado número de leyes, se observa una continuidad del sistema heredado, sólo perfeccionado en los aspectos considerados más débiles. Las reformas legislativas de los Borbones, encaminadas a incrementar el control real sobre la imprenta, no fueron sistemáticas. Avances y retrocesos nos apuntan que se trataba más de intentos fallidos y adaptaciones a la realidad que de un proyecto claro y continuado.

Seguramente el personaje clave en las reformas de la censura fue Juan Curiel, el Juez de Imprentas que más conflictos provocó por el ejercicio de su cargo. Su intento de profesionalizar la censura fracasó por la oposición de los impresores, a cuyo cargo corría el pago de los censores, pero también de miembros de la alta Administración,

como el Secretario Ricardo Wall, que veían como un simple Consejero de Castilla acaparaba en sus manos una capacidad de influencia que podía perjudicar sus intereses. Su sistema, que por otra parte tenía poco de innovador, a penas sobre vivió a la llegada de Carlos III, que pronto introdujo medidas liberizadoras para el sector sin contar con su Juez delegado, y que terminó, a la postre, con su proyecto. El retorno al sistema tradicional no fue, sin embargo, completo. El nuevo monarca, y los Jueces por él designados, modificaron su estrategia y derivaron el peso de la censura a los órganos culturales de la Corte, que fueron encargados de la supervisión especializada de los manuscritos. Las Reales Academias jugaron, en este punto, un papel crucial en el control de los mensajes y los discursos.

Si Curiel es quien destaca por méritos propios en la primera mitad del siglo, Campomanes lo hará en la segunda. Desde la atalaya que suponía la fiscalía del Consejo de Castilla, su intervención indirecta en los asuntos de censura libraria merece un estudio específico. Sus informes en materia de imprenta fueron determinantes en los cambios legislativos introducidos por Carlos III y su mano está detrás de los casos más polémicos de la época. Pero su influencia va más allá. Además de las aprobaciones que él firma personalmente, no podemos olvidar que había sido uno de los designados por Curiel como censor profesional, la principal institución cultural de la Corte encargada de la censura, la Real Academia de la Historia, estuvo presidida por él justo en el momento en el que ésta recibe la mayor carga de censuras; y el Colegio de Abogados, sobre el que recae una parte importante de la supervisión de obras legales, estuvo también bajo la esfera de influencia del ilustrado conde.

La muerte de Carlos III en 1788 produjo un doble sentimiento: por un lado la profunda tristeza por la pérdida de un soberano que gozaba del cariño del pueblo, el rey ilustrado y reformador; por el otro, cierto alivio entre aquellos que pretendían profundizar en las reformas y que veían en el nuevo monarca la oportunidad perfecta para sustituir personas y tendencias. Sin embargo, el tiempo demostraría a esta elite ilustrada su error. Ante los acontecimientos revolucionarios en el país vecino, las autoridades, encabezadas por el viejo ministro Floridablanca y preocupadas por el posible contagio, establecieron un cerco para evitar la penetración de ideas

revolucionarias, lo que provocó una reedición del antiguo pacto entre el Altar y el Trono, al devolver a la Inquisición un papel en la vigilancia de la transmisión de ideas que había ido mermando a lo largo del siglo.

El último intento de reformar el sistema de control fue, precisamente, el más profundo y tenía como objetivo último hacer innecesaria la intervención de la Inquisición con posterioridad a la impresión. Godoy intentó transformar completamente el viejo Juzgado de Imprentas, creando una nueva institución que quedara fuera del control del Consejo de Castilla, de manera que no se pudiera repetir un caso como el de Campomanes. La creación de este nuevo Juzgado, cuyo desempeño requería exclusividad, indica la importancia concedida por el favorito al control de los impresos. La designación de una persona de su confianza, como lo era el sacerdote Melón, y que el grueso de las censuras se redujera a un grupo reducido de personas, entre las que destacan Moratín y Estala, son pruebas del incremento de control de la imprenta por parte de la Monarquía que se alcanzó en vísperas de un estallido bélico que supuso el final del sistema de censura tal y como se conocía, pues la proliferación de impresos durante la Guerra de la Independencia anticipaba lo que más tarde sancionarían las Cortes: la necesidad de la libertad de prensa y de opinión, única opción que podía evitar que nadie volviera a monopolizar la opinión pública. El paréntesis absolutista de Fernando VII no es más que el último coletazo de un sistema de control que ya había sido derrotado.

De manera general, podemos decir que no existió, a pesar de las apariencias, la intención de centralizar la censura previa en el Consejo de Castilla. El objetivo era controlar la circulación de ideas para que sólo trascendieran aquellas que encajaban con el proyecto gubernamental del momento. La asignación genérica de la aprobación de manuscritos al Consejo de Castilla, que desde la Nueva Planta había extendido su influencia a los demás reinos peninsulares, con la excepción de Navarra, permitía este control. Sin embargo, y de manera paralela, era necesario que quienes examinaran los originales presentados ante el Consejo fueran sujetos de “probada calidad”. La especialización de la censura no se buscó sólo por el nombramiento de censores, sino que se incluyó la necesidad de la aprobación de organismos especializados en cada

tema, como la Junta de Comercio y Moneda o el Protomedicato, cada uno para temas de su competencia.

De la misma manera, no hemos encontrado, entre los ilustrados españoles, ideas revolucionarias en materia de imprenta. Ninguno expresa, al menos abiertamente, su oposición a un sistema que, a pesar de sus defectos, era aceptado por todos los actores como necesario. Las reformas irán encaminadas no hacia una libertad de prensa que a principios del siglo XVIII ni si quiera se plantea, sino hacia un reforzamiento de la autoridad regia, que implicaba la progresiva eliminación de la autonomía de la que había disfrutado hasta ese momento particulares y corporaciones, sobre todo de carácter eclesiástico. Lejos de considerar esto como un ataque a la Iglesia, la Monarquía estableció desde el primer momento como el principal elemento a proteger la Fe católica, pero su protección ya no correspondía a clérigos de oficio, sino a oficiales reales, fueran o no miembros de la Iglesia. Es, como hemos visto, el triunfo del regalismo.

Más allá de las personas que destacaran en uno y otro momento, el protagonismo indiscutible en la censura previa de libros corresponde al Consejo Real de Castilla. Él es el que recibe de manera general la delegación del rey para supervisar los manuscritos antes de conceder la licencia de impresión, y aunque el Juzgado de Imprentas, que salvo un breve periodo de tiempo a finales del periodo dependía de él, tuvo en determinados momentos una proyección mayor, siempre prevaleció su juicio. La incorporación de otras instituciones y organismos al sistema de censura previa no se ve como una restricción de sus atribuciones, sino como parte de la búsqueda de especialización en los agentes comisionados.

Dentro del Consejo de Castilla, los personajes más importantes fueron, sin lugar a dudas, los Jueces de Imprentas. Sucesores de aquellos “encomenderos” del XVII, como su nombre indica, parte de su actividad consistía en el conocimiento de procesos entre los actores del libro. Pero más importante para nosotros era su labor como distribuidores de censuras. Ellos son quienes determinaban si una obra precisaba censura y quién debía ser el examinador de la misma, lo que les posiciona como las

personas que tomaban las decisiones clave en el proceso. Es más, parece que su juicio es el que prevalecía en el Consejo que, no lo olvidemos, es quien otorgaba la licencia de impresión.

Del estudio de sus carreras se observa la importancia que los monarcas otorgaron al cargo. Todos los designados eran personas con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, normalmente vinculada la carrera judicial y con experiencia en los órganos periféricos de la Monarquía, como Chancillerías y Audiencias, aunque también en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En su mayor parte colegiales, no se caracterizan por una producción escrita significativa, si bien alguno de ellos mantuvo relación con célebres ilustrados, como Gregorio Mayans. Estaban, además, insertos en las principales instituciones culturales de corte ilustrado, siendo destacada su presencia y participación en la Reales Academias Española y de la Historia. Que destacaran por su formación jurídica y no porque fueran grandes literatos nos da una idea del perfil del puesto que desempeñaron: más que la calidad literaria, preocupaba el respeto de la legislación, donde la fe, a pesar de los discursos, ocupaba un segundo puesto por detrás de las regalías. Y esta comisión no se encargó a grandes aperturistas, sino más bien a personajes conservadores, apegados a la tradición, en cuyas vidas privadas se preocupaban, ante todo, por la consolidación de su categoría social a través de la obtención de títulos de Castilla, el establecimiento de mayorazgos o con la política matrimonial de sus hijos.

La acción de los Jueces de Imprenta, distribuyendo la revisión de los originales a la persona o institución que consideraran adecuada, creó, de manera inconsciente, una compleja red formada por autores y censores, a través de las cuales se ejerce, realmente, el control de la imprenta. Estas redes sirvieron a los autores para hacer valer sus influencias y conseguir la publicación de sus obras, pero también para impedir que vieran la luz obras poco convenientes o cuya *utilidad* no fuera evidente.

La formación y el comportamiento de los integrantes de las redes, eso sí, es considerablemente distinta en función del momento histórico que analicemos. A principios de siglo el número de actores es considerablemente mayor, gracias a la

posibilidad de que los autores presentaran junto a sus obras textos laudatorios a modo de aprobación. La red se convierte, así, en más compleja, pero mantiene un núcleo, el más fuertemente cohesionado y con mayor interacción mutua, que es el que realmente da fuerza al sistema. Para finales de siglo, en cambio, el número de censores se reduce drásticamente al concentrar en pocas manos la mayor parte de la producción, complementando el empleo de actores individuales con la implicación de las instituciones culturales de la Corte, cuyos dictámenes eran aprobados por la corporación reunida en pleno. Es en pocos individuos donde se concentra la actividad, aunque en términos absolutos su papel es igual de determinante que el que jugaron los censores más destacados de las primeras décadas del siglo.

En general, ese protagonismo dentro de las redes correspondió a censores que eran, a su vez, autores. Esta doble naturaleza les sitúa en un lugar central dentro de las redes, siendo los enlaces entre grupos de censores y autores, recibiendo y realizando censuras para colegas suyos. Si los Jueces de Imprenta a penas destacaron por su producción impresa, los principales censores del siglo, como Torres Villarroel, Pérez Pastor, Estala o Fernández de Moratín, se sitúan, al mismo tiempo, entre los autores más destacados de su momento. Sólo la excepción del jesuita Carlos de la Reguera rompe esta regla, más volcado en su actividad como docente del Colegio Imperial y académico de la Española que en la publicación de sus textos.

La recreación de las redes reales nos ha permitido, por ejemplo, comprobar el grado de incumplimiento de la legislación. A pesar de los esfuerzos encomiables de Curiel para hacer cumplir la legislación, durante la vigencia de su norma, que fijaba un cuerpo fijo de censores, se recurrió de manera sistemática a censores ajenos a dicho cuerpo. Esta estrategia no se puede explicar por una carga excesiva de trabajo, pues de hecho fue inferior a la que soportaron, por ejemplo, Reguera o la Real Academia de la Historia. Además, alguno de los censores oficiales no realizó ninguna aprobación, o no nos ha quedado constancia documental de que lo hiciera, lo que no ayuda a justificar que Curiel utilizase otros canales que los que él mismo había habilitado. Es la prueba más evidente de que las leyes expresaban el objetivo ideal de los gobernantes, pero que en la práctica diaria debían adaptarse a los hechos y realidades concretas.

La elección de censores, en cualquier caso, no siguió siempre los mismos patrones, pues de modo general, se aprecia un cambio fundamental con el avance de los años. Si durante la primera mitad los censores suelen ser profesores, académicos y religiosos que son, a su vez, autores; en la segunda prima la elección de instituciones culturales que de manera colegiada aprueban o desaprueban los textos presentados. El cambio de estrategia forma parte, como se ha ido señalando, no sólo del incremento del control por parte de los gobernantes, sino del éxito en su objetivo de especialización y profesionalización, puesto que sin suponer un coste añadido, que sí tenía el cuerpo de censores de Curiel, consiguen que sean expertos no cuestionados por su formación y valores los que determinen las obras que merecen ser impresas, lo que redundará en un incremento del prestigio del sistema de control. No significa que las críticas desaparezcan, pero sí que las filias y fobias personales dejan de ser el elemento que prevalezca en las redes de censores.

La visión a lo largo de un periodo largo de tiempo ha permitido comprobar, también, la existencia de una continuidad de los censores con independencia de los cambios legislativos o de la sustitución de unos Jueces de Imprenta por otros. Las personas que se emplean por parte del poder para la revisión de los manuscritos son los mismos. Así ocurre, por citar sólo a la figura más destacada, con Torres Villarroel, que aparece como autor y censor en los tres periodos que hemos analizado. Esta permanencia de los censores, que denota, al fin y al cabo, una confianza en sus capacidades con independencia de la persona que hiciera el encargo, es un elemento que comparten, al menos para el siglo XVIII, España, Portugal y Nápoles, y también en Francia, cuya continuidad es más evidente por el proceso de nombramiento de los censores regios y su publicación anual en el *Almanach*.

El Consejo debía velar, según recogían todas las leyes desde época de los Reyes Católicos, por que sólo se imprimieran aquellas obras cuyo contenido fuera útil y que no atentara contra la fe católica, las buenas costumbres de los reinos y las regalías de Su Majestad. Aunque estos tres principios son los más repetidos en las disposiciones en vigor, lo cierto es que el verdadero objetivo era el de la utilidad. La dificultad surge

entonces al determinar qué se considera útil y qué no. Los interesados son los primeros que en sus memoriales de petición justifican el provecho que de la impresión de sus obras podrá obtener el público lector, la mayoría de las veces desterrando la ignorancia en algún tema concreta o satisfaciendo la demanda del público lector. Tanto en las indicaciones a los censores como en las censuras conservadas, se fue imponiendo la voluntad de permitir toda obra que no fuera peligrosa aunque su contenido no supusiera un gran avance o su estructura no fuera la más adecuada. Así opina, por ejemplo, Jovellanos, ya que se considera que una censura demasiado restrictiva podría disuadir a los autores de dar a la imprenta sus textos, privando así al público de obras que sí fueran necesarias para la correcta instrucción de los súbditos del monarca católico.

Aunque la utilidad fuera el principio que subyace en el discurso de los censores, también se prestó atención a otros aspectos, como la calidad de la obra, la estructura, la idoneidad del título, las fuentes empleadas, o cuestiones menos objetivas como el gusto estético del original. Los censores examinaban con detenimiento el contenido, rozando la labor de los revisores de imprenta y señalando, cuando era necesario, hasta los más pequeños errores. Los censores son conscientes de la importancia de su labor, y así lo reflejan en los legajos que conservamos.

Pero el trabajo que realizaban los censores no era, en absoluto, una tarea grata. A la dificultad que suponía leer los originales manuscritos para valorar la utilidad de su contenido, había que añadir el desprestigio que suponía de cara a los solicitantes y al público en general, visión negativa que ha llegado a nuestros días y cuya crítica fundamental fue, siempre, cuestionar la idoneidad de los designados. Su labor, además no fue todo lo discreta que se esperaba. Hemos visto cómo los autores protestan poniendo nombre y apellidos a sus censores, solicitando otros nuevos o presentando ellos mismos las aprobaciones, estrategias que no siempre alcanzaron su objetivo. A la ingratitud general, que señalaba a los censores como responsables de las dificultades para que una obra viera la luz, habría que añadir la ausencia de remuneración, pues la entrega de un ejemplar como pago por su trabajo no compensaba el esfuerzo que requería.

Por férreo que fuera el control, siempre ha existido la forma de escapar de él. Esto ocurre en el siglo XVIII, donde se ha podido ver el escaso nivel de cumplimiento legislativo. Sin tener en cuenta las ediciones clandestinas, el uso de pies de imprenta falsos para burlar la ley o, en las traducciones, la ocultación del autor original para evitar su prohibición sistemática, la articulación de redes de influencia donde autores y censores se relacionan para aprobarse obras mutuamente, con la anuencia de los Jueces de Imprenta, les habilitó una vía legal para publicar sus obras con todos los permisos. La importancia de estar bien relacionados implicaba, también, que los autores excluidos podían tener más dificultades o, al menos, no gozar de las facilidades de los intelectuales orgánicos.

Debemos desterrar la imagen de la censura como elemento negativo. Si bien es cierto que su propia existencia suponía un importante freno a la creación, también lo es que los controles sirvieron para agudizar el ingenio. La forma de burlar la censura no se basó exclusivamente en las relaciones entre autores y censores o entre autores y autoridades, sino también en la ocultación de los elementos más conflictivos. Además, los organismos que sobre todo a partir de la segunda mitad participan de manera activa y determinante en la censura previa gubernativa no fueron lugares de prohibición de libros, basándose en oscuros intereses, sino que se constituyeron como espacios de reflexión y debate sobre las cuestiones religiosas y políticas que se planteaban en los textos, buscando, como materialización de los ideales ilustrados, el progreso del pueblo a través de la impresión de libros útiles.

Otra cuestión que también ha sido ampliamente abordada es el papel de la Iglesia dentro del aparato de control de la Monarquía. A pesar de que han corrido ríos de tinta sobre la actuación de la Inquisición como órgano represor, ésta no fue el arma más eficaz. En el siglo XVIII el Santo Oficio ve limitadas, progresivamente, sus competencias, sobre todo en lo referente a la censura previa. A pesar de ello, la historiografía se ha preocupado, prioritariamente y salvo honrosas excepciones, de este asunto, dejando a un lado la censura gubernativa, que fue la que realmente incidió sobre la creación escrita en el Setecientos.

Que la Inquisición perdiera protagonismo en la censura previa no equivale a que lo perdiera la Iglesia. Además de las competencias que su jerarquía tenía sobre impresos religiosos, el Consejo de Castilla encargó, de manera mayoritaria, la defensa de las regalías y de los intereses del rey a súbditos que, además, eran clérigos. Aunque la tendencia sea un incremento de los censores “civiles”, en la primera mitad del siglo XVIII la mayor parte de los censores de impresos son miembros de la Iglesia. Más aún. Hemos visto que, al menos para los eclesiásticos, existe una clara relación entre el ejercicio de la censura libraria y el desempeño de responsabilidades dentro de la jerarquía eclesiástica (obispos, superiores, priores...). No se puede establecer una relación de causa-efecto con los ascensos dentro del *cursus honorum*, pero sí que tenían una cierta capacitación por su formación, en la mayor parte de las veces universitaria, y por el desempeño de responsabilidades dentro de sus respectivos ámbitos.

La Iglesia, a través de sus miembros más destacados, seguía participando, desde una posición predominante, del control sobre lo impreso. En algunas ocasiones, como hemos visto con la Compañía de Jesús, llegaba a rozar el monopolio sobre temas tan sensibles como los escritos de astrología y astronomía. No se puede extrapolar el caso de Carlos de la Reguera y los demás jesuitas implicados, pero el caso analizado es indicativo de dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la importancia ya conocida de la Compañía de Jesús, también en el campo de la censura. Por otra, las numerosas quejas de los contemporáneos realizan sobre la escasa formación de los censores no siempre se ajusta a la realidad. Carlos de la Reguera era profesor de matemáticas en el Colegio Imperial y Cosmógrafo Mayor, pero no es el único profesor de colegios o de universidad que hemos encontrado. Que la formación podría haber sido mejor no hay duda, pero también es cierto que desde el gobierno se buscó emplear para algo tan prioritario para ellos como era la censura a las personas que más preparadas estuvieran para ello, lo que llevó, a su vez, a que existiese una cierta especialización de censores.

Muchas son las personas que, en algún momento de su vida, firman una censura, aunque salvo para el paréntesis de Curiel no existiese la figura del censor profesional, por lo que todos lo hacían como servicio a la Monarquía. Para algunos, es su única participación en el sistema. Otros lo complementan a su actividad como autores. Los menos lo hacen de manera continua. Los primeros son los menos influyentes dentro de un sistema tan complejo. Hemos visto que, en definitiva, existe un reducido grupo de personas, un número de censores efectivos más pequeño del que cabría esperar y que es por el que el Rey ejerce su control.

Así pues, el siglo XVIII, no supone grandes cambios en lo referente a la censura. La censura previa, ejercida desde la esfera gubernativa, que no por ello exclusivamente civil, es el mecanismo más eficaz para el control de lo impreso de que dispone el Rey. La pieza angular del sistema es el Juez de Imprenta, que concede las necesarias licencias, pero son los censores los dientes que ponen en marcha el engranaje de la censura.

El trabajo de los censores, aún manteniendo a lo largo del siglo ciertos elementos de continuidad, como el desprestigio social, sí experimentó una evolución. La publicación de los dictámenes juntos con las obras motivaba que su contenido fuera más literario y elogioso con autor y texto. La prohibición de su impresión, en cambio, dio paso a un documento puramente administrativo, pensado para circular manuscrito por las covachuelas, sin más pretensión que la de valorar si el original presentado era digno de publicación.

En definitiva, todos los pasos dados a lo largo del siglo XVIII fueron encaminados a incrementar el control sobre la imprenta. No hubo un único plan, lineal y continuado, sino que se alternaron proyectos diferentes, que compartiendo el objetivo, variaban en la forma de alcanzarlo. Pero más allá de las reformas legales, el funcionamiento de la censura se articuló en torno a un grupo reducido de personas que escribían sus obras y censuraban las de otros, formando unas redes de censura por las que el control de la Monarquía sobre los impresos pudo llevarse a la práctica. El sistema no fue perfecto y más allá de la teoría la práctica siguió sus propios caminos. Efectiva o

no, la censura fue un hecho a lo largo de la Ilustración de cuya necesidad no dudan los implicados, y sólo analizando el comportamiento de autores y censores podemos saber si se logró el objetivo.

7. Conclusions

L'imprimerie comme innovation, tout en permettant la reproduction mécanique d'un texte en plusieurs exemplaires, a conduit à de nouvelles habitudes, mais aussi de nouvelles situations et de nouveaux dangers. Les monarques absolus avaient pu constater la puissance que l'information pouvait avoir et ils ont conclu que le plus satisfaisante serait de l'utiliser à leur avantage.

La possibilité d'une intervention réelle était justifiée pour considérer la presse comme un régal, selon lequel seul le roi pouvait autoriser l'impression des manuscrits. C'est ainsi que le pouvoir exerçait son contrôle sur les intellectuels. Ainsi, la censure préalable exercée par des organes gouvernementaux, surtout dès le Conseil de Castille, est devenue la pierre angulaire d'un système qu'au-delà de son efficacité, a été le plus important filtre à disposition du monarque afin de veiller que, tout ce qui est publié et distribué par leurs royaumes soit en ligne avec les intérêts de son gouvernement. Nous ne pouvons pas croire que le système fonctionnait comme un engrenage parfait, mais le fait est qu'on l'a essayé.

La mise en place d'un test avant d'imprimer signifiait que les membres de la République des Lettres devaient examiner les originaux de leurs collègues, formant un réseau entre les auteurs et les censeurs, qui étaient souvent aussi les auteurs de leurs propres œuvres. Ces réseaux ont été directement connectés au pouvoir, car ils ont reçu la commission de censurer les œuvres du système collégial principal de l'administration espagnole, le Conseil de Castille. On a parti de cette hypothèse pour étudier les rapports entre les auteurs et les censeurs et d'analyser l'augmentation progressive du contrôle exercé par la Monarchie, ce qui réduit le nombre d'acteurs impliqués dans la censure, ce qui signifie, dans la pratique, une augmentation de sa ingérence.

Donc, nous avons vu chaque livre comme le résultat de l'action successive d'un ensemble variable d'acteurs qui incluait les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les censeurs et d'autres personnages nécessaires pour la réalisation des travaux. À travers l'impression, ou plus précisément de la façon dont l'intervention se produit sur les individus, nous pouvons étudier la création de réseaux de pouvoir dans le domaine culturel, spécialement en soulignant celle qui est formée autour de la censure préalable.

Pour résoudre ce premier réseau de pouvoir qu'on a vu, à partir d'un point de vue politique, comment le pouvoir prends conscience de l'importance de l'écriture comme configurateur d'une naissant opinion publique qui est construite à partir de l'impression. En contrôlant ce qui est imprimé par la censure, on contrôle ce qu'on pense. C'est la raison pour laquelle les monarques et leurs ministres augmentaient leur préoccupation pour le contrôle de l'impression, ce qui se traduit par l'augmentation de la législation sur le sujet.

L'une des caractéristiques du XVIIIème siècle est justement la prolifération excessive des lois promulguées par le monarque ou par ses ministres, qui a son origine dans la pratique cumulative qui avait persisté tout au long de l'Âge Moderne. Le nombre des réels ordres pragmatiques et d'autres dispositions indique non seulement l'intérêt des Bourbons de convertir la censure préalable de manière efficace, mais aussi la difficulté qui avaient ses représentants pour imposer sa volonté, quelle que soit la sévérité de sanctions qui ont été mis en place pour la transgresser.

Tout au long du siècle, malgré le grand nombre de lois, il y a une continuité de l'ancien système hérité, mis au point uniquement dans les aspects considérés comme faibles. Les réformes législatives des Bourbons, visant à accroître le contrôle royal sur la presse, ne sont pas systématiques. Progrès et reculs nous suggèrent que c'était plus de tentatives infructueuses et des adaptations à la réalité que d'un projet clair et permanent.

Certes, le personnage clé de la réforme de la censure était Juan Curiel, Juge de Presses que plus de conflits a provoqué par l'exercice de ses fonctions. Sa tentative de professionnaliser la censure a échoué en raison de l'opposition des imprimantes, qui avait en charge l'exécution du paiement de des censeurs, mais aussi des membres de la haute direction comme le Secrétaire Ricardo Wall, qui en tant que simple Conseiller de Castilla, monopolisait dans ses mains une capacité d'influence qui pourrait nuire à leurs intérêts. Son système, qui était par ailleurs peu innovante, à peine survécu à l'arrivée de Carlos III, qui bientôt a introduit des mesures de libéralisation dans le secteur sans leur Juge délégué, et qui a terminé, à la fin, avec son projet. Le retour au système traditionnel n'était pas encore terminé. Le nouveau monarque, et les juges nommés par lui, ont changé leur stratégie et ont dérivé le poids de la censure aux organes culturelles de la Cour, qui étaient responsables de la surveillance spécialisée de manuscrits. Les Académies Royales ont joué, en ce moment, un rôle capital dans le contrôle des messages et des discours.

Curiel est celui qui se dresse sur ses propres mérites durant la première moitié du siècle, et Campomanes sera mis en relief dans la seconde. Au plus haut où on trouvait la surveillance du Conseil de Castille, son intervention indirecte dans les affaires de censure des livres mérite une étude spécifique. Leurs rapports, dans l'imprimerie, ont été déterminants dans les changements législatifs introduits par Carlos III et sa main se cache derrière des affaires les plus controversées de l'époque. Mais son influence va plus loin. Outre les approbations qu'il a personnellement signé, nous ne pouvons pas oublier qu'il avait été un censeur nommé par Curiel en tant que professionnel. La principale institution culturelle de la Cour responsable de la censure, l'Académie Royale de l'Histoire, a été présidée par lui au moment même où elle reçoit le plus haute charge de censure; et l'Association du Barreau, qui porte une partie importante de la supervision du travail juridique, était également sous le domaine d'influence du comte illustré.

La mort de Charles III en 1788 a entraîné un double sentiment: d'abord la profonde tristesse face à la perte d'un souverain qui jouissait de l'amour du peuple, le roi illustré et réformateur, d'autre part, un certain soulagement chez ceux qui ont cherché à

approfondir dans les réformes et qui découvriraient dans le nouveau monarque l'occasion idéale pour remplacer des personnes et des tendances. Cependant, le temps aurait montré à cette élite illustrée son erreur. Compte tenu des événements révolutionnaires dans le pays voisin, les autorités, dirigées par l'ancien ministre Floridablanca et préoccupées par une éventuelle contamination, ont mis en place une clôture pour empêcher la pénétration des idées révolutionnaires, provoquant une réédition de l'ancienne alliance entre l'Autel et le Trône, pour renvoyer à l'Inquisition un rôle dans le contrôle de la transmission des idées qui avait diminué au cours du siècle.

La dernière tentative de réformer le système de contrôle était, justement, le plus profond et devait, comme le but ultime, de rendre inutile l'intervention de l'Inquisition après l'impression. Godoy a essayé de transformer complètement l'ancienne Cour de l'imprimerie, en créant une nouvelle institution pour éviter le contrôle du Conseil de Castille afin qu'on ne pourrait pas répéter un cas comme celui de Campomanes. La création de cette nouvelle juridiction, dont la performance exigeait d'exclusivité, montrait l'importance accordée par le favori au contrôle des écrits. La nomination d'une personne de confiance, comme c'était le prêtre Melón, et que la majorité des censures étaient réduites à un petit groupe de personnes, parmi lesquelles nous trouvons Moratín et Estala, est la preuve d'un plus grand contrôle de l'impression par la Monarchie qui a été atteinte à la veille du déclenchement d'une guerre qui a marqué la fin du système de censure tel qu'on le connais, car la prolifération des imprimés pendant la guerre d'indépendance avait prévu ce que, plus tard, sanctionneraient les tribunaux: la nécessité de la liberté de la presse et d'opinion, la seule option qui pourrait empêcher qu'on insistait à monopoliser l'opinion publique. La parenthèse absolutiste de Fernando VII n'est que le dernier souffle d'un système de contrôle qui avait déjà été vaincu.

En règle générale, on peut dire qu'on n'a eu jamais, en dépit des apparences, l'intention de centraliser la censure préalable au sein du Conseil de Castille. L'objectif était de contrôler la circulation des idées afin qu'uniquement transcendaient celles qui correspondaient en ce moment au projet du gouvernement. L'attribution générique de

l'approbation de manuscrits au Conseil de Castille, que dès la Nueva Planta avait étendu son influence à d'autres royaumes péninsulaires, à l'exception de Navarre, permettait ce contrôle. Toutefois, en parallèle, il était nécessaire que ceux qui devaient examiner les originaux présentés au Conseil fussent des personnes de « qualité éprouvée ». La spécialisation de la censure non seulement constituait la nomination de censeurs, mais comprenait la nécessité de l'adoption d'institutions spécialisées dans chaque sujet, comme la Chambre de commerce et Monnaie ou le Protomedicato, chacun pour les questions relevant de sa compétence.

De même, nous n'avons pas trouvé, parmi les illustrés espagnols, des idées révolutionnaires dans le domaine de l'impression. Aucun n'a pas exprimé, au moins ouvertement, son opposition à un système qui, malgré ses défauts, a été accepté par toutes les parties comme nécessaire. Les réformes ne viseront pas vers une presse libre, qui, dans le début du XVIII^e siècle ne se questionnait même pas, mais à un renforcement de l'autorité royale, impliquant l'élimination progressive de l'autonomie dont elle avait joui jusque-là les individus et les sociétés, notamment de caractère ecclésiastique. Loin de considérer cela comme une attaque contre l'Eglise, la Monarchie établit dès le départ, comme l'élément principal à protéger, la foi catholique. Mais leur protection ne correspondait au clergé d'office, mais à d'officiers royaux, étant ou pas des membres de l'Eglise. C'est, comme nous l'avons vu, le triomphe du regalismo (« royalty » : derechos de autor o de inventor ?).

Au-delà des personnes distinguées à différents moments, une nette dominance dans la censure préalable des livres correspond au Conseil Royal de Castille. Il est celui qui reçoit, en général, la délégation du roi pour surveiller les manuscrits avant d'accorder l'autorisation d'imprimer, et bien que la Cour d'impression, qu'à l'exception d'une brève durée à la fin de la période dépendait de lui et prenant dans de certains moments, une plus grande projection, son point de vue a toujours prévalu. L'incorporation des autres institutions et agences au système de censure préalable, n'est pas considérée comme une restriction de leurs compétences, mais comme faisant partie de la recherche d'une spécialisation dans les agents mandatés.

Au sein du Conseil de Castille, des gens importants étaient, sans aucun doute, les Juges d'Imprimantes. Successeurs de ces «commissionnaires» du XVIII^{ème} siècle, comme son nom l'indique, son activité a été, en partie, réalisée sur la connaissance des processus entre les acteurs du livre. Mais le plus important pour nous était son travail en tant que distributeurs de censure. Ils étaient ceux qui décidaient si un travail requérait de la censure et qui devrait être l'examineur de la même, ce qui les positionnait comme les personnes qui prenaient les décisions clés dans le processus. Par ailleurs, il semble que son opinion est celle qui a prévalu au sein du Conseil qui, ne l'oublions pas, est celui qui accordait la licence d'impression.

L'étude de leurs carrières montre l'importance que les monarques attribuaient à leur poste. Tous ceux qui ont été nommés étaient des personnes ayant une longue carrière derrière eux, le plus souvent liée à l'appareil judiciaire et expérimentés dans les organes périphériques de la Monarchie, comme des Chancelleries et des Audiencias, mais aussi dans la Salle des maires de Maison et de Cour. Ils étaient la plupart des collégiaux et ils ne sont pas caractérisés par une production importante par écrit, même si certains d'entre eux se sont rapprochés à des célèbres illustrés, comme Gregorio Mayans. Ils ont été également insérés dans les principales institutions culturelles de coupe illustrée, étant mis en évidence leur présence et leur participation à l'Académie Royale Espagnole et de l'Histoire. Le fait qu'ils se démarquaient par leur formation juridique et non pas parce qu'ils étaient de grands écrivains, on offre une idée du profil de la position qu'ils ont jouée: le respect de la législation inquiétait plus que la qualité littéraire, où la foi, malgré les discours, occupait la deuxième place derrière les privilèges. Cette commission n'est pas chargée à de grands partisans du progrès, mais plus tôt à des individus modérés, attachés à la tradition, dont sa vie privée est concernée, surtout, par la consolidation de leur statut social à travers l'obtention de titres de Castilla, par l'établissements de majorats ou par la politique de mariage de leurs enfants.

L'action des Juges de l'Imprimerie, au temps qu'ils distribuaient l'examen des textes originaux à la personne ou l'institution qui ont jugé appropriée, créa, inconsciemment, un réseau complexe formé par les auteurs et les censeurs, à travers lequel il est exercé,

vraiment, le contrôle de l'impression. Ces réseaux ont aidé les auteurs à affirmer leur influence et obtenir la publication de ses œuvres, mais aussi pour les empêcher d'accoucher des œuvres incommodes ou dont l'*utilité* n'est pas évidente.

La formation et le comportement des membres du réseau, cependant, il paraît très différent selon le moment historique que nous analysons. Au début du siècle, le nombre d'acteurs est beaucoup plus élevé, en raison de la possibilité que les auteurs présentaient, avec ses œuvres, des textes élogieux comme agrément. Le réseau devient ainsi plus complexe, mais conserve un noyau, le plus cohérente et d'une plus forte interaction entre eux, ce qui donne vraiment la force du système. À la fin du siècle, cependant, le nombre de capteurs est considérablement réduite en raison de regrouper, dans quelques mains, la plupart de la production, en complément de l'emploi des différents acteurs avec la participation des institutions culturelles de la Cour, dont les opinions ont été approuvés par le Corporation entièrement assemblé. Il est dans quelques individus où l'activité est concentrée, même si, en termes absolus, leur rôle est également essentiel que celui qui ont joué les censeurs, les plus signalés, des premières décennies du siècle.

En général, ce rôle, au sein des réseaux, correspondait à des censeurs qui ont été comptabilisées comme des auteurs. Cette double nature les met dans une position centrale au sein du réseau, en faisant les liens entre les groupes de censeurs et d'auteurs, en recevant et en faisant des censures pour leur collègues. Si les Juges d'imprimantes à peine étaient réputés pour leur production d'impression, les principales censeurs du siècle, comme Torres Villarroel, Pastor Perez, Estala ou Fernández de Moratín, sont placés, au même temps, parmi les auteurs les plus éminents de son époque. Seule l'exception du jésuite Carlos de la Reguera enfreint cette règle, plus concentré sur son travail, en tant que professeur à l'Imperial Collège et érudit de l'Espagnole, que dans la publication de leurs textes.

La récréation des réseaux royales nous a permis, par exemple, vérifier le degré de violation de la législation. Malgré les efforts louables de Curiel pour faire respecter la loi, pendant la durée de ses principes qui ont fixé un corps fixe de censeurs, on a utilisé, d'une façon systématique, à des censeurs en dehors de ce corps. Cette

stratégie ne peut pas être expliquée par une charge de travail excessive, car, en fait, elle était inférieure à celle-ci subie, par exemple, par Reguera ou l'Académie royale d'Histoire. En outre, un des censeurs officiels n'a pas fait aucune approbation, ou nous n'avons pas eu des indices de le faire, ce qui n'aide pas à justifier que Curiel ait utilisé d'autres canaux que lui-même avait permis. C'est la preuve la plus évidente que les lois exprimaient le but idéal des dirigeants, mais dans la pratique quotidienne devaient être adaptées aux faits et réalités.

Le choix des censeurs, en tout cas n'a pas toujours suivi la même tendance, puisque, en général, on apprécie un changement fondamental au fil des ans.

Si au cours de la première moitié du siècle les censeurs sont généralement les enseignants, les universitaires et religieux qui sont, à leur tour, des auteurs, dans la deuxième moitié on donne plus d'importance à la choix d'institutions culturelles que, de façon collégiale, approuvent ou de désapprouvent les textes présentés. Le changement de stratégie fait partie, comme on l'a fait remarquer, non seulement d'un contrôle accru par les gouverneurs, mais le succès de son objectif de spécialisation et de professionnalisation, car sans impliquer un coût supplémentaire, comme ce qu'il avait le corps de censeurs Curiel, on atteint des experts incontestés dans leur formation et des valeurs et ils sont ceux qui vont déterminer les œuvres qui méritent d'être imprimées, ce qui entraîne une augmentation du prestige du système de contrôle. Cela ne signifie pas que les critiques disparaissent, mais que les filiations et les phobies personnelles ne sont plus l'élément dominant dans les réseaux de censeurs.

La vue sur une longue période de temps a permis vérifier, aussi, qu'il y a une continuité des censeurs en dehors des modifications législatives ou le remplacement de certains Juges d'Imprimantes par d'autres. Les personnes qui sont utilisées pour le pouvoir afin d'examiner les manuscrits sont les mêmes. Il s'agit, pour ne citer que la plus grande figure, de Torres Villarroel, qui apparaît comme auteur et censeur dans les trois périodes que nous avons analysé. Cette permanence des censeurs, ce qui dénote finalement, une confiance en leurs capacités indépendamment de la personne qui fait la demande, est un élément qui partagent au moins dans le XVIIIème siècle, l'Espagne,

le Portugal et Naples, et aussi en France, dont la continuité est aussi évident par le processus de nomination des censeurs royaux et la publication annuelle dans *l'Almanach*.

Le Conseil devrait veiller, comme l'indiquaient toutes les lois du temps des Rois Catholiques, à l'impression, uniquement, des œuvres dont le contenu était utile et ne posaient pas de risque à la foi catholique, les mœurs de tous les royaumes, et les privilèges de Sa Majesté. Bien que ces trois principes étaient les plus répétés dans les ordonnances en vigueur, ce qui est certain c'est que le but principal était l'utilité. La difficulté est alors de déterminer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Les parties intéressées sont les premiers que, dans leurs mémoires de demande, justifient le profit que le public peut obtenir de leurs travaux d'impression ; le plus souvent bannissant l'ignorance dans un thème concrétée ou répondant à la demande du public lecteur. Tant dans les renseignements aux censeurs que dans les censures conservées, s'imposait la volonté de permettre toute œuvre qui ne fût pas dangereuse, même si son contenu ne supposait pas de progression ou sa structure n'était pas la plus appropriée. C'est la même opinion, par exemple, de Jovellanos, car on considère qu'une censure trop restrictive pourrait dissuader les auteurs de donner leurs textes à imprimer, privant ainsi le public d'œuvres si nécessaires pour l'instruction correcte des sujets du monarque catholique.

Bien que l'utilité est le principe à la base du discours des censeurs, également on a prêté attention à d'autres aspects tels que la qualité du travail, la structure, la pertinence du titre, les sources utilisées, ou des questions moins objectives comme le goût esthétique de l'original. Les censeurs examinaient soigneusement le contenu, frôlant le travail des réviseurs de l'imprimerie et même indiquant, le cas échéant, les plus petites erreurs. Les censeurs sont conscients de l'importance de leur travail, et cela se reflète dans les dossiers que nous entretenons.

Mais le travail qu'ils ont fait les censeurs n'était, pas du tout, tâche agréable. À la difficulté de lecture des manuscrits originaux pour évaluer l'utilité de son contenu, il a fallu ajouter la perte de prestige qui impliquait face aux demandeurs et au public en

général, vision négative qui est venue jusqu'à nos jours et dont la critique fondamentale a toujours été de questionner la pertinence des candidats.

Son travail, en plus, n'a pas eu la discrétion prévue. Nous avons vu comment les auteurs protestaient en mettant le nom complet à leurs censeurs, en demandant d'autres nouveaux ou en soumettant les approbations eux-mêmes, des stratégies qui n'ont pas toujours atteint leur cible. À l'ingratitude générale, qui signalait aux censeurs comme les responsables des difficultés pour qu'une œuvre voyait le jour, il fallait ajouter l'absence de rémunération, car la livraison d'un exemplaire à titre de paiement, ne valait pas l'effort requis.

Même si le contrôle était serré, il a toujours existé un moyen d'y échapper. Cela se produit dans le XVIII^{ème} siècle, où on a pu apprécier le faible niveau de respect de la législation. Sans avoir compte des éditions clandestines, à l'aide de fausses empreintes d'impression afin de contourner la loi, ou dans les traductions, l'occultation de l'auteur original pour éviter l'interdiction systématique, l'articulation des réseaux d'influence où les auteurs et les censeurs sont liés pour s'approuver les oeuvres les uns aux autres, avec le consentement des Juges de l'Imprimerie, leur a permis d'une manière légale de publier leurs travaux avec tous les permis. L'importance d'être bien lié a également laissé entendre que les auteurs exclus pourraient avoir plus de difficultés, ou, au moins, ne pas profiter des bénéfices des intellectuels organiques.

Nous devons bannir l'image de la censure comme un élément négatif. Certes, son existence même posait un obstacle majeur à la création et il est également vrai que les contrôles seraient bien utiles d'accentuer l'ingéniosité. La façon de contourner la censure n'était pas fondée exclusivement sur la relation entre les auteurs et les censeurs ou entre les auteurs et les autorités, mais aussi dans la dissimulation des éléments les plus controversés. En outre, les organismes, en particulier dans la seconde moitié du siècle, qui participaient activement et avec détermination de la censure préalable du gouvernement, n'étaient pas des endroits visant à interdire des livres basés sur des intérêts obscurs, mais ils se sont constitués comme des espaces de réflexion et de débat sur les questions religieuses et politiques soulevées dans les

textes, recherchant, comme l'incarnation des idéaux des Lumières, le progrès des gens à travers l'impression de livres utiles.

Une autre question qui a également été largement abordée était le rôle de l'église dans l'appareil de contrôle de la Monarchie. Bien que beaucoup a été écrit sur le comportement de l'Inquisition comme un organe répressif, celle n'était pas l'arme la plus efficace. Au XVIII^{ème} siècle le Saint Office voit limitées, peu à peu, leurs compétences, notamment en matière de censure préalable. Malgré tout, l'historiographie s'est préoccupée, en priorité et, sauf exception, de cette question, laissant de côté la censure gouvernementale, celle qui a tombé sur la création écrite au XVIII^{ème} siècle.

Le fait que l'Inquisition perdit d'être le protagoniste dans la censure préalable, n'a pas signifié que l'Eglise l'eût aussi perdu. Outre les compétences que leur hiérarchie entraînait sur la littérature religieuse, le Conseil de Castille commanda, à la majorité, la défense des droits et les intérêts du roi à des sujets qui étaient également membres du clergé. Bien que la tendance montrait une augmentation de censeurs "civils" dans la première moitié du XVIII^{ème} siècle, la plupart des censeurs d'imprimés étaient des membres de l'Eglise. Par ailleurs. Nous avons vu que, du moins pour les ecclésiastiques, il y a une relation claire entre l'exercice de la censure des livres et l'accomplissement des responsabilités au sein de la hiérarchie de l'Eglise (des évêques, des supérieurs, des prieurs ...). On ne peut pas établir une relation de cause à effet avec les promotions au sein des *cursus honorum*, mais, certes, ils ont eu un entraînement pour leur formation, la plupart du temps universitaire, et pour l'exercice des responsabilités dans leurs domaines respectifs.

L'Eglise, à travers ses principaux membres, continuait à s'impliquer, depuis une position dominante, sur le contrôle de l'impression. Parfois, comme nous l'avons vu avec la Compagnie de Jésus, on arrivait à monopoliser des questions sensibles comme les écrits de l'astrologie et de l'astronomie. On ne peut pas extrapoler le cas de Carlos de Reguera et les autres jésuites impliqués, mais le cas analysé nous montre deux

questions clés. D'une part, l'importance déjà connue de la Compagnie de Jésus, également dans le domaine de la censure. De l'autre, les nombreuses plaintes que les contemporains réalisaient sur la faible formation des censeurs ne correspondaient pas toujours à la réalité. Carlos de la Reguera a été professeur de mathématiques à l'Imperial Collège et Cosmographe Majeur, mais il n'est pas le seul enseignant de collège ou d'université que nous avons trouvé. Cette formation aurait pu être meilleure sans doute, mais il est également vrai que dès le gouvernement on cherchait à utiliser, pour une chose si prioritaire pour eux tel que la censure, à des personnes qui étaient davantage préparées pour cela, ce qui a conduit, à son tour, à l'existence d'une certaine spécialisation des censeurs.

Nombreuses personnes, à un certain moment dans leur vie, ont signé une censure, cependant, à l'exception de la digression de Curiel, où la figure professionnelle du censeur n'existait pas, tout le monde faisait comme un service à la Monarchie. Pour certains, c'est leur seule participation dans le système. D'autres complètent leur activité en tant qu'auteurs. Une minorité le fait continuellement. Les premiers sont moins influents au sein de ce système complexe. Nous avons vu que, finalement, il y a un petit groupe de personnes, un certain nombre de capteurs efficaces, plus petit que prévu, et c'est à travers celui-là que le Roi exerçait son contrôle.

Ainsi, le XVIIIème siècle, ne présentait pas de grands changements concernant la censure. La censure préalable, exercée à partir de la sphère gouvernementale, par conséquent, pas exclusivement civile, était le mécanisme le plus efficace pour le contrôle de l'impression à la disposition du roi. La pierre angulaire de ce système est le Juge d'Imprimerie, qui accorde les licences nécessaires, mais les censeurs sont les dents qui mettent en mouvement le mécanisme de la censure.

Le travail des censeurs, tout en conservant pendant le siècle certains éléments de continuité, comme la perte de prestige social, avait expérimenté une évolution. La publication des jugements joints aux œuvres donnait lieu à un contenu plus littéraire et élogieux avec l'auteur et le texte. L'interdiction de leur impression, cependant, a donné lieu à un document purement administratif, destiné à circuler manuscrit par les

bureaux, sans d'autre intention que celle de mettre en valeur si l'original présenté était digne de publication.

En fin de compte, tous les pas au long du XVIIIème siècle ont été orientés à augmenter le contrôle sur la presse. Il n'a pas eu un plan unique, linéaire et continu, mais des différents projets alternés qui, en partageant le même objectif, variaient dans la manière d'y parvenir. Mais au-delà des réformes juridiques, l'opération de censure a été articulée autour d'un petit groupe de gens qui écrivaient leurs œuvres et censuraient celles des autres, formant de cette manière des réseaux de censure de sorte que le contrôle de la Monarchie sur l'impression pouvait être mis en œuvre. Le système n'était pas parfait et au-delà de la théorie, la pratique suivit leurs propres chemins. Efficace ou non, la censure était un fait à l'époque de l'Illustration dont la nécessité n'était pas en doute par ceux qui sont impliqués, et seulement en analysant le comportement des auteurs et des censeurs peut-on savoir si l'objectif a été atteint.

8. Bibliografía

8.1. Documentación de archivo

- Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN)
 - Consejos*. Serie "Impresiones": Legajos 5528-5574.
 - Consejos*. Serie "Impresiones": Legajos 50.627-50.678.
 - Consejos*. Serie "Imprenta y sus agregados": Legajos 11275-11311.
 - Estado*. Legajos 3249 y 3248. Dedicatorias.
 - Inquisición*. Serie "Calificaciones y censuras": Legajo 4474.
- Biblioteca Nacional de Madrid
- Archives Nationales. Paris [Francia]
- Bibliothèque Historique de la Ville de Paris [Francia]
- Bibliothèque National de France. Paris [Francia]
- Archivio di Stato di Napoli. Nápoles (Delegazione della Real Giurisdizione) [Italia]
- Archivio di Stato di Parma. Parma [Italia]
- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Roma [Italia]
- Biblioteca Nacional de Portugal. Lisboa [Portugal]

8.2. Fuentes impresas de fondo antiguo

- Diario de los literatos de España*, Barcelona, Puvil Libros, 1987.
- EGUIZABAL, José Eugenio, *Apuntes para una historia de la legislación española sobre imprenta desde el año 1480 al presente*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1879.
- ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro, *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos y fórmulas de las cédulas, provisiones y certificaciones*, Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijo de Marín, 1796.
- FLOREZ ESTRADA, Álvaro, *En defensa de las Cortes, con dos apendices, uno sobre la libertad de imprenta y otro en defensa de los derechos de reunión y de asociación*, Miguel Castellote editor, Madrid, 1973. Edición facsimil.

JOVELLANOS, Gaspar Melchor, *Obras completas. Tomo XII. Escritos sobre literatura*, Edición crítica, prólogo y notas de Elena de Lorenzo Álvarez, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Ayuntamiento de Gijón y KRK Ediciones, 2009.

Kalendario Manual y Guía de Forasteros de Madrid, Madrid, Antonio Sanz/Imprenta Real, 1744-1837.

MELLOTÉE, Paul, *Histoire Économique de l'Imprimerie. Tome I. L'imprimerie sous l'ancien Régime, 1439-1789*, Paris, Hachette, 1905.

Novísima Recopilación de la leyes de España, dividida en doce libros, mandada formar por el Señor Don Carlos IV, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1992 (Edición facsimil), Libro 8º, títulos XV, XVI, XVII y XVIII

SECO Y SHELLY, *La pluma y la espada: apuntes para un diccionario de militares escritores*, Madrid, J. J. de las Heras, 1877.

SEMPERE Y GUARINOS, Juan, *Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III*, Madrid, 1969. 6 tomos

8.3. Bibliografía moderna

ABELLÁN, Manuel L., *Diálogos Hispánicos, N° 5. Censura y literaturas peninsulares*, Ámsterdam, Rodopi, 1987.

ABRAIMOVICI, Jean-Christophe, *Le livre interdit, De Théophile de Viau à Saade*, Paris, Ed. Payot et Rivages, 1996.

ABREU, Márcia, "La libertad y el error: la acción de la censura luso-brasileña (1769-1834)", en *Cultura Escrita & Sociedad*, nº 7 (2008), págs. 118-141.

AGUILAR PIÑAL, Francisco, *La prensa española en el siglo XVIII: diarios, revistas y pronósticos*, Madrid, CSIC, 1978.

- "Moratín y Cadalso", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 135-150.
- *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981-2001. 10 tomos.
- *Periodismo e Ilustración en España*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990.

- "Las « guías de forasteros de Madrid » en el siglo XVIII", *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, XXXV, 451-473 (1995), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, págs. 451-473.
- *Historia literaria de España en el siglo XVIII*, Madrid, Trotta, 1996.

ALBERTOS, José Luis, *La libertad de prensa*, Madrid, Consorcio de Diarios Españoles, 1977.

ALCALÁ GALVE, Ángel, *Literatura y ciencia ante la Inquisición española*, Madrid, Laberinto, 2001.

ALCARAZ GÓMEZ, José Francisco, *Jesuitas y reformismo. El padre Francisco de Rávago*, Valencia, Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, 1995.

ALMEIDA RODRIGUES, Graça, *Breve Histórica da Censura Literária em Portugal*, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1980.

ALVARADO PLANAS, Javier, *Justicia, libertad y censura en la Edad Moderna*, Madrid, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, 2007.

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, LOPEZ, François y URZAINQUI, Inmaculada, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995.

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín y CHECA BELTRÁN, José (Coords.), *El siglo que llaman ilustrado: homenaje a Francisco Aguilar Piñal*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín (Ed.), *Espacios de la comunicación literaria*, Madrid, CSIC, 2002.

- *Se hicieron literatos para ser políticos. Cultura y política en la España de Carlos IV y Fernando VII*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2004.

ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, *La novela del siglo XVIII*, Madrid, Júcar, 1991.

- *Ilustración y Neoclasicismo en las letras españolas*, Madrid, Síntesis, 2005.
- "El hombre de letras español en el siglo XVIII", en *Actas del Congreso Internacional sobre "Carlos III y la Ilustración"*, Tomo III, Educación y pensamiento, págs. 415-426.
- *Los hombres de letras en la España del siglo XVIII: apóstoles y arribistas*, Castalia, Madrid, 2006.

ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, M^a Jesús, "La Cámara de Castilla: secretarías de Gracia y Justicia. Problemas archivísticos e investigación histórica" en SCHOLZ, Johannes-Michael (Ed.), *El tercer poder: hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en España*, Frankfurt, Klostermann, 1992, págs. 1-32.

ÁLVAREZ DE MIRANDA, Pedro, "Nicolás Fernández de Moratín en la Sociedad Económica Matritense", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 221-246.

- *Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760)*, Real Academia Española, Madrid, 1992.

ÁLVAREZ-VALDÉS VALDÉS, Manuel, *Jovellanos: enigmas y certezas*, Gijón, Fundación Alvargonzález y Fundación Foro Jovellanos, 2002.

AMEZÚA MAYO, Agustín, *Cómo se hacía un libro en nuestro siglo Siglo de Oro*, Madrid, Imprenta de Editorial Magisterio Español, 1946.

ANDRÉS ESCAPA, Pablo, DELGADO PASCUAL, Elena, DOMINGO MALVADI, Arantxa y RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, José Luis, "El original de imprenta" en RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, págs. 29-64.

ANDÚJAR CASTILLO, Francisco, "Vender cargos y honores, un recurso extraordinario para la financiación de la corte de Felipe V", en CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis (Coords.) *Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortiz*, Granada, Universidad de Granada, 2008, Vol. 3, págs. 89-110.

ARANDA PÉREZ, Francisco José (Coord.), *Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005.

ARENCIBIA DE TORRES, Juan, *Diccionario biográfico de literatos, científicos y artistas militares españoles*, Madrid, E y P Libros Antiguos, 2001.

ASTIGARRAGA, Jesús, LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria y URKÍA, José María, *Ilustración, ilustraciones*, San Sebastián, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Instituto Internacional Xavier María de Munibe de Estudios del Siglo XVIII, 2009. 2 volúmenes.

ARTOLA, Miguel, "El camino a la libertad de imprenta, 1808-1810" en MOYA ESPÍ, Carlos; RODRÍGUEZ DE ZÚÑIGA, Luis e IGLESIAS, Carmen (Coords.), *Homenaje a José*

Antonio Maravall, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, Tomo I, págs. 214-217.

BADINTER, Elisabeth, *Les "Remontrances" de Malesherbes, 1771-1775*, Paris, Union Générale d'Éditions, 1978.

BARBIER, Frédéric, *Livre et révolution: colloque organisé par l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (CNRS)*, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1988.

- *Les bibliothèques au XVIIIe siècle*, Bordeaux, Société des Bibliophiles de Guyenne, 1989.
- *Historia del libro*, Madrid, Alianza, 2005.
- *Est-Ouest : Transferts et réception dans le monde du livre en Europe (XVIIe-Xxe siècles)*, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005.

BARBIER, Frédéric (Dir.), *Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle*, Paris Bibliothèques-Presses Universitaires de France, Paris, 2008.

BARBIER, Frédéric; JURATIC, Sabine y VARRY, Dominique (Dirs.), *L'Europe et le livre. Réseaux et pratiques du négoce de libraire XVIe-XIXe siècles*, Paris, Klincksieck, 1996.

BELTRÁN, Francisco, *El libro y la imprenta. Con máximas, aforismos, noticias y disertaciones de diversos autores antiguos y modernos y 143 viñetas*, Madrid, Francisco Beltrán, 1931.

BENITO ORTEGA, Vanesa, "El Consejo de Castilla y el contro de las impresiones en el siglo XVIII. La documentación del Archivo Histórico Nacional", *Cuadernos de Historia Moderna*, 36 (2011), págs. 179-193.

BERMEJO CABRERO, José Luis, *Estudios sobre la administración central española (siglos XVII y XVIII)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982.

- *Aspectos jurídicos e institucionales del antiguo régimen en España*, Barcelona, El Albir, 1985.
- *Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1985.

BIRN, Raymond, *La Censure royale des livres dans la France des Lumières*, Paris, Odile Jacob, 2007.

BLANGONNET, Catherine, "Recherches sur les censeurs royaux et leur place dans la société au temps de Malesherbes (1750-1763)", *École Nationale des Chartes. Positions de Thèse*, París, 1975, págs. 15-22.

BONETTI, Mario (dir.), *Storia dell'editoria italiana*, Roma, Gazzeta del Libro, 1959.

BRAIDA, Ludovica, *La guide del tempo. Produzione, contenuti e forme degli almanacchi piemontesi nel Settecento*, Turín, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1989.

- "L'affermazione della censura di Stato in Piemonte. Dall'editto del 1648 alle Costituzioni per l'Università del 1772", *Rivista Storica Italiana*, CII (1990), págs. 717-795.
- *Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del libro nella Torino del Settecento*, Florencia, Olschki, 1995.
- "Editoria, committenza e censura a Torino tra gli ultimi decenni del '600 e il primo '700", en RICUPERATI, Guiseppe (Coord.), *Storia di Torino*, Vol. IV, Turín, Einaudi, 2002, págs. 1093-1125.
- "Editoria e circolazione del libro (1740-1792)", en *Storia di Torino*, Vol. V, Turín Einaudi, 2002, págs. 267-341.
- "Censure et circulation du livre en Italie au XVIIIe siècle", *Journal of Modern European History*, vol 3 (2005) nº 1, págs. 81-98.

BOLUFER PERUGA, Mónica, "Espectadoras y lectoras: representaciones e influencia del público femenino en la prensa del siglo XVIII", *Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII*, nº 5 (1995), págs. 23-58.

- "Escritura femenina y publicación en el siglo XVIII: de la expresión personal a la "República de las Letras"", en SÁNCHEZ MUÑOZ, Cristina, ORTEGA LÓPEZ, Margarita y VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia (Eds.), *Género y ciudadanía: revisiones desde el ámbito privado: XII Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid e Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 1999, págs. 197-223.
- "Pedagogía y moral en el Siglo de las Luces: las escritoras francesas y su recepción en España", *Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de Alicante*, nº 20 (2002), págs. 251-292.

- "Mujeres de Letras: Escritoras y lectoras del siglo XVIII", en BALLESTEROS GARCÍA, Rosa María y ESCUDERO GALLEGOS, Carlota (Coord.), *Feminismos en las dos orillas*, Málaga, Universidad de Málaga, 2007, págs. 113-142.
- *La vida y la escritura en el siglo XVIII*. Inés Joyes, Valencia, Universidad de Valencia, 2008.

BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, *Del escribano a la biblioteca: la civilización escrita europea en la alta edad moderna (siglos XV-XVII)*, Madrid, Síntesis, 1992.

- "Para qué imprimir: de autores, público, impresores y manuscritos en el Siglo de Oro", *Cuaderno de Historia Moderna*, nº 18 (1997), págs. 31-50.
- *Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y XVII*, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 1999.
- *Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro*, Madrid, Marcial Pons, 2001.
- "Impresos y manuscritos en un siglo de comedias", en ALCALÁ-ZAMORA, José y BELENGUER, Ernest (coords.), *Calderón de la Barca y la España del Barroco*. Vol. 2, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, págs. 415-446.
- "Memoria de la lectura y escritura de las mujeres del Siglo de Oro", en MORANT, Isabel (Coord.), *Historia de las mujeres en España y América Latina*, Vol. 2, Madrid, Cátedra, 2005, págs. 169-192.
- *Papeles y opinión. Políticas de publicación en el Siglo de Oro*, Madrid, CSIC, 2008.
- *"Dásele licencia y privilegio". Don Quijote y la aprobación de libros en el Siglo de Oro*, Madrid, Akal, 2012.

BOUZA ÁLVAREZ, Fernando y RICO MANRIQUE, Francisco, "Digo que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha", *Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America*, Vol. 29 (2009), págs. 13-30.

BURGOS RINCON, "La edición española en el siglo XVIII. Un balance historiográfico", *Hispania*, 55:190 (mayo/agosto 1995), págs. 589-628.

CANTOS CASENAVE, Marieta, DURAN LOPEZ, Fernando y ROMERO FERRER, Alberto (eds), *La guerra de la pluma. Estudios sobre la prensa de Cádiz en el tiempo de las*

Cortes (1810-1814), Tomo Primero: *Imprentas, Literatura y Periodismo*, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006.

CARDIM, Pedro, "Entre textos y discursos. La historiografía y el poder del lenguaje", *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 17 (1996), Universidad Complutense de Madrid, págs. 123-149.

CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo [et al], prólogo Luis Miguel Enciso Recio, Coordinadora general Isabel Enciso Alonso-Muñumer, *Carlos III y su época: la monarquía ilustrada*, Barcelona, Carroggio, 2003.

CARREIRA, Laureano, *O teatro e a censura em Portugal na segunda metade do século XVIII*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988. Tesis doctoral defendida en 1980.

CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria (Eds.), *La pluma, la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

CÁTEDRA, Pedro y LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, *La memoria de los libros*, Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004.

CAYUELA, Anne *Le paratexte au Siècle d'Or. Prose romanesque, livres et lecteurs en Espagne au XVIIe siècle*, Génova, Droz, 1996.

CHARTIER, Roger, *Lectures et lecteurs dans la France d'Ancien Régime*, Le Seuil, 1987. Traducción en español: *Lecturas y lectores en la Francia del Antiguo Régimen*, México, Instituto Mora, 1994.

- *Les Origines culturelles de la Révolution française*, París, Éditions du Seuil, 1990. Traducción en español: *Los orígenes culturales de la Revolución francesa*, Barcelona, Gedisa, 1995.
- *L'Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre S. XIV et S. XVIII*, Aix-en-Provence, Alinea, 1992. Traducción en español: *El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII*, Barcelona, Gedisa, 1994.
- *El mundo como representación: Estudios sobre historia cultural*, Gedisa, Barcelona, 1992.
- *Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna*, Madrid, Alianza, 1993.

- *Malesherbes. Mémoires sur la librairie. Mémoires sur la liberté de la presse*, París, Imprimerie Nationale, 1994.
- *Sociedad y escritura en la Edad moderna. La cultura como apropiación*, México, Instituto Mora, 1995.
- "Prácticas de sociabilidad. Salones y espacio público en el siglo XVIII", *Studia Historica. Historia Moderna* (Salamanca), XIX (1998), págs. 67-83.
- *Entre poder y placer: cultura escrita y literatura en la Edad Moderna*, Madrid, Cátedra, 2000.
- "La pluma, el taller y la voz. Entre crítica textual e historia cultural", en RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, págs. 243-257.
- *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII: los orígenes culturales de la Revolución Francesa*, Barcelona, Gedisa, 2003.
- *Inscribir y borrar: cultura escrita y literatura (siglos XI-XVIII)*, Buenos Aires, Katz, 2006.

CHARTIER, Roger y CAVALLO, Guglielmo, *Historia de la lectura en el mundo occidental*, Madrid, Santillana, 2001.

CHIOSI, Elvira, "Chiesa e editoria a Napoli nel Settecento", en RAO, Ana Maria (Dir.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 5-7 dicembre 1996*, Nápoles, Liguori, 1998, págs. 311-331.

CERIOTTI, Luca y DALLASTA, Federica, *Il Posto de Caifa. L'Inquisizione a Parma negli anni dei Farnese*, Milán, Franco Agnelli, 2008.

CONDE NARANJO, Esteban, *El Argos de la Monarquía. La policía del libro en la España ilustrada (1750-1834)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006.

COVINO, Luca, "Stampa e burocrazia in una supplica degli stampatori napoletani del 1786", en RAO, Ana Maria (Dir.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 5-7 dicembre 1996*, Nápoles, Liguori, 1998, págs. 427-475.

DE LA CRUZ REDONDO, Alba y PAMPLIEGA PEDREIRA, Víctor, "Los muros del poder: intelectuales y poder políticos en tiempos de Carlos IV", en DE LORENZO ÁLVAREZ, Elena (Coord.), *La época de Carlos IV (1788-1808)*, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, págs. 339-350.

DARNTON, Robert, *The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie 1775-1800*, Cambridge, Harvard University Press, 1979. Traducción al español: *El negocio de la Ilustración. Historia editorial de la Encyclopédie, 1775-1800*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

- *The Literary Underground of the Old Regime*, Cambridge, Harvard University Press, 1982.
- *Édition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle*, Paris, Gallimard, 1991. Traducción en español: *Edición y subversión: literatura clandestina en el Antiguo Régimen*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- *Gens de lettres, gens du livre*, Paris, Editions Odile Jacob, 1992.
- *The Forbidden Best-Sellers of Prerevolutionary France*, Nueva York, W.W. Norton, 1995. Traducción en español: *Los best sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.
- *The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769-1787*, Nueva York, W.W. Norton, 1995.
- *El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

DARNTON, Robert y ROCHE, Daniel (Eds.), *Revolution in Print: the Press in France 1775-1800*, Berkeley, The University of California Press, 1989.

DEACON, Philip, "Cadalso, censor del Consejo de Castilla", *Revista de Literatura*, 38:75/76 (julio-diciembre 1970), págs. 167-174.

- "García de la Huerta, Raquel y el motín de Madrid de 1766", *Boletín de la Real Academia Española*, LVI (1976), págs. 369-387.
- "La libertad de expresión en España en el período precedente a la Revolución francesa", *Estudios de Historia social*, nº 36-37 (enero-junio 1986), págs. 17-21.

DEDIEU, Jean-Pierre y CONTRERAS, Jaime, "Geografía de la Inquisición Española: la formación de los distritos (1470-1820)", *Hispania: Revista española de historia*, Vol. 40, nº 144 (1980), págs. 37-94.

DEDIEU, Jean Pierre (Coord.), *L'Espagne, l'État, les Lumières : mélanges en l'honneur de Didier Ozanam*, Casa de Velázquez, Madrid, 2004.

DEDIEU, Jean-Pierre, "Un instrumento para la historia social: la base de datos de Ozanam", *Cuadernos de Historia Moderna*, Universidad Complutense de Madrid, 24 (2000), págs. 186-187.

- "Amistad, familia, patria... y rey. Las bases de la vida política en la Monarquía española de los siglos XVII y XVIII", en LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria y LUIS, Jean-Philippe (coord.), *La naissance de la politique en Espagne. Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, nº 35-1 (2005), págs. 27-50.

DEFOURNEAUX, Marcelin, *Inquisición y censura de libros en la España del Siglo XVIII*, Madrid, Taurus, 1973.

DELPiano, Patrizia, "La censura ecclesiastica nel Settecento", *Cromohs*, 14 (2009), págs. 1-6. URL: http://www.cromohs.unifi.it/14_2009/delpiano_censura.html [Consultado 23/11/2011]

DIEZ GONZALEZ, Fernando, *Prensa agraria en la España de la Ilustración: El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)*, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980.

DOMENECH, Jaques, *Censure, autocensure et art d'écrire. De l'Antiquité à nos jours*, Bruselas, Ed. Complexe, 2005.

DOMERGUE, Lucienne, "La Academia de la Historia y la censura en tiempos de las Luces", en RUGG, Evelyn y GORDON, Alan M. (Coord.), *Actas del Sexto Congreso Internacional de Hispanistas*, Toronto, Universidad de Toronto, 1980, págs. 211-214.

- "Nicolás de Moratín censor", *Revista de literatura*, 42:84 (julio-diciembre 1980), págs. 247-260.
- *Tres calas en la censura dieciochesca: (Cadalso, Rousseau, prensa periódica)*, Toulouse, Institut d'Études Hispaniques et Hispano-Américaines, 1981.
- *Censure et lumières dans l'Espagne de Charles III*, París, Editions du Centre National de la Recherche Scientifiques, 1982.

- *Le livre en Espagne au temps de la Révolution Française*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1984.
- *La censure des livres en Espagne à la fin de l'Ancien Régime*, Madrid, Casa de Velázquez, 1996.

DUCREUX, Marie-Elizabeth y SVATOS, Martin, *Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois 1650-1850*, Leipzig, Universidad de Leipzig, 2005.

DUFOUR, Gérard, *Lumières et "Ilustración" en Espagne sous les règnes de Charles III et de Charles IV (1759-1808)*, París, Ellipses, 2006.

EBERSOLE, Alva V., *Santos Díez González: censor*, Valencia, Albatros Hispanofilia, 1982.

EGEA MARCOS, M^a Dolores y RUIZ ABELLAN, M^a Concepción, *El libro en Murcia en el siglo XVIII*, Madrid, Academia Alfonso X el Sabio, Cuadernos Bibliográficos, 9, 1985.

EGIDO, Teófanos, "El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII", en GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo (Dir.), *Historia de la Iglesia en España*, Vol. 4. *La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, págs. 746-792.

- "Los anti-ilustrados españoles" en MATE, Reyes y NIEWÖHNER, Friedrich (Coords.), *La Ilustración en España y Alemania*, Barcelona, Anthtopos, 1989, págs. 95-120.
- "La tesis del bachiller Ochoa y el regalismo universitario", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín y CHECA BELTRÁN, José (Coord.), *El siglo que llaman ilustrado: homenaje a Francisco Aguilar Piñal*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, págs. 297-306.
- "Campomanes, regalismo y jesuitas", en MATEOS DORADO, Dolores (Coord.), *Campomanes: doscientos años después*, Oviedo, Universidad de Oviedo e Insituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 2003, págs. 343-360.

EISENSTEIN, Elizabeth L., *The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in Early-Modern Europe*, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1979.

ENCISO RECIO, Luis Miguel, *Nipho y el periodismo del siglo XVIII*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956.

- *La Gaceta de Madrid y El Mercurio histórico y político, 1756-1781*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1957.

- *Libro y cultura en la España ilustrada*, Madrid, Instituto de España, 2002.
- *Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.
- "Las Cortes de Cádiz y la cultura: Los compases finales de la cultura ilustrada", en ESCUDERO, José Antonio, *Cortes y Constitución de Cádiz: 200 años*, Volumen 1, Espasa-Calpe, 2011, págs. 517-578.

ESCOLAR, Hipólito, *Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994.

ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, *Los secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724)*, (4 vols.), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1976.

- *Administración y Estado en la España Moderna*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999.

ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio (Dir.), *Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años*, Madrid, Espasa y Fundación Rafael del Pino, 2011. 3 tomos.

ESTIVAL, Robert, *La statistique bibliographique de la France sous la Monarchie au XVIIIe siècle*, París y La Haya, Mouton&Co, 1965.

FAYARD, Janine, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, Siglo XXI de España, 1982.

FEBVRE, Lucien y MARTIN, Henri-Jean, *La aparición del libro*, México, FCE, Librería, 2005.

FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (Ed.), *Los Borbones: dinastía y memoria de nación en la España*, Casa Velázquez, Marcial Pons, Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ QUINTANILLA, Paloma, *La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII*, Madrid, Dirección General de Juventud, 1981.

FLOCON, Albert, *L'univers des livres. Étude historique des origines à la fin du XVIIIe siècle*, París, Hermann, 1961.

FOUCHÉ, Pascal, PÉCHOIN, Daniel y SCHUWER, Philippe (Dirs), Préface de Henri-Jean Martin, *Dictionnaire encyclopédique du Livre*, París, Cercle de la Librairie, 2002.

FRANCO RUBIO, Gloria A., "Formas de sociabilidad y estrategias de poder en la España del siglo XVIII", en MARTINEZ-RUIZ, Enrique (Coord.), *Poder y mentalidad en España e Iberoamérica*, Madrid, Ediciones Puertollano, 2000, págs. 389-416.

- "Los actores de la sociabilidad ilustrada en España: proyectos y realizaciones", en BERBESÍ DE SALAZAR, Ligia (Coord.), *Poder y mentalidad en España e Iberoamérica. Seminario hispano-venezolano*, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2001. págs. 157-186.
- *Militares ilustrados y prácticas de sociabilidad*, Alicante, Universidad, 2004.
- "Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales en la España del siglo XVIII", en SERRANO MARTIN, Eliseo (Coord.), *Felipe V y su tiempo: congreso internacional*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, Vol. 2, págs. 659-708.
- "Espacios de sociabilidad, espacios de poder: algunas reflexiones sobre la articulación de redes sociales en la España del siglo XVIII", en MARTÍNEZ-RUIZ, Enrique (Coord.), *Vínculos y sociabilidades en España e Iberoamérica: siglo XVI-XX*, Madrid, Ediciones Puertollano, 2005, págs. 59-110.
- "El ejercicio de poder en la España del siglo XVIII: Entre las prácticas culturales y las prácticas políticas", en LÓPEZ-CORDÓN, M^a Victoria y LUIS, Jean-Philippe (Coord.), *La naissance de la politique en Espagne. Dossier des Mélanges de la Casa de Velázquez*, n° 35-1 (2005), págs. 51-75.
- "Mujeres y espacios urbanos en la edad moderna: algunas consideraciones", en SEGURA GRAIÑO, Cristina, *Mujeres y espacios urbanos: homenaje a Christine de Pizan en el VI Centenario de la 1 edición de "La ciudad de las damas" 1405-2005*, Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna, 2007, págs. 119-156.
- "El salón parcialmente iluminado. Prejuicios, contradicciones y tópicos sobre las mujeres en los espacios de sociabilidad de la España ilustrada", en CARZOLIO DE ROSI, María; FERNÁNDEZ PRIETO, Rosa Isabel y LAGUNAS, Cecilia (Coords.), *El Antiguo Régimen: una mirada en dos mundos: España y América*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010, págs. 151-174.

FURET, François (Dir.), *Livre et société dans la France du XVIII^e siècle*, París y La Haya, Mouton, 1970.

GACTO FERNÁNDEZ, Enrique (Ed.), *Inquisición y censura: El acoso a la inteligencia en España*, Madrid, Dykinson, 2006.

GARCÍA CÁRCEL, Ricarco, *La leyenda negra: historia y opinión*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

GARCIA CUADRADO, Amparo, "Aproximación a los criterios legales en materia de imprenta durante la Edad Moderna en España", *Revista General de Información y Documentación*, 6, 2 (1996), págs. 125-187.

GARCÍA EJARQUE, Luis, *La Real Biblioteca de S. M. y su personal (1712-1836)*, Madrid, Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, 1997.

GARCÍA GARROSA, María Jesús, "Estorbos a la Ilustración: la novela extranjera ante la censura", en ASTIGARRAGA, Jesús, LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria y URKÍA, José María, *Ilustración, ilustraciones. Vol. I*, San Sebastián, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Instituto Internacional Xavier María de Munibe de Estudios del Siglo XVIII, 2009, págs. 369-388.

GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes, *El arma de la palabra: los militares españoles y la cultura escrita en el siglo XVIII (1700-1808)*, A Coruña, Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, 2002.

GARCÍA MARTÍN, Javier, *El juzgado de imprentas y la utilidad pública. Cuerpo y alma de una Monarquía vicarial*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2003.

GARROY, Juan Carlos; GUEREÑA, Jean-Louis, y ZAPATA, Mónica, *Figures de la censure dans les mondes hispaniques et hispano-américain*, París, Indigo, 2009.

GIL, Luis, *Censura en el mundo antiguo*, Madrid, Revista de Occidente, 1961.

GIL NOVALES, Alberto, *Las pequeñas atlántidas: decadencia y regeneración intelectual de España en los siglos XVIII y XIX*, Barcelona, Seix Barral, 1959.

GOMEZ DEL CAMPILLO, Miguel "El Rey, el Consejo de Castilla, el Juez de Imprentas y un estudiante chofista", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV, num. 53 (1947), págs. 17-56.

GÓMEZ GÓMEZ, Margarita, *Forma y expedición del documento en la Secretaría y del Despacho de Indias*, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1993.

- *Actores del documento: oficiales, archiveros y escribientes de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias durante el siglo XVIII*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.

GONZALEZ ALONSO, Benjamín, *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970.

GONZALEZ FERNANDEZ, Martín, *El idioma de la razón. Ilustración e Inquisición en Galicia (1700-1808)*, Vigo, Nigratrea, 2008.

GONZÁLEZ FUERTES, Manuel Amador, *La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002.

GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, *Estudio histórico sobre la censura gubernativa en España, 1800-1833*, Madrid, Tipografía de Archivos, 1934.

- "Joaquín Ibarra y el Juzgado de Imprentas", *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid*, XIII (1944), págs. 5-47.
- *El sevillano don Juan de Curiel, Juez de Imprentas*, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1945.

GUIBOVICH PEREZ, Pedro M., *Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754*, Sevilla, CSIC y Universidad de Sevilla, 2003.

GUIJARRO, Susana, "La historia cultural: tendencias y nuevas propuestas en la historiografía angloamericana", *SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita*, 3 (1996), Universidad de Alcalá de Henares, págs. 163-191.

GUTIERREZ TORRECILLA, Luis Miguel y BALLESTEROS TORRES, Pedro, *Cátedras y catedráticos de la universidad de Alcalá en el siglo XVIII*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1998.

HERR, Richard, "El principio de la virtud y la crítica política: los orígenes de la Monarquía constitucional en Francia y España", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 119-139.

HERRERA NAVARRO, Jerónimo, *Catálogo de autores teatrales del siglo XVIII*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1993.

HERRMANN-MASCARD, Nicole, *La censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime : 1750-1789*, París, Presses Universitaires de France, 1968.

INFANTES, Víctor, LOPEZ, François y BORREL, Jean-François (Dirs.), *Historia de la edición y de la lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003.

INFELISE, Mario, *L'Editoria veneziana nel'700*, Milano, Franco Agnelli, 1988.

- *Libros prohibidos. Una historia de la censura*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.

ITURBIDE DÍAZ, Javier, *Escribir e imprimir: el libro en el Reino de Navarra en el siglo XVIII*, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2007.

JUAREZ MEDINA, Antonio, *Las reediciones de obras de erudición de los siglos XVI y XVII durante el siglo XVIII español*, Frackfurt, Nueva York, París y Berna, Peter Lang, 1988.

KAMEN, Henry, "Censura y libertad: El impacto de la Inquisición sobre la cultura española", *Revista de Inquisición*, nº 7 (1998), págs. 109-117.

LANDI, Sandro, *Il governo delle omonioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000.

LAPARRA LÓPEZ, Emilio, *La libertad de prensa en las Cortes de Cádiz*, Valencia, Nau, 1984.

- *Manuel Godoy: la aventura del poder*, Barcelona, Tusquets Editores, 2005.

LARRIBA, Elisabel, "Inquisidores lectores de prensa ilustrada", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 817-829.

- "Contribution du clergé à la rédaction du Semanario de Agricultura y Artes a los Párrocos", *Cahiers du GRIAS*, nº extra 2 (1997), págs. 217-234.
- "Un intento de reforma agraria por y para las clases productoras: el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808)", *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, nº 23 (1999), págs. 87-118.
- "Inquisición y prensa periódica en la segunda mitad del siglo XVIII", *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII*, nº 13 (2005), págs. 77-92.
- "Los periodistas y el derecho a la educación para todos", en NAVA RODRÍGUEZ, Teresa (Coord.), *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. Nª 6. Cambio social y ficción literaria en la España de Moratín*, (2007), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, págs. 119-145.

LANDI, Sandro, *Il Governo delle opinioni: censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000.

- *Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna*, Bolonia, Il Mulino, 2011.

LLANAS I PONT, Manuel, *L'edició a Catalunya: segles XV a XVII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2002.

- *L'edició a Catalunya: el segle XVIII*, Barcelona, Gremi d'editors de Catalunya, 2003.

LOMBARDI, Giovanni, "Note archivistiche sulla storia dell'editoria napoletana", en TORTORELLI, Gianfranco (Coord.), *Gli archivi degli editori: studi e prospettive di ricerca*, Bologna, Pàtron Editore, 1998, págs. 45-58.

LOPEZ, François, *Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au XVIII^e siècle*, Lille, Université de Lille, 1976. Traducción en español: *Juan Pablo Forner y la crisis de la conciencia española en el siglo XVIII*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999.

- "El libro y su mundo", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, LOPEZ, François y URZAINQUI, Inmaculada, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 63-124.
- "Antonio Sanz, imprimeur du roi et l'édition populaire sous l'Ancien Régime", *Bulletin Hispanique*, XCV (1993), págs. 349-378.
- "Lo que puede hacerse con la *Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII*", en ALVAREZ BARRIENTOS, Joaquín y CHECA BELTRÁN, José (coord.), *El siglo que llaman ilustrado: homenaje a Francisco Aguilar Piñal*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996, págs. 575-582.
- "Las lenguas de España y la lengua española. De las primeras letras a la literatura", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 141-159.
- "La legislación: control y fomento", en INFANTES, Víctor, LOPEZ, François y BORREL, Jean-François (Dirs.), *Historia de la edición y de la lectura en España (1472-1914)*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, págs. 275-284.

LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M^a Victoria, "Predicación e inducción política en el siglo XVIII: Fray Diego José de Cádiz", *Hispania*, 38 (1978), págs. 71-119.

- "Administración y política en el siglo XVIII: Las Secretarías del Despacho", en *Crónica Nova*, número 22, Granada, 1995, págs. 185-209.

- "Oficiales y caballeros: la carrera administrativa en la España del siglo XVIII", *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 844-853.
- "Secretarios y Secretarías en la Edad Moderna: de la manos del príncipe a relojeros de la monarquía", en *Studia Histórica*, número 15, Salamanca, (1996), págs. 107-131.
- "Burocracia y erudición en la España del siglo XVIII", en DEDIEU, Jean-Pierre y VINCENT, Bernard (eds.), *L'Espagne, l'État, les Lumières. Mélanges en l'honneur de Didier Ozanam*, Madrid, Colección de la Casa de Velázquez (86), Madrid, 2004, págs. 155-171.

LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M^a Victoria (Coord.), *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. N^a 7. Crisis política y deslegitimación de monarquías*, (2008), Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M^a Victoria, FRANCO RUBIO, Gloria, NAVA RODRÍGUEZ, Teresa, "Perfiles socio-profesionales de la burocracia española en el siglo XVIII: las Secretarías de Estado y del Despacho", en ENCISO RECIO, Luis Miguel (coord.), *La burguesía española en la Edad Moderna, actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid y Soria*, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, Madrid, 1996, págs. 1009-1034.

LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, y CÁTEDRA Pedro M., *El libro antiguo español. IV, Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV-XVIII)*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1998.

LÓPEZ-VIDRIERO, M^a Luisa, "La imprenta en el siglo XVIII", en ESCOLAR, Hipólito (dir.), *Historia ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII*, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, págs. 201-270.

- "Censura civil e integración nacional: el censor ilustrado", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 855-867.

MADERA SEOANE, M^a Jesús, "La novela bajo sospecha: uniformización cultural frente a diversificación en el género narrativo a finales del XVIII", en *El mundo hispánico en el*

siglo de las luces, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 869-875.

MARAVALL, José Antonio, *Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII)*, Madrid, Mondadori, 1991.

MARTIN, Henri-Jean y CHARTIER, Roger (Dirs.), *Histoire de l'édition française*, T.II, *Le Triomphe du livre. 1660-1830*, París, Promodis, 1984.

MARTIN, Henri-Jean, *Le Livre français sous l'Ancien Régime*, París, Promodis, 1987.

- *Histoire et pouvoirs de l'écrit*, París, Librairie Académique Perrin, 1988.
- *Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle. Préface de Roger Chartier*, 2 tomos, Ginebra, Droz, 1999.

MARTÍNEZ BARA, José Antonio, "Fuentes para el estudio de la Imprenta en el Archivo Histórico Nacional", *Cuadernos para la investigación de la literatura hispánica*, 9 (1988), págs. 207-226.

MARTÍNEZ ROBLES, Miguel, *Los oficiales de las Secretarías de la Corte bajo los Austrias y los Borbones (1517-1812)*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1987.

MARTINEZ DE SOUSA, José, *Pequeña historia del libro*, Gijón, Trea, 1999.

MARTINS, María Teresa, *A censura literária em Portugal nos séculos XVII e XVIII*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.

MATE, Reyes y NIEWÖHNER, Friedrich (Coords.), *La Ilustración en España y Alemania*, Barcelona, Anthtopos, 1989.

MESTRE SANCHIS, Antonio, *Epistolario. Volumen XVI: Mayans y los altos cuadros de la Magistratura y Administración borbónica, 3. Fernando José de Velasco Ceballos (1753-1781)*, Valencia, Diputación, 1972.

- "Informe de Mayans sobre el Auto de Censura de Libros establecido por Juan Curiel en 1752", en *Homenaje al Dr. Don Juan Reglá Campistol*, Vol. 2, Valencia, Universidad de Valencia, 1975, págs. 53-64.
- *Don Gregorio Mayans y Siscar: entre la erudición y la política*, Valencia, Diputación de Valencia, 1999.
- *Humanistas, políticos e ilustrados*, Alicante, Universidad de Alicante, 2002.
- *Apología y crítica de España en el siglo XVIII*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003.

- *Mayans: proyectos y frustraciones*, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 2003.
- *Los ilustrados, el origen de la imprenta y el catálogo de incunables españoles*, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, 2007.

MINOIS, Georges, *Censure et culture sous l'ancien régime*, París, Fayard, 1995.

MOLAS RIBALTA, Pere et al., *Historia social de la Administración española: Estudios sobre los siglos XVII y XVIII*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milà y Fontanals, Barcelona 1980.

MORELLI TIMPANARO, Maria Augusta, *Autori, stampatori, librai. Per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Florencia, Leo S. Olschki Editore, 1999.

MORGADO GARCÍA, A., "Los manuales de confesores en la España del siglo XVIII", *Cuadernos dieciochistas*, 5, (2004), págs. 123-145.

MORTIER, Roland, "Diderot, le censeur Marin et les Souvenirs de la marquise de Caylus", en *Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie*, nº 24 (1998), págs. 151-153.

- *Les Combats des Lumières. Recueil d'études sur le dix-huitième siècle. Preface de Robert Darnton*, París, Centre International d'Étude du XVIIIe Siècle Fernay-Voltaire, 2000.

MOUREAU, François, *La plume et le plomb. Espaces de l'imprimé et du manuscrit au siècle des Lumières*, Preface de Robert Darnton, París, PUPS, 2006.

MUÑOZ CALVO, Sagrario, *Inquisición y ciencia en la España Moderna*, Madrid, Editora Nacional, 1977.

NAPOLI, Maria Consiglia, *Letture proibite. La censure dei libri nel Regno di Napoli in età borbonica*, Milán, Franco Agnelli, 2002.

- "Editoria clandestina e censura ecclesiastica a Napoli all'inizio del Settecento", en RAO, Ana Maria (Dir.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 5-7 dicembre 1996*, Nápoles, Liguori, 1998, págs. 333-351.

NAVA RODRÍGUEZ, M^a Teresa, *Reformismo ilustrado y americanismo. La Real Academia de la Historia (1735-1792)*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989.

- *La educación en la Europa moderna*, Madrid, Síntesis, 1992.
- *Problemas y perspectivas de una historia social de la Administración: Los secretarios del Despacho en la España del siglo XVIII*, Madrid, École des Hautes Études Hispaniques, 1994.
- "La secretaría de Hacienda en el Setecientos español: una aproximación prosopográfica", *El mundo hispánico en el Siglo de las Luces: Actas del Coloquio Internacional "Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo XVIII"*, vol. 2, Editorial Complutense, Madrid, 1996, págs. 949-966.

NAVA RODRÍGUEZ, M^a Teresa (Coord.), *Cuadernos de Historia Moderna. Anejos. N^a 6. Cambio social y ficción literaria en la España de Moratín*, (2007), Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

NEGRONI, Barbara, *Correspondance. Jean-Jacques Rousseau, Chrétien-Guillaume de Malesherbes*, París, Flammarion, 1991.

- *Lectures interdites. Le travail des censeurs au XVIII^e siècle. 1723-1774*, París, Albin Michel, 1995.

NETZ, Robert, *Historire de la censure dans l'édition*, París, Fayard, 1995.

OLACHEA, Rafael, "Política anticolegialista del gobierno de Carlos III", en *II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo*, Oviedo, Cátedra Feijoo, Centro de Estudios del Siglo XVIII, 1983, págs. 207-246.

OSTOLAZA ELIZONDO, María Isabel, *Impresores y libreros en Navarra durante los siglos XV-XVI*, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004.

PAJARES, Eterio, "Traducción inglés-español en el siglo XVIII: la "traducción tutelada"", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 992-1000.

PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio, *La mujer y las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Laberinto, 2002.

PALAU DULCET, A., *Manual del librero hispano-americano*, Madrid, Julio Ollero, 1990.

PALAZZOLO, Maria Iolanda, *Editoria e istituzioni a Roma tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti*, Roma, Archivio Guido Izzì, 1994.

PAMPLIEGA PEDREIRA, Víctor, "Lugares de erudición en el Madrid del siglo XVIII: salones, gabinetes y bibliotecas" en REY CASTELAO, Ofelia y LOPEZ, Roberto J. (Eds.);

GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes; REY CASTELAO, Ofelia y GONZÁLEZ LOPO, Domingo L. (Coords.), *El mundo urbano en el siglo de la Ilustración*. Tomo II. Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Consellería de Innovación e Industria, Dirección Xeral de Turismo S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, 2009, págs. 433-446.

- "Jovellanos y la censura", en FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio; LORENZO ÁLVAREZ, Elena; OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, Joaquín, y RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Álvaro, *Jovellanos, el valor de la razón (1811-2011)*. Congreso Internacional Jovellanos (1811-2011), Gijón, mayo 2011, Gijón, Acción Cultural Española, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Cajastur, Ayuntamiento de Gijón y Consejería de Turismo del Principado de Asturias, 2011, págs. 405-412.
- "Adular al Rey. Un acercamiento a los elogios regios en el siglo XVIII", en JIMENEZ ESTRELLA, Antonio y LOZANO NAVARRO, Julián (Eds.), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Comunicaciones. Volumen I. El Estado absoluto y la Monarquía*, Granada, Universidad de Granada, 2012, págs. 498-508.
- "Por respeto a su sexo: la censura a las mujeres a finales del siglo XVIII", en PEREZ ALVAREZ, María José y RUBIO PEREZ, Laureano (Eds.), *Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano*, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, págs. 1703-1712.
- "La censura libraria. Una mirada a Europa", en *Actas del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico y Fundación Española de Historia Moderna, febrero 2012.[En prensa]
- "Escribir y servir. Autores y censores en la España del siglo XVIII", en FRANCO RUBIO, Gloria (coord.), *Vínculos y sociabilidades: reflexiones desde el Bicentenario de las Guerras de Independencia en España e Iberoamérica*. [En prensa].

PARDO, Tomás, *Ciencia y censura. La Inquisición española y los libros científicos en los siglos XVI y XVII*, Madrid, CSIC, 1991.

PASTA, Renato, *Editoria e cultura nel Settecento*, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1997.

- PEDRAZA GRACIA, Manuel José, CELEMENTE SAN ROMÁN, Yolanda y REYES GOMEZ, Fermín, *El libro antiguo*, Madrid, Síntesis, 2003.
- PEÑA DÍAZ, Manuel (Coord.), "La censura en la Edad Moderna", dossier de *Cultura escrita & sociedad*, 7 (2008).
- PÉREZ HENARES, Antonio y MAZÓN, Diego, *Ilustres soldados... de armas y letras*, Madrid, Dédalo-Altamira, 2005.
- PIMENTEL, Juan, *Testigos del mundo: ciencia, literatura y viajes en la ilustración*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003.
- PINTO CRESPO, Virgilio, "Las circunscripciones eclesiásticas, siglos XII-XIX", en PINTO CRESPO, Virgilio y MADRAZO MADRAZO, Santos (Dir.), *Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX*, Barcelona, Fundación Caja Madrid y Lunwerg Editores, 1995, págs. 132-137.
- PIZARRO, Narciso (coord.), *Análisis de Redes Sociales: la consolidación de un paradigma interdisciplinar*, *Monográfico de Política y Sociedad*, Madrid, 33 (2000), Universidad Complutense de Madrid.
- RAO, Ana Maria (Dir.), *Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Napoli 5-7 dicembre 1996*, Nápoles, Liguori, 1998.
- REQUENA SANTOS, Félix, "El concepto de red social", en *REIS*, 48/89 (1989) págs. 137-152.
- REY CASTELAO, Ofelia, y SANZ GONZALEZ, Margarita, "Monjes, frailes y libros: las bibliotecas de los regulares compostelanos a fines del Antiguo Régimen", *Obradoiro de Historia Moderna*, nº 6 (1997), págs. 79-106.
- REY CASTELAO, Ofelia, "Producción impresa y promoción eclesiástica en la Galicia de fines del Antiguo Régimen", *Semata. Ciencias Sociales y Humanidades*, nº 10 (1998), págs. 281-319.
- "Las bibliotecas institucionales del noroeste español: la biblioteca de la Universidad de Santiago", *Bulletin hispanique*, vol. 104, nº 1 (2002), págs. 303-342.
 - *Libros y lectura en Galicia*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003.

- "Lectores y libros en tiempos del Quijote", *Pedralbes, Revista d'història moderna*, nº 161 (2004), págs. 103-132.
- "El comercio de libros en la Galicia del Antiguo Régimen", *Obradoiro de Historia Moderna*, nº 17 (2008), págs. 277-302.
- "A vueltas con la difusión de impresos en la Edad Moderna", en GARCIA HURTADO, Manuel-Reyes (coord.), *Modernitas: estudios en homenaje al Profesor Baudilio Barreiro Mallón*, La Coruña, Universidad de Coruña, 2008, págs. 31-52.

REYES GÓMEZ, Fermín de los, "Los libros del *Nuevo Rezado* y la imprenta española del siglo XVIII" en *Revista General de Información y Documentación*, 9 (1999), 1, págs. 117-158.

- *El libro en España y América (siglos XV-XVIII)*, Madrid, Editorial Arco, 2000, 2 vols.

RICO, Francisco, *Historia y crítica de la literatura española*, Barcelona, Crítica, 1979.

RICO, Francisco (Dir.), *Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro*, Valladolid, Universidad de Valladolid y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000.

ROCHE, Daniel, *Les Républicains des lettres. Gens de culture et Lumières au XVIIIe siècle*, París, Fayard, 1988.

RODRIGUEZ DIAZ, José María, *Prensa y censura. La libertad de prensa en la bahía de Cádiz durante el reinado de Isabel II*, Cádiz, Imprenta Repeto, 2005.

ROLDAN PEREZ, Antonio, "Censura civil y censura inquisitorial en el teatro del siglo XVIII", *Revista de Inquisición*, nº 7 (1998), págs. 119-136.

RUMEU DE ARMAS, Antonio, *Historia de la censura literaria gubernativa de España*, Madrid, Aguilar, 1940.

SAIZ, M^a Dolores, *Historia del periodismo en España. Vol. 1, Los orígenes: el siglo XVIII*, Madrid, Alianza Editorial, 1983.

SÁNCHEZ BALMASEDA, M^a Isabel, *Análisis de redes sociales e historia: una metodología para el estudio de redes clientelares*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía, Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, 1995.

SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, *El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III*, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2002.

- *La Ilustración goyesca: la cultura en España durante el reinado de Carlos IV (1788-1808)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

SERRANO SANZ, Manuel, "El Consejo de Castilla y la censura en el siglo XVIII", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, XV-XVI (1906), págs. 28-46, 242-259, 387-402; y, XVII-XVIII (1907), págs. 108-116 y 206-218.

- *Apuntes para una Biblioteca de Escritoras Españolas desde el año 1401 al 1833*, Madrid, Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1903-1905, 4 vols.

SIERRA CORELLA, Antonio, *La censura de libros y papeles en España y los índices y catálogos españoles de los prohibidos y expurgados*, Madrid, Colegio Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1947.

SIMON DIAZ, José, "Índice de Aprobaciones de libros del Siglo de Oro", *Revista de Literatura*, XXXVII (1974), págs. 177-232; XXXVIII (1976), págs. 177-187; y XXXIX (1978), págs. 131-148.

- *Textos dispersos de autores españoles I. Impresos del Siglo de Oro*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978.
- *Historia del Colegio Imperial de Madrid (del Estudio de la Villa al Instituto de San Isidro: años 1346-1955)*, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992.

TORTAROLO, Edoardo, "La censure à Berlin au XVIII siècle", *La Lettre Clandestine. Censure et clandestinité aux XVIIe et XVIII siècles*, n° 6 (1997), Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, París, Mayo 1998, págs. 253-262.

- *L'invenzione della libertà di stampa. Censura e scrittori nel Settecento*, Roma, Carocci, 2011.

TORTORELLI, Gianfranco (coord.), *Gli archivi degli editori: studi e prospettive di ricerca*, Bologna, Pàtron Editore, 1998.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza, 1982.

TORQUEMADA SÁNCHEZ, María Jesús, "Controles aduaneros en el siglo XVIII: conflictos entre la justicia regia y la inquisitorial", *Revista de Inquisición*, 10 (2001), págs. 57-63.

URZAINQUI, Inmaculada, "Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica", en ÁLVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, François López e Inmaculada Urzainqui, *La República de las letras en la España del siglo XVIII*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 125-216.

- "Aspectos de la diversidad en la crítica teatral de Neoclasicismo español", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 1293-1318.

VELASCO MORENO, Eva, *La Real Academia de la Historia en el siglo XVIII. Una institución de sociabilidad*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, 2000.

- "Las Academias de la Historia en el siglo XVIII: una comparación entre Francia y España", en *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996, págs. 1319-1329.
- "Fundamentos históricos y principios ideológicos del proyecto de reforma del sistema de censura previa en 1770", *Cuadernos dieciochistas*, 4 (2003), Universidad de Salamanca, págs. 123-134.

VIGO TRASANCOS, Alfredo (Ed.), *Cultura, poder y mecenazgo. Semata. Ciencias sociais e Humanidades*, nº 10 (1998), Universidad de Santiago de Compostela.

VILLALTA, Luiz Carlos, "Censura literaria en el mundo luso-brasileño (1517-1808): órganos censores, criterios de censura y obras prohibidas", en *Cultura Escrita & Sociedad*, nº 7 (2008), págs. 98-117.

VVAA, *El mundo hispánico en el siglo de las luces*, Madrid, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Fundación Duques de Soria y Universidad Complutense, 1996.

WEIL, Françoise, *L'interdiction du roman et la librairie 1728-1750*, Aux Amateurs de Livres, París, 1986.

- *Livres interdits, livres persécutés 1720-1770*, Oxford, Voltaire Foundation, 1999.

ZAVALA, Iris M., *Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo XVIII*, Barcelona, Ariel, 1978.

- *Lecturas y lectores del discurso narrativo dieciochesco*, Ámsterdam, Rodopi, 1987.

9. Apéndices

9.1. Jueces de Imprenta entre 1700 y 1808

No conocemos la lista completa de los Jueces de Imprentas del siglo XVIII. A través de la documentación encontrada en el Archivo Histórico Nacional y de la bibliografía consultada (nombramientos, disposiciones, normas...), hemos podido hacer un primer cuadro con los nombres y fechas de los que tenemos constancia. En la misma figura la fecha de su nombramiento con tanto detalle como se conoce. Es posible, sobre todo para los primeros años del siglo, que hubiese más titulares del juzgado, ya que la documentación no es ni clara ni sistemática hasta el nombramiento de Mutiloa en 1738, que supone la definitiva institucionalización del cargo.

Relación de jueces de imprenta entre 1700 y 1808⁷⁹²

AÑO DE NOMBRAMIENTO	NOMBRE	ID FICHOZ
1713/1717	Ursua Arizmendi, Pedro, Conde de Gerena	00006163
1716/1718=03=16	Acevedo Ibáñez, Manuel Antonio, Conde de Torrehermosa	00005974
1728=09=00	Arana, Francisco de	00004625
1738=02=21	Mutiloa, Juan José	00004579
1743=08=30/13	Bustamante y Loyola, José	00010202
1748=09=03	Encina y la Carrera, Juan Ignacio	00010695
1752=02=08	Curiel Tejada, Juan Antonio	00010570
1769=05=11/1769=07=04	Nava Carreño, Miguel María	00000561
1784=09=07	Velasco, Fernando José	00000855
1788=07=00	Rivero Valdés, Felipe	00000699
1794=06=09	Isla, Luis Manuel, Conde de Isla	00000396
1803=00=00	Salcedo Somodevilla, Germán, Marqués de Fuerte Híjar	00000477
1805=04=11	Melón, Juan Antonio	00004423
1808=04=03	Colón de Larreátegui, José Joaquín	00000177

⁷⁹² AHN, Consejos, Legs. 50686, 50695 y 11286. La primera fecha está sacada de Reyes, la segunda de García Martín

9.2. Actores y redes

9.2.1. Censores nombrados por Curiel en 1756

A los trece sacerdotes que cumplían su misión como párrocos en las trece parroquias de Madrid, de las que Curiel no proporciona nombre y que no hemos podido reconstruir, se nombra a los siguientes, de los que se ha incluido su identificador único en la base de datos Fichoz⁷⁹³:

NOMBRES	ID FICHOZ
Aguado, Alejandro [Fray]	00034208
Alvarez, Juan [Fray] [Maestro]	00083327
Alvira, Miguel [Padre]	00083328
Aravaca, Juan [Padre]	00029124
Basualdo, Eugenio [Fray]	00024873
Bustamante, Rafael	00066048
Cano Nieto, Alonso [Fray]	00016275
Dominguez, Jose [Doctor]	00026568
Fuente, Jose de la [Doctor]	00083329
Gallo, Nicolas [Padre]	00030681
Herrero, Juan Antonio	00083330
Jimenez, Cristobal [Fray] [Maestro]	00054949
Maurueza, Fernando [Fray] [Padre]	00083331
Mestre, Francisco	00083332
Moraleda, Ignacio [Fray] [Padre]	00034210
Núñez, Antonio [Padre]	00027896
Perez Pastor, Miguel [Padre]	00037272
Ponce, Juan [Fray]	00083334
Puig, Leopoldo [Padre]	00023151
Rada, Jose [Doctor] [Padre]	00016262
Rey, Jose [Fray] [Maestro]	00056632
Rio, Juan Antonio del [Padre]	00083336
Rivera, Diego de [Padre]	00057554
Rodriguez de Campomanes, Pedro	00000709
Rubio, Isidro [Fray] [Maestro]	00010030

⁷⁹³ *Auto Acordado del Consejo nombrando cuarenta personas de las más acreditadas de la Corte para que censuren los libros y obras que se hayan de imprimir, reimprimir y vender*, 19 de julio de 1756. AHN, Consejos, Legs. 11275 y 51634. Se encuentra transcrito en GONZALEZ PALENCIA, *op. cit.* (nota 78), págs. 91-94 y REYES, *op. cit.* (nota 49), págs. 995-997.

Santander, Juan [Doctor] [Padre]	00022988
Villarrubia, Juan Manuel [Padre]	00057015

9.2.2. Listado de censores del siglo XVIII

En la siguiente lista se han incluido todos los actores que, en algún momento del siglo XVIII, realizaron alguna censura.

NOMBRE	ID FICHOZ
Abad Lasierra, Manuel	00016379
Abadia, Jose [Fray]	00056615
Abaitua, Pedro Francisco	00064667
Abreu, Manuel Antonio [Fray]	00084685
Acevedo, Jeronimo	00039476
Acevedo, Sebastian Manuel [Padre]	00083769
Ada Campillo, Miguel	00057365
Agreda, Basilio [Fray]	00057551
Aguado, Alejandro [Fray]	00034208
Aguilar, Jose [Fray]	00037604
Aguirre, Javier Ignacio	00057278
Albalate, Antonio [Fray]	00057269
Albalate, Joaquin [Fray]	00057272
Albarracin, Martin [Padre]	00045169
Alberich, Mariano	00056168
Albira, Miguel [Padre]	00042033
Albrecht, Félix	00037163
Alcala, Antonio [Fray]	00056665
Alcala, Marcos [Fray]	00037638
Alcantara, Juan Cristobal	00057433
Alcazar, Pedro	00057304
Alcira, Pedro [Fray]	00038427
Alcoba, Manuel [Fray]	00056514
Alcocer, Francisco Antonio [Fray]	00076798
Alcoti, Jeronimo	00056347
Almela, Vicente	00065118
Almoguera, Jose [Fray]	00084929
Alonso Sanabria, Matias	00085013
Alonso, Francisco	00057439
Alonso, Isidoro [Fray]	00076793
Altamirano, Pedro Ignacio	00031665
Alva, Diego	00057345
Alvarez Abreu, Antonio Jose, Regalia [Marques]	00005775

Alvarez Fuente, Jose	00039721
Alvarez Pomar, Nicolas	00034779
Alvarez Silva, Diego	00081917
Alvarez, Blas Antonio [Fray]	00038324
Alvarez, Gaspar [Padre]	00040259
Alvarez, Juan [Fray]	00058805
Alvarez, Julian [Fray]	00084663
Alvarez, Matias [Fray]	00054951
Amatriain, Felix	00057076
Anadon, Pedro Jose	00056951
Anchorena Ezpeleta, Joaquin	00044377
Andres, Isidoro Francisco [Fray]	00040918
Angeles, Alonso [Fray]	00038111
Angeles, Mateo	00058103
Anglasell, Mariano [Fray]	00056769
Anguiano, Mateo [Fray]	00037753
Anunciación, José [Fray]	00064683
Aparici, Francisco	00057781
Aparicio, Pedro	00084660
Aquenza Mossa, Pedro	00024730
Aquino, Nicolás [Fray]	00051815
Aracena, Jose [Fray]	00057681
Aragon, Andres [Fray]	00057310
Aragones Zuñiga, Jose	00084885
Aragónés, Pedro [Padre]	00075979
Arahal, Antonio [Fray]	00057301
Aramburu Cruz, Manuel Vicente	00010083
Arana, Juan [Padre]	00057768
Aravaca, Juan [Padre]	00029124
Arbiol, Antonio [Fray]	00035251
Arce, Diego [Padre]	00038534
Arce, Jose	00055940
Arda, Antonio Ambrosio [Fray]	00083745
Ardales, Miguel [Fray]	00056527
Are Senroma, Francisco [Fray]	00056785
Areche Zornoza, Jose Antonio	00014986
Arenzana, Donato	00037290
Arenzana, Martin	00037003
Arenzano, Francisco [Fray]	00084709
Argandoña, Alejandro	00041603
Arias Carrillo Albornoz, Francisco [Fray]	00057117
Ariño, Ignacio [Fray]	00064798
Ariza, Pedro [Fray]	00054950
Armendariz Arbelua, Jose	00057720
Armendariz, Pedro	00064803
Armengol Folch, Bernardo	00056784

Armisen Marin, Ignacio	00058073
Arnalte, Pedro [Fray]	00056941
Arostegui, Tomas [Fray]	00057077
Arregui, Martin [Fray]	00056730
Arriaza Castañeda, Melchor	00057059
Arriaza, Tomas [Fray]	00057761
Arristia, Juan	00050543
Arroyo Velasco, Juan Bautista	00036317
Artabe Anguita, Gabriel	00037205
Arzabe, Manuel	00049084
Ascension, Angel [Fray]	00064800
Asuncion, Bernardo [Fray]	00037164
Asuncion, Bernardo [Fray]	00084750
Atarbe Anguita, Gabriel	00056344
Auberi, Juan Maria	00058067
Aviles, Francisco [Fray]	00056685
Aviles, Francisco [Padre]	00075994
Azanza, Miguel Bonifacio [Fray]	00056729
Azpeitia Orozco, Tomas Pascual	00028367
Bach, Francisco	00004665
Bails, Benito	00024534
Balboa, José [Fray]	00037872
Balgañon Ramirez, Manuel [Fray]	00056954
Ballesteros, Francisco Antonio [Fray]	00027508
Ballesteros, Sebastian [Fray]	00083743
Baños, Simon	00004678
Baquerizo, Gabriel [Fray]	00057859
Barbadillo, Alonso [Fray]	00037614
Barcaiztegui, Andres [Fray]	00057760
Barcina, Bernabe	00038410
Bardaji, Ignacio	00038317
Baron, Jaime [Fray]	00037726
Barreda, Felipe [Padre]	00037276
Barreda, Fernando [Fray]	00039475
Barreda, Francisco	00084607
Barriada, Francisco	00083776
Barrio, Antonio	00039645
Barrio, Jose [Fray]	00035771
Barroso, Antonio	00055934
Barroso, Juan [Fray]	00083957
Basagutia, Jose [Fray]	00038472
Bastos, Bernardo [Fray]	00057359
Bautista Molinos, Juan [Fray]	00038246
Baz, Jose [Fray]	00038792
Bazan, Baltasar Manuel [Padre]	00076505
Bazterrica, Jose Ignacio	00038432

Becerril, Francisco [Fray]	00039718
Bejar, Francisco [Fray]	00029855
Bela, Jeronimo [Fray]	00064743
Beltran, Felipe	00047827
Benegasi Lujan, Jose Joaquin	00083676
Berceal Pino, Juan [Fray]	00024431
Berganza, Francisco	00037861
Bermudez, Fernando [Fray]	00057213
Bernard, José [Padre]	00064826
Bernia, Ramon	00052240
Bertran Serrano, Felipe	00016492
Besga Teran, Alonso [Fray]	00065021
Biguezal, José	00016461
Biz, Juan Bautista [Fray]	00056590
Blanco, Francisco	00084672
Blanco, Joaquin	00057226
Blazquez, Juan [Padre]	00084488
Blazquez, Manuel	00037659
Boer, Antonio [Fray]	00056451
Bogart, Ignacio	00038431
Boix, Miguel Marcelino	00031509
Bono, Francisco	00027428
Bordon, Antonio	00084888
Borras Viñals, Francisco	00004733
Borrego, Juan Agustin	00083963
Borrull Ramon, Jose	00004735
Bosque Jerique, Miguel	00057074
Breton, Jacinto	00010175
Briones, Jose [Fray]	00057341
Bru, Esteban	00057251
Brujas, Bartolome Jeronimo [Fray]	00057679
Buendia Ponce, Francisco	00028862
Buendia, Francisco	00057336
Bueno Arevalo, Juan [Fray]	00057431
Bueno, Celedonio	00084680
Burgos, Pablo Fidel [Fray]	00051540
Burillo, Francisco Javier	00053283
Burillo, Manuel	00085147
Burriel, Andres Marcos	00030712
Burriel, Antonio [Padre]	00040248
Bustamante, Andres	00016482
Bustamante, Rafael	00066048
Busto, Pedro	00057133
Busto, Pedro [Padre]	00057130
Butron Mujica, Jose Antonio	00038681
Caballero Arteaga, Diego	00050763

Caballero, Agustin Antonio [Fray]	00056384
Cabello Barroso, Bartolome	00034773
Cabrera, Juan	00027434
Cabrera, Juan Bautista	00029401
Cabrera, Miguel [Fray]	00039472
Cadenas Fuentes, Juan [Padre]	00076506
Cadiz, Diego Agustin [Fray]	00057651
Calahorra, Felipe [Fray]	00057283
Calderon Barca, Manuel [Fray]	00038459
Calleja, Carlos [Fray]	00057423
Calot, Nicolas	00058102
Calvo Aguirre, Juan Crisostomo	00084641
Calvo, Juan Pedro	00037169
Calzada, Juan [Fray]	00057268
Camargo, Luis	00064972
Campmany, Antonio	00056898
Campo, Ignacio	00083770
Campoverde, Juan [Padre]	00029768
Canalejo, Isidro	00084759
Canales, Luis [Fray]	00057468
Canas Trelles, Gonzalo	00040297
Cancio Maria, Manuel	00038281
Cangas, Antonio	00057205
Cano Machuca, Francisco	00037091
Cano Nieto, Alonso [Fray]	00016275
Canseco Robles, Alonso	00036314
Cantador, Jose	00039488
Canteria, Juan	00056428
Cañaveras, Julian	00010279
Cañaveras, Pedro	00083782
Cañizares, Jose	00028351
Capilla Bravo, Jose	00083962
Capmany Suris Montpalau, Antonio	00024535
Carcamo, Miguel [Fray]	00056577
Cardenas Vargas, Fernando	00038280
Cardenas, Antonio	00037633
Carmona, Juan [Fray]	00057215
Caro Membrio, Juan [Fray]	00057265
Carralon, Jose	00057427
Carrasco, Jose	00052767
Carrasco, Juan Lucas [Fray]	00056942
Carrasco, Manuel [Fray]	00039000
Carrasquilla, Diego [Fray]	00058050
Carrega, Miguel [Fray]	00038319
Carreras Cetina, E. Cayetano	00056346
Carriedo, Antonio [Fray]	00084532

Carrillo Rios, Juan [Fray]	00057197
Carrillo Rios, Nicolas [Fray]	00057725
Carrion Valdes, Julian [Fray]	00057840
Carroza, Carlos	00083667
Cartagena, Jose	00039503
Carvajal Lancaster, Jose	00002627
Carvajal, Dionisio [Fray]	00054743
Carvajal, Manuel [Fray]	00038985
Carvajal, Martin Alberto	00034727
Casamayor, Juan	00057057
Casanova, Juan [Fray]	00065099
Casaña, Vicente	00060074
Casañas Mora, Pedro [Padre]	00056427
Casas, Gabriel	00036298
Casas, Joaquin	00083966
Cascajares Castillo, Francisco	00010342
Cascajedo, Teodoro [Padre]	00037651
Casellas, Jaime	00084786
Casiri Gaeta, Miguel	00001374
Casoni, Carlos M	00084648
Cassani, Jose [Padre]	00028361
Casta, Francisco [Fray]	00037742
Castañeda, Jose	00120668
Castaño, Antonio [Padre]	00051685
Castejon, Agustin	00044037
Castellanos Torre, Alfonso	00005744
Castellanos, Gabriel [Fray]	00057046
Castellanos, Jose	00056664
Castilla, Diego [Fray]	00037278
Castilla, Diego [Fray]	00083956
Castillion, Felipe [Padre]	00056534
Castillo, Andres [Fray]	00084657
Castillo, Sebastian	00010370
Castillon, Felipe [Padre]	00037252
Castro Coloma, Manuel [Padre]	00056606
Castro, Ignacio [Fray]	00057167
Castro, Jacinto Miguel	00006188
Castro, Manuel	00006840
Catalá, Vicente	00037260
Cavalleri Villalobos, Gabriel Gilberti	00084593
Cavero Alvarez Robles, Jeronimo	00037261
Cavero, Francisco Javier	00083713
Cavero, Jose Nicolas [Fray]	00038493
Cea, Cristóbal [Fray]	00076504
Cea, Luis [Fray]	00056515
Celada, Sebastian [Fray]	00037297

Centeno, Pedro [Fray]	00018387
Cerda Rico, Francisco	00010394
Cerdan, Jose [Fray]	00084875
Cerdan, Juan Manuel	00084668
Cerro, Julian Antonio	00084182
Cervantes, Jose [Padre]	00046850
Cespedes, Francisco [Fray]	00057166
Cespedes, Pedro	00038326
Ceuta, Jose [Fray]	00084530
Cevallos, Jose	00034710
Chacon, Luis Ignacio	00037632
Chafreon, Matias	00010416
Chafreoni, Matias	00057694
Chavarri, Andres [Fray]	00057592
Chaves, Jose	00084764
Cid Carrascal, Joaquin	00033556
Cid, Andres [Fray]	00016557
Ciempozuelos, Manuel [Fray]	00038033
Clarebout, Juan Felix	00057777
Clavijo Fajardo, Jose	00010441
Cloas, Jaime	00057252
Collado Ruete, Manuel	00083339
Colmenares, José Ignacio	00009785
Colon Larreategui, Jose	00000177
Concepcion, Fernando [Fray]	00083337
Concepcion, Ignacio [Fray]	00056714
Concepcion, Jose [Padre]	00053455
Concepcion, Juan [Fray]	00036319
Concepcion, Manuel [Fray]	00037299
Concha, Ignacio	00057332
Conde, Sebastian [Fray]	00083802
Conforto, Nicolas	00010466
Consuegra, Juan [Fray]	00057271
Contreras, Pedro	00057090
Cordoba, Francisco	00038292
Cordoba, Juan	00038304
Cornejo, Jose	00037601
Cornide Folgueira, Jose	00053457
Corral, Tomas [Fray]	00084761
Corro, Diego	00029603
Cortazar, Francisco	00084608
Cortes, Sebastian Antonio	00034711
Cortijo, Tomas	00037612
Cosio, Manuel	00057338
Cossio, Miguel Jose	00083955
Costa, Jose [Fray]	00056766

Crospis, Bernardo [Fray]	00133048
Cruz Jimena Muñoz, Francisco	00057222
Cruz, Antonio [Fray]	00037624
Cruz, Diego [Fray]	00056950
Cruz, Ignacio	00047168
Cruz, Isidoro [Fray]	00085151
Cruz, Juan [Fray]	00057848
Cuadros, Diego [Padre]	00056686
Cuella, Marcos Benito [Fray]	00075440
Cuellar, Jose [Fray]	00055436
Cuellar, Juan [Fray]	00057406
Cuesta Arengo, F	00089379
Cueto, Sebastian	00037277
Cueva, Juan Francisco	00010565
Curado Torreblanca, Fernando	00037631
Dangos, Simon	00084670
Daza, Juan	00084756
Delgado, Andres [Fray]	00057769
Delgado, Juan Antonio [Fray]	00056897
Delgado, Martin	00016500
Díaz Malaguilla, Antonio [Fray]	00064688
Díaz Pablos, Pascual	00089389
Díaz, Gaspar [Padre]	00096599
Díaz, Jose Antonio [Fray]	00076795
Díaz, Juan [Fray]	00057357
Dieguez Ramirez Arellano, Lorenzo	00037654
Diez Coronel, Diego Antonio	00034497
Diez Gonzalez, Jose	00030215
Diez Gonzalez, Santos	00034887
Diez Medina Colmenares, Antonio	00085148
Diez Navarro, Andres	00010622
Diez, Baltasar [Fray]	00089386
Divo, Miguel [Fray]	00057719
Dominguez Toledo, Julian	00016499
Dominguez, Jose	00026568
Dominguez, Jose Gaspar	00084687
Dominguez, Juan Jose	00084884
Dorre, Pedro	00039458
Doye Pelarte, Marcelo Felix	00034728
Doz Funes, Vicente	00010660
Duarte, Angel	00057235
Duque, Jose [Fray]	00083764
Duro Saz, Jose	00034482
Echeverria, Francisco	00037206
Ecija, Pablo [Fray]	00057168
Eguiluz, Isidoro [Fray]	00057445

Elizondo, Pablo Miguel	00057110
Ellacuriaga, Juan [Fray]	00038469
Emperador, Jose [Fray]	00038291
Encarnacion, Antonio [Fray]	00083795
Enciso Vazquez, Joaquin	00057712
Enriquez, Juan [Padre]	00083766
Erauso, Sebastián [Fray]	00030713
Erce, Miguel [Fray]	00057838
Erro, Vicente [Fray]	00056623
Escacena, Juan [Padre]	00064678
Escalona, Juan [Fray]	00037179
Escobar Carrera, Juan	00016547
Escolano, Miguel [Fray]	00037718
Eslava, Agustin [Fray]	00057206
Espada, Pablo [Fray]	00084707
España, Juan [Fray]	00084776
Espejo Arenillas, Blas	00037677
Espinol, Pedro [Fray]	00083760
Espinosa Bariga, Pedro	00084626
Espinosa Monteros, Francisco Antonio	00037268
Espinosa, Antonio	00056633
Espinosa, Manuel [Fray]	00076453
Espinosa, Pedro [Fray]	00016625
Espinosa, Salvador [Fray]	00039480
Espirdo, Juan Andres [Fray]	00076507
Espiritu Santo Benavente, Jose [Fray]	00057856
Espiritu Santo, Buenaventura [Fray]	00057819
Espiritu Santo, Juan Maximo [Padre]	00056319
Esquivel, Jose [Fray]	00085150
Estala, Pedro	00039017
Estamatelo, Fernando	00056355
Esteban, Jose [Fray]	00084998
Estrada, Francisco [Fray]	00084601
Estrada, Juan [Fray]	00084683
Estrada, Juan [Padre]	00083714
Estrada, Nicolas [Padre]	00056520
Eura, Ramon Francisco Agustin	00016559
Exerique, Joaquin [Fray]	00036328
Faci, Roque Alberto [Fray]	00056426
Fajardo, Agustin [Fray]	00057361
Fajardo, Juan [Fray]	00038471
Falcon, Pedro [Fray]	00083733
Feijoo, Pedro [Fray]	00038460
Feliu, Salvador [Fray]	00056764
Felix Sevilla, Manuel [Fray]	00057128
Fernandez Arango, Juan	00084757

Fernandez Cantos, Antonio	00023008
Fernandez Cruz, Antonio	00085144
Fernandez Lima, Jose	00064759
Fernandez Loyola, Antonio	00057293
Fernandez Lozoya, Antonio	00056185
Fernandez Marmanillo, José	00023953
Fernandez Molinillo, Francisco Dionisio	00012336
Fernandez Moratin, Nicolás	00033145
Fernandez Quevedo, Francisco [Fray]	00058035
Fernandez Santillan, Miguel	00084619
Fernandez Solano, Antonio	00036358
Fernandez Vallejo, Francisco Antonio	00057327
Fernandez Velarde, Pedro	00016273
Fernandez Velasco, Bernardino, Frias [Duque]	00017922
Fernandez, Blas [Fray]	00056425
Fernandez, Francisco [Fray]	00048205
Fernandez, Manuel	00037690
Ferrer Blasco, Pedro Jeronimo	00057460
Ferrer Castro Juan Bautista	00016538
Ferrer, Juan Bautista	00057693
Ferrer, Matias	00037157
Ferrer, Vicente [Fray]	00052546
Ferrerias Garcia, Juan	00028359
Figuera, Pedro Francisco	00058070
Figueroa, Lope	00036843
Fiñana, Miguel [Fray]	00076524
Flores Pabon, Sebastian	00016068
Flores San Francisco, Andres	00049463
Flores, Jose Miguel	00012232
Flores, Pedro	00044797
Florez Canseco, Casimiro	00038305
Florez, Tomas Antonio	00057807
Folch, Francisco Fausto [Fray]	00052315
Fordes, Francisco	00010857
Foyuo, Bernardo Fermin [Fray]	00084597
Franciscano, Miguel [Padre]	00075576
Franco, Jose [Fray]	00023948
Franquis Laso Castilla, Jose	00016244
Freile, Francisco [Fray]	00051262
Freira, Bernardo Ignacio	00056667
Fresneda, Pedro [Padre]	00026345
Frias Ayala, Lorenzo [Fray]	00057214
Frias, Francisco [Fray]	00057257
Frias, Julian	00084180
Frias, Manuel Antonio [Padre]	00049083
Frutos, Tomas [Fray]	00057120

Fuente, Blas	00056500
Fuente, Francisco Antonio	00085233
Fuertes, Vicente Antonio	00085012
Furio, Miguel	00063559
Fuste, Tomas	00053273
Galiano, Francisco [Fray]	00037176
Galindo, Gregorio [Doctor]	00016310
Galisteo, Andres [Fray]	00084710
Gallinero Garcia, Manuel [Fray]	00058071
Gallinero, Manuel [Fray]	00056925
Gallo Castillo, Nicolas	00038678
Gallo, Nicolas [Padre]	00030681
Galvez Muñoz, Francisco [Fray]	00057279
Gamboa, Jose	00089393
Gamiz, Juan [Padre]	00038331
Garay, Manuel	00057335
Garcia Alesson, Manuel	00010920
Garcia Colorado Toledano, Francisco	00036970
Garcia Concepcion, Jose [Fray]	00084625
Garcia Garrido, Felix	00057716
Garcia Herranz, Francisco	00000365
Garcia Huerta, Vicente	00039021
Garcia Lomana, Juan	00089394
Garcia Martinez, Jose	00084881
Garcia Moral, Gaspar [Fray]	00083709
Garcia Munatones, Joaquin [Fray]	00034648
Garcia Parreño, Francisco	00056478
Garcia Rodrigo, Melchor [Fray]	00056692
Garcia Samaniego, Felipe	00002123
Garcia Samaniego, Juan Antonio	00010929
Garcia Santa Marina, Lorenzo [Fray]	00076797
Garcia Talaverano, Salvador	00057198
Garcia Tapiador, Gabriel [Fray]	00083729
Garcia Torres, Pedro Leon	00084599
Garcia Ventas, Francisco [Fray]	00037300
Garcia, Alfonso	00056187
Garcia, Diego [Fray]	00056582
Garcia, Domingo [Padre]	00039477
Garcia, Jeronimo [Fray]	00057464
Garcia, Lorenzo [Fray]	00056594
Garcia, Martin [Padre]	00064367
Garcia, Miguel Gregorio	00057436
Garcia, Salvador [Fray]	00056580
Garrido, Juan [Fray]	00057290
Garro Alizondo, Silvestre [Fray]	00057356
Garzo Lasarte, Manuel [Fray]	00038417

Gaspar Pinedo, Antonio	00056643
Gaspar, Jose Manuel	00053267
Gaston, Felix	00056483
Gaudiso Chia, Jose [Fray]	00083752
Gaviria Leon, Diego	00024750
Generelo Spinola, Manuel [Fray]	00038412
Gil, Manuel [Padre]	00035960
Gil, Pablo	00057447
Gilabert, Francisco Salvador [Fray]	00063289
Gilabert, Vicente	00031496
Gilaberte, Francisco Salvador	00083747
Gilaberte, Paterno Salvador [Fray]	00028290
Gisbert, Esteban	00064902
Goitia, Ignacio Domingo	00035770
Gomez Bravo, Juan	00037731
Gomez Cos, Gaspar	00038302
Gomez Falcon, Santiago	00040925
Gomez Lima, Manuel	00084781
Gomez Marco, Manuel	00047833
Gómez Ortega, Casimiro	00024738
Gomez, Antonio [Fray]	00057553
Gomez, Felix [Padre]	00057129
Gomez, Francisco Javier [Fray]	00057342
Gomez, Jose	00084167
Gomez, Marco	00057253
Gomez, Miguel [Padre]	00039473
Gonzalez Apodaca, Alonso [Fray]	00036313
Gonzalez Artaza Zarate, Manuel	00038497
Gonzalez Barcena, Francisco	00036886
Gonzalez Cardenas, Antonio [Padre]	00056499
Gonzalez Cernuda, Juan Francisco	00076516
González Cid, Juan Francisco	00075987
Gonzalez Dios, Juan	00039500
Gonzalez Frias, Juan Antonio [Fray]	00057835
Gonzalez Infanzón, Antonio	00076510
Gonzalez Leon, Francisco	00037128
Gonzalez Marron, Carlos	00089385
Gonzalez Silva, Juan	00084629
Gonzalez Sosa, Pedro [Fray]	00037730
Gonzalez Tieso, Pedro	00028375
Gonzalez Torres, Eusebio [Fray]	00038494
Gonzalez, Fermin	00121821
Gonzalez, Francisco	00057776
González, Francisco Javier [Fray]	00039468
Gonzalez, Jose	00052831
Gonzalez, Mateo [Fray]	00035786

Gonzalez, Vicente [Fray]	00057171
Govantes, Juan [Fray]	00039481
Goyeneche, Antonio	00037635
Goyeneta, Joaquin	00052862
Gozalvo, Marcelino [Padre]	00037605
Gracian Serrano, Felipe	00038329
Granada, Angel [Fray]	00037168
Granada, Bernardino [Fray]	00057652
Granada, Gregorio	00083742
Granados, Francisco [Padre]	00037708
Granda Rivero, Domingo [Fray]	00055917
Grosso, Cristobal [Doctor]	00053156
Güell Trelles, Jose Ventura	00011095
Guerao Aznar, Cenon	00084874
Guerra Sandoval, Juan Alfonso	00034667
Guerra, Antonio	00027796
Guerra, Jose [Padre]	00048889
Guerrero, Antonio [Fray]	00084985
Guevara Vasconcelos, Jose	00008434
Guillaman, Fernando	00085590
Guin, Jose	00056349
Guindos, Narciso [Fray]	00037241
Gutierrez Alique, Bernardo	00030903
Gutierrez Castro, Antonio	00085016
Gutierrez Moran, Agustin [Fray]	00076456
Gutierrez Sal, Antonio	00038492
Gutierrez, Antonio	00052769
Gutierrez, Diego [Fray]	00057360
Gutierrez, Juan	00038288
Guzman, Pedro	00065009
Haller, Juan [Padre]	00038283
Hardales, Andres [Fray]	00084703
Hariza Rendon, Alonso	00057688
Henamorado, Marcos	00037210
Hera, Pedro	00075982
Heredia, Alonso [Fray]	00084772
Hernandez Magro, Pedro [Fray]	00057358
Herrera Barnuevo, Manuel [Padre]	00056301
Herrera Barnuevo, Manuel Jose	00084166
Herrera Barrionuevo, Manuel	00038237
Herrera Paniagua, Francisco	00057695
Herrero, Antonio Maria	00056559
Herrero, Custodio [Fray]	00085011
Herrero, Leonardo [Padre]	00083959
Herrero, Manuel Antonio	00037637
Hidalgo, Juan [Fray]	00056512

Hidalgo, Salvador [Fray]	00084987
Hierro, Jose [Padre]	00065169
Higgins, Juan	00013387
Hijares, Eusebio	00057718
Hontiveros, Cayetano [Fray]	00056029
Horta Aguilera, Francisco	00056568
Huerta Vega, Francisco Manuel	00028393
Huriburu, Jose [Fray]	00084777
Hurtado Mendoza, Juan [Fray]	00053540
Hurtado, Gutierre	00056661
Hurtado, Juan	00076518
Ibañez Mendoza, Jose Felix	00056304
Ibañez, Jose [Fray]	00048249
Ibarra, Joaquín	00028435
Ibero Cortes, Vicente Elias [Fray]	00056614
Infante, Francisco Ramon	00057857
Insa, Vicente [Fray]	00057469
Interian Ayala, Juan [Fray]	00023369
Inurre, Pedro Francisco	00076273
Iriarte, Bernardo	00000391
Iriarte, Juan	00023446
Iriarte, Tomas	00024529
Irigoyen	00034178
Irigoyen, Manuel	00056516
Irlanda, Antonio [Fray]	00084529
Isla, Jose Francisco [Padre]	00030693
Isla, Juan	00004050
Iturrate, Jose [Padre]	00037602
Iturri, Joaquin Ignacio	00046916
Izquierdo, Francisco [Fray]	00016539
Izuzquiza, Jerónimo	00064804
Jaen, Jeronimo [Fray]	00032936
Jartua, Miguel	00034725
Jesus Maria, Juan [Fray]	00037267
Jimenez Curto, Jose	00057425
Jimenez Mejorada, Jacinto [Fray]	00076455
Jimenez Saforcada, Ignacio	00056591
Jimenez, Carlos [Fray]	00057552
Jimenez, Cristobal Manuel [Padre]	00054949
Jimenez, Diego [Fray]	00057096
Jimenez, Diego [Fray]	00060435
Jimenez, Jacinto [Fray]	00056481
Jimenez, Jose [Doctor]	00056186
Jimenez, Manuel [Fray]	00052303
Jimeno, Vicente	00038301
Jordan, Jose	00057073

Jose, Juan [Fray]	00056670
Jose, Ramon [Fray]	00056791
Jovellanos, Gaspar Melchor	00000407
Joven Trigo, Manuel	00030280
Jover, Jacinto [Fray]	00056317
Juan Carlos Miguel	00056694
Labarejos, Francisco [Fray]	00056033
Laboratoria, Jose Juan	00037240
Labrussel, Ignacio	00039717
Lacambra, Pedro	00038299
Lacy, Juan	00047841
Ladron Guevara, Juan [Fray]	00016617
Laguna, Alejandro [Padre]	00057233
Lamana, Diego [Fray]	00057467
Lansol, Pedro Ignacio	00053274
Lanuza, Juan [Fray]	00084699
Lara, Fausto	00084642
Lardizabal Elorza, Juan Antonio	00017414
Lardizabal Uribe, Manuel Jose	00000421
Lario Lancis, Juan	00016335
Larramendi, Antonio [Fray]	00084762
Larramendi, Francisco Antonio	00030692
Larrumbe, Jose	00016566
Lasanta, Agustin [Fray]	00038998
Latanzon, Pedro [Fray]	00056593
Latre, Jose [Fray]	00056701
Lázaro Valdés, Pedro	00077764
Lazaro Vega, Juan	00037603
Lazaro, Antonio	00054537
Lecera, Francisco	00056708
Leilo Levanto, Francisco	00057767
Leon, Felix [Fray]	00038332
Leon, Juan [Fray]	00038468
Lerin Apaloaza, Jose	00038330
Lezama, Benito [Fray]	00057711
Lezana, Joaquin [Fray]	00057023
Licardo Rivera, Manuel	00056307
Lima Villalobos, Bartolome [Fray]	00084712
Lindoso, Jose Cayetano	00053544
Linero, Cristobal [Fray]	00057195
Lira, Manuel	00075980
Liras, Andres	00057407
Lissa, Pedro [Padre]	00056341
Llanzol Romany, Pedro	00015124
Llerena, Alonso [Fray]	00057682
Llido, Francisco [Fray]	00056586

Londoño, Jose [Fray]	00083732
Lopez Aguirre, Diego	00048886
Lopez Aguirre, Manuel	00016289
Lopez Ayala, Ignacio	00014508
Lopez Azala, Antonio [Padre]	00037187
Lopez Bodado, Juan	00064792
Lopez Casas, Alonso [Fray]	00038328
Lopez Cotilla, Jose Antonio [Padre]	00037207
Lopez Gil, Jose Antonio [Fray]	00016631
Lopez Ibanez, Jose	00038411
Lopez Mateos, Pedro	00057429
Lopez Moreno, Ignacio	00053281
Lopez Oliver, Francisco	00042133
Lopez Redal, Jose [Fray]	00057022
Lopez Reoyos, Juan [Fray]	00056571
Lopez, Andres [Fray]	00083670
Lopez, Cristobal [Fray]	00076513
Lopez, Francisco	00084590
Lopez, Jose Antonio [Fray]	00083771
Lopez, Manuel	00084671
Lopez, Miguel [Fray]	00038297
Lorenzo Yangués, Francisco	00038300
Losada, Domingo [Fray]	00038268
Loyola, Ignacio	00020354
Lozano, Agustin Ignacio	00038464
Lozano, Pedro	00057014
Lucia, Diego Jose [Fray]	00057453
Luengo, Francisco Ignacio [Padre]	00064985
Lujan Frias, Diego Tomas [Padre]	00084613
Lujan Silva, Fernando Lazaro, Almodovar [Marques]	00010424
Lumbreras, Pedro [Fray]	00038272
Lumbreras, Pedro [Padre]	00056909
Luna, Alonso [Fray]	00040383
Machado, Bartolome Antonio	00084688
Macias Pedrejon, Manuel	00016311
Madalena, Tomás [Fray]	00030683
Madre Dios, Alonso [Fray]	00076529
Madre Dios, Eugenio [Fray]	00057264
Madre Dios, Francisco [Fray]	00089373
Madrid, Diego [Fray]	00055435
Madrid, Francisco [Fray]	00057274
Madrid, Jose [Fray]	00037301
Madrid, Pablo [Fray]	00085140
Magi, Raimundo Melchor	00016228
Magro Zurita, Jacobo	00043869
Malavehar, Juan Ignacio [Padre]	00056660

Malla, Dionisio	00057232
Malonda, Miguel Ignacio	00037156
Manchano, Manuel	0004095c
Manes, Jose [Fray]	00038990
Manso, Pedro [Fray]	00037302
Mantilla, Jose	00084621
Manzanares, Juan Antonio	00057108
Manzano Carvajal, Juan Domingo	00016627
Manzano, Jose	00057109
Mañer, Salvador Jose	00011882
Mañes, Vicente [Fray]	00056453
Marcilla, Sebastián	00064802
Marco, Jose [Fray]	00081601
Marigil, Juan	00089392
Marimon, Francisco	00016842
Marin, Benito [Fray]	00004326
Marin, Jose [Fray]	00061254
Marin, Juan [Fray]	00057770
Martin Campo, Francisco	00038488
Martin Gil, José	00057782
Martin Guzman, Jose	00086600
Martin Villacomer, Francisco	00064716
Martinez Anguiano, Francisco [Fray]	00056315
Martinez Hermosilla, Andres [Fray]	00052242
Martinez Lorente, Agustin	00047831
Martinez Marina, Francisco	00036685
Martinez Maruri, Diego	00084637
Martinez Mauri, Diego	00084878
Martinez Morales, Francisco	00014489
Martinez Robledo, Eusebio	00065004
Martinez Salafranca, Juan	00030736
Martinez Tejadillos, Miguel	00084755
Martínez Villaseñor, José	00062070
Martinez, Diego [Fray]	00064408
Martínez, Domingo [Fray]	00077765
Martinez, Francisco [Fray]	00047838
Martinez, Jose	00036395
Martinez, Jose [Fray]	00056972
Martinez, Jose Maria	00054541
Martinez, Juan [Fray]	00084986
Martinez, Luis Mateo	00056394
Martinez, Martin	00030735
Martinez, Mateo [Fray]	00047830
Martinez, Mauro [Fray]	00049237
Martinez, Miguel [Fray]	00055933
Mascortt, Jose	00056350

Masso, Antonio [Fray]	00056284
Mata, Pedro [Fray]	00076450
Mateo Moreno, Jose	00076519
Mateo, Juan	00056474
Mateos Guerrero, Cristóbal [Fray]	00065106
Mateos Romero, Pedro [Fray]	00037298
Mathe, Juan	00057828
Matheu, Matias	00065019
Mayans Siscar, Gregorio	00027432
Maymo Ribes, Jose	00037255
Mayoral, Andres	00006521
Mayorga, Matias	00039498
Mazarredo Salazar, Jose	00013612
Mecolaeta, Diego [Fray]	00056926
Medina, Juan	00038253
Medrano, Manuel [Fray]	00031774
Melendo, Juan Antonio	00065184
Melgar, Sebastian	00047867
Mena, Manuel Antonio	00031550
Mendinueta, Miguel	00057070
Mendoza, Basilio [Fray]	00038997
Mendoza, Jacinto [Fray]	00028373
Menendez, Adriano [Fray]	00056678
Merino Cevallos, Diego	00037656
Merino, Juan Manuel	00016449
Meseguer Arrufat, Francisco	00041971
Mestre, Miguel [Fray]	00057156
Metto, David	00064761
Mier, Santiago	00046792
Miñana Blasco, Antonio [Padre]	00056519
Miñano, Carlos Jose	00056508
Mir, Jose	00084785
Miralles, Jaime	00057752
Miranda Oquendo Canalejo, Juan Jose	00004474
Miranda, Francisco [Padre]	00057577
Mirantes, Torcuato	00064366
Molina Cano, Andres [Fray]	00037399
Molina, Baltasar	00037695
Molina, Francisco [Fray]	00029976
Molina, Gaspar [Fray]	00013429
Momoytio, Francisco [Fray]	00085146
Monasterio, Nicolas [Fray]	00057853
Moneon, Tomas	00057440
Moneva Florez, Basilio Jose	00030107
Monreal, Jeronimo	00037717
Monreal, Miguel Jerónimo [Fray]	00065109

Monsalve, Pedro	00041639
Montalvo, Baltasar [Fray]	00048786
Montanchez, Francisco [Fray]	00075999
Montero Espinosa, Juan Jose	00027943
Montero, Francisco [Padre]	00032143
Montero, Julian [Fray]	00065071
Montero, Pablo	00084116
Montero, Pedro [Fray]	00038414
Monteverde, Miguel	00036288
Montiano Luyando, Agustin	00004525
Montiel Fuentenovilla, Francisco [Fray]	00056032
Montoya Sandoval, Garcia	00084623
Montoya, Gines [Padre]	00037639
Monzon, Tomas [Fray]	00057259
Mora, Jose	00057346
Mora, Juan [Fray]	00084627
Moral, Francisco Ignacio	00056588
Moral, Ignacio [Fray]	00065117
Morales Villamayor, Diego	00004544
Morales, Cristobal [Fray]	00048792
Morales, Garcia Antonio [Fray]	00037606
Morales, Miguel [Fray]	00047840
Morán, Justo	00065072
Morcote, Jose [Fray]	00064799
Moreda, Manuel	00084640
Moreiras, Gregorio [Fray]	00057331
Moreno Curiel, Jose [Fray]	00030012
Moreno, Lucas [Fray]	00100326
Moscosi, Jacinto	00056343
Munguía, Bartolomé	00058112
Muñoz Cejudo, Jeronimo	00047147
Muñoz, Francisco	00056504
Muñoz, Jose [Fray]	00056404
Muñoz, Miguel Eugenio	00001628
Murga, Francisco	00056182
Murillo Velarde, Pedro	00057850
Muru, Joaquin	00056477
Muzquiz Aldunate, Rafael	00016395
Najera, Juan [Fray]	00101568
Narvaez Carcamo, Agustin [Fray]	00027903
Nasarre Ferriz, Blas Antonio	00024625
Navarro Aguilar, Matias Antonio [Fray]	00075993
Navarro Leganes, Gabriel [Fray]	00057855
Navarro Torres, Blas Jose	00056403
Navarro Valencia, Francisco	00056358
Navarro, Andres	00026301

Navarro, Francisco	00024397
Navarro, Jose	00038430
Navarro, Miguel [Fray]	00065123
Navarro, Tomas	00029409
Navas San Llorente, Jose	00055936
Navas, Gaspar Luis [Fray]	00084669
Navas, Vicente [Fray]	00029977
Navascues, Nicolas	00083335
Nebot Sanz, Jose	00029404
Nebra, Jose	00038175
Neve, Isidoro [Fray]	00057180
Nieva, Jose	00056183
Noguera, Antonio [Fray]	00056196
Noriega, Jose Esteban [Fray]	00016323
Nuevalos Cañizares, Juan [Fray]	00085678
Nuñez, Antonio	00027896
Nuñez, Cristobal [Fray]	00030069
Nuñez, Diego Ventura	00057836
Nuñez, Francisco [Fray]	00038306
Ocaña, Pedro [Fray]	00056031
Ojeda, Jose [Fray]	00038293
Olarte, Carlos	00076283
Olazabal, Francisco	00040418
Oliva, Jose	00076794
Olivares, Jose [Fray]	00076503
Oliver, Felipe [Fray]	00056510
Olmo, Fernando [Fray]	00084705
Oloriz, Juan Crisosotomo Benito	00025121
Orden, Juan Antonio	00057424
Ordenana, Miguel Ignacio	00036315
Ordonez, Manuel [Fray]	00037613
Ordoñez Angulo, Jose	00057834
Orellana, Felix Alonso [Fray]	00058064
Orihuela, Miguel Antonio	00057334
Orozco Bazterra, Agustin	00057270
Ortega, Tomas [Fray]	00048888
Orti Figueroles, Francisco	00057470
Ortiz Amaya, Juan Jose	00031773
Ortiz Delgado, Jose [Fray]	00056947
Ortiz Garay, Tomas	00037723
Ortiz Zugasti, Lucas Constantino	00056136
Ortiz, Gabriel	00056137
Ortuño, Felipe [Fray]	00084774
Otero, Sebastian [Fray]	00056340
Ovando Solis, Jose Antonio [Fray]	00085003
Oviedo, Agustin [Fray]	00056518

Padierna, Jose	00056361
Paez, Faustino	00044154
Palanco Benitez, Jose [Fray]	00089384
Palanco Tudela, Manuel	00038483
Palanco, Manuel [Fray]	00084681
Pallas, Francisco Bruno	00075981
Palma Campo Real, Bartolome	00056569
Palma, Cristobal	00057297
Palomares, Francisco Javier Santiago	00003965
Palomeque, Leandro [Fray]	00056188
Palomino Davila, Antonio	00057753
Pantoja Rivas, Alonso	00037667
Parada Orea, Vicente	00037661
Paredes, Jose [Fray]	00078489
Parma, Antonio Maria [Fray]	00056702
Paron, Francisco	00039487
Parra, Juan [Fray]	00042483
Pascual Miralles, Francisco	00057988
Pascual, Miguel [Fray]	00056965
Pastor Calvento Savariego, Juan	00057209
Pastor, Juan Francisco	00065132
Pavon, Alonso	00056573
Paz, Jeronimo [Fray]	00084686
Pedron Torre, Tomas	00084996
Penaranda, Gil	00047832
Peña, Jacinto	00074103
Peña, Jose Ignacio [Fray]	00084760
Peña, Manuel [Padre]	00037724
Peralbo Corral, Manuel	00039505
Peralta, Antonio	00011199
Perchet, Pedro	00023399
Perello, Antonio [Fray]	00056195
Perez Bayer, Francisco	00002735
Perez Garcia, Jose	00037750
Perez Pastor, Miguel	00037272
Perez Quinones, Francisco	00037188
Perez Rivera, Domingo	00017447
Perez Sandoval, Francisco	00057426
Pérez Vaquerizo, José [Fray]	00140042
Perez Vargas Sirviente, Bartolome	00056497
Perez Vargas, Baltasar	00040088
Perez, Jeronimo [Fray]	00037162
Perez, Manuel	00038313
Pérez, Miguel [Fray]	00038361
Picazo, Juan [Fray]	00047843
Picornell, Francisco [Fray]	00057157

Pilona, Diego	00037751
Pinal, Pedro Jose [Fray]	00084711
Pinedo, Francisco [Fray]	00083798
Pingarron, Alfonso Gabriel	00084183
Pintor Herrador, Juan	00084174
Pizarro, Carlos	00056363
Plana, Roque [Fray]	00064827
Planells, Juan	00064762
Planes, Juan Bautista	00084766
Plasencia, Jose Antonio [Fray]	00057818
Plaza, Jose Felix	00054952
Ponce Leon, Felipe	00034514
Ponce Leon, Jose [Fray]	00057685
Ponz Piquer, Antonio	00033135
Portichuelo, Antonio Francisco	00057729
Posse, Pablo [Fray]	00084692
Pradillo, Jose	00056184
Prado, Antonio Ventura [Fray]	00028377
Prado, Manuel	00057584
Prats, Elias [Fray]	00056204
Preciado, Tomas F.	00089380
Prieto Bustamante, Manuel Antonio	00035748
Prieto, Domingo [Padre]	00037173
Prieto, Manuel	00057717
Pruna, Pedro [Fray]	00064681
Puche, Leopoldo	00084883
Puebla, Felix [Fray]	00058042
Puerta Palanco, Jose [Fray]	00084992
Puerto, Antonio	00057100
Puerto, Jose [Fray]	00083665
Pueyo, Alberto	00057330
Puga, Antonio [Fray]	00075985
Puga, Juan [Fray]	00024872
Puga, Sebastian [Fray]	00085014
Puig, Leopoldo Jeronimo	00023151
Quijano, Lorenzo	00084181
Quintana, Pedro [Padre]	00055437
Quintana, Pedro Jeronimo	00003640
Rada Aguirre, Jose	00016262
Rada, Juan Antonio	00028388
Rajas, Martin	00001362
Rajas, Martin [Padre]	00052768
Ramirez Galan, Lucas [Fray]	00016569
Ramirez, Martin [Padre]	00037251
Ramirez, Vicente	00056047
Ramiro, Pedro [Fray]	00057750

Ramis, Rafael [Fray]	00056205
Ramos, Antonio	00057428
Ramos, Clemente	00057303
Ramos, Custodio	00076500
Ravella, Esteban [Fray]	00056450
Rebollida, Raimundo José [Fray]	00064769
Rebull, Jaime Agustin [Fray]	00038426
Recio, Diego [Fray]	00084748
Reguera, Carlos [Padre]	00026346
Reinoso Quiñones, Bernardo Jose	00056574
Reja Asuncion, Juan [Fray]	00056958
Reluz, Tomas [Fray]	00058034
Remedios, Manuel [Fray]	00058063
Resa, Juan [Fray]	00048793
Revenga, Jose	00057178
Rey Negrilla, Bartolome [Fray]	00037713
Rey Trigueros, Jose [Fray]	00056632
Reyes, Antonio	00038238
Riambau, Juan	00031776
Riba Herrera, Juan	00056666
Ribas, Mariano	00056043
Ricarti, Gabriel [Padre]	00056167
Ridaura, Vicente Julian	00057773
Riera, Agustin [Fray]	00064720
Riesco, Francisco	00057434
Rio, Jorge	00028461
Rio, Juan [Fray]	00057221
Rio, Juan Antonio [Padre]	00083336
Rio, Juan Francisco [Fray]	00056607
Ripa, Antonio	00038274
Ripa, Juan	00064801
Rivas, Jose	00038820
Rivas, José [Fray]	00064793
Rivera, Diego	00057554
Rivera, Manuel Bernardo [Fray]	00037133
Rivero Angulo, Domingo Antonio	00040905
Robles, Francisco [Fray]	00048257
Robles, Jose Andres	00056162
Roca, Francisco Javier	00056563
Roca, Jose [Padre]	00083672
Roco, Francisco Javier	00057790
Roda, Manuel Felipe	00000706
Rodenas, Tomas	00057311
Rodriguez Amescua, Alfonso	00036759
Rodriguez Bravo, Pedro [Fray]	00106222
Rodriguez Campomanes, Pedro	00000709

Rodriguez Castañon, Juan Manuel	00016567
Rodriguez Castro, Manuel Francisco	00036680
Rodriguez Gallegos, Antonio	00076423
Rodriguez Guillen, Pedro [Fray]	00057851
Rodriguez Laso, Nicolas	00025076
Rodriguez Ramirez, Jose	00038245
Rodriguez Ridozes, Gerónimo [Fray]	00037729
Rodriguez, Anselmo [Fray]	00016166
Rodriguez, Domingo	00057018
Rodriguez, Fabian [Fray]	00030393
Rodriguez, Jose [Fray]	00056570
Rodriguez, Jose Javier	00016404
Rodriguez, Miguel	00084876
Rojas Loyola, Gabriel	00003787
Rojas, Bartolome [Fray]	00037741
Rojo, Juan Bernardino	00085149
Roldán, Alonso [Fray]	00065179
Roma, Basilio	00038276
Ros, Juan [Fray]	00056953
Rosell, Antonio	00002077
Rostriga, Diego	00033176
Rua, Francisco	00007106
Rubio, Isidoro [Fray]	00010030
Rubio, Juan	00022353
Rueda, Antonio	00056795
Ruiz Celada Mediavilla, Jose	00007804
Ruiz Funes, Salvador	00084609
Ruiz Guzman, Alfonso	00056189
Ruiz, Felipe	00057184
Ruiz, Jose [Fray]	00056492
Ruiz, Matias	00084673
Ruiz, Narciso [Fray]	00037178
Rus, Agustín [Fray]	00076468
Saavedra, Manuel [Fray]	00048219
Saavedra, Manuel [Fray]	00084780
Saavedra, Miguel [Fray]	00056482
Sacedon, Francisco [Fray]	00058040
Saenz Buruaga, Juan	00016540
Sagardoy, Miguel	00039497
Sala, Jose [Fray]	00056452
Sala, Ramon	00056792
Salamanca, Jeronimo [Fray]	00056689
Salanova, Antonio [Fray]	00038429
Salazar, Pedro [Padre]	00064409
Salcedo, Cayetano Francisco	00084604
Sales, Agustin	00028655

Sales, Asensio	00016290
Salgado Moscoso, Martin [Fray]	00057181
Salgado, Gabriel [Fray]	00057709
Salinas Cabrera, Diego [Fray]	00100302
Salvador Ortega, Luis [Fray]	00037600
Salvador, Jose	00038822
San Agustin, Jeronimo [Fray]	00039470
San Agustin, Jose [Fray]	00064388
San Agustin, Pablo [Fray]	00085001
San Angelo, Fernando [Fray]	00064684
San Antonio, Alejandro [Fray]	00036186
San Antonio, Juan [Fray]	00057555
San Antonio, Martin [Fray]	00085143
San Bartolome, Jose [Fray]	00083763
San Benito, Miguel [Fray]	00064715
San Blas, Juan [Fray]	00056498
San Buenaventura, Pedro [Fray]	00057437
San Diego, Luis [Fray]	00089374
San Esteban, Floriano [Fray]	00058041
San Felipe, Diego [Fray]	00084704
San Francisco, Andres [Fray]	00056530
San Francisco, Antonio [Fray]	00056567
San Francisco, Miguel [Fray]	00057026
San Jaime, Juan [Padre]	00056318
San Joaquin, Antonio [Fray]	00058001
San Jorge, Antonio [Fray]	00057462
San Jose, Cristobal [Fray]	00057557
San Jose, Felix [Fray]	00044101
San Jose, Miguel [Fray] [Alias] Vallejo Berlanga, Miguel	00016225
San Jose, Paulino [Fray]	00056026
San Juan Bautista, Gaspar [Fray]	00057258
San Juan Bautista, Miguel [Fray]	00057089
San Juan, Cristobal	00036681
San Juan, Jose [Fray]	00039720
San Lorenzo, Diego [Fray]	00039478
San Lorenzo, Francisco [Fray]	00049082
San Lorenzo, José [Fray]	00077763
San Miguel, Bartolome [Fray]	00084661
San Nicolas Serrate, Francisco [Fray]	00057852
San Nicolas, Gaspar [Fray]	00058055
San Nicolas, Pablo [Fray]	00056575
San Pedro Alcantara, Francisco [Fray]	00057267
San Pedro, Bartolome [Fray]	00056535
Sánchez Barriga, Rafael	00055916
Sanchez Dominguez, Julian	00030065
Sanchez Feria, Bartolome	00084751

Sanchez Fernandez Coteria, Tomas Antonio	00012876
Sanchez Fuente, Antonio [Fray]	00057858
Sanchez Recalde, Ignacio [Fray]	00076796
Sanchez Reciente, Juan	00034712
Sanchez Toro, Jose	00058062
Sanchez, Agustin [Fray]	00037211
Sanchez, Ambrosio	00037693
Sanchez, Felix Francisco [Fray]	00056030
Sanchez, Juan [Fray]	00065020
Sanchis, Manuel [Fray]	00056587
Sancho Granado, Bernardo	00057231
Sancho Granado, Francisco	00033065
Sancho Granado, Jose	00016490
Sancho Laran, Juan Cristobal [Fray]	00036289
Sancho, Bernardo	00057083
Sancho, Pedro Manuel [Padre]	00037155
Sande Lago, Fernando	00086539
Sanguesa, Jose [Fray]	00056693
Sanjurjo, Juan Antonio [Fray]	00038466
Santa Ana, Diego [Fray]	00083749
Santa Barbara, Pedro [Fray]	00056529
Santa Maria, Nicolas [Fray]	00056691
Santa Rosa, Juan [Fray]	00057260
Santa Teresa, Luis [Fray]	00083783
Santander, Pedro [Fray]	00037754
Santayana, José	00015108
Santisimo Sacramento, Miguel [Fray]	00084628
Santiso Moscoso, Lorenzo	00034483
Santo E Sebastian [Fray]	00089376
Santo Tomas, Nicolas [Fray]	00057099
Santos Dominguez, Felipe	00000764
Santos, Bernardo	00056566
Sanz Ramiro, Mateo	00038486
Sarmiento Sotomayor, Antonio Alejandro [Padre]	00016546
Sarmiento, Martín [Fray]	00024523
Sarralde, Miguel	00002492
Savila, Francisco	00007162
Scio San Miguel, Felipe	00016437
Scotti, Francisco	00011804
Seco Bustamante, Silvestre [Fray]	00039474
Sedano Vallejo, Andres Jose	00030914
Seijo, Vicente	00012004
Senromá, Jose Antonio	00056964
Serda, Nicolas [Fray]	00030710
Serena, Esteban [Fray]	00057088
Sereno, Bartolome Francisco	00056359

Serrano, Manuel [Fray]	00056690
Serrantes Carrillo, Francisco	00002497
Serres, Juan	00056314
Sesse Broto Coscujuela, Julian	00057061
Sevilla Crisostomo, Juan [Fray]	00057127
Sevilla, Casimiro Fernando [Fray]	00120665
Sevilla, Isidoro [Fray]	00057599
Sevilla, Joaquin [Fray]	00057684
Sevilla, Juan Evangelista [Fray]	00083662
Sevilla, Luis Antonio [Fray]	00075579
Sevillano, Antonio	00084708
Silva, Francisco [Fray]	00084656
Silva, Jose [Padre]	00053295
Silva, Manuel [Padre]	00056536
Silva, Pedro	00084779
Sirera, Franco [Fray]	00056603
Soler, Manuel [Fray]	00084999
Soler, Pedro [Fray]	00038428
Soler, Ramon [Fray]	00064721
Solis Ardila, Vicente	00056572
Solis Manrique Lara, Pedro	00057580
Solis, Antonio [Padre]	00057766
Soriano, Cayetano [Fray]	00084664
Soro, Tomas [Fray]	00037728
Sorolla, Vicente	00065110
Sorribas, Miguel [Fray]	00064903
Sotelo, Francisco [Fray]	00030070
Squarzafigo Centurion, Vicente	00028362
Squarzafigo, Pedro Maria	00057085
Stanislao Valera, Pedro [Fray]	00055914
Suarez Rivera, Francisco	00031511
Suarez Zayas, Juan	00026235
Suarez, Diego	00056457
Sueiras, Francisco	00057289
Suñer, Angelo [Fray]	00056449
Suñol, Jose	00003115
Suria, Rafael [Fray]	00056793
Tafalla, Tomas [Fray]	00084690
Talamanco, Juan [Fray]	00041905
Tamayo, Tomas [Fray]	00056485
Tavira Almazan, Antonio	00016187
Tavira, Antonio	00057079
Tejedor, Alfonso	00028559
Tejo Torre, Bartolome	00009802
Tellado, Diego [Fray]	00064412
Tellez Acevedo, Antonio	00056395

Tello Eslava, Jose Carlos	00038502
Tello Laso Vega, Diego [Fray]	00053282
Tello, Alonso [Fray]	00056938
Temprado, Miguel [Fray]	00036326
Tenllado, Tomas [Fray]	00038285
Teran, Matias [Fray]	00057839
Terrero, Miguel Jeronimo [Fray]	00056528
Terreros, Esteban [Padre]	00031411
Tomás Blanco, José [Fray]	00065100
Tomás Miguel, Serafín [Fray]	00050123
Torre, Pedro	00057298
Torre, Pedro [Fray]	00099389
Torrejon, Raimundo [Fray]	00057465
Torres Villarroel, Diego	00037152
Torres, Antonio	00038284
Torres, Francisco Javier	00085141
Torres, Isidro Jose	00084611
Torrijos Vargas, Marcos	00038505
Tovar, Francisco [Fray]	00085005
Transfiguracion, Francisco [Fray]	00056489
Trijueque, Juan [Fray]	00064772
Trujillo, Pedro	00056959
Turégano, Juan	00075983
Ubago Oriate, Manuel	00083778
Ucar, Miguel Jeronimo	00037151
Urdániz, José [Fray]	00057024
Uriz, Javier	00016580
Urtesavel, Jose [Fray]	00057150
Urtusaustegui, Bernardo	00038499
Vadillo, Juan [Fray]	00039469
Valcarcel Dato, José	00057326
Valderrama, Alonso	00057771
Valdes Inclan, Nicolas Antonio	00085008
Valdes, Jose [Padre]	00032145
Valdivia, Juan [Padre]	00033867
Valencia, Eugenio Alberto [Fray]	00055931
Valero, Jose [Fray]	00056894
Valero, Martin	00083772
Valia, Francisco [Fray]	00057432
Valle, Tomas [Fray]	00016171
Vanhuefel, Jose	00064751
Vaquero, Antonio [Fray]	00039471
Vaquero, Francisco Paula	00034720
Varela, Juan Antonio	00083786
Vargas, Bartolome	00048795
Vargas, Bernabe [Padre]	00037150

Vargas, Bernardo [Padre]	00057302
Vargas, Eusebio [Fray]	00057165
Varona, Miguel	00084783
Vasco, Bernardo [Fray]	00057849
Vazquez Aldana, Jose Antonio [Fray]	00057261
Vazquez Tinoco, Pedro [Fray]	00037075
Vazquez Venegas Masso, Pedro	00005622
Vazquez Vera, Antonio	00057176
Vazquez, Francisco	00038821
Velasco, Baltasar [Fray]	00056491
Velasco, Diego [Fray]	00056579
Velasco, Matías [Fray]	00056687
Velasco, Pedro Andres	00023962
Velez Guevara, Antonio	00034607
Venero Tejada, Antonio	00039489
Ventura Fuente Valdes, Vicente	00056441
Vera Delgado, Juan Acisclo	00016022
Vera, Pedro	00036176
Victoria, Vicente	00056442
Vidal Cabases, Francisco	00033082
Vidal, Francisco [Fray]	00057315
Vidal, Manuel [Fray]	00030071
Vilanova, Matias [Fray]	00057751
Villaconejos, Manuel [Fray]	00058033
Villaconejos, Miguel [Fray]	00058039
Villafañe, Antonio	00046970
Villarroel, Jose	00057175
Villarrubia, Manuel	00057015
Villavieja, Jacinto Nicolas [Fray]	00064853
Villegas Oyarbide, Manuel	00028376
Viner, Jorge [Fray]	00037180
Viñer, Jose [Fray]	00057191
Wendlingen, Juan [Padre]	00083276
Xuarez Estrada, Jose	00083716
Yañez Aviles, Pablo [Fray]	00038165
Yoldi, Bernardo [Fray]	00083762
Zabala, José [Fray]	00057027
Zalamea, Miguel [Fray]	00057680
Zambrano Olmos, Jose	00078490
Zamora, Antonio	00023237
Zaragoza, Pedro [Fray]	00076464
Zayas Gudiel, Urbano Dionisio [Fray]	00056948
Zayas Guzman, Luis [Fray]	00055935
Zayas, Pedro [Fray]	00084531
Zuazo Tejada, Juan [Fray]	00016558
Zuñiga, Joaquin	00043193

8.2.3. Redes de autores y censores

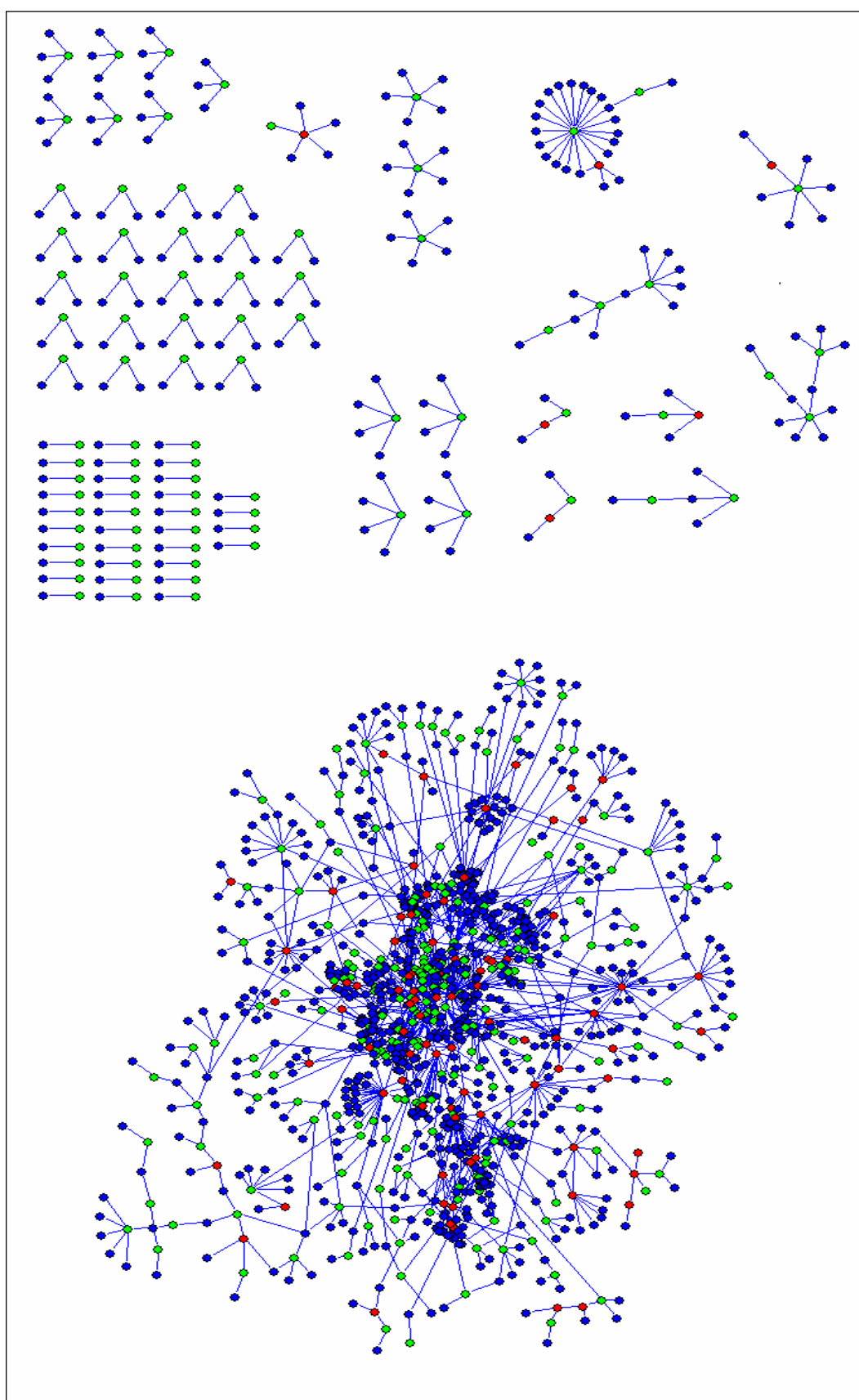


Gráfico 1. Relaciones de censuras entre 1720 y 1749, divididas por islas

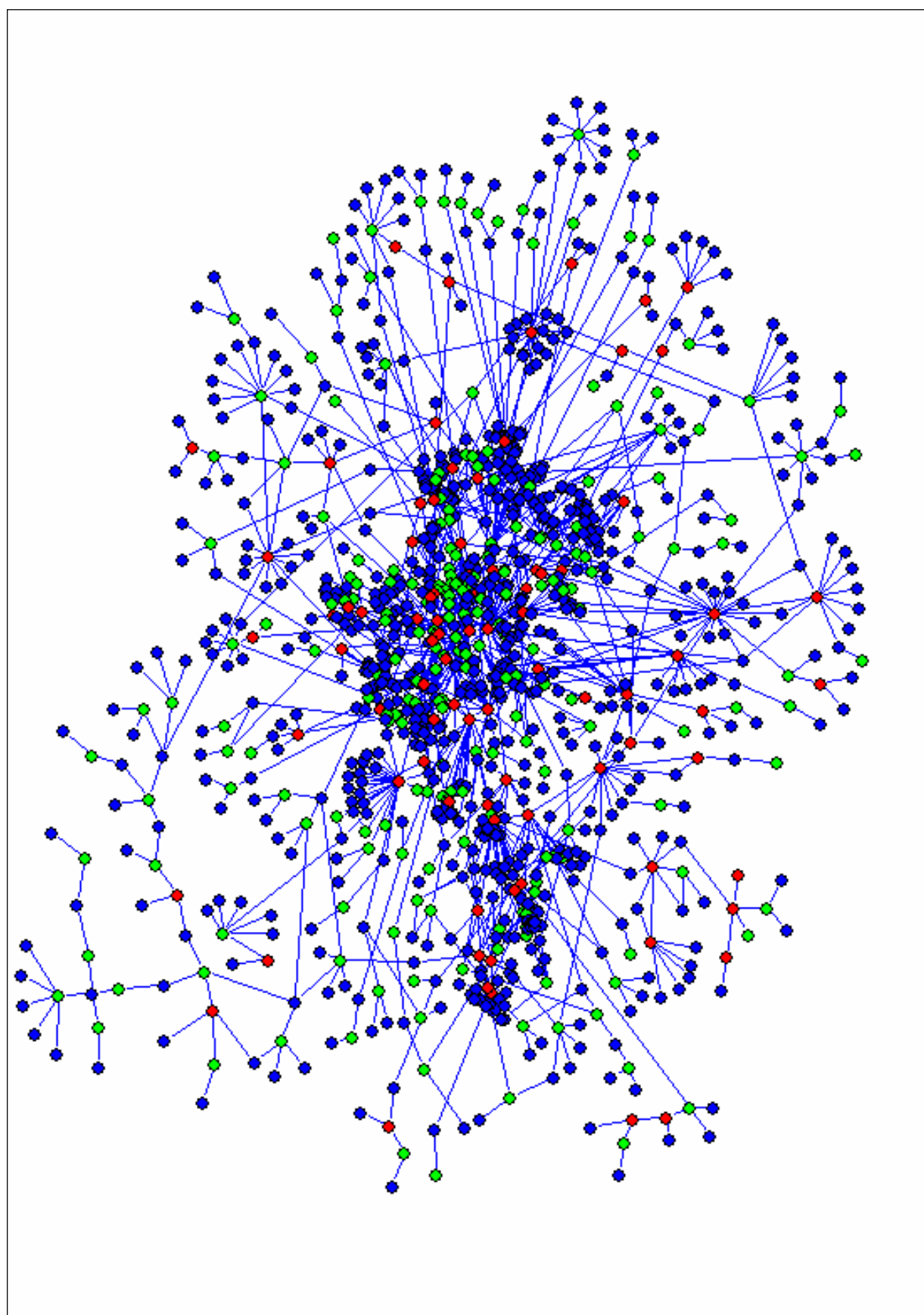


Gráfico 2. Grupo principal de censores entre 1720 y 1749

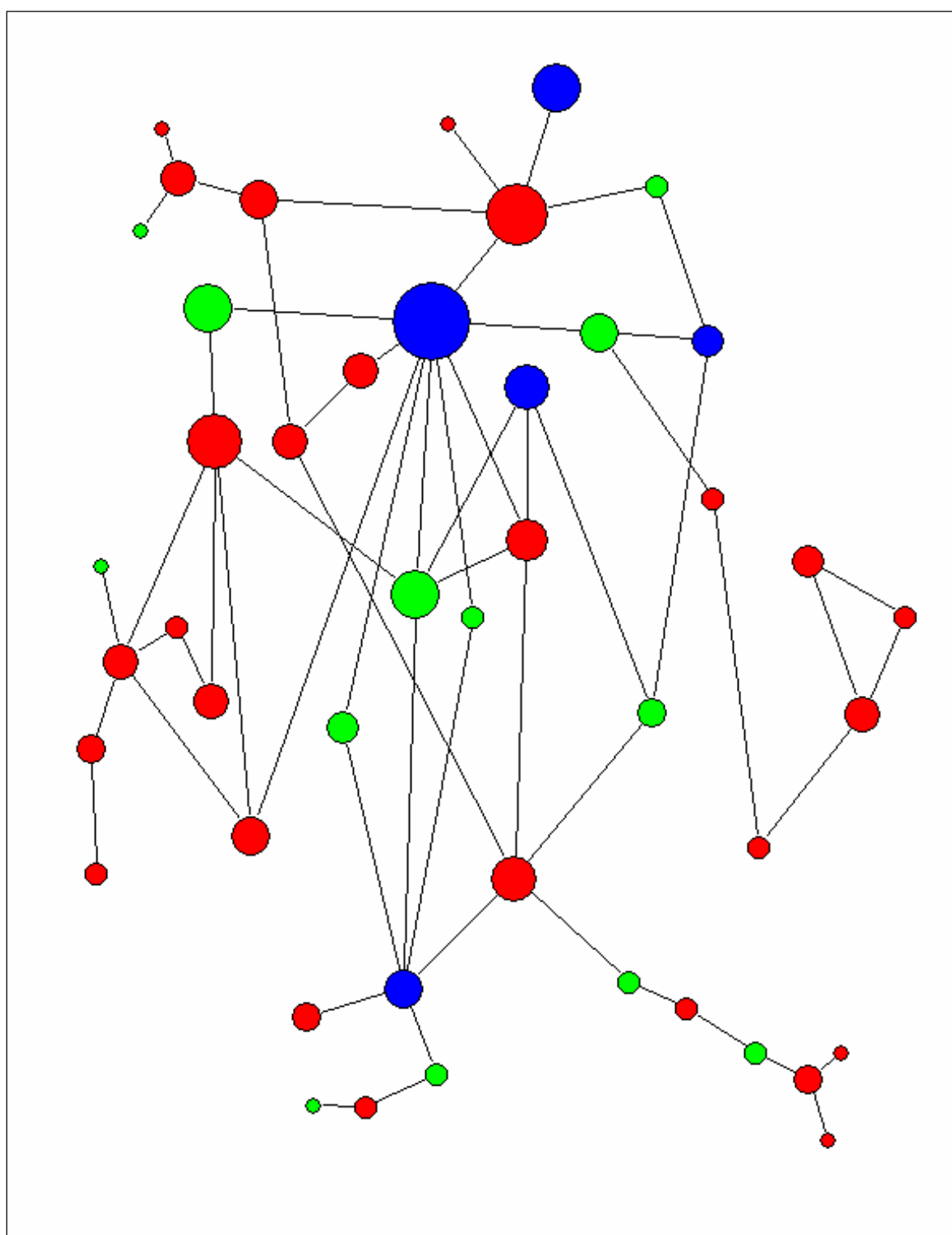


Gráfico 3. Suma de relaciones del grupo principal entre 1720 y 1749

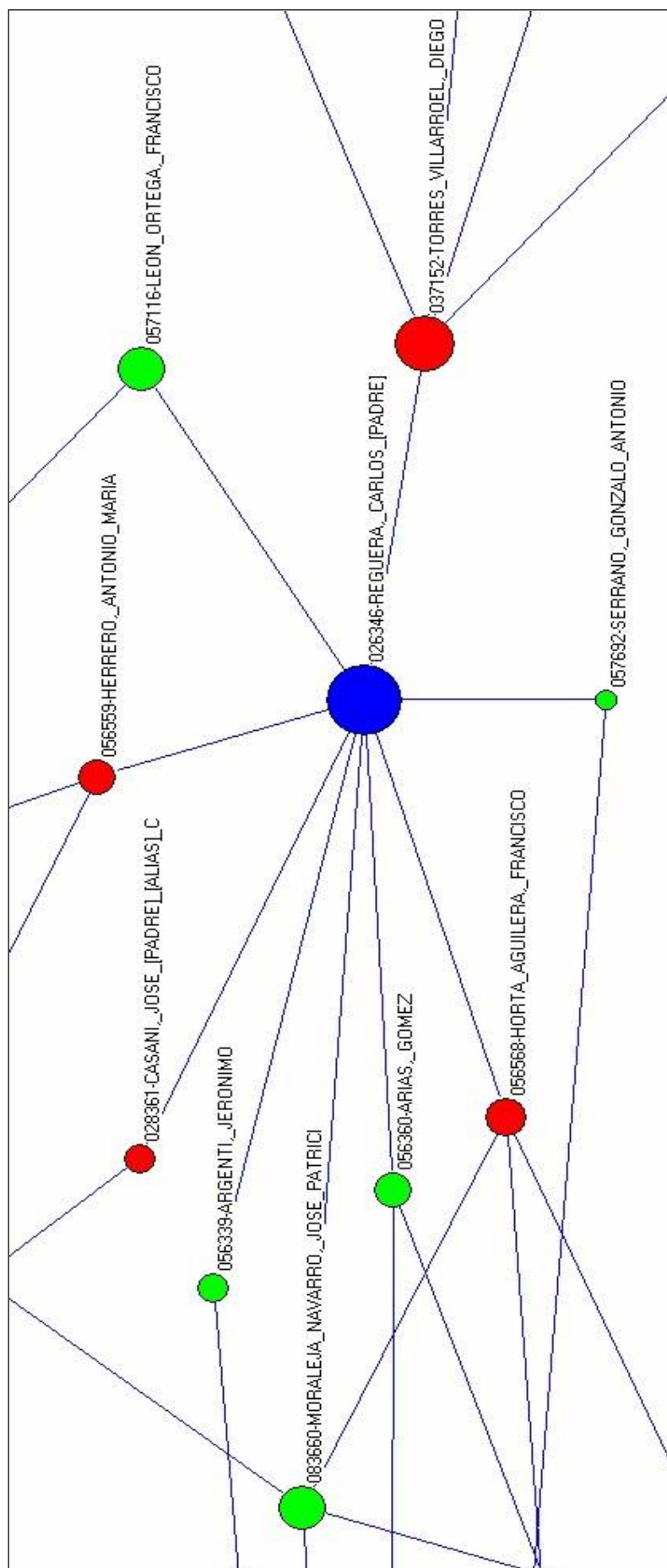


Gráfico 4. Red de Carlos de la Reguera

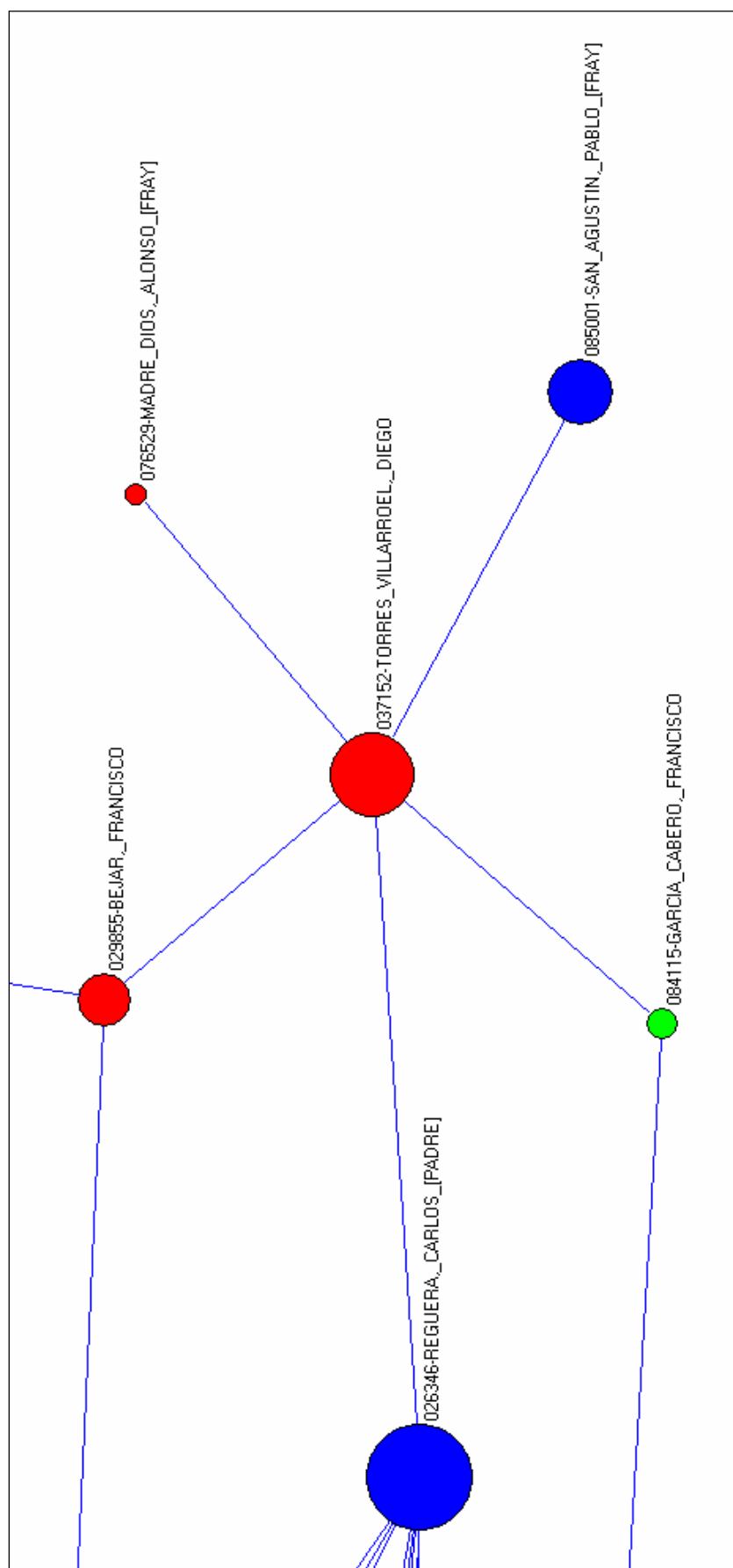


Gráfico 5. Red de Diego de Torres Villarroel (para el periodo 1720-1749)

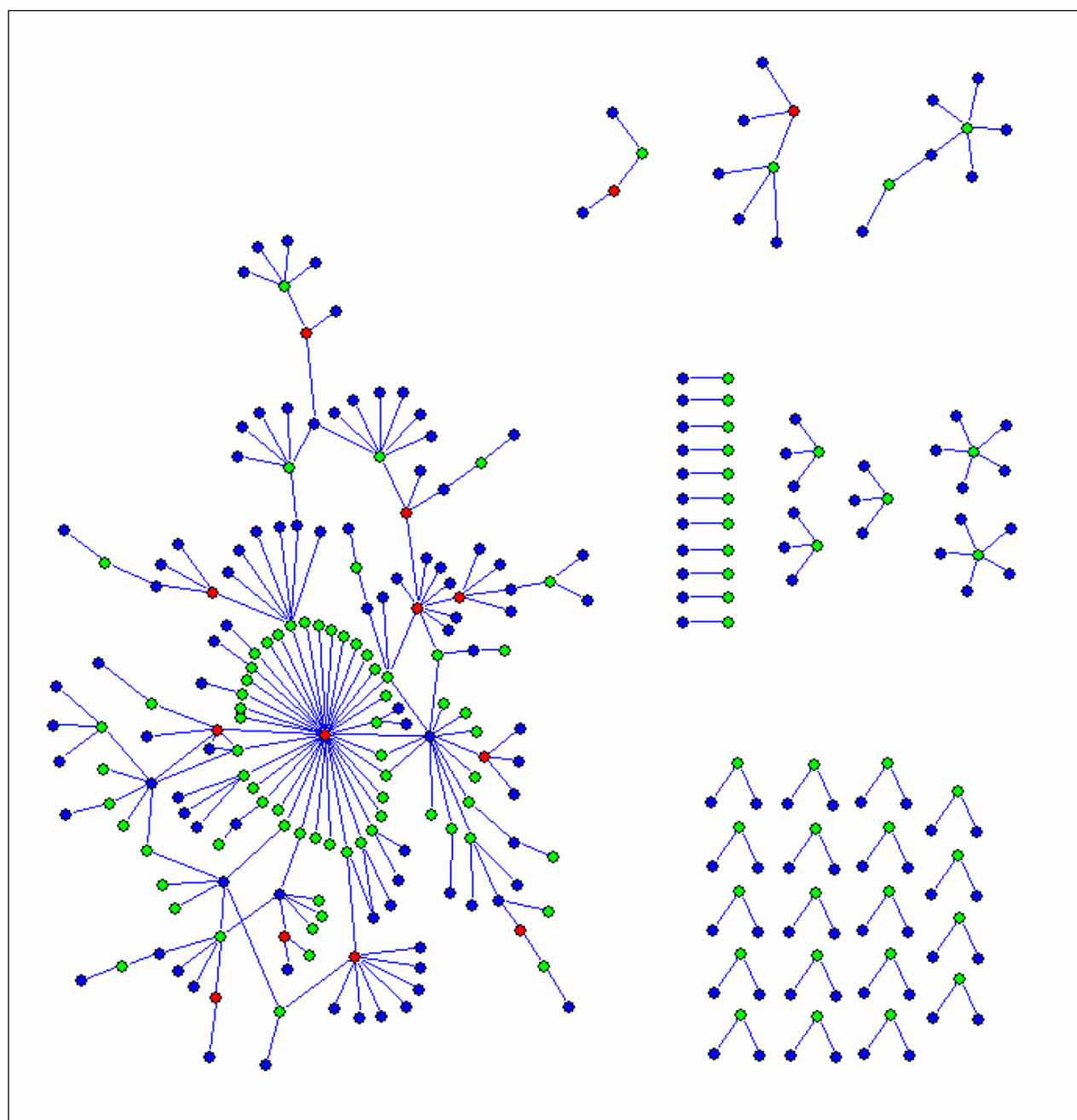


Gráfico 8. Relaciones de censuras entre 1756 y 1763, divididas por islas

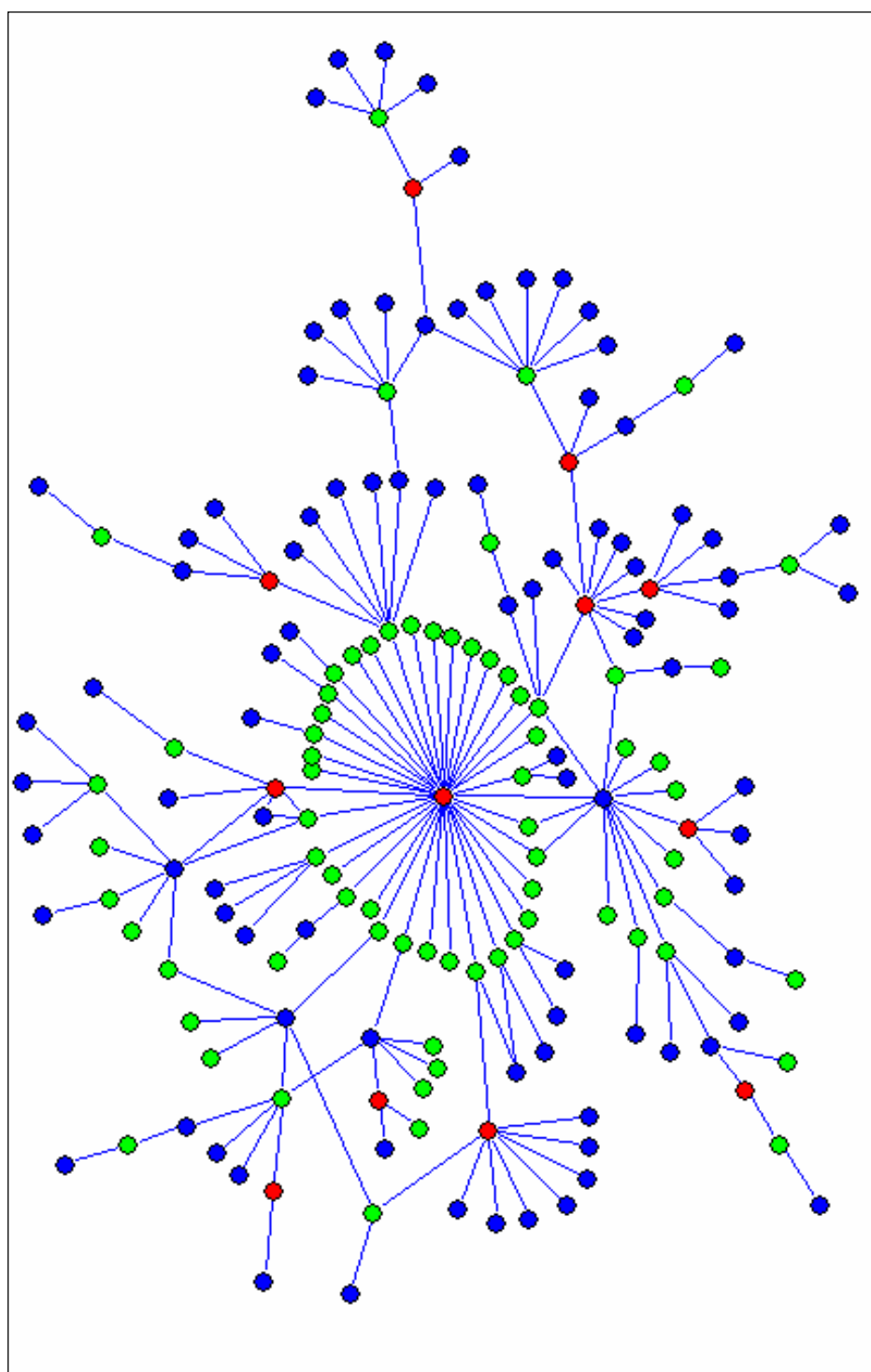


Gráfico 9. Grupo principal del periodo de Curiel (1756 y 1763)

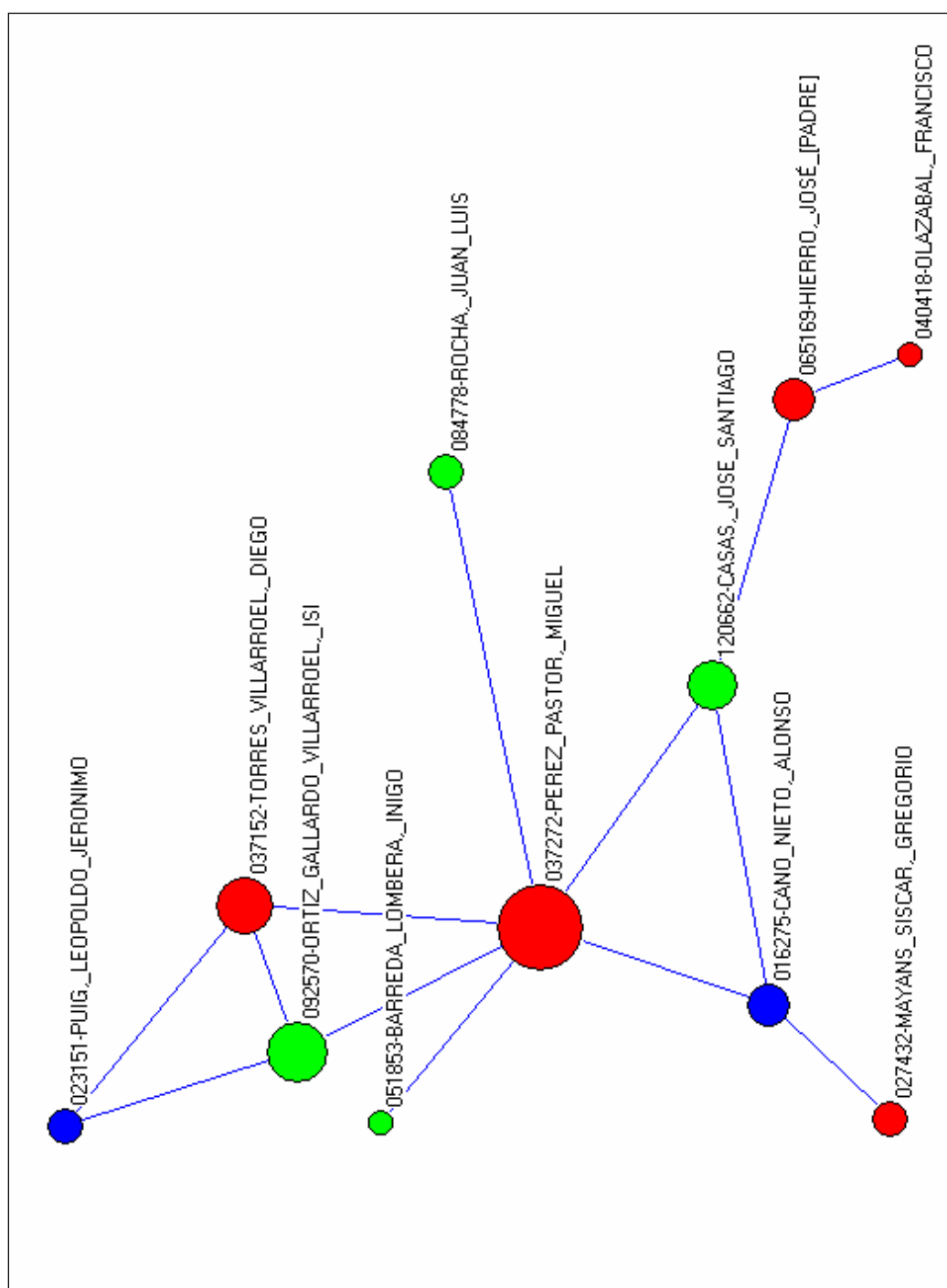


Gráfico 10. Suma de relaciones del grupo principal del periodo de Curiel (1756 y 1763)

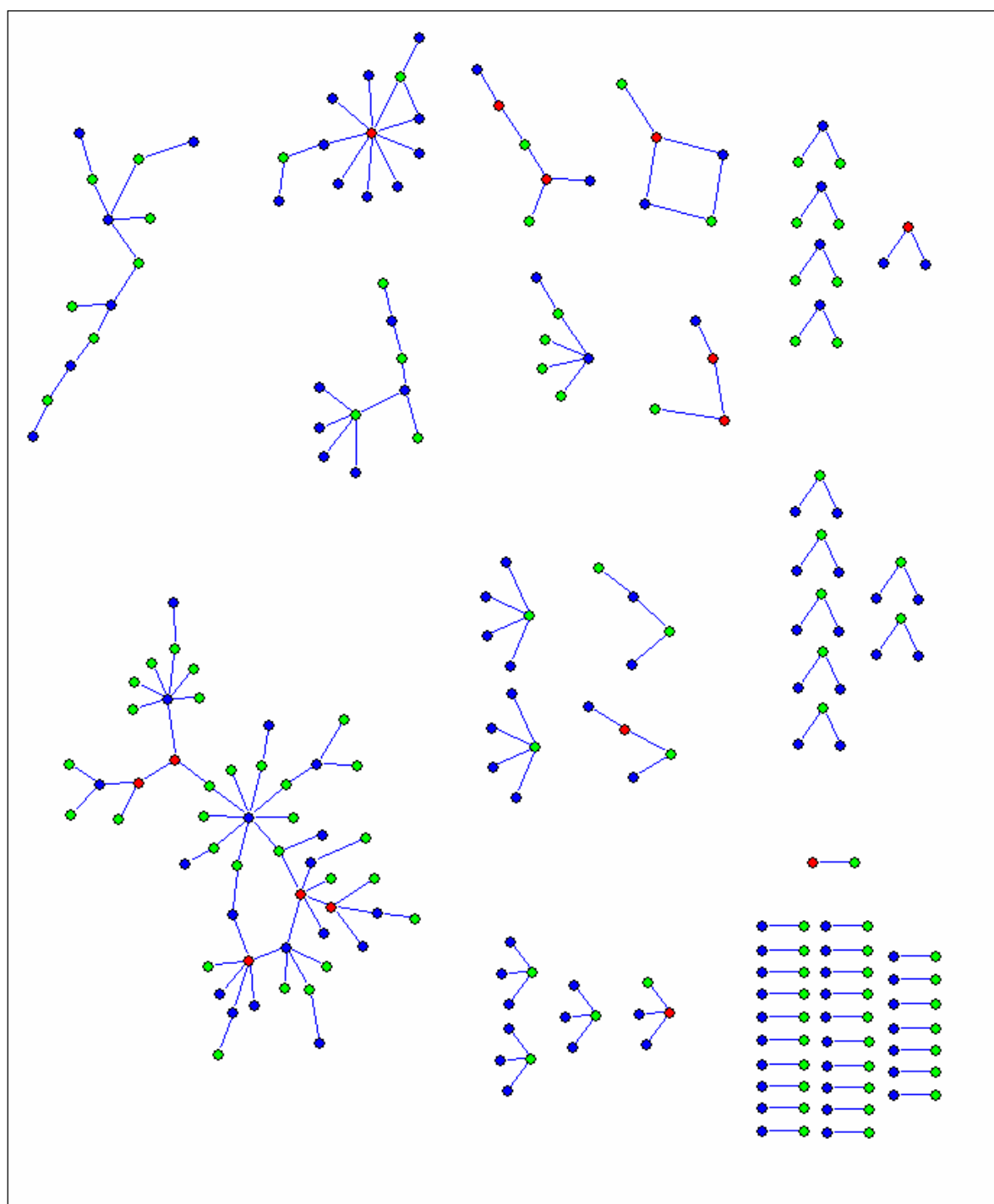


Gráfico 11. Relaciones de censuras entre 1770 y 1799, divididas en islas